

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA



TESIS DOCTORAL

**La lucha por la representación: movimiento de mujeres y cuotas
electorales.**

El caso de México 2012

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Gabriela Desireé Molina Aguilar

Directoras

María Esther del Campo García
María Ileana García Gossio

Madrid, 2018



FUNDACIÓN
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
JOSÉ ORTEGA Y GASSET

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET
DOCTORADO EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tesis Doctoral

**LA LUCHA POR LA REPRESENTACION:
MOVIMIENTO DE MUJERES
Y CUOTAS ELECTORALES
EL CASO DE MÉXICO 2012**

Doctorando

Gabriela Desireé Molina Aguilar

Directoras

Dra. María Esther del Campo García.
Universidad Complutense de Madrid.

Dra. María Ileana García Gossio
Universidad Autónoma Metropolitana

Madrid, 2016

*A las mujeres de mi familia, especialmente a mi mamá,
Pati A. Son ellas, mi alegría, mi ejemplo y mi motivación,
Adi, Aris, Ale, Elizabeth, Martha, Mimi, Oly, Silvia, Kate,
Tere A. y Tere V.*

*A mi hermano Gerardo y mis sobrinos Marco y Mateo
quienes construyen una nueva masculinidad, así como a
mi papá (+), hombre amoroso y de gran generosidad.*

A Roberto G, quien alegra y acompaña mi vida.

*A mis amigas July M, Diana M, Julieta L, Eve A, Arantza,
Carmen E, Guadalupe S, Claudia M, Miriam L, Gaby P, y
Bárbara T luchadoras incansables.*

*A las mujeres que enfrentan la lucha por la representación
política, sobre todo en su vida privada, en el espacio más
íntimo.*



Fotografía 1
Marcha del Frente Único Pro derechos de la mujer
encabezada por Refugio García

*“Algún día, las mujeres nos
sentaremos en la Cámara”.*

Refugio García
Primera candidata a diputada federal.
Uruapan, Michoacán, México 1937

Agradecimientos

Emprendí este proceso de investigación en 2012, luego de concluir un periodo de cuatro años en el que tuve la oportunidad de representar como diputada local, a los pobladores de Uruapan, mi ciudad natal, y de Paracho; municipios que conforman el corazón de la Meseta Purhépecha en México.

En aquel entonces, después de 12 años ininterrumpidos en la militancia partidista, la administración pública y la representación legislativa, tenía el deseo de regalarme una pausa de la vida institucional. Era un momento de disyuntiva entre continuar mi carrera política o reinventarme a través de un ejercicio académico y trazar nuevos horizontes, tomar distancia y abrir el camino hacia la comprensión de la política y de lo político.

Entre mis anhelos, aparecía constantemente el de estudiar en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Significaba una gran oportunidad la de formarme en una institución de carácter internacional con una sólida plantilla de profesores y un interesante programa académico.

Para 2011, Michoacán se encontraba sumergido en una serie de conflictos, al grado de que algunos ciudadanos decidieron organizarse y tomar las armas. Surgió así el movimiento de *autodefensas* para enfrentar al crimen organizado al margen del Estado.

La complejidad del contexto tenía cierto origen en 2008, cuando en Morelia se vivió un atentado terrorista. Alcaldes y funcionarios públicos michoacanos fueron acusados de tener nexos con el crimen organizado, algunos incluso procesados. El escenario acusaba altas dosis de violencia y fragilidad institucional.

Entre 2010 y 2011, la guerra contra el crimen organizado generó en el ejercicio de gobierno y del quehacer legislativo, un periodo de incertidumbre. Antes de mi partida a España en 2011, los medios ponían énfasis en el secuestro de candidatos y la infiltración de un grupo criminal en las elecciones. Sobrevenía un lamentable periodo de inestabilidad institucional¹.

¹ En menos de cuatro años hubo tres gobernadores. El primero, se enfermó y su hijo fue vinculado a la red de protección de crimen organizado, el segundo fue detenido y llevado a un reclusorio de alta seguridad bajo la misma acusación. Para el 2014, tuvo que ser nombrado un Comisionado Federal a fin de pacificar la región.

Fue así que, en 2012, cuando se ampliaban las historias sobre los efectos de grupos criminales en la entidad, emprendí mi proyecto académico con un objetivo claro: analizar la realidad compleja con elementos teóricos y metodológicos.

Las enseñanzas de profesores como Fernando Vallespín o Fernando Escalante, significaron en certeras luces para comprender lo que en ese momento, se vivía en mi país: la democracia acusaba una notoria fatiga civil, mientras que estados como Michoacán, debían sobrevivir a las fragilidades y fortalezas del Estado. En mi horizonte académico se cruzó la idea de estudiar el conflicto desatado por el crimen organizado, las autodefensas y las indudables víctimas, pero no estuve segura de tener acceso a las fuentes suficientes y la necesaria distancia emocional.

Mi segunda opción de investigación, más que carácter académico significaba para mí reflexionar sobre una experiencia de vida: las mujeres y su lucha por la representación en un país notoriamente machista y con altos niveles de discriminación. En la medida de mis avances, comprendí el desafío que representaba conceptualizar, revisar la bibliografía y conocer el estado de la cuestión. Fue un largo proceso, un camino de rigor académico y transformación personal.

Por principio y en el más extenso sentido de la palabra, me interesaba era comprender el cómo y porqué, las mujeres permanecen en estado de exclusión de los procesos de representación de la democracia formal, y en ese sentido, cómo es que algunas mujeres logran romper el sólido y macizo *techo de cristal*.

Mientras cursaba mis estudios en España, entre 2012 y 2013, se gestaban en este país las asambleas de barrio producto del M15, movilizaciones por defender el Estado de Bienestar, así como el preámbulo del proceso de organización que más tarde decantaría en el partido PODEMOS. Tuve la oportunidad de visitar algunos sitios y observar a sus mujeres cuya realidad contrastaba con la de mi región. Visité la Librería de las Mujeres de Madrid, revisé diversas publicaciones sobre teoría de género e incluso, me introduje a un universo temático totalmente nuevo para mí: el feminismo en el Islam.

La Doctora Paloma Román revisó mi trabajo para obtener el Diploma de Estudios Avanzados, y fue ella quien observó en mi experiencia laboral y de militancia partidista, una ventana de oportunidad para abordar el tema de la representación política de las mujeres.

Posteriormente y gracias a la cálida anfitriona Arantza Sánchez, tuve la posibilidad de realizar una estadía en Washington D.C para trabajar durante tres meses en *The Library of Congress*. La Sala de Estudios Hispánicos fue mi casa y allí me facilitaron obras relevantes. Así, leí los trabajos de Mona Lena Krook, Drude Dahlerup, Pippa Norris, Pamela Paxton y Melanie M.Hughes. Al conocer y revisar sus investigaciones pensaba en cómo podría yo aportar algo más ante semejantes ejercicios intelectuales. Supuse que sólo me quedaría la posibilidad de montarme en los hombros de las gigantes de la Ciencia Política y de los estudios sobre Mujeres, Poder, Política y Representación, para interpretar a través de ellas nuestra realidad local.

Fue en la capital estadounidense donde decidí enviarle una carta a la Doctora Magda Hinojosa, egresada de la Universidad de Harvard, quien ha investigado respecto al reclutamiento y elección de candidatas en América Latina. Amablemente, me aceptó para una estancia por dos meses y medio en la *Arizona State University*, ubicada en Tempe, Arizona. Aquel fue un periodo solitario, de lecturas, de diálogos sobre el quehacer político de las mujeres en México; días de rodadas en bicicleta por los márgenes del Río Salado y de acceso a un sinnúmero de documentales sobre las mujeres en Medio Oriente y el norte de África.

Al año siguiente, asistí al Foro Internacional convocado por la Universidad de Salamanca: “Mujeres, política y democracia. Rompiendo los Techos de Cristal en América Latina”. En ese foro se puso de manifiesto la riqueza y la diversidad de horizontes a partir de los cuales es posible estudiar tanto el tema como los resultados de múltiples investigaciones. En el encuentro dialogué con la Dra. Ileana García, a quien había conocido con anterioridad en Michoacán. Sabía que ella trabajaba el tema de mujeres y política, así que le propuse codirigir mi tesis. En ese mismo año, la Dra. Esther del Campo aceptó guiar mi investigación como tutora, ya que había trabajado en torno a la región de Latinoamérica, las mujeres y las cuotas electorales. Hoy agradezco a ambas el interés por brindarme su asesoría y orientar mi tesis doctoral.

2015 me sorprendió con un reposo obligado en Morelia, una campaña electoral, el acompañamiento a candidatas al interior del estado y la conformación de la Asociación Civil: Mujeres Organizadas de la Izquierda (MODI). Estos años me permitieron realizar un trabajo a distancia para el municipio de Paracho, gracias a la confianza de Nicolás Zalapa, con quien he recorrido los caminos de Michoacán por largo tiempo.

Para concluir, deseo reflexionar respecto a mi relación con la política, una relación de encuentros y desencuentros, de aprendizajes y alegrías, de frustración, desilusión y de necesarios nuevos comienzos. No obstante, una experiencia de vitalidad y potencia en el actuar, intensa y profunda como nuestras relaciones personales más cercanas, de amor y de amistad. Sabiamente lo advirtió Simone de Beauvoir, participar de la esfera pública, este espacio de *trascendencia*, tiene un costo social y personal para las mujeres de mi generación en un país como México.

Las mujeres que hemos logrado asomarnos al mundo del poder y de la toma de decisiones, seguimos valorando aquello que en apariencia es *inmanente*, aquello que no deja huella en la historia, pero que sigue demandando un reconocimiento, ese invisible esfuerzo cotidiano que realizan cientos de mujeres en la esfera privada, para que los *otros* hagan Estado y gobierno.

Es evidente que, lograr conciliar ambos mundos -la esfera privada y la esfera pública, *el de la trascendencia* y el de la *inmanencia*- es un desafío en muchas de nuestras democracias contemporáneas. Hoy, más mujeres se colocan en las sillas del poder, pero tras cada espacio ganado, existe un complejo desgarramiento personal que con el tiempo ha de transformarse en un proceso de encuentro y de reconciliación, porque los techos de cristal que impedían participar del poder a las mujeres, por fin se ha pulverizado en pequeños cristales que darán paso a relaciones de paridad y de respeto entre hombres y mujeres.

Entre idas y venidas de sitios y ciudades, mi familia, mi hermano y mis primas/os siempre han estado ahí, recopilando libros, escuchando mis disertaciones, dándome espacio y tiempo para trabajar y, sobre todo, brindando amor y compañía.

A todos ellos dedico este ejercicio intelectual.

Índice General

SUMMARY	19
RESUMEN	23
INTRODUCCIÓN	
I. Objetivo de la investigación	27
II. Justificación	32
III. Metodología	42
IV. Estructura de la tesis	46
 <u>CAPÍTULO I</u>	
<u>ESTADO DE LA CUESTIÓN</u>	
REPRESENTACION PARLAMENTARIA DE LAS MUJERES	53
 1.1 Factores para el análisis de la representación	55
1.1.1 Factores estructurales	58
1.1.2 Factores culturales	62
1.1.3 Factores institucionales	70
1.2 Actores/as políticos para el análisis de la representación	77
1.2.1 Partidos políticos	77
1.2.2 Movimiento de mujeres	84
1.3 Interacción de factores y actores	90
1.3.1 Europa, diseño institucional favorable	90
1.3.2 Medio Oriente y Norte de África, la barrera cultural	98
1.3.3 América Latina, rompiendo el techo de cristal	106
1.4 Representación Parlamentaria en México	118
1.4.1 Mujeres en México, aspectos generales	118
1.4.2 Evolución de la representación	126

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

CONCEPTOS Y TEORIAS PARA EL ANÁLISIS

REPRESENTACION DE LAS MUJERES	135
2.1 Género y perspectiva de género	136
2.2 El concepto de representación	142
2.3 La democracia y sus críticas	155
2.4 Teorías a favor de la representación de mujeres	162
2.4.1 Desde la política de la presencia	163
2.4.2 Desde la inclusión de nuevos intereses	165
2.4.3 Desde la teoría de la masa crítica.	168
2.5 Movimiento de mujeres	173
2.6 Acciones afirmativas	179

CAPITULO III

MOVIMIENTO DE MUJERES POR

LA REPRESENTACION	187
3.1 Movimientos Sociales, Modernidad e Ilustración	187
3.1.1 Del Contrato Social al Contrato Sexual	194
3.1.2 Crítica a los discursos modernos e ilustrados	198
3.2 Rebeldes ilustradas: primer movimiento	200
3.3 El Sufragismo, movimiento articulado	206
3.3.1 Séneca Falls y el sufragismo norteamericano	208
3.3.2 Sufragismo inglés	210
3.4 El Feminismo, teoría y movimiento	219
3.4.1 El Feminismo de la segunda ola	224
3.5 Rebeldes mexicanas, el movimiento de mujeres	232
3.5.1 El Feminismo y la autonomía del cuerpo	238
3.5.1 La ruptura de 1988 y el Feminismo Civil	241

CAPÍTULO IV

EVOLUCION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CUOTAS ELECTORALES Y REPRESENTACIÓN

255

4.1 Derecho Internacional de los Derechos Humanos	255
4.2 Acciones Afirmativas en el Derecho Internacional de los DH	262
4.3 Las cuotas, un atajo del movimiento	266
4.3.1 Aspectos para su eficacia: a) Tipo de cuotas b) sistema electoral c) Medidas de apremio	
4.4 Las cuotas en América Latina	279
4.5 Las cuotas electorales en México, 1993-2009	283

CAPÍTULO V

EFFECTOS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES Y DE LAS CUOTAS EN MEXICO, CASO 2012

297

5.1 Marco institucional y normativo hacia el 2012	297
5.1.1 Marco normativo: cuotas y Acuerdo del IFE	304
5.1.2 Juicio para la protección de los derechos político-electorales (JDC)	309
5.1.3 Reforma constitucional en derechos humanos	310
5.2 El Movimiento: Red de Mujeres en Plural	313
5.2.1 El caso de “las Juanitas”	314
5.3 La estrategia del movimiento, el litigio judicial	321
5.3.1 El resultado inicial: la Sentencia 12624	328
5.3.2 El resultado intermedio: resistencias partidistas	330
5.4 Efectos del movimiento y una Sentencia con perspectiva de género	336
5.4.1 Factores que posibilitaron la Sentencia	342
5.4.2 Perspectivas y opiniones de la Sentencia	349
5.4.3 La iniciativa SUMA	355

CONCLUSIONES	367
BIBLIOGRAFÍA	373
ANEXO	405

I.Partidos políticos en México.

Índice de tablas y gráficas

1. Promedio de parlamentarias en el mundo por sexo y en México	29
2. Variables dependientes que explican el incremento de la representación política de las mujeres	30
3. Promedio mundial de mujeres diputadas y senadoras	54
4. Factores y actores/as para el análisis de la representación parlamentaria.	57
5. Familias del sistema electoral	74
6. Población en México 2010-2012	119
7. México en el Índice de Desigualdad de Género	121
8. Evolución de la distribución de Diputadas y Diputados Federales por Legislatura, 1952 - 2012	130
9. Oleadas del feminismo	207
10. Cronología de la obtención del derecho al sufragio	217
11. Síntesis del movimiento de mujeres en México	251
12. Factores que inciden en la eficacia de las cuotas electorales	269
13. Tipos de cuotas electorales	272
14. Impacto de las leyes de cuotas en la representación parlamentaria en América Latina	282
15. Las cuotas en el Código Electoral (Cofipe)	290
16. Evolución de la representación política por sexo del Congreso de la Unión	291
17. Factores institucionales y actores para el análisis de la representación en México, 2012	300
18. Logotipos bajo los cuales se registraron las coaliciones	304
19. Comparativo del artículo 1º Constitucional.	311
20. Distribución porcentual de candidatos a diputadas y diputados por tipo de postulación según sexo	337
21. Comparativo de elecciones a diputados federales por mayoría relativa	338
22. Distribución porcentual de candidatos a Senadores y Senadoras por tipo de postulación según sexo, 2012	339
23. Conformación de la Cámara de Diputadas/os por sexo y principio de elección	340
24. Conformación de la Cámara de Senadoras/es por sexo (2012)	341
25. Ruta crítica conforme a los actores/as y las acciones hacia el proceso electoral 2012	354

Índice de fotografías e imágenes

Fotografía 1	
Mujeres del Frente Único pro derechos de la mujer encabezada por Cuca García	5
Fotografía 2	
Fotografía oficial del encuentro “Mujeres y Poder que reunió a 61 mujeres líderes a 20 años de la Conferencia de Beijing	51
Fotografía 3	
Pintura Inauguración de los Estados Generales de Auguste Couder, 1839	133
Fotografía 4	
Movimiento Sufragista Inglés del S.XIX	185
Fotografía 5	
Legisladora Hilario Supa de Ecuador, 2015	253
Fotografía 6	
Mujeres en el Cámara de Diputados en México, 2015	295
Imagen 7	
Logotipo de la Red de Mujeres en Plural	318
Fotografía 8	
Integrantes de la Red de Mujeres en Plural recibiendo el premio Women’s Link.	318
Fotografía 9	
Evento Más mujeres decidiendo por México.	321
Fotografía 10	
Acto de instalación de la Iniciativa SUMA	356
Fotografía 11	
Organización SUMA en el estado de Hidalgo	358
Fotografía 12	
Organización SUMA en el estado de Puebla	358
Imagen 13	
Cuadernillo de Modelo para la participación política y el empoderamiento económico de las mujeres	359
Imagen 14	
Portal de la página web de la iniciativa SUMA	359
Imagen 15	
Mapa de estados donde se ejecutó el Proyecto SUMA	363

Lista de abreviaturas

DH	Derechos Humanos.
DIDH	Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
INE	Instituto Nacional Electoral
IFE	Instituto Federal Electoral
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UIP	Unión Interparlamentaria
PAN	Partido Acción Nacional
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PRD	Partido de la Revolución Democrática

SUMMARY

TITLE: THE FIGHT FOR REPRESENTATION. WOMEN'S MOVEMENT AND ELECTORAL QUOTAS. THE CASE OF MEXICO IN 2012.

KEY WORDS

Political Representation. Women's Movement. Affirmative Action. Electoral Quotas. International Law of Human Rights. Women's Movement.

In 2016 women were present in only 22.70% of the world's parliamentary seats, while in a third of countries, the female representation in the National Legislative Branch does not even reach 10%. However, in order to reach a critical mass that influences the legislative agenda or to be a strong minority in the assemblies, at least 30% of people are needed.

The region of Latin America is the second area with the highest parliamentary representation of women, thanks to a favorable wave of representation of women in power spaces with the arrival of four women to Presidencies and the integration of the legal principle of parity in the constitutions of Costa Rica, Bolivia, Ecuador and Mexico.

In particular, in Mexico, a critical mass has been achieved in the Congress of the Union - made up of the House of Senators and the Chamber of Deputies - upon incrementing to 37% of female legislators since 2012.

This may mean, that despite the difficult reality faced by Mexican women, it is possible to break the thick glass ceiling, the invisible barrier of symbolic, imaginary and real nature in women's careers.

Thus, the objective of this research is to explain how it was possible to increase the representation of the women in the Congress of the Union - Parliament - in Mexico.

The working hypothesis is that the increase in the representation of women in the Legislative Branch is due to the convergence and interaction of three factors: First, the presence of a women's movement in Mexico called *Mujeres en Plural*. Second, the incorporation of electoral quotas in the Mexican constitutional framework, as a result of the advancement of

the International Human Rights Law (DIDH) of women. Third, the judicial interpretation with a gender perspective made by the Federal Electoral Tribunal in 2012, since the electoral body issued a jurisdictional resolution based on International Law that forced political parties to comply with the quota law.

El periodo de análisis que se elige es un año 2012 ya que se logró alcanzar la masa crítica en el Parlamento en México a partir de que el Tribunal Electoral emitiera una sentencia con perspectiva de género fundamentada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

The period of analysis is one year, 2012, since the critical mass in the Parliament in Mexico was achieved irreversibly. The aforementioned resolution led to the increase of candidates by the principle of relative majority. In addition to the creation of a constitutional amendment to modify the wording of the rule on electoral quotas at federal and local levels, thus closing the possibility of any setbacks in the Legislative Branch

The ruling ended a decade long debate over the consideration of disputed legal principles, which dealt with the priority of achieving gender equality in the political arena in the face of the internal democratic processes of political parties, also known as primary elections.

The analysis of the convergence of the women's movement, electoral quotas and its favorable interpretation also aims to show how it is possible to overcome the obstacles women still face in order to reach power in the face of deep cultural, structural, partisan and institutional resistance.

This dissertation seeks to explain a fact that was manifested in Mexican national political life; the creation of a critical mass of women in the Congress of the Union, illustrating previous theories about the impact of quota design, the electoral system and the importance of a judicial system with a gender perspective.

This thesis draws on several bibliographical works in order to provide an analytical, interpretative and explanatory perspective.

It consists of five chapters that go in historical order: beginning with the emergence of the women's movement and the strategies designed at national and international levels that aimed at achieving the desired representation.

In Chapter I, The State of the Matter. Parliamentary representation of women, seeks to answer the following questions: What aspects do the nations that occupy the first places of parliamentary representation share? In what congresses are more women sitting? What are the factors that impact representation?

It is possible to group the factors into three areas: cultural, institutional and structural. Each group takes into consideration cultural aspects, among them, values and attitudes towards women, religion, the division of the public and private spheres, as well as patriarchy. Within the structural or socio-economic factors, we will find the level of development, the participation of women in the labor force and education. As well as institutional factors, like the electoral system, electoral quotas, and the method of selection of political parties.

The second chapter focuses on the Theoretical Framework: Concepts and Theories for the analysis of representation, in which concepts are developed to understand the political representation of women: gender, gender perspective, representation and democracy. Also the theoretical development of the women's movement and affirmative actions.

The third chapter, Women's Movement for Representation, sets out the theoretical debates and political actions that the movement carried out in order to advance in the exercise of its political rights, discourses and actions that excluded women from power and the way in which said exclusion was amended.

After the description of the women's movement in the third chapter, the fourth chapter sets the stage to discuss the rise to the evolution of the International Human Rights Law, electoral quotas and their impact on representation. Firstly, the conceptual development of International Human Rights Law that gives life to the affirmative actions is brought to light. Afterwards, a look into the electoral quotas and the factors that provoke their effectiveness, as well as the legal development of the integration of the electoral quotas in Mexico from the reforms undertaken from 1993 to 2012.

Finally, Chapter V, called The Effects of the Women's Movement and Quotas in Mexico in 2012 aims to show the institutional framework that was then in force, and the emergence of the movement called Women's Network in the Plural, which undertook the struggle to get quotas applied under a broad and favorable criterion to Congressional candidates.

Apart from describing the events, the struggle of women in Mexico to achieve a critical mass in Parliament is explained, as well as what it means to participate in the world of political power. This investigation also seeks to identify experiences that can be expanded to other levels of political representation and in that way, achieve the desired parity in a democracy.

RESUMEN

LA LUCHA POR LA REPRESENTACION: MOVIMIENTO DE MUJERES Y CUOTAS ELECTORALES. EL CASO DE MÉXICO 2012

PALABRAS CLAVE

Representación Política. Movimiento de Mujeres. Acciones Afirmativas. Cuotas Electorales. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Movimiento de Mujeres.

Al año 2016 las mujeres están presentes en apenas el 22.70% de los escaños de los parlamentos en el mundo, mientras que en una tercera parte de los países, la representación femenina en el Poder Legislativo nacional no alcanza el 10%. Sin embargo, para conformar una masa crítica que logre incidir en la agenda legislativa o ser una minoría con fuerza se requiere al menos un 30% de personas.

La región de América Latina se constituye como segunda zona con mayor representación parlamentaria de mujeres al tiempo de haber experimentado una ola favorable de representación de mujeres en espacios de poder con la llegada de cuatro mujeres a la Presidencia de la República y de haber integrado el principio jurídico de la paridad en las constituciones de Costa Rica, Bolivia, Ecuador y México.

De manera particular, en el año 2012 en México el Poder Ejecutivo solo tenía el 12% de mujeres en su Gabinete y de los dos mil 456 municipios, únicamente 173 eran encabezados por una mujer, lo que representa el 7%, aspecto que no ha variado mucho en la última década. En el ámbito de las 31 entidades federativas que componen la República Mexicana, solo una Entidad Federativa (Equivalente a las Comunidades Autónomas en España) era gobernada por una mujer.

En México se ha logrado conformar una masa crítica en el Congreso de la Unión – integrado por la Cámara de Senadoras y la Cámara de Diputados- al sumar el 37% de legisladoras desde el año 2012.

Lo anterior puede significar que a pesar de la difícil realidad que enfrentan las mexicanas es posible romper el macizo *techo de cristal* en uno de los ámbitos de la representación política: el Poder Legislativo.

Así, el objetivo de la presente investigación es explicar cómo se logró incrementar la representación de las mujeres en el Congreso de la Unión -Parlamento- en México.

La hipótesis de trabajo es que el aumento de la representación de las mujeres en el Poder Legislativo se debe a la convergencia e interacción de tres factores: Primero, la presencia de un movimiento de mujeres en México denominado Mujeres en Plural. Segundo, la incorporación de las cuotas electorales en el marco constitucional mexicano, producto del avance del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) de las mujeres.

Tercero, la interpretación judicial con perspectiva de género realizada por el Tribunal Federal Electoral en el 2012 ya que el órgano electoral emitió una resolución jurisdiccional basada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) de las mujeres que obligó a los partidos políticos a cumplir la ley de cuotas.

El periodo de análisis que se elige es un año 2012 ya que se logró alcanzar la masa crítica en el Parlamento en México a partir de que el Tribunal Electoral emitiera una sentencia con perspectiva de género fundamentada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Dicha resolución propició el incremento de candidatas por el principio de mayoría relativa y una reforma constitucional para modificar la redacción de la norma en materia de cuotas electorales en el ámbito federal y local, cerrando así la posibilidad de tener retrocesos en el Poder Legislativo.

Con la sentencia, se puso fin a un debate sobre la ponderación de principios jurídicos en disputa que había durado una década en torno a la prioridad que tenía lograr la igualdad de género en el ámbito político frente a los procesos democráticos internos de los partidos políticos, conocidos también como elecciones primarias.

Así, el análisis de las convergencia del movimiento de mujeres, las cuotas electorales y su interpretación favorable, además de explicar el incremento de congresistas, pretende

demostrar cómo es posible sortear los obstáculos que aún tienen las mujeres para alcanzar el poder frente a profundas resistencias culturales, estructurales, partidistas e institucionales.

La investigación busca explicar entonces un hecho que se manifestó en la vida política nacional, como fue la constitución de una masa crítica de mujeres en el Congreso de la Unión, ilustrando teorías previas sobre el impacto que tiene el diseño de las cuotas, el sistema electoral y la importancia del juzgamiento con perspectiva de género.

Cabe señalar que la tesis se nutre de las diversas obras bibliográficas bajo una perspectiva analítica, interpretativa y explicativa.

La tesis se compone de cinco capítulos con base al orden en que los hechos fueron apareciendo en la historia, como fue la emergencia del movimiento de mujeres y las estrategias que fueron diseñando en el ámbito internacional y nacional encaminadas a lograr la anhelada representación.

El primero Capítulo denominado Estado de la cuestión. Representación parlamentaria de las mujeres busca responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué aspectos comparten las naciones que ocupan los primeros sitios de representación parlamentaria? ¿En qué congresos más mujeres están sentadas en una curul? ¿Cuáles son los factores que impactan la representación?

Es posible agrupar los factores en tres dimensiones, culturales, institucionales y estructurales. Dentro de cada grupo se consideran aspectos culturales, entre ellos, los valores y la actitud hacia las mujeres, la religión, la división de la esfera pública y la esfera privada, así como el patriarcado. Dentro de los factores estructurales o socioeconómicos se encuentra el nivel de desarrollo, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y la educación. Y factores institucionales: el sistema electoral, las cuotas electorales, y el método de selección de los partidos políticos.

El segundo capítulo se concentra en el Marco Teórico: Conceptos y Teorías para el análisis de la representación en el que se desarrollan los diversos conceptos que se requieren para la comprensión de la representación política de las mujeres: género, perspectiva de género,

representación y democracia. También el desarrollo teórico del movimiento de mujeres y de las acciones afirmativas.

El tercer capítulo, Movimiento de Mujeres por la representación, expone los debates teóricos y las acciones políticas que realizó el movimiento para avanzar en el ejercicio de sus derechos políticos, así como los discursos y las acciones que excluyeron a las mujeres del poder y la forma en que dicha exclusión fue modificándose.

Una vez descrito el movimiento de mujeres, en el cuarto capítulo se da paso al desarrollo de la evolución del DIDH, las cuotas electorales y su impacto en la representación. En primer lugar se expone el desarrollo conceptual del Derecho Internacional de los DH que dio vida a las acciones afirmativas. Después, las cuotas electorales y los factores que provocan su eficacia, así como el desarrollo jurídico de la integración de las cuotas electorales en México a partir de las reformas emprendidas desde 1993 al año 2012.

Por último, el Capítulo V, Efectos del movimiento de mujeres y las cuotas en México, 2010² tiene por objetivo mostrar el marco institucional vigente entonces y la aparición del movimiento denominado Red de Mujeres en plural, el cual emprendió una lucha por lograr que las cuotas se aplicaran bajo un criterio amplio y favorable a las aspirantes a las candidaturas al Congreso.

A partir de la detallada descripción de hechos acontecidos en México, se busca explicar y establecer relaciones causales del incremento de la representación parlamentaria, así como extraer aprendizajes de la lucha de las mujeres en México por alcanzar una masa crítica en el Parlamento, lo que significa participar del mundo del poder político.

Actualmente, la representación política de las mujeres no es más una excepción, empero, aún está muy lejos de ser la regla, especialmente para mujeres de raza indígena, de raza negra o inmigrantes.

INTRODUCCIÓN.

I.- Objetivo de la investigación

Con la llegada de cuatro mujeres a la Presidencia de la República, América Latina ha experimentado una ola favorable. En la última década, Chile, Argentina, Costa Rica y Brasil², han tenido como titulares del Poder Ejecutivo a mujeres electas democráticamente, al tiempo que la región se configura como una de las zonas con mayor porcentaje de parlamentarias donde se ha logrado integrar el principio jurídico de la paridad en las constituciones de Costa Rica, Bolivia, Ecuador y México.

Para conformar una masa crítica que incida en la agenda legislativa o conformar una minoría con fuerza, se requiere de acuerdo con las teorías, un mínimo de 30% de personas (Dahlerup 2005). Las mujeres en el mundo, únicamente están presentes en un 22% de las curules en los parlamentos; en algunas regiones apenas alcanzan un 10% y solo 37 países han conseguido este piso mínimo (UIP 2015)³.

En contraste, en México se ha logrado conformar una masa crítica en el Congreso de la Unión –integrado por la Cámara de Senadoras y la Cámara de Diputados- al sumar el 37% de legisladoras desde el año 2012.

² Cristina Fernández, fue electa presidenta de Argentina desde 2007 al 2015; Laura Chinchilla, gobierna Costa Rica por el periodo 2010 al 2014; Dilma Rousseff, encabeza el gobierno en Brasil desde el año 2011; y, Michelle Bachelet, recién juró su segundo mandato para presidenta en Chile por el periodo 2014 al 2018.

³ Julie Ballington (2008) describe el Parlamento como el espacio donde se determina la dirección política de un país. Un parlamento democrático refleja los puntos de vista e intereses de una sociedad que después se traducirán planeación, ejecución y evaluación de la política pública, lo cual también dará vida al horizonte político, social y económico de un país.

En tanto, Giovanni Sartori (1992) expone que la institución que ahora conocemos como Parlamento, fue formándose en Inglaterra entre 1689 y 1832. Se remonta al momento en que se presentan tres condiciones: que el soberano se encuentre bajo un cuerpo colegiado con autoridad y representatividad, que esta autoridad representativa sea suficientemente extensa para poder hablar en nombre de intereses generales, y, que la autoridad del parlamento lo sitúe en condiciones de tratar con el soberano, convirtiéndose en una contraparte e interlocutor efectivo frente al soberano. Los estudios del Parlamento puede emprenderse desde tres puntos de vista: el orden de los canales de acceso, esto es, la forma cómo y bajo qué circunstancias es integrado, donde adquieren relevancia los partidos políticos y el sistema político; la extracción económica-social de los parlamentarios y por último, su funcionamiento en el ámbito del sistema político, es decir, qué contrapesos juegan en el sistema de equilibrios de poder, su función representativa y sus facultades de control político y legislativo (p.189).

En México, las mujeres obtuvieron el derecho al sufragio apenas en 1951, y, a pesar de haber experimentado avances en materia de desarrollo humano, se mantienen brechas amplias de desigualdad por razón de género y con un alto índice de violencia contra las mujeres⁴.

Por ejemplo, la incidencia de feminicidios⁵ hace evidente la vulnerabilidad y el riesgo de ser mujer en un país que paradójicamente, se encuentra en los primeros sitios de representación parlamentaria de mujeres a nivel mundial. En el año 2012, México se ubicó en la posición 18 del ranking internacional que evalúa el porcentaje de parlamentarias en un estudio de 133 naciones, situación que contrasta con la baja representación que tienen algunos países con menores brechas de desigualdad por razón de sexo.

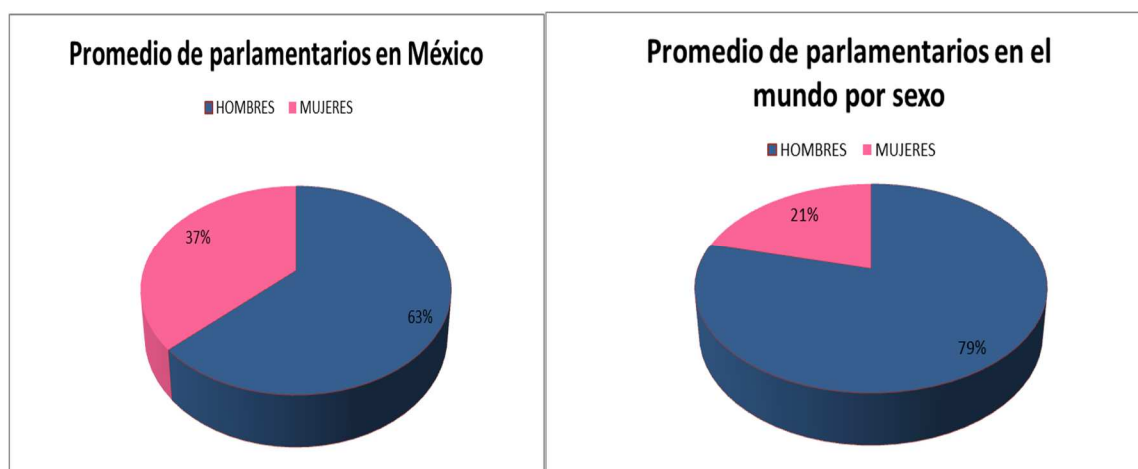
Lo anterior, puede significar que, a pesar de la difícil realidad que enfrentan las mexicanas, es posible romper el macizo techo de cristal⁶ en uno de los ámbitos de la representación política, el Poder Legislativo, como se observa en la siguiente gráfica.

⁴ Muestra de ello es un estudio realizado a los 19 países que conforman el Grupo de los 20, el cual concluye que India, Arabia Saudita, Indonesia, Sudáfrica y México, son las cinco naciones que más discriminan a sus mujeres. La investigación hecha por *Trust Law*, para la Fundación Thomson Reuters, construyó el ranking; con base en la posición que ocupa la mujer en cada uno de los países del grupo, la falta de acceso a la sanidad, la violencia generalizada y la impunidad, la participación en la política, las oportunidades laborales, el acceso a la educación y la propiedad, así como la trata de personas de la cual pueden ser víctimas de tráfico. Disponible en: También se puede confrontar con *Violencia de Género en México*, Cámara de Diputados, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, México, 2012.

⁵ Cfr. *Feminicidio en México, aproximación tendencias y cambios 1985-2009*, Colegio de México, ONU Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres y Cámara de Diputados, México, 2011. Cabe señalar que el feminicidio es un tipo penal en torno al cual existe aún un amplio debate, sin embargo, en México ha sido integrado al Código Penal Federal desde el año 2012, definiendo el Artículo 325, lo siguiente: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia (...).Disponible en Código Penal Federal. www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/.../Código%20Penal%20federal.pdf

⁶ En términos generales, es un obstáculo invisible en la carrera de las mujeres que es difícil de traspasar. Este concepto ha sido descrito por estudiosas de la sociología y la economía, referido al trabajo femenino, particularmente en los países anglosajones que, hacia mediados de los 80, se preguntaban por qué las mujeres estaban sub-representadas en los puestos más altos de todas la jerarquías ocupacionales”, en Gamba (2007)

Tabla 1
Promedio de parlamentarias en el mundo al año 2015



Fuente: Elaboración propia

Para comprender cómo se logró la representación parlamentaria del 37% de mujeres en espacio de hegemonía masculina, sorteando factores del orden estructural, cultural e institucional, la presente investigación busca responder a la pregunta ¿cómo y porqué se explica el incremento de la representación política de las mujeres en el Congreso de la Unión en México (1952-2012) en el proceso electoral federal del 2012?

Así, el objetivo de la presente investigación es explicar cómo se logró incrementar la representación de las mujeres en el Congreso de la Unión -Parlamento- en México. La hipótesis de trabajo es que el aumento de la representación de las mujeres en el Poder Legislativo se debe a la convergencia e interacción de tres factores: Primero, la presencia de un movimiento de mujeres en México denominado Mujeres en Plural. El movimiento implementó estrategias institucionales eficientes para defender un instrumento jurídico de acción afirmativa, las cuotas electorales. El movimiento es heredero de un largo andamiaje teórico y de acción colectiva de las mujeres por lograr la representación política.

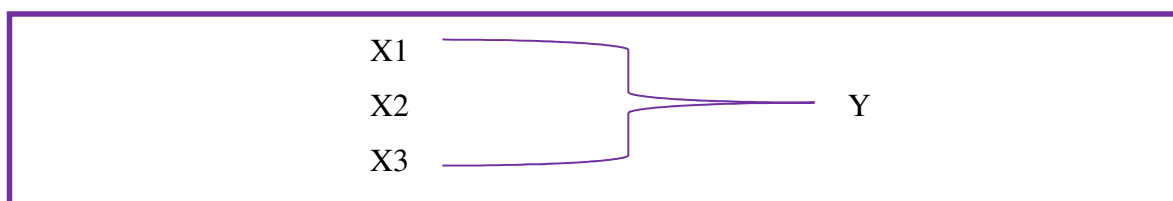
Segundo, la incorporación de las cuotas electorales en el marco constitucional mexicano, producto del avance del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) de las mujeres, específicamente los derechos políticos.

Tercero, la interpretación judicial con perspectiva de género realizada por el Tribunal Federal Electoral en el 2012. El órgano electoral emitió una resolución jurisdiccional basada en el DIDH de las mujeres que obligó a los partidos políticos a cumplir la ley de cuotas. Lo anterior, se explica en la siguiente tabla.

Tabla 2

Variables que explican el incremento de la representación parlamentaria en México:

VARIABLES INDEPENDIENTES X	VARIABLE DEPENDIENTE Y
X1 Movimiento de mujeres por los derechos políticos en las instituciones.	Porcentaje de Mujeres en el Congreso de la Unión
X2. Cuotas electorales	
X3. Sentencia del Tribunal con perspectiva de género	



El periodo que se elige, es un año en que se alcanza la masa crítica en el Parlamento en México de manera irreversible y constituye también el año en que el movimiento de mujeres logró que el Tribunal Electoral emitiera una sentencia con perspectiva de género y fundamentada en el Derecho Internacional de los derechos humanos.

Dicha resolución, propició el incremento de candidatas por el principio de mayoría relativa y una reforma constitucional para modificar la redacción de la norma en materia de cuotas electorales en el ámbito federal y local, para cerrar así la posibilidad de tener retrocesos en el Poder Legislativo. Con dicha sentencia, se puso fin a un debate que duró una década en

torno a la prioridad de lograr la igualdad de género en el ámbito político, frente a otros principios que rigen la vida democrática nacional.

El análisis de la convergencia del movimiento de mujeres, las cuotas electorales y su interpretación favorable, además de explicar el incremento de congresistas, pretende mostrar cómo es posible sortear los obstáculos que aún tienen las mujeres para alcanzar el poder frente a profundas resistencias culturales, estructurales, partidistas e institucionales⁷.

Las expresiones de la resistencia se ponen de manifiesto en el continuo debate en torno a la interpretación de las cuotas electorales, en las prácticas de las jerarquías partidistas que se niegan a cumplir la norma, así como en los comportamientos patriarcales de los partidos políticos -horarios de reunión, lenguaje, limitado financiamiento a candidatas-, y en los últimos años, en la emergencia de una forma específica de violencia contra las mujeres en el ámbito político⁸.

Mostrar el recorrido del movimiento de mujeres como actor social y el esfuerzo para la integración de las acciones afirmativas, aspira también a localizar experiencias que se puedan expandir a otros niveles de representación política.

A la fecha, se ha demostrado que las legisladoras mexicanas impulsan políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género, y lo que resulta más relevante, es que las y los congresistas federales aprobaron la inclusión del principio jurídico y político de la paridad, idea recién incorporado al lenguaje jurídico y al imaginario social.

⁷ En el año 2016 doce entidades de la República Mexicana tendrían procesos estatales para elegir a sus Gobernadores, alcaldes y legisladores. Baste poner en el buscador de “google”: incumplen paridad en el 2016, para conocer el incumplimiento de los partidos en torno a una reforma constitucional aprobada con anterioridad que los obligaba a postular al 50% de candidatas mujeres al Congreso Local y en algunos casos a los Ayuntamientos.

⁸ Sobre el tema de la violencia contra las mujeres en el ámbito político, éste comienza a ser explorado con mayor fuerza en México. Por ejemplo, el junio del 2014 se realizó el Seminario *Violencia Política, Parlamento y Género* organizado por las instituciones electorales y los partidos políticos. Uno de los diversos casos que se han presentado es el ocurrido en Sonora –entidad federativa- en plena campaña electoral aparecieron lonas que decían “las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón” en alusión a algunas candidatas, por lo que las instituciones políticas a partir de los instrumentos internacionales, diseñaron el Protocolo para atender la violencia política contra la mujer en el 2015. A nivel internacional Bolivia publicó el primer marco jurídico en la materia, la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (Ley 243, mayo del 2012), la cual forma parte de un proyecto de transición del modelo democrático. La norma jurídica se enmarca en el tema de la prevención de conflictos y la consolidación de la paz.

II.- Justificación

La pertinencia de esta investigación. La lucha por la Representación: movimiento de mujeres y cuotas electorales. El caso de México 2012, se encuentra en diversos argumentos tanto del orden teórico como empírico, los cuales se describen a continuación.

Desde la perspectiva empírica caben las interrogantes ¿por qué es importante la presencia de mujeres en la esfera pública, específicamente en el Poder Legislativo? ¿Es representativa una asamblea donde la mayoría de sus integrantes son hombres?⁹.

Desde el siglo XVIII, las mujeres han aportado ideas sobre la necesidad de estar presentes en la esfera pública, que alcanzó su momento más relevante en el movimiento sufragista y posteriormente, en el posicionamiento internacional de una agenda común por hacer realidad el goce y el ejercicio de sus derechos humanos.

La literatura que responde a las interrogantes anteriores es abundante. La construcción argumentativa encuentra obras relevantes en las pensadoras contemporáneas feministas, entre las que destacan: Iris Marion Young (2002) y Anne Phillips (1995), con sus aportaciones sobre la justicia y la política de la diferencia así como la importancia de la presencia de las mujeres para la inclusión de sus intereses en la agenda pública.

A lo anterior, se suma el análisis de la historiadora feminista Joan Scott (2012) a favor de la paridad, y la investigación previa de Hanna Pitkin (1997), quien en su amplio estudio sobre el concepto de la representación, específicamente la descriptiva, establece que las asambleas deben ser como un mapa o espejo que reflejen la diversidad que compone una sociedad, y de ello la mejor expresión es la población de mujeres y hombres.

⁹ A principios del 2015, esta pregunta parecería no ser necesaria en un contexto donde el movimiento de mujeres ha logrado mostrar la relevancia de la igualdad por razón del sexo en todos los ámbitos de la vida pública. La importancia de la presencia de las mujeres en la esfera pública, es un hecho que no requeriría ser justificado por dos razones suficientes, las mujeres conforman la mitad de la población mundial (Scott 2012), y es un hecho de justicia su representación política (Young, 2000).

Las ideas de las pensadoras son abordadas en el marco teórico, así como la recuperación de otros autores. De los estudios sobre la representación y democracia, destacan los elaborados por Bernard Manin (1997), quien a partir de un recorrido histórico muestra las limitaciones del sistema democrático representativo que conllevó la exclusión de las mujeres, así como las aportaciones de Robert Dahl (1992, 1999, 2008) autor que ha profundizado en el análisis de la democracia y de la igualdad política.

De igual forma, se considera que la inclusión de las mujeres es un aspecto de legitimidad democrática, y una necesidad imperante para la consolidación de la antigua forma de gobierno que ha sufrido diversas mutaciones, como lo señalan Dahlerup Drude, (2003), Pippa Norris, (1997) y Joni Lovenduski, (1997), en sus diversos estudios introductorios en torno a los actores y factores que inciden en los procesos de representación.

A pesar de la solidez y abundancia de los argumentos a favor de las mujeres en los espacios de representación, continúa el debate respecto a si deben o no existir mecanismos que incentiven y faciliten su participación. Dichas discusiones alcanzan su cénit cuando se impulsan las cuotas electorales, bajo razonamientos que van desde la importancia del mérito en las carreras parlamentarias, la protección del principio de la universalidad – como fue en el caso francés-, o del principio constitucional de la igualdad, argumento recurrente de los ministros de México.

A los argumentos teóricos en torno a los actores y factores que permiten impulsar la mayor representación de las mujeres, se agrega en segundo término la necesidad de comprender experiencias ejemplares que han permitido incrementar la representación parlamentaria.

Existen abundantes estudios sobre los factores estructurales, culturales e institucionales, que permiten la comprensión de los obstáculos hacia la representación parlamentaria, así como de los factores que allanan dicho recorrido, como se detalla en la primera parte del Capítulo I sobre el Estado de la Cuestión.

Si bien las aportaciones desde diversas áreas de las ciencias sociales permiten hoy una mejor comprensión del hecho que ocupa a esta tesis doctoral, es preciso considerar que estas teorías se han demostrado ya en países desarrollados. Como apuntan los ensayos de Viternam Fallon y Beckfied (2008).

“Los modelos existentes hacen un muy mal trabajo de identificación de los factores que promueven la mujer la representación política en las naciones menos desarrolladas. Solo el efecto de un sistema electoral de representación proporcional sigue siendo significativa a través separadas de ambas naciones acorde a su economía. Además, si los modelos actuales realmente dicen poco acerca de los factores que promueven la representación legislativa en las naciones en vías de desarrollo, entonces se necesitan nuevos modelos teóricos que descubrir y examinar otras variables” (p.473).

En el mismo sentido, Paxton, Kunovich and Hughes (2007), sugieren que las futuras investigaciones deben globalizar la comprensión presente de las participación y la representación política de las mujeres, así como el impacto para determinar qué teorías desarrolladas en Occidente, se aplican a contextos no Occidentales.

En consecuencia, analizar el caso mexicano adquiere relevancia por dos cuestiones: primero, se suma a la demostración de teorías implementadas en occidente para explicar el mismo hecho en países en vías de desarrollo y bajo otro contexto cultural y social; y segundo, se pretende sistematizar el acontecer y el desarrollo sobre aspectos que han tenido un carácter global como es el movimiento de mujeres y la instrumentación de las cuotas electorales.

Es preciso señalar, que en los diversos encuentros académicos nacionales e internacionales sobre la participación política de las mujeres y la representación, se suele reconocer el trabajo de las instituciones para avanzar por los derechos políticos de las mismas, llevando como expositores a quienes conforman las instituciones electorales –académicos, consejeros, magistrados- y dejando de lado –invisibilizando-, a las activistas que también han contribuido a dicho avance.

Como se presentará a lo largo de la tesis, el movimiento de mujeres ha luchado a lo largo de la historia por alcanzar espacios de representación y de poder. En las últimas cuatro décadas, sobre todo a partir del encuentro de miles de activistas en Beijing, la agenda internacional para el avance de los derechos humanos de las mujeres, puso énfasis en alcanzar mayor representación parlamentaria para impulsar políticas públicas con perspectiva de género que permitieran acortar las brechas por desigualdad en razón de sexo.

Al año 2015, existe un consenso internacional casi generalizado sobre la relevancia de la mayor representación política de mujeres. Paulatinamente, los organismos internacionales

como ONU Mujeres -organismo de las Naciones Unidas-, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interparlamentaria y la Unión Europea, priorizan la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como parte de la agenda internacional de los Derechos Humanos¹⁰.

Dado el escaso progreso alcanzado en la Plataforma de Acción de Beijing, se estableció nuevamente la necesidad de un equilibrio de género para lograr la misma proporción de ambos sexos en puestos gubernamentales y de la administración pública. Seis años más tarde, en 1991, en la Resolución 66/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación política de la mujer, se recordó a los Estados una parte de los compromisos adoptados en Beijing, sobre representación de las mujeres y la necesidad de acelerar la igualdad en la participación política.

Posteriormente, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborados en el año 2000¹¹, se estableció como propósito promover la igualdad entre los géneros y la autonomía del poder. En el documento que signaron 189 naciones pertenecientes a la ONU se acordó la consecución de ocho metas sobre problemas considerados graves o radicales. El apartado número tres establece: “Promover la Igualdad entre los sexos y el Empoderamiento de la Mujer”. La meta es lograr una mayor proporción de puestos ocupados por las mujeres en el parlamento de cada nación¹².

En el mismo sentido, en Europa, desde el año 1990 y en la Resolución del Consejo Económico y Social E/RES/1990/15, se recomendó la cifra objetiva de un 30% de mujeres en los puestos de liderazgo para el año 1995 y, del 50% para el año 2000¹³.

¹⁰ Cfr. Folguera Pilar, “*La equidad de género en el marco e internacional y Europeo*” en *Mujeres, Globalización y Derechos Humanos*, Feminismo, Cátedra, España, 2010.

¹¹ Son ocho los propósitos de Desarrollo Humano fijados en el año 2000 por 189 países miembros de las Naciones Unidas que acordaron conseguir para el año 2015, entre ellos, erradicar la pobreza y el hambre, mejorar la salud materna, lograr la enseñanza primaria universal y reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años.

¹² La ONU señala que uno de los objetivos fundamentales para el desarrollo humano es lograr la equidad entre hombres y mujeres. La ONU está comprometida en ello no sólo porque se comprueba el potenciador de bienestar y prosperidad para todas las personas. Disponible en www.onu.org.mx/objetivo3.html, consultado en octubre del 2014.

¹³ En 1990 las parlamentarias apenas constituían el 11.3% en el mundo, sólo eran jefas de Estado 3 mujeres, y 7 primeras ministras. Cabe señalar que las acciones afirmativas en materia política aún no habían sido incorporadas

Al mismo tiempo, en los acuerdos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres se incluyeron apartados para prevenir la discriminación en el ámbito político y fortalecer su participación en los espacios de toma de decisión.

En el caso particular de México, las activistas por el avance de los derechos políticos han logrado integrar en la agenda nacional, el objetivo de tener mayor representación política. El Estado mexicano se sumó a los compromisos en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres. En 1981 ratificó la CEDAW y sus recomendaciones generales, entre ellas, la No. 25 en la que abunda sobre la implementación de las medidas especiales de carácter temporal, asentado que no se considerarán discriminatorias, en tanto su objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y cuyas medidas que deben ser aplicadas tanto en el sector público como en el privado.

Al mismo tiempo, las mujeres organizadas en México, como se verá en el Capítulo III, han impulsado la creación de organismos gubernamentales como el Instituto Nacional de las Mujeres, y la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de la agenda nacional, dando como resultado que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, integre el eje transversal de igualdad de género, así como la creación del Programa Nacional entre Mujeres y Hombres 2009-2012, y posteriormente, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación en México 2013-2018.

En ambos planes se establecen compromisos en materia de igualdad política, por ejemplo, éste último incluye el apartado “Participación política y social”, el cual plantea como estrategias transversales (3.1) “Promover el liderazgo y la participación significativa de las mujeres en cargos y puestos de toma de decisión”. Destaca las siguientes líneas de acción: Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos de la Administración pública federal, estatal y municipal, en el Poder Judicial y en las presidencias y comisiones de los poderes legislativos locales y federal, así como en los puestos directivos de las comunidades regidas por usos y costumbres, además de promover la paridad en la asignación de puestos directos de las empresas y organizaciones de la sociedad civil. A ello se suma la estrategia 4.1: Fomentar la construcción de la ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos políticos. A pesar de estas metas, es común que los planes queden rebasados en el ejercicio diario de gobernar.

Entonces vuelve a surgir la pertinencia de la presente investigación ¿para qué nos sirve conocer cómo se logró esta meta en el Poder Legislativo Federal? La estrategia implementada puede apoyar y ayudar a lograr mayor representación en otros órdenes y niveles de Gobierno, espacios que aún están lejos del 30% y más aún de la paridad, lo que al mismo tiempo permite dar cumplimiento a metas institucionales¹⁴.

Al año 2012, el Poder Ejecutivo solo tenía el 12% de mujeres en su Gabinete y únicamente 173, de los dos mil 456 municipios, eran encabezados por una mujer, lo que representa el 7%, aspecto que no ha variado mucho en la última década (ONU Mujeres 2013).

En el ámbito de las 31 entidades federativas que componen la República Mexicana, solo una (Equivalente a las Comunidades Autónomas en España) era gobernada por una mujer: Ivonne Ortega Pacheco, electa en Yucatán para el periodo 2007-2012. Antes de ella, la ínfima cantidad de seis mujeres había ocupado este cargo.

En el Poder Legislativo local, las parlamentarias apenas llegaban a un 23.6% previo en las elecciones del 2012. Las entidades con menor número de congresistas: Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Colima, todos gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Respecto al Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente dos de los once ministros son mujeres y de los magistrados en Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia en el 2012, las mujeres solo alcanzaban un 28%¹⁵.

En cuanto a los organismos autónomos como el caso del Instituto Federal Electoral (Instituto Nacional Electoral a partir del abril 2014), las consejeras sólo representaban el 22% hasta marzo del 2014¹⁶, ninguna mujer ha ocupado su presidencia y tampoco de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior evidencia la excepción que representa la masa crítica en el Poder Legislativo, frente a los cientos de espacios de representación política que aún excluyen a las mujeres.

¹⁴ Cfr Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación en México 2013-2018.

¹⁵ Íbidem

¹⁶ Ver, Historia del Instituto Federal Electoral, Integración de los Órganos Centrales 1990-2014. Disponible, http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UTSID/UTSID-EstadisticasTransparencia/docs/IA-MateriaTransp_2014/IFE_Integracion_organos_centrales_1990-2014.pdf. Consultado el 12 de abril del 2016.

Para conocer cómo se ha estudiado el caso que nos ocupa, se da cuenta de la revisión de la bibliográfica para explicar el hecho.

De manera particular, en México se han presentado en la última década, diversas investigaciones que estudian la representación parlamentaria desde diferentes ángulos. Algunas instituciones gubernamentales y académicas han promovido estudios como son el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados (CEMEAG), el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que se suman al trabajo de diversos investigadores e investigadoras.

Uno de los estudios más completos es el de *Mujeres Legisladoras en México* de Magdalena Huerta y Eric Magar (2006) trabajo que compila la evolución de las cuotas electorales y la representación política en México hasta el proceso electoral del año 2003, al que se agrega un estudio sobre la representación parlamentaria en el Distrito Federal.

En materia de cuotas electorales algunos de los ensayos de corte cuantitativo son realizados por los politólogos Aparicio, Langston y Pérez (2009) y Aparicio (2012), quienes demuestran el grado en que las cuotas han impactado en la representación legislativa.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEAG) ha publicado *La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad* (2010), y en cuanto a los resultados de la agenda legislativa, se presentó en 2012 y 2015, el *Diagnóstico del trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres*.

También apareció la compilación del Instituto Federal Electoral (IFE), *Retos a 60 años de la aprobación del voto de las mujeres* (2013), donde las investigadoras mexicanas María Marván y Libia Márquez, se concentran en el avance de representación que consiguió a partir de la sentencia del proceso electoral 2012; mientras que ONU Mujeres sacó a la luz el estudio *Participación política de las Mujeres en México. A 60 años del reconocimiento al voto femenino* (2013), en el que se diagnostican los retos de la participación política de las mujeres en el ámbito estatal, federal y municipal.

Desde los estudios de género y la sociología, también se aborda el tema de la representación política, muestra de ello son algunos de los siguientes textos, *Límites y desigualdades del empoderamiento político de las mujeres en el PAN, PRI y PRD*, de Ma.Luisa González y Patricia Rodríguez (2008), en el que se analiza la manera en que las mujeres perciben los obstáculos de la vida partidaria y el ejercicio de su cargo; la compilación de ensayos *Democracia y Ciudadanía: perspectivas críticas feministas* (2011), una investigación colectiva en la que Estela Serret presenta *Las bases androcráticas de la democracia*, e Ileana García Gossio el de *Mujeres en los puestos de toma de decisiones políticas. Limitantes subjetivas y sociales para su ejercicio*; de la misma García Gossio destaca el estudio doctoral *Género y participación política. El caso de Rosario Robles Berlanga* (2008) en el que se apunta cómo la construcción de las identidades sexo-genérica, determina la manera en que las mujeres alcanzan el poder y los límites para su ejercicio.

En el extranjero, la revista de la Universidad de Salamanca (2014) dedicó uno de sus volúmenes al tema de las mujeres en la política, donde aparece el análisis: *Ventaja de género en los distritos uninominales: las elecciones en México 2012* de Alberto Panadés y Silvia Sánchez, quienes concluyen que los hombres tienen una significativa ventaja sobre las mujeres en la competencia electoral, y que existe un sesgo de género en los votantes más que en los partidos políticos, al momento de emitir el voto.

Desde la mirada de investigadoras internacionales que han apuntalado estudios sobre la representación política y las cuotas electorales en México se encuentran los de Joy Langston (2007), en torno a las reformas al COFIPE en 2007; los de Magda Hinojosa (2013) quien ha descrito la evolución de las cuotas electorales y sus afectos en México, además de su tesis doctoral *Selecting Women, Electing Women, Political Representation and Candidate Selection in Latin America*, donde analiza los casos de México y Chile. También Jennifer Piscopo (2013, 2014) ha dedicado varios ensayos al análisis de las cuotas y sus efectos en la región, y recientemente Flavia Freidenberg (2014) explicó que el diseño de las cuotas electorales impacta de manera diferenciada en las entidades federativas.

En cuanto al año 2012, relativo al juzgamiento con perspectiva de género por parte del Tribunal Federal Electoral, vieron la luz tres libros. Primero se publicó *Cuota de género. Una sentencia histórica* (2013), con testimonios de mujeres que participaron en el litigio y una breve opinión de los líderes de los principales partidos políticos.

Después, en mayo de 2014, apareció *Sentencia de amor 12624. Mujeres y Elecciones en México*, el cual analiza los efectos que tuvo la resolución del Tribunal en las entidades federativas, las experiencias de las candidatas en el último momento y algunas reflexiones de las promovientes del juicio a favor de las cuotas. En el texto se recuerda que “dos eventos confluyeron para poner en concierto las nota que dieran lugar a la partitura democrática: por un lado el reclamo del grupo de mujeres militantes de diversos partidos que demandaron justicia por sus derechos políticos, y por otro la voluntad de los magistrados de analizar y resolver el asunto desde la perspectiva de género” (p.3).

También apareció el texto *Contigo aprendí: una lección de democracia gracias a la sentencia 12624* (2013) escrito por Adriana Ortiz y Clara Scherer, que concentra una serie de testimonios de las militantes de partidos, las y los magistrados y las académicas que han estudiado la representación política, y que resume la estrategia múltiple de litigio político, mediático y académico en el que además reconoce y plasma, una breve semblanza de las mujeres que han luchado por los derechos políticos.

En estos años también salieron a la luz algunos ensayos relevantes sobre el tema, como el de Jesús Ibarra (2013), “*Cuotas de género vs regla de las mayorías: el debate constitucional*”, en el que se hace una ponderación de principios que estaban en conflicto en el proceso electoral del 2012: la democracia interna de los partidos y la igualdad política.

Después de la resolución del Tribunal Electoral en el 2012 y la posterior reforma por la paridad, se ha continuado con la publicación de algunas investigaciones sobre la representación parlamentaria de mujeres, sin embargo, a fin de centrar la tesis en el proceso electoral antes citado, se dejan fuera varios estudios posteriores al año 2015.

Los estudios sobre el movimiento de mujeres en México emergen con mayor fuerza a partir de los años 90, sin embargo, aún no se cuenta con un gran cantidad de investigaciones con el tema específico sobre el movimiento de mujeres por sus derechos políticos, a diferencia de los análisis sobre cuotas electorales y su impacto en la representación, que son más abundantes.

Algunas autoras se concentran en la construcción y ejercicio de la ciudadanía en México. Muestra de ello, es el texto coordinado por Mónica Cejas y Ana Lau Jaiven (2011), *Mujeres*

y ciudadanía en México: estudios de caso, así como el libro de Graciela Vélez Bautista, *La construcción social del sujeto político femenino. Un enfoque identitario-subjetivo* (2008). Sin embargo, se abordan desde la categoría de la ciudadanía, más que de la representación.

En la región de Latinoamérica, la Fundación Internacional para la Democracia (IDEA), ONU Mujeres y la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Mujeres, de manera independiente y/o coordinada, han publicado entre otros títulos: *Diagnóstico de la participación política y liderazgos de mujeres indígenas en América Latina* (2010); *Parlamentos sensibles al género, el estado de la cuestión en América Latina* (2011); *La ciudadanía de las mujeres en las democracias de América Latina* (2013).

Otras investigaciones, como la de Gisela Espinosa (2011), *Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010*, explica cómo van participando las mujeres en la esfera pública, el recorrido en el que emergen como ciudadanas e irrumpen en la esfera pública, historias de luchas, logros y desafíos. Aunque de manera directa no presenta su lucha por los derechos políticos, se puede deducir y clarificar, el momento en que las mexicanas aparecen como ciudadanas.

Asimismo, se tienen las exposiciones de la antropóloga feminista, Martha Lamas (2006), quien ha estudiado el movimiento feminista en México y ha hecho un recuento de su participación al interior y fuera de los partidos políticos.

Además de los textos citados en torno a la sentencia del Tribunal Federal Electoral donde existe la narración de diversas activistas de los partidos políticos, se han publicado algunos libros de carácter biográfico que muestran cómo ha sido el recorrido de las mujeres por alcanzar mayores niveles de representación, como es el de las Gobernadoras, texto de Enriqueta Cabrera (2009) en el que algunas entrevistas biográficas permiten conocer detalles de cómo avanzaron las mujeres en los espacios políticos, muchas veces considerados infranqueables, como era el Parlamento.

Como se adelantaba, la tesis que se presenta busca explicar el incremento de la representación política de las mujeres con base en la correlación e interacción de los tres aspectos antes mencionados: el movimiento de mujeres, las cuotas electorales y la interpretación del Tribunal con perspectiva de género.

La aportación que se pretende realizar a partir de la bibliografía utilizada, es la explicación del incremento de parlamentarias con base en los tres elementos, ya que por sí mismo -el movimiento, las cuotas, la sentencia del Tribunal- constituyen un factor necesario pero no suficiente para comprender la representación política de las mujeres en México.

La tesis busca explicar un hecho que se manifestó en la vida política nacional, como fue la constitución de una masa crítica en el Congreso de la Unión, donde se ilustran las teorías previas sobre el impacto que tiene el diseño de las cuotas, el sistema electoral y la importancia del juzgamiento con perspectiva de género (Huerta y Magar 2007, Krook, 2009, Dalherup 2003, 2006).

Se considera que es un caso ejemplar porque en el contexto internacional los parlamentos aún se mantienen por debajo del 30 por ciento de mujeres, y, porque en diversos espacios de representación política en México las mujeres están ausentes.

Cabe señalar que la tesis se nutre de las diversas obras bibliográficas mencionadas bajo una perspectiva analítica, interpretativa y explicativa, sobre un hecho que, a tres años después de lo acontecido en el 2012, se aprobara una reforma constitucional que obliga a la paridad en las candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional en los procesos electorales federales y locales al Poder Legislativo.

En resumen, en contraste a las diversas obras citadas que se han publicado en la materia, la tesis doctoral analiza y hace visible la convergencia del movimiento de las mujeres, la integración de las cuotas electorales y la sentencia del Tribunal Electoral, como el actor y los factores, respectivamente, que posibilitaron superar el 30% de legisladoras y con ello, una fuerza suficiente para lograr la reforma constitucional en materia de paridad.

III.- Metodología

La metodología de la presente investigación se define como cualitativa. De acuerdo a su naturaleza, es un caso ejemplar y contemporáneo con alcances de corte analítico, interpretativo y correlacional (Coeller, 2005; Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La tesis se apropia de la perspectiva de género como herramienta epistemológica (Serret, 2008),

y es carácter explicativo al buscar determinar cuáles son las causas de determinados fenómenos (Anduiza, Crespo, Méndez, 2009), en este caso, el incremento de la representación de mujeres en el Parlamento en México.

La investigación de enfoque cualitativo mantiene la característica de acción indagatoria, moviéndose de manera dinámica y en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, pudiendo resultar circular aunado a que el proceso de investigación es más flexible y se mueve entre las respuestas y desarrollo de las teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Así, la tesis se apropia de estos distintivos metodológicos mediante la descripción de los hechos ocurridos que permitieron, tanto en la teoría como en la práctica, la conformación de un movimiento de mujeres por el avance de sus derechos políticos así como de los fenómenos que constituyeron un campo fértil, teórico y político, para incrementar la representación parlamentaria.

Para ello, se recurre a un enfoque interdisciplinario (Nohlen, 2012), ya que se apoya en teorías y categorías aportadas por las siguientes disciplinas: la Ciencia Política (democracia, representación), la Sociología (movimiento de mujeres), el Derecho (acciones afirmativas, cuotas electorales) y los Estudios de Género (perspectiva de género).

Dado que la investigación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos y se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres humanos y el contexto en que se da un hecho (Hernández, 2010), en la tesis se presenta con detenimiento el desarrollo natural de fenómenos sociales como el surgimiento del movimiento de las mujeres, la creación de instrumentos derivados del derecho internacional de los derechos humanos, como fueron las acciones afirmativas (las cuotas electorales), así como el paradigma que permitió una resolución jurisdiccional con perspectiva de género y el contexto en que fueron presentándose.

El contexto se refiere a la exposición que se realiza de las variables estructurales, institucionales y culturales en que han limitado la representación política de las mujeres, así como las estrategias para sortearlas. El contexto alude también a la forma que en que dichas

variables se han ido modificando a lo largo del tiempo. Así, se describen aspectos generales que enmarcan la vida de las mujeres en general, y de las mexicanas en particular.

Por otra parte, con base en la clasificación que realiza Coeller, (2005), y de acuerdo a la naturaleza del caso que se analiza, la investigación sobre el incremento de la representación de parlamentarias en México es un caso ejemplar, ya que ilustra algunas teorías, un fenómeno social y relaciones causales, que pueden servir para la interpretación de hechos similares, además de aportar la experiencia y la estrategia que puede ser trasladada a otros espacios de representación política como es el ámbito local.

Además, es de corte analítico, al perseguir estudiar el funcionamiento de un fenómeno buscando sus causas, correlatos y efectos (Coeller 2005), por ende, el recorrido que se presenta a lo largo de los capítulos, describe el cómo la correlación del movimiento de mujeres, las cuotas electorales y la sentencia con perspectiva de género, fueron las causas que permitieron alcanzar la masa crítica en el Parlamento.

Cabe destacar que, acorde al tipo de acontecimiento, es un caso contemporáneo ya que el estudio está centrado en un hecho reciente. Aunque también se apoya en aspectos históricos, se inscribe de manera detallada en el debate que se presentó en torno a las cuotas electorales y su interpretación judicial en el año 2012 en México.

Por lo anterior, los alcances de la investigación son de tipo explicativo, dado que está dirigida a responder por las causas de un evento social enfocado en exponer por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables (Anduiza, Crespo, Méndez, 2011). También tiene un alcance interpretativo porque sus resultados buscan responder a la pregunta de ¿cómo es que sucede un fenómeno?, y, es correlacional, porque su finalidad es conocer la relación o grado de relación entre los hechos, en este caso, el movimiento de mujeres, las cuotas electorales y su interpretación a través de una sentencia con perspectiva de género.

Una de las características del enfoque cualitativo, es que se recaban datos a partir de la bibliografía especializada, documentos, tesis, entre otros. Para la presente investigación se utilizaron los siguientes documentos:

- 1) Bibliografía especializada de diferentes disciplinas sociales;

- 2) Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres;
- 3) Marcos normativos que regulan las instituciones electorales mexicanas, los partidos políticos y los procesos electorales federales, como son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, especialmente;
- 4) Los Acuerdos y Resoluciones de la autoridad electoral de México (IFE);
- 5) Los Juicios e Incidentes promovidos por los partidos políticos en México en torno a las cuotas electorales;
- 6) Las Sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y
- 7) Notas periodísticas y artículos de opinión.

Además de las características de corte cualitativo, la tesis se nutre de la perspectiva de género, una herramienta de análisis epistemológico para diversas áreas de estudio, cuya premisa es que las formas hegemónicas de acceso al conocimiento están sesgadas por la existencia de jerarquías entre hombres y mujeres, y que el saber se ha basado en la vida de los hombres, la clase y la cultura dominante. Al mismo tiempo, la perspectiva de género se constituye como un nuevo paradigma para abordar las ciencias sociales, que visibiliza aquello que carece de un horizonte de análisis desde las mujeres, así como de las personas marginadas, las personas excluidas del relato oficial (Alba, 2014:13).

Esto significa que, al hacer un estudio sobre la lucha por la representación política de las mujeres, se devela a un actor social que no solo ha sido marginado sino invisibilizado a lo largo de diversas teorías y estudios que dieron por sentada su exclusión de la esfera pública. Así, además de explicar un fenómeno en el cual las protagonistas son las mujeres, su movimiento, sus ideas y sus estrategias para ser parte de la vida pública, se consigue, como apunta la investigadora Serret (2008), primero, visibilizar a las mujeres, sus espacios y la forma en que contribuyen a la creación de la realidad social; y segundo, mostrar cómo y por qué cada fenómeno específico está atravesado por relaciones de poder y desigualdad entre los géneros.

Como apunta el prólogo del texto *Ciencia política con perspectiva de género* (2014), este enfoque sigue manteniéndose al margen, abriéndose camino fuera de la senda hegemónica de la disciplina y sus implicaciones para análisis político, lo cual, irremediablemente está ligado al poder, su ejercicio y sus prácticas, y aunque la disciplina ha sido asumida como

neutra respecto al género, no ha tenido en cuenta las desigualdades por sexo. Una de las principales corrientes plantea contar la historia desde la perspectiva de quienes no han participado en el proyecto de dirección de una sociedad ni en la producción del conocimiento científico (Alba, 2014, págs. 5-13).

En resumen, lo que caracteriza la epistemología con perspectiva de género de que se apropia el presente estudio, es una reflexión sobre las relaciones de poder, las injusticias sociales y el objetivo de transformar la sociedad para conseguir relaciones equitativas entre hombres y mujeres (Alba, 2014:15), en este caso, la igualdad en el ámbito de la representación política.

En resumen, se puede señalar que la presente investigación es de carácter cualitativo y tiene gafas de género, es decir, tiene como premisa la necesidad de conocer una expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres en un modelo democrático liberal.

IV.- Estructura de la tesis

La tesis se compone de cinco capítulos con base en el orden histórico de los hechos, como fue la emergencia del movimiento de mujeres -s.XVIII y s.XIX- quienes lucharon por ser parte del poder político y después, las estrategias que fueron diseñando en el ámbito internacional y nacional, encaminadas a lograr la anhelada representación.

El **Capítulo I**, Estado de la cuestión. Representación parlamentaria de las mujeres, se busca responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué aspectos comparten las naciones que ocupan los primeros sitios de representación parlamentaria? ¿En qué congresos, más mujeres están sentadas en una curul? ¿Cuáles son los factores que impactan la representación? Para responder a lo anterior, primero se introducen los factores que impactan la representación parlamentaria, y después, se describe el estado que guarda la representación con base en la clasificación mundial de la Unión Interparlamentaria¹⁷.

¹⁷ Es la una organización internacional de los parlamentos en el mundo creada en 1889¹⁷- Las fuentes consultadas para conocer los datos cuantitativos son las bases de datos electrónicas de la *Unión Interparlamentaria*, *IDEA Internacional* y *QuotaProject*, principalmente. La base de datos está disponible en: www.quotaproject.

Para el análisis, se consideran dos elementos, el porcentaje de mujeres y cómo interactúan los factores que posibilitan o limitan la representación de las mujeres. Las regiones que se incluyen son, Europa, Medio Oriente y Norte de África y Latinoamérica.

Es posible agrupar los factores en tres dimensiones: culturales, institucionales y estructurales (Del Campo 2005, Ríos, 2008:14, Tremblay, 2007:9; Hughes and Paxton, 2007)¹⁸. Dentro de cada grupo se consideran aspectos tales como culturales, los valores y la actitud hacia las mujeres, la religión, la división de la esfera pública y la esfera privada, el patriarcado y los medios de comunicación. Dentro de los factores estructurales o socioeconómicos se encuentra el nivel de desarrollo, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y la educación. Y factores institucionales: el sistema electoral, las cuotas electorales, el método de selección de los partidos políticos.

A lo anterior se agrega una descripción general de los aspectos que enmarcan la vida de las mexicanas y la evolución de la representación parlamentaria a fin de interpretar la influencia de los factores que enmarcan el avance de su presencia.

El **Capítulo II**, se concentra en el Marco Teórico y se denomina: Conceptos y Teorías para el análisis de la representación en el que se desarrollan los diversos conceptos que se requieren para la comprensión de la representación política de las mujeres. Para ello, se recurre a las ideas desarrolladas desde la Ciencia Política, los Estudios de Género, la Filosofía Política y la Sociología.

Primero se exponen los conceptos de género y perspectiva de género, los cuales han sido aportaciones del movimiento feminista generando un nuevo enfoque para las ciencias sociales, principalmente a partir de las pensadoras Joan Scott (2008) y Estela Serret (2008). Se retoman los conceptos de representación y democracia a partir de pensadores que recapitulan debates previos y profundizan en el estudio de dichas ideas, como son Hanna Pitkin (1985), los politólogos Bernard Manin (1997) y Robert Dahl (1992,1999), así como la historiadora de género Joan Scott (2012).

¹⁸ Marcela Ríos (2008) explica que las investigaciones realizadas han mostrado la existencia de múltiples factores que impiden una competencia equilibrada de género en el plano político, afectando negativamente la representación política de las mujeres. Las explicaciones más exploradas por la literatura pueden ser agrupadas en tres dimensiones: las estructurales, las culturales o ideológicas y las político institucionales (p.14).

Las otras dos ideas son aportaciones contemporáneas que argumentan a favor de la presencia de mujeres en la esfera pública, realizadas por las autoras multicitadas: Mone Lena Krook (2012) Joni Lovendusky (1997,2005), Pippa Norris (1997) AmeliaValcárcel (1997), Anne Phillis, (1996) y Dudre Dahlerup (2005), quienes han contribuido con una serie de investigaciones de carácter teórico y/o empírico, que constituyen un referente fundamental.

Se integran también dos conceptos que buscan explicar la mayor presencia de mujeres en México en el Congreso de la Unión: el movimiento de mujeres y las acciones afirmativas, para lo cual se retoman ideas y definiciones de la socióloga Molineux (2014), Krook y Sarah Childs (2010), Dahlerup (2005) y Young (2010). Ambos conceptos se desarrollan con amplitud en los capítulos centrales de la tesis.

Así, se busca abordar conceptos multidimensionales y estrechamente relacionados entre sí, y aunque las ideas como la de representación y la democracia pueden constituir una tesis en sí mismas, solo se realiza un breve recorrido que permite establecer las bases para el estudio y la comprensión del caso que nos ocupa.

El Capítulo III, Movimiento de Mujeres por la representación, expone los debates teóricos y las acciones políticas que realizó el movimiento de mujeres para avanzar en el ejercicio de sus derechos, los discursos y las acciones que excluyeron a las mujeres del poder y la forma en que dicha exclusión fue modificándose. Se trata de revelar la frontera de lo político, particularmente resistente e impenetrable para las mujeres como lo demuestra la historia (Perrot, 2009:187).

El objetivo de este apartado es presentar un esbozo histórico de la llegada de las mujeres a la esfera pública bajo el siguiente orden, en primer lugar, la gestación de los movimientos sociales y la aparición de las primera teorías que cuestionan los discursos que fundamentan la división de la esfera pública y la esfera privada con exclusividad para cada uno de los sexos. Después, se aborda el primer movimiento emblemático de la lucha de las mujeres conocidas como “sufragismo”, gestadas principalmente en los Estados Unidos e Inglaterra, cuya demanda -el derecho al voto- se extendió por todo el mundo por más de cien años. Posteriormente se realiza un recorrido por el feminismo, movimiento de mujeres con cuyo nombre se designan posiciones epistemológicas, ideológicas y políticas que reivindican el

acceso a los derechos igualitarios con los varones. (Amorós, 2014; Gamba, 2007:144)¹⁹. Por último, se describe la forma en que las mujeres de México comienzan a conformar un movimiento que se enmarca en las consignas internacionales para votar y ser votadas.

Después de explorar la forma en cómo van emergiendo las mujeres, el **Capítulo IV**, Evolución del derecho internacional de los derechos humanos, cuotas electorales y representación, expone cuatro aspectos en torno a las cuotas electorales, instrumento utilizado por el movimiento organizado de mujeres para sortear las barreras culturales, estructurales e institucionales, que les impide alcanzar el poder.

Primero se expone el desarrollo conceptual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) que dio vida a las acciones afirmativas. Después, se explica qué son las cuotas electorales y los factores que provocan su eficacia, el tipo de cuotas, el sistema electoral y las medidas de apremio. Tercero, se describe el desarrollo jurídico de la integración de las cuotas electorales en México a partir de las reformas emprendidas en 1993 -año en que tanto un partido político de izquierda como la ley electoral las integraron-, hasta llegar al marco legal del año 2007 en el que las mujeres lograron un marco jurídico más progresista en materia de igualdad política.

Por último, el **Capítulo V**, Efectos del movimiento de mujeres y las cuotas en México 2012, tiene por objetivo mostrar el entonces marco institucional²⁰ vigente y la aparición del movimiento denominado Red de Mujeres en plural. Se explica quiénes fueron las protagonistas y los actores hacia el proceso electoral del 2012. Se expone la estrategia que emprendió la Red para lograr que las cuotas se aplicaran bajo un criterio amplio y favorable

¹⁹ El feminismo es teoría y práctica, pues pugna por un cambio en las relaciones sociales que conduzcan a la liberación de la mujer a través de la eliminación de las jerarquías y las desigualdades entre los sexos; es además, un sistema de ideas que a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes, pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y la opresión sexual mediante una acción movilizadora. Su objetivo es, entonces, crear sociedades no jerárquicas y solidarias, aumentar el poder de las mujeres en el ámbito económico, social y cultural, y sobre la propia corporalidad (Gamba, 2007: 145).

²⁰ De acuerdo a la Enciclopedia de la Red de Conocimientos Electorales el Marco Institucional es el contexto institucional para las elecciones depositadas en el marco legal y se compone de una número de agencias y organizaciones diferenciadas que le dan estructura al sistema electoral, siendo los principales actores en una elección los siguientes: los responsables de la política y administración de un elección, las agencias de supervisión, los partidos políticos, los grupos que intentan influir en los resultados, la prensa escrita y la agencia responsable del cumplimiento de la ley. Ver, <https://aceproject.org/main/español/ei/eid>. Consultado, diciembre 2015.

a las aspirantes a candidaturas. Dicha estrategia se obtuvo a través de un litigio en el Tribunal Electoral (TEPJF) y bajo el marco interpretativo de la CEDAW.

A partir de estas descripciones, se busca exponer, explicar y establecer relaciones causales del incremento de la representación parlamentaria, así como extraer aprendizajes de la lucha de las mujeres en México por alcanzar una masa crítica en el Parlamento, lo que significa participar del mundo del poder político.

Por último, las conclusiones permitirán una mejor comprensión de las estrategias que llevarán a romper el techo de cristal en materia de representación descriptiva de las mujeres y lograr la representación en otros ámbitos del poder nacional.

Actualmente, la representación política de las mujeres no es más una excepción, empero, aún está muy lejos de ser la regla, especialmente para mujeres de raza indígena, de raza negra o inmigrantes.

En las últimas dos décadas se ha incrementado la presencia de las mujeres en los espacios de poder, sin embargo, siguen existiendo obstáculos. Algunas barreras son más visibles y difíciles de sortear que otras. Cuanto más se avanza, más difícil es dar los siguientes pasos, siempre estará latente la posibilidad de un retroceso.



Fotografía 2

Fotografía oficial del encuentro “Mujeres y Poder que reunió a 61 mujeres líderes a 20 años de la Conferencia de Beijing.

*“Cuando una mujer entra a la política,
la mujer cambia, cuando muchas mujeres entran
en política, cambia la política”.*

Michelle Bachelet.

Directora Ejecutiva de ONU

Mujeres 2010-2015

CAPÍTULO I

ESTADO DE LA CUESTION

REPRESENTACION PARLAMENTARIA DE LAS MUJERES

La representación política de las mujeres en los parlamentos es diversa, pero guarda semejanzas y diferencias entre cada país y entre cada región del mundo. ¿En qué Congresos están sentadas más mujeres en una curul? ¿Cuáles son los factores que impactan la representación? A esta interrogante, se suman otras dos preguntas: ¿qué actores sociales influyen en el proceso de la representación de las mujeres? ¿Cómo interactúan los factores y actores en diferentes regiones del mundo?

Para responder a ello, el primer capítulo se inicia con una descripción del estado del arte que guarda la representación, con base en la clasificación mundial de la Unión Interparlamentaria ²¹ (UIP). Después se desarrollan cuatro apartados, primero, una descripción de los factores estructurales, culturales e institucionales que impactan en la representación parlamentaria. Segundo, se describen los actores/as que participan en dicho proceso de manera relevante, como son los partidos políticos y el movimiento de mujeres. Tercero, se expone de forma general cómo se correlacionan y ponen en juegos los factores que impactan en la representación en tres regiones del mundo Europa, Medio Oriente y Norte de África, y Latinoamérica. Por último, se describen aspectos de los factores estructurales, culturales e institucionales bajo los cuales se alcanzó una masa crítica en el Parlamento de México.

Al año 2016, las mujeres están presentes en apenas el 22.70% de los escaños en el mundo, mientras que en una tercera parte de los países, la representación femenina en el Poder Legislativo nacional no alcanza el 10%. La base de datos *Quotaproject*, elaborado por la Unión Interparlamentaria (UIP), el Banco Mundial y la Universidad de Estocolmo, detalla que las mujeres constituyen el 21.3% de las cámaras de todo el mundo. Comparativamente,

²¹ La Unión Interparlamentaria es una organización internacional de los parlamentos en el mundo creada en 1889²¹. Las fuentes consultadas para conocer los datos cuantitativos son las bases de datos electrónicas de la Unión Interparlamentaria, IDEA Internacional y QuotaProject, principalmente. La base de datos está disponible en: www.quotaproject.org.

en los años 70 la representación de mujeres apenas llegaba a un 4%²²; en los noventa las mujeres alcanzaban un promedio mundial de un 11.3%, lo que significa que en dos décadas solo se avanzó un diez por ciento.

Las naciones que ocupan los primeros diez sitios en representación femenina son Ruanda, Bolivia, Cuba, Suecia, la República de Seychelles, Senegal, México, Sudáfrica, Ecuador y Finlandia, en bloque los países nórdicos encabezan el *ranking* mundial, aunque Ruanda sustituyó a Suecia en el primer sitio con un total 56% de legisladoras. En cuanto a regiones, las zonas con menor número de assembleístas son los Estados Árabes junto con el Pacífico, con un 15.9% de congresistas. A diferencia de las regiones, los países que tienen muy pocas representantes son Micronesia, Omán, Yemen y Catar²³.

Para tener una visión general, se anexa la clasificación mundial por región donde se aprecian las variaciones de la representación descriptiva de las mujeres. Es necesario señalar que existen brechas entre las diversas zonas del planeta y, sobre todo, entre los países que integran las regiones²⁴. Por ejemplo, en América Latina hay países como Ecuador con altos niveles de participación alcanzando un 40%, y naciones como Brasil, que apenas alcanza un 9 % de parlamentarias al año 2015.

Tabla 3
Promedio mundial de mujeres diputadas y senadoras 2016

	Cámara Individual Cámara Baja	Senado Cámara Alta	Ambas Cámaras Combinadas.
Países nórdicos	41.1 %	-----	-----
Américas	27.7%	26.5%	26.9%
Europa. Incluyendo países nórdicos	25.8%	24.2%	25.4%
Europa. Excluyendo países nórdicos	24.3%	24.2%	24.2%
África Subsahariana	22.2%	20.2%	21.9%
Estados Árabes	19.0%	8.9%	17.1%
Asia	18.4%	13.4%	18.5%
Pacífico	13.5%	36.0%	15.7%

Fuente: Unión Interparlamentaria, en www.ipu.org

²² Cf. Kenworthy y Malami, 1999). *Gender Inequality in Political Representation: A Worldwide Comparative Analysis*. *Social Forces* 78: 235-268. 2009 p. 262

²³ Datos de la Unión Interparlamentaria, disponible en <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>, consultado el 21 de julio del 2016.

²⁴ Ibidem.

1.1 Factores para el análisis de la representación

En los últimos 25 años, se han producido desde la Ciencia Política, la Sociológica u otras disciplinas, abundantes investigaciones sobre la representación política de las mujeres en los parlamentos, estudios de corte cualitativo y cuantitativo que analizan países en particular o comparan zonas del mundo. La literatura sugiere una variedad de factores, que contribuyen a elevar la representación política de las mujeres o a crear las barreras que impiden alcanzar el poder.

Es posible agrupar los factores en tres dimensiones: culturales, institucionales y estructurales (Del Campo, 2005; Ríos, 2008; Tremblay, 2007; Hughes & Paxton, 2007)²⁵. En cada grupo se consideran los aspectos **culturales**, los valores y la actitud hacia las mujeres, la religión, la división de la esfera pública y la privada, el patriarcado y los medios de comunicación. Dentro de los factores **estructurales o socioeconómicos** se encuentra el nivel de desarrollo, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y la educación. Y factores **institucionales**: el sistema electoral, las cuotas electorales, el método de selección de los partidos políticos, así como el grado de democracia de un país o el año de obtención del sufragio.

Las investigaciones distinguen con frecuencia los factores relacionados con la oferta o con la demanda; los de la **oferta** (*supply*) son aquellos que aumentan el número de mujeres con la voluntad y la experiencia de competir contra los hombres por los cargos políticos; los factores de la **demand** (*demand*) son característicos de los países, los sistemas electorales o partidos políticos que hacen más probable que las mujeres sean presentadas como candidatas. Aunque esta división no es inflexible, se puede considerar que los aspectos culturales y estructurales son creadores de la oferta, mientras el sistema político lo es de la demanda, aunque en realidad, esta división no es tan simple, existen factores que interactúan y se combinan para constituir las oportunidades de las mujeres (Paxton & Hughes 2008:101).

²⁵ Marcela Ríos (2008) explica que las investigaciones realizadas han mostrado la existencia de múltiples factores que impiden una competencia equilibrada de género en el plano político, afectando negativamente la representación política de las mujeres. Las explicaciones más exploradas por la literatura pueden ser agrupadas en tres dimensiones: las estructurales, las culturales o ideológicas y las político institucionales (p.14).

Para comprender mejor lo anterior Norris (1993) y después Matland (2002), explican que para alcanzar la representación las mujeres requieren superar tres etapas: estar convencida de postularse como candidata, que el partido la seleccione como candidata y que los votantes la elija²⁶.

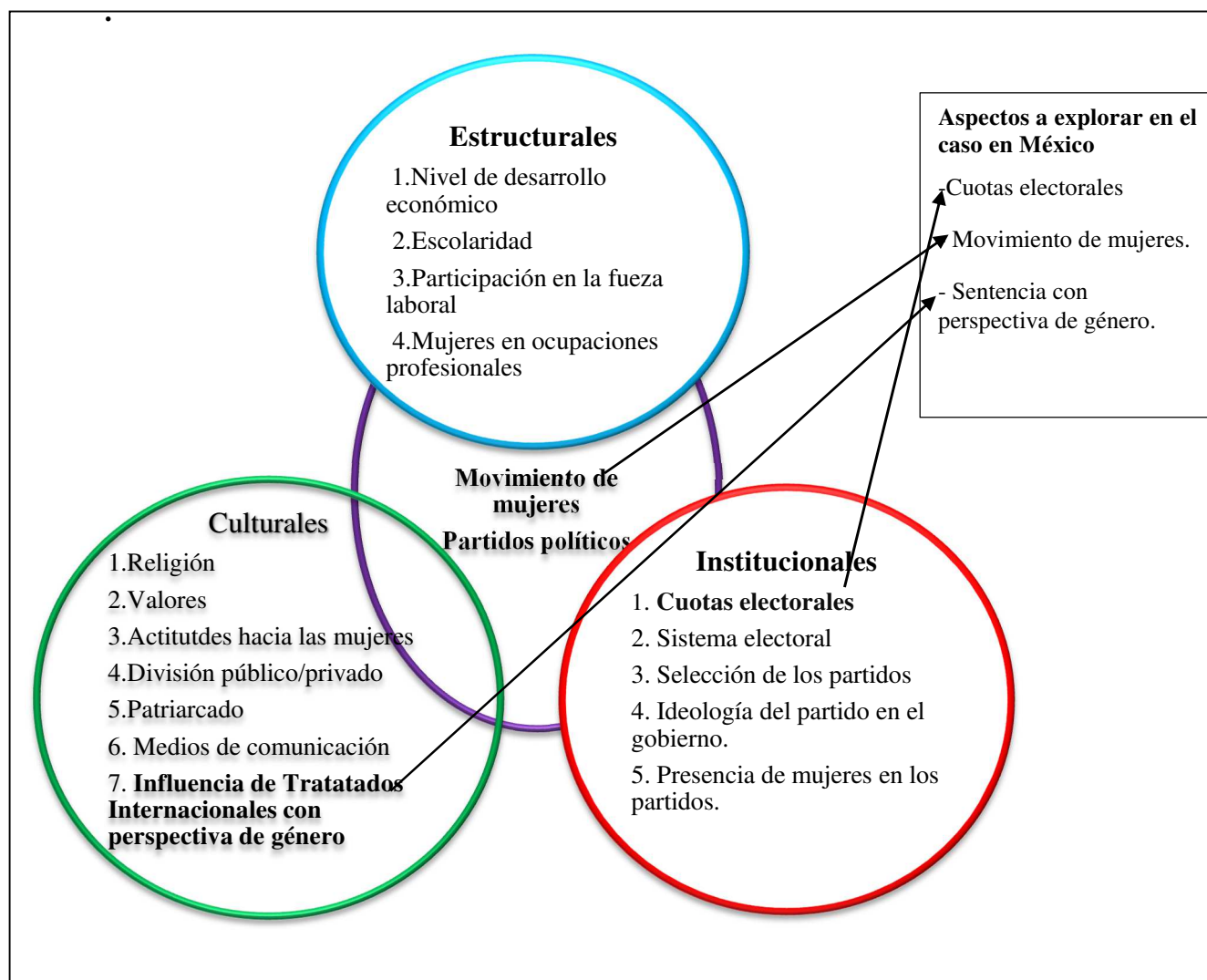
Alcanzar una candidatura varía en cada país de acuerdo con las estructuras partidistas y los reglamentos y normas de los partidos, aunados al sistema social y político.

Para esquematizar las diversas perspectivas desde las cuales se han realizado los estudios sobre la representación parlamentaria, se presenta la siguiente gráfica, que incluye algunos de los aspectos considerados en los estudios de corte cuantitativo y cualitativo:

²⁶ Paxton and Hughes (2008) apuntan que como las mujeres pasan por esas barreras se mueven de simplemente ser elegible para postularse para una oficina (elegibles) para aspirar a ocupar un cargo político (aspirantes) para ser seleccionado por una parte en postularse para un cargo (candidatos) para finalmente ser elegido por los votantes (legisladoras) (p.102).

Tabla 4

Factores y actores/as para el análisis de la representación parlamentaria



Fuente: Elaboración propia

1.1.1 Factores estructurales

La literatura sobre las variables de los aspectos estructurales incluye, el nivel de desarrollo económico, la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y la ocupación en los espacios profesionales, así como el grado de escolaridad (Inglehart & Norris, 2003; Kenworthy & Malami 1999; Paxton, 1997). En algunos casos, el análisis del desarrollo económico se realiza con base en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) integrado por las variables de esperanza de vida al nacer, la educación y el PIB per Cápita²⁷.

Desde la perspectiva de la oferta y la demanda, los factores estructurales inciden en la posibilidad de que las mujeres puedan aspirar a ser candidatas, formando parte de la oferta que presentan los partidos al electorado (Inglehart & Norris, 2003)²⁸.

Los estudios de Anderson (1975), demostraron que el desarrollo económico y la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres eran relevantes para explicar los niveles de representación política en los países occidentales, mientras que otros análisis, muestran que existe una relación causal entre el tipo de ocupaciones que desempeñan las mujeres (Kenworthy & Malami 1999) y el nivel educativo (Paxton & Hughes 2008; Inglehart & Norris, 2003).

En general, las condiciones socioeconómicas de las mujeres son más precarias que las de los hombres, aunado a que deben enfrentar una doble o triple jornada de trabajo. Se reduce la posibilidad de postularse como candidatas dentro de los partidos políticos (Lovendusky & Norris 1995), y como señalan Méndez & Ballington (2002), los “factores como la pobreza, el desempleo y la carga dual que implica equilibrar sus labores domésticas con sus deberes profesionales continúan repercutiendo en la participación política de las mujeres” (p.266).

²⁷ La Índice se construye con las siguientes indicadores: esperanza de vida al nacer -promedio de edad de las personas fallecidas al nacer-, la educación -nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzado en primaria, secundaria, estudios superiores- y el PIB per Cápita -considera el producto interno bruto per cápita y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de vida decente-. El IDH es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo y conocer tanto los ingresos económicos de las personas en un país, como evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollarse. Ver, El Índice de Desarrollo Humano. Disponible en: <http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh> Consultado el 20 de julio, 2015

²⁸ Esto se explica a mayor detalle en el Capítulo IV. Cuotas Electorales y Representación.

En la mayoría de las naciones, las mujeres tienen a su cargo una parte desproporcionada de quehaceres en el hogar. Su participación política también se ve restringida por factores como falta de recursos económicos o nivel de escolaridad. Es decir, la ausencia de sistemas bien desarrollados de educación y capacitación para el liderazgo femenino, en general, y para orientar a las jóvenes hacia la vida política, en particular, constituyen una importante barrera (Schvedova, 2002:75). En general las mujeres no desarrollan las habilidades necesarias para competir frente a sus pares hombres dentro de los partidos políticos, desde aspectos tan simples como el lenguaje (Lagarde, 1996) hasta la obtención de financiamiento para sus campañas (Hinojosa, 2012).

Para sortear dichas barreras, se ha encontrado que la integración de las mujeres en el ámbito laboral genera mayor participación de la esfera pública, muestra de que, a mayores ingresos, más se incrementa su presencia en los parlamentos (Togeby, 1994). Shvedova (et.al) apunta que “las condiciones socioeconómicas desempeñan un papel significativo en relación a la participación femenina en el Parlamento, tanto en las democracias consolidadas como en las incipientes” (p.72). En el mismo sentido, Andrew Reynolds (1999) demostró que los niveles de desarrollo socioeconómico son significativamente proporcionales a las mujeres en el Parlamento²⁹.

Desde esta perspectiva, el incremento de las condiciones socioeconómicas podría generar una ampliación de la presencia de las mujeres en el Parlamento. Cuantas más mujeres sean parte del ámbito profesional, de espacios administrativos y de puestos directivos, más probabilidades tendrán para emprender carreras políticas en las democracias de países postindustriales. Las áreas profesionales como el derecho o el periodismo, ofrecen

²⁹ El artículo presenta los resultados de una encuesta de las mujeres en las legislaturas y ejecutivos de todo el mundo, levantada en 1998. Las hipótesis sobre los factores que impactaban el acceso de las mujeres a la representación política se probaron mediante modelos de regresión multivariante. Los modelos de regresión yuxtaponen variables institucionales, políticas, culturales y socioeconómicas con las siguientes variables dependientes: 1) el porcentaje de parlamentarios que son mujeres y 2) el porcentaje de los ministros del gabinete que son mujeres. Se concluyó que el desarrollo socioeconómico de las mujeres en la sociedad tiene un efecto sobre el número de mujeres en el parlamento, pero no en el gabinete. El multipartidismo se correlaciona con el porcentaje de mujeres en el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Además, ciertos sistemas electorales son más amigables que otros para las mujeres. La naturaleza ideológica del sistema de partidos afecta al número de mujeres en el gabinete. Y por último, la religión dominante del Estado, también se relaciona estadísticamente con el número de mujeres que van a llegar a un alto cargo político. Sin embargo, otras hipótesis se probaron: el grado de la democracia no explica el porcentaje de mujeres en la legislatura o el gabinete, ni es la dicotomía entre un sistema presidencial o parlamentario”. Reynolds, Andrew, “*Women in the legislatures and executives of world: Knocking at the highest glass ceiling*”, World Politics, 51: 547-572, julio, 1999.

flexibilidad de recursos, experiencias y relaciones que, con el tiempo, permite a las mujeres contender por un cargo de representación. El grado de desarrollo de un país, provoca el paso de los valores tradicionales a otros denominados de expresión personal o seculares, lo que a su vez genera una baja en la natalidad y un mayor ingreso de mujeres en la fuerza laboral remunerada (Inglehart & Norris, 2003).

Los autores Kenworthy y Malami (1999) encontraron que cuando las mujeres participan de trabajos profesionales, existe mayor representación política, aspecto que varía mucho alrededor del mundo. Por ejemplo, en los países de Europa y Norte de América, en promedio, la mitad de mujeres trabajan como profesionistas, a diferencia de los países de Medio Oriente y África donde solo una cuarta parte de mujeres se suman al trabajo profesional y donde muchas se desempeñan en el sector informal (p.257).

Respecto a la variable educativa, Matland (1998) analizó la relación entre los índices de alfabetización masculino y femenino, la relación con la tasa de participación en el mercado laboral y la relación de mujeres con educación universitaria, bajo la hipótesis de que entre más cercana estuviera dicha relación, las mujeres podrían ser vistas en el mismo nivel que los hombres; gracias ello pudo concluir que en dicha relación se guarda una correlación con los niveles de representación.

Sin embargo, algunos estudios coinciden en que los factores estructurales no necesariamente explican los porcentajes de representación en un Parlamento (Inglehart & Norris 2003:131), dado que mientras algunas correlaciones, variables y demostraciones de los efectos económicos son más claros, no ocurre lo mismo en todas las naciones. En esto intervienen otras dos situaciones: el nivel de consolidación de la democracia en un país o el nivel de industrialización (Kenworthy & Malami, 1999; Matland, 1998; Vitemam, Fallon & Beckfied, 2008).

Por ejemplo, Matland (1998) advierte que los modelos de estudios sobre representación política en democracias consolidadas, han tenido aciertos considerables a la hora de explicar las causas de las variaciones, sin embargo, no ocurre lo mismo al utilizarlos para explicar países en vías de desarrollo. (p.119).

En el relevante ensayo, *Gender Inequality in Political Representation*, de Kenworthy & Malami (2009)³⁰, se describe que, contrario a las expectativas, las variables estructurales y algunas culturales son débiles. Dado que el nivel de instrucción, la fuerza de trabajo femenina, el número de organizaciones políticas de mujeres y la riqueza económica nacional, no están relacionados con la proporción de escaños legislativos de las mujeres (p.21). Sin embargo, se sugiere que la participación laboral de las mujeres influye en el éxito electoral.

En un estudio posterior que retoma el modelo de análisis de Kenworthy & Malami (2009), Viternam Fallon y Beckfied (2008) describen que en sí mismo, el desarrollo económico no promueve ganancias en la representación legislativa. Los países ricos frente a los países pobres suelen tener peores registros de elección de mujeres, aunado a que los modelos actuales que describen la variación, ofrecen relaciones causales precisas sobre las naciones ricas, no así de las menos industrializadas³¹. Por ende, los autores sugieren varias direcciones para la construcción de nuevos modelos teóricos. Entre ellos, agregar el tiempo y las circunstancias de los procesos de democratización de los países como un efecto de la representación política en países en desarrollo.

Por otro lado, la influencia de los factores socioeconómicos resulta ser muy inestable en la medida en que a menudo es aplastada bajo el peso de otras variables. En ese mismo sentido, las investigaciones indican que los factores socioeconómicos desempeñan un papel menos significativo que los factores institucionales, como son: el tipo de sistema electoral o el método de selección de los partidos políticos, y que no existen pruebas concluyentes sobre

³⁰ El modelo de Kenworthy y Malami (1999) analiza 146 naciones e incluye las siguientes variables: a) Políticas: sistema electoral, fecha del sufragio femenino, ideología del partido en el gobierno, democracia, régimen marxista-leninista (Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam). b) Estructurales: participación en la fuerza de trabajo de las mujeres, grado de escolaridad de las mujeres, ocupaciones laborales de las mujeres, nivel de desarrollo económico del país y fuerza del movimiento de mujeres (con base al número de organizaciones). c) **Culturales:** la religión, la ratificación de la Convención Belém do Pará, el derecho al aborto, y la región (clasificación de países en África Sub-Sahariana, Asia y el Pacífico, Latinoamérica, Europa del Este y países escandinavos), p. 248-249.

³¹ Viternam Fallon y Beckfied (2008) agregan que los modelos existentes hacen un muy mal trabajo de identificación de los factores que promueven la representación política de las mujeres en las naciones menos desarrolladas. Solo el efecto de un sistema electoral de representación proporcional sigue siendo significativa a través un análisis separado de las naciones acorde a su economía.

Además, si los modelos actuales realmente dicen poco acerca de los factores que promueven la representación legislativa en las naciones en vías de desarrollo, entonces se necesitan nuevos modelos teóricos que descubrir y examinar otras variables podrían ser. “¿Por qué las naciones pobres como Guyana y Mozambique tienen algunos de los más altos niveles de representación femenina en el mundo, mientras que otras naciones pobres como Papúa Nueva Guinea y Haití tienen algunos de los más bajos?” (p.472-473).

la relación entre el nivel socioeconómico y la representación política de las mujeres (Tripp & Kang 2008:357).

Al observarse la clasificación mundial de mujeres en el Parlamento, se ve reflejado que el nivel de desarrollo de un país no está vinculado necesariamente con el nivel de representación legislativa. Por ejemplo, ciertas naciones postindustriales se encuentran en una posición medio o baja de representación entre las 140 naciones evaluadas, como es el caso de Estados Unidos (19.4%) y Japón (9.5%), que se ubican en las posiciones 72 y 116, respectivamente.

1.1.2 Factores Culturales

Los estudios respecto a los factores culturales que impactan en la igualdad de género y de representación integran varios aspectos, los valores culturales, los estereotipos de género o la forma en que una sociedad percibe a las mujeres, y la religión (Inglehart and Norris, 2005; Paxton and Hughes 2007, Moghadan, 2005). Algunos estudios de corte social abordan la división que se ha realizado sobre la esfera pública y sobre la esfera privada (Pateman 1996; Valcárcel 1997) o el papel de los medios de comunicación (Norris, 1997; Llanos, 2011).

Los aspectos culturales influyen en la decisión de las mujeres para postularse como candidatas, es decir, en la oferta. Si las tradiciones sugieren que la mujer es emocional y mentalmente incapaz de participar, o su rol es quedarse en casa, es difícil que tenga la ambición o el convencimiento para contender por una candidatura (Paxton and Hughes: 2008:102), primer requisito que describe Matland (2002) para que una mujer se convierta en legisladora.

Otros estudios en torno a la representación política de las mujeres son de corte cuantitativo. Por ejemplo, los realizados por Viterna, Fallon and Beckfield (2008), Inglehart and Norris (2005), y Kenworthy, Lane & Malami (1999). Desde una perspectiva internacional comparada, analizan variables como los estereotipos de género, la religión o el derecho al aborto. Otros análisis, abordan el tema desde la sociología, algunos estudios de caso o análisis regionales que muestran cómo opera en una sociedad el patriarcado o la división sexual del trabajo (Serret 2012; García 2008, Moghadam, 2011).

Algunas de las investigaciones se basan en información de la Encuesta Mundial de Valores (*World Value Survey*), de Eurobarómetro (Norris, 2007), de Latinobarómetro o encuestas nacionales que muestran las actitudes hacia las mujeres y su liderazgo. En América Latina, los resultados de algunos sondeos sugieren que las percepciones de la ciudadanía, podrían ser un obstáculo cada vez menor para que las mujeres alcancen el poder político, ya que la población se muestra dispuesta a votar por ellas y se les considera mejores que los hombres para resolver una amplia gama de problemas.

Sin embargo, aunque se aprecia que a pesar de una evolución positiva en las percepciones de la ciudadanía hacia las mujeres, “continúan siendo elegidas en cifras inferiores a los hombres” (Méndez Montalvo & Ballington 2002:266), lo que también sucede en sociedades como la estadounidense, lo cual permite interpretar que las barreras no se encuentran en el electorado, sino en los partidos y estructuras institucionales (Htun, 2002: 26).

Los investigadores Inglehart y Norris (2003) describen que los valores y las actitudes hacia las mujeres juegan un rol crucial para alcanzar la igualdad de género, que a su vez impacta en la representación política³². Apoyados en los datos arrojados en la Encuesta Mundial y la Encuesta Europea de Valores (*European Values Survey*).³³ ambos autores comparan las actitudes hacia la igualdad de género en setenta naciones; sociedades que dividen en postindustriales, industriales y agrarias³⁴.

Las encuestas sobre valores están constituidas por cinco preguntas que permiten medir el grado de conformidad con la igualdad, siendo una de ellas la siguiente: ¿considera más

³² Inglehart y Norris (2003), en el estudio *Rising Tide, Gender Equality and Cultural Change*, revelan cómo la modernización ha cambiado las actitudes culturales hacia la igualdad de género y analizan las consecuencias políticas. Las autoras analizan algo que no es muy claro, cuánto importa la cultura de una sociedad frente a cuestiones como el desarrollo y las instituciones legales, y cómo es que estos aspectos interactúan en el camino hacia la igualdad de género y la hacia la representación. En sus conclusiones, sostienen que la igualdad de género en una sociedad está más determinada, por los valores culturales que por el grado de desarrollo económico. Sólo otro factor alcanza la misma importancia: el grado en que la sociedad invierte en el Estado de bienestar.

³³ El estudio analiza las encuestas valoran 1995-2001, misma que explora los valores y opiniones de la gente, cómo cambian con el tiempo y su impacto social.

³⁴ Para esta clasificación se utiliza el Índice de Desarrollo Humano de 1998. Los países postindustriales constituyen el bloque de los 20 países más influyentes alrededor del mundo, con un índice de desarrollo de .900 y un Producto Interno Bruto per cápita de \$29,585 dólares. Las sociedades industriales son consideradas 56 naciones con un nivel de desarrollo humano moderado, del .740 a .899, y un Producto Interno Bruto per cápita de \$6,314 dólares. Por último, las sociedades agrarias son 97 naciones con un nivel de desarrollo bajo, .739 o menor, y un ingreso per cápita de \$1098, dólares. Inglehart y Norris, *Rising Tide...* Cambridge University Press, New York, USA, 2003, p.21.

capacitados a los hombres que a las mujeres para erigirse como líderes políticos? La respuesta a esta pregunta ofrece una variedad de perspectivas en todo el mundo. En sociedades responden que los hombres son mejores líderes que las mujeres (Inglehart, 2003)³⁵. La evidencia presentada revela que hay diferencias sustanciales en las actitudes igualitarias hacia los liderazgos de las mujeres acorde al nivel de desarrollo de cada país y que, “en particular, las actitudes tradicionales hacia la igualdad de género siguen siendo un obstáculo importante para la elección de mujeres al Parlamento” (p.162.)³⁶.

Entre los argumentos vertidos, se expresa que en las sociedades donde prevalecen valores sociales tradicionales, las mujeres no participan de la esfera pública por la creencia de que su labor se reduce a la esfera privada, aun cuando existe evidencia de que los valores están cambiando acorde al nivel de desarrollo de una sociedad. La industrialización parece estar relacionada con el cambio de valores tradicionales a otro tipo que se denominan seculares-racionales o valores de expresión personal (*self expression values*) (Inglehart, 2005)³⁷.

En efecto, los cambios culturales no son suficientes por sí mismos para alcanzar la igualdad de género (una limitación no siempre reconocida por los movimientos de los años 60), los cambios culturales son una condición necesaria para alcanzar la igualdad de género: las mujeres tienen que cambiar primero antes de aspirar a cambiar la sociedad.

Las actitudes tradicionales hacia la igualdad de género permanecen como el mayor obstáculo en la elección de mujeres al Parlamento. La cultura sigue reflejando una influencia significativa en la proporción de mujeres electas en las oficinas, inclusive aquellas

³⁵ Las otras preguntas son: ¿cuándo los empleos son escasos, los hombres deben tener más derecho al trabajo que las mujeres?; ¿la educación universitaria es más importante para un niño que para una niña?; ¿crees que una mujer debe tener niños para estar completa (*to be fulfilled*) o no es necesario? Por último, si una mujer quiere tener un hijo como persona soltera pero no desea tener una relación estable con un hombre, ¿lo apruebas o desapruebas? (Inglehart y Norris 2005:32).

³⁶ Los investigadores sociales muestran que intentar modificar actitudes profundamente arraigadas hacia los roles sexuales en la vida pública puede resultar difícil en el corto plazo, pero a largo plazo, las tendencias seculares de cambio de valores asociado con el proceso de modernización, especialmente entre las generaciones más jóvenes de mujeres y hombres, por lo que es probable que facilite la entrada de más mujeres en posiciones de poder en las naciones industrializadas (Inglehart y Norris, 2005, p.162). La modernización está vinculada al desarrollo económico y trae sistemática y predictiblemente cambios en los roles de género. Por ejemplo, provoca que las mujeres ingresen al mercado de trabajo y se reducen las tasas de fertilidad considerablemente.

³⁷ Inglehart y Norris explican que los patrones de desarrollo humano y la modernización de la sociedad sustentan los cambios de actitud. La orientación general de cambio de valor es predecible, aunque el ritmo es condicionado en por legado cultural y la estructura institucional de una sociedad determinada, como se ejemplifica en la herencia islámica, el comunismo en la Europa central, y el igualitarismo en los países escandinavos. Op.cit. p. 10.

controladas por las instituciones sociales y políticas (Inglehart & Norris:162). La concepción que se tiene sobre igualdad entre hombres y mujeres, es una de las variables que más influye en la proporción de mujeres en el Parlamento (Paxton & Kunovich 2003).

- Religión

Otra característica de los valores culturales, es que descansan sobre creencias religiosas que influyen en los roles de género. La religión importa no solo en las actitudes culturales, sino también en las limitaciones y oportunidades de las mujeres, representa una dimensión muy importante relacionada con otros elementos que no serían evidentes por sí mismos (Inglehart 2005:26).

Las creencias religiosas constituyen un factor de vital relevancia para la mayoría de la población mundial e impactan en la representación política de las mujeres. Entre otras razones, porque la religión es un importante recurso del mensaje cultural en la mayoría de los países, es decir, “cuando el mensaje es usado para justificar el poder masculino, el mensaje ideológico es particularmente poderoso porque hace que la subordinación de la mujer sea divinamente aprobada” (Paxton & Hughes 2007:109).

Los estudios estadísticos demuestran el impacto de la religión, en los países con creencias musulmanas y católicas, los niveles de representación femenina en el Parlamento son más bajos que en los países protestantes (Paxton & Hughes 2007)³⁸. Así, la doctrina religiosa o su práctica, puede ser un argumento para excluir a las mujeres del poder político, dado que su estatus de inferioridad es voluntad de Dios³⁹.

Cabe señalar, que el nivel de secularización de una sociedad influirá para que las mujeres participen de la política, el resultado del análisis comparado confirma que la religión importa, no sólo en las actitudes culturales, sino también en las oportunidades y las restricciones de la vida de las mujeres (Inglehart & Norris 2003)⁴⁰. Se ha demostrado que la

³⁸ Las investigaciones han comparado el porcentaje de mujeres a través de los diferentes países con las religiones dominantes. Los estudios a que hace referencia son: “Paxton and Sheri Kunovich.2003. *Women´s Political Representation: the importance of the Ideology*”, *Social Forces* 81, 87-114: y Reynolds, Andrew, “*Women in the legislatures and executives of world: Knocking at the highest glass ceiling*”, *World Politics*, 51: 547-572, julio, 1999.

³⁹Un ejemplo para oponerse en la participación política de las mujeres se presenta en Arabia Saudita donde el *Sharia*, la ley islámica o código de conducta, prohíben a la mujer ejercer el derecho al sufragio, lo cual, hasta el año 2015 será permitido

⁴⁰ Las investigadoras comparan el impacto de las religiones y el desarrollo de la sociedad en la división antes

religiosidad, se afana en mantener una fuerte influencia en las normas sociales en torno a lo que es apropiado o no, para la mujeres, así como la división de los roles sexuales, sobre todo en las sociedades agrarias. Las actitudes hacia las mujeres varían entre las diferentes religiones, en particular, la herencia de la religión islámica es una de las barreras más poderosas para alcanzar la igualdad de género⁴¹.

Como ejemplo, Lee & Clark (2000) encuentran que en algunos países de Asia, la religión es un aspecto nodal para comprender los bajos niveles de representación. Creencias Budistas (Tailandia) y Confusionistas (Japón), con sus dogmas y textos, determinan la vida de las mujeres y su rol de subordinación. Lo mismo sucede en algunos países del Medio Oriente y Norte de África (MEDA) donde una rígida interpretación del Corán ha constituido una barrera sólida para que las mujeres no participen en la esfera pública, aunque poco a poco las brechas de desigualdad en aspectos como la educación y el ingreso económico de las mujeres, se van reduciendo (Moghadam 2011). En Arabia Saudita, donde el *Sharia*, la ley islámica o código de conducta han prohibido a la mujer ejercer el derecho al sufragio, lo cual será permitido hasta el año 2015.

En la región denominada MEDA, se puede observar cómo interactúan la religión, la actitud hacia las mujeres y la división de la esfera pública y privada, ya que la doctrina religiosa y el tribalismo dictan las normas patriarcales y las estructuras familiares, reflejando las nociones de discriminación de género y su reforzamiento. El estatus de las mujeres en el dominio público es definido por el Estado y sus leyes son espejo de la forma en que son construidas las relaciones en el dominio privado, especialmente con el marido o la familia. A lo anterior se suma la percepción de los hombres hacia las mujeres y de ellas mismas lo que disminuye sus aspiraciones políticas (Moghadam 2007: 2011).

Así, las normas de género conservadoras de la religión y el marco jurídico e institucional, sustentadas en esas creencias, permiten una lectura que explica el rompecabezas de los bajos

mencionada: países post industriales, industriales y agrarios. Las religiones que consideran son: romana católica, musulmana, protestante, ortodoxa, budista, hinduista, judía y otra.

⁴¹ Además, la investigación *Gender Equality and Cultural Change (2003)* al mismo tiempo prueba que: a) un proceso gradual de secularización ha ido acompañando la modernización de la sociedad, debilitando la fuerza de los valores religiosos, sobre todo en las generaciones más jóvenes de las sociedades post industriales; b) en las sociedades postindustriales se ha experimentado una liberalización de los valores morales en relación a la sexualidad. Cfr, *Abriendo las puertas, igualdad de género y desarrollo en la región del Medio Oriente y Norte de África Opening door: gender equality and development in the Middle East and North Africa*, 2013, p.12 Valentina Moghadam (2011).

niveles de la participación política femenina, como se verá con mayor detalle en el apartado sobre el Estado de la Cuestión⁴².

- División de la esfera pública y privada.

Aunado de la religión, el discursos sobre la división sexual del trabajo, visibiliza a la esfera pública como un espacio para los hombres y a la esfera privada, como un espacio de exclusividad para las mujeres, siguen presentando una carga real y simbólica en el rol de las mujeres y en su exclusión del ámbito político. Esta idea se detallada en el Capítulo III. Movimiento de mujeres por la representación.

Esa división ha sido sostenida en algunas religiones (Paxton & Hughes, 2007; Inglehart, 2005) y se reforzó desde las teorías filosóficas desde el siglo XVII (Amorós, 1997; García, 2008, Pateman 1996; Serret, 212)⁴³. Algunos de los valores que prevalecen en las sociedades descansan sobre esta idea: rígidos roles de género determinan el comportamiento permitido para hombres y para mujeres; de manera especial, fijan las responsabilidades de las mujeres en la esfera privada, el hogar, lo cual es asociado a características biológicas y reproductivas, donde además se encuentran socialmente asignados los roles, los recursos y los poderes que se distribuyen para cada sexo (Inglehart and Norris, 2003).

En la misma línea, como señalan los discursos instaurados en los periodos de Modernidad y después en la Ilustración, autoras como Amelia Valcárcel (1997) y Marcela Lagarde (1996)⁴⁴, afirman que la respuesta a la exclusión de las mujeres del ámbito político se

⁴³ En el Capítulo III, apartado 3.1 Movimientos sociales, Modernidad e Ilustración se detalla sobre esta idea.

⁴⁴ Marce Lagarde, describe que la situación de las mujeres para participar en igualdad con los hombres es desfavorable ya que en su mayoría, las mujeres no poseen los suficientes elementos prácticos, teóricos y simbólicos para acceder a los espacios políticos. Por ejemplo, elementos del lenguaje: las mujeres manejan menos lenguajes que no son los aceptados y no comparten los códigos que son lengua franca de género de los hombres. Si se trata de formas de comportamientos, maneras y usos, las mujeres no las tienen; si se trata de habilidades ideológicas y conocimientos políticos, carecen de ellos porque previamente se les han prohibido tenerlos. En conjunto, las desventajas de género son amplias⁴⁴.

La política se encuentra escindida de la vida cotidiana por lo que es prácticamente inaccesible para las mujeres. Ellas no pueden dedicarse a ella profesionalmente como lo hacen los políticos tradicionales. En este nivel, los deberes domésticos y familiares y el control que ejercen sobre ellas sus familiares y cónyuges, hace que la política esté fuera de su esfera de vida y, cuando participan, lo hacen con enormes costos personales. Lo anterior porque la política es un ámbito de acción que, por su género, ha sido expropiada a las mujeres. La cultura entonces, tiene un papel prioritario en este refuerzo del patriarcado: en cultura se da el mantenimiento de roles, dado que el mosaico cultural heterogéneo mantiene su unidad mediante el sexismo con sus componentes, la misoginia, el machismo y la homofobia, así como el clasismo, el racismo, la xenofobia y, en conjunto, los perjuicios sectarios que conducen a la exclusión del otro, la negación de la diferencia y la legitimación de las formas opresión que los soportan. Las esferas culturales también suelen ser cotos cerrados reproductores tradicionales y de control político. Lagarde, Marcela, *Género y Feminismos*, Horas y Horas, España, 1996

encuentra en la permanencia de una cultura patriarcal, concepto que se detalla en el marco teórico.

En su obra, Valcárcel (1997) reitera que las potencialidades de las mujeres estarán influidas por tres grandes factores consistentes en que vivan o no en una situación rica, que operen en un sistema democrático o autoritario o que las concepciones religiosas del mundo influyan de manera decisiva en la vida pública y en su vida personal. Esto significa que las posibilidades de representación política también estarán permeadas por estos elementos, lo cual permitiría comprender las causas de que en países árabes se sitúen los niveles más bajos de participación política de las mujeres. “Conocemos bien qué problemas operan a nuestro disfavor: las políticas totalitarias, las formas tradicionales de familia, las sociedades profundamente jerárquicas, el predominio conceptual de las concepciones míticas del mundo” (p.24).

En consecuencia, en todas partes del globo, el colectivo completo de las mujeres permanece bajo el poder simbólico y real del colectivo completo de los varones, ya sea por razonamientos naturalistas o por roles culturales que las mantienen al margen de la educación, el ejercicio pleno sobre el propio cuerpo y los procesos de inclusión de la esfera pública.

-Medios de comunicación.

Los medios de comunicación también constituyen una barrera clasificada en el rubro cultural, ya que son hacedores y reproductores de estereotipos de género, propician la permanencia de los roles sexuales y tienen una fuerte influencia en el electorado⁴⁵. A ello se suma, que los medios dan menor cobertura a las mujeres en las campañas, llegan a perpetuar prejuicios y visiones parcializadas del género y apoyan a “sociedades conservadoras que culpan a la mujer de los fracasos de la política familiar y el deterioro social” (Schvedova, 2002:80). Esto se demuestra en el estudio de Beatriz Llanos (2011) sobre la cobertura mediática en las elecciones de Latinoamérica, donde las mujeres recibieron atención menor

⁴⁵ Por ejemplo, en el documental *Miss Representation* de Jeniffer Siebel Newson se muestra la influencia de los medios de comunicación en USA respecto a la cobertura y trato que se da a las mujeres en el ámbito político. Algunos estudios sobre los medios de comunicación y género son: Welch, Susan & Donley T. Studlar. 1986. “British Public Opinion Toward Women in Politics” *Western Political Quarterly*. 39, (1), 138-15; y Norris, Pippa, (edit.) *Women, Media and Politics*”, Oxford University Press, USA, 1997.

y se encontró un espacio y tiempo registrado por debajo de los niveles de candidaturas que estas representan en las listas electorales.

Recapitulando, la relevancia del factor cultural frente al estructural Inglehart & Norris (2003), sostiene que el crecimiento económico y las reformas legales son muy importantes en el largo plazo para la igualdad de género, sin embargo, demuestran que la cultura importa y mucho, debido a que las percepciones sobre el empleo remunerado, la esfera pública y la división sexual del trabajo son formadas de manera predominante en la cultura, lo que implica normas sociales, creencias y valores en una sociedad, que a su vez descansan sobre las tradiciones religiosas (38)⁴⁶.

El análisis comparado de Inglehart & Norris (2003), concluye que las tradiciones culturales son perdurables en la conformación de las visiones del mundo de hombres y mujeres. En lugares donde existen actitudes igualitarias mayores se presenta una sistemática conexión en las condiciones en que se desarrollan, lo cual no es un camino en una sola dirección de casualidad, sino un proceso interactivo. Además, los patrones de desarrollo y modernización de las sociedades sustentan los cambios de actitud. Por lo tanto, la orientación del cambio de valores es predecible, aunque el ritmo es condicionado por el legado cultural y la estructura institucional de una sociedad determinada, como se ejemplifica con una herencia islámica en algunas sociedades, la comunista en la Europa central e igualitaria en los países escandinavos (Inglehart & Norris 2003:10)⁴⁷. La cultura sigue influyendo en la proporción de mujeres en el Parlamento, aunque también hay evidencia de que estas barreras culturales se han ido desvaneciendo.

⁴⁶ Algunas autoras -con base en investigaciones que van desde Mesopotamia- consideran que el dominio patriarcal adopta diversas formas y en algunas definiciones señala como sus estructuras fundamentales las relaciones sociales de parentesco, y dos instituciones muy importantes: la heterosexualidad y el contrato sexual. Op.cit.

⁴⁷ Inglehart y Norris (2003) también afirman que si bien la cultura sigue influyendo en la proporción de mujeres en el parlamento, la combinación de los cambios culturales en las actitudes y las reformas institucionales en los procesos de reclutamiento en los partidos, son aspectos prometedores para el cambio estructural que ayudará a las mujeres a avanzar hacia la paridad política. Los resultados de su investigación dejan algo claro: los valores sociales han cambiado más rápido que la realidad del empoderamiento de las mujeres en las sociedades democráticas. Tratar de modificar actitudes profundamente arraigadas hacia los roles sexuales en la vida pública puede resultar difícil en el corto plazo, pero a largo plazo, las tendencias seculares de cambio de valores, podría facilitar la entrada de más mujeres en posiciones de poder en las naciones industrializadas y en vías de desarrollo.

Desde la perspectiva de Kenworthy and Malami (1999), las variables culturales que incluyen la religión, la ratificación de la CEDAW y la legalización del aborto, no constituyen aspectos significativos para la representación parlamentaria de las mujeres (p.257)⁴⁸.

Los ejemplos de países con altos porcentajes de representación como Ecuador (41 %) y Angola (36%), muestran que el factor institucional permite sortear barreras del orden cultural, genera que más mujeres ocupen espacios de representación en el Poder Legislativo, como se detallará en el apartado siguiente.

1.1.3 Factores institucionales

Los factores institucionales que abarcan el estudio sobre las cuotas electorales, el sistema electoral y el rol de los partidos políticos, de forma específica, la ideología, el modelo de reclutamiento para la selección de candidaturas y la presencia de mujeres en las dirigencias partidistas. A estas se suman el nivel de democracia de un país, los efectos en los procesos de democratización y las modificaciones institucionales que surgen después de un conflicto o guerra interna. Todos estos aspectos se estudian de manera individual, combinada –cuotas y sistema electoral– o bajo un análisis comparado multivariante.

Estudios desde la Ciencia Política coinciden en señalar que los factores institucionales o políticos tienen un peso significativo por encima de los aspectos estructurales. Por ejemplo, las cuotas electoras son el mecanismo de vía rápida (*fast track*) para alcanzar mayor igualdad de género en el ámbito político (Norris, 1985; Dahlerup, 2006).

Las cuotas electorales son un instrumento de acción afirmativa⁴⁹ para lograr que las mujeres

⁴⁸ El análisis se realiza bajo una diferenciación regional de países en África Sub-Sahariana, Asia, Pacífico, Latinoamérica, Europa del Este y países escandinavos. Kenworthy & Malami (1999) matizan señalando Aunque los países que no han ratificado la Convención, suelen tener menos legisladoras, sin embargo, “esta variable, junto con la religión y el derecho al aborto, parecen no ser significativas en la representación política de las mujeres

⁴⁹ La exposición de las acciones afirmativas se presenta en el Capítulo IV, apartado 4.1.2. De manera general, son definidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, acorde a la CEDAW, art.4º, establece que “La adopción por los Estados parte son medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”, Zuluaga, P, *Las convenciones internacionales de Derechos Humanos y la perspectiva de género*, Universidad de Chile, Chile, 2007, Paideia, Morata, España, p.201.

ocupen escaños en los parlamentos y alcanzar una masa crítica en el corto o mediano plazo. Las cuotas varían de un 15 hasta un 40 por ciento y pueden adquirir diferentes modalidades. Su objetivo es sortear los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos públicos (Dahlerup, 2003, 2006). Los tipos de cuotas y los factores que contribuyen a su eficacia se exponen en el Capítulo III.

Los estudios sobre las cuotas son abundantes especialmente a partir de los años 90s (Dahlerup 2013). Los autores y las investigaciones coinciden en que las cuotas son el medio más eficaz para incrementar la representación parlamentaria de las mujeres (Dahlerup, 2013, 2006; Franceschet, Krook & Piscopo, 2012; Krook, 2009, 2008; Zetterberg, 2009; Ríos, 2008; Trip & Kang 2008, Tremblay, 2007; Htun, 2002). Algunos textos dan cuenta del tipo de cuotas, los modelos bajo los cuales se implementan y los debates para su introducción en diferentes países. Mientras que otros abordan las resistencias de los partidos políticos en torno a ellas.

El estudio más amplio de carácter cuantitativo se publicó en el 2013, denominado *Atlas de las cuotas electorales de género (Atlas of Electoral Gender Quotas)* que fue elaborado por IDEA Internacional, la Unión Interparlamentaria⁵⁰ y la Universidad de Estocolmo.

Las cuotas son un mecanismo que tienen efectos positivos o de refuerzo para fortalecer la representación política de las mujeres. En opinión Drude Dahlerup (2006) esta acción afirmativa globalizada representa “un salto cualitativo en una política de metas y medios exactos” para elevar la presencia de mujeres en el Poder Legislativo (p.4)⁵¹, y debido a su relativa eficiencia, constituyen esperanza para lograr un aumento en la representación.

A pesar del éxito de las cuotas, en la introducción del texto *El impacto de las cuotas de género (The impact of gender quotas, 2012)* y otras investigaciones (Krook, 2008; Dahlerup 2013; Jones, 2000; Freidenberg, 2014; Huerta, 2006; Martínez, 2010) se advierte que las cuotas han tenido un efecto diferenciado: mientras que en ciertas naciones permitieron un incremento considerable de parlamentarias -como en los países escandinavos-, en otros

⁵⁰ Desde el año 1975, mismo en que se realizó el primer encuentro internacional de mujeres en México, la Unión Interparlamentaria implementó un programa de apoyo para impulsar la presencia de las mujeres y la equidad de género en los parlamentos. Cfr. *Atlas de las cuotas electorales de género*, 2013, p. 8.

⁵¹ Cfr. presentación del proyecto *Quotaproject*, disponible en www.quotaproject.org/es/aboutQuotas.cfm, consultado el 14 de noviembre del 2014.

países no se presentan cambios sustanciales o estos fueron modestos; por ejemplo, en Brasil (Araújo, 2008) o Chile (Ríos, 2008).

Las razones que justifican el efecto de las cuotas depende de la interacción de diversos aspectos que comprenden su diseño y modelo institucional bajo el cual se implementen: a) tipo de cuotas: escaños reservados, cuotas legislativas y cuotas voluntarias en los partidos; b) sistema electoral: existen doce modelos bajo los cuales pueden operar, y c) medidas coercitivas promovidas por movimiento de mujeres para exigir su cumplimiento (Dahlerup, 2014; Franceschet, Krook & Piscopo, 2009).

En síntesis, se ha evidenciado que a pesar de que dependen del modelo electoral bajo el cual operan y del impulso del movimiento de mujeres para hacerlas exigibles, las acciones afirmativas son una de las medidas más favorables para que un mayor número de mujeres ocupen un escaño (Dahlerup, 2013).

-Sistema Electoral.

Estudios demuestran que el sistema electoral impacta en las oportunidades de las mujeres para lograr ser elegidas. Algunos de los autores que coinciden con esta idea son: Dahlerup (2013), Krook, (2008), Jones, (2000, 2008), Norris (2004), Htun (2002), Matland, (2013, 2002), Matland and Taylor (1997), Paxton (1997), Soto, 2009, y Kenworthy and Malami (1999). También existen compilaciones donde se estudian factores institucionales a detalle en países como Uganda, Estados Unidos, Francia, Australia, Afganistán, entre otros que muestran cómo el sistema electoral también es una variable significativa para favorecer la eficacia o minimiza sus efectos de manera relevante (Tremblay, 2007; Ríos 2002).

De acuerdo a la clasificación del politólogo Giovanni Sartori (1992), en los sistemas electorales existen dos casos o tipos de familias frecuentes, i) los sistemas mayoritarios plurales (elección directa en urnas) con circunscripciones uninominales donde el colegio electoral o la circunscripción elige a una sola persona y el vencedor se lo lleva todo; así como, ii) los sistemas proporcionales o de representación proporcional (RP), en los cuales se eligen a más de un candidato de acuerdo al tamaño de la circunscripción y al número de

votos obtenidos. Para Sartori los elementos del sistema son: primero, el tamaño de la circunscripción, y segundo, el método de conversión de votos en escaños⁵².

Dahlerup (2013) agrega otra posibilidad a la que denomina sistema mixto, en el que operan la combinación de ambos, mayoría y representación proporcional; hay también un cuarto modelo, en el que se agrupan los sistemas individuales que no encajan en las tres familias principales. (p.21)⁵³. El tema del sistema electoral y las cuotas se analizan en conjunto y con mayor profundidad en el Capítulo IV.

En una definición amplia, los sistemas electorales convierten los votos emitidos en la elección general en escaños ganados por partidos y candidatos. Las variables clave son la fórmula electoral utilizada, la estructura de la papeleta de votación. Por ejemplo, si el elector vota por un candidato o un partido y si sólo puede hacer una selección o puede manifestar distintas preferencias) y la magnitud del distrito -no cuántos electores viven en un distrito, sino cuántos representantes a la legislatura se eligen en ese distrito. (IDEA Internacional, 2005).

Existen múltiples variaciones de los sistemas electorales⁵⁴, pero esencialmente pueden clasificarse en doce los tipos fundamentales, la mayoría dentro de tres grandes familias. El método común para estudiarlos, es agruparlos en función del grado de precisión con el que traducen los votos obtenidos a nivel nacional en escaños legislativos, es decir, de acuerdo con su nivel de proporcionalidad. Para ello, es necesario esquematizar la relación de votos-escaños como el nivel de votos no útiles⁵⁵.

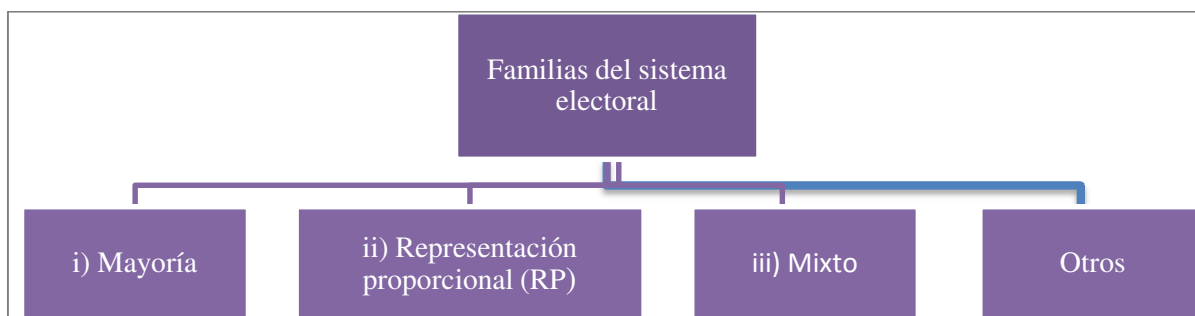
⁵² Sartori, Giovanni, *Elementos de teoría política*, op.cit. p. 251

⁵³ La elección de representantes al Congreso, en el caso de México, se realiza bajo el modelo mixto como se detalla en el Capítulo V.

⁵⁴ Un amplio estudio sobre sistemas electorales es: *Diseño de sistemas electorales. El Nuevo Manual de IDEA Internacional*, México, 2005.

⁵⁵ Cf. *Enciclopedia de la Red de Conocimiento Electoral*, en www.aceproject.org, consultada el 5 de noviembre de 2015.

Tabla 5
Familias del sistema electoral



Fuente: Elaboración propia.

Se ha demostrado que el sistema de RP conduce a una mayor proporción de mujeres representantes en las Cámaras (Matland, 2013, 2003, 2002; Dahlerup 2014). El promedio total del número de mujeres electas en el 2012 por el sistema de representación proporcional fue del 25%, a diferencia de lo que ocurrió con los sistemas electorales mixtos y los sistemas electorales de mayoría, donde el porcentaje varió entre 18 y 14% de mujeres elegidas, respectivamente (UIP 2012).

Otro aspecto que consideran los análisis sobre los modelos que ofrecen mayores oportunidades u obstáculos, es el tipo de lista elaboradas dentro del sistema de representación proporcional. Las listas pueden ser abiertas, cerradas y bloqueadas, o bien cerradas y desbloqueadas. El mandato de posición también es importante⁵⁶.

Las listas cerradas, especialmente si se usan en conjunto con las cuotas de candidatos, producen resultados que son consistentes con la composición de las listas de candidatos de los partidos ganadores, mientras que las listas abiertas han producido con frecuencia

⁵⁶ Las características del tipo de lista son las siguientes: 1) Lista abierta: los electores tienen la posibilidad de votar combinando candidatos de diferentes agrupaciones políticas; 2) lista cerrada y bloqueada: obliga al elector a emitir un voto por esa lista, no pudiendo agregar un candidato o mezclarlo con otras listas, para lo cual el partido presenta una serie de candidatos en un orden de preferencia que no puede ser modificado; 3) lista cerrada y desbloqueada: la persona que elige sólo puede votar por los candidatos incluidos por el partido, pero tiene la posibilidad de determinar su favorito.

En este último caso el partido presenta la lista pero no determina un orden de preferencia. El mandato de posición es la disposición legal que establece lugares "espectables" o "salidores" en la lista para ser ocupados por las mujeres, ya sea mediante la base de un sistema de alternancia, o bien, indicando lugares preestablecidos. Ver Comisión Interamericana de la Mujer, OEA, *Leyes de cuota: Estado del arte, buenas prácticas y desafíos pendientes en la región Andina*, Washington, Estados Unidos, 2010.

resultados decepcionantes para la representación de las mujeres en los países en los que la aceptación de las mujeres líderes es baja (Dahlerup, 2008: 23)⁵⁷.

En un estudio temprano, Mauricio Duverger (1955) encontró que los sistemas electorales de representación proporcional, las circunscripciones plurinominales y las listas cerradas favorecían a las mujeres, más que los sistemas de mayoría, las circunscripciones uninominales y las listas abiertas, aspecto que se ha corroborado con investigaciones posteriores.

El amplio estudio comparado de Kenworthy & Malami (1999) explica que el sistema electoral no solo influye de manera importante en naciones industrializadas, sino también en países en vías de desarrollo. “El modelo arroja que el sistema electoral y el año de obtención del sufragio tienen importantes efectos para la representación parlamentaria de las mujeres, al igual que si el partido en el gobierno es de izquierda. Los aspectos socioeconómicos quedan al margen de esta relación causal” (p. 252-253). En ello concuerdan Viterna, Fallon & Beckfield (2008): “sólo el efecto de un sistema electoral de representación proporcional sigue siendo significativo a través del análisis separado de ambos tipos de naciones, ricas y pobres” (p.473).

En contraste, y quizás como una de las excepciones, en un análisis sobre Japón, se describe que la baja representación de mujeres en el país, es una anomalía ya que el sistema electoral utilizado debería facilitar la representación de mujeres. La mayor parte de las elecciones se han celebrado bajo el modelo de representación proporcional o de forma distrital que se describe como favorable a las mujeres, sin embargo, apenas alcanzan una representación del 2.3% (en la fecha que se hizo el estudio), una de las cifras más bajas frente a economías similares (Christensen 2000:27)⁵⁸.

En resumen, el sistema electoral es uno de los aspectos que más consenso genera en cuanto a un impacto en la representación legislativa de mujeres.

⁵⁷ Sin embargo, en algunos países las listas abiertas han trabajado para el beneficio de las mujeres, como fue el caso en Polonia antes de la introducción de cuotas, donde los votantes utilizan el sistema de listas abiertas para elegir a las candidatas que fueron colocados en las ranuras inferiores de la lista. Cfr. Dahlerup. 2013, *Atlas...* op. cit., p. 23.

⁵⁸ Una explicación que se ofrece es la que las actitudes conservadoras con respecto a las mujeres y el patriarcado -factores culturales- determinan ampliamente la baja representación, además, de las dificultades específicas que enfrentan las mujeres en las campañas electorales, por lo que se proponen que se revisen las reglas y estímulos para las mujeres que deciden contender (Christensen, 2000). Actualmente, la representación parlamentaria es del 9.5%, ubicándose en la posición 114 entre 140 naciones evaluadas.

En algunos estudios también se analiza la relevancia de los partidos políticos, la ideología y el método de selección de candidaturas como factores institucionales que afectan la representación (Norris, 2004, Caul 1997, Kunovich & Paxton 2005), lo cual se analiza en el siguiente apartado relativo a las y los actores para el análisis de la representación, el movimiento de mujeres y los partidos políticos.

Otro factor relevante, es el nivel de democracia alcanzado por un país como variable que impacta la representación (Norris, 1995; Lee and Clark 2000). Con base en la clasificación de *Freedom House*⁵⁹ de países democráticos, semidemocráticos o autoritarios, algunos ensayos dan cuenta de la relación entre el nivel de democracia y la representación de mujeres en el Poder Legislativo (Kenworthy and Malami, 1999; Viterna, Kathleen & Beckfield, 2008).

Pippa Norris (2005) explica que el número de años en que una sociedad ha vivido bajo un régimen de instituciones democráticas, es un aspecto necesario, aunque no suficiente para comprender el nivel de representación política de las mujeres. Se considera que a mayor democracia, se amplían las libertades y los niveles de participación de distintos sectores de la población. Sin embargo, Norris (1997) cita los casos de México y Lituania, países con democracias más incipientes frente a la de Estados Unidos, pero que mantienen un mayor porcentaje de representación de mujeres (p.180).

Paxton and Hughes (2008) describen que desde la teoría, se supondría que un régimen democrático impulsaría la mayor integración de mujeres y las reglas de participación deberían ser claras y consistentes, las cuales serían instrumentos de apoyo de las mujeres para participar dentro del sistema y alcanzar el poder. Sin embargo, en el análisis comparado de Fallon, Swiss & Viterna (2012), se advierte que la democracia contribuye poco a elevar la representación política de las mujeres, siendo más relevante el proceso de democratización que el nivel de democracia en un momento en particular en el tiempo (p.400). Por ejemplo,

⁵⁹ *Freedom House* conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Desde 1972 mide el estado de los derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo, incluyendo los 35 países de las Américas a través de su publicación anual *Freedom in the World* (Libertad en el Mundo), así como el estado de la libertad de prensa a través de *Freedom of the Press* (Libertad de Prensa). Adicionalmente, *Freedom House* publica un estudio de gobernabilidad democrática sobre sesenta países llamado *Countries at the Crossroads* (Países en la Encrucijada) que incluye quince países latinoamericanos.

en el caso América Latina, el 2009 marcó el 30° aniversario de la tercera ola de democratización para la región, a partir del cual se consiguió mayor presencia de mujeres en los cargos de representación política, en general, y parlamentaria, en particular (Del Campo, Di Marco & Tabush, 2011).

Otro elemento de análisis institucional, es considerar si el país ha estado bajo una insurgencia o situación de guerra, como en los casos de Ruanda o Afganistán donde a pesar de la hostilidad para la participación política de las mujeres, sus nuevas constituciones en ambos casos, incluyeron cuotas electorales, permitiendo elevar la representación (Paxton & Hughes, 2008, Tremblay, 2013). Actualmente (2015) Afganistán tiene 27% de legisladoras en la Cámara Baja, mientras que Ruanda alcanza un 63.8%, colocándose en el primer lugar del ranking internacional (UIP 2015)⁶⁰. Esto se debe a que después de algunas situaciones de conflicto se generan cambios culturales y políticos, aunque no siempre es así, como en los casos de Indonesia o Etiopía (Paxton & Hughes, 2008:172).

Después del recorrido en torno a los factores institucionales, cabe señalar que continúa el debate sobre el efecto de las variables socioeconómicas y culturales, y se ha producido un creciente consenso sobre el impacto directo de los factores institucionales para la representación política de las mujeres. (Kalandadze & Kandawavski 2013; Tremblay, 2007; Ríos 2002:14).

Para continuar el análisis sobre la representación parlamentaria de las mujeres es fundamental mirar a los actores/as protagónicos: los partidos políticos y el movimiento de mujeres, lo que se exploran a continuación.

1.2 Actores/as políticos para el análisis de la representación

1.2.2 Partidos políticos

La dinámica de los partidos políticos es otro actor/aspecto importante que explica los alcances o límites de la representación política de las mujeres, entrelazándose con los

⁶⁰ Para abundar sobre este tema se puede ver Paxton y Hugues (2008), apartado *Armed Conflict: Devastation yet Hope?* p.168.

diversos factores que inciden en la representación (Norris, 1995; Lovedusky, 1997; Matland, 2002; Hinojosa, 2010; Dahlerup, 2013).

Existen abundantes investigaciones sobre los partidos y el sistema de partidos. Giovanni Sartori (2005) los describe como cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que se presenta a las elecciones -libres o no- y puede postular a candidatos a cargos públicos. Maurice Duverger (1997) establece que los partidos tienen como característica que “tratan de conquistar el poder y ejercerlo; su método es hacer elegir a los consejeros generales, a los alcaldes, senadores y a los diputados, hacer entrar a los ministros en el gobierno y a designar a los jefes de Estado”.

La Enciclopedia de la Red de Conocimientos Electorales puntualiza que los partidos y los candidatos son los protagonistas estelares de las elecciones: son quienes compiten por los cargos públicos, quienes organizan las campañas electorales y los que buscan convencer a los electores para que voten por ellos. Las oportunidades que tienen para realizar campañas, ocupar cargos públicos o construir una oposición creíble depende del marco legal, político y cultural de cada país, así como de la administración y resultado de cada elección⁶¹.

Los partidos juegan un rol fundamental de guardianes del poder (*gatekeepers*) como parte de los factores institucionales y/o como actores, ya que son los mediadores críticos entre las mujeres y el poder político (Caul, 1999). El papel de los partidos políticos considera la ideología, el método de selección o reclutamiento de las y los candidatos y la participación de las mujeres en las dirigencias partidistas (Norris & Lovenduski, 1997).

Existe un debate sobre la influencia de la ideología partidista como un factor decisivo para el reconocimiento y empoderamiento de las mujeres en los institutos (Lovenduski, 1997). La fuerza de los partidos de izquierda, ya sea en el gobierno o en las bancadas, es considerada como una variable que contribuye al empoderamiento político de las mujeres, dado que los resultados de las investigaciones arrojan que los partidos con esta ideología, promueven más la participación de las mujeres, (Kenwothy & Malami 1999; Reynolds 1999; Matland 1993,1997), impulsan la agenda con perspectiva de género y han sido pioneros a la

⁶¹ Ver, ACE proyecto.Red de Conocimientos Electorales, en Partidos y Candidatos en <http://aceproject.org/ace-es/topics/pc/default>. Consultado en julio del 2015.

integración de las cuotas electorales (Lovendusky, 1997)⁶².

Dahlerup (2002) explica que el Partido Laborista Noruego, el Partido Socialdemócrata de Dinamarca y el Partido Socialdemócrata de Suecia, en las décadas de los 80 y 90, incorporaron medidas de acción afirmativa en sus estatutos para garantizar la presencia de mujeres en las listas o candidaturas (p167). De manera similar, en México, la primera fuerza política que integró las cuotas electorales fue un partido de izquierda (PRD) en 1993. En ello coincide Caul (1997), quien estudia a 68 partidos en doce naciones industrializadas y comprueba que, los institutos de izquierda, impulsan un mayor porcentaje de carreras de mujeres al Parlamento y suelen apoyar a minorías étnicas y raciales subrepresentadas.

También el análisis de Paxton & Kunivich (2003) confirma que la ideología es un factor que contribuye a impulsar carreras políticas femeninas, y demuestra que cuando se mide con mayor precisión, predice fuertemente las diferencias en la representación política de las mujeres: cuando las actitudes negativas hacia las mujeres crecen, el porcentaje de parlamentarias decrece.

En contraste, Viterna, Kathleen, & Beckfield (2008) describen que, a excepción de la variable del sistema electoral, no se puede establecer la relación causal en los otros factores institucionales como es la ideología partidista e insisten en la relevancia de hacer un análisis que utilice las variables separadamente en los países desarrollados y en vías de desarrollo (p.473).

-Reclutamiento.

Otro rasgo relevante es la forma en que los partidos llevan a cabo la selección de las candidaturas o el reclutamiento político⁶³. Los estudios sobre la selección de las candidaturas se han incrementado e instalado como un foco de análisis (Norris y Lovenduski, 1995; Mtland and Taylor, 1997; Norris, 1993, Baldez, 2008; Hinojosa 2012). Por definición, el reclutamiento implica dos componentes, la oferta y la demanda: alguien tiene que querer presentarse como candidato y alguien más tiene que determinar si aquél va a ser

⁶² Como ya se apuntaba, cuando Kenworthy y Malami (1999) analizan veinte naciones con democracias consolidadas, el modelo arroja que el sistema electoral y el año de obtención del sufragio tienen importantes efectos para la representación parlamentaria de las mujeres, al igual que si el partido en el gobierno es de izquierda. Los aspectos socioeconómicos quedan al margen de esta relación causal. Además, encuentran que el catolicismo conduce en menor medida al triunfo electoral de las mujeres que la protestante” (p.253).

⁶³ Pippa Norris describe que la literatura sobre el tema utiliza diferentes términos para referirse al reclutamiento como “selección”, “preselección” y “nominación” pero todos indican la pretensión de ocupar de representación política”, en Uriarte, Edurne, y Elizondo, Arantxa, *Mujeres en política*, Ariel, España, 1997, p.150.

seleccionado⁶⁴.

Norris (2007) describe que “el reclutamiento legislativo determina la elección de candidatos que se presentan a las elecciones generales, y por tanto, la composición de los parlamentos. En el fondo puede condicionar la composición de las élites políticas elegibles” (p.149). Lo anterior porque los líderes de los partidos no solo controlan los procesos de selección de las y los candidatos a puestos de elección, sino también a las y los integrantes de los órganos de dirección de los institutos⁶⁵. Un partido incluye el liderazgo estatal y ejecutivo, las organizaciones regionales, además de los delegados de distrito, directivos regionales, grupos de interés vinculados y los militantes de base.

Las politólogas Norris y Lovenduski (1995) distinguen tres niveles de análisis: 1) Factores sistemáticos que conforman un amplio contexto para el reclutamiento dentro de cada país: el sistema legal, el sistema electoral y el sistema de partidos; 2) factores que se colocan en el contexto dentro de un partido político en particular, como la organización del partido, las reglas y la ideología; y, 3) factores que directamente influyen como los recursos y motivación de los aspirantes y las actitudes de los guardianes (*gatekeepers*) de la política⁶⁶.

Los seleccionadores clave dentro de los partidos varían según el grado de centralización del sistema político y los partidos pueden ser muy variados según la nación, la ideología y la estructura organizativa; por ende, la comprensión de los factores clave en los procesos de selección es compleja (Norris, 1997; Matland, 2002).

⁶⁴ La autora analiza hasta qué punto los parlamentarios reflejan la sociedad a la que representan en términos de criterios relevantes políticamente, como el género, la clase, el idioma y la etnicidad. También expone cómo se da el proceso de reclutamiento, selección, preselección y nominación, en las democracias contemporáneas, realizando una tipología de carreras políticas, cómo se implementan los procesos de selección dentro del sistema político, además del régimen electoral y el sistema de partidos en 21 naciones. La autora diferencia cómo son los procesos de reclutamiento de los distintos partidos y cuáles son las motivaciones y los recursos de los candidatos, mostrando que el reclutamiento es un proceso de carácter múltiple cuya interrelación de los aspectos mencionados provocará que ciertas personas tengan mayores o menores oportunidades de ser elegidas o tener carreras políticas. Cfr. “Representación política: dinámica de género y partidos”, en Uriarte, Edurne, y Elizondo, Arantxa, *Mujeres en política*, Ariel, España, 1997, pp. 149 – 181.

⁶⁶ Las autoras Norris y Lovenduski (1995) estudian cómo reclutan los partidos políticos en Inglaterra, quiénes eligen y cómo lo hacen, además de quién es elegido y por qué, considerando en general, que el proceso de reclutamiento en este país es transparente y abierto. También analizan los perfiles de los candidatos -nivel educativo, ingreso, trayectoria partidista, número de dependientes-, y realizan un estudio cuantitativo sobre del potencial para lograr ser electo, si el postulante al cargo es mujer o persona de raza negra, demostrando que no existe un sesgo de género al momento de elegir, empero, sí existe un sesgo de preferencia racial.

Las expertas han presentado cuatro mecanismos de posible selección que realizan los partidos: informal centralizado, informal-localizado, formal-localizado y formal-centralizado⁶⁷.

Se trata de elección informal cuando no existen reglas claras, y formal cuando se tiene un marco normativo, mientras que centralizado se refiere a que las decisiones se toman desde las oficinas nacionales del partido (Norris and Lovenduski 1995; Norris 1997). Dependiendo del procedimiento utilizado, “la función del controlador del proceso puede estar en manos de los líderes, un conjunto más amplio de funcionarios o una porción significativa de bases del partido” (Matland 2002:11).

En los procesos centralizados las decisiones son cupulares, mientras que los descentralizados dan más poder a la ciudadanía, es una idea asociada a gobiernos representativos y plurales, que a su vez, permite a los funcionarios electos conocer mejor a sus representados (Vidal 2012).

Existen diferentes opiniones sobre qué método de selección de candidaturas favorece más a las mujeres. Por ejemplo, Caul (1997) encontró que existe una relación entre las reglas claras

⁶⁷De entre las diversas combinaciones posibles de reclutamiento Norris (1997) presenta las siguientes: 1. Reclutamiento informal-centralizado. Este sistema puede ser ilustrado con el ejemplo concreto de los partidos italianos, donde la selección de candidatos se decidía por un proceso de negociación entre los líderes de diferentes sectores. Los filtros clave son los líderes en las sedes centrales de los partidos, o los líderes regionales que pueden colocar a candidatos concretos en buenas posiciones: “A través de patronazgos, los líderes pueden mejorar la posición de los candidatos en las listas o colocarlos en las mejores circunscripciones” (p.171). 2. Reclutamiento informal-localizado. A diferencia del caso anterior, aquí es complicado que el liderazgo central tenga un papel importante. El ejemplo más extremo de este tipo es Estados Unidos. El poder de los jefes se debilitó debido a los procesos de elecciones primarias con base en leyes de los estados. Las oportunidades para los candidatos no se determinan por un liderazgo central sino por la decisión local del distrito, y no hay reglas normalizadas en relación al proceso de nominación ni revisiones de la lista general del partido -lo cual excluye directrices de discriminación positiva.

3. Reclutamiento formal-localizado. Es el sistema más común en los partidos de masa en algunos países de Europa tales como Reino Unido, Suecia, Irlanda y Alemania, donde se establecen reglas burocráticas explícitas y se implementan procesos de selección a través de la organización del partido a nivel local y regional. Las decisiones según las cuales los individuos son elegidos se toman principalmente a nivel de distrito.

Además se tiene el Reclutamiento formal-centralizado. En este sistema los líderes estatales de los partidos tienen la competencia formal para decidir qué candidatos van a aparecer en las listas de los partidos o en los distritos. En el pasado esto operaba de manera clara en los partidos comunistas tradicionales, organizados de acuerdo con el principio de centralismo democrático. “Este modelo es también común en los partidos de América Latina, donde los líderes carismáticos mantienen el poder y compensan a sus colaboradores. La selección de los candidatos está totalmente determinada por un pequeño grupo de jefes (...) En el partido predominante en México, el PRI, los candidatos son elegidos formalmente por procedimientos democráticos internos, pero en la práctica, el liderazgo estatal tiene todo el poder sobre el reclutamiento. Los líderes establecidos eligen candidatos en una relación de apadrinamiento. La camarilla política determina quién llega a lo alto de la escala política (p.175). Esta clasificación de reclutamiento se explica en el Capítulo IV, apartado 4.4.1 Reclutamiento y selección de candidaturas, elementos clave.

en los partidos y la institucionalización, y la selección de las mujeres. También se ha mostrado que la selección centralizada beneficia más a las mujeres, ya que los dirigentes nacionales de los partidos pueden asumir la relevancia de alcanzar la igualdad de género (Lovendusky 1997), y que las designaciones centralizadas allanan el camino de las mujeres para llegar al poder (Hinojosa 2012).

En el mismo sentido, Matland (2002) apunta que contar con procesos normativos en los partidos “puede representar una gran ventaja para las mujeres” ya que ofrece estrategias para aprovecharlas, “por el contrario, cuando no existen reglas escritas, el diseño para acceder a los círculos más cerrados de poder se torna mucho más difícil” (p.117).

En el caso de América Latina, el estudio *Partidos Políticos y Paridad: la ecuación pendiente*, describe que cerca del 90% de los partidos tienen reglas para la selección de candidaturas. Los partidos que no las tienen nominan a más mujeres: 25% frente a un 23%, lo que refleja solo una diferencia mínima. Así, los procedimientos más exclusivos favorecen a las mujeres, al lograr contener los monopolios locales de poder. Por otra parte, también se ha encontrado que los procesos democráticos como son las elecciones primarias o asambleas, pueden arrojar resultados menos favorables para las mujeres, ya que implican un debilitamiento político y monetario (Roza, Llanos, y Garzón de la Rosa, 2010). Sin embargo, a diferencia del método de selección “las cuotas de género, sí han producido un efecto estadísticamente significativo” en la región (Roza, Llanos, y Garzón de la Rosa, 2010:38).

En un estudio sobre México se demuestra que en las elecciones a las diputaciones federales del 2003 y 2006 al Congreso, las elecciones primarias fueron un factor limitante en la eficacia de las cuotas y en el arribo de más mujeres al parlamento (Baldez, 2008:158). “El porcentaje relativamente bajo de mujeres elegidas en las circunscripciones uninominales se puede atribuir al nivel por el que han optado los principales partidos políticos al realizar elecciones primarias, las cuales mitigaron el efecto de las cuotas de género en ambas elecciones”, demostrando cuantitativamente que el “método empleado por los partidos para seleccionar a sus candidatos puede afectar el porcentaje de mujeres que llegan a ser elegidas” (p.173-174).

En un análisis del ámbito local en América Latina, Magda Hinojosa (2012) estudia la relación entre el proceso de selección de candidatas en los partidos políticos y el potencial que tienen las mujeres con detallados estudios de caso para México y Chile. La autora

demuestra que los procesos de selección centralizados (*versus* no centralizados) y exclusivos (*versus* inclusivos) son más favorables para las mujeres⁶⁸. A través de las designaciones desde las cúpulas partidistas, las mujeres no tienen que enfrentar procesos internos que conlleven desgaste político y económico, debilitando su competitividad contra otras fuerzas partidarias⁶⁹.

- Relación entre dirigencias partidistas y el apoyo a las mujeres.

Además de la relevancia del proceso de reclutamiento para las carreras políticas, algunos estudios han explorado la relación entre dirigencias partidistas y el apoyo a las mujeres, en los cuales se comprueba que en la integración de las mujeres a las dirigencias partidistas, un alto porcentaje de mujeres trabajando en los partidos y perteneciendo a las elites, allanan el camino de las mujeres hacia la representación (Caul 1999; Kunovich and Paxton 2005), especialmente, cuando esto se combina con un sistema de representación proporcional.

Paxton (2008) describe que es más probable que las mujeres en la elite partidista promuevan una mayor selección de mujeres, influyan en la integración de las listas, amplíen las contribuciones o recursos que les deben dar los partidos o en los apoyos en las contiendas cuando compiten, es decir, tanto en el proceso para alcanzar la nominación como en el proceso de llegar a ser electas. Ejemplos concretos los ofrece Dahlerup (2002) quien describe cómo la temprana presencia de mujeres en las dirigencias partidistas en los países escandinavos y las cuotas electorales impulsadas por los propios partidos de izquierda, posibilitaron los altos porcentajes de representación de mujeres en los parlamentos (p.167).

Matland (2002) apunta que, en resumen, frente a los diversos obstáculos que enfrentan las mujeres para ser candidatas elegibles y convertirse en legisladoras, debe quedar claro que en

⁶⁸ Lisa Baldez (2008) explica que las elecciones primarias se refieren al proceso de votación que se realiza para designar a un candidato (s) en una elección general. Las elecciones primarias varían en cuanto al control que ejercen los líderes de los partidos. Las primarias abiertas permiten que todos los votantes registrados participen, mientras que en las primarias cerradas solo permiten votar los militantes del partido. El proceso cambia de país en país. Agrega que seleccionar a candidatos mediante elecciones primarias se ha vuelto cada vez más común en América Latina y Europa. Las primarias son observadas como la democratización interna de los partidos. En, *Cuotas versus primarias: la nominación de candidatas mujeres en México*, en Ríos Tobar Marcela, *Mujer y política. El impacto de las cuotas en América Latina*, Flacso Chile, IDEA Internacional, Chile, 20.

⁶⁹ , Ver, *Seleccionando mujeres, eligiendo mujeres Representación política y selección de candidatas en América Latina*, (*Selecting Women, Electing Women Political Representation and Candidate Selection in Latin America*), Temple University Press, USA, 2012.

las democracias consolidadas, “los factores clave residen en convencer a las mujeres para que se presenten y convencer a los partidos que las seleccionen como candidatas” (p.120).

Otras investigaciones indican que los partidos políticos desempeñan un papel más significativo frente a los factores sociales. El obstáculo para que las mujeres alcancen el poder es la “falta de respaldo del partido: por ejemplo, el limitado apoyo financiero para las candidatas, el acceso limitado a redes de trabajo político y el predominio de una doble moral” (Nadezhda, 2002, p.64).

Así, las investigaciones coinciden en explicar que los partidos tienen la capacidad de alentar o desalentar las carreras políticas acorde al proceso de selección de candidaturas y la presencia de mujeres en las dirigencias, aspectos dinámicos y complejos. Los partidos constituyen el principal filtro o cuello de botella de las carreras políticas y con ello, ostentan un poder de consecuencias importantes al permitir o no, el avance de las mujeres hacia el Parlamento.

Tanto la elección como el método de selección interna de los partidos como la aplicación de las cuotas en los partidos, serán aspectos nodales en el análisis del caso mexicano, como se desarrolla en el Capítulo V, denominado Efectos del movimiento de mujeres y de las cuotas electorales en México, caso 2012.

1.2.1 El movimiento de mujeres

El movimiento de mujeres ha sido incorporado como un elemento para la comprensión de los niveles de representación política. Algunos análisis lo integran como un factor estructural, mientras que otros como un actor social que se moviliza para sortear las barreras culturales, estructurales e institucionales (Krook, 2009).

En términos generales, el movimiento de mujeres significa y alude un fenómeno social y político de trascendencia, derivado tanto de su fuerza numérica como de su capacidad para provocar un tipo de cambio, ya sea legal, cultural o político. No precisa tener una única expresión o ubicación espacial; en su mayoría está compuesto por mujeres, aunque no exclusivamente por ellas (Molyneux, 2003:225). Un desarrollo más amplio de esta idea se presenta en el Capítulo III, Movimiento de Mujeres por la Representación.

El movimiento de mujeres a nivel global ha tomado fuerza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y, de manera relevante, a partir del Encuentro Internacional de Beijing, en 1995⁷⁰, cuando pudo establecerse una agenda internacional por los derechos humanos de las mujeres (Paxton, Green & Hughes 2006). También, a partir de la redacción de Tratados Internacionales con perspectiva de género que incluyen la integración de las acciones afirmativas, a través del instrumento denominado cuotas electorales o cuotas de género, como una estrategia institucional que permite allanar el camino hacia la representación (Medina, 2003), tal como se detalla en el Capítulo IV.

Uno de los documentos jurídicos creados por el movimiento de mujeres, es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW), entrada en vigor en 1981. Algunas investigaciones, dan cuenta de la presión ejercida por las mujeres para incorporar en sus legislaciones los tratados internacionales con perspectiva de género, como un instrumento jurídico y político que modifica algunas tradiciones culturales, impulsa reformas que permiten la participación política y genera políticas públicas para el empoderamiento social y económico de las mujeres (Krook and Childs 2010).

Los esfuerzos del movimiento de mujeres han sido evidentes para el avance de los derechos de las mujeres: “la presión internacional de organizaciones como ONU y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S), han impulsado el sufragio, la integración de políticas de género y el número de mujeres en las legislaturas” (Paxton, Kunovich, and Hughes, 2007:272), además, logran perseguir a las personas influyentes en el gobierno, responsabilizar a las naciones de la ratificación de los tratados y aumentar el conocimiento interno de la difícil situación de las mujeres.

En el estudio de Kenworthy and Malami (1999), aunque se considera que dentro de los factores socioeconómicos solo tiene relevancia la integración de las mujeres a la fuerza de trabajo, muestra reservas para generalizar en torno a que la variable del movimiento, sobre todo, a partir de “los estudios de caso que muestran el vibrante papel que han jugado los movimientos de mujeres para reducir la inequidad política de género” (p.257).

⁷⁰ En 1995 la Plataforma de Acción de Beijing identificaron como aspectos en que era imperativo actuar la desigualdad entre la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y en la adopción de las decisiones en todos los niveles, así como la falta de mecanismos suficientes en todos los niveles para promover el adelanto de las mujeres, (Ballington & Montalvo, 2002).

Paxton, Green & Hughes (2006)⁷¹ prueban que a partir de la institucionalización del movimiento de mujeres, se producen efectos positivos y significativos con varios resultados, como el derecho al voto, el establecimiento del principio de igualdad de género en diferentes sociedades y la probabilidad de incrementar el porcentaje de parlamentarias. Esto último, al aumentar la presión internacional para que las mujeres accedan a la esfera política, aunque ello requiere tiempo. “En todos los modelos el tamaño del efecto indica que la institucionalización mundial de la igualdad de las mujeres afecta poderosamente alcanzar el poder político de las mujeres” (p.911).

En general, existe coincidencia en que el desarrollo del movimiento de mujeres ha incrementado la exigencia de la representación de éstas (Norris, 1997:150). Por ejemplo, además de la relevancia del sistema electoral, Matland (2002) sostiene que uno de los factores más importantes que pueden contribuir a extender el número de mujeres para ocupar un escaño, es el número y amplitud del movimiento de mujeres centradas específicamente en los asuntos de las mujeres con los que cuente un país. Así, las características negativas de los sistemas electorales o el cuello de botella que representan los partidos, logran superarse por la movilización política de las mujeres.

Paxton, Hughes & Green (2006) y Manon Tremblay, (2011) han revelado que la movilización de las mujeres en la escena internacional y la presión global en favor del acceso de las mujeres a la representación política son variables importantes en la explicación del crecimiento de la feminización de la arena legislativa alrededor del mundo.

- Movimiento de mujeres y factores institucionales

Respecto al movimiento de mujeres y los factores institucionales, diversos estudios dan cuenta de cómo estos han impulsado modificaciones institucionales, ya sea a través de los partidos políticos o en las leyes electorales, mediante la introducción de las cuotas (Beckwith 2010; Baldez, 2010; Krook, 2009; Lovendusky 2005; Tripp & Kang 2008).

⁷¹ En el importante estudio comparativo, *El Movimiento Internacional de la Mujeres y la Representación Política, 1893-2003* (*The international Women's Movement and Women's Political Representation, 1893-2003*), muestra claramente los alcances del movimiento de mujeres en el mundo para alcanzar el poder.

Sobre el movimiento de mujeres y los partidos, Lovenduski (1997) describe que los alcances conseguidos durante los años 70 y 80, deben ser considerados en relación a una importante movilización de mujeres. La emergencia de la segunda ola del feminismo a finales de la década de los setenta tuvo efectos importantes, incluso en países donde no se extendió un movimiento muy radical de las mujeres, las ideas de mayor inclusión en la vida social estaban en el aire. Las campañas a favor de la igualdad, consiguieron apoyos poco a poco y los partidos comenzaron a responder.

Sin embargo, el ímpetu fomentado por los fuertes movimientos no hubiera sido suficiente para asegurar cambios en la política de los partidos, los cuales adoptaron los temas de mujeres solo cuando fueron presionados (p.118). Entonces, se considera que los elevados niveles de representación alcanzados en los países nórdicos “puede atribuirse a la presión ejercida por los grupos de mujeres sobre los partidos y sus aparatos internos, así como el movimiento de mujeres en general” (p.167), ya que se organizaron para asegurarse que nominaran a más mujeres, lo cual ha tenido lugar en los últimos cuarenta años.

Asimismo, en las conclusiones del estudio comparado de los partidos, Miki Caul (1999) expone que “el movimiento de mujeres y los niveles de participación política de las mujeres ha incrementado la presión en los partidos políticos para enviar a más mujeres al Parlamento” (p.17).

- Movimiento de mujeres y cuotas electorales

En torno al movimiento de mujeres y las cuotas electorales, la movilización fue determinante para la introducción de la acción afirmativa en la mayoría de los países, concretamente en Bélgica, Francia, Polonia y España; mientras que en Eslovenia, Portugal y Grecia, la adopción de cuotas fue estimulada fundamentalmente por la presión internacional, sobre todo, por parte de la Unión Europea, aunque en “estos cambios también surgieron coaliciones de mujeres de distintos partidos políticos y de organizaciones sociales a favor de la paridad” (Verge 2013: 114).

Krook (2009) analiza también, cómo en la India, Pakistán, Suiza, Reino Unido, Argentina y Francia⁷², el movimiento de mujeres impulsó reformas para la introducción de cuotas

⁷² Krook (2009) realiza el análisis comparado delineando cuatro argumentos: el movimiento de mujeres por las cuotas para incrementar la representación; el reconocimiento de las elites políticas de la ventaja de integrar

electorales, aún en contra de las élites partidistas, quienes en muchas ocasiones, llevaron el tema a los tribunales constitucionales. Los movimientos en estos países tuvieron una dimensión local pero también internacional. Además, existe evidencia que “los esfuerzos por nominar a más candidatas rara vez ocurrieron en ausencia de la movilización de mujeres”, aunque en algunas ocasiones los movimientos no estaban totalmente a favor de las cuotas y conocían de sus limitaciones (p.21).

Además de la relación entre los factores institucionales y el movimiento de mujeres, este último ha generado también cambios culturales por la igualdad de género. Inglehart and Norris (2003) apuntan que el movimiento feminista en varios países ha enfatizado sobre las diferencias en los roles sexuales y la familia, y la crítica importancia de cambiar las tradicionales normas patriarcales para transformar las relaciones entre los sexos (p.9). Al igual que el proceso de modernización genera cambios, el movimiento de mujeres también ha logrado modificar creencias fundamentadas en interpretaciones religiosas o valores tradicionales. Con el cambio cultural, el movimiento de mujeres encuentra mayor apoyo y con ello, se logran impulsar políticas públicas, legales y administrativas para alcanzar la igualdad de oportunidades y la integración de acciones afirmativas generadoras de un círculo virtuoso (p.163).

En algunas regiones, como el Medio Oriente y Norte de África, se puede observar este registro de modificaciones culturales, sobre todo a partir de Beijing. Como describe, Moghadam (2007), “las mujeres, especialmente las jóvenes, demandan mayor acceso al ámbito público, igual participación en la comunidad nacional e iguales garantías en la familia. Con base en la CEDAW, han luchado por los derechos civiles, políticos y sociales no sólo trabajando por y para ellas, sino redefiniendo el modelo de ciudadanía en conjunto” (p.3).

Arfaoui Khadija (2011) explica que los movimientos de mujeres aparecerán públicamente con posterioridad a los movimientos de independencia, sobre todo en la década de los 80, denunciando que los vínculos que se establecían entre la pureza sexual y el honor familiar de las mujeres, no tenían otro propósito sino el de mantener el control sobre éstas, lo cual

las cuotas; las cuotas son consistentes con la existencia o emergencia de normas por la igualdad y la representación; y, las cuotas son apoyadas por normas internacionales y extendidas a través del intercambio internacional (p.208)

forma parte de una política del Estado más que del Islam. “Hasta hace no mucho tiempo, los hombres aceptaron que sus mujeres parientes gozaran de autonomía, accedieran a la educación o realizaran un trabajo remunerado. Su mayor temor estaba en que una hija, hermana, sobrina o esposa, fueran a deshonar a la familia” (p.96).

Las modificaciones en torno a tradiciones y el movimiento de mujeres para sortear las barreras, también se reflejan en estudios de caso de algunos países de Asia -Tailandia, Japón, Taiwán, Malasia-, donde se describe que a pesar de la fuerza que tiene la religión, el movimiento de mujeres ha sido fundamental para el avance en la representación (Lee & Clark, 2000).

En los estudios sobre América Latina, se da cuenta cómo el movimiento de mujeres y su participación en los procesos de transición a la democracia, permitieron hacerlas sujetos visibles en la esfera pública e irse integrando a los espacios de representación política, específicamente, en Chile, después de la dictadura militar (Baldez, 2010) o en México⁷³, durante los años de la democratización del país, entre las décadas de los 80 y los 90 (Huerta & Magar 2006).

Así, el estudio de la representación política requiere considerar el movimiento de mujeres como un actor que, al igual que los partidos políticos y los factores estructurales, institucionales y culturales, inciden en la representación política de las mujeres, ya sea porque las mujeres se organizan para impulsar reformas de ley, incidir en los procesos de selección de candidaturas, integran las cuotas electorales; aspectos que en interacción reducirán o ampliarán el horizonte de participación de las mujeres e influirán en el porcentaje de mujeres parlamentarias.

En resumen, el estudio de los factores estructurales, culturales e instituciones, en interacción con las dinámicas de los partidos políticos y el movimiento de mujeres, muestran la diversidad de abordajes teóricos en torno a la comprensión del fenómeno de la representación parlamentaria de las mujeres.

⁷³ En el estudio del caso de México, se mostrará la relevancia que tuvo la Convención, denominada CEDAW, como un instrumento para la interpretación judicial favorable sobre las cuotas electorales y el incremento en la representación parlamentaria.

Cada uno de estos aspectos se entrelazan en las diferentes regiones del mundo, creando un crisol de posibilidades de alcanzar mayor o menor número de mujeres en las asambleas legislativas nacionales, por lo que es importante presentar un bosquejo de este cruce de factores y los respectivos niveles de representación en algunas zonas del mundo como un referente a partir del cual, el caso mexicano dialoga y contribuye a la explicación del hecho.

1.3 Interacción de factores y actores

Una vez descritos los factores culturales, económicos e institucionales que impactan los niveles de representación política de una sociedad, así como los actores que forman parte del proceso e influyen en la misma, se describen los niveles de representación que existen en tres regiones del mundo, primero, Europa y Medio Oriente y Norte de África, los cuales se presentan dado el nivel de contraste entre una y otra, ya que mientras que la primera constituye la zona con mayor presencia de parlamentarias, la segunda es la de menor porcentaje de legisladoras, junto con la región de Asia y el Pacífico. Finalmente, se describe América Latina espacio en el cual se circunscribe el análisis de México.

1.3.1 Europa, factores estructurales favorables.

Europa es el segundo continente más pequeño y se considera la cuna del mundo occidental. Algunas características de esta región se presentan en los estudios de la Unión Europea (UE), asociación económica y política conformada por 28 naciones⁷⁴. El origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial⁷⁵ y, si bien, la UE no abarca todos los países del continente, los estudios de la región dan cuenta de las dinámicas de la población y las expresiones de la sociedad en cuanto a la igualdad de género.

¿Cuál es el contexto general de las mujeres de esta región y ante las cuales alcanzan los mayores niveles de representación frente a otras zonas del planeta? De acuerdo al ranking internacional del Índice de Desigualdad de Género⁷⁶, un número importante de países de la

⁷⁴ Al año 2105, las naciones que integran la Unión Europea son Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Rumania y Suecia.

⁷⁵ Ver, http://europa.eu/about-eu/basic-information/about/index_es.htm. Consultado el 13 de junio del 2015.

⁷⁶ Medida compuesta que refleja la desigualdad entre mujeres y varones en tres dimensiones, salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. Se integra con los indicadores de mortalidad materna,

UE presentan menores brechas de desigualdad por razón de sexo, como son los casos de Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Alemania, Finlandia, Eslovenia, Francia, Bélgica, España, Austria y Portugal. De igual forma los niveles de vida en la región han mejorado notablemente en el último decenio ya que con base al Estándar del Poder Adquisitivo (EPA) los niveles de vida de la Unión Europea se encuentran entre los más elevados del mundo.

En la UE, la tasa de natalidad se ha estabilizado y las parejas han tenido hijos a mayor edad en las últimas décadas. La tasa total de fecundidad se mantiene por debajo de la tasa de reemplazo en los países de la Unión Europea, y más de la mitad de los países (14), tienen una tasa de fecundidad por debajo de 1.5 hijos por mujer. En los estados europeos del noroeste, la tasa de fecundidad es mayor que en los estados del centro, los del sur y los de habla alemana. En general, desde comienzos del 2000 y 2008, se presentaron signos de recuperación en la fecundidad en casi todos los países.

En cuanto a la educación, las mujeres cuyo nivel académico era inferior al de los hombres en la generación anterior en Europa, se han puesto a la par, ya para el año 2004, prácticamente el 55% de los jóvenes licenciados de enseñanza superior fueron mujeres y representan el 59% de los titulados en las universidades⁷⁷.

Respecto al trabajo, la proporción de mujeres que labora ha ido en aumento desde el año 2000, ya que las trabajadoras suman tres cuartas partes de los millones de nuevos puestos de trabajos generados en Europa, sin embargo, continúan cobrando menos que los hombres⁷⁸, con ingresos en promedio, entre 16% y 17% menores. Las empresarias suman el 8% de la fuerza de trabajo femenina, mientras que los hombres el 16%, y se considera que tienen más dificultades para obtener financiamiento. Al igual que en diversas regiones del mundo, enfrentan dificultades para combinar el trabajo remunerado con el cuidado de los hijos, resulta un desafío compaginar el aspecto de la esfera privada y la esfera pública. Por ejemplo,

maternidad adolescente, representación parlamentaria, población con al menos secundaria terminada y la participación en la fuerza de trabajo. Puede interpretarse como una pérdida porcentual del desarrollo humano potencial debido a las limitaciones de los aspectos señalados.

⁷⁷ Hechos y cifras clave sobre Europa y los europeos, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2007.

⁷⁸ Comisión Europea, *Una Europa para las Mujeres*, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2010, p.3. Disponible en, <http://bookshop.europa.eu/es/una-europa-para-las-mujeres-pbNA3009224/;pgid>, Consultado, junio 2015.

solo trabajan el 67% de mujeres con hijos pequeños en comparación con el 92% de hombres⁷⁹.

En otro aspecto, en esta región también se presentan rasgos de violencia contra las mujeres, la cual es definida como “cualquier forma acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”⁸⁰. Se puede pensar como una expresión de la cultura y la forma en que se relacionan los hombres con las mujeres en una sociedad.

Se calcula que 13 millones de mujeres de la UE experimentaron violencia física -12 meses previos a la entrevista- cifra que suma el 7% de mujeres entre los 18 y 74 años; alrededor de 9 millones sufrieron acoso sexual (18%) y un promedio del 12% de las mujeres entrevistadas indicaron que habían experimentado una forma de agresión o incidente sexual de un adulto antes de los 15 años de edad, lo que suma 21 millones de mujeres⁸¹.

En cuanto a religión, a pesar de que ha disminuido el número de personas que dicen creer en Dios, 52 por ciento de la población afirman pertenecer a diversas religiones dado que 49% de la población se declara cristiana/católica, mientras que un 15.7% musulmana, un 12% protestante, un 8.6% ortodoxa cristiana y un 0.4% judía. El 25% expresa que no profesa ninguna religión, aunque estas cifras mantienen variaciones entre cada país. En la región, el 46% de la personas están de acuerdo en la religión es importante, mientras que un 48% está en desacuerdo, presentándose diferencias en función de la edad y el nivel educativo⁸².

⁷⁹ Ídem, p.13 En el ámbito laboral, de acuerdo al documento Hechos y cifras clave sobre Europa y los europeos⁷⁹, en la década de los 50, más del 20 % de la población de la UE se dedicaban a la agricultura y la ganadería, mientras que un 40 % a la industria. A la fecha, la agricultura y la industria disminuyeron, mientras que el número de puestos de trabajo en el sector de los servicios aumentó, ya que para el año 2004 más de dos tercios de los empleos correspondían este sector.

⁸⁰ CEDAW, artículo 1°.

⁸¹ Ver el estudio, Violencia contra las mujeres, una encuesta a escala de la U.E, FRA – Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2014. Disponible en, <http://bookshop.europa.eu/es/violencia-de-g-nero-contra-las-mujeres-pbTK0113851/?CatalogCategoryID=cOwKABstC3oAAAEjeJEY4e5L>. Consultado, junio del 2015.

Los resultados de la encuesta se basan en entrevistas personales realizadas a 42 000 mujeres en los 28 Estados miembros de la UE, con una media de 1 500 entrevistas por país. La selección se hizo por muestreo aleatorio. Los resultados son representativos de las experiencias de mujeres entre los 18 y los 74 años residentes en la UE. Las entrevistas comprendían preguntas sobre violencia física, sexual y psicológica, victimización durante la infancia, hostigamiento y acoso sexual, incluidos nuevos medios para cometer abusos, como Internet. La encuesta está disponible en, <http://fra.europa.eu/en/vaw-survey-results>.

⁸² Ver, <http://www.humanreligions.info/numbers.html>- Consultado en junio del 2015.

En contraste con otras regiones del mundo, en la UE parece tener una menor fuerza las creencias religiosas y su impacto en la igualdad de género, como sí acontece en países con fuerte presencia de la religión musulmana, la cual tiene efectos en las políticas y las normas de una nación y por ende, la vida de las mujeres.

- Niveles de representación

En cuanto a la participación política de las mujeres, Europa se alza con el primer sitio en materia de representación femenina en sus parlamentos al llegar a un 35.2%. Los países escandinavos, junto con Estonia y Bulgaria encabezan los primeros lugares con porcentajes entre el 40 y 45%⁸³. Con cifras que rebasan el veinte por ciento de parlamentarias se puede observar países como Bélgica, Holanda, España, Alemania y Andorra, cuyas sociedades presentan características diferentes. Se considera que están relativamente bien representadas en los parlamentos las mujeres de la ex República de Yugoslavia, de Macedonia y Bielorrusia, así como Kirguistán y Moldavia. En contraste, algunos países rezagados son la Federación de Rusia, Rumania y Armenia. Las naciones postcomunistas ocupan los últimos sitios como son Georgia, Ucrania, Malta y Hungría⁸⁴.

Moghadam (2011), explica que la transición de los regímenes comunistas a la democracia no favoreció la representación política de las mujeres, a diferencia de lo que sí ocurrió de las transiciones de los regímenes dictatoriales en Latinoamérica, ya que con el arribo de los gobiernos postcomunistas a sus países, las mujeres de Europa del Este no pudieron ejercer influencia sobre los cambios políticos, perdiendo derechos clave y niveles de representación. Las feministas de Europa Oriental acuñaron el término “democratización con rostro de varón”⁸⁵.

Antes de la transición, la representación parlamentaria alcanzaba niveles del 30% en promedio, la cual tuvo una fuerte caída al bajar a un 8 o 10%⁸⁶. Este hecho refleja una reacción contra las nostalgias igualitarias sostenidas por el comunismo, cuando se

⁸³ Datos en www.quotaproject.com, y en Norris, Pippa, *Gender Equality in Elected Office: a Six-Step Plan Action*, Harvard University and Washington University, p. 12 Por ejemplo, postcomunistas, Alemania, Checoslovaquia, Bulgaria, Lituania, Hungría, Macedonia, Rumania, Rusia, Ucrania, Libros sobre AL y Europa. Tengo libro.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 10

⁸⁵ Ver, Di Marcco, Graciela, *Feminismos, Democracia y Democracia radical*, Universidad Nacional de San Martín, p.40

⁸⁶ Crf. Montgomery, Kathleen A, *Women's Access to Political Power in Post-Communist Europe*, Oxford University Press, 2003.

desmantelaron acuerdos institucionales que garantizaban la participación de diversos sectores como trabajadores, campesinos o mujeres⁸⁷.

Como se mencionaba, los países nórdicos-escandinavos, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, son pioneros en alcanzar el goce y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, no sólo por ser las zonas geográficas que inauguraron el derecho al sufragio, sino por tener a las primeras mujeres electas al Parlamento. Prueba de ello es Finlandia, nación pionera de Europa en la que se aplicó el sufragio universal e igualitario, por medio de una reforma que permitió en el año de 1907, tener a las nacientes mujeres elegibles en la historia de la humanidad⁸⁸.

Actualmente, la región comprendida por Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, alcanza un 40% de representación descriptiva, y cabe señalar que desde la década de los setenta, estos países lograron elevados niveles de representación no sólo en los parlamentos, sino en los consejos locales⁸⁹.

¿Qué factores influyeron en estos países? Dahlerup (2003), señala que diversos investigadores nórdicos han intentado responder a ello a partir de cambios estructurales como la secularización del Estado, la solidez de los partidos socialdemócratas, el desarrollo extendido de un sistema de bienestar social, el ingreso de las mujeres en el mercado laboral en los sesenta, el impulso educativo en la misma época, así como el tipo de sistema electoral y las diversas estrategias utilizadas por las mujeres con el fin de aumentar su presencia política⁹⁰.

Para reforzar estas ideas, Joni Lovenduski (1993), describe que si bien, en las décadas de los 60 y 70 el movimiento de las mujeres fue crítico respecto a las instituciones políticas y electorales, al preferir la autonomía que encontraban en los movimientos sociales, hubo una reconsideración de la importancia del ámbito político y comienzan a involucrarse en los

⁸⁷ Di Marcco, Graciela, *Feminismos, democracia y Democratizaciones*, Univesidad Nacional de San Martín.p.40

⁸⁸ En 2007 Finlandia celebró el Centenario de la Primera Mujer Parlamentaria con diversos eventos. Disponible en www.finlandia.es/public/default.aspx

⁸⁹ Datos en www.quotaproject.com y Norris Pippa, *Gender Equality in Elected Office: a Six-Step Plan Action*, Harvard University and Washington University, p. 12

⁹⁰ *La aplicación de las cuotas: experiencias latinoamericanas*, Informe del taller, IDEA Internacional, Lima, 2003, en el ensayo de Dahlerup Drade, *Estudio comparativos sobre las cuotas de género*, p.12

partidos exigiendo mayor participación en las dirigencias. Por ejemplo, las feministas en Noruega lograron presencia temprana en las estructuras de los partidos políticos como una estrategia de empoderamiento. Las implicaciones de la inclusión de las mujeres fue rápidamente entendida por los institutos políticos, abriendo espacios y con ello un avance relevante. Así, la demanda por la representación tuvo y sigue teniendo su mayor éxito en los países escandinavos.

En Noruega, la representación de las mujeres en la Asamblea Nacional pasó de un 10% en la década de los sesenta, a un 25% en los setenta; un 35% en los 80, hasta alcanzar el 40% en los años posteriores. En 1986, el 40% de los miembros del gobierno noruego eran mujeres, lo que permitió desarrollar una amplia agenda para la igualdad⁹¹. En contraste, México apenas llegaba en esta misma fecha a un 8% de legisladoras.

Al respecto, Darehrup (2003) advierte que estos países no pueden ser un referente a seguir, dado que alcanzar estos niveles de igualdad política les llevó casi ochenta años, partiendo del momento en que se logró el derecho al sufragio hasta la época actual; es relevante considerar otros referentes como son los casos de Sudáfrica o Argentina, donde la naciente democracia ha logrado integrar más de un 30% de mujeres en un periodo relativamente corto⁹².

Además de los factores estructurales favorables en Europa, a partir de los años 80 y con mayor potencia desde los 90, se impulsaron programas, acuerdos y tratados internacionales que promueven la igualdad entre hombres y mujeres en la vida económica, social y cultural en general, y la mayor participación política de las mujeres, en particular. Por ejemplo, el IV Plan Comunitario para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (1996), recomendó la participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisión⁹³. De manera reciente, la Comisión Europea, órgano ejecutivo y legislativo de la UE, trazó la estrategia para alcanzar la igualdad 2012-2015 a través de sus políticas y reformas, considerando entre sus cinco prioridades, la igualdad en la toma de decisiones.

⁹¹ Norris, and Lovenduski, Joni, *Gender and Party Polictic*, Thousand Oaks, London, England, 1993.p.2. En el mismo texto Hege Skeje realiza un análisis detallado sobre Noruega, capítulo 7

⁹² Ver, *La aplicación de las cuotas: experiencias latinoamericanas*, Informe del taller, IDEA Internacional, Lima, 2003, en el ensayo de Dahlerup Drade, *Estudio comparativos sobre las cuotas de género*, p.12.

⁹³ Una síntesis de los diversos marcos normativos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, puede verse Martínez, Ma, *Cuotas electorales de Mujeres y Derecho Constitucional*, Congreso de Diputados, 2007, p.41-58

Respecto a los factores institucionales que afectan la representación, en algunos países, la decisión de integrar las cuotas electorales ha sido otorgada a los partidos políticos mediante reformas estatutarias o incluso se han dejado como un acuerdo informal, como fue el caso de Alemania, Noruega o Reino Unido (Martínez 2007). En otros, han sido integradas de manera formal, como son las naciones de Bélgica (1994), España (2007), Grecia (2008), Polonia (2011) y Eslovenia (2014), lo que ha provocado, en algunos casos, establecer la paridad -Francia (2000)-, principio que implica el 50 y 50% para cada uno de los sexos y cuyo concepto se amplía en el Marco Teórico.

En estos países, los movimientos de mujeres dentro y fuera de los partidos llevaron a cabo un amplio cabildeo y una sólida argumentación para que las cuotas o el principio de paridad, fueran incluidas en sus leyes y se establecieran sanciones si no cumplían⁹⁴. El avance fue gradual y lo precedieron sentencias que establecían que las cuotas eran inconstitucionales. Por ejemplo, en Francia el debate adquirió relevancia después de que el Tribunal Constitucional, declaró inconstitucionales las cuotas electorales al considerar que transgredían uno de los principios paradigmáticos de su política y Constitución, el universalismo (Scott 2012). En Grecia y Portugal, las cuotas también fueron producto de la presión internacional (Verge 2013).

- Los casos de España, Italia y Francia.

En el caso de España, desde 1931 se reconoció el derecho al sufragio femenino, aunque ya en las elecciones de las Cortes Constituyentes realizadas por el voto universal masculino, fueron electas tres mujeres: Margarita Nelken, Victoria Kent y Clara Campoamor, quienes tuvieron un papel protagónico para que las mujeres alcanzaran el derecho al voto.

Las cuotas electorales en España fueron incorporadas en el año 2007 y de acuerdo a Martínez (2007), su integración fue influenciada por el derecho comparado de algunos países europeos. De manera específica y por primera vez, se promovieron a través de las iniciativas

⁹⁴ En el ensayo “*El movimiento a favor de la democracia paritaria en España y Francia*” se detalla cómo las transformaciones estructurales de los años 90, provocaron la mayor movilización de las mujeres en conjunto más allá de las filiaciones partidistas, aunque este hecho fue más claro en Francia que en España, “los cambios en el discurso acerca del papel del Estado, erosionarían las distinciones entre las familias políticas de izquierda y de derecha, y reforzarían las actuaciones inter-partidistas y aquéllas que reivindicaran los derechos políticos”. En ambos países los movimientos por alcanzar mayor representación femenina fueron muy activos y se inscribieron en el impulso de consolidar la agenda europea por la igualdad entre hombres y mujeres (Jenson & Fernández 2001).

de las comunidades autónomas de Baleares (2002), Castilla-La Mancha (2002) y la Comunidad de Valencia (2003) mientras que en la esfera nacional se presentaron algunos proyectos que fueron rechazadas en el año 2003⁹⁵. Posteriormente, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como una respuesta a la necesidad de potenciar el cumplimiento de la no discriminación y la normativa internacional ratificada por España en la materia. En consecuencia, en abril del 2007 se integró en el artículo 44 bis a la Ley Orgánica, 5/1985 del Régimen Electoral General⁹⁶.

A partir de la reforma, se incrementó de manera clara el porcentaje de mujeres en el Senado así como en la mayoría de comunidades autonómicas, y de forma menos contundente, en el Congreso, ya que con anterioridad había crecido su presencia por el impulso e integración de las cuotas que ya habían realizado los partidos de izquierda (Jerez y Delgado 2011; Uribe 2013). Al año 2015, España se coloca en la cuarta posición del ranking europeo con casi un 40% de mujeres en las Cortes Generales⁹⁷.

A partir de lo anterior, se puede observar que son múltiples los factores que han permitido a ciertos países de la región, mantener por diversas circunstancias un considerable porcentaje

⁹⁵ Para conocer los detalles de los proyectos de integración de las cuotas y el debate constitucional en España se puede ver, Jerez, Juan Miguel, y Delgado, Irene, “Mujeres y parlamentos entre dos siglos. El caso de España” (2011), *Psicología Política*, ISSS 1138-0853, No. 42, 2001, España, o bien, Jenson y Fernández, (2001) “*El movimiento a favor de la democracia paritaria en Francia y España*”, *Revista Española de Ciencia Política*, Número 5, Octubre, p.p. 79-110.

⁹⁶ A la letra el artículo 44 bis, de la Ley Orgánica del Régimen Electora, señala lo siguiente: 1. Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico. En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electorales podrán establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las candidaturas que se presenten a las Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas. 2. También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento en cada tramo de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo más cercana posible al equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso la proporción exigible respecto del conjunto de la lista. 3. A las listas de suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los anteriores apartados. 4. Cuando las candidaturas para el Senado se agrupen en listas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de esta Ley, tales listas deberán tener igualmente una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unas y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico.

⁹⁷ Después de las elecciones del 2008, en el Senado había 66 mujeres, frente a 54 de la Legislatura anterior, pasando de un 25.9 a un 31.7 por ciento, que llegará a 33% en el 2011. En cambio en el Congreso el incremento de mujeres fue menos significativo tras la aprobación de ley dado que en el año 2004, alcanzaban un 36% y sólo se incrementó en un 36.29%, lo que significó pasar de 126 a 127 diputadas de las legislaturas 2004-2008 a la 2008-2011, respectivamente (Uribe 2013).

de parlamentarias: como el grado de desarrollo que han alcanzado algunas naciones, Darehrup (2003), o el respectivo acortamiento de las brechas en materia de educación y trabajo. Sin embargo, no dejan de ser factores necesarios, pero no suficientes, como se explica en el apartado sobre la relevancia que tiene el diseño institucional y que en algunos casos, ha sido también un factor para favorecer la representación parlamentaria de las mujeres (Norris & Krook 2013).

De igual forma, la integración temprana de mujeres en los espacios partidistas y la inclusión de las acciones afirmativas en materia electoral, facilitaron el camino hacia la representación como son los casos de Noruega, Bélgica, España y Francia. Sin embargo, el desafío por alcanzar la paridad continúa, así como los esfuerzos del movimiento de mujeres y las estrategias para hacerla posible, tal como proponen Norris & Krook en su texto *Gender Equality in Elected Office: A Six-Step Action Plan*, en el que se diseña y presenta los pasos para alcanzar la igualdad en los parlamentos.

La otra región que se estudia es la que presenta menores niveles de representación a nivel mundial, el Medio Oriente y Norte de África, en la cual los aspectos culturales mantienen un peso importante como limitante para que las mujeres accedan al poder.

1.3.2 Medio Oriente y Norte de África, la barrera cultural⁹⁸

La región del Medio Oriente y el Norte de África (MENA por sus siglas en inglés) está conformada por diferentes naciones que tienen una gran diversidad social, cultural y económica⁹⁹. El mundo árabe-islámico es una mezcla de clases sociales, grupos raciales, étnicos y religiosos, comunidades rurales, urbanas y lingüísticas por lo que cualquier análisis debe considerar dicha diversidad¹⁰⁰.

A la región se le ha denominado el “cinturón del patriarcado” y es, además, espacio de conflictos políticos, batallas culturales y cambios sociales donde se ha experimentado un

⁹⁸ Los países que integran esta región son: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, Bahrein, Yibuti, Palestina, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Kuwait, Arabia Saudita-Emiratos Arabes Unidos, Yemen, Turquía, Jordania, Barhain, Omán, Katar-Qatar, Siria, y Cisjordania.

⁹⁹ Incluye tanto países ricos con petróleo (en el Golfo), como Estados con escasos recursos en relación a su población -como los casos de Egipto, Marruecos o Yemen.

¹⁰⁰ Joseph, Sua, *Women and Power in Middle East*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, USA, 2001, p. 1

vibrante movimiento de las mujeres, quienes han confrontando la esclerosis política, la rigidez cultural y las relaciones patriarcales de género¹⁰¹.

Algunos países de la región han ejercitado una profunda transformación política: desde Túnez al Estado de Argelia en 2010 pasando por Egipto, Yemen, Marruecos, Libia (2011) y Siria, donde se presentaron una serie de propuestas populares en demanda de cambios en sus gobiernos, una mayor rendición de cuentas, la extensión de las libertades y oportunidades de trabajo.

En algunos casos se derrocaron dictadores -Mubarak en Egipto y Gadafi en Libia- en otros, se hicieron compromisos para diversas reformas sociales y políticas. En Siria, la población se encuentra inmersa en una trágica guerra civil que continúa en 2015¹⁰². Hombres y mujeres jóvenes con mayores niveles de educación que las generaciones previas y con acceso al uso de redes sociales, han estado a la vanguardia de estos procesos de cambio, lo que constituye un reflejo de su interés por participar en el espacio público y de transformación social, hechos que paralelamente han impactado la vida de las mujeres (González 2014).

La Primavera Árabe -como se ha denominado al conjunto de alzamientos populares contra los regímenes de gobierno y un llamado de la ciudadanía a sus autoridades- ha llevado a un proceso gradual de transformación social y de reclamo democrático (González 2014). Previo a la Primavera Árabe -y en las últimas dos décadas, de acuerdo al Documento del Banco Mundial (2012), *Opening door: gender equality and development in the Middle East and North-* las mujeres han logrado alcanzar notables progresos desde los años noventa reduciendo las brechas de desigualdad entre en aspectos como educación y salud. Por ejemplo, en los últimos veinte años, la mortalidad materna disminuyó en un 60% (el mayor descenso en el mundo) mientras que el nivel educativo se incrementó como nunca antes en la historia¹⁰³.

¹⁰¹ Moghadam, Valentina M, *From patriarchy to empowerment : women's participation, movements, and rights in the Middle East, North Africa, and South Asia, Gender and globalization*, Syracuse University Press, New York, USA, 2007, p.1

¹⁰² Cfr. González, Paloma, *A tres años de la Primavera Árabe*, Cátedra, Madrid, España, 2014.

¹⁰³ Sobre el avance en la educación de las mujeres y niñas, véase *Gender Equality and Development*, World Bank, USA, 2012. Asimismo, los textos de Valentina M. Moghadam destacan el progreso educativo ha posibilitado diversos cambios para la vida de las mujeres. En un ensayo sobre Afganistán, Irak y Palestina, concluye que la expansión de la educación de las niñas, ha constituido el centro de los derechos, basado en una estrategia de desarrollo, especialmente en en Afganistán 2007:350). De igual forma, en el ensayo denominado *Mujeres en movimiento por la igualdad de género en el Magreb*, del texto *Feminismo, Democracia y*

Si bien las mujeres han tenido avances en la inclusión laboral, su participación es de apenas un 25% mientras que el promedio mundial es del 50%. Se considera que las barreras legales y sociales limitan dónde y cómo pueden trabajar, y que la falta de habilidades en el mercado estrecha sus oportunidades. Aunque los aspectos del empoderamiento económico constituyen un desafío, la participación política sigue estando rezagada con respecto a otras regiones del mundo¹⁰⁴.

Aun con los adelantos logrados y su relevante participación en los diferentes movimientos sociales contra sus regímenes políticos en países como Argelia (1992), Egipto o Túnez¹⁰⁵, las mujeres de Medio Oriente y Norte de África tienen las más bajas tasas de representación parlamentaria, aunque ahora, en la mayoría de los países de la región, se garantiza la igualdad constitucional entre mujeres y hombres.

En términos generales, el Informe del Banco Mundial describe una paradoja de la zona: mientras la mayoría de los países han tenido un progreso notable en resultados de salud y educación, estas inversiones de desarrollo humano aún no se han traducido en tasas más elevadas de participación femenina en la vida económica y política, además de exponer la situación política de las mujeres. Como antecedente, en la última mitad del siglo pasado, las parlamentarias alcanzaban apenas entre un 7% y un 8% de representación, frente al 17.8% que se registra en el 2014 considerando ambas cámaras¹⁰⁶.

En contraste, en la década de los noventa, América se pasó de un 12% a un 25% en 2014. Al respecto, Moghadam (2011), socióloga iraní, considera que el 8% promedio de la representación femenina es prueba de la naturaleza masculina de los procesos políticos y de las instituciones de la región. La representación parlamentaria va desde los bajos niveles de Egipto e Irán, hasta la respetable cifra de Túnez.

Democracia Radical, Khadija Arfooui describe la importancia del esfuerzo de las mujeres por lograr su alfabetización de dicha región, p.91.

¹⁰⁴ *Opening door: gender equality and development in the Middle East and North*, 2013, p.144 y Tabla 10, disponible: www.worldbank.org/external/default/WDSPContentServer/WDSP/IB/2013/02/07/000356161_20130207123902/PDF

¹⁰⁵ Ver: Moghadam, Valentine, *Globalizing Women, Transnational Feminist Networks*, Johns Hopkins University Press, USA, 2007.

¹⁰⁶ Cfr página de la *Unión Interparlamentaria*, en www.iup.org

Los bajos porcentajes regionales pueden ser explicados, en parte, por el hecho de que el otorgamiento de los derechos políticos a las mujeres es un hecho relativamente reciente, como lo analizan Kenworthy & Malani (1999), al considerar el año de obtención del sufragio como un factor causal de los niveles de representación. Al igual que en América Latina, en la región MEDA, la mayoría de países dieron el derecho al voto a las mujeres después de los años cincuenta o con posterioridad.

Por ejemplo, las mujeres de Jordania obtuvieron el derecho al sufragio en 1974 y las kuwaitíes hasta el año 2005. El único país que otorgó con prontitud este derecho, fue Turquía en 1930. Por otra parte, en Irán y la región de Arabia, las cuestiones de la democratización nacen, más o menos, conjuntamente con los derechos de las mujeres. Valentine M. Moghadam (2011) advierte que es importante no separar este hecho ni darles un trato de agendas diferenciadas, ya que se encuentran estrechamente entrelazados y son dependientes: “separarlos, entonces, implica una confusión conceptual así como un riesgo político” (p.41).

Al respecto Kenworthy and Malanini (1999), establecen que el año de obtención del sufragio es una variable significativa que explica la evolución de la representación política de las mujeres (p. 260). En algunos países que se obtuvo el derecho al voto de manera temprana, tienen mayor cantidad de parlamentarias.

- Transición a la democracia.

Con base en los informes y textos de la región, se puede observar que el avance ha sido lento en cuanto a derechos políticos, pero ha significado un progreso que refleja los esfuerzos locales por hacer realidad la agenda internacional por los derechos humanos de las mujeres. Desde los años ochenta y noventa, las mujeres fueron actores centrales del proceso de democratización de algunos países como el caso de Marruecos y Turquía, experiencia que concuerda con otros esfuerzos de transición del autoritarismo a la democracia en países como Chile y Argentina, donde las mujeres marcharon y se manifestaron contra el autoritarismo¹⁰⁷.

Algunas muestras del proceso transformador del Medio Oriente y el Norte de África son los siguientes casos: en 2005 se establecieron en Kuwait iguales derechos para hombres y mujeres; en otros Estados, pertenecientes al Consejo de Cooperación de los Países del Golfo

¹⁰⁷ Íbidem.p.42

como Bahrein, Omán y los Emiratos Árabes, se nombró a un porcentaje de mujeres en sus oficinas políticas. Mientras que en Túnez, las mujeres constituyen el 25% de la Asamblea Nacional, en Irak y Jordania fueron incluídas las cuotas electorales en el Parlamento en el ámbito municipal.

Destaca el caso de Arabia Saudita, monarquía absoluta donde finalmente, las mujeres conquistaron sus derechos políticos: en 2011, el Rey Abdalá bin Abdelaziz hizo el anuncio de que las mujeres podrían formar parte del Consejo Consultivo (Shura), participar como candidatas en el ámbito municipal (*municipal council elections*) y tener el derecho a votar a partir del año 2015¹⁰⁸. Otro hecho relevante fue la entrega del Premio Nobel de la Paz en el año 2003 a Shirin Ebadi, abogada iraní y activista por los derechos humanos, primera mujer musulmana en ser distinguida con este reconocimiento internacional¹⁰⁹.

Una vez descrito un breve contexto de la región del Medio Oriente y el Norte de África, cabe la pregunta en torno a cómo lograron este avance si -como se analizará más adelante- las mujeres de la región siguen padeciendo amplias brechas de desigualdad por razón de sexo. ¿Dónde se encuentran las barreras de las mujeres de esta zona: en el ámbito institucional, cultural o económico? ¿Cómo se entrelazan unas y otras?¹¹⁰.

De manera sucinta, el texto del Banco Mundial (2013) establece sobre la región, lo siguiente: “las normas de género conservadoras de la región, el marco jurídico e institucional, y los incentivos y oportunidades generados por la estructura económica se encuentran en el corazón de rompecabezas de los bajos niveles de la participación política femenina y la economía”¹¹¹.

El movimiento de mujeres de la región, al igual que en casi todas las naciones del mundo, respondieron al llamado de empoderamiento hecho en Beijing en 1995, apoyadas en el proceso de globalización, colocando en la agenda internacional la relevancia de los derechos humanos de las mujeres (Moghadam 2005:3).

¹⁰⁸ Ver, *Opening door: gender equality and development in the Middle East and North*, 2013, p.51

¹⁰⁹ Semblanza del documento *1325 Mujeres tejiendo la paz*, en: www.1325mujerestejiendolapaz.org

¹¹⁰ Es preciso considerar que la región no está excluida de un importante el movimiento de mujeres proceso de transformación social y político, y por el avance en el ejercicio de sus derechos humanos. Ellas fueron y siguen siendo, protagonistas de los cambios en las últimas dos décadas en la región. Cf. González, Paloma, *Tres años de las revoluciones árabes*, Catarata, Madrid, 2014.

¹¹¹ *Opening door: gender equality and development in the Middle East and North Africa*, 2013, p.12

Los cambios en esta región, también han sido generados por el desarrollo económico, la educación universal, los medios de comunicación y las reformas legales logradas en el Medio Oriente. Esto ha producido una subversión al orden patriarcal y una acelerada transición a la modernidad; la evolución de las mujeres del Medio Oriente está cambiando la comprensión popular de las mujeres, así como antiguos códigos legales en la esfera pública y la vida privada (Moghadam, 2005:95). Esta perspectiva coincide con el análisis presentado por Inglehart & Norris (2003) sobre el nivel de desarrollo económico y su impacto en la igualdad de género.

Como se mencionaba, los derechos por la educación y la salud han sido considerados derechos universales para las mujeres. En contraste, la participación en la fuerza laboral recibe más influencia por las preferencias y oportunidades en el mercado. Alrededor del mundo, sólo el 50% de las mujeres participan del ámbito laboral, pasando por una amplia variedad que va del 25 al 65% de participación femenina, aunque los ingresos son precarios.

Con base en diversa literatura académica, el *Informe* encuentra un paralelismo -además del mercado y la oferta de trabajo- en factores que inciden en la baja participación de las mujeres en la fuerza laboral y la participación política, estos son: la riqueza petrolera, la religión y normas patriarcales. A continuación se explora cada uno de dichos aspectos.

Primero, la riqueza del petróleo: se describe que el 50% de la extracción del llamado oro negro proviene de cinco países de esta región: Iran, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Además de otras causas, el bajo rango de participación de la mujer es atribuido al petróleo, dado que los países ricos en petróleo de esta región -a diferencia de naciones como Rusia o Noruega-, tienen sectores privados no diversificados que se caracterizan por el empleo dominado por hombres y grandes sectores públicos. Se ha argumentado que la estructura económica, las normas y las características institucionales de los países con petróleo, disuaden del sector formal de trabajo a las mujeres¹¹².

¹¹² La producción de petróleo reduce el número de mujeres en la fuerza laboral y con ello su capacidad de tener influencia política. A través del mundo, los factores específicos que limitan la mano de obra femenina en la fuerza laboral son las normas o roles de género, el marco legal y la estructura económica. Estos factores específicos de la región pueden tener una poderosa influencia en los incentivos, preferencias, oportunidades y la habilidad de las mujeres para participar en el trabajo y en la política. En ninguna otra región una economía basada en el petróleo y la religión **tiene** efectos tan poderoso como en la de Medio Oriente y Norte de Africa. Ver: *Opening door: gender equality and development in the Middle East and North Africa*, 2013, p.12

Segundo, es claro la religión que ha jugado un papel fundamental en los roles de género, las normas y las leyes que se establecen, sobre todo en materia familiar. Los países de esta zona del mundo tienen en común la religión del Islam¹¹³. Sin embargo, reducir los roles de género al Islam es demasiado simplista, ya que existe una diversidad de resultados para las mujeres en el mundo musulmán. Si bien, el rol prescrito para la mujer en la teología islámica y en la ley, es el argumento continuo de ser el mayor determinante del estatus de la mujer, se advierte que el Islam debe ser interpretado en sus diferentes contextos de tiempo y espacio. El Islam es “plástico”, existen varios Islam, el de Túnez, Irán, Arabia Saudita o Nigeria, por ende; no es una región uniforme ni homogénea sencilla de examinar (Moghadam 2005:8).

- Familia y patriarcado.

En general, las normas sociales y culturales de la región dictan aquello que la mujer puede y no hacer, en su conducta individual del día a día. En diversas sociedades del mundo, las normas jurídicas reflejan los elementos de una sociedad patriarcal donde el ámbito de desarrollo para las mujeres, es el hogar y la familia; mientras que para el hombre, es la esfera pública, donde se toman las decisiones políticas y económicas, además de que es el sostén del hogar y el jefe de familia (Moghadam 2005: 31). La noción de familia es la unión económica donde el varón es el proveedor y la mujer dependiente, basado en los Códigos islámicos (Moghadam 2005: 171)¹¹⁴.

¹¹³ Entre los dogmas del Islam “Creencia de un Dios Único e Indivisible, Creador, Revelador y Legislador Supremo. Creer en Dios es creer en el Absoluto, quien está fuera del alcance de toda ciencia. Decir Absoluto significa que el ser humano es relativo, por lo que no puede acaparar ni pretender los atributos del Absoluto”. Islam, una perspectiva histórica, Historia y Vida, Temas Clave, 2001.

¹¹⁴ En la región, el rol principal de la mujer es el de madre y esposa, posiciones esencialmente no económicas y de la esfera privada. Asimismo, la familia extendida es importante ya que es el núcleo de la sociedad islámica en términos políticos, económicos, sociales y religiosos, cuestión consagrada en varias de las constituciones de los Estados Árabes o Musulmanes. Esta situación se reproduce en el ámbito político y en el aspecto económico donde también se reconoce la centralidad de la familia en diversos caminos, incluyendo el reclutamiento laboral, los salarios y los beneficios. Las instituciones religiosas se consideran las guardianas de la familia y de la salvaguarda de la santidad. Las personas están altamente conscientes de cada uno de los otros miembros de la familia, de su identidad y su estatus. El acceso al trabajo, a las instituciones o a los servicios del gobierno se realizan -frecuentemente- a través de las conexiones familiares. En esta región, las creencias religiosas y la centralidad de la familia tiene profundas implicaciones para las relaciones de género y las normas patriarcales (Joseph, Sua 2001:2).

Las normas patriarcales en los países islámicos emanan de la religión. El *Shari’a*, es el derecho islámico. Literalmente significa *el camino a seguir* y, como término técnico, establece los derechos y deberes de cada musulmán. Se destaca una fusión jurídico-espiritual, una especie de simbiosis y cohesión entre lo social y lo religioso de dos fuentes principales: el Corán y el Sunna (y otras fuentes secundarias). El *Fiqh* es la jurisprudencia islámica, ciencia que estudia el Shari’a en general y los aspectos relativos al culto y a las relaciones interhumanas en particular como el Derecho Civil o el Derecho Penal. Es considerado fuente de guía y reglamentación cuando el Estado Islámico se expandió-

Esto significa que, a diferencia de Estados seculares o laicos, las normas encuentran su fundamento en la creencia espiritual y no en las instituciones del Estado que -si bien son sujetas a la interpretación de los textos sagrados en cada país- comparten una visión: son normas patriarcales (característica de las religiones).

Por ejemplo, los tres países del Magreb –Marruecos, Túnez y Argelia- además de Arabia Saudita se regían por la ley de la *Shari'a*, regulándose todo el ámbito familiar cuyas normas se basaban en una lectura rígida y literal del Corán y los dichos del profeta Mahoma. En todos los textos jurídicos, las mujeres se enfrentaban a la resistencia masculina del cambio. Una resistencia enquistada en las costumbres tribales. La totalidad de la sociedad magrebí responde a un modelo patriarcal con base en la población árabe y bereber islamizada, donde la población se rige por los conceptos de tribus y clanes (Khadija Arfaoui 2011: 92).

De lo anterior, se desprende la fuerte idea de la responsabilidad de las estructuras familiares con sus respectivos códigos, el régimen tribal y el sistema patriarcal como determinantes en la forma en que las mujeres están limitadas a participar en el ámbito público. La noción de discriminación de género y su reforzamiento, se da por estos elementos. El solo hecho de ser mujer, deslegitima su participación y su posible triunfo como candidata¹¹⁵.

Así como la interpretación del Islam no ha sido unívoca, las normas tampoco han sido estáticas. En algunos países se realizaron reformas previas a los movimientos que se gestaron a partir de la Conferencia de Viena de 1993 y a Beijing, en 1995. Por ejemplo, desde 1956 en Túnez, el presidente Habib Bourguiba -tratando de poner un freno a la religión-, modificó el Código Familiar promulgando el Código del Estatus Personal, que aún es visto como revolucionario en comparación con el resto del mundo árabe actual. La nueva norma abolió la poligamia y el repudio a la esposa, se legisló sobre el divorcio y la edad mínima para contraer matrimonio, además de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, la

El caso de Marruecos es interesante para describir lo anterior. La ley de familia marroquí se denomina *Mudawana*. Tiene cinco capítulos. Dos tratan sobre el matrimonio y el divorcio. Éstos incluyen de principio a fin la inferioridad de las mujeres y destacan la importancia de los roles masculinos dentro de la familia (Arfaoui 2011:95). Como relata el ensayo por la igualdad de género en el Magreb, mientras que Túnez se había adoptado un *Código de Familia* sin precedentes desde 1956, en contraste, hasta el año 2010, Marruecos adoptó la codificación de la ley islámica carente de todas las reformas impulsadas por reformistas dejando sin cambios la situación de la mujer. Cuando Marruecos alcanzó la independencia en 1956, contaba con un 80% de población rural, de modo que la solidaridad del parentesco era sumamente importante. Dado que el apoyo de las tribus era crucial, el Rey Mohamed V adoptó varias medidas que preservaban las prácticas tribales en vez de optar por las reformas progresistas sugeridas por activistas por los derechos humanos (Sadiqui 2011:94). Para abundar en el movimiento de Marruecos, ver ensayo “*El papel central de la ley de familia en el movimiento Marroquí*”, de Fátima Sadiqui, en texto *Feminismo, democracia y democracia radical*, p.94

¹¹⁵ Ver, Moghadam, Valentina M., *From patriarchy to empowerment : women's participation, movements, and rights in the Middle East, North Africa, and South Asia*, Gender and globalization, Syracuse University Press, New York, USA, 2007; Di Marco, Halen Afshar, Margot Madran

planificación familiar y el aborto (legalizada en 1961), medidas que le darían un impulso económico al país¹¹⁶.

Sobre estos temas, Ziba Mir Hosseini (2010), doctora en Antropología por la Universidad de Cambridge, especialista en estudios de género y Medio Oriente, expresa lo siguiente:

“Creo que la cuestión de las relaciones de género dentro de la familia -que es de lo que tratan los derechos individuales- está relacionado de hecho con la esencia de poder en las sociedad en un sentido más amplio. Teniendo en cuenta que la familia es la unidad básica de la sociedad, solo si hay justicia y democracia dentro de la familia es posible tener justicia y democracia posteriormente en la sociedad. En otras palabras, lo esencial para democratizar toda la sociedad es democratizar su unidad básica, la familia, y para ello esta reforma legal resulta fundamental”¹¹⁷.

En resumen, los aspectos que impactan la representación política de las mujeres del MEDA son del orden estructural, en cuanto a la baja participación en la fuerza de trabajo por parte de las mujeres y una economía basada en el petróleo de algunos países, sin embargo, las barreras principales parecen encontrarse en los factores culturales, dado que la religión, el patriarcado y los rígidos roles de la familia, limitan y coartan la participación de las mujeres en la esfera pública; aunque esto ha ido cambiando entre los diferentes países que integran la zona y en los procesos democratizadores de algunas naciones de la zona, donde la participación de las mujeres en los movimientos por los derechos humanos, ha permitido que las barreras se vayan debilitando.

1.3.3 América Latina, rompiendo el techo de cristal

Se denomina América Latina a la región del continente americano conformada por los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,

¹¹⁶ Cf. Di Marcco, Graciela, *Feminismo, democracia y democracia radical*, Universidad Nacional de San Martín, Argentina, 2011, en el ensayo *Movimiento de mujeres por la igualdad de género*, de Khadija Arfaoui. Cap.4, p.92.

¹¹⁷ La investigadora explica que el *fiqh*, ley islámica, la jurisprudencia islámica, como tradición jurídica con raíces centenarias en las sociedades musulmanas, no puede simplemente desaparecer. Las expertas feministas islámicas y activistas no están solamente articulando prescripciones de *fiqh* alternativas para contrarrestar abiertamente las patriarcales, muchas de ellas se están involucrando en diversos paradigmas al mismo tiempo: *fiqh* progresista y o interpretación coránica, razonamientos sobre derechos humanos, medios, leyes y tratados internacionales, teniendo en cuenta la auténtica realidad vivida por las mujeres musulmanas.

Disponible en:

http://www.webislam.com/articulos/38231-comprendiendo_el_feminismo_islamico.html. Consultado, junio del 2015. (poner en bibliografía)

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (CEPAL 2014).

Después de tres décadas de dictaduras e inestabilidad política, América Latina avanzó en el establecimiento de un régimen democrático. A finales de los años setenta, la región formó parte de la tercera ola democratizadora donde las mujeres tuvieron una importante participación política, al igual que otras regiones del mundo¹¹⁸.

Para el año 2015, algunas autoras se preguntan si las naciones que integran la zona se encuentran realmente o no, en la denominada “cresta de la ola” en cuanto a representación política se refiere¹¹⁹. ¿Por qué se discurre esta idea? En menos de una década cuatro mujeres han logrado ocupar los cargos de Presidentas de la República. Michelle Bachelet, fue reelecta en Chile en diciembre del 2013, después de ejercer como mandataria del 2007 al 2011; Cristina Fernández de Kirchner, quien también comenzó su primer mandato en el año 2007, encabezó su segundo periodo de gobierno en Argentina del año 2011 al 2015. Laura Chinchilla Miranda fue presidenta de Costa Rica para el periodo 2010 al 2014 y Dilma Russel fue votada en las urnas para dirigir el gobierno de Brasil del año 2012 al 2016¹²⁰.

Si bien el contexto de la región es diferente en cada país, presenta algunas características comunes. En general, las mujeres han logrado avanzar en indicadores como la fuerza laboral y la educación. Aunque se han disminuido los niveles de pobreza extrema, persisten aún bajos niveles de ingreso y desarrollo económico, así como expresiones de violencia generalizada (PNUD 2013).

En particular, pueden considerarse tres elementos que han impactado en la vida de las mujeres: primero, los niveles que conllevan una alta tasa de violencia de género e inseguridad cuya expresión más severa es el feminicidio; segundo, desde la integración de las mujeres al mercado laboral visto desde el aspecto estructural como económico; y tercero, desde la perspectiva institucional, las reformas legales para incluir las cuotas electorales, que

¹¹⁸ Beatriz Llanos, *30 años de democracia ¿en la cresta de la ola? Participación política de la mujer en América Latina*, IDEA Internacional, Miraflores, Perú, 2008; *Ojos que (aún) no ven*, IDEA Internacional.

¹¹⁹ Ídem y Roza, *Partidos políticos y paridad, la ecuación pendiente*, IDEA Internacional.

¹²⁰ Anteriormente, bajo otro contexto, Violeta Barrios de Chamorro fue la viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro y ocupó el cargo en Nicaragua de 1990 a 1997, y Mireya Elisa Moscoso en Panamá de 1999 al 2004, quien fuera viuda de Arnulfo Arias, tres veces presidente de la República.

lo mismo que en algunas naciones de Europa, fueron un peldaño para incorporar la paridad en algunos países (PNUD 2014).

Actualmente en cuanto a desarrollo, el contexto en la región es contradictorio y guarda ciertos rasgos homogéneos entre los países. El *Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina*, describe que se muestra una economía más fuerte e integrada, menos pobreza, democracias más consolidadas y Estados con mayor responsabilidad en la protección social. Sin embargo, el punto débil es la epidemia de violencia y la inseguridad de la última década, aunado al crecimiento de los delitos penales y una sensación de temor entre la ciudadanía. “En una década han muerto más de un millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal. Y, en un día típico, en América Latina 460 personas sufren de la violencia sexual; la mayoría son mujeres¹²¹”.

Al mismo tiempo, a diferencia de la región del Medio Oriente y Norte de África, la familia, la escuela y la comunidad han perdido fuerza en algunos contextos para el fortalecimiento del tejido social, generando formas de organización al margen de ley por parte de la ciudadanía y de mano dura por parte de los gobiernos¹²².

La violencia de género así como la instrumentación eficaz de leyes para sancionarla es un problema relevante. Actualmente, el 97% de los países han aprobado leyes contra la violencia doméstica y ocho países cuentan con normas que tipifican el feminicidio. Catorce, de los 18 países de Latinoamérica y el Caribe, se encuentran entre los 25 Estados con mayor tasa de feminicidios -según el Informe de la organización independiente *Small Arms Survey* de los cuales El Salvador es el país con mayor número de homicidios contra mujeres. Esta organización considera que en el mundo ocurren un promedio de 66 cada año¹²³. En este contexto es que las mujeres de América Latina hacen política, contexto de violencia que se agudiza en países como México¹²⁴.

¹²¹ Cf. *Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina*, PNUD, Nueva York, Estados Unidos, 2013.

¹²² *Ibidem*

¹²³ Ver, *Femicide, a global problema*, disponible en: www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/HResearch_Notes/SAS-Research-Note-14.pdf

¹²⁴ El *Informe Regional sobre desarrollo humano* detalla para enfrentar los retos futuros, se establece que la zona requiere conocer en qué medida el crecimiento económico experimentado ha implicado un cambio en los patrones productivos y una transformación reproductora de la desigualdad, reconociendo que el papel del mercado de trabajo como un espacio que puede reproducir la desigualdad o revertirla. También que la

Un aspecto donde las mujeres han experimentado movilidad es en el factor estructural del empleo. De acuerdo al texto *Trabajo decente e Igualdad de Género* (2013), los cambios en las orientaciones de políticas públicas entre los años 2000 y 2008, así como un contexto internacional favorable, permitieron transitar por un crecimiento más estable con efectos positivos sobre la inversión y la evolución del empleo. Si bien, la desigualdad medida por el índice de Gini disminuyó en la década del 2000, la región continúa como la más desigual del mundo¹²⁵ y se considera que en la base de la desigualdad del mercado de trabajo, se encuentra la inequitativa distribución del tiempo no remunerado de hombres y mujeres, además de las desventajas estructurales para la inserción de ellas en el mercado¹²⁶.

Aunque las mujeres representan el 51.2% de la población total y el 52.1% de la población en edad de trabajar, en general existen déficits de trabajo decente, la segregación ocupacional y los ingresos, además de la precariedad laboral. Están sobre-representadas en el grupo que se sitúa fuera del mercado de trabajo (71.7%) y sub-representadas entre quienes tienen empleo (41.1%). La explicación sobre esta brecha parece encontrarse en el ámbito privado - como en los países de la región MEDA- esto es, en la desproporcionada carga de trabajo que asumen las mujeres en el cuidado de la familia, actividad no remunerada¹²⁷.

En la última década, se incorporaron al mercado de trabajo en la región 22,8 millones de mujeres en América Latina y el Caribe. Con este avance, poco más de 100 millones de mujeres integran la fuerza laboral actual, lo cual se traduce en cinco de cada diez mujeres en edad de trabajar, en contraste con ocho de cada diez hombres. La integración de las mujeres ha sido un proceso constante en los últimos treinta años, cuyo logro se debe a diversos

inseguridad es un problema compartido por los 18 países de la región analizados por este informe, pero existen variaciones importantes entre ellos y al interior de los mismos³. América Latina es la única región del mundo donde la violencia letal aumentó entre 2000 y 2010. Mientras que la tasa de homicidio en la mayoría de las regiones del mundo fue negativa (de 0% a -50%), en América Latina presentó un aumento del 12%: en una década, han muerto más de un millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal. Aunque la tasa de homicidios sigue siendo alta para la mayoría de los países, en los últimos tres o cuatro años ésta se ha estabilizado e incluso ha disminuido para algunos países de la región. La evolución de la tasa de homicidios para el periodo de 2005-2011, para aquellos países con una tasa mayor a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Dentro de los países que presentan las bajas más notables en su tasa de homicidios, se encuentran aquellos que pasaron por conflictos armados o severas crisis de inseguridad. Colombia redujo su tasa de homicidios casi a la mitad en 10 años. Recientemente, las tasas de homicidios de Guatemala (desde 2009) y El Salvador (desde marzo de 2012) registran caídas sustanciales. Ya teniendo una baja tasa de homicidios, Costa Rica logró una disminución cercana al 15%, entre 2011 y 2012, p.15

¹²⁵ Cf. *Trabajo decente e Igualdad de Género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo en las mujeres de América Latina y el Caribe*, CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT, Chile, 2013, p.24.

¹²⁶ *Ibíd*em, p. 28

¹²⁷ *Ídem* p. 30

factores: la necesidad de aportar ingreso familiar, el aumento de los hogares con jefatura femenina, el retraso de la maternidad y la disminución de la fecundidad, aunado al aumento de la cobertura de servicios básicos, lo que conlleva aminorar la presión sobre el tiempo de las mujeres. Así, la tasa de participación laboral femenina regional aumentó cerca de tres puntos porcentuales en la última década (49.2% en 2000; 52.6% en 2010), mientras que la de los hombres cayó en un punto porcentual¹²⁸.

Un problema que subsiste en la región es el subempleo y otro dato interesante, es que el empleo público representa una fuente importante de puestos laborales especialmente para las mujeres: el 17% de éstas son asalariadas del sector público -en contraste con el 10.3% de hombres- lo cual tiene mayor incidencia en Venezuela, Panamá, Argentina y Costa Rica.¹²⁹ En resumen, a diferencia de los hombres que lo hacen en actividades remuneradas, las mujeres de América Latina participan más que en cualquier otro periodo en la fuerza laboral, pero trabajan más en actividades no remuneradas. Persiste también la brecha de ingreso y subvaloración de la mujer ya que en la región reciben ingresos menores que los hombres por la misma actividad.

“Esto indica que mientras los hombres logran mayores avances en sus carreras y acceso a posiciones de mayor responsabilidad, el techo de las mujeres constituye un fenómeno mundial y persistente, fuertemente asociado a pautas culturales de género, prejuicios y estereotipos. A pesar de la masiva incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, todavía existe la imagen de los hombres como proveedores de familia y de las mujeres como aportantes de ingresos complementarios”¹³⁰.

¹²⁸ A pesar del incremento de mujeres en este ámbito, la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres continúa siendo elevada. La heterogeneidad de la región también se expresa en las diferencias del nivel de participación: Perú es el país con mayor tasa de participación laboral femenina (país con un 22% de parlamentarias) además de Colombia, Paraguay, Uruguay y Brasil, que se localizan por encima del promedio regional con 52.6%. Países como Chile, Costa Rica, Honduras y México están por debajo del 45%. El informe resalta que 6 de cada 10 mujeres entre los 25 y 49 años son parte de la fuerza laboral, mientras que en Bolivia (22% de congresistas) y Guatemala (13% de parlamentarias) el 20% de las mujeres ocupadas en la agricultura, son niñas menores de 14 años. Cf. *Trabajo decente e igualdad de género*, et. al. p. 37

¹²⁹ Las mujeres suelen concentrarse en las áreas de la economía informal: en el servicio doméstico, la asistencia a familias y en pequeñas empresas familiares. Adicionalmente, existe una distribución inequitativa de las horas de trabajo entre los sexos que se manifiesta en la repartición desigual del trabajo doméstico no remunerado (tareas relacionadas con la vestimenta, la limpieza, la salud y la transformación de los alimentos) lo cual repercute en sus participación en la vida económica y laboral con las obligaciones reproductivas y otro tipo de actividades, como la política. La investigación cita que las encuestas sobre uso del tiempo, muestran la persistencia sobre la división sexual del trabajo, pues a pesar del masivo ingreso de las mujeres a la fuerza del trabajo, las tareas domésticas y del cuidado de las personas siguen considerándose un asunto privado que recae en las mujeres. *Ibíd.*, p.42.-47

¹³⁰ *Ibíd.*, p.57

- Educación y fecundidad.

Se ha logrado incrementar el nivel educativo de las mujeres que forman parte de la fuerza laboral, en particular en las mujeres jóvenes (menores de 30 años), quienes han sobrepasado a los hombres en logros educativos y matrícula escolar, excepto Bolivia, Haití y Guatemala. En términos generales, la tasa neta de matrícula en educación secundaria es del 75% en mujeres y del 70% en hombre (CEPAL 2014).

Al igual que en las diversas regiones del mundo, la tasa de fecundidad en América Latina ha ido disminuyendo al tener un promedio de dos hijos por mujer, en contraste a las década de los 50 y 60, cuando se alcanzaba un promedio de 6.8 hijos, y se sitúa por encima del promedio mundial que era de cinco hijos por mujer. El valor regional actual es inferior al mundial que es de 2.5 hijos por mujer y es semejante a las cifras presentadas por Europa hace cuatro décadas. Sin embargo, existen disparidades entre países ya que en algunos se presente un nivel inferior de reemplazo como son los casos de Argentina y Uruguay, países que guardan diferencia con Bolivia o Guatemala¹³¹.

Así, se tiene que en la región se mantienen aspectos contradictorios, mientras por una parte sigue presentándose el fenómeno de la violencia contra las mujeres en sus diversas modalidades, se han tenido avances en materia educativa y han disminuido la tasa de fecundidad.

De lo antes expuesto surge la pregunta: ¿por qué en una década se incrementó el número de parlamentarias? Una de las respuestas posibles se encuentra en el tercer elemento de análisis, enmarcado en el orden institucional, y se refiere a la integración de las cuotas electorales en los marcos normativos de diversos países de la región, como se describirá con mayor profundidad en el Capítulo IV.

- Representación política

En los años noventa los países latinoamericanos empezaron a aprobar leyes de cuota de género. La primera ley de cuota en la región, y en el mundo, fue aprobada en 1991 en Argentina, norma que estipuló que los partidos políticos debían reservar el 30% de cupos de sus listas electorales para las mujeres. Como se podrá apreciar a detalle en el Capítulo IV,

¹³¹ CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, Naciones Unidas, Santiago de Chile, Chile, 2014

casi todos los países latinoamericanos han seguido el ejemplo argentino. Al año 2014, tan sólo Chile, Guatemala, Nicaragua y Venezuela no cuentan con leyes de cuotas para las elecciones legislativas nacionales, no obstante, los dos últimos las tienen para elecciones locales.

El impacto numérico de las leyes de cuota es evidente. La presencia de las mujeres en las cámaras bajas -para el caso de los países que tienen una sola cámara-, pasó de un promedio de 8.8 por ciento en 1990 a 12.6% en el 2000, y luego a 21.3 por ciento en 2010¹³². Más aún, la presencia de las mujeres en el Poder Legislativo,-en los países que cuentan con leyes de cuota-, es mayor que en los que no cuentan con dichas leyes: 24.4% en los primeros contra un 15.1% en los segundos¹³³. Esta diferencia en la presencia de mujeres legisladoras entre los dos grupos de países se acentuó más, debido a las reformas que los países con leyes de cuota emprendieron a lo largo de las décadas del 90 y del 2000, cuando decidieron hacerlas efectivas a través de la eliminación de los resquicios legales de los que hacían uso los partidos. Además, las reformas más recientes aumentaron las cuotas pasando de la “cuota a la paridad”.

La experiencia de esta región demuestra la utilidad de las leyes de cuotas bien diseñadas para aumentar el número de legisladoras, aunque aún existan diferencias entre algunas naciones. Dichos instrumentos jurídicos se detallan en el Capítulo IV, 4.3 Las cuotas, un atajo del movimiento. Por ejemplo, la investigadora Beatriz Llanos, argumenta que el principal avance experimentado en la región en estas tres décadas ha sido el notable incremento en el número de mujeres en los cargos de representación popular¹³⁴.

Por otra parte, el movimiento de mujeres en esta zona -al igual que en otras regiones del mundo- ha sido fundamental para lograr avanzar hacia el ejercicio sus derechos. La investigadora Molyneux (2003), describe que la evolución del Estado moderno en América Latina, sugiere que entre los grandes cambios que se produjeron durante el siglo XX dos

¹³² Todos los datos usados para calcular los promedios reportados en este trabajo han sido compilados por Hinojosa y Piscopo (2013) a partir de información obtenida de la Unión Inter-parlamentaria, en el ensayo “Promoción del derecho de las mujeres a ser elegidas: veinticinco años de cuotas en América Latina”, TEPJF, México, 2013.

¹³³ En 2010, los países que no contaban con una ley de cuota eran Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Uruguay.

¹³⁴ Beatriz Llanos, 30 años de Democracia, Participación política de la mujer en América Latina, IDEA Internacional, Perú, 2008, p.10; p. 50

fueron trascendentes: el auge del movimiento de las mujeres y sus reivindicaciones ante el Estado, y la emergencia de Estados que decidieron intervenir activamente en el ordenamiento de género a través de la legislación y organizaciones de mujeres, quienes fueron tanto protagonistas como objeto de las políticas estatales que generaron diversos resultados. Dependiendo del contexto político, las liberaron de la sujeción patriarcal o bien, ahondaron esta situación¹³⁵.

Al igual que en Europa, los movimientos feministas han establecido diversas formas de vinculación política tanto dentro como fuera de las instituciones de los partidos y del Estado, presente desde los movimientos radicales -ya fueran nacionalistas, populistas, o socialistas-, hasta el proceso de apertura democrática imperante en la región¹³⁶. Se puede señalar que los diferentes movimientos desde las madres de la Plaza de Mayo argentinas, en su búsqueda de sus seres desaparecidos, pasando por las mujeres guerrilleras en Nicaragua y hasta las activistas por una vida libre de violencia en México, han dado como resultado avances en materia de derechos humanos de las mujeres, en general, y en materia de representación política, en particular.

Ahora bien, como se constató en el Foro Internacional *“Mujeres, política y democracia, rompiendo los techos de cristal en América Latina. Rompiendo los techos de cristal en América Latina”*¹³⁷, en los países que integran la región, aún bajo las barreras persistentes y las diferencias entre los países, la zona constituye un espacio de aprendizajes sobre prácticas institucionales para el avance de los derechos políticos realizados en la última década. Al año 2014, la representación parlamentaria femenina alcanza un 22.8%¹³⁸. El porcentaje de congresistas latinoamericanas es similar al porcentaje de representación de las mujeres en

¹³⁵ Cfr. Molyneux, Maxine, *Movimiento de mujeres en América Latina*, Estudio teórico comparado, Ediciones Cátedra, España, 2003, p.13

¹³⁶ *Ibíd.*, p. 11

¹³⁷ El encuentro Foro Internacional se realizó en la Universidad de Salamanca, 23 al 28 de marzo de 2014. El Foro Internacional incluyó conferencias, mesas redondas y un Simposio de Investigación sobre **Igualdad de Género**, instituciones y calidad de la democracia en América Latina: ¿cuánto hemos avanzado y hacia dónde vamos?", en el que se trabajó con resultados de investigación originales.

¹³⁸ En el año 2014 se llevó a cabo en la Universidad de Salamanca el encuentro internacional bajo la convocatoria de diversas instituciones, entre ellas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, IDEA Internacional, la Comisión Interamericana de Mujeres, entre otras. El objetivo del foro fue trabajar en torno a tres ámbitos: la elaboración del diagnóstico sobre la situación de la región, la elaboración de propuestas de cambio en áreas críticas y la generación de redes de intercambio de experiencias. Los temas que se abordaron fueron, diagnóstico y análisis de la situación en los procesos políticos y las instituciones democráticas; la evaluación de procesos de reforma político-electoral vinculados a la representación de las mujeres, reclutamiento de los partidos y selección de candidatos, entre otros.

algunos países europeos, aun cuando los niveles de discriminación por razón de sexo son amplios entre una región y otra¹³⁹.

Hace quince años, en América Latina, el promedio de mujeres parlamentarias era de apenas un 10.8%. Sólo Argentina -primer país en introducir las cuotas de género- y Costa Rica, superaban el 15%. Honduras, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Venezuela y Panamá no llegaban al 10%. De acuerdo a la base de datos de la *Unión Interparlamentaria*, al año 2015, el promedio de la región es del 24.1 %, compartiendo ambas Cámaras el primer sitio con la región europea, si se incluyen los países nórdicos a dos puntos, y sólo a 1.2% de las naciones europeas, si se excluyen los países nórdicos, los cuales alcanzan un rango de 24.2% y una 22.9% respectivamente¹⁴⁰.

Es importante señalar que todos los países latinoamericanos han signado la *Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación (CEDAW)*, lo que ha implicado realizar acciones para la igualdad y la no discriminación.

- Los casos de Bolivia, Costa Rica y Ecuador.

Las acciones que han dado mayores pasos son Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador y México, con un 33% de parlamentarias en promedio. Cuatro países han aprobado en sus legislaciones nacionales la paridad política: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y México.

En el 2009, Bolivia estableció en su texto constitucional “que la participación política de las mujeres debería de ser equitativa y darse en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Paulatinamente, con el desarrollo normativo de la carta constitucional, este país introdujo en su ley electoral el mandato de paridad y la alternancia en las listas de candidaturas en todos los cargos de gobierno y de representación, en la elección interna de las dirigencias de elección popular¹⁴¹. La socióloga Choque (2103) establece que tanto la adopción de las cuotas y la paridad, como su impacto para la igualdad política, forma parte

¹³⁹ Cf. Índice de Desarrollo Humano y Género por región. Disponible en hrd.und.org/es/content/el-índice-de-desarrollo-género.

¹⁴⁰ Disponible en, www.ipu.org/wmn-e/world

¹⁴¹ Llanos, Beatriz, *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*, IDEA Internacional, Perú, 2013, páginas 12 y 124.

de ese proceso conjunto de ensanchamiento de los derechos políticos de las mujeres en este país.

Fue parte de un proceso s determinado por la activa política boliviana, la debilidad de las instituciones, la crisis del sistema de partidos, la apertura global de la lucha de mujeres y, sobre todo, por el esfuerzo constante de las organizaciones de mujeres y grupos de activistas¹⁴².

Destaca Bolivia en el año 2012, que por primera vez dos cámaras legislativas fueron presididas por mujeres: Gabriela Montaña, senadora por el departamento de Santa Cruz, y Rebeca Delagos, diputada por el departamento de Cochabamba; dos assembleístas del Movimiento Al Socialismo, Instrumento político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

Por otra parte, en el mismo año que Bolivia reformó su marco normativo electoral (2009), Costa Rica modificó su código electoral para que la listas estuvieran integradas por 50% de mujeres y 50% de hombres, en delegaciones, nómina y órganos impares las diferencias entre el total de hombres y mujeres no pudiera ser superior a uno. Además, reforzó la medida con una disposición que obliga a la alternancia en la ubicación de ambos sexos en las nominaciones, al tiempo que la paridad fue extendida como mandato a las estructuras partidarias (Torres 2013).

La inclusión de la paridad y la alternancia en el sistema electoral fueron precedidas por las cuotas electorales de 1996, mismo año en que México introdujo dicha normativa, en la cual establecía por lo menos 40% de mujeres en la estructura partidaria y en los puestos de elección, así como el mecanismo de alternancia por sexo en las nóminas de elección¹⁴³.

¹⁴² La trayectoria de las reformas hacia la paridad y la alternancia se inició a mediados de la década de 1990 y a partir de las demanda de mujeres y políticas feministas en momentos en que las reformas trataban de dar mayor legitimidad a las instituciones políticas formales. Con base en las leyes del Régimen Electoral y el Órgano Electoral que desarrollan la Constitución Política del Estado (2009), en las elecciones al Senado y a la Cámara Diputados, assembleístas departamentales y regionales y concejales municipales, deberán dar cumplimiento a la paridad y alternancia de género en las listas de candidaturas para las circunscripciones plurinominales, así como en las proposiciones de candidatas mujeres y candidatos hombres en circunscripciones plurinominales. Cabe señalar que la paridad y la alternancia están enunciadas con precisión en las leyes electorales y no en la Constitución Cf. “Paridad y alternancia de Bolivia. Avances y desafíos de la participación de las mujeres en la política” en *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*, , páginas 123-176

¹⁴³ La nación cuenta con una larga tradición democrática y de respeto por los derechos humanos, en la cual se enmarcan las acciones tendientes a garantizar los principios de igualdad y no discriminación entre hombres y

El avance en Costa Rica no se explica sin el movimiento de las mujeres y feministas de la sociedad civil, quienes tienen como referente la ampliación de concepto de democracia y ciudadanía. El antecedente se encuentra en una importante movilización de las mujeres en torno al debate nacional sobre la negociación de la iniciativa para la ley de igualdad entre mujeres, norma que fue aprobada en 1990 con el nombre de Ley de Igualdad Social de la Mujer¹⁴⁴.

Al igual que en México, la Constitución establece que los tratados internacionales, una vez ratificados, se incorporan al ordenamiento interno con autoridad superior a las leyes, sin embargo, la jurisprudencia les asigna a los tratados de derechos humanos un rango similar constitucional y en la medida que otorguen mayores derechos a las personas, privan sobre éste (principio pro persona). La paridad y la alternancia se utilizaron en las elecciones municipales del 5 de diciembre del 2010 para las alcaldías, sindicaturas, intendencias e integrantes de los concejos de distritos y concejos municipales de distrito, en propiedad y suplencia¹⁴⁵.

Un tercer país que se suma a este esfuerzo por la paridad política es Ecuador. Un avance que se enmarca en un contexto de cambios políticos e institucionales encabezados por la llegada del presidente ciudadano Rafael Correa. La paridad es producto de un debate público sobre la participación política de las mujeres, librado al calor de la confrontación entre las mujeres organizadas que exigía el cumplimiento de la Ley de Cupos vigente desde el 2000. También es el resultado de los debates con las élites políticas que se negaban a acatar la norma, hasta que lograron poner en el texto constitucional el principio de paridad en todos los espacios de poder. La llegada de las cuotas y la paridad -que de forma decisiva incidió en el ingreso de

mujeres acorde a la Constitución de 1949. Torres Isabel, (2013) “Paridad para el fortalecimiento de la democracia incluyente”, en *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*, en el caso de Costa Rica, páginas 181-238

¹⁴⁴ Cf. Torres, Isabel, “Paridad para el fortalecimiento de la democracia incluyente”, en *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*, en el caso de Costa Rica, páginas 181-238.

¹⁴⁵ El país de Centroamérica, al igual que en México en el proceso del 2012- como se analizará en el último capítulo de la tesis, los partidos políticos realizaron consultas sobre las condiciones para aplicar los principios de paridad y alternancia en el proceso electoral municipal -primer ámbito donde se aplicó el criterio - generó diversas consultas antes el Tribunal Supremo de Elecciones, sobre todo en los puestos uninominales y en el encabezamiento de las nóminas. El órgano jurisdiccional estableció una extensa resolución que incluía la obligación de los partidos a modificar sus normas internas a fin de establecer los mecanismos necesarios para hacer realidad la paridad. Empero como se analizará más adelante, la eficacia tanto de las cuotas como de la paridad dependerá de otras variables para que se logre alcanzar el objetivo de parlamentos con igual cantidad de hombres y mujeres y mayor número de representantes en el ámbito local. Íbidem.

las ecuatorianas a la política formal- coincidió con una etapa de inestabilidad política en el país íntimamente relacionada con la crisis del sistema de representación que trajo consigo un descrédito de los partidos políticos¹⁴⁶.

“Uno de los avances más destacados que ya constituye un hito en la historia de las ecuatorianas, fue el derecho de la participación política, porque logró, además de la expedición de la Ley de Cupos, institucionalizarse, gracias a la exigencia de las mujeres organizadas y a su rigurosa vigilancia ciudadana. Ya en 2004, el Ecuador implementó la paridad en los procesos electorales, al conseguir las que las listas pluripersonales se conforme con relación de 40% y 60% entre los sexos; y en el 2007, se consagró con listas igualitarias integradas por el 50% de varones y el 50% de mujeres, de forma alternada dentro de las listas” (Goyes 2013:52)

Por otra parte, el 8 de marzo del 2012, Nicaragua modificó su Ley Electoral introduciendo la obligación de incorporar un 50% de candidatos y candidatas ubicado en forma alternada, en listas de elecciones municipales, parlamentarias y al Parlamento Centroamericano. En un nivel intermedio de avances en la representación de mujeres se encuentra el Congreso de Perú, país unicameral, con un 22% de congresistas. Y aunque hubo un momento (2006) que consiguió la masa crítica (29,2%), la cifra disminuyó en los siguientes procesos electorales. Se considera que los factores que favorecieron a las mujeres ese año fue que ellas encabezaban las listas, así como la expansión territorial femenina en virtud del cual 15 distritos electorales tuvieron mujeres electas¹⁴⁷.

A pesar de este avance, se reitera que existen disimilitudes entre los países de Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil sólo alcanza un 9% de congresistas en la Cámara Baja (513 escaños) y un 16% en la Cámara Alta, aunque ha incluido las cuotas electorales, tiene un sistema de representación proporcional, y una mujer se encuentra al frente del Poder Ejecutivo del año 2011 al 2014; de igual forma, Colombia mantiene un bajo 13% de diputadas en la Cámara Baja y un 17% en la Alta, cuotas electorales legales y un sistema de representación proporcional; mientras que Panamá se encuentra en circunstancias similares con un 8% de mujeres en la Asamblea Nacional. En conjunto, esto tres países apenas alcanzan un 11% de representación parlamentaria¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Cf. Soles, Goyanda, “De las cuotas a la paridad, el caso del Ecuador” en La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica p.p. 49-120.

¹⁴⁷ Llanos, Beatriz, y Tello, Pilar (Editoras), *Igualdad: ¿para cuándo? Género y elecciones peruanas 2010-2011*, IDEA Internacional, 2012, Perú, p.54.

¹⁴⁸ Ver: www.iadb.org/research/geppal y/o www.quotraprojecto.org

En resumen, a pesar de los diversos factores estructurales, entre ellos rezago económico y menor ingreso de las mujeres frente a los hombres, así como las limitaciones del orden cultural expresadas en los altos niveles de violencia e inseguridad, algunos países de la región de América Latina, presentan un avance significativo en cuanto a la representación política de las mujeres en el Parlamento. Lo anterior, a partir del factor institucional favorable como es la incorporación de las cuotas electorales en las leyes de varios países (Hinojosa & Piscopo, 2013).

El hecho de que en la última década, cuatro mujeres hayan tomado protesta como presidentas y alcanzar casi un 23 por ciento de representación parlamentaria, es señal de un progreso en la representación descriptiva, sin embargo, no puede evadirse que a casi tres décadas del proceso de democratización, en conjunto, la representación política aún está lejos de una presencia paritaria¹⁴⁹.

1.4 Representación Parlamentaria en México

Con el objetivo de contextualizar la situación y características de la población mexicana durante el proceso electoral del 2012, así como los factores bajo los cuales las mujeres lograron alcanzar la masa crítica – porcentaje mínimo en una Asamblea para lograr incidencia- en el Poder Legislativo, se presentan aspectos generales de la dinámica poblacional y factores del orden estructural que permiten conocer la situación bajo la cual se gestaba el aumento de la representación parlamentaria de las mexicanas.

1.4.1 Mujeres y hombres en México, aspectos generales

En México, entre los años 2010 y 2012, la dinámica poblacional y su tasa de crecimiento se mantuvo estable según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010).

¹⁴⁹ Ibídem, p.22

Tabla 6
Población en México 2010-2012

Población	2010	2012	Diferencia absoluta en a población entre 2010 y 2012
Mujeres	57,481,307	59,427,113	1,945,806
Hombres	54,855,231	56,725,111	1,869,880
Total	112,336,538	116,152,224	3,815,686

La población total aumentó en un poco más de tres millones de personas, donde las mujeres aportaron casi 2 millones más. México logró durante treinta años sostener una política de población en la que se buscó el acceso a métodos anticonceptivos y el control de la mortalidad materna a través de políticas públicas en materia de salud reproductiva. Lo anterior también permitió que hubiese un aumento de la esperanza de vida -76 años para las mujeres y 71 años para los hombres- y una menor tasa de fecundidad/fertilidad, 2.3 hijos¹⁵⁰.

En materia educativa, el promedio de escolaridad en el 2010 fue de 8.5%, que son los años de educación formal en promedio hombres y mujeres, en tanto que el rezago educativo - porcentaje de la población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria completa-, las mujeres presentan un 42.9% y en el caso de los hombres de 40.4%, considerando que las mujeres todavía ocupan en promedio un 8.08% de analfabetismo y los hombres un promedio de 5.57%. La concentración de esta población con analfabetismo se ubica en zonas indígenas y campesinas, principalmente (INMUJERES 2015).

Considerando que la educación media superior es de 15 a 17 años, para 2010, poco más de dos terceras partes de la población de ese grupo de edad asiste a la escuela (67%); y hay más mujeres (68%) que hombres (66.1 por ciento) en comparación con el 98.4 y el 98.5, mujeres y hombres respectivamente en educación básica (INEGI 2011). En el caso de la educación

¹⁵⁰ Cabe señalar que México presenta una alta tasa de fecundidad adolescente la cual es preocupante no sólo por las implicaciones en materia de salud pública sino que también está relacionada con aspectos culturales, sociales y económicos, sin obviar los aspectos educativos. En el año 2000 la tasa de fecundidad adolescente de 15 a 19 años era de 60.4%, y mientras que para el 2010 fue de 56.86, sin embargo, para el 2014 se ha presentado un incremento siendo de 65.7 (INMUJERES, 2015).

superior universitaria, para el 2012 se observa una similitud de egresados, para mujeres es de 30.1 y para los hombres de 30.5¹⁵¹.

- Participación económica.

En cuanto a la participación económica, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2010) reporta que de los 82.3 millones de personas de 14 y más años, nueve de cada diez participaron en la producción de bienes y servicios, es decir, trabajan; proporción que equivale a 79 millones de personas, de las cuales 42.3 millones eran mujeres (53.5%) y 36.7 millones eran hombres (46.5%)¹⁵².

Sin embargo, su participación en la fuerza laboral no las exime de participar en el trabajo doméstico y continúan siendo casi en exclusiva las responsables de las actividades de sus propios hogares, cubriendo una doble jornada de trabajo, la familiar y la laboral, es decir, poco se ha modificado la tradicional división sexual del trabajo (INEGI, 2011).

La ENOE (2010) muestra que las mujeres casadas o unidas presentan la mayor tasa de participación (trabajo remunerado o no remunerado), con porcentajes cercanos al 100%, seguidas por las solteras y finalmente las viudas, divorciadas y separadas, con 96.3 y 95.3%, respectivamente. Por ejemplo, en el segundo trimestre de ese año, las mujeres destinaron 46.7 horas en promedio a la semana al trabajo, mientras que los hombres dedicaron 41.8, es decir, una diferencia de 4.9 horas más para las mujeres. Un dato para destacar es que de los 43.2 millones de mujeres de 14 y más años, 61.8% realizaron trabajo no remunerado, mientras que de los 39.1 millones de hombres, 26.3% desempeñaron dicho trabajo (ENOE 2010)¹⁵³.

¹⁵¹ La deserción escolar en el 2012 es la más recurrente entre la población masculina, y ésta crece a medida que la avanza el nivel educativo. Lo mismo sucede con la brecha entre un género y otro. En primaria se registran valores mínimos de abandono para la población estudiantil femenina y masculina (0.6% y 0.8%, respectivamente). A nivel secundaria la proporción de quienes dejan sus estudios aumenta a 4% en el caso de las mujeres y a 6.5% en los hombres. En el nivel medio superior la deserción es considerablemente mayor, pues alcanza 12.4% de las mujeres y 16.5% de los varones. En el grupo de 15 y más años las mujeres presentan porcentajes mayores que los hombres entre quienes no tiene educación, mientras que los hombres registran valores superiores entre quienes cuentan con estudios de licenciatura o de posgrado (INEGI 2013).

¹⁵² La mayor presencia de las mujeres en el trabajo total -remunerado y no remunerado- es resultado de la hegemonía que tienen en el trabajo no remunerado y de su creciente inserción en el mercado, lo que si bien significa un avance, esto no se ha dado en condiciones de igualdad, al incorporarse, generalmente, en puestos con una jerarquía inferior a la de los hombres y a una menor remuneración, incluso en los mismos puestos de trabajo.

¹⁵³ Para el 2012, de los 44.8 millones de mujeres de 14 años y más, el 98% realizan algún trabajo (para el mercado o no remunerado para los hogares); mientras que para los 40.5 millones de hombres el porcentaje es de 94.2. La brecha de la tasa de participación entre hombres y mujeres se reduce conforme incrementa el nivel

La maternidad influye en una mayor o menor participación en el trabajo remunerado por parte de las mujeres. A medida que aumenta el número de hijos, su participación en la producción de bienes y servicios de manera remunerada disminuye. Las mujeres que tienen entre 1 o 2 hijos son las que más participan (45.5%); mientras que las cuentan con 6 hijos o más tienen una participación de solo el 21.3%. Por otra parte, el trabajo doméstico remunerado o no remunerado, se realiza en condiciones de precariedad, ya que tres de cada cuatro mujeres tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos (INEGI 2013).

Respecto al nivel de desarrollo, cabe señalar que en perspectiva comparada México se ubica en la posición número 71 del ranking internacional del Índice de Desigualdad de Género, de un total de 187 naciones evaluadas. El primer lugar del ranking lo ocupa Noruega, mientras que Nigeria se ubica en la última posición, considerada con un desarrollo bajo, mientras que México se clasifica con un desarrollo elevado respecto a esta medición, como se muestra en la tabla siguiente

Tabla 7
México en el Índice de Desigualdad de Género

Índice de Desarrollo Humano	País	Valor	Ranking	Mortalidad materna	Maternidad adolescente	% de Parlamentarias	Población con al menos secundaria terminada.		Participación en la fuerza de trabajo	
				Cada cien mil nacimientos	Años		M	H	M	H
1	Noruega	.068 Muy elevado	9	7	7.8	39.6	97.4	96.7	61.5	69.5
71	México	.0376 Elevado		50	63.4	36.0	55.7	60.6	45.0	80.0
187	Nigeria	0.709 Bajo	151	204.8	590	13.3	2.5	7.6	39.9	89.8

Fuente: Índice de Desigualdad de Género, PNUD (2015)

de escolaridad, es decir, la diferencia entre la población que reporta no tener instrucción o primaria incompleta y quienes cuentan con secundaria completa y más, la diferencia es de 6.4 y 2.9 puntos porcentuales, respectivamente (ENOE 2012)¹⁵³

- Aspectos culturales, violencia y de discriminación contra las mujeres.

Para conocer cómo se encuentran los factores culturales e institucionales que enmarcan las aspiraciones de las mexicanas por alcanzar la representación, se exponen diferentes aspectos, destacando que la presente investigación se concentra en el análisis de los aspectos institucionales y en el movimiento de mujeres, por lo que únicamente se describen generalidades sobre las condiciones de la vida las mexicanas.

Para seguir la línea de Inglehart y Norris (2003) en torno a los análisis que permiten conocer el grado de igualdad de género en una sociedad, se recurre a los estudios elaborados en México por parte del Instituto Federal Electoral (IFE, 2012) y de Parametría¹⁵⁴, que muestran las actitudes que tiene sociedad frente a las mujeres y su liderazgo.

De acuerdo a la opinión de las personas, el 74% considera que las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades, aunque una cuarta parte de la población opina que no¹⁵⁵. En el ámbito laboral, cuatro de cada diez mexicanos (37%) creen que cuando hay escasez de empleo, los hombres tienen más derecho a un trabajo que las mujeres, frente al 61% que no lo ve así. En el tema educativo, el 84% está en desacuerdo con que tener una educación universitaria es más importante para un hombre que para una mujer, y respecto a la división de la esfera pública y privada, dos terceras partes (61%) cree que ser ama de casa es tan satisfactorio como tener un empleo pagado, mientras que el 31% está en desacuerdo. Además, el 70% de las personas establece como algo correcto que una mujer sea madre soltera¹⁵⁶.

En temas de representación y liderazgo, los hallazgos son que poco más de un tercio de los mexicanos (35%), opina que una mujer podría realizar un mejor trabajo en los siguientes

¹⁵⁴ Las encuestas de Parametría reflejan la opinión de la población en México respecto a la Equidad de Género y fueron elaborados en el 2004, 2006 y 2010, lo que permite conocer la percepción a lo largo del tiempo.

¹⁵⁵ De marzo de 2006 a agosto de 2010 se observó un crecimiento de 12 puntos en la percepción de igualdad de oportunidades; en el mismo periodo disminuyó también 12 puntos la opinión que no veía igualdad entre hombres y mujeres en México, y a lo largo de más de seis años ha pasado del 66% al 74% los que creen que existe el mismo acceso a las oportunidades entre los géneros. Llama la atención que en 2006 hubo un descenso de 4 puntos en el número de mexicanos que creía en la existencia de igualdad de oportunidades; para ocho de cada diez (82%), no es necesario que una mujer tenga familia para que cumpla con su rol social; para agosto de 2010, únicamente el 15% de los encuestados aseguró que sí es necesario que una mujer cuente con una familia para que cumpla su papel.

¹⁵⁶ Ver, Parametría, *La equidad de género en la política mexicana*. Disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4752. Consultado el 20 de julio del 2015.

cargos de elección popular: Presidente, alcalde, gobernador, diputado o senador¹⁵⁷. En torno al liderazgo político de las mujeres, ocho de cada diez (78%) no estuvieron de acuerdo con la idea general que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, lo que significa que todavía un 20% de personas piensa que los hombres tienen un mejor desempeño.

El estudio *Mujeres al Parlamento. Más allá de los números* (2002) resalta que a pesar de la arraigada herencia machista de nuestras sociedades, las estadísticas demuestran que la mayor parte de la población aceptaría elegir a una representante femenina, aunque aún los “estudios cualitativos permiten descubrir que detrás de la afirmación de la aceptación casi generalizada de la participación política de la mujer, se ocultan temores y prejuicios que los estudios cuantitativos no revelan”(p.3).

Otro aspecto que pone al descubierto dimensiones culturales de la sociedad mexicana, son los niveles de violencia y discriminación por razón de sexo. La Encuesta Nacional de Discriminación¹⁵⁸ (Enadis), publicada en 2005 y 2010, y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)¹⁵⁹, expuesta en 2006 y 2011, dan cuenta de las percepciones que hacen evidente una cultura y una sociedad machista como la mexicana.

La Enadis (2010) revela que un alto porcentaje de la población opina que se les pega mucho a las mujeres; y que se les pega mucho a niñas y niños para que obedezcan (p. 28)¹⁶⁰, y, evidencia que dos de cada diez personas consideran que el principal problema de las mujeres

¹⁵⁷ Un 20% cree que sería el cargo de Presidente de la República el que las mujeres harían mejor que los hombres; para el caso de los gobernadores, solo el 12% cree que serían mejor las mujeres; para alcaldes es el 10%, y el 4% cree que en ningún cargo las mujeres podrían desempeñarse mejor que los hombres. El 7% opina que es el cargo de senador en el que las mujeres serían mejores que los hombres y 6% cree que es el de diputado.

¹⁵⁸ El Consejo Nacional para prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) la define como aquella práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinadas personas o grupo de personas, que a veces no se percibe, pero que en algún momento se ha causado o recibido. Existen grupos que son víctimas de discriminación por sus características físicas o formas de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, entre otras diferencias pueden ser motivos de distinción, exclusión o restricción de derechos. Conapred, en: *Discriminación e Igualdad*, <http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id>. Consultado el 20 de julio del 2015.

¹⁵⁹ La Encuesta está disponible en:

<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/especiales/endireh/endireh2011/default.aspx>. Consultada el 20 de julio del 2015.

¹⁶⁰ La ENADIS profundiza en el conocimiento sobre quiénes discriminan, los ámbitos en que se presenta el problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se relacionan. Además, brinda elementos para conocer las percepciones de la discriminación entre la población, abarcando los diferentes grupos: mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas adultas mayores, diversidad sexual, minorías étnicas, minorías religiosas, personas con discapacidad, personas migrantes y personas trabajadoras del hogar (p. 9 y 10).

es la falta de empleo, seguido por los problemas relacionados con la inseguridad, abuso, acoso, maltrato, violencia y discriminación. También deja ver que todavía tres de cada diez mujeres solicitan permiso o avisan para decidir por quien votar; y que cuatro de cada diez mujeres pide permiso o avisa para utilizar anticonceptivos.

Respecto a la violencia contra las mujeres, la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar 2011 (ENDIREH)¹⁶¹, muestra que del total de mujeres de 15 años y más, el 46% sufrieron un incidente de violencia de pareja a lo largo de su vida; el 42% declaró haber recibido agresiones emocionales, afectando con ello su salud mental. Por ejemplo, 24% de mujeres recibió agresiones en torno al control del ingreso y los recursos monetarios del hogar, y el 13% de mujeres confesó haber vivido algún tipo de violencia física que les provocaron daños temporales o permanentes, mientras que el 7.3 fueron víctimas de violencia sexual por parte de sus propias parejas.

En torno al ámbito laboral, la Encuesta (2011) muestra que a pesar de tener el mismo puesto las mujeres reciben un ingreso menor que los hombres; las mujeres tienen menos oportunidad de ascender o menos prestaciones; les bajaron el salario o no las contrataron por su situación conyugal o en su lugar de trabajo, además les solicitaron la prueba de embarazo, aunque esté prohibido por ley.

Sobre los roles sociales, el 29% de entrevistados dijo estar de acuerdo en “que si hay golpes o maltrato en casa, es un asunto de familia y ahí debe quedar”; y el 16.8% estuvo de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que ordene.

Sobre el tema de la violencia contra las mujeres en el ámbito político, éste comienza a ser explorado con mayor fuerza en México. Por ejemplo, el junio del 2014, se realizó el Seminario *Violencia Política, Parlamento y Género* organizado por las instituciones electorales y los partidos políticos. A nivel internacional Bolivia publicó el primer marco jurídico en la materia, la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (Ley 243, mayo del 2012), la cual forma parte de un proyecto de transición del modelo

¹⁶¹La Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH) 2011, está disponible <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/endireh2011/default.aspx>. Consultada el 20 de julio del 2015.

democrático. La norma jurídica se enmarca en el tema de la prevención de conflictos y la consolidación de la paz¹⁶².

La violencia que enfrentan las mujeres en la esfera política puede expresarse en las siguientes modalidades: desde la violencia institucional –al interior de sus propios partidos-, pasando por la violencia económica, hasta el hostigamiento y el acoso sexual, o la violencia comunitaria e incluso el feminicidio, aspectos que “han sido experimentados como violencias múltiples por numerosas mujeres candidatas o legisladoras y autoridades en funciones, por el hecho de ser mujeres”¹⁶³.

Las consecuencias de los actos de discriminación y de hostigamiento que sufren las mujeres que compiten por un cargo público son diversos como la obstaculización de la actividad política, abandono de la carrera política tras ejercer algún cargo, desinterés de participar por parte de otras mujeres, así como altos costos personales en el plano emocional, además de soledad (PNUD, TEPJF & ONU Mujeres 2012).

- Religión.

En México la mayoría de personas se define como católica. De acuerdo al censo del INEGI (2010), 92.9 millones de personas la profesan, los cuales representan el 82.7 del total habitantes, mientras que un menor porcentaje, el 7.5 por ciento son protestantes o evangélicos; 2.4% tienen otra religión y 4.7% manifiesta no practicar ninguna religión, y sólo un 2.7% no especifica. En el mundo, 17 de cada 100 personas son católicos¹⁶⁴.

¹⁶² El objetivo de la ley es promover acciones e instrumentos operativos como defensa ante el acoso y violencia política contra las mujeres, preservando sus derechos políticos, ciudadanos y civiles. Ver: Bolivia, *Violencia política por razón de género*. http://www.unwomen.org/mdgf/downloads/MDG-F_Bolivia_C_SP.pdf. Consultado el 20 de julio del 2015.

¹⁶³ Cf. Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, disponible en: http://genero.ife.org.mx/docs/docs_mat-PNUD-2_10jul2012.pdf.pdf. Consultado el 20 de julio del 2015.

El estudio divide las formas de violencia en tres niveles, el primero, como precandidatas y candidatas, en las que se padece el inadecuado uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación a mujeres, la simulación de elecciones primaria para eludir la cuota, el envío a distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional. Además, las presiones para ceder o no reclamar la candidatura, la usencia de apoyos materiales y humanos, así como agresiones y amenazas durante la campaña, o un trato discriminatorio de los medios de comunicación. El segundo, como legisladoras o autoridades electas: mayor exigencia que los varones, presiones para adoptar decisiones de grupos, segregación de las comisiones relevantes, desdén con respecto a sus opiniones o propuestas, entre otros.

El tercero, en el ámbito personal, cuyas formas de violencia se expresan en difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias; doble jornada de trabajo: como servidoras públicas y como responsables de la familia, así como desgaste, culpa, autoexigencia de sobresalir en ambos campos. A ello se suma la propia censura por parte de otras mujeres por “desentenderse de sus familias” y conflictos con su pareja o ruptura debido a su quehacer político.

¹⁶⁴ Ver, *Conociendo México*, INEGI, México, 2010, p.72. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/mexcon/folleto_nacional_pliegos_baja.pdf

En resumen, en México la población femenina representa poco más de la mitad de habitantes del país y participan ampliamente de la fuerza laboral, sin embargo, mantienen menores ingresos y aún no se logra que los hombres colaboren en igual proporción en el trabajo del hogar.

Asimismo, la tasa de fecundidad (número medio de hijos nacidos por mujer) es un poco menor al promedio mundial (2.5). Respecto a los factores culturales, en México persiste la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como percepciones de una menor capacidad de liderazgo frente a sus pares hombres, aunque sin diferencias significativas. En cuanto a la religión, se mantiene la permanencia del catolicismo como el credo mayoritario en la población mexicana.

1.4.2 Evolución de la representación

Al igual que sus antecesoras en diferentes regiones del mundo, las mujeres en México fueron excluidas del sistema democrático representativo y del otorgamiento de derechos. En términos generales, en comparación a la Colonia española en 1810, el estatus legal y civil de las mexicanas fue similar antes y después de la Independencia de México, ya que no gozaron de ciudadanía ni tuvieron libertad para elegir estado civil, profesión u oficio ni de ingresar a las universidades o colegios de educación superior salvo contadas excepciones. También fueron víctimas de violencia conyugal, no tuvieron capacidad de ahorro, capital o propiedades. Así, el destino de la población femenina solía ser el matrimonio, el convento, la servidumbre o la esclavitud (Molina-Enríquez 2009).

Aunque tuvieron una amplia participación en los movimientos para la conformación de la nación como la Independencia y la Revolución Mexicana (Tuñón, 2002), su presencia en el

De acuerdo al estudio *Las religiones en tiempos del Papa Francisco* (2014), expone que las religiones lejos de disminuir se transforman, al mismo tiempo que el catolicismo es más resistente de lo que aparente ser. “El crecimiento económico no produce un impacto directo en la secularización como lo hizo en otras regiones del mundo”. En países como Paraguay, Ecuador, Venezuela o Argentina, la religión muestra una alta dominación del catolicismo en 1996, con más de 76% de ventaja y con cambios inferiores a 21 puntos porcentuales de ventaja sobre la siguiente creencia religiosa/ y/ o sin religión. “En todos estos países hay hoy día más de 70% de la población que son católicos, en todos ellos la distancia entre el catolicismo y la siguiente religión es más de 59 puntos porcentuales, en todos ellos la disminución del catolicismo ha sido inferior o igual a 13 puntos porcentuales que es el promedio de disminución de la región” (p.18).

ámbito político formal también se gestó en la lucha por obtener el sufragio, aunque esta presencia no fue masiva o popular, sino impulsada por una élite de mujeres educadas y cercanas al poder¹⁶⁵.

En la obra de Enriqueta Tuñón (2002), *Por fin... ya podemos elegir y ser electas* y el documental *Las Sufragistas* de Ana Cruz¹⁶⁶, dan cuenta del esfuerzo, la organización y los debates por la obtención del sufragio que comenzó en 1916 y culminó en 1951, año en que se publicó el decreto respectivo.

Para la historiadora Gabriela Cano (1991), la participación de las mujeres en la vida política del país con los mismos derechos y obligaciones, fue un propósito central del feminismo mexicano de la primera mitad del siglo XX, cuando lograron avanzar en los diferentes espacios de representación y toma de decisión, como parte del proceso democratizador del país que inició en 1988 y del cual se ofrecen detalles en el Capítulo III, Movimiento de Mujeres en México. }

Muestra del avance, es que 1981 se ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW), con la implementación de planes y estrategias de acción en materia legislativa y de política pública. Por ejemplo, en 1983 se presentó el Programa Nacional de Acción para la Integración de la Mujer en el Desarrollo, y en 1985 se estableció la Comisión Nacional de la Mujer, conformada por los tres poderes del Estado y diferentes dependencias, como se detalla en el Capítulo III, apartado 3.5.3 El Feminismo civil.

Más tarde, en el año de 1993, en el contexto de la democratización del país que se gestó a partir de 1988, el nuevo partido político de izquierda -Partido de la Revolución Democrática- incorporó en sus estatutos la cuota de género para las candidaturas de representación proporcional, señalando que ninguno de los dos sexos debería exceder el 70%. En ese momento la representación en el Congreso de la Unión era de apenas un 8.8%, y en el mundo alcanzaba un promedio de 11% (Unión Interparlamentaria 2015). Una de las explicaciones

¹⁶⁵ Para más información sobre este periodo de las mujeres ver el texto Cano, Gabriela, *Género, política y poder en el México postrevolucionario*, Fondo de Cultura Económica, México, 2000

¹⁶⁶ El documental sobre el Sufragio en México fue dirigido y producido por Ana Cruz, México, duración 77 minutos, 2012. Sobre la representación política en México, también se puede ver el documental *La revolución de los alcatraces*, dirigido por Luciana Kaplan, México, 2012.

para dicha apertura normativa estatutaria, es la participación de las feministas al interior del instituto político, quienes conocían de las acciones afirmativas que ya se emprendía en otras regiones y quienes venían organizándose desde los años 80 (Scherer, 2014).

Como se narra en el ensayo colectivo de Girón, Martínez y Jiménez, *Breve historia de la participación política de las mujeres en México* (2008), en esta década se da un gran movimiento de mujeres: “hubo un despertar de la solidaridad, el despertar del movimiento sindical, protagonizado por las costureras y quienes constituirían el movimiento de damnificados (...)”. Además, hubo otro gran acontecimiento político previo: la elección de 1988, que “dejó en el ánimo un significativo número de personas el deseo de actuar de una manera más colectiva”. Entre esos esfuerzos, estaba la formación de Mujeres en Lucha por la Democracia, así como la Coordinadora de Mujeres Benita Galeana, como instancia política de confluencia de organizaciones que consideraron como un eje de su lucha alcanzar la democracia (p.52).

El trabajo pionero por la representación se dará en la década de los 90. Diversas organizaciones de mujeres provenientes de grupos feministas, organizaciones sindicales, del movimiento urbano popular y mujeres independientes realizaron un trabajo pionero al interior del partido de izquierda para lograr una mayor representación (Girón, Martínez y Jiménez, 2008:54), y fueron las cuotas al interior del instituto una respuesta a aquel trabajo. Esto coincide con lo descrito por Lovenduski (1997), respecto a que serían los partidos de izquierda los primeros en impulsar a las mujeres: “los partidos de izquierda han tenido tradicionalmente más voluntad que los partidos de centro y de derecha para llegar a acuerdos y proponer candidatas, y también parecen ser más capaces de cumplir esos compromisos” (p. 127).

En 1996 las cuotas se incorporaron a la Constitución, la cual estableció en su artículo 41 lo siguiente: “es un derecho de los ciudadanos y una obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a los cargos de elección popular”. En la ley electoral se aprobó la fracción XXII transitoria del COFIPE, en la cual se señalaba que los partidos políticos “considerarían” en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedieran el 70% para un mismo género.

Para el año 2012, las mexicanas tenían ya una importante participación en los procesos electorales, prueba de ello, es que 1 de julio del 2012, 50 millones emitieron su voto para elegir Presidente de la República y renovar la Cámara de diputados, lo que representó el 62% del padrón y cuya tasa de participación de los hombres fue del 57%, mientras que de las mujeres fue del 66%, siendo la mayor asistencia de las mujeres a las urnas una tendencia desde las elecciones de 1994, resaltando además que las mujeres ejercen el voto más como una obligación cívica y menos como un acto instrumental para conseguir algo (IFE 2014). En el capítulo IV se ofrecen detalles sobre las cuotas y su evolución en el marco normativo.

Antes del proceso electoral federal del 2012, las cuotas ya habían impactado la representación parlamentaria en México. Así, las cuotas fueron contribuyeron sensiblemente a obtener una mayor representación descriptiva en los órganos del Poder Legislativo Federal (Elizondo, 2011). Lo anterior se observa en la siguiente tabla.

Tabla 8

Evolución de la distribución de Diputadas y Diputados Federales por Legislatura,
1952 – 2012

Legislatura		Total	Hombres	Mujeres	% Hombres	% Mujeres
XLII	1952 a 1955	162	161	1	99.4	0.6
XLIII	1955 a 1958	160	156	4	97.5	2.5
XLIV	1958 a 1961	162	154	8	95.1	4.9
XLV	1961 a 1964	185	176	9	95.1	4.9
XLVI	1964 a 1967	210	197	13	93.8	6.2
XLVII	1967 a 1970	210	198	12	94.3	5.7
XLVIII	1970 a 1973	197	184	13	93.4	6.6
XLIX	1973 a 1976	231	212	19	91.8	8.2
L	1976 a 1979	236	215	21	91.1	8.9
LI	1979 a 1982	400	368	32	92.0	8.0
LII	1982 a 1985	400	358	42	89.5	10.5
LIII	1985 a 1988	400	358	42	89.5	10.5
LIV	1988 a 1991	500	442	58	88.4	11.6
LV	1991 a 1994	499	455	44	91.2	8.8
LVI	1994 a 1997	496	424	72	85.5	14.5
LVII	1997 a 2000	500	413	87	82.6	17.4
LVIII	2000 a 2003	500	416	84	83.2	16.8
LIX	2003 a 2006	498	374	124	75.1	24.9
LX	2006 a 2009	500	384	116	76.8	23.2
LXI	2009 a 2012	500	332	168	66.4	33.6
LXII	2012 a 2015	500	316	184	63.0	37.0

Fuente: Cámara de Diputados/Centro de Estudios para el Adelanto de las mujeres y la Equidad de Género¹⁶⁷.

Como se logra observar, la presencia de las mujeres fue aumentando paulatinamente, teniendo un impacto cuantitativo considerable a partir de 1994, después del inicio del proceso democratizador en México, y con mayor fuerza en la legislatura 2009-2012, periodo en que las cuotas electorales y el movimiento de mujeres se habían afianzado como se mostrará en los siguientes capítulos de la investigación.

En conclusión, son diversos los factores y los actores/as que impactan la representación parlamentaria de las mujeres, y la forma en que dichas variables se correlacionan en diversas regiones del mundo. El análisis de dicha interrelación permite explicar las preguntas que

¹⁶⁷ Disponible en:

www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_adelanto_de_las_mujeres_y_la_equidad_de_genero/01a_que_hacemos, consultado 15 de enero del 2015

detonaron el presente apartado, porque algunas regiones en general, y países, en particular, alcanzan mayores niveles de representación parlamentaria.

En cuanto al análisis de los factores, se puede resumir que los institucionales generan un amplio consenso sobre su impacto en la representación parlamentaria de mujeres, de manera especial, las cuotas y el sistema electoral, así como una buena combinación entre ambos. A ello se suma el método de selección de los partidos de manera importante, y la ideología, aunque bajo un menor acuerdo¹⁶⁸.

Además, la integración de las mujeres a los partidos también parece allanar el camino hacia la representación, mientras que en algunas naciones, tanto el proceso de transición a la democracia como las acciones posteriores a un conflicto interno, pueden dar paso a mayor presencia de mujeres en el ámbito público. En cuanto al movimiento de mujeres, se considera que han influido mediante acciones de incidencia política y jurídica en diferentes regiones a partir de una clara agenda internacional.

A partir de diversos estudios, se puede conocer cómo la región de Europa ha logrado encabezar el mayor porcentaje de parlamentarias, gracias a la conjunción de variables institucionales favorables, mientras que en la región Medio Oriente y Norte de África se ha quedado rezagada por factores de índole cultural que comienzan a transformarse, en tanto que América Latina parece estar viviendo un buen momento en varios de sus países – Argentina, Bolivia, Ecuador, México- por reformas institucionales que han permitido el posicionamiento y la eficacia de las cuotas electorales. No se puede dejar de lado, que en los diversos países se presenta un vibrante movimiento de mujeres por el adelanto de sus derechos humanos.

En la medida en que avanzan las investigaciones, es más claro conocer las estrategias para sortear cada una de las barreras que enfrentan las mujeres para lograr romper el techo de cristal, en tanto, también es adecuado asumir que los factores culturales, socioeconómicos y

¹⁶⁸ En el estudio de Paxton y Kunovich (2003) demostraron en su análisis que la ideología, cuando se mide con mayor precisión, predice fuertemente las diferencias en la representación política de las mujeres: cuando las actitudes negativas hacia las mujeres crecen, el porcentaje de parlamentarias decrece.

políticos “interactúan para crear una dinámica que actúa como una incubadora global para la elección de las mujeres” (Tremblay, 2007:9).

Por último, se considera que la exposición de los factores estructurales, culturales e institucionales que contextualizan la situación de las mexicanas, apoyará la comprensión de los factores y acciones que explican el incremento de legisladoras, en un país, donde la violencia y el machismo aún se expresan cotidianamente.

A continuación se presenta una serie de conceptos que conforman el fundamento teórico de la presente investigación y permiten la comprensión del fenómeno a investigar.



Fotografía 3
Pintura Inauguración de los Estados Generales de Auguste Couder, 1839.

“Podríamos replicar que habiéndose demostrado con razón que un hombre no puede representar a un plebeyo ni éste a un noble, de la misma manera un hombre no podría con más equidad representar a una mujer puesto que los representantes tienen que tener absolutamente todos los mismos intereses que los representados: las mujeres solo podrían ser representadas por mujeres”.

Cuaderno de quejas de Madame B.de B. 1789

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

REPRESENTACIÓN, DEMOCRACIA, MOVIMIENTO DE MUJERES Y ACCIONES AFIRMATIVAS

Diversos conceptos de la Ciencia Política, la Filosofía Política, los Estudios de Género y la Sociología, fundamentan teóricamente el estudio de la representación política de las mujeres. La presente investigación, responde a la pregunta de cómo se logró incrementar la representación parlamentaria de mujeres en México y descansa sobre la exposición de algunas ideas básicas que se desarrollan en este Capítulo.

Primero, se presentan los conceptos de género y perspectiva de género, categorías que posibilitan un nuevo enfoque, tanto en la Ciencia Política como en otras disciplinas que constituyen un instrumento de análisis para explicar y describir las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y, que hacen evidente, cómo una diferencia biológica y natural ha justificado una diferencia social y de desigualdad entre los sexos.

En segundo lugar, se exponen los conceptos de representación y democracia a partir de pensadores que recapitulan debates previos y profundizan en el estudio de dichas ideas, como son: la pensadora alemana Hanna Pitkin (1985), los politólogos Bernard Manin (1997) y Robert Dahl (1992,1999), así como la historiadora Joan Scott (2012).

También se presentan ideas complementarias de aportaciones actuales que argumentan en favor de la presencia de mujeres en la esfera pública, realizadas por las multicitadas autoras: Mone Lena Krook (2012) Joni Lovendusky (1997,2005), Pippa Norris (1997) AmeliaValcárcel (1997), Anne Phillis, (1996) y Dudre Dahlerup (2005), quienes han contribuido con una serie de investigaciones de carácter teórico o empírico que constituyen un referente fundamental.

Por último, se exponen dos conceptos que explican la mayor presencia de mujeres, el movimiento de mujeres y las acciones afirmativas; para lo cual se retoman ideas y definiciones de Charles Tilly (2013) Maxyne Molineux (2014), Krook y Sarah Childs (2010), Dahlerup (2005) e Iris Marion Young (2010). Ambos conceptos se desarrollan con amplitud en los capítulos centrales de la tesis.

Cabe señalar, que las y los autores mencionados, abordan conceptos multidimensionales y estrechamente relacionados entre sí, y, aunque las ideas como la de representación y la democracia pueden constituir una tesis en sí mismas, solo se realiza un breve recorrido que permite establecer las bases para el estudio y la comprensión del caso a estudiar.

2.1. Género y perspectiva de género en la Ciencia Política

El concepto de género permite descubrir y poner a la luz, las causas y la desigualdad existente entre los sexos, entre cuyas diversas formas de expresión se encuentra la exclusión de las mujeres en los espacios de representación. Dichas categorías, tienen como punto de partida el cuestionamiento ético acerca de lo injusto que resulta la subordinación de las mujeres en el colectivo humano y las consecuencias de dicha subordinación (Serret, 2008).

El uso del concepto de género surge de la necesidad del movimiento feminista -tanto en la acción como en la teoría-, de contar con una herramienta para el análisis del fenómeno de subordinación de las mujeres en la sociedad. Enfatiza el hecho de que nuestra noción de hombres y mujeres no es resultado de una realidad natural, sino de construcciones culturales (Serret, 2008). En consecuencia, su comprensión resulta relevante para análisis teóricos novedosos, que van a surgir en las ciencias sociales y darán vida a interpretaciones no exploradas.

El concepto de género se encuentra relacionado con la categoría de perspectiva de género y el feminismo¹⁶⁹, aspecto desarrollado en el apartado sobre los Movimientos de Mujeres¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Cf. Amorós, Celia, *Las grandes diferencias y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres*; Gamba, *Diccionario de estudios de género y feminismos*, 2007; Lamas, *Cuerpo, diferencia sexual y género*, Fondo de Cultura Económica, 2008; Scott, Wallach Joan, *Género e historia*, Fondo de cultura económica, México, 2008.

¹⁷⁰ El movimiento feminista subraya la incoherencia del Contrato Social de una democracia antigua, liberal y consolidada, que tiene en su haber varias revoluciones contra diversas desigualdades a lo largo de los últimos dos siglos con el paradójico resultado de la ausencia de mujeres en el poder político.

Género	Perspectiva de género	Feminismo
Categoría analítica	Enfoque para estudiar las Ciencias Políticas	Movimiento que gesta nuevos marcos epistemológicos

El interés en el género como categoría analítica se manifestó hasta finales del siglo XX y está ausente de la teoría social anterior. Este término forma parte del intento de las feministas contemporáneas por trazar un territorio de definición, para desplegar lo inadecuado de la teoría existente y explicar las desigualdades entre hombres y mujeres.

Si bien, en los años ochenta del siglo pasado, la búsqueda de legitimidad académica llegó a sustituir “mujeres” por “género” (Scott, 2008: 64), Martha Lamas, feminista mexicana, sostiene que en Latinoamérica no se ha dado un debate tan amplio en torno al concepto -a diferencia del pensamiento anglosajón-, y advierte que la traducción al español de *gender* por “género” ha creado ciertas confusiones (Lamas, 2002)¹⁷¹. Actualmente, existe amplia literatura sobre el concepto (Lamas 2002, Butler, 2004).

A diferencia del sexo, que constituye una determinación biológica –idea que se consolida en la Ilustración como se verá en el Capítulo III-, el género es una construcción cultural influida por cuestiones reales, imaginarias y simbólicas. Así, la relación del cuerpo con la identidad no es una relación real sino imaginaria, con fundamento en lo simbólico: ser hombre o ser mujer, con sus respectivos roles: “se convierte en un distintivo esencial del yo, y la forma como se asume la propia identidad dependen en gran medida de lo que se espera que sea uno de acuerdo a su género” (Serret, 1992:153).

La perspectiva feminista (estudiada a mayor detalle en el siguiente capítulo) de los años sesenta y setenta del siglo pasado, irrumpió cuestionando los paradigmas tradicionales de la democracia y generó nuevos temas como la división entre lo público-privado, la división sexual del trabajo y el concepto de representación consagrado en las democracias liberales: el movimiento de mujeres buscó reinventar y radicalizar la democracia. Es un movimiento que cuestiona, interpela y disputa los sentidos teóricos, políticos y epistemológicos tradicionales para dar paso a estudios que pongan a la luz a otro protagonista y actor del hecho político: las mujeres. (Cobo, 1995)

¹⁷¹En la década de los 50s el científico norteamericano John Money fue uno de los primeros en diferenciar las nociones de sexo y género, una extrapolación cuyo origen proviene de la gramática que diferencia los vocablos de masculino, femenino y neutro. Utilizó la expresión “rol de género” para describir los aspectos sociales, psicológicos y culturales de la femineidad y la masculinidad, marcando una diferencia con el sexo que es un aspecto biológico y genético de los individuos de la especie, macho y hembra. Al igual que otros conceptos, el de identidad de género recibe diversas interpretaciones y tratamientos de acuerdo a los contextos de estudio; se trata de un concepto complejo que alude tanto a las atribuciones que las figuras significativas otorgan al niño o niña, como a las representaciones que brinda el orden cultural imperante (Gamba, 2007: 177).

Una definición ampliamente citada, se debe a la historiadora feminista Joan Scott (2012) en su ensayo *Género e historia*; presenta la conformación de dicha categoría a partir de dos propuestas: 1) el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basándose en diferencias percibidas entre los sexos; y 2) el género es una de las relaciones simbólicas del poder.

La primer idea implica cuatro elementos interrelacionados: primero, los símbolos disponibles que evocan interpretaciones múltiples, por ejemplo: Eva y la virgen María en La Biblia; segundo, conceptos normativos sobre los significados de los símbolos que intentan limitar y contener las posibilidades metafóricas de los mismos -por ejemplo, doctrinas religiosas, legales o políticas- y adquieren básicamente posiciones binarias fijas, que afirman en forma unívoca el sentido hombre/mujer, masculino/femenino. En tercer lugar, la idea de la política y la referencia a instituciones sociales y organizaciones que algunos antropólogos restringieron como sistemas de parentesco. En cuarto lugar, el género como identidad subjetiva; en este caso se requiere revisar cómo se constituyen, así como relatar los hallazgos a través de una serie de actividades, organizaciones sociales y representaciones históricas específicas. Ninguno de los cuatro elementos, opera sin el otro. (Scott, 2008: 66).

Respecto a la segunda idea, el género como relaciones simbólicas de poder, trata de un campo primario de dichas relaciones que, aunque no es el único, ha sido permanente, recurrente y posibilitó la significación de poder tanto en la tradición islámica como en la tradición judeocristina de occidente. La división del mundo se ha basado en las referencias a las diferencias biológicas, especialmente a las que se refieren a la división del trabajo, de la procreación y la reproducción, y operan como las mejor fundadas en las ilusiones colectivas. El género se constituye así, como una de las referencias recurrentes a través de las cuales el poder político es concebido, legitimado y criticado (Scott, 2008:68)¹.

Al respecto, Serret (2008) desafía que un uso correcto del concepto de género en el terreno político debe considerar que se persiguen dos objetivos al aplicarlo, la visibilización de las mujeres y el hecho de que todas las relaciones se mantienen atravesadas por un simbólico sistema de dominación, que subordina a las mujeres en tanto colectivas.

Lo anterior, significa que la ausencia de mujeres en los espacios de poder no responde a una diferencia biológica y natural, sino que debe ir más allá para encontrar las causas que generan, legitiman y perpetúan, dicha exclusión.

Por ejemplo, Mino Vianello y Elena Carranza (2002) en el texto *Género, espacio y poder*, explican que desde Maquiavelo en adelante, todos concuerdan en que las ciencias políticas constituyen el estudio del mundo del poder y, que, quienes no participan en dicho mundo fueron pasados por alto. Por ende, las causas de la no participación en el poder es un tema relevante a investigar y no solo hechos marginales: las ciencias políticas reflejan una adhesión más o menos consciente al *status quo* y legitiman la situación de discriminación. “¿No fue Aristóteles el primero que teorizó -al menos en el mundo occidental- que las mujeres, los esclavos y las categorías marginales tenían que ser excluidas de la vida pública puesto que, dada su propia naturaleza, eran incapaces de sentir interés hacia ella?” (p.160)

¹⁷².

En resumen, el concepto de género tiene un carácter científico explicativo, y, como se verá en el desarrollo de la tesis, construye el conocimiento bajo una dimensión valorativa y subjetiva, contradictoria con una visión de objetividad como “neutralidad valorativa”, dado que la ciencia tradicional tiene un sesgo ideológico androcéntrico¹⁷³. Es, además, “claro motor ético político feminista” (Serret, 2008:65) al mirar la realidad de manera diversa y así exponer injusticias existentes.

Por otra parte, la perspectiva de género emerge como una preocupación ética que coloca el acento en una valoración diferente a una visión convencional de la realidad. La perspectiva

¹⁷² Una definición general llega a considerar que más que una categoría, la de género es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos contruidos en torno al sexo. Está presente en el mundo y en las sociedades, en los sujetos sociales, sus relaciones, la política y la cultura; es la categoría correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad: la construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y masculinos es una categoría relacional que busca explicar la construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. Las teorías feministas coinciden en que la constitución de la diferencia de género es un proceso histórico/social y que el género no es un hecho natural (Gamba, 2007:26).

¹⁷³ Para la socióloga Serret (2008) se habla de androcentrismo para describir un pensamiento, una mirada, un sesgo o un prejuicio centrado en los varones –sus cuerpos, prácticas, intereses- que opera tal cual si las mujeres no existieran o fueran irrelevantes, dando un visión errónea y parcial de la realidad, procediendo como si todo quehacer humano fuese realizado en exclusiva por hombres. Para advertir y deconstruirlo hace falta una acción consiente que comience por revelar cómo funciona el androcentrismo que se considera “objetivo” y libre de ideas tendenciosas, el de la producción del conocimiento científico.

de género ha logrado sacar a la luz esta ausencia de registros sobre la presencia o ausencia de mujeres y las relaciones de poder asimétricas.

Como reitera Serret (2008), la ciencia y la epistemología se han fundado en una mirada androcéntrica donde el sujeto varón, blanco, cristiano, heterosexual e ilustrado –legitimado para acceder y construir conocimiento– impuso su perspectiva en la creación del conocimiento. En contraposición, surge la perspectiva de género como una herramienta epistemológica de carácter hermenéutica y crítica, que ofrece nuevos enfoques a los clásicos y hegemónicos, mostrando así la complejidad de construir el conocimiento que nace de la interdisciplinariedad, ayuda a criticar categorías e incorpora la especificidad de la experiencia de las mujeres en la calidad de sujetos en la misma medida que los varones.

De lo anterior se desprende que el concepto de género y la perspectiva de género aplicada a diferentes disciplinas, como el Derecho o la Política, persiguen desmontar el prejuicio de que la biología determina lo femenino.

También es preciso mencionar un concepto relevante en el análisis con perspectiva de género que han puesto de relieve los estudios feministas: el Patriarcado, que en sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente, el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el jefe de familia varón, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es una de las instituciones básicas de este orden social¹⁷⁴, es además, un concepto que refiere a la sujeción de las mujeres y la singularizada forma del derecho político que los varones ejercen en virtud de ser tales; el poder del patriarcado puede tener origen divino, familiar o fundarse en el acuerdo de voluntades, pero en todos los modelos, el dominio del varón sobre la mujer se mantiene¹⁷⁵.

En el contexto de Latinoamérica, otra categoría que ha posibilitado la comprensión y el análisis de la desigualdad entre hombres y mujeres es el del machismo, definido como un conjunto de creencias, actitudes o conductas que descansa sobre dos ideas básicas, por un lado, la polarización de los sexos según la cual, hombres y mujeres son diferentes y

¹⁷⁴ Cf, Gamba, Beatriz, *Diccionario de estudios de género y feminismo*, Biblos, Argentina, 2007, p.258

¹⁷⁵ Para abundar sobre esta idea ver Capítulo III, apartado *Movimientos sociales, Modernidad e Ilustración*. Dada la relevancia de este concepto, se desarrolla en el marco teórico o a pie de página? En culturas latinas se puede encontrar una analogía con el machismo (Castañeda 2007).

mutuamente excluyentes; y por otro, la superioridad de lo masculino. El machismo involucra una serie de definiciones de lo que significa ser hombre y ser mujer, además de una constelación de valores y patrones de conducta que afecta todas las relaciones interpersonales y los ámbitos de la vida, entre ellos, la política (Castañeda, 2007:26)¹⁷⁶.

En *El machismo invisible*, María Castañeda (2007, expone que el machismo “juega un papel central en nuestra vida pública atravesando la estructura y funcionamiento de nuestras instituciones; inyecta sus valores a nuestro debate político y social; tiene un impacto enorme en las dinámicas poblacionales de nuestro país, la educación y la división del trabajo (...). Es una de las múltiples facetas del autoritarismo. Aunque no sea la causa de éste, puede dificultar el desarrollo de la democracia plena” (p.35).

Desde la perspectiva multidisciplinaria, Castañeda (2007) acierta al describir que en la sociedad mexicana pocos cuestionan sus actitudes y conductas inherentes, se presenta como algo natural y que el machismo existe en casi todas las sociedades, sin embargo, en los países industrializados hombres y mujeres lo detectan y cuestionan con mayor facilidad. En México, va más allá del sexismo, engloba además un desbordante culto a la masculinidad bajo todas sus formas (p.32).

Así, los conceptos de género y perspectiva de género se constituyen como herramientas teóricas, necesarias para el análisis epistemológico de la exclusión de las mujeres y constituye la categoría central de la teoría feminista (Cobo, 1995); mientras que las categorías Patriarcado y Machismo emergen para explicar prácticas, valores y forma de relación cultural en sociedades como la mexicana. Los conceptos anteriores, aparecerán a lo largo de la investigación para la comprensión de los hechos analizados. Para dar paso a concepto de las tradiciones clásicas de la Ciencia Política como son los de representación y democracia.

¹⁷⁶ Para conocer más de esta práctica, valor y forma de relación cultural, se puede ver el estudio completo de la psicóloga María Castañeda (2007), *El machismo invisible*, quien explica que el machismo “juega un papel central en nuestra vida pública atravesando la estructura y funcionamiento de nuestras instituciones; inyecta sus valores a nuestro debate político y social; tiene un impacto enorme en las dinámicas poblacionales de nuestro país, la educación y la división del trabajo (...). Es una de las múltiples facetas del autoritarismo. Aunque no sea la causa de éste, puede dificultar el desarrollo de la democracia plena” (p.35). La autora devela el machismo tiene dos características importantes: por un lado, en la sociedad mexicana, pocos cuestionan sus actitudes y conductas inherentes, y se presenta como algo natural. El machismo existe en casi todas las sociedades, pero en los países industrializados hombres y mujeres lo detectan y lo cuestionan con mayor facilidad. Por otro lado, en nuestro país va más allá del sexismo, engloba además un desbordante culto a la masculinidad bajo todas sus formas (p.32).

2.1 El concepto de representación

En diferentes tradiciones teóricas y políticas sobre los gobiernos representativos y la democracia, se consideraba natural la exclusión de algunas personas como las mujeres, los esclavos o quienes no tenían propiedades. De este hecho, apenas se encuentran menciones marginales en las teorías clásicas de la democracia (Line & Lilian, 2007).

Un estudio fundamental y ampliamente citado es *El concepto de representación política* de Hanna Pitkin (1985), obra de los años setenta del siglo pasado donde se abordan a detalle, diversas categorías de la representación que debaten con las tesis de pensadores anteriores. al tiempo que realizan aportaciones propias. Este texto constituye un referente importante en las investigaciones, sobre la presencia de las mujeres en el Poder Legislativo, es sin duda, el punto de partida para comprender las perspectivas y alcances de la representación.

Con ayuda de un apartado final etimológico, al realizar la genealogía conceptual la autora pone al descubierto diversas interpretaciones sobre el tema. Primero, la perspectiva formalista, que asume la representación como autorización y responsabilidad y, posteriormente, la representación descriptiva, la representación simbólica y la representación sustantiva. Todas estas perspectivas se relacionan e interconectan entre sí.

Las definiciones que se presentan con mayor profundidad en este apartado son la descriptiva, la simbólica y la sustantiva.

Tipos de Representación desde Hanna Pitkin

Formal: por autorización y por responsabilidad	Descriptiva	Simbólica	Sustantiva
---	--------------------	------------------	-------------------

El estudio de Pitkin, describe la representación como autorización con fundamento en las ideas de Thomas Hobbes¹⁷⁷, cuyo texto principal –el *Leviatán*–, apareció en el siglo XVII. Hobbes hace una distinción entre personas naturales y artificiales, tras considerar que la representación tiene que ver con las segundas. La persona artificial se denomina así, debido a que las acciones que realiza no son suyas sino de alguien más. Dichas acciones están relacionadas con la autoridad, es decir, con el derecho a ejecutar la acción de llevar a cabo cualquier acto de, o comisionado por o con licencia de quien es el ejecutor del derecho.

Explicando a Hobbes, Pitkin (1985) describe que el estado de naturaleza del hombre es la lucha, empero, el ser humano mantiene un instinto de conservación que lo obliga a trabajar por la paz y suscribir un contrato que le permita obtener seguridad y sobrevivencia. Así, la autora considera que cuando este filósofo utiliza el instrumento del Contrato Social, también crea la representación. Los hombres son capaces de constituir una república al contratar cada uno con los demás y al autorizar, a uno de ellos, para que los represente a todos. El soberano es entonces quien primero representa los intereses de una comunidad para después trasladar este poder al Parlamento¹⁷⁸.

En la investigación de Pitkin, en segundo término está la representación como responsabilidad. Ésta implica que las elecciones son un proceso mediante el cual los representantes adquieren responsabilidad, están obligados a mantenerse vinculados a sus

¹⁷⁷Thomas Hobbes (1588 – 1679), filósofo y pensador político inglés de la época de los Estuardo. Es recordado sobre todo por su obra *Leviatán o de la materia y forma de una república eclesiástica y civil* (1651) donde, sobre las bases de un estudio de la naturaleza humana, propone la idea de un contrato político como origen de un estado cuya principal función será garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad por medio de la delegación del poder de cada uno en el soberano.

¹⁷⁸ Para el teórico inglés, la autoridad del Estado y de la seguridad que se ofrece a la sociedad se funda en la confianza mutua respecto al cumplimiento de acuerdos que conlleva la obediencia al soberano. Pitkin (1985) también detalla que la autorización otorgada al soberano es ilimitada. Cualquier acción debe considerarse hecha para los súbditos y cualquier decisión tomada les vincula, es decir, todo ser humano que suscribe el contrato autoriza todas las acciones y juicios del representante como si fueran suyos, idea que se plantea en un contexto de búsqueda por la paz. Los rasgos distintivos del contrato son los siguientes: alguien ha sido autorizado para actuar mientras que el representado se hace responsable de las consecuencias de esa acción como si las hubiera realizado él mismo (30-41).

La pensadora alemana (1985) afirma que el punto de vista de Hobbes es estrecho al sólo abordar una óptica de la representación instrumentada en el Contrato Social en aras de la seguridad e instinto de conservación¹⁷⁸. Actualmente, la representación entendida como autorización implicaría que las elecciones dotan de autoridad a los representantes, al tiempo que los electores se encuentran vinculados a las decisiones instrumentadas por los elegidos; el proceso electoral produce la investidura de autoridad de los votantes hacia los electos. Así, la autorización es entendida hoy día como un proceso que va más allá de la simple investidura ya que cuando los votantes confieren la autoridad a los representantes, les reconocen la capacidad de gobernar (Martínez, 2004: 662).

electores y deben rendir cuentas. Los electores, por su parte, son libres de volver a elegir o rechazar a los mismos representantes en los siguientes procesos. El proceso nodal es la elección, ya que la forma de actuar del representante determinará si él o ella son elegidos nuevamente. Pero como señala Martínez (2004), de dicha conceptualización no se desprende que el representante actúe de forma responsable y de acuerdo con los deseos de los electores, al menos no de forma necesaria, esto lo hará si desea conseguir la reelección.

En tercer lugar, como argumento a favor de la presencia de las mujeres en la arena pública, se encuentra la representación descriptiva. El ángulo desde el cual se observa aquí, refiere a la representación como la suplencia de algo. Las analogías características de este modelo serían la de un mapa de la sociedad o un espejo, es decir, algo representa porque es semejante o se parece (Pitkin 1985). Desde esta perspectiva, los parlamentos deben ser ese espejo de la sociedad; si en la sociedad la mitad de la población son mujeres ¿por qué no estar representadas en igual proporción? ¿Los poderes legislativos son realmente reflejo de lo que existe?

Un poder legislativo representativo debería ser un retrato exacto, en miniatura, del pueblo en toda su amplitud: pensar, sentir, razonar y actuar como este último. Desde esta perspectiva, la representación depende más de las características del representante, de lo que es y parece ser. “Representar” entonces, no significa actuar por otro, sino más bien sustituirlo con base en una correspondencia, semejanza o reflejo, de ahí que sea más importante la composición del cuerpo legislativo que sus acciones mismas¹⁷⁹.

Otra idea sobre la representación descriptiva tiene que ver con el verbo “presentar”, usado como si fuese una obra de teatro donde alguien *representa* un papel. También se recurre a la comparación con un mapa o un plano que permiten *representar por medio*, más que *representar como*. Con un mapa se puede creer que se ha llegado a una clase de representación que servirá para los propósitos de los teóricos políticos, que desean enfatizar la exactitud en la correspondencia como UN modo de definir la representación”. La analogía es la de un espejo, ya que éste se aproxima al ideal de exactitud. A diferencia de los mapas o pinturas que son estáticos, en un espejo se reflejan los cambios o movimientos precisos. Los tres ejemplos comparativos -retrato, mapa o espejo- comparten la idea que dan cuenta

¹⁷⁹Los autores en los que se apoya esta idea son John Adams y Edmund Burke. Pitkin también considera la idea de los pensadores que definen el gobierno como un reflejo de la opinión del electorado (Pitkin 1985: 65).

del original en un medio diferente al que le es propio (Pitkin, 1985:79)¹⁸⁰. Se podría decir también que una cosa es ser representante del gremio de las mujeres; otra, es ser mujer elegida representante y, algo distinto, tener una actitud representativa de los intereses de las mujeres.

Sobre esta clase de representación se sostiene que, a pesar de sus diversas presunciones, las metáforas del cuadro, mapa o espejo de la miniatura, de la muestra y del concepto de representatividad, parecen compartir la idea de implicar una representación diferente a la definida por los teóricos formales, principalmente el suplir a algo o a alguien ausente por medio de alguna correspondencia de características. Esas metáforas constituyen generalmente lo que podemos llamar representación descriptiva, en la cual, una persona o una cosa suplen a otras siendo lo suficientemente parecidas a ellas.

Esta perspectiva puede sugerir que un legislativo es como un mapa espejo, esencialmente un objeto pasivo tan cercano que un espectador puede tener información sobre el pueblo a partir de él – tan próximo que refleja o asemeja la nación en su composición. En segundo lugar, puede sugerir que un legislativo representativo es como un pintor representando por medio de su actividad antes que por su composición; siendo esa actividad de una clase muy especial. En tercer lugar, la sugerencia puede ser que si un legislativo representativo es una copia suficientemente precisa, entonces puede permitírsele con toda confianza y de manera justificada sustituir a todo el pueblo, actuar en lugar de la nación [...] La representación es más bien una cuestión de correspondencia o semejanza exacta, y una condición previa para justificar la acción gubernamental (Pitkin 1985:90).

Otra línea teórica propia de la representación descriptiva, es la que sostiene que la Asamblea sustituye a todo el pueblo. Esta idea guarda relación con la de democracia radical, un sistema que entiende a la representación directa como un ideal. Dicha visión del gobierno representativo está ligada a la de semejanza o reflejo y tuvo grandes ecos en el movimiento de Independencia de Norteamericana de 1783 o la Revolución Francesa de 1789. Si el

¹⁸⁰ Existen algunos teóricos –Swabey, por ejemplo– para quienes en términos ideales, la Asamblea debe ser un compendio de toda la nación, llegando a pensar que una selección aleatoria de personas sería adecuada en tanto muestreo de la ciudadanía: “En otras palabras, las elecciones se realizan con el propósito más o menos consciente de elegir a hombres para los cargos públicos que representen muestras justas del público en general” Desde otra perspectiva, existen autores que develan las dificultades que aparecen al identificar representación con representatividad. En todo caso, sólo se aplica representatividad a un gobierno representativo. Una cosa es ser un representante típico de un gremio o de un grupo con determinadas características (mujeres, jóvenes, indígenas), otra cosa ser elegido representante, y una más tener una actitud representativa. Por ejemplo, un granjero agrícola que es electo y quien tendría una actitud representativa en la asamblea con base en los intereses de su gremio (Pitkin, 1985:82-84).

gobierno representativo sustituye a la asamblea de todo el pueblo, tendría que aproximarse al original lo más posible. Si no se logra poseer el ideal, al menos se quiere algo tan próximo a él como pueda conseguirse; detrás de todas las aplicaciones de la representación descriptiva, subyace el repetido ideal de la perfecta réplica, de la imagen intachable, del mapa que todo lo contiene (Pitkin, 1985: 96).

Al respecto, conviene recurrir a la obra del filósofo francés Bernard Manin (1997), *Los principios del gobierno representativo*, donde se relata que en los debates sobre el derecho al voto en la Convención de Filadelfia -en 1787-, la expresión de los antifederalistas pugnaba por este tipo de representación, al considerar que se debería conformar una Asamblea lo más parecida al pueblo: “como un pueblo en miniatura”. Aunque los antifederalistas mantuvieron una infatigable insistencia en la similitud que debe vincular a los representantes y a los representados, expresaron con claridad una concepción coherente de la representación, al tiempo que aceptaron sin reservas la necesidad de una diferenciación funcional entre gobernantes y gobernados. Según ellos, para que el gobierno representativo fuese genuinamente popular, los representantes debían de estar lo más cerca posible a sus electores, vivir con ellos y compartir sus circunstancias (p.160).

Lamentablemente, esta visión fue derrotada, ya que la idea predominante fue que el gobierno representativo norteamericano no se fundamentó en la semejanza y proximidad, sino que los representantes deberían ser diferentes al resto en cuanto a talento, virtud y riqueza. Pero cabe recordar que durante el siglo XIX y comienzos del XX, prevaleció la idea de la extensión del derecho al voto en el desarrollo de las instituciones representativas que con el tiempo conllevaría el derecho del sufragio universal, eliminándose el requisito de poseer riqueza para lograr ser representante (Manin 1997:162)¹⁸¹.

Recapitulando, la representación descriptiva concibe al gobierno representativo como un sustituto de la democracia directa y, al legislativo, como un sustituto de la Asamblea de todo

¹⁸¹ La dimensión descriptiva también se encuentra presente en la obra clásica de 1860 de John Stuart Mill, *Consideraciones sobre el gobierno representativo*. El autor ponía de manifiesto la necesidad de un equilibrio entre el cuerpo representativo y los cuerpos que gobiernan. Al pensador inglés se le considera el padre del principio de representación proporcional que busca la inclusión de los diferentes grupos en las democracias representativas. Mill (2001) prefirió apostar por un poder representativo en que los intereses de las dos principales clases de la sociedad -la obrera y la propietaria- estuvieran bien equilibradas con la esperanza de que la mayoría de los representantes votaran de acuerdo con los intereses de clase, mientras que una minoría de grupo- de la que dependería el equilibrio del poder- votaría por el interés público.

el pueblo. Si no se puede tener una copia exacta del pueblo, al menos ambos deben aproximarse al original.

A partir de esta definición de representación surgen ciertas interrogantes: ¿son las asambleas legislativas un espejo de nuestras sociedades? Como lo preguntaba Pitkin (1985): ¿cuáles deben ser las características de los representantes? Si una Asamblea tiene como ideal ser un espejo de nuestra sociedad según las teorías descriptivas de la representación: ¿no debería haber una representación paritaria de hombres y mujeres en los parlamentos? Desde esta perspectiva se podría afirmar, que la baja presencia de mujeres en los parlamentos pone en cuestionamiento la posibilidad de la representación descriptiva.

El cuarto desarrollo conceptual a tratar, es el de la representación simbólica, especialmente importante para el tema de la participación en la vida pública de las mujeres. La semejanza descriptiva, no es la única base sobre la cual una cosa puede ser sustituida por otra o con la que se puede representar mediante una “suplencia”.

En el trabajo de Pitkin (1985), los símbolos representan una cosa a la cual hacen presente mediante sí misma, aunque de hecho esa cosa no aparezca de un modo fáctico. Las otras clases de representación -incluyendo la política-, pueden ser interpretadas en función de y en la medida en que se aproxima a aquélla. De manera puntual, simbolizar significa hacer “una referencia exacta de algo definido”. Nunca podemos agotar ni captar totalmente en palabras la totalidad de lo que un símbolo simboliza: éste sugiere, evoca, insinúa¹⁸².

La idea es importante, dado que quienes representan a las mujeres no sólo fortalecen la representación real, también la simbólica: una mujer en el poder puede generar mayor identificación. A diferencia de la representación descriptiva, la creación de un símbolo puede entenderse como algo capaz de influir en el ánimo de la gente¹⁸³.

¹⁸² Pitkin (1985) detalla que cuando decimos que un símbolo (cualquier símbolo) “representa” lo estamos asimilando a un símbolo convencional, a la clase de símbolos que sólo puede representar y que el símbolo más que una fuente de información se aproxima a ser el recipiente u objeto de expresiones, sentimientos o de acciones orientadas hacia lo que representan, tales como la cruz, la barca o el pez para los cristianos (p.107).

¹⁸³ Lo anterior se suma a la idea que no existe justificación racional alguna para la conexión simbólica, ya que la creación de un símbolo no es un proceso de persuasión racional sino de manipulación de las reacciones afectivas y de formación de hábitos. Adicionalmente, cuando una representación simbólica es aceptada como definitiva, todas las demás clases de representación son entendidas en términos de aquéllas, de esos rasgos característicos del modo en que los símbolos representan, se generalizan y se proyectan tanto en la vida política como en otros ámbitos (Pitkin 1985: 111).

Así, la representación política no será una actividad, sino un estado de cosas. No será un actuar por otros sino un “suplir” a otros, dado que el líder político representa al pueblo en cuanto el pueblo lo acepte a él. Así, un requisito fundamental para la representación simbólica, es que alguien otorgue este reconocimiento al símbolo y tenga una conexión con el mismo. Bajo esta perspectiva, el pueblo ha de creer y aceptar al líder como su representante.

Entonces, la representación descriptiva y la simbólica amplían la perspectiva formalista del concepto, sin embargo, aún no están del todo completas. La primera introduce la idea de semejanza y la importancia de parecerse a los electores de uno; la segunda, sugiere al papel social de la creencia irracional, despreciada por la perspectiva formalista así como la importancia de dar satisfacción a los electores de uno.

Una crítica recurrente a la representación simbólica, es que a pesar de pertenecer a un gremio o grupo social con el cual se genere identificación, el representante no necesariamente responderá a los intereses del mismo. Como analogía, se podría señalar que ser mujer en el poder, tener conexión con el resto de las mujeres y representar, despertar o provocar sentimientos afectivos frente a otras mujeres, no garantiza del todo defender los intereses de las mujeres. Ser representante mujer no es igual a velar por los intereses de las mismas. Sin embargo, como afirma en su libro Bernard Manin (1997):

En toda organización con dimensión política es posible movilizar energías sustanciales apelando a la idea de que los dirigentes se han de parecer a los miembros, compartir sus circunstancias y estar lo más cerca posible de ellos, incluso aunque las necesidades prácticas impongan una diferenciación en los papeles. El poder del ideal de la similitud deriva de su capacidad para lograr una reconciliación casi perfecta entre la división del trabajo y el principio democrático de la igualdad (p. 163).

En este sentido, otra categoría es la representación sustantiva, donde representar significa actuar en interés de los representados de una manera sensible a ellos y se sitúa en un lugar intermedio: allí donde se aplica la idea de representación como una sustantiva actuación por los otros, porque las cuestiones políticas presentan problemas sobre la acción. Esos problemas, en consecuencia, implican compromisos de hechos y de valores, de fines y de medios a resolver¹⁸⁴.

¹⁸⁴Pitkin (1985) expone que en una deliberación común sobre política pública en la que los hechos y los

De lo anterior se desprende que la representación descriptiva responde a la pregunta: “¿quié nos representa?”; la representación sustantiva lo hace a la de: “¿qué hacen quienes nos representan?”. Con base en ello, puede decirse que un grupo gana representación cuando sus miembros son elegidos ante órganos de elección popular y en la medida que refleja las características del conjunto que representa; mientras que la representación sustantiva se fortalece en la medida que atiende o favorece los intereses de quienes lo eligieron. Por su parte, la representación simbólica se potencia al existir canales afectivos o de conexión entre representantes y representados (Francehschet, 2012)

Tanto la representación descriptiva como la simbólica, son fundamentales para la igualdad política democrática, porque de lo contrario, aunque se tomen decisiones correctas o se rindan cuentas, si se excluye a un grupo de la sociedad como las mujeres o las personas de raza indígena se podría restar legitimidad a las políticas emprendidas. En la democracia es fundamental que en los espacios de representación estén presentes, de algún modo, todos los sujetos que componen la sociedad, como son las mujeres. Si lo que se busca es un espejo lo más próximo a aquélla, ¿no deberían ellas encontrarse en igual proporción que cualquier otro sector representando en el Poder Legislativo?

En torno al paso de la representación descriptiva a la sustantiva, el debate se encuentra en lo que significa ser una minoría política dentro de un grupo mayoritario, considerando que las modificaciones numéricas tienen un impacto cualitativo en las transformaciones y actividades de los grupos, aspecto que también se considera en la definición de la masa crítica como se observará más adelante. Es decir, la proporcionalidad es significativa para la vida social e inclusión de los grupos que presentan diferencias por razones de género, origen racial (entre otras causas), ya que su ausencia puede provocar que los intereses de dichos

argumentos racionales son relevantes sólo allí donde el interés se ve implicado, es decir, allí donde las decisiones no son arbitrarias. Sin embargo, es en este contexto que la representación -como actividad sustantiva- se torna relevante, dejando de lado la idea que cuanto más vea un teórico al representante como un miembro de una elite superior de sabiduría y de razón, menos sentido tendrá para él exigir al representante que consulte las opiniones o incluso los deseos de aquéllos por quienes actúa: si la sabiduría y habilidades superiores residen en el representante, entonces no debe subordinarlas a las opiniones de sus ignorantes e inferiores electores.

Cuanto más considere un teórico que las cuestiones políticas se resuelven por elecciones irracionales y arbitrarias, asuntos de capricho o de gusto, menos sentido tiene para el representante actuar por su cuenta, ignorando los gustos de aquellos por quienes se supone que ha de actuar. Esta idea, llevada al extremo, provoca una vez más que la representación desaparezca. Sin embargo, la autora lanza la interrogante acerca de si los temas políticos traen consigo constantes compromisos de valor, graves, y parcialmente irracionales, podría nuestra concepción de representación como actividad sustantiva aplicarse a ellos en absoluto. Pitkin (1985: 234-236).

grupos queden marginados. Por ende, se requiere tanto la representación descriptiva como la sustantiva para garantizar condiciones propicias para la democracia: igualdad política y control de gobierno (Huerta y Magar 2006).

El concepto de representación en Hanna Pitkin

Representación Descriptiva	Representación Simbólica	Representación sustantiva
↓	↓	↓
<p>¿Quiénes nos representan en el Parlamento?</p> <p>El Parlamento como espejo o réplica de una sociedad.</p> <p>Representación como un derecho a.</p>	<p>¿Qué simbolizan nuestros representantes?</p> <p>El Parlamento como un símbolo de la nación. No se requiere semejanza.</p>	<p>¿Qué hacen quienes nos representan en el Parlamento?</p> <p>El Parlamento como un espacio de rendición de cuentas e inclusión de diversos intereses</p>

El politólogo, Giovanni Sartori (1997), despliega el tema de la representación en tres direcciones: a) con el fin de mandar, idea que proviene de la perspectiva de quienes gobiernan y se deriva del derecho privado; b) con la idea de la representatividad en el sentido de semejanza o similitud, aspecto desarrollado desde la perspectiva sociológica y que se encuentra cuando se dice que alguien es representativo porque éste tiene algunas características del grupo; y c) una tercera perspectiva, relativa a la idea de responsabilidad (p 225).

Respecto al desarrollo de la representación a lo largo de la historia, el pensador francés Bernard Manin (1997) despliega en su texto las diferentes formas en que la democracia representativa se va instaurando, tanto en el debate como en un sistema formal

institucionalizado, que transitó de un modelo de democracia directa a uno por sorteo y a otro por elección de los representantes¹⁸⁵.

Como señala la politóloga Antonia Martínez (2010) la democracia representativa ha pasado por diferentes momentos cualitativamente distintivos. La primera de las fases de su desarrollo histórico es la que ha sido identificada con el auge del parlamentarismo.

Retomando las ideas de Montesquieu y Rousseau¹⁸⁶, Manin (1997) expone que las elecciones son procesos aristocráticos, diferenciados del sorteo que realizaban los griegos como forma de selección de sus representantes. Entonces, a partir de la idea de que las elecciones no son necesariamente democráticas, el gobierno representativo en sus orígenes buscó representantes que cumplieran con el denominado principio de distinción, es decir, que no pertenecían al pueblo, ya que destacaban de los demás por su riqueza, talento o virtudes, lo que permite comprender la poca importancia teórica y práctica de incluir a ciertos sectores en el modelo de la democracia representativa (Manin 1997).

Al profundizar en la exposición del pensador francés, se conoce que la historia da cuenta de que el derecho al voto, en un principio, sólo incluía a quienes eran propietarios de tierra o tenían riqueza -para poder ser independientes de la Corona-, a personas con algún tipo de linaje o miembros de determinada raza, eminentes por el nivel educativo o formación con que contaban, así como la edad. Estas cualidades los hacían más o menos aptos para conducir el gobierno. Se argumentaba, en favor de la idea de ser hombres superiores, es decir, se favorecía la representación por autorización. Tampoco importaba mucho la idea de lograr una distribución equitativa de los cargos (Manin, 1997)

Posteriormente, los estudios feministas y los relacionados con el multiculturalismo pondrán en relieve la necesidad de analizar la exclusión histórica del sistema democrático

¹⁸⁵ En *Los principios del gobierno representativo* Bernard Manin (1997) presenta un detallado recuento histórico sobre esta forma de gobierno, desde la Atenas Clásica hasta nuestros días, así como de los diversos textos que estudian la transición de modelo democrático que fueron adoptando las naciones al implementar un sistema de representación política, precedido por una de democracia directa.

¹⁸⁶ Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (1689 - 1755), historiador, ensayista y filósofo político francés, uno de los primeros representantes de la Ilustración en ese país. Difusor de las ideas políticas inglesas en Francia, postula la hoy clásica división de poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en *El espíritu de las leyes* (1748). Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), pensador ginebrino de expresión francesa, especialmente influyente en el ámbito de la filosofía política por su obra *El contrato social* (1762). Ahí Rousseau establece la noción de “voluntad general”, que se convertiría según él en la razón de ser de cualquier representación.

representativo, sustentado bajo la premisa de la igualdad en la teoría, pero no necesariamente en la praxis (Magar, 2006:64; Phillips, 1996).

Por ejemplo, en Francia, Estados Unidos e Inglaterra, países en que fue implementando el modelo de democracia representativa, les estaba negado el derecho al voto -por su posición de subordinación o como dependientes-, a las mujeres, la servidumbre, las personas pobres, quienes no tenían domicilio fijo y los monjes, bajo la creencia que no podían tener voluntad política¹⁸⁷. Es importante recordar que en algunas sociedades, las mujeres sólo eran parte de la unidad marital.

Pareciera que la desigualdad por razones de sexo o de raza formaba parte del orden natural de las cosas. El debate quedó reducido a la desigualdad por razones económicas entre los varones. Los movimientos posteriores que centraron su atención en quienes no son considerados en el proceso de representación -más allá de buscar los equilibrios de representación de mayorías y minorías en un sistema electoral-, caen en el sistema de la representación descriptiva. Posteriormente, durante el siglo XIX y comienzos del XX, prevaleció la idea de la extensión del derecho al voto en el desarrollo de las instituciones representativas que con el tiempo conllevaría el derecho al sufragio universal, eliminándose el requisito de poseer riqueza para lograr ser representante. Se llegó a identificar casi por completo, la libre elección de los representantes por los adultos -varones- con la idea de la democracia (Manin 1997: 165).

A partir del siglo XIX, la naturaleza aristocrática de las elecciones no ha provocado importantes debates políticos ni estudios teóricos, fueron las discusiones norteamericanas de 1787 la última ocasión en que se consideraron los rasgos aristocráticos de un sistema de elección libre. A estas ideas, se agregan las mutaciones del sistema representativo en los últimos siglos. Al inicio, el gobierno representativo se estableció sin partidos políticos organizados, posteriormente llegaría la ampliación del derecho al voto universal, lo que propició mayor participación de ciudadanos y, por último, la conformación de partidos políticos de masas como ahora se conocen. Estos cambios dieron cabida a tres formas de

¹⁸⁷ La idea del sufragio universal recibe un tratamiento más amplio en el capítulo IV de este trabajo, "Movimiento de las mujeres por sus derechos", *vid infra*.

gobierno representativo: el parlamentarismo, la democracia de partidos y la democracia de audiencia (Manin 1997)

La metamorfosis del gobierno representativo se han dado en medio de crisis de representatividad y a partir del análisis de la relación entre representante y representado para cada uno de estos tres tipos de gobierno representativo; existen elementos constantes en este sistema instaurados en los siglos XVII y XVIII, y salvo la extensión al sufragio universal, se han preservado cuatro características del sistema: primero, quienes gobiernan son nombrados por elección con intervalos regulares; segundo, la toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia con respecto a los deseos del electorado; tercero, los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de los que gobiernan; y cuarto, las decisiones públicas se someten a un proceso de debate.(Manin, 1997: 17).

Lo que se deduce entonces, es que los gobiernos representativos fueron desde su fundación, élites o aristocracias que se han distinguido de la ciudadanía representada ya sea por su posición social, su modo de vida o su educación, por lo que el gobierno representativo que hoy estudiamos se parece al diseñado hace poco más de dos siglos sin cambios profundos, manteniendo tanto una dimensión democrática como oligárquica. La fortaleza del gobierno representativo radica en ser un sistema equilibrado que logra combinar partes democráticas con otras que no lo son, por lo que los representantes han sido y siguen siendo personas que en nada se asemejan al grueso de sus representados (Manin, 1997:290). Esto constituye una idea central para comprender la exclusión de las mujeres y de otros grupos sociales.

En el debate permanente sobre la transformación del gobierno representativo, la percepción continúa a través de los siglos: la crisis de representatividad se debe a la amplia brecha que existe entre los gobernados y la élite de sus representantes. Concluyendo, los gobiernos representativos:

Siguen siendo lo que fueron desde su fundación, un gobierno de élites distinguidas del grueso de la ciudadanía por su posición social, modo de vida y educación. A lo que estamos asistiendo hoy no es más que el auge de una nueva élite y al declive de otra. La impresión del malestar en la representación se debe sobre todo a la percepción de que con el auge de esta nueva élite, la historia está dando un giro inesperado. Cuando los activistas y los burócratas ocuparon el lugar de los notables, la historia parecía reducir la brecha entre élites gobernantes y ciudadanos corrientes (Manin, 1997: 284).

A partir del concepto de representación, es posible recapitular cuatro ideas vinculadas a la representación política de las mujeres.

Primero, si una comunidad se integra por personas que se caracterizan principalmente por diferencias de sexo, además de las derivadas del origen étnico o la clase social, entonces desde el punto de vista de la representación descriptiva, las mujeres deberían estar presentes en la misma proporción en una Asamblea para que ésta fuera representativa. Segundo, la representación simbólica aparece cuando existe una identidad de grupo frente al representado. ¿Pueden sentir las mujeres en términos emocionales y simbólicos una empatía frente a un Parlamento donde muy pocas de ellas ocupan una curul? Desde este punto de vista la afección desarrollada hacia una institución sería mayor si, la inclusión es idealmente paritaria. Tercero, la representación sustantiva tiene lugar al rendir cuentas e integrar los intereses de una sociedad en la agenda legislativa (Pitkin, 1985).

Por ende, como señala el politólogo norteamericano Robert Dahl (1999): ¿cree realmente alguien hoy día que cuando las obreras, las mujeres y las minorías étnicas fueron excluidas de la participación política, aquéllos que tenían el privilegio de gobernarlos protegieron o defendieron sus intereses en forma adecuada?

Por último, si se considera que actualmente -a nivel mundial- las mujeres están presentes en apenas un 22% de los escaños en los parlamentos, mientras que en un tercio de todos los parlamentos del mundo menos del 10% son mujeres¹⁸⁸, significa que la representación es débil según una interpretación rígida en términos descriptivos y simbólicos. Es decir, las asambleas actuales no son representativas.

Se reconoce que la crisis de la representación parlamentaria va más allá de la forma en que están integrados los cuerpos colegiados. Es innegable que una mayor presencia de mujeres resuelve una de las funciones que le dio origen al ideal parlamentario: representar a la sociedad, ser un espejo de la misma. Por ende, la presencia de mujeres y hombres en iguales proporciones, posibilitará fortalecer la representación descriptiva y en algunos casos la simbólica, pero no necesariamente la representación sustantiva (Franceschet, 2012; Lovenduski, 2005; Phillips, 1995, 1996).

¹⁸⁸Cfr. "Women in National Parliaments", disponible en <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>, consultada en agosto de 2014.

Por ejemplo, una mujer legisladora puede no rendir cuentas o trabajar para los intereses del grupo hegemónico, dejando de lado los asuntos de la equidad de género o una agenda que atienda las necesidades específicas de las mujeres. Así, una representación ideal sería aquella en que las mujeres y los asuntos de su interés sean incluidos.

En este contexto, la posibilidad de inclusión de las mujeres en el espacio público se gesta en el contexto de nuevos desafíos para la representación (Alonso, 2011; Salazar, 2014). Cuando parecían superados los retos de la representación descriptiva, es preciso abordar otros conceptos que fundamentan los objetivos de la representación y los principios de la misma, antes de desentrañar los mecanismos que permitirían ampliar la representación descriptiva de las mujeres.

2.2 La democracia y sus críticas.

Al igual que el concepto de representación, existe otra idea fundamental que enmarca el análisis de la inclusión o exclusión de las mujeres: la democracia. Concepto amplio que implica aspectos normativos y descriptivos cuya definición mínima es necesaria para justificar el estudio del caso mexicano.

El concepto democracia se relaciona de manera estrecha con el de representación. Los autores en este punto son principalmente Robert Dahl, (1992, 1999, 2008) Giovanni Sartori (1997) Anne Phillips (1991, 1993, 1995, 1996) y Joan Scott (2012).

En diversos textos, Robert Dahl (1992, 1999) apunta que después de una tradición democrática oligárquica y aristocrática, llegaron las ideas propias de una democracia representativa. Desde la Grecia clásica hasta el S. XVII, la posibilidad de que el cuerpo legislativo no abarcara la totalidad de los ciudadanos, sino sólo a sus representantes electos, quedó fuera de la teoría y de la práctica del gobierno. Es decir, los griegos no tuvieron un sistema democrático representativo sino una democracia directa donde se excluía a las mujeres y los esclavos.

Pasaron varios siglos para tener representantes de los diversos grupos en la Asamblea. La democracia representativa es una idea ilustrada y, a semejanza del concepto de representación, la democracia posee una historia dilatada que ha contribuido a su confusión

y al desacuerdo, pues ha significado muchas cosas distintas en diversas épocas y lugares (Dahl 1999:9)¹⁸⁹. Así, la democracia ha existido como pesadilla o como sueño durante tanto tiempo como el pensamiento político (Phillips, 1996:13).

La raíz etimológica de la palabra democracia es *kratos*, poder, y *demos*, pueblo; su concepto ha indicado una entidad política, una forma de Estado y de gobierno según la acepción primaria del término. Para Sartori (1997), el concepto se desdobra en un aspecto descriptivo y en otro prescriptivo. Se requiere su entendimiento en términos políticos, económicos y sociales, y su comprensión implica pasar del análisis de lo real a lo ideal y viceversa, es decir, el término nos sirve más para fines normativos que descriptivos. Un consenso general sobre la misma la califica como un régimen idóneo frente a otros como la dictadura, el totalitarismo o el autoritarismo, al tiempo que la democracia es legítima cuando el poder emana de la voluntad popular (Sartori 1997:3).

Por otra parte, el pensador Robert Dahl (1999) presenta una fina argumentación y defensa de este sistema político adoptado por alrededor de ciento veintiún naciones¹⁹⁰. El actual debate se concentra en los niveles de calidad que la democracia puede alcanzar, y evaluar los aspectos mediante los cuales la ciudadanía es capaz de defenderla ante sus críticos. Sobre las ventajas que ofrece este sistema, destaca que evita la tiranía, propicia la defensa de los derechos esenciales, la libertad general, la autodeterminación, la autonomía moral, el desarrollo humano, la protección de intereses personales, la igualdad política, además de la búsqueda de la paz y la prosperidad (p. 56). Asimismo existen algunas premisas que debe seguir un sistema democrático: participación efectiva, igualdad del voto, alcanzar una comprensión ilustrada, control de la agenda e inclusión de los adultos. Todos ellos,

¹⁸⁹ Cfr. Dahl, *La democracia, una guía para sus ciudadanos*, Taurus, Madrid, 1999. Sobre el tema, Antonia Martínez (2004) añade que al darse la representación política, se debe contar con un régimen democrático, definido éste en términos procedimentales ya que únicamente él asegura el principio de la inclusión —todos los ciudadanos mayores de edad pueden participar en política— y el de la contestación —la competición política permite la alternativa en las instituciones. Desde la perspectiva de la dimensión sustantiva, la representación se construye a partir de la relación que se entabla entre ciudadanos y políticos; la correspondencia entre estos dos actores se establece mediante tres escenarios. El primero se articula sobre las señales emitidas por los ciudadanos y las políticas emprendidas, la cual se denomina “receptividad”, lo que significa que las políticas de los representantes conllevan a las opiniones y deseos de los ciudadanos. El segundo aspecto que acerca a los ciudadanos y políticos es el relativo a la relación entre los mandatos con las política, lo que nos lleva a que el político pone una serie de ofertas a los ciudadanos que son elegidas por los electores para obtener una actitud de receptividad; así como un tercer escenario que vincula a representantes y representados ante los resultados y las sanciones, que ahora conocemos como *accountability* (2004: 687 ss.).

¹⁹⁰ Ver “Freedom in the World Country Ratings” para 2008. Disponible en <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2008>, consultada en agosto de 2014.

elementos necesarios para que las y los individuos, sean iguales políticamente al momento de definir las acciones para una comunidad.

Cada uno de estos derechos constituyen una parte necesaria para la democracia ideal como el derecho a participar -aspecto del que estuvieron relegadas las mujeres por siglos-, el derecho a que cada voto cuente igual, el de buscar el conocimiento necesario para comprender las cuestiones públicas y el derecho a participar en condiciones de igualdad respecto a los demás al ejercer el control de la agenda. Es decir, la democracia consiste no sólo en procesos políticos; también es, necesariamente, un sistema de derechos fundamentales (Dahl, 2008: 24)¹⁹¹.

Estas instituciones son el producto de un largo desarrollo. Se encuentran plasmadas en las constituciones y se han conformado paulatinamente en las naciones bajo diversos grados y, en conjunto, son básicas para alcanzar un nivel de democracia representativa avanzada.

En otra perspectiva, el catedrático italiano de Ciencia Política, Leonardo Morlino (2009), desarrolla las ideas de la calidad de la democracia en el proceso de legitimación política. Una definición ideal de democracia debe partir de los dos principios que conducen a la autonomía individual: la libertad y la igualdad. Además, para asegurar una mayor democracia, se debe considerar la expansión de los derechos individuales o de la comunidad, para lo cual es necesario conocer los instrumentos institucionales que la posibilitan. La centralidad se ubica entonces en los derechos y en la posibilidad de apuntalarlos y extenderlos en su goce y ejercicio concreto (p.10), mientras que para Norris (1997), un Parlamento que excluye a una gran proporción de ciudadanos puede ser considerado como fallo de legitimidad del sistema democrático.

Además, el análisis de la calidad de la democracia desde una perspectiva empírica abarcaría por lo menos los siguientes aspectos: sufragio universal masculino y femenino, elecciones libres competitivas, regulares y limpias, más de un partido político y diversas fuentes de

¹⁹¹ Las instituciones políticas del gobierno democrático representativo moderno son cargos públicos electos, lo que significa que el control de la toma de decisiones del gobierno está investido a partir de una elección popular que genera gobiernos representativos, elecciones libres, imparciales y frecuentes; organizadas con objetividad, imparcialidad y sin coacción, libertad de expresión para que los ciudadanos puedan hablar con libertad sin ninguna restricción, acceso a fuentes alternativas de información objetivas y veraces ajenas al control del gobierno o de grupos con intereses particulares, autonomía de las asociaciones para lograr distintos derechos y una ciudadanía inclusiva, lo que implica que a ningún adulto que resida permanentemente en el país y esté sujeto a sus marcos jurídicos, le sean negados los derechos que ejerzan otros (Dahl, 1999:100).

información. En este sentido se excluyen los regímenes híbridos (Morlino 2009, 184). Desde esta perspectiva, la participación de las mujeres, el ejercicio de su voto y el acceso a sus derechos son elementos de la calidad y legitimidad de la democracia¹⁹².

A partir de estas ideas, es posible abrir la interrogación de si la presencia o la ausencia de las mujeres en las asambleas, el marco normativo e institucional bajo el cual desarrollan su participación o bien el resultado de la agenda pública y de rendición de cuentas sobre sus intereses, incide en la calidad y legitimidad de la democracia; o, si se trata de un fenómeno que se reduce al ámbito de la representación y no de la democracia. Para responder se desarrollan las ideas de autoras críticas al modelo de la democracia liberal.

En este sentido, Norris (2007) apunta que en un sistema democrático representativo, las mujeres hablarán con voz diferente, articularán preocupaciones específicas y llevarán a la vida pública un estilo diferente de hacer políticas, diferencia que se hará más evidente cuando las mujeres dejen de ser una minoría sesgada. “Los datos sistemáticos que apoyan esta afirmación están empezando a emerger en Estados Unidos, Europa y Escandinavia” (p.150).

Anne Phillips (1996), también describe que la perspectiva feminista sobre la democracia experimentó un considerable retardo y a medida que ésta iba desarrollándose - principalmente durante la década de los ochenta del siglo pasado-, se deslizó hacia un terreno diferente, como el de la igualdad política y la relevancia de la presencia de las mujeres, elementos de la calidad y de legitimidad.

En resumen, la democracia liberal comparte como principios básicos: la protección de los derechos individuales y la igualdad de oportunidades como medio para el desarrollo humano, un gobierno constitucional y la división de poderes. En las últimas décadas, han ocurrido cambios en la interpretación clásica y de autores contemporáneos en torno a la democracia. Primero fue una modificación a la concepción del gobierno directo de la asamblea del pueblo al gobierno representativo, después el paso de una noción de protección del bien común a

¹⁹² Por otra parte, la legitimación se presenta de abajo para arriba, pero también de arriba para abajo, con base en lo que Morlino llama anclajes, considerando que cuatro elementos relativos a esto se han puesto en evidencia empírica: los partidos con sus consiguientes organizaciones, el clientelismo, el neocorporativismo y los vínculos entre los partidos y las élites económicas (2009:125-128). Estos aspectos llevan a la existencia de una sociedad civil más o menos articulada en distintos tipos de élites autónomas, no políticas, así como distintas redes asociativas y las asociaciones de diversas bases.

una protección del grupo, donde la discusión puso como eje el visibilizar y demandar la inclusión de sectores marginados del sistema democrático -al igual que acontecía con la representación, mayoritariamente mujeres y personas de raza no blanca (Bareiro, 2013)¹⁹³.

El movimiento feminista subrayó la incoherencia del Contrato Social de una democracia antigua, liberal y consolidada, que tiene en su haber varias revoluciones contra diversas desigualdades a lo largo de los últimos dos siglos, con el paradójico resultado de la ausencia de mujeres en el poder político. La perspectiva feminista de los años sesenta y setenta del siglo pasado –estudiada a mayor detalle en el Capítulo III-, irrumpió cuestionando los paradigmas tradicionales de la democracia colocando nuevas definiciones. Es un movimiento que cuestiona, interpela y disputa los sentidos teóricos, políticos y epistemológicos tradicionales¹⁹⁴.

Desde esta mirada crítica,, se consideró relevante incluir una definición de democracia que integra la perspectiva de género, conformando teorías que van más allá de la democracia representativa como una definición mínima de la democracia paritaria y la democracia feminista.

- Democracia paritaria

Un nuevo concepto pone en cuestión la idea de una democracia sin adjetivos, la democracia paritaria. Uno de los análisis más rigurosos y detallados sobre este principio político y jurídico, se encuentra en el texto *Parité. Equidad de Género y crisis del universalismo francés* (2012) de Joan Scott, en el que se expone el recorrido teórico del concepto. El debate adquirió relevancia después de que el Tribunal Constitucional francés declaró inconstitucionales las cuotas electorales, al considerar que transgredían uno de los principios paradigmáticos de su política y Constitución: el universalismo.

De manera general se establece que el término democracia paritaria, surge en Francia entre los años ochenta y noventa del siglo pasado. Se refiere al ideal político del 50% de

¹⁹³ Esta investigación se apropia de la perspectiva de género para narrar los hechos que han propiciado la exclusión de las mujeres partiendo de las definiciones contemporáneas de la democracia liberal y de nuevas miradas teóricas y, posteriormente, visibilizar las variables y los actores que han hecho posible su representación parlamentaria.

¹⁹⁴ El tema se desarrollará en el Capítulo III, en el apartado Feminismo, teoría y movimiento.

representación de mujeres y el 50% de hombres, por el solo hecho de que las mujeres suman la mitad de la población. Su objetivo es cuestionar el monopolio masculino del poder y las acciones que se derivan de dicha hegemonía. En años recientes la democracia paritaria ha sido incorporada en el marco normativo de Francia (2000) Bolivia (2009), Costa Rica (2009), Ecuador (2008), y México (2014)¹⁹⁵.

Dicho principio y/o estrategia política se extendió a partir de la primera Cumbre Europea denominada “Mujeres en el Poder”, celebrada en 1992 y que dio vida al manifiesto denominado “Declaración de Atenas”. En ese documento se establece que la igualdad formal y real entre las mujeres y hombres, es un derecho fundamental del ser humano; que las mujeres representan la mitad de las inteligencias y de las cualificaciones de la humanidad y su infra-representación en los puestos de decisión, constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto. Además, su ausencia en los puestos de decisión, no permite tomar plenamente en consideración los intereses y las necesidades del conjunto de la población y, por ello, una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres es susceptible de dar vida a ideas, valores y comportamientos diferentes que van en la dirección de un mundo más justo y más equilibrado (Scott 2012).

Las mujeres líderes del encuentro de Atenas, proclamaron la necesidad de alcanzar un reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y hombres, la igualdad de participación en la toma de decisiones públicas, la relevancia de realizar modificaciones profundas en la estructura de los procesos de decisión para asegurar la igualdad. Las signantes anunciaron campañas de movilización para garantizar la participación equilibrada en los diferentes niveles de gobierno y en las instituciones europeas, incluido el Parlamento Europeo¹⁹⁶.

Desde la investigación de Joan Scott (2012), *les parites* aspiran a lograr la completa igualdad a través de la misma representación numérica en organismos de decisión política. Así, las mujeres deben ser incluidas en las asambleas políticas no porque solo y necesariamente

¹⁹⁵ Cfr. *Proceso hacia la paridad en América Latina. Argentina y Costa Rica, experiencias comparadas*, Nélide Archenti. Disponible en https://www.tse.go.cr/revista/art/17/nelida_archenti.pdf. Consultado en diciembre, del 2014.

¹⁹⁶ Ver también el texto de Pérez, Pilar, *De la Democracia Ateniense a la Democracia Paritaria*, Icaria, Barcelona, España, 2009 en el cual se presenta un desarrollo histórico desde la época clásica hasta la actualidad en torno a la participación política de las mujeres, especialmente en Europa y España.

representen una diferencia de puntos de vista, sino porque las mujeres son -de manera sencilla e inobjetable- la mitad de la especie humana.

En síntesis, la lucha por la paridad es una estrategia contra el monopolio del poder y una corrección al modelo de democracia representativa. Supone, además, dejar de lado la demanda por las cuotas electorales -definidas en el Capítulo VI- para dar paso definitivo a una esfera política paritaria, que además podría arrastrar o contagiar otros espacios.

La paridad puede considerarse entonces, un experimento social que no necesariamente garantiza la inclusión de los intereses de las mujeres, empero, ayudará a salvar la deuda histórica que la República y un modelo democrático liberal, han contraído con las mujeres (Cobo 2000)

Además de la democracia paritaria, la escritora Alicia Miyares (2003) también pone un adjetivo al modelo democrático, la democracia feminista. La autora resume que las tres teorías políticas para la construcción de sociedades democráticas son el liberalismo, el socialismo y el feminismo. De las dos primeras existen amplias descripciones, pero no de la ésta última, por lo que hace un planteamiento alternativo que, además de explicar por qué el liberalismo y la social democracia excluyen a las mujeres, abre la propuesta ético-política ya que el objetivo de una democracia feminista, es que la categoría de sexo pierda su función normativa y el lugar prevalente que ocupa ahora.

La autora española explica que en las democracias liberales, una élite concentra el poder y la representación por motivos económicos y de hegemonía social, como ya lo explicaba Manin. Dado que el poder se difunde entre una variedad de individuos, grupos y asociaciones, variados centros de poder están en relación con el dinero, el conocimiento o la posición social, lo cual no se nombra, pero se reparte en dos áreas de influencia, liderazgo y autoridad, generadores de hegemonía social y cultural. En consecuencia, la sociedad civil, diseñada al estilo liberal (liderazgo, competitividad, éxito, eficacia) interrumpe el acceso de las mujeres a los niveles altos.

En el mismo sentido, al Estado liberal le preside una idea de Estado fuerte que busca mantener el *statu quo*, resistiéndose a cambios de cualquier orden como la familia, la religión, el empleo, por lo que las tesis feministas cuestionan dicho modelo excluyente y

neutral. En oposición, el feminismo. Al igual que la social democracia, el Estado no puede ser neutral, ya que al estar comprometido con el poder ideológico privilegia a unos sobre otros, así que más bien el Estado debería contrarrestar los desequilibrios y la desigualdad distributiva de poder y riqueza (Miyares 2003:181)

Así, para hablar de una democracia plena se debe corregir el fallo de la representatividad, de ahí que la democracia feminista entienda la paridad como un derecho que asegura la representatividad de los sexos. No es una concesión a la representatividad de las mujeres que dependa del voluntarismo de los partidos políticos, es un derecho que no puede ser alterado dependiendo de las circunstancias políticas, exactamente igual el derecho al voto; la paridad evitará que las leyes, acciones e inacciones perpetúen los desequilibrios de poder. La alta representatividad masculina ha sido el medio para que el dominio masculino se exprese, y el legalismo liberal es, por lo tanto, un medio para hacer que el dominio masculino sea invisible y se legitime adoptando el punto de vista masculino en la ley.

En resumen, la paridad es un rasgo esencial de la democracia feminista, empero, para transformarse en un agente real de cambio social debe ir acompañada de cambios normativos, para que aparezcan rasgos valorativos subjetivos en la toma de decisiones, como podrían ser la tradición, el estereotipo sexual o la religión, es decir, debe alcanzar la representación sustantiva

Tanto la democracia paritaria como la democracia feminista, aportan una visión diferente de las clásicas ideas liberales que dejaban de lado la ausencia de sectores de la sociedad bajo los paradigmas de libertad, igualdad y fraternidad.

2.4 Teorías a favor de la representación de las mujeres

Además de la representación descriptiva, del análisis de la exclusión de las mujeres a partir la exposición de Manin (1997), y de las ideas sobre la democracia, existen otros razonamientos del por qué es relevante que más mujeres participen en los espacios de poder. Entre las autoras que abordan el tema de manera relevante, se encuentran las politólogas y filósofas Krook (2012) Lovendusky (1997,2005), Miyares (2003), Norris (1997) Valcárcel (1997). Anne Phillis (1996) Dudre Dahlerup (2005), entre otras.

Por la solidez y profundidad de sus estudios, aquí se retoma a las dos últimas, quienes exponen las ideas sobre la política de la presencia, la inclusión de nuevos intereses, y la masa crítica. Cabe señalar que las miradas críticas de la democracia liberal tienen como antecedente un argumentado cuestionamiento al principio clásico de la igualdad¹⁹⁷.

2.4.1 Desde la política de la presencia

En la obra de la filósofa política Anne Phillips (1995), no se explica la superioridad o el talento masculino para dominar las asambleas y se considera injusta su sobre-representación, la cual se debe a razones como la división sexual del trabajo y la discriminación contra las mujeres, no por capacidades o un mérito masculino a priori. Para superar este hecho, se debe transitar de la política de las ideas a la política de la presencia, es decir, que las mujeres estén presentes en los parlamentos, hecho que también puede provocar paulatinamente la

¹⁹⁷ De acuerdo al texto de la filósofa Amelia Valcárcel (1994), El concepto de Igualdad, en la teoría clásica liberal, la igualdad de oportunidades implica que los individuos deben tener las mismas oportunidades, y si se producen desigualdades es por los distintos méritos de cada persona. El papel de Estado es entonces propiciar que todos tengan las mismas oportunidades y si aparecen diferencias, se deben a la capacidad o incapacidad de cada individuo. La estrategia de igualdad de oportunidades surgió en el mundo anglosajón, porque el ordenamiento político y jurídico de estos países legitimaba en el contexto del momento este tipo de actuación política para el desarrollo del Estado, es decir, la premisa era “todos somos iguales” ante la ley, lo que es, además de ser un valor comúnmente admitido, una mera suposición,

Primero, porque no escapa la idea que no existe o quizás no sea factible y segundo, es la suposición por excelencia para que la moral sea posible ya que si no estamos dispuestos a considerar que otro tiene derechos tan seguros como los nuestros ¿cómo se podría plantear la universalidad propia del juicio moral? Así para ella, la igualdad es un reconocerse bajo el fundamento de que los otros son como uno mismo y que nada que uno se conceda así mismo, tiene derecho moral a no concedérselo al otro.

Por otra parte, en un texto clásico del feminismo Hacia una teoría feminista del Estado, Catharine Mac Kinnon (1989), elabora un puntual análisis sobre la política, la sexualidad y la ley desde la óptica de las mujeres, exponiendo que el principio de igualdad liberal oculta las desigualdades existentes de facto entre hombres y mujeres, ya que si realmente los sexos fueran iguales no habría relaciones de poder asimétricas; las mujeres no padecerían marginación económica, social o la violencia sexual. Para ella, la premisa de igualdad desde el ámbito legal y político tiene una visión patriarcal donde la sexualidad está ligada a la naturaleza y a las relaciones interpersonales, ocultando con ello la comprensión de las cuestiones más profundas de la desigualdad. Adicionalmente, denuncia que existen diferencias concretas que generan resultados diferentes que conllevan discriminación; lamentablemente, estas diferencias inmutables e inherentes se han enterrado bajo interpretaciones que han levantado ciertas distinciones que llegan a ser irracionales. Así, la idea de igualdad, definida como identidad, y no discriminación en términos abstractos refuerza o contribuye a la permanencia de las desigualdades, además, impide que las mujeres accedan a la defensa de los derechos que ellas más necesitan y paradójicamente, prolonga la posibilidad de construir la igualdad normativa.

En el apartado de su texto Hacia una teoría feminista del Estado (1989), denominado Igualdad entre los sexos, diferencia y dominación, establece que la ley de la discriminación sexual está básicamente degradada por sus conceptos de sexo, igualdad y ley; su fundamento es el punto liberal de las diferencias de género. En tanto, la visión feminista, establece que es la jerarquía genérica la que produce desigualdades y da forma al significado social, en consecuencia, la necesidad del reconocimiento de la diferencia sexual en la ley. Esto conlleva que el principio de igualdad tradicional constituye una camisa de fuerza que impide avanzar a las y los realmente desiguales de una sociedad. Así que quienes más requieran del tratamiento igualitario serán los menos similares, socialmente, a aquellos cuya situación establece el patrón con el que se mide su derecho a un tratamiento igualitario.

presencia de los diversos sectores minoritarios excluidos del reparto del poder y con ello, la inclusión de nuevos intereses en la agenda pública. El argumento principal se encuentra en la evidencia histórica de la exclusión de diversos sectores que no están representados en la misma proporción que los electores y la permanente exclusión que ello propició de los diversos asuntos públicos.

Los textos de Anne Phillips, nacen en el contexto de los debates de las cuotas de género y las teorías feministas que surgieron en los años noventa del siglo pasado para lograr dos objetivos: aumentar la presencia de las mujeres en los parlamentos (cuantitativo) e incorporar los asuntos en intereses de las mujeres en la agenda pública. Las ideas son presentadas en *Engendering Democracy* (1991) y *The politics of the presence* (1995), obras que refuerzan las teorías de la representación descriptiva, simbólica y sustantiva.

Phillips (1995) arguye que existen dos requisitos para el desarrollo de la democracia: la igualdad política y el control de los gobernantes. Al igual que en el pensamiento de Roberta Dahl, el primero implica la presencia de todas las personas que integran una sociedad para que puedan influir en las decisiones que les competen, por ejemplo, las personas de raza negra, católicos o mujeres, estarán interesados en asuntos de combate a la discriminación, tolerancia religiosa o políticas de sexualidad, respectivamente.

La presencia es importante porque pese a existir decisiones correctas, las acciones en la vida pública no ocurren en condiciones de igualdad; es fundamental que las instituciones políticas reflejen las características e intereses, que expresen la diversidad social. Además, con la presencia de los variados grupos que componen la sociedad se estrecha la relación simbólica entre el representante y el representado, al tiempo de integrarse intereses diferentes a los tradicionales. La igualdad significa que “todos deberían contar por uno, y nadie más que uno” (Phillips, 1995:30).

La autora no deja de lado la idea de que la política de la presencia puede tener algunos inconvenientes, como crear una política dividida en sectores que ella denomina “balcanización”, y no lograr la cohesión social necesaria; marginar el asunto de la responsabilidad que obliga a la rendición de cuentas y es posible también la dificultad de las cuestiones del bien común. Por ende, la presencia de las mujeres es un medio para un fin, más que un fin en sí mismo.

En cuanto al otro requisito de la democracia, el control que debe tenerse hacia los gobernantes se liga a la idea de presencia. La pensadora Phillips (1995) considera fundamental que las sociedades lleven a cabo el proceso deliberativo, necesario porque existen diferencias; al debatir se evita el sectarismo y la exclusión y, al mismo tiempo, hace posible exigir la rendición de cuentas. En el proceso de deliberación y cohesión de las democracias, las personas pueden generar debates, consensos y control, lo cual es una función de la presencia.

Así, en un proceso deliberativo, las mujeres podrán expresar esos otros problemas no visibles situados desde un horizonte no masculino a fin de transformar y llegar a soluciones que son de interés general. Ejemplos de ello, son los nuevos temas que pusieron las mujeres en las agendas como el impulso a políticas de salud sexual y reproductiva, igual salario por igual jornada de trabajo o aspectos del ámbito privado ignorados en la esfera pública, como la violencia de género.

En el mismo sentido, se considera que una buena deliberación produce buenas soluciones emocionales e intelectuales para aceptar decisiones difíciles, enfatizando que después de la Segunda Guerra Mundial, “la democracia resaltó el reconocimiento del poder y del conflicto más que el énfasis de la deliberación y el bien común”(Huerta y Magar, 2006:492).

En resumen, la presencia y los asuntos de los grupos minoritarios excluidos de los espacios de poder, son necesarias como uno de los requisitos de la democracia, la igualdad y un control de los gobernantes, así como para la inclusión de nuevos intereses y una mayor deliberación que conlleve un control de quienes toman las decisiones. (Phillips, 1995:56).

2.4.2 Desde la inclusión de nuevos intereses.

En los últimos años se ha publicado diversa bibliografía que estudia las repercusiones y los alcances en el actuar de las mujeres en los espacios de representación parlamentaria, se da seguimiento al impacto en la representación sustantiva, es decir, qué hacen las mujeres en los parlamentos ya sea de forma individual o a través de las comisiones de equidad de género, de igualdad sustantiva o de la mujer. (Franschet, 2012; Phillips, 1995; Tremblay, 2007; Martínez 2010).

Algunos estudios de caso han demostrado que las mujeres en cargos públicos impulsan mayor inclusión de sus pares en los espacios de poder y ejercen una presión importante para introducir en las agendas de sus países asuntos relevantes para la igualdad y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en su conjunto (Franceschet, 2012:8).¹⁹⁸

Desde los estudios de la politóloga noruega Dahlerup (2005,2014) la mayor presencia de mujeres en la política -tanto partidista como parlamentaria-, permitió crear una minoría que trabajó para integrar a más mujeres al poder y logró la inclusión de las acciones afirmativas, medidas de carácter temporal para acelerar la igualdad en las sociedades mismas que se abordan en el Capítulo IV.

El caso de los países escandinavos presenta el mejor ejemplo de lo anterior. En los tempranos años treinta, en Noruega, todas las voceras de los partidos eran mujeres y en los ochenta ya se contaba con cuotas electorales al interior de los partidos políticos más fuertes. Ello provocó, en primer lugar, una mayor participación de mujeres en el ámbito político y después un dinamismo y avance en programas para acortar las brechas de desigualdad por razón de sexo.

Actualmente, la región nórdica constituye una de las zonas con mayor calidad de vida para las mujeres e igualdad de acuerdo al ranking internacional del Banco Mundial sobre desarrollo y género¹⁹⁹. Algunas medidas impulsadas fueron la licencia de guarderías, seguros de desempleo para individuos -no solo para familias-, o el derecho a conservar su apellido de soltera al casarse (Dahlerup, et.al.159).

Uno de los aspectos más visibles de la acción coordinada de las legisladoras en diferentes naciones ha sido el impulso de las cuotas electorales, las cuales ya están presentes en noventa países. Desde la perspectiva de la noruega Dahlerup (2005), este esfuerzo tiene como premisa haber logrado una minoría crítica de mujeres en espacios de poder. En un ensayo publicado en 1986, afirmaba que en esa época ya nueve institutos políticos tenían cuotas

¹⁹⁸ En el texto *Gender Quotas Impact* de las autoras Franceschet, Krook y Psicopo se presentan ensayos sobre lo acontecido en la representación sustantiva en la Gran Bretaña, Brasil, Sudáfrica, y Afganistán. El análisis considera que el actuar de las mujeres también está determinado por la filiación partidista, si las mujeres representan una minoría o alcanzan a ser una masa crítica que conformen coaliciones, así como variables institucionales y de contexto como la ideología y disciplina partidista y el apoyo de la sociedad (2012:89-156). En tanto, en el ensayo de Antonia Martínez sobre la representación política de las mujeres en México y Argentina, expone las aportaciones de las legisladoras en la agenda por los derechos de las mujeres, detallando que en varios países se impulsaron marcos normativos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, políticas públicas con perspectiva de género, acciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos, así como debates en torno a la conciliación de la vida familiar y laboral.

¹⁹⁹ Cf. *Gender Equality and Development*, The World Bank, 2012, Washington, D.C., 2013.p.386

electorales en los países escandinavos y, aunque la resistencia fue intensa, una coalición conjunta de mujeres de diversos grupos lograron introducirlas: “las cuotas en la región son consecuencia del crecimiento de las mujeres en la política y constituyen un importante recurso institucional para la futura movilización de mujeres” (p.155).

Por ejemplo, el Partido Laborista Noruego introdujo las cuotas en 1981, logrando un 45% desde 1985. En contraste, México las aplicó por primera vez en 1993 en un partido de oposición de izquierda. Para 1985 sólo tenía un 10.5% de congresistas²⁰⁰.

Otros ejemplos de las aportaciones femeninas a la agenda pública, se encuentran en las narraciones de la socióloga Valentine Moghadam (2007), quien detalla que parlamentarias del Medio Oriente y Norte de África han trabajado por nuevas interpretaciones en el Corán y han luchado por tener facilidades para su inserción en el ámbito laboral, además de impulsar reformas en materia familiar y civil, tarea que no ha sido sencilla.

En el caso de México, por ejemplo, las normas y acciones que propiciaron las legisladoras y los movimientos de mujeres -sobre todo a partir de la década de los noventa-, fueron la institucionalización de la perspectiva de género que provocó la creación de organismos y programas de gobierno en la materia. Mientras que se publicó la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la igualdad entre hombres y mujeres, y se modificaron aspectos como la edad mínima para contraer matrimonio y las pensiones alimenticias, entre otros, las diputadas también realizaron profundas reformas en materia penal y civil, modificaron tipos penales como el llamado “homicidio por honor”, el rapto, la violación y el acoso sexual. También se configuraron nuevos delitos como el feminicidio²⁰¹.

Como señala el documento introductorio de “Mujeres. Participación Política en México 2012” (2012), la experiencia muestra que las mujeres son más proclives a introducir y apoyar cambios políticos para mejorar la situación de la mujer, que su incremento en la política contribuye a aumentar los índices de confianza pública en el sistema político y que su

²⁰⁰ Cf. www.uip.org. Consultado el 4 de noviembre del 2015.

²⁰¹ Cabe señalar que en 1997 se creó la Comisión de Equidad de Género y posteriormente el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres (CEMEAG), donde se sistematizan las iniciativas, leyes y dictámenes en materia de derechos humanos de las mujeres presentados y dictaminados por la Comisión de Equidad de Género.

Desde la Legislatura LXI se presenta el Diagnóstico del trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres en la Retos y pendientes. Cámara de Diputados, México 2012. Además, el CEMEAG, lleva a cabo publicaciones e investigaciones con perspectiva de género.

presencia en el más alto nivel gubernamental es crítica para el avance y la consolidación de la democracia. Además de la modificación de la inclusión de nuevos intereses, Michelle Bachellet, expresidenta de Chile, suele reiterar en sus discursos: “Si una mujer entra a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la política, cambia la política”²⁰².

Cabe señalar que en sí misma, la producción de asuntos de interés de las mujeres es un área de estudio y existen diversas investigaciones sobre la producción e incidencia en las agendas públicas por parte de las mujeres.

2.4.3 Desde la teoría de la masa crítica.

Existe un consenso internacional, casi generalizado, de la relevancia de que exista mayor representación de mujeres. Paulatinamente, los organismos internacionales, como ONU Mujeres -organismo de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos – OEA-, la Unión Europea, priorizan la promoción por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como parte de la agenda internacional de los Derechos Humanos²⁰³.

Para ello, el Movimiento de Mujeres –concepto y análisis al que se dedica Capítulo III-, diseñó estrategias de carácter global como la redacción y solicitud de adhesión a varios tratados internacionales con perspectiva de género, entre ellos la Convención para Prevenir y Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, conocida como Belén do Pará (1994), con los respectivos Protocolos Facultativos de dichos pactos.

En el año 2015, 187 países firmaron y ratificaron las normas internacionales generando una paulatina transformación en la vida de las mujeres. Como parte de la estrategia también se redactó la Plataforma de Acción Mundial de Beijing (1995), en la que se diagnosticaron doce problemas que afectaban la vida de las mujeres, entre ellos, la baja presencia en los espacios

²⁰² Cf. www.onu-mujeres.org

²⁰³ Cf. Folguera Pilar, “*La equidad de género en el marco e internacional y Europeo*” en *Mujeres, Globalización y Derechos Humanos*, Feminismo, Cátedra, España, 2010.

de poder y la necesidad de impulsar una agenda común hacia la igualdad -como se verá en el Capítulo IV, en el apartado sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos-²⁰⁴.

En el mismo sentido, en Europa, desde el año 1990 y en la Resolución del Consejo Económico y Social E/RES/1990/15, se recomendó la cifra objetiva de un 30% de mujeres en los puestos de liderazgo para el año 1995 y del 50% para el año 2000²⁰⁵.

Dado el escaso progreso alcanzado en la Plataforma de Acción de Beijing, se estableció nuevamente la necesidad de conseguir un equilibrio de género entre ambos sexos, en puestos gubernamentales y de la administración pública. Seis años más tarde, en 1991, en la Resolución 66/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación política de la mujer, se recordó a los Estados, una parte de los compromisos adoptados en Beijing sobre representación de las mujeres y la necesidad de acelerar la igualdad entre en la participación política.

Posteriormente, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborados en el año 2000²⁰⁶ se estableció como propósito, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía del poder. En el documento que signaron 189 naciones pertenecientes a la ONU, se acordó la consecución de ocho metas sobre problemas considerados graves o radicales. El apartado número tres establece “Promover la Igualdad entre los sexos y el Empoderamiento de la Mujer. La meta es lograr una mayor proporción de puestos ocupados por las mujeres en el parlamento de cada nación²⁰⁷.

²⁰⁴ La CEDAW fue adaptada y ratificada por la Asamblea General en su resolución 34/180, del 18 de diciembre del 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. Hasta 2012, 187 países habían ratificado o se habían adherido a la convención, en tanto que Estados Unidos y Sudán del Sur, la habían firmado pero no ratificado. Sólo ocho países Irán, Nauru, Palaos, Catar, Somalia, Sudán, Tonga y el Vaticano, para el 2012, no habían firmado.

La Convención conocida como Belén do Pará, fue adaptada y ratificada en Brasil, el 9 de junio de 1995, en el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General.

Disponible en ONU Mujeres, <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm>, consultado en agosto del 2014.

²⁰⁵ En 1990 las parlamentarias apenas constituían el 11.3% en el mundo, sólo eran jefas de Estado 3 mujeres, y 7 primeras ministras. Cabe señalar que las acciones afirmativas en materia política aún no habían sido incorporadas

²⁰⁶ Son ocho propósitos de Desarrollo Humano fijados en el año 2000 por 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015, entre ellos, erradicar la pobreza y el hambre, mejorar la salud materna, lograr la enseñanza primaria universal y reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años.

²⁰⁷ La ONU señala que uno de los objetivos fundamentales para el desarrollo humano es lograr la equidad entre hombres y mujeres. La ONU está comprometida en ello no sólo porque se comprueba el potenciador de bienestar y prosperidad para todas las personas. Disponible en www.onu.org.mx/objetivo3.html, consultado en octubre del 2014.

¿Por qué se busca lograr un 30% de mujeres en los parlamentos? Desde la teoría de la Masa Crítica, el 30% es el porcentaje mínimo requerido para que una minoría logre incidir en la toma de decisiones del Parlamento y no quedar subordinada a los intereses de partido o de gobierno y velar por intereses comunes del grupo. La experta en temas de género y política

Drude Dahlerup (2005) define la “masa crítica” como una minoría que se ha vuelto lo suficientemente grande como para provocar un cambio cualitativo en las relaciones de poder de los grupos en el interior de las organizaciones. La masa crítica utiliza los recursos de la organización o institución para mejorar su situación o la de su grupo, Dahlerup desarrolla el concepto con base en datos empíricos de los países escandinavos –Noruega, Dinamarca y Suecia–, donde discute qué diferencias tiene el ser la única mujer en un grupo o pertenecer a una pequeña minoría de mujeres dentro de una organización.²⁰⁸

Dahlerup (2005) se apoya en el estudio previo de Helen Mayer Hacker, quien escribió el artículo “Las mujeres como un grupo minoritario” en 1951 y donde se establece un paralelismo entre la posición de las mujeres y la de grupos como afro-descendientes, algo inusual para la época. La idea básica es que, a pesar de que las mujeres constituyen el 50% de población o más, son víctimas de un trato discriminatorio y despliegan muchas de las características propias de los grupos minoritarios como sentimientos de inferioridad, rechazo hacia sí mismas, negación de identidad frente a su grupo y, al mismo tiempo, el desarrollo de una subcultura separada dentro de la cultura predominante. Las mujeres que desean realizarse en el mundo masculino tratan de disociarse del mundo femenino. La teoría de las mujeres como un grupo minoritario se refiere a la posición de éstas en la sociedad en general, y no a las mujeres que, de hecho, están en una posición de minoría.

En su argumentación, Dahlerup también detalla las aportaciones de Rosabeth Moss Kanter, quien muestra la relevancia de los números relativos y la proporción entre categorías sociales, identificando cuatro clases de grupos sobre la base de diferentes representaciones proporcionales de tipos de gente -ya sean hombres o mujeres, negros o blancos. Un “grupo sesgado” está conformado por no más de un 15% y es controlado por un grupo numéricamente predominante. Esta minoría no logra establecer alianzas entre ellos. Después está el “grupo inclinado” en el que la minoría se va tornando suficientemente fuerte,

²⁰⁸ Dahlerup es una de las investigadoras más relevantes sobre cuotas electorales y de las mujeres en política, sobre todo en los países escandinavos.

logrando tener mayor influencia y posibilidad de construir alianzas. Moss logró demostrar que las mujeres desempeñan un mejor papel y baja su tensión cuando se incrementa el grupo²⁰⁹.

A partir de sus investigaciones, la politóloga noruega detalla que en cierto punto, un incremento cuantitativo en el número relativo de una minoría dará lugar a una situación nueva y diferente. Dicha minoría podrá movilizar los recursos de la organización para acelerar el incremento de sus números y de su posición en general. “Si una masa crítica alcanza el 30%, la teoría implica que el salto (digamos) del 10 al 30% es mucho más difícil y a menudo imposible sin el apoyo exterior, mientras que el salto del 30 al 50% podrá ser más fácil” (p.163). Dicha teoría no implica que no existan acciones de resistencia, sin embargo, ésta no puede obligar a que la minoría no use los recursos institucionales logrados para el mejoramiento de su propia situación.

Un incremento cuantitativo en el número relativo de una minoría, dará lugar a una situación nueva y diferente. La minoría puede lograr movilizar los recursos de las organizaciones y las instituciones y del movimiento de mujeres por fuera del sistema político, sin tener que esperar que se modifiquen aspectos socioeconómicos e ideológicos de la posición de las mujeres en la sociedad en general (p). Por ejemplo, un número mayor de congresistas mujeres puede impulsar la reforma sobre cuotas electorales, aunque la agenda de cada partido no la incluya o aunque la brecha de desigualdad en el ámbito económico persista.

Antes de alcanzar este mínimo de presencia colectiva -de acuerdo a Dahlerup (2005)-, los problemas de las mujeres en un grupo minoritario suelen ser de alta invisibilidad, función estereotipada, carencia de autoridad legítima, tensión psíquica, baja eficiencia, tasa alta de desertión, baja tasa de ascenso. Además, *deben* ser mejor que los hombres, pero si son demasiado competentes, se tornan una amenaza y carecen del conocimiento de la estructura informal del poder.

²⁰⁹ Cfr. *De una pequeña a una gran minoría: una teoría de la “masa crítica” aplicada al caso de las mujeres en la política escandinava*, en *Mujeres al timón en la función pública*, México, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, México, 2005. 137-138

La pensadora noruega señala que las mujeres que se dedican a la política, están atrapadas entre dos expectativas contradictorias: 1) Probar que además de ser mujeres son exactamente iguales a los políticos. 2) Probar el hecho de que haya más mujeres en política implica una diferencia cuya demanda proviene del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Si las mujeres en la política son solamente unas cuantas, la demanda por acomodo y aceptación será sentida como abrumadora: “parece que se necesita una gran cantidad de mujeres, no sólo unas cuantas que aparecen como símbolos para cambiar los contenidos y la forma de hacer política” (p.135).

Además, cuando se tiene una gran minoría, se logra disminuir los estereotipos femeninos, se crean nuevos modelos para las mujeres y se acaba con la resistencia abierta en contra de las mujeres en la política; se modifican actitudes negativas de los electores ante la posibilidad de votar por una mujer y se van abriendo espacios para las otras. Más tarde, cuando se alcanza este mínimo requerido del 30%, existen indicadores para saber que se tiene una masa crítica: las mujeres que se dedican a la política son tantas que logran influir en los procesos de reclutamiento y algunas de ellas se disponen a tomar riesgos en sus carreras personales por la demanda de que participen más mujeres en la política. Otro indicador es que son apoyadas y presionadas por las organizaciones de mujeres y por ejemplos de otras en posiciones de poder, quienes públicamente trabajan por incrementar su número en el ámbito público de sus organizaciones.

Por último, las mujeres que se dedican a la política están creando recursos institucionales para incrementar su representación, por ejemplo, las cuotas electorales (Dahlerup, et.al.p154). Para afirmar lo anterior, la politóloga se basa en un fino seguimiento a la presencia de éstas en los países escandinavos, estudios de caso y entrevistas (et.al.p.162).

Es el caso mexicano, por ejemplo, todas las iniciativas de ley de reformas sobre cuotas electorales hasta el año 2011, fueron presentadas por mujeres aun contraviniendo las decisiones de sus líderes partidistas -como se describe en la entrevista realizada a María de los Ángeles Moreno, expresidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI). (Alcocer, 2012).

En consecuencia, una meta sustancial para el avance de la representación es lograr esta masa crítica en los espacios de toma de decisión. Si ésta se alcanza, es posible que se usen los recursos institucionales para el mejoramiento de la situación del grupo.

2.5 Movimiento de mujeres.

Al análisis de los conceptos de representación y democracia, así como a las aportaciones que se han realizado a partir de la perspectiva de género, como la relevancia de la política de la presencia, la inclusión de nuevos intereses y el estudio de la masa crítica, se suma la definición del movimiento de mujeres como una categoría a partir de la cual, se explicará el incremento de la representación parlamentaria de las mujeres en México.

Algunos autores, consideran las diversas luchas de las mujeres como un movimiento social. Como es el caso del inglés Charles Tilly, el Italiano Alberto Melucci (2002) y la inglesa Maxine Molyneux (2013), quienes definen los movimientos sociales en general, realizan una revisión de los enfoques teóricos tradicionales sobre la acción colectiva y recurren al análisis de investigaciones propias del movimiento feminista.

Para el historiador y sociólogo Charles Tilly (2013), los procesos de organización denominados movimientos sociales se gestan en el siglo XVIII en Inglaterra y Estados Unidos, bajo el contexto de la guerra, la parlamentarización, la capitalización y proletarianización. Fue entonces cuando la gente planteó reivindicaciones colectivas contra las autoridades, mediante reuniones públicas, marchas y exposición de programas en torno a objetivos específicos con el uso de medios de comunicación y a través de demostraciones públicas concertadas de valor, unidad, número y compromiso²¹⁰. El proceso de su conformación no fue uniforme, sino dificultado por razones de género, religión y etnia.

²¹⁰Charles Tilly (2013) explica que a diferencia de una petición única, una declaración o una concentración multitudinaria, en los movimientos sociales una campaña no tiene un solo episodio a pesar de que recurren a peticiones, declaraciones y concentraciones multitudinarias.

Las demostraciones suelen integrar lo que él denomina, “WUNC” que significa valor, unidad, número y compromiso, aspectos que pueden adoptar la forma de declaraciones, eslóganes y etiquetas que implican dichas nociones. El colectivo se representa ante el público a través de un lenguaje familiarizado. Por ejemplo: 1) Valor.- conducta sobria, atuendo cuidado, madres con hijos; 2) Unidad.- insignias, canciones, cintas de pelo; 3) Número.- lista de asistencia, firma de peticiones, mensajes; 4) Compromiso.- participación de gente mayor, resistencia ante la represión, desafiar el mal tiempo (p.23).

En el texto *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, Melucci (2002) describe lo que empíricamente se denomina movimiento social: es un sistema de acción que conecta orientaciones y propósitos plurales, contiene diferentes tipos de comportamientos cuyo análisis deben romper la unidad aparente y descubrir los distintos elementos que convergen en ella, y que, posiblemente, tienen diferentes consecuencias. Explica además, que una acción colectiva no se comprende sin considerar cómo son movilizados los recursos internos y externos, cómo las estructuras organizativas son erigidas y mantenidas, y cómo las funciones de liderazgo son garantizadas. Los participantes de una acción colectiva no son motivados únicamente por una orientación económica, calculando costos y beneficios de acción, sino que también buscan solidaridad e identidad (p.38- 39).

En este sentido, la filósofa feminista Celia Amorós (2014), define los movimientos sociales como una acción colectiva que apela a la solidaridad para promover cambios sociales, cuya existencia es, en sí misma, una forma de percibir la realidad, volviendo controvertido un aspecto que antes era aceptado como normativo. Esto implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en los que se desarrolla la acción. Además, un movimiento de esa clase tiene capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad (p.466).

La acción colectiva es considerada entonces resultado de las intenciones, recursos y límites con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones. Por ende, no puede entenderse como un simple efecto de condiciones pre estructurales o de expresiones, valores y creencias. Los individuos construyen su acción mediante inversiones organizadas, es decir, definen en términos cognoscitivos, afectivos y relacionales, el campo de posibilidades y límites que perciben, mientras que, al mismo tiempo, activan sus relaciones para darle sentido al estar juntos y a los fines que persiguen (Melucci, 2002:43-44).

El movimiento social abarca las siguientes dimensiones, que se fundamente en la solidaridad; que desarrolle un conflicto, es decir, una relación entre actores opuestos luchando por los mismos recursos a los cuales ambos dan valor y rompen los límites del sistema donde ocurre la acción.

Además se distinguen movimientos de diferentes tipos: los reivindicativos se sitúan en el ámbito de la organización social y lucha contra el poder que garantiza las normas y los papeles, tienden a una distribución de los recursos y una reestructuración de dichos papeles. *Los políticos* actúan para transformar los canales de la participación política o para desplazar las relaciones de fuerza en los procesos de decisión; su acción busca romper las reglas del juego y los límites institucionalizados del sistema, impulsando la participación más allá de los límites impuestos. Los antagónicos se dirigen a un adversario social para la apropiación, el control y la orientación de los medios de producción social. (Melucci 2002:51).

El interés por los movimientos de mujeres encuentra su antecedente en las historiadoras feministas, quienes buscaron recuperar la presencia y las acciones de las mujeres para mostrar que eran partícipes y no sólo espectadoras del acontecer público. Los nuevos estudios se realizan desde varias disciplinas que dan vida a biografías, estudios de casos, exámenes comparados, entre otros (Scott, 2008:32)²¹¹.

Una definición interesante para la presente investigación y específica sobre el movimiento de mujeres, es la expuesta por Molyneux (2013), quien realiza estudios sobre América Latina y explica que desde los años ochenta del siglo pasado se han dado intentos por elaborar tipologías y definiciones de los movimientos y las organizaciones de mujeres, cuyas fronteras definitorias se complican: existen algunos movimientos claramente identificados pero, en otras ocasiones, dichos procesos de organización tienen características más difusas que no presentan una coordinación central o agenda común²¹².

Empero, hablar de un movimiento de mujeres significa y alude a un fenómeno social y político de trascendencia, derivado tanto de su fuerza numérica como de su capacidad para provocar un tipo de cambio, ya sea legal, cultural o político. No precisa tener una única expresión y ubicaciones espaciales y está compuesto en su mayoría por mujeres -cuando no exclusivamente por ellas (Molyneux, 2003:225).

²¹¹ Por ejemplo, en el ámbito político algunas investigaciones examinan las organizaciones internas de los movimientos de las mujeres en relación a los partidos o los sindicatos como una forma de documentar la existencia de una cultura femenina específica. Algunos estudios comparten una preocupación común por la política y gobiernos donde se negocian formalmente las relaciones de poder, Scott, p.

²¹² Molyneux, Maxine, *Movimientos de mujeres en América Latina*, Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España, 2003

La investigación sobre movimientos de mujeres se ha presentado en tres líneas: primero, examinando los factores sociales, históricos y culturales que condicionan tanto la emergencia del activismo femenino como las formas generales colectivas de acción específica; segundo, explorando categorizaciones para diferenciar entre los diversos tipos de movimientos de mujeres, sobre todo desde la bibliografía de planeación y desarrollo; y tercero, analizando los movimientos y la democracia²¹³.

Ello lleva a Molineux, (2003) a reiterar que definir los movimientos sociales no es tarea sencilla. Sus fronteras no son tan nítidas como parecen dado que su disertación abarca dos criterios centrales que son problemáticos: primero, la autonomía: independiente o dirigida y, segundo: los intereses, que pueden ser prácticos o estratégicos.

Sobre el primer criterio (*autonomía*), se refiere al modelo de organización que a su vez puede ser independiente y se organizan sobre la base de la autoactividad, tienen metas propias y deciden sus propias formas de lucha. Los movimientos también pueden ser dirigidos. En éstos, la autoridad y los proyectos provienen del exterior y están sujetos a una autoridad superior, por ejemplo, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, en el que las mujeres fueron utilizadas por el partido para reprimir el descontento popular o las organizaciones campesinas de México que se dependen de la Confederación Nacional Campesina, organismo ligado al partido en el poder (PRI). Por último, *asociativas*: los cuales, a pesar de su independencia, deciden formar vínculos y alianzas con organizaciones políticas con las que comparten una serie de temas y pueden delegar el poder en agencias externas como los partidos (feminismo civil, según la socióloga Gisela Espinosa)²¹⁴.

Los intereses de los movimientos, son la segunda área de diferenciación empleada por los estudios de las mujeres. Es otro concepto complejo de abordar y requiere de la diferenciación frente al concepto de “necesidades” -discusión presentada en el contexto de desarrollo y género-, y en lo que se denominó “paradigma de los intereses”. En el análisis de los movimientos, se buscó diferenciar los intereses de género por intereses femeninos, los cuales son histórica y culturalmente constituidos. Los primeros se derivaban de las relaciones sociales y el posicionamiento de los sexos -por lo que afectaban tanto a hombres como a mujeres-, mientras que los segundos son específicos de las mujeres.

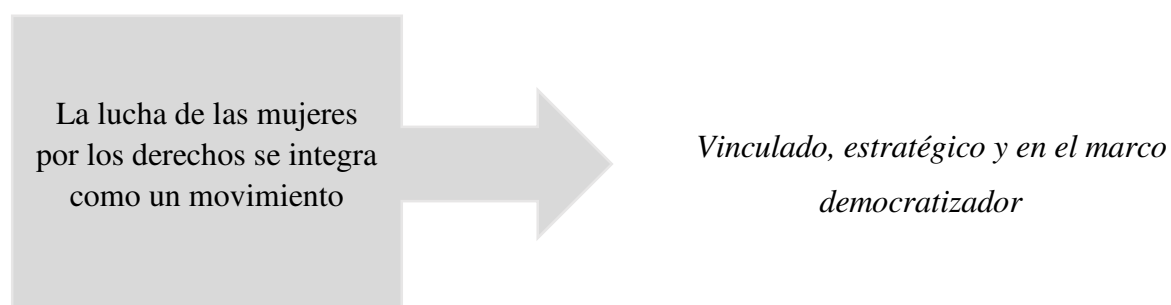
²¹³ Ibídem, p. 221

²¹⁴ Ídem, p. 231-231

La definición de intereses debe reconocer la agencia y la subjetividad, además de considerar que se formulan en contextos determinados y deben enmarcarse en los procesos de formación que los determinan por la variación cultural, histórica y política- distingue los intereses de género en dos, prácticos y estratégicos²¹⁵.

En el análisis de los diversos movimientos de mujeres, se puede apreciar que algunas veces presentan características de objetivos particulares, mientras que en otros momentos han perseguido intereses más universales -denominados de género; algunas veces se han mantenido alejados de las instituciones y otras se han vinculado con agencias políticas, mientras que la posibilidad de alcanzar un equilibrio se ve potenciado por circunstancias políticas favorables. En algunos casos, esto se ha presentado en América Latina durante los procesos de cambio del modelo económico y político que han generado cierto grado de democratización, aunque se ha retardado en la promesa de un mayor bienestar²¹⁶.

Derivado de lo anterior, la lucha organizada de las mujeres por el ejercicio de sus derechos políticos puede considerarse como un movimiento, en tanto que persigue objetivos comunes y ha transformado la realidad política y social; es asociativo porque establece lazos con actores institucionalizados como los partidos políticos, parlamentos o tribunales al tiempo de perseguir intereses estratégicos. Asimismo, se enmarca en los análisis relacionados con la democracia.



²¹⁵ Los intereses prácticos se basan en las necesidades que surgen del emplazamiento de las mujeres dentro de la división sexual del trabajo, por ejemplo, la lucha por el acceso a una vida libre de violencia en el hogar o al uso de métodos anticonceptivos²¹⁵. En cambio, los estratégicos conllevan reivindicaciones para transformar las relaciones de género y estructuras de subordinación y están necesariamente ligados a preceptos políticos más amplios. Por ejemplo, en el caso de América Latina, diversos movimientos están enmarcados dentro de un proyecto democratizador donde las definiciones operativas de lucha de las mujeres es su reconocimiento pleno como ciudadanas y su inclusión en los espacios institucionales (Molineux, et.al:235).

²¹⁶ La cuestión de los objetivos políticos más amplios es pertinente para la formación de intereses estratégicos, porque éstos implican un proceso de politización en el que se formulan visiones transformadoras concretas. El feminismo ha otorgado diversos tipos de visiones estratégicas articulados dentro de diferentes discursos como el socialista, liberal, nacionalista, radical, o anarquistas (Molyneux, 2003:249).

Autores como Krook & Childs (2010), en la introducción del texto *Mujeres, Género y Política (Women, Gender and Politics)*, exponen que “es posible distinguir analíticamente entre movimiento de mujeres, movimiento feministas y mujeres en movimiento sociales” (p.6). El movimiento feminista es visto frecuentemente como un subconjunto del movimiento de mujeres, y en varios casos, son vistos como sinónimos. La conexión menos conocida es el de las mujeres en los movimientos sociales, quienes a menudo se lanzan a los movimientos de mujeres, especialmente cuando el movimiento tiene como objetivo superar la injusticia o la lucha por la igualdad de trato.

En algunos casos -como las campañas por los derechos civiles o los derechos humanos-, las mujeres adquieren conciencia de género después de ser tratadas en términos sexistas. En otras ocasiones, como en los movimientos revolucionarios o nacionalistas, las mujeres experimentan frustración cuando la causa central es alcanzada y se posterga el cumplimiento de las demandas por la igualdad de género.

Cabe señalar que el movimiento feminista, se ha visto como un subconjunto del movimiento de mujeres. Sin embargo, son distintos, en que se pueden incluir a los hombres y, fundamentalmente, formado por el análisis del poder de género que tiene como objetivo superar la subordinación de las mujeres. No obstante, pueden ser inspirados por diferentes tipos de feminismo (Krook & Childs 2010)²¹⁷.

Para los debates sobre la forma de definir el movimiento de las mujeres han dado lugar a discusiones sobre la naturaleza y la ubicación de los movimientos sociales. Mientras algunos sostienen que un grupo debe ser autónomo de otras estructuras políticas con el fin de ser clasificado como un movimiento de mujeres, otros sugieren que la presencia de mujeres y las luchas dentro de las instituciones dominadas por los hombres, son un tipo de movimiento

²¹⁷ Por ejemplo, algunos de los feminismos a los que apelan son: feminismo radical, en contraste, pone el acento en las diferencias entre hombres y mujeres y opiniones sobre la desigualdad de género como un sistema básico de poder que organiza las relaciones humanas. El feminismo socialista, combina ideas del marxismo con el feminismo radical acerca de que el patriarcado cultural y económico, es un fuerte recursos para la opresión de las mujeres. Finalmente, el feminismo postmoderno fusiona ideas sobre el sexo y el género, con base a ideas postestructuralistas y postmodernas llamando la atención sobre los múltiples y contradictorios aspectos de la identidad, como minada de una categoría única de hombre y mujer. Los dilemas clave del movimiento feminista, entonces, incluyen si participar o no con los actores estatales, movilizarse separadamente o no, en coalición con otros actores y enfatizar el “sexo” y “género” sobre otras categorías. En varias regiones el término tiene una connotación negativa (Krook & Childsm 2010:5). En el Capítulo IV se aborda a mayor detalle el tema de Feminismo.

social. Este límite ha sido empujado con el aumento concomitante en la lucha transnacional, que ha servido para crear nuevas oportunidades y limitaciones en el movimiento de organización de las mujeres. Por un lado, los grupos locales han adoptado nuevos discursos y prácticas como resultado del incremento de contactos más allá de las fronteras nacionales.

Por otra parte, los patrones de gobierno han cambiado con la reconfiguración del Estado y el aumento de la gobernanza multinivel, de tal manera que el activismo no se limita a realizar peticiones a los actores estatales, sino también puede apelar a las organizaciones internacionales y a la gestión internacional para alcanzar cambios en las políticas. Al mismo tiempo, los cambios en las estructuras de los estados han hecho menos claro que los actores tengan la capacidad de poner en práctica esta reforma de manera significativa (Krook & Child 2010).

Sin embargo, la tendencia perdurable para ver los hombres y no a las mujeres como actores políticos, sigue desempeñando un papel importante en las estrategias de cómo los grupos diversos han elaborado y reconocido las oportunidades para la movilización. En efecto, el hecho de que las mujeres no son vistas a menudo como "políticas", les ha permitido protestar cuando los miembros u otros grupos han sido violentamente reprimidos (Baldez 2002).

Bajo esta definición, se puede establecer que el movimiento de mujeres que se gestará a partir de la Revolución Francesa, se basa en la solidaridad de las mujeres y provoca un conflicto al intentar la obtención de derechos negados. Es de tipo político y antagónico al tener adversarios desde el ámbito político y teórico, tal como se expondrá a lo largo de la presente investigación.

2.6 Acciones afirmativas

Otro concepto que se liga al de movimiento de mujeres como un actor transformador de la sociedad, se da paso a la definición de las acciones afirmativas, las cuales son el resultado del proceso de organización de las mujeres para transformar la histórica exclusión de la representación.

En el Siglo XX, las mujeres lograron promover encuentros internacionales que derivaron en la redacción de Tratados o en Convenciones Internacionales, las cuales introdujeron una

herramienta jurídica denominada en un primer momento Discriminación Positiva, y después, Acción Afirmativa. En palabras de Rosenfeld (2011): “es difícil hablar de una definición absoluta de la misma y a esto hay que agregar que muchas variables afectan la validez de los argumentos filosóficos a favor y en contra de las acciones afirmativas” (p.11).

Apoyado en la definición de Greenawalt, Michel Rosenfeld (2011) la describe así: “se refiere a los intentos de traer a los miembros de grupos infrarrepresentados, usualmente grupos que han sufrido discriminación, a un grado más alto de participación en determinados programas benéficos. Algunos esfuerzos de acción afirmativa incluyen tratos preferentes, otros no” (p.54). Se entiende por discriminación toda exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, sexo, religión, discapacidad, edad, clase o preferencia sexual que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas públicas y privadas²¹⁸. El trato preferente incluye la concesión de preferencia a una o varias personas entre un grupo de competidores (p.55).

Las medidas de acción afirmativa comenzaron a utilizarse en los Estados Unidos de Norteamérica en el ámbito laboral y universitario para que personas afrodescendientes pudieran ingresar a espacios de trabajo y universidades (Lamas, 2000)²¹⁹. Se instrumentan a través de cuotas u objetivos, y requieren que un número establecido o una proporción fija de bienes se asignen sobre una base diferente a la de la calificación o el mérito. Ello puede requerir la asignación de un porcentaje fijo de los bienes que se aplican a integrantes de un grupo. Las cuotas no sólo se utilizan para perseguir los objetivos de la acción afirmativa, sino también “como medio para terminar con la discriminación de primer orden, al obligar a la reducción o limitación artificialmente impuesta de un grupo sobre otro” (Rosenfeld, et.al:55-58).

²¹⁸ La discriminación por razón de sexo y la racial son los dos rasgos más abordados. Sobre estos aspectos se construyó inicialmente el derecho antidiscriminatorio europeo, y son los que mayor desarrollo normativo y jurisprudencial han recibido. La etnia, y el más extendido y más primario porque siempre se añade al resto de agresiones discriminadoras, el sexo, son factores cuya consideración responde al ataque más destructor de la dignidad. Cf. Martínez, F, *Marco conceptual sobre las acciones y discriminaciones positivas*, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, 2011.p.65.

²¹⁹ “En una sociedad liberal democrática, la educación es entendida como el medio para proveer igualdad de oportunidades para todos los grupos. Pero no hay evidencia de que la educación iguale. El sistema educativo reproduce invariablemente las jerarquías de clase, raza y género” p. 347.

El tratamiento preferencial también se justifica a partir de las ideas de justicia distributiva²²⁰. Uno de los textos fundamentales a favor de la acción afirmativa y la justicia compensatoria es *Justicia y política de la diferencia*, de la filósofa política Iris Marion Young (2010), para quien la injusticia debería definirse en términos de los conceptos de opresión y de dominación.

Iris Marion Young (2010) sostiene que las mujeres y las personas de color aún están sujetas a estereotipos, reacciones y expectativas, a menudo inconscientes, por parte de quienes toman decisiones, generalmente hombres blancos. En respuesta, la acción afirmativa es un medio necesario y justo de combatir tales presupuestos y percepciones que provocan exclusión. Dado que la opresión sigue siendo un proceso reproducido por normas, prácticas, acciones e imágenes, las acciones afirmativas se proponen aumentar la participación de las mujeres, las personas afrodescendientes, latinas y discapacitadas, con lo que se anuncia la

²²⁰ Aristóteles (384 – 322 a.C.) trata del tema de la justicia distributiva en la *Ética Nicomaquea* 1131a 10 – 1131b 24 (Aristóteles, 2000). En lo general, la justicia –al igual que otras virtudes- es considerada como un término medio entre dos extremos igualmente viciosos (es decir, dos posibilidades para la injusticia).

Sin embargo, Aristóteles añade que este carácter de término medio debe atender a dos criterios: el “más” y el “menos” respecto a los extremos, y las personas respecto a las cuales esta virtud se ejercerá. Esto último implica que las personas deben ser consideradas también en lo que toca a la igualdad o su desigualdad recíproca. En una repartición cualquiera de bienes, las personas iguales debieran recibir partes iguales, pero para los desiguales es de esperarse una distribución proporcional –precisamente en función de las diferencias. Entonces, lo justo –en sentido estricto- será más bien “una especie de proporción” (Aristóteles, 2000:138), lo cual significa que los bienes han de distribuirse igual o desigualmente según el caso.

Desde luego, hay que añadir que Aristóteles no piensa tanto en términos de las necesidades de los involucrados en un reparto cualquiera como en el mérito de cada uno de ellos, si bien lo que se entienda por “mérito” puede variar entre regímenes democráticos, oligárquicos o aristocráticos (ibid).

John Rawls en su obra *Estudios públicos* (1986) mantiene la idea básica del aristotelismo en lo que toca a la repartición desigual de bienes, pero –desde luego- en el contexto de su célebre “teoría de la justicia”. Es decir: Rawls mantiene la pretensión de hacer compatible un cierto tipo de liberalismo político con una situación de justicia aceptable para los miembros de una sociedad –precisamente, una sociedad liberal.

Para esbozar su noción de “justicia distributiva”, Rawls recuerda los dos principios de justicia enunciados ya en *Teoría de la justicia* (Rawls, 1979): (1) “Toda persona comprometida en una institución o afectada por ella tiene el mismo derecho a la más extensa libertad compatible con igual libertad para todos; (2) las desigualdades que la estructura institucional define o promueve son arbitrarias, salvo que se justifique esperar que ellas van a redundar en beneficio de todos y siempre que los puestos y cargos a los cuales van conectadas, o de los cuales pueden derivar, estén abiertos a todos” (Rawls, 1986:57).

Desde luego, algo hay que hacer para que las desigualdades resultantes de la institucionalización de las relaciones sociales efectivamente sean tales que redunden en el beneficio de todos. La propuesta de Rawls (1986) en este punto es tomar como referencia a los sectores menos favorecidos por el sistema de desigualdades institucionales (p. 61).

De este modo, la estructura básica de la sociedad debe ajustarse de modo tal que “las ventajas de los más afortunados promuevan el bienestar de los menos afortunados, esto es, cuando la disminución de las desventajas de aquéllos dejarían a los menos afortunados peor aún de lo que están” (ídem).

Así, la desigualdad inicial se convierte en el sustento del bienestar de quienes, en principio, resultan socialmente desfavorecidos. La distribución de bienes, así, garantiza que a nadie falte lo que necesita a pesar de que esa distribución admita importantes diferencias entre grupos y entre individuos –respetando así el marco general del liberalismo. Ver, Rawls, John, *Teoría de la justicia*. México: Fondo de Cultura Económica, 1979; y “Justicia distributiva”, en *Estudios públicos*. No. 24, 1986, p.53 -90.

aceptación de grupos antes excluidos. Pero además se mantiene otro objetivo central: disminuir la influencia de los prejuicios y de la “ceguera de la instituciones y de las personas que toman decisiones”. Ellas constituyen una de las políticas más certeras contra la opresión sexual y racial.

Además, la acción afirmativa cuestiona dos principios. Primero el de la igualdad liberal, el cual carece de una definición que incluya la igualdad de oportunidades; segundo, la primacía de un principio de no discriminación para el que las personas deben ser tratadas como individuos y no como grupo. Sin embargo, además de estos principios, el argumento para sostener las acciones afirmativas también debe centrarse en la aplicación y el paradigma de la justicia distributiva, la cual interpela el “mito del mérito” y la política de la cualificación²²¹.

Young (2010) arguye al respecto que, el principio del mérito, tiene como premisa que las sociedades son normativa y culturalmente neutrales, lo cual no siempre sucede: “dado que las reglas del mérito imparciales, valorativamente neutrales y científicas, no existen, sostengo que una cuestión central de la justicia debe ser quién decide cuáles son las aptitudes adecuadas para una cierta posición, cómo se valoran dichas aptitudes, y si los individuos reales las tienen” (p.325). Usando diversos ejemplos del ámbito laboral norteamericano, Young enfatiza que la ideología del mérito intenta despolitizar el establecimiento de criterios y estándares para la asignación de espacios y concesión de beneficios en sociedades donde la opresión y la división racial y de género existen²²².

La idea de que las personas más calificadas deben ocupar los puestos, legitima una división jerárquica del trabajo en sociedades liberales democráticas que asumen igual valor moral y político para todas las personas, provocando que al asumir como dada dicha división estructural, se asume también como justa cuando nadie recibe puestos por el privilegio o por nacimiento, o con base en características arbitrarias como la raza, etnia o sexo; así, “la injusta

²²¹ Así está traducido el concepto, “cualificación”, aunque se suele usar también la palabra de calificación. Cualificación viene del latín “qualitas”.

²²² “En contraste con la ideología del mérito, afirmo que las decisiones que establecen y aplican criterios de cualificación deberían realizarse democráticamente. Dado que ocupar puestos de trabajo afecta fundamentalmente al destino de los individuos y las sociedades, la toma democrática de decisiones sobre es una condición esencial de la justicia social” p. 369.

jerarquía de las castas se reemplaza por una jerarquía ‘natural’ del intelecto y la capacidad” (p. 337)²²³.

La filósofa Iris Marion Young (2010) resume el amplio debate que existe sobre el tema, y argumenta a favor de la acción afirmativa, exponiendo que, por ejemplo, usar el talento natural como criterio para conceder puestos, puede considerarse tan arbitrario como concederlos conforme a la raza o el sexo, porque “una persona es tan poco responsable de sus talentos como de su raza” (p337).

Contra la ideología del mérito, se propone que las decisiones que aplican criterios de cualificación deben realizarse democráticamente: dichos procedimientos son una condición necesaria de justicia social, un medio para el autodesarrollo y la minimización de la dominación, y también el mejor camino para llegar a decisiones justas. Es decir: dado que ocupar cargos o puestos de trabajo afecta y repercute en la vida de las personas y las sociedades, la toma democrática de decisiones es una condición de justicia esencial. Además, la justicia implica que las personas tengan oportunidad de desarrollar y ejercer sus capacidades en escenarios socialmente reconocidos (Young, 2010:369).

El tema aún está sujeto a un amplio debate, el cual se reanima cuando se trata de impulsar acciones afirmativas, principalmente en el ámbito laboral o el político. Por ejemplo, ¿requieren algunas sociedades de tratos preferenciales para alcanzar la igualdad en sus diversas acepciones? ¿Deben integrarse medidas de carácter temporal en el ámbito político y educativo para favorecer a grupos poblacionales como indígenas, jóvenes y personas discapacitadas?

El profesor de derechos humanos, Rosenfeld, anota una respuesta: “Las cuotas en sí, como los objetivos o el trato preferencial, parecieran no ser ni buenas ni malas. Ni deseables ni no deseables. Si cualquier cuota se califica como justa o injusta, buena o mala, parecería

²²³ Young argumenta que en el ámbito laboral se puede aplicar el mérito bajo ciertas condiciones: primero, debe distinguirse entre capacidades técnicas y atributos normativos y culturales; segundo, las capacidades puramente técnicas y las competencias deben ser “relativas al trabajo” en el sentido que puedan predecir un desempeño excelente en el puesto; tercero, para que el mérito se aplique de manera justa, el desempeño y la competencia deben juzgarse individualmente. Por último, para decir que un individuo está más calificado que otro, su desempeño debe compararse y clasificarse de acuerdo a las reglas que sean independientes de los valores y la cultura, y neutrales respecto a tales circunstancias. Agrega que es difícil que se puedan aplicar dichas condiciones en una evaluación de mérito, salvo para un número limitado de funciones definibles. En *Justicia y política de la diferencia*, Cátedra, España, 2010, p.338-339.

depender de la naturaleza de la cuota o del contexto (conceptual e histórico) donde se busca su aplicación” (p.59). El tema está sujeto a un amplio debate, ya que resurge cuando se trata de impulsar acciones afirmativas, principalmente en el ámbito laboral o el político.

Una vez descritos cada uno de los conceptos anteriores, género y la perspectiva de género, la representación, la democracia y las teorías a favor de la representación de las mujeres -la política de la presencia, la inclusión de nuevos intereses y la masa crítica-, así como de las categorías del movimiento de mujeres y las acciones afirmativas, se cuenta con un marco teórico que permite la comprensión del estudio de caso de la presente investigación.

Sin pretensión de exhaustividad en cada una de las ideas expuestas, se da paso al detallado desarrollo de uno de los factores que ha posibilitado la creciente presencia de mujeres en el Parlamento de México y sin el cual, sería difícil explicar la masa crítica que hoy tiene el Poder Legislativo Federal: el movimiento de mujeres por el ejercicio de sus derechos políticos.



Fotografía 4.
Movimiento Sufragista Inglés del S.XIX

*“Esto es lo que se teme,
las mujeres en público,
las mujeres en movimiento”.*

Michelle Perrot
Historiadora feminista

CAPITULO III

MOVIMIENTO DE MUJERES POR LA REPRESENTACION.

3.1 Movimientos Sociales, Modernidad e Ilustración.

Conocer los debates teóricos y las acciones políticas que realizó el movimiento de mujeres para avanzar en el ejercicio de sus derechos pretende expandir el horizonte de comprensión sobre los discursos y las acciones que excluyeron a las mujeres del poder y la forma en que dicha exclusión fue modificándose. Se trata de revelar la frontera de lo político, una frontera particularmente resistente e impenetrable para las mujeres, tal como lo demuestra la historia (Perrot, 2009: 187).

Así, el objetivo del presente capítulo es exponer un esbozo histórico de la llegada de las mujeres a la esfera pública. Se hablará, en primer lugar, de la gestación de los movimientos sociales y de las teorías que cuestionan los discursos teórico-político en los que se fundamenta la división de la esfera pública y la esfera privada con exclusividad para cada uno de los sexos. Dicho periodo ocurre en el contexto de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, momento en el que aparecen algunos pensadores críticos como el Marqués de Condorcet, y posteriormente, las llamadas rebeldes ilustradas Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft.

También se abordan las ideas de la pensadora Carole Pateman (1995), quien desarrollo una teoría crítica a las ideas clásicas del contrato social a través de su obra, el “El Contrato Sexual, a partir de la cual explica la condición y el rol asignado a las mujeres.

Después se aborda el primer movimiento emblemático de la lucha de las mujeres conocido como “sufragismo”, gestado principalmente en los Estados Unidos e Inglaterra, cuya demanda -el derecho al voto- se extendió por todo el mundo por más de cien años y sigue vigente hasta nuestros días.

Posteriormente se presenta un recorrido por el feminismo, movimiento de mujeres con cuyo nombre se designan posiciones epistemológicas, ideológicas y políticas que reivindican el acceso a los derechos igualitarios con los varones. (Amorós, 2014; Gamba, 2007:144)²²⁴.

Por último, se describe la forma en que las mujeres de México comienzan a conformar un movimiento que se enmarca en las consignas internacionales para votar y ser votadas.

Después de las luchas europeas y norteamericanas, las mexicanas andarán su propio camino y trazarán sus estrategias para lograr romper el *techo de cristal*. Ellas son, sin duda alguna, rebeldes en un mundo interconectado, rebeldes globalizadas que lograrán acercarse al sueño de las tejedoras de París, de Olympe de Gouges, de Mary Wollstonecraft, de las Sufragistas, de Simone de Beauvoir, de Bety Friedan, y de las feministas en su conjunto por cruzar las fronteras de un espacio negado: el de la representación política.

Para el historiador y sociólogo Charles Tilly (2013), los procesos de organización denominados *movimientos sociales* se gestan en el siglo XVIII en Inglaterra y Estados Unidos bajo el contexto de la guerra, la parlamentarización, la capitalización y proletarianización. Fue entonces cuando la gente planteó reivindicaciones colectivas contra las autoridades mediante reuniones públicas, marchas y exposición de programas en torno a objetivos específicos con el uso de medios de comunicación y a través de demostraciones públicas concertadas de valor, unidad, número y compromiso²²⁵. El proceso de su conformación no fue uniforme sino dificultado por razones de género, religión y etnia.

²²⁴ La autora agrega que el feminismo es teoría y práctica, pues pugna por un cambio en las relaciones sociales que conduzcan a la liberación de la mujer a través de la eliminación de las jerarquías y las desigualdades entre los sexos; es además, un sistema de ideas que a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes, pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y la opresión sexual mediante una acción movilizadora. Su objetivo es, entonces, crear sociedades no jerárquicas y solidarias, aumentar el poder de las mujeres en el ámbito económico, social y cultural, y sobre la propia corporalidad (Gamba, 2007: 145).

²²⁵ Charles Tilly (2013) explica que a diferencia de una petición única, una declaración o una concentración multitudinaria, en los movimientos sociales una campaña no tiene un solo episodio a pesar de que recurren a peticiones, declaraciones y concentraciones multitudinarias.

Las demostraciones suelen integrar lo que él denomina, “WUNC” que significa valor, unidad, número y compromiso, aspectos que pueden adoptar la forma de declaraciones, eslóganes y etiquetas que implican dichas nociones. El colectivo se representa ante el público a través de un lenguaje familiarizado. Por ejemplo: 1) Valor.- conducta sobria, atuendo cuidado, madres con hijos; 2) Unidad.- insignias, canciones, cintas de pelo; 3) Número.- lista de asistencia, firma de peticiones, mensajes; 4) Compromiso.- participación de gente mayor, resistencia ante la represión, desafiar el mal tiempo (p.23).

Tilly describe que si bien existieron procesos de organización previos a la Revolución Francesa de 1789²²⁶ ligados a redes, clubes o grupos, éstos fueron más difusos, por lo que será la lucha organizada, vinculada a la ideología igualitaria, a la Ilustración²²⁷ y las nuevas condiciones de trabajo generadas a partir de la Revolución Industrial, lo que permitirá que se gesten los movimientos sociales y se presente una convergencia más visible con demandas

²²⁶ La Revolución Francesa fue un acontecimiento político que marcó la historia mundial durante los siglos XIX y XX, favoreciendo el desarrollo de las ideas de soberanía popular y de democracia representativa, y abriendo el paso a otras luchas orientadas a la consecución de formas de organización social más igualitarias y más justas. Estalló en 1789, a partir de una situación bastante compleja marcada por el aumento desmedido de los precios en los alimentos y la impotencia de la monarquía absolutista para hacerle frente como no fuera con aumentos de impuestos que no afectaban a las clases superiores. Por otra parte, las ideas de la Ilustración –provenientes de Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Diderot, entre otros- suscitaron entre la pequeña burguesía urbana un activismo político que se convirtió en el catalizador del descontento popular.

Después de que Luis XVI convocó a los Estados Generales para hacer frente a la crisis financiera, el llamado “Tercer Estado” –constituido mayormente por representantes de la burguesía urbana- se erigió en Asamblea Constituyente. Ésta pugó por la creación de una monarquía constitucional; las resistencias del régimen monárquico propiciaron el estallido popular del 14 de julio de 1789 –la toma de la prisión de la Bastilla. La Asamblea Constituyente se impuso al rey y se convirtió en Asamblea Legislativa una vez firmada la Constitución de 1791. La sospecha de que el rey y los nobles exiliados conspiraban en contra de la Revolución, así como la guerra con Austria y Prusia, provocaron la radicalización de la misma: en 1793 Luis XVI fue ejecutado, y una nueva Constitución –llamada “del Año I” a causa del cambio de calendario- otorgó el gobierno a una Convención y el poder ejecutivo recayó en un Comité de Salvación Pública, el cual cayó bajo el control del partido de los jacobinos –liberales radicales- y de su líder, Maximilien de Robespierre.

Los jacobinos habían establecido una alianza con los *sans – culottes*, es decir, los grupos desposeídos de París, para enfrentarse a los ultraradicales *cordeliers* y los moderados girondinos. Una vez en el poder, Robespierre impuso el régimen de Terror, durante el cual murieron cerca de 40 000 personas -10 000 de ellas ejecutadas en la guillotina como “enemigos de la Revolución”. Robespierre fue a su vez derrocado y ejecutado por sus enemigos algo más moderados en julio de 1794, dando paso a una nueva constitución y al gobierno de un Directorio, el cual perduraría hasta la llegada de Napoleón al poder en 1799.

Una consecuencia inmediata de la revolución fue el fin del régimen feudal –a pesar de los intentos restauracionistas. También provocó el derrumbe de la sociedad estamental y una participación decisiva de la burguesía ilustrada en los asuntos políticos, lo cual fue el sello del siglo XIX en Europa y en otros lugares del mundo. A la larga, la Revolución permitió que las ideas liberales se difundieran por el mundo, dando lugar a regímenes políticos informados por la Ilustración y marcados por la aceptación creciente de la democracia representativa constitucional. (Fuente).

²²⁷ Describir aspectos generales sobre la Ilustración no es una tarea sencilla; sin embargo, es importante hacer mención de manera breve de algunos rasgos de la misma, ya que constituye el contexto en el que emergen los movimientos sociales. El también llamado *Siglo de las Luces* es un periodo de tiempo que va de los últimos decenios del s.XVII a los últimos decenios del s.XVIII. En el año 1784, Immanuel Kant la describió en “*¿Qué es la Ilustración?*” (1994) como la liberación del hombre de su culpable incapacidad, la cual significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro: “ten el valor de servirte de tu propia razón. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro” fue una de las máximas que definen este momento de la historia” (p.25).

Asimismo, la obra de John Locke inicia la crítica política del iluminismo, con su obra *Tratado sobre el gobierno civil*. Esta crítica es llevada adelante por Montesquieu y Voltaire, y por los escritores de la Revolución, abriéndola a dominios que hasta ese momento estaban vedados, y proponiendo para ellos un trato eficaz que no ha sido interrumpido desde entonces. La Ilustración también representa una crítica y una hostilidad hacia la tradición y los prejuicios al tiempo de lograr dos concepciones de fundamental importancia en la cultura moderna y contemporánea: el principio de la tolerancia religiosa y la concepción de la historia como progreso, es decir, la posibilidad de mejoramiento desde el punto de vista del saber y de los modos de vivir de los seres humanos. Los filósofos Voltaire, Condorcet, entre otros, contribuyeron más que los otros a formular una noción de devenir histórico abierto a la obra del hombre, librándolo de la fatalidad histórica que le impedía tomar iniciativas para su transformación (Abbagnano, 1995: 649 – 651).

y documentos específicos. Es en este periodo cuando aparecen las mujeres como partícipes activas (40-45).

La filósofa feminista Celia Amorós, por su parte (2014) define los movimientos sociales como una acción colectiva que apela a la solidaridad para promover cambios sociales cuya existencia es, en sí misma, una forma de percibir la realidad, volviendo controvertido un aspecto que antes era aceptado como normativo. Esto implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en los que se desarrolla la acción. Además, un movimiento de esa clase tiene capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad (p.466).

En el ensayo *Feminismo e Ilustración*, Amorós (2005) apunta que la Revolución Francesa marca el primer momento histórico en que las mujeres se articulan -tanto en la teoría como en la práctica- como un grupo social oprimido/subordinado con características e intereses propios, es decir, como un movimiento social.

En el mismo sentido, Maxine Molyneux en *Movimientos de Mujeres en América Latina* (2003), afirma que los movimientos sociales son un fenómeno esencialmente Moderno y aunque ya hubo formas de acción colectiva femenina en las sociedades premodernas, por lo general ocurrieron en pequeña escala. “El ingreso masivo y relativamente sostenido de las mujeres en el ámbito de la política y la emergencia del movimiento de las mujeres y la ciudadanía femenina se asocian con la difusión de las ideas ilustradas y los múltiples procesos de organización socioeconómicos, y las formas políticas que lo acompañaron” (221).

La historiadora Michelle Perrot (2009) también explica que en ese momento de la historia las mujeres emergen como sujetos que buscan vindicar sus derechos presentándose un advenimiento inusitado en la brecha que corre del Iluminismo a la Revolución Francesa como un “clásico proceso eruptivo que recuerda el choque de las placas tectónicas y el surgimiento de un tsunami; como si las reivindicaciones latentes de mujeres no esperaran más que una fisura para surgir” (p. 199).

La Revolución Francesa proclamaba la igualdad, libertad y fraternidad como paradigmas universales, pero excluía a las mujeres de los mismos como se mencionaba anteriormente.

En el transcurso del movimiento, las mujeres tuvieron un papel activo en el proceso político y en la reelaboración del discurso que las marginaba como ciudadanas, confrontando al “Tercer Estado” y a la aristocracia masculina, quienes no dudarán en usar la violencia represiva contra ellas para restituir un orden considerado natural.

En este periodo las mujeres comienzan a acuñar conceptos políticos nuevos, resignificando los epítetos denostativos que utilizaban los revolucionarios contra el Antiguo Régimen para poner de manifiesto su incoherencia. Por ejemplo, se auto-designan el *Tercer Estado dentro del Tercer Estado* -en referencia a la diferenciación social bajo el cual se convocaba al debate: la nobleza, el clero y el Tercer Estado compuesto por burgueses y campesinos. (Nash, 2012:80; Valcárcel 2007:118).

- Discursos de la Modernidad.

En diversas obras, Amorós (1999, 2014) explica que las mujeres tenían ante sí el reto de dismantlar relatos fundados en la religión judeocristiana y católica, en el discurso biológico y el andamiaje teórico que habían elaborado los filósofos a lo largo del pensamiento occidental, entre ellos los llamados misóginos románticos -Schopenhauer, Hegel y Kierkegaard- quienes colocaban a las mujeres en una situación de subordinación y cuyo desafío teórico para interpelar sus ideas se mantuvo mucho tiempo²²⁸.

Desde la Modernidad –periodo de la historia occidental que comienza después del Renacimiento– la división de las esferas pública y privada se constituyó como lógica simbólica contrapuesta²²⁹.

²²⁸ Ver, Amorós, C. y De Miguel, Anal, *Teoría feminista, De la Ilustración a la Globalización*, Vol.1, Minerva, Madrid, 2005.

²²⁹ La Modernidad es una época histórica asociada con importantes modificaciones en la sociedad, la cultura y el pensamiento de la civilización europea y occidental, que a lo largo de unos cuantos siglos se ha extendido a otras regiones del mundo. En términos históricos, convencionalmente se le hace arrancar con eventos tales como la caída del Imperio Romano de Oriente (o Imperio Bizantino) en 1453, o bien el descubrimiento de América por parte de los europeos en 1492. Estas fechas señalarían el final de la llamada Edad Media y el inicio de una época marcada por la expansión del poder de ciertas naciones de Europa sobre otras regiones del mundo, comenzando por el propio continente americano. En términos económicos, esa expansión se traduce en la conformación de mercados mundiales controlados mayormente por metrópolis tales como Madrid y Lisboa en un primer momento, y Londres y París (y eventualmente Washington) en una segunda o tercera fase. Desde el punto de vista cultural, la modernidad está marcada –según algunos estudiosos- por la búsqueda de formas de vida y de expresión –sobre todo artística, pero no solamente- siempre novedosas, en una suerte de actitud de ruptura permanente con la tradición (Berman, 2004).

En los terrenos del pensamiento, la modernidad europea arrancaría con la obra de científicos como Copérnico y Galileo o de filósofos como Descartes, Locke o Hume. El conocimiento tendió a entenderse matemáticamente y al mismo tiempo como algo que debía someterse a la corroboración por medio de la experimentación controlada. Los principales filósofos, por su parte, discutieron en primer lugar la naturaleza y los alcances del

En estos periodos, frente a una supuesta superioridad complementaria de identidades y funciones aparecen rígidamente jerarquizados el ámbito de lo público y de lo privado. Aunado a ello, las nuevas producciones científicas legitimarán un orden social a través de la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos, la cual se traducirá -tanto en la filosofía como en las ciencias sociales- en identidades opuestas. Por ejemplo, se considera que la principal función social de la mujer es la maternidad y el cuidado de los otros, por lo que no puede ejercer ningún otro rol social (Amorós, 2014:518).

En el mismo sentido, la socióloga Ileana García (2008) describe que en este periodo se reafirma la falsa dicotomía entre el espacio público y el privado, el primero, reservado para los hombres y el segundo, para las mujeres; es también cuando el imaginario social de la buena mujer en las sociedades europeas de los siglos XVII y XVIII se asocia con la domesticidad, pese a los datos que demuestran la importante participación de las mujeres en el trabajo en estos periodos (p.51).

Como establece Wagner (2012) la separación económica de lo público masculino y lo público privado femenino, nunca fue un sistema estático, sino más bien una vertiente normativa entre otras, en la elaboración de lo público y lo privado.

Para varias autoras, en las teorías que se gestan en la Modernidad y después en la Ilustración, con fuerza en el Contrato Social, se sostendrá la dicotomía del espacio público y del espacio privado como espacios asignados a cada uno de los sexos, el primero para el hombre y el segundo de exclusividad para la mujer (Amorós 1997; Pateman, 1995).

Las teorías contractualistas y otros textos como *Emilio o de la Educación* de Rousseau, la mujer está confinada al rol de la reproducción y sin autonomía, lo cual la adscribe al espacio privado y al cumplimiento de las responsabilidades del ámbito doméstico. Por ende, la mujer no abandona el estado de naturaleza y se establece una narrativa sobre la “ficción doméstica”

conocimiento humano, así como los fundamentos del mismo. En autores como Kant y Hegel, ya a inicios del siglo XIX, la modernidad filosófica extiende sus alcances hacia los ámbitos de las concepciones generales acerca de la vida humana, incluyendo de manera especial los ámbitos de la ética, el derecho y la política. En todos los casos, la subjetividad humana se convierte en el punto de partida para la reflexión, y las diversas tesis acerca de la realidad y del mundo del deber intentan fundamentarse en la condición humana considerada en sí misma y no ya como parte de un orden más o menos inmutable querido por Dios –como ocurría con el pensamiento medieval. Cf, Berman, Marshall (2004). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, México: Siglo XXI.

para las mujeres, ama de casa, cuidadora, otredad (García, 2008). Del periodo moderno que generarán este imaginario, resaltan la obras de los padres de las teorías del Contrato Social, como los filósofos Thomas Hobbes (1588-1679), quien también desarrolló la teoría de la representación como autorización, expuesta en el Capítulo II, John Locke (1632-1704), filósofo inglés, y Juan Jacobo Rousseau (1712-1788), pensador francés.

Los tres autores determinarán parte del imaginario social y del espacio definido para las mujeres, la esfera privada, en oposición a la esfera pública, a través de la llamada teoría del Contrato Social. Las ideas contractualista se gestan durante el periodo moderno y constituyen una teoría política que relata cómo los hombres establecen un contrato social para vivir en condiciones de paz y de libertad. Los exponentes son Thomas Hobbes, quien escribe el *Leviatan o materia, forma y poder de una República Eclesiástica y Civil*, en 1651; John Locke, publica el *Segundo Tratado sobre el gobierno civil*, 1689; y Juan Jacobo Rousseau, con su obra *El contrato social* de 1762.

Las reflexiones de los tres autores tienen como premisa el iusnaturalista o el Derecho natural, a partir del cual se narra que el hombre se encontraba en un estado de naturaleza que se caracteriza por la precariedad y la violencia, en el que dominan las pasiones, el desorden y la inseguridad. El hombre es el lobo del hombre, desde la perspectiva de Hobbes, o bien “el hombre ha nacido libre y sin embargo vive entre cadenas” según Rousseau (1992:3).

Por ello, los hombres deciden organizarse y establecer un contrato social que les otorgue la seguridad, la paz necesaria y la instauración de un Estado civil, con tácitos acuerdos que constituyen el fundamento de toda comunidad y permiten a los individuos convivir y obedecer leyes.

Así, establecen un pacto mediante el cual manifiestan la voluntad de unirse y renunciar a sus libertades individuales para cederlas a un soberano o bien, a favor de un orden común que conlleva la instauración de la sociedad. Es decir, los hombres renuncian a sus derechos naturales para conseguir otros que estén subordinados a los derechos de toda la comunidad²³⁰.

²³⁰ Para Abbagnano, las ideas fundamentales del contrato pueden ser consideradas como un instrumento válido para comprender el fundamento del Estado y en general, de la comunidad civil (1995: 238). Ver: Strauss, Leo, y Cropsey, Joseph, *Historia de la filosofía política*,

3.1.1 Del Contrato Social al Contrato Sexual

La literatura crítica sobre lo público y lo privado es inmensa. Son categorías de difícil cuestionamiento sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres y están cargadas de significación para definir la feminidad y la masculinidad. Ante la interrogante, ¿cómo llegó a imaginarse la noción de lo público y privado como algo binario que debía demolerse? La respuesta radica en todo un conjunto de distinciones y de teorías que se consolidaron en la tradición liberal y que se institucionalizaron ampliamente a partir de estos periodos (Warner, 2012:19).

En una importante obra de teoría política feminista, “El Contrato Sexual” de Carole Pateman (1995) se explicará la condición y rol asignado a las mujeres a partir de este periodo y de las influyentes teorías del Contrato Social, describiendo que dicho pacto presupone la existencia de un contrato previo, el contrato sexual que llevan a cabo los hombres sobre las mujeres.

En las teorías del Contrato Social se parte de la idea que los hombres son libres, dueños de sí e individuos facultados para conceder algo de su libertad a cambio de beneficios como la seguridad. Sin embargo, esta idea no contempla a las mujeres porque ellas no son libres ni capaces y están sujetas al estado de naturaleza por su función reproductiva. El estado de naturaleza es no público, mientras que el Estado civil, conformado por el contrato social, sí lo es.

En su obra Pateman (1995) demuestra que el individuo libre, abstracto e igual de la teoría democrática liberal es en realidad un hombre y que en los mitos sobre el Contrato Social consideran que la mujer no puede trascender la naturaleza de la anatomía como destino. Esto es, dado que las mujeres están sujetas a sus funciones biológicas, su incorporación al ámbito público es problemática. Además, la existencia de mujeres en la esfera pública, no solo es antinatural en su sentido más amplio, sino que incluso constituye un peligro para el funcionamiento ordenado de la sociedad.

En el texto de Warner (2012) se describe que desde el periodo Moderno hasta nuestro tiempo, se ha reaccionado contra esta dicotomía que simplemente bloqueó los tipos de dominación

y exclusión que estructuran la vida privada de las mujeres por medio de instituciones como la familia, el género y la sexualidad (:p.47).

La teórica política y feminista explica que para la teoría del Contrato Social, la “sociedad civil” se diferencia de otras formas de organización social por la dicotomía que realiza de la esfera de lo privado y de lo público, como dos reinos opuestos donde el segundo es el único de interés político. “El contrato social genera al mundo público de la ley civil, la libertad civil, la igualdad y el individuo. ¿Cuál es la historia (conjetural) del origen de la esfera privada? En las teorías contractualistas lo natural excluye a lo civil y viceversa” (Pateman, 1995:21).

Esfera pública	Esfera privada
Hombre	Mujer
Estado civil	Estado de naturaleza
Mundo laboral, ético, cívico y político	Mundo doméstico
Abierto a todos	Restringido a algunos

La teórica política inglesa, expone que la condición para que el hombre pueda establecer este contrato social y el Estado civil, espacio de libertad e igualdad entre los hombres, se requiere de un contrato sexual previo en el que se subordina a la mujer al rol familiar al rol de madre. Así, se va creando en el imaginario social la exclusividad de la mujer a la esfera privada que le excluye de la esfera pública. Este aspecto y dicotomía, es ignorado por la historia de las ideas políticas.

“El contrato original crea lo que denominaré, siguiendo a Adrienne Rich, la ley del derecho sexual masculino. El contrato está lejos de oponerse al patriarcado; el contrato es el medio a través del cual el patriarcado moderno se constituye (...) Locke y sus seguidores en la teoría contractual insisten en que el poder paternal y el político no son lo mismo, y que el contrato es la génesis del derecho político. Los teóricos del contrato salieron victoriosos en este punto; la interpretación habitual tiene una base firme, hasta ahora. Una vez más, una parte crucial de la historia se pasa por alto y el verdadero origen del derecho político se pierde” (Pateman, 1995:11).

El contrato social conlleva la libertad, mientras que el sexual, la sujeción histórica de las mujeres, seres menos racionales y con poca capacidad para controlar sus emociones. Aun cuando las mujeres pasan al Estado civil o se encuentran bajo el derecho civil patriarcal, lo hacen de manera subordinada y recluida, y dicho espacio, continúa siendo no político en el imaginario social.

Sin embargo, para Carol Pateman (1995) la teoría del Contrato Social es errónea al partir de que la polaridad público-privado es pensada separadamente, ya que el hombre transita con independencia del espacio privado al espacio público, esfera de la razón, la libertad, la autonomía²³¹.

Para realizar este tránsito, los hombres establecen una alianza entre hermanos²³², entre varones, libres e iguales: la existencia de un Contrato Sexual que les permite el dominio de las mujeres.

A través del Contrato Sexual los hombres pueden acceder a cualquier mujer, creando como regla de apropiación, el matrimonio, el cual se da con la mujer doméstica o bien a través de

²³¹ El matrimonio y el contrato matrimonial son considerados irrelevantes porque están en la esfera de lo privado, lo que implica para una omisión sustancial, ya que al ignorarlo, están ignorando la mitad del contrato originario de la humanidad (Pateman 1995).

²³² De manera paralela y similar Celia Amorós (2007), sostiene la teoría de un pacto entre varones en condiciones de igualdad y desarrollo sus propias ideas al respecto en el ensayo "*Espacio de los iguales, espacios de las idénticas. Sobre el poder y el principio de individuación*". Amorós se apoya en los conceptos Leibniz y describe primeramente que el espacio público es de los iguales, es decir, de los hombres, porque todos pueden acceder o tener potencial acceso a los espacios de representación política, de la creación de normas, de la cultura, del ejercicio del poder.

Es claro que las relaciones jurídicas o políticas son de igualdad: la igualdad de los ciudadanos frente a la ley se puede reducir a la sustitución de los ciudadanos mismos en las situaciones previstas en las normas, pero esto mismo no se evidencia en las mujeres. El espacio donde ocurre lo importante, donde se instaura el ejercicio del poder, de hegemonía donde *los iguales no pueden conocerse sino en el reconocimiento, como alter ego*. En contraste, las mujeres no participan de una relación de igualdad, ello se refleja en la forma en que se le aplica la norma, y en su exclusión de ser actrices legítimas del contrato social y sobre todo, en su marginalidad política.

Así, en contraposición al espacio de los iguales, el espacio privado es de las *idénticas*, donde no está en juego nada relevante o trascendente. La promoción de la individualidad no se produce en el espacio de lo privado, del ser social negado, es por ende, el espacio de las imperceptibles, de las idénticas, donde todas pueden hacer de todo y suplir en todo, la que puede sustituirse una a otra, sin turnos, rangos sustantivos ni condiciones de reciprocidad, donde nada se reconoce ni trasciende y toda emergencia no puede ser sino adjetiva.

Esto significa que el reparto y sucesión del poder, no es de ni para las idénticas, sino para los iguales, grupo que logra ser sustantivo y no adjetivo para el espacio social. En cambio, en el espacio de las idénticas, de lo privado, no se puede ni siquiera emerger sino tan sólo sobreemerger; no se logra constituir individualidad, lo que significa que no se aspire a ello. Véase: *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las mujeres*, Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España, 2007, p. 87-111

la prostitución, mujeres públicas. Esta división entre mujeres buenas y malas cobrará sentido mediante el imaginario patriarcal que sustenta una serie de pactos y prácticas sociales, entre ellas, la función natural del poder político que se adjudica a los varones (Amorós, 2008).

Por lo anterior, la pensadora feminista señala que la diferencia sexual es una diferencia política, lo que significa, la diferencia entre libertad y la sujeción. El contrato sexual viene a ser el medio por el cual los hombres transforman su derecho natural sobre la mujer en la seguridad del derecho civil patriarcal.

En resumen, el discurso que privilegia el espacio público, cuenta la mitad de la historia que de un hipotético pacto original entre hombres libres e iguales surge un nuevo orden social, civil y político. Por ello, Pateman (1995) pone de relieve la necesidad de explicar cómo se establece y mantiene la esfera privada, de ahí su empeño por contar la otra mitad de la historia, la historia del contrato sexual como diferencia política²³³.

Tanto la esfera privada como la pública son indisolubles, se transita de una a otra, es decir, lo público no puede entenderse separado de lo privado y viceversa, por lo que el contrato original debe interpretarse incluyendo ambas esferas que son interdependientes²³⁴.

Esto significa, que el proyecto ilustrado es viable si se mantiene a la mujer sometida, jugando el papel de otredad frente al hombre y atendiendo las necesidades domésticas del “hombre burgués”, quien estará ocupado en la construcción-participación del mundo político. Así, el sometimiento de la mujer al esposo se manifestará en el Estado civil, empero, la lógica tradicional de lo doméstico ya existente, se insertará a través del contrato sexual, léase el contrato matrimonial. Ello significará que los imaginarios privado/doméstico y

²³³ A pesar de la solidez de la obra de Pateman, desde la perspectiva de John Lechte (1994) presenta tres cuestionamientos: a) habla desde la teoría democrática liberal que pretende transformar, es decir, los conceptos de su análisis proceden de la misma tradición; b) su crítica se basa en un individuo abstracto, aunque ese individuo sea masculino, lo que presupone un uso de identidad que ella está atacando; c) la intensa atención que la autora pone al marco de la teoría liberal clásica hace difícil no buscar atacar la exclusión de las mujeres de la plena participación política en términos que no sean desde la ciudadanía y la esfera pública. “El carácter excesivamente ideal de la esfera pública, con su énfasis en la universalidad, hace que resulte apropiado un enfoque mucho más materialista”, *Cincuenta pensadores contemporáneos esenciales*, Cátedra, Madrid, España, p. 221

²³⁴ Para Michael Warner (2012), Pateman sostenía que la consecuencia práctica de la crítica feminista sería mucho más amplia que el hecho de que las mujeres ingresaran a espacios públicos reservados para varones, sería más bien una transformación total de los papeles del género para los hombres y para las mujeres, lo que conllevaría el desacoplamiento de los roles en la división del hogar y de lo público. Si las mujeres participaran plenamente en la vida social, los hombres atenderían el cuidado de los hijos y las actividades domésticas, lo que a su vez, produciría cambios radicales en la esfera doméstica, en *Público, públicos, contrapúblicos*, Fondo de Cultura Económica, México, 2012, p. 33.

público/político de las mujeres en la Modernidad quedarán claramente definidos (García, 2014).

En consecuencia, el hecho de que lo político se haya definido, en gran medida con arreglo a la esfera pública, tendrá permanentes repercusiones negativas sobre los derechos políticos de las mujeres.

3.1.2 Crítica a los discursos modernos e ilustrados

A pesar de los discursos modernos e ilustrados, las mujeres insumisas de la época comenzaron a exponer que su adscripción a la esfera privada era el mecanismo por el cual la tradición ilustrada y liberal consumaba la exclusión de las mujeres de las promesas de igualdad y libertad. La tradición que da inicio a esta crítica, tiene una consecuencia no prevista, el desarrollo del pensamiento feminista moderno en el siglo XVIII (Warner, 2012:40; Serret 2012).

Tanto en la temprana Modernidad como en el periodo del Siglo de las Luces -en donde se gestó *la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano* (1789)- se dan profundas contradicciones frente a las mujeres, se les otorgan derechos civiles pero ningún derecho político. Entre los derechos civiles se encuentran la igualdad sucesoria y el libre consentimiento en el acto civil del matrimonio, el cual puede ser disuelto con el divorcio (derecho que se perderá nuevamente con el Código Napoleónico en 1804, donde se establece que la mujer es propiedad del hombre); también el derecho de administrar sus bienes según el contrato nupcial.

Lo anterior significó una ruptura con las costumbres y la tradición. Sin embargo, ellas no son individuos ni se les considera ciudadanas, por lo que se les excluye de los derechos políticos -empezando por el voto. Son todas sujetos o “ciudadanas” pasivas junto con los menores de edad, los extranjeros, los más pobres y los locos. Ello ocurre justo cuando emergen mujeres que escriben, protestan y participan activamente, entre dichos grupos se encuentran las *mujeres tejedoras*, mujeres urbanas -parisinas en su mayoría- que hostigan a los hombres desde las tribunas de la Asamblea sin dejar de tejer, ello para dar a entender que no abandonan los “deberes de su sexo” (Perrot, 2009: 181-182; Amorós, 2014).

El discurso sobre las mujeres se mueve en una ambigüedad fundamental heredada del siglo anterior. Desde la perspectiva de Alicia H. Puleo en su introducción al texto *La ilustración olvidada* (1993), esa ambigüedad surge para ella de tres fuentes que son: 1) La fuerza de los prejuicios y las costumbres arraigadas en la sociedad y, por ende, en los ilustrados, 2) La tensión interna del propio pensamiento ilustrado entre el deseo del cambio que el imperativo moral de la crítica a estructuras vigentes y el avance del conocimiento científico y, 3) Por último, una burguesía emergente que consagra la exclusión de las mujeres del ámbito público como lo plasmó Rousseau en algunas de sus obras (p. 14).

Para la filósofa Celia Amorós (1997; 2007) la *vindicación* es lo que constituye lo verdaderamente ilustrado a diferencia de lo que llama “memorial de agravios” en que las mujeres expresaron y denuncias por las ofensas cometidas contra ellas en el marco de una sociedad estamental²³⁵.

El concepto “vindicación” implica dos cosas, que exista un concepto universalizador -al menos virtualmente- y que este concepto se aplique con restricciones respecto a su potencial. Vindicar constituye, que, el nervio del feminismo demandar -tomando como su referente el techo marcado por una abstracción disponible- un trato igualitario que responda a una consideración de inclusión bajo el ámbito extensional el cual viene delimitado por la propia conceptualización abstracta puesta en juego.

La vindicación y la igualdad están íntimamente articuladas: la noción de igualdad genera vindicaciones en la medida misma que toda vindicación apela a

²³⁵ Existen antecedentes de mujeres que publicaron obras literarias importantes sobre la situación de las mismas, las cuales pertenecen al género literario llamado “memorial de agravios”, que dará paso a lo que después se denominará “vindicación”. La primera de ellas, fue escrita por Christine de Pizan (1364 y 1430), filósofa y humanista, y la primera mujer en salir en la defensa de su sexo, quien escribió *La ciudad de las Damas* (1404-1405). En sus escritos discutió con hombres que vapuleaban a las mujeres, exponiendo abiertamente su crítica a las agresiones hacia las mujeres, aunque dentro de los cánones morales de la época. En su texto entabla una conversación imaginaria con tres damas: Razón, Rectitud y Justicia, sobre lo que significa ser mujer y después de una serie de disertaciones la lleva a proponer la construcción de una ciudad imaginaria dirigida por mujeres en la que pueden defenderse de las agresiones y exponer sus virtudes. Cf. Christine de Pizan, *La ciudad de las damas*, España, Siruela, 2006.

Años después aparece Poulain de la Barre (1647-1725), quien presenta la importante obra *De la educación de las Damas. Para la formación del espíritu en las ciencias y en las costumbres* (1674).

Para Celia Amorós (2014), ahí se expone una idea central para el debate que se desarrollará en torno al concepto de igualdad liberal. En el pensamiento de Poulain de la Barre, la igualdad es uno de los rasgos definitorios del estado natural. Las únicas diferencias existentes entre los individuos se refieren a la fuerza. La igualdad entre los sexos es total y la única diferencia comienza y cesa con la fecundidad; la reproducción constituye el punto de inflexión más alto entre los sexos, pero en ningún momento dicha diferencia se traduce en dependencia. La causa de la desigualdad se inicia con la extensión de la familia lo que provoca la dependencia de las mujeres y posterior división sexual del trabajo.

la idea de igualdad. Luego si se parte de una ontologización de la diferencia sexual, carece de sentido vindicar nada. No se racionaliza que los varones se hayan apropiado en exclusiva de lo que ellos mismos han definido como genéricamente humano –presupuesto ineludible de toda vindicación feminista – sino que se impugna el sentido de hablar acerca de lo genéricamente humano, desde una hipostatización de la diferencia sexual (Amorós, 1997: 71).

Así, brotan y sorprenden casi simultáneamente tres obras fundantes escritas por rebeldes ilustrados e ilustradas²³⁶. El marqués de Condorcet publica *Sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía* en 1790; Olympe de Gouges escribe por su parte, la célebre *Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana* en 1791 y, finalmente, la *Vindicación de los Derechos de la Mujer* de 1792, es publicada por la inglesa Mary Wollstonecraft. En dicha literatura aparecen las primeras exigencias en torno tres vindicaciones, derechos educativos, civiles y políticos (Puleo, 1993).

3.2 Rebeldes ilustradas, primer movimiento

El filósofo y matemático Marie Jean-Antoine de Caritat, marqués de Condorcet (1743-1794), quien participó activamente en la Revolución Francesa, redactó un gran número de escritos que expresan un espíritu avanzado para su época argumentando contra los prejuicios que afectaban a las mujeres y a favor de su participación en la vida pública y su acceso a la educación, afirmando que la instrucción debe ser la misma para mujeres y para hombres.

En el texto *Cartas de un burgués de New Haven a un ciudadano de Virginia* (1787), Condorcet aboga por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y describe que es una ilegalidad la exclusión de las mujeres del derecho de ciudadanía y su elegibilidad en las funciones públicas: “toda exclusión de este tipo nos expone dos injusticias: una para los electores a los que se restringe la libertad, la otra con respecto a aquéllos que son excluidos y a quienes se priva de la ventaja concedida a los otros”.

El pensador reitera que las mujeres no deberían ser excluidas de ningún puesto y explica que una de las bases de la desigualdad se encuentra en las costumbres y no en las diferencias biológicas, dado que si bien la “constitución de las mujeres las hace poco capaces de ir a la

²³⁶ Este periodo y movimiento ha sido expuesto e investigado a detalle por las filósofas Celia Amorós en su texto *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y modernidad*, Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España, 1997; y por Celia Amorós en *El concepto de igualdad*, Pablo Iglesias, Cátedra, Universidad de Valencia, Instituto de la Mujer España, 1994.

guerra y durante una parte de su vida hay que separarlas de los puestos que exigen un servicio diario un poco penoso, no por ello se les puede asignar ninguna diferencia que no sea obra de la educación” (Condorcet 1993:96).

En el aspecto político Condorcet (1993) señala: “Admitís sin duda el principio de los ingleses que sólo se está legítimamente sujeto a los impuestos que se han votado a través de representantes; de este principio se concluye que toda mujer tiene derecho a negarse a pagar las tasas parlamentarias” (p. 95). Casi al final de su carta expone “quizás encontréis muy larga esta discusión, pero pensad que se trata de la mitad del género humano, derechos olvidados por todos los legisladores” (98).

Posteriormente, en 1790 el filósofo publica *Sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía*, donde explica que las mujeres no pueden ser representadas por hombres y se interroga: “¿no han violado todos el principio de igualdad de los derechos al privar tranquilamente a la mitad del género humano del derecho de concurrir a la formación de leyes, al excluir a las mujeres del derecho de ciudadanía?” (1993: 101). Agrega que se tendría que probar que los derechos naturales²³⁷ y ciudadanía de las mujeres no son en absoluto los mismos que de los hombres, o bien mostrar que las mujeres no son capaces de ejercerlos. Condorcet razona que el hábito y la diferencia de educación entre ambos sexos -más no el derecho natural- es lo que provoca la tiranía masculina: “no es la naturaleza, es la educación, es la vida social la que causa esa diferencia”.

Asimismo, en su obra refiere que “sus intereses no son los mismos, por culpa de las leyes, las mismas cosas no tienen para ellas la misma importancia que para nosotros” (102). En torno al tema de la representación expresa que “no hay que creer que las mujeres pudieran ser miembros de las asambleas nacionales, abandonarían inmediatamente a sus hijos, su hogar y sus labores” (1992:105).

El también político Condorcet enfrentó abiertas oposiciones de quienes no compartían sus propuestas teóricas y políticas, pero para el feminismo representa un baluarte y un referente

²³⁷ El marqués de Condorcet expone en su reflexión, “pido ahora que se dignen fundar estas razones de otra manera que no sea la de bromas o peroratas; que se me muestre sobre todo una diferencia natural entre hombres y mujeres que pueda legítimamente fundar la exclusión de derecho” (1993: 106).

teórico de una Ilustración consecuente, cuyo debate sobre el de derecho al sufragio y la representación se prolongaría en los siguientes dos siglos²³⁸.

La segunda obra relevante del periodo es de Marie Gouze -conocida como Olympe De Gouges- quien publica en pleno contexto de la Revolución Francesa la *Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana* en 1791. La escritora radicaliza los principios de la Ilustración llevándolos al planteamiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello se apoya en los razonamientos del derecho natural, resaltando las contradicciones jurídicas del progreso revolucionario.

A lo largo de 17 artículos establece la similitud de los derechos de las mujeres y de los hombres y argumenta su posición sobre derechos naturales e imprescriptibles tanto para la mujer como para el hombre, su rechazo a la opresión y una reivindicación a la libertad, teniendo como preámbulo de su texto retadoras interrogantes:

Hombre ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, al menos no le quitarás ese derecho. ¿Quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tu talento? Observa al creador en su sabiduría; recorre la naturaleza en toda su grandeza a la cual pareces querer acercarte y dame, si te atreves, el ejemplo de este dominio tiránico (1993: 154)

En el artículo IV de la *Declaración*, De Gouges establece que la libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros, en consecuencia, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer tiene por límites la tiranía de los hombres, los cuales deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y la razón.

En el artículo VI hará un llamado al reconocimiento de la participación política de las mujeres “La ley debe ser la expresión de la voluntad general de todas las Ciudadanas y Ciudadanos que deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, es decir, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos según sus capacidades y sin más distinción que las de sus virtudes y talentos” (De Gouges, 1993:153–163).

²³⁸ Celina Trimiño explica que en un primer momento Condorcet sólo pidió el sufragio para las mujeres propietarias, pero posteriormente modificó su idea y solicitó el sufragio universal. Además incurrió en algunas paradojas y asumió posiciones comprometedoras que le valieron algunas oposiciones (2013: 139).

Lo anterior se puede interpretar como un pronunciamiento sobre el irreductible derecho al voto directo o indirecto, así como sobre la elegibilidad de las mujeres. Esta afirmación se completa con el célebre artículo “Si la mujer tiene derecho de subir al cadalso, debe tener también, igualmente, el de subir a la Tribuna”. El análisis de los escritos y de la participación activa de De Gouges en la Revolución permiten afirmar que lo público y privado se entrelazaban en su pensamiento, adelantándose a la fórmula que hará furor casi dos siglos después en el feminismo contemporáneo -“lo personal es político”- (Blanco, 2000:36).

Con su declaración, la vanguardista pensadora alcanza realmente el universalismo perseguido por la *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano* de 1789. (Blanco, 2000; Amorós, 1997:173; Puleo, 1993: 153 - 160).

Otra pensadora considerada como rebelde es la inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797), quien publica su texto *Vindicación de los Derechos de la Mujer* en septiembre de 1791 y mantiene formación ilustrada, escribió como jacobina en los circuitos del radicalismo inglés y reclamó algo novedoso para su época, que fue la igualdad de derechos educativos, civiles y laborales, los cuales constituían un compendio de argumentos en un discurso liberal que reivindicaba los derechos de la mujer, entablando polémica con pensadores como Burke y Rousseau²³⁹.

Sin mucha elaboración, en su obra Wollstonecraft desarrolló su análisis sobre la situación de las mujeres y sus aspiraciones, la abolición de la esclavitud y los derechos de los pobres a ser apoyados. Uno de los ejes principales de su argumentación es el cuestionamiento a la negación de los derechos políticos y civiles de la mujer, relacionando esta marginación con su exclusión en el ámbito de la razón. (Trimiño, 2013: 154-170).

En el apartado introductorio estableció que “esta exposición divide el tema de modo natural. Primero, consideraré a las mujeres como criaturas humanas que en común con los hombres, se encuentran en la tierra para desarrollar facultades; después señalaré la forma más natural de sus características” (Wollstonecraft, 2000).

²³⁹ Para conocer a detalle las contraposiciones que plantea Wollstonecraft, previamente ya lo había hecho el filósofo y matemático D’Alembert (1717-1783), frente Rousseau, ver el ensayo “Feminismo e Ilustración” de Celia Amorós y Rosa Cobo (2014).

La intelectual inglesa también presentó un amplio interés por el tema de la educación para las mujeres, ya que “la instrucción que han recibido las mujeres hasta ahora sólo ha tenido con la implantación de la sociedad cortés, a convertirlas en objetos significantes del deseo”. Para ella, a través de la educación otorgada, los hombres se empeñaban en hundir a las mujeres y convertirlas simplemente en objetos atractivos para un rato (Wollstonecraft, 2000:100-105).

Por su parte, la pensadora contemporánea Celia Amorós (2005), Mary Wollstonecraft es una representación perfecta del microcosmos de la sociedad patriarcal de su época ya que su padre era alcohólico y derrochaba el patrimonio familiar, su madre era maltratada y ambas padecían la violencia, recordando que la autora británica asume apasionadamente los principios éticos, teóricos y políticos del racionalismo ilustrado -razón, universalidad, virtud e igualdad, son el lenguaje conceptual de su obra intelectual y política contra la opresión.

Tanto la revolucionaria francesa como la intelectual inglesa tuvieron un final trágico, por su parte Olympe de Gouges fue ejecutada en la guillotina en noviembre de 1793 y su destino pareciera reflejar el símbolo de la suerte que tuvo el movimiento feminista surgido en la Revolución Francesa y sus ideales de igualdad y libertad²⁴⁰. Por otro lado Mary Wollstonecraft después de escribir lo que se considera su obra literaria más bella -enmarcada en el género romántico- *Wrongs of woman*, murió en el trabajo de parto a tan solo a un año y medio de intentar suicidarse en el río Támesis, dejando a una hija de tres años y otra con apenas unos días de nacida (Wollstonecraft, 2000:7 12).

Los discursos políticos de ambas ejercen y ejercieron una gran influencia para el movimiento de las mujeres -el “bello sexo” para los revolucionarios- extendiéndose a lo largo del tiempo. Para ellas, como suele reiterar Celia Amorós conceptualizar fue politizar.

Por otra parte, vale la pena mencionar los llamados *Cuadernos de Quejas*²⁴¹ presentados y leídos en los debates y asambleas de la Revolución Francesa en los que describe la situación

²⁴⁰ Ese mismo año se decreta, por orden de los jacobinos, el cierre de los clubes y la prohibición de las sociedades populares de mujeres (Puleo, 1993: 154).

²⁴¹ Los cuadernos de quejas (en francés: Cahiers de doléances) fueron unos *memoriales* o registros que las asambleas de cada circunscripción francesa encargada de elegir a los diputados en los *Estados Generales* rellenaban con peticiones y quejas. Aunque eran usados desde el *Siglo XIV* los más famosos son los de 1789, por su importancia en la Revolución Francesa. La redacción de estos *cuadernos* se presentaba en los pueblos y parroquias urbanas con los "Cuadernos de Parroquias". Después se establecían en cada *bailiaje* los

y destino de las mujeres de clase más desfavorecidas: casi todas las mujeres nacían sin fortuna ni educación y rogaban ser instruidas, pedían que se establecieran escuelas gratuitas y garantías para ejercer un oficio además de otras vindicaciones.

Entre los *Cuadernos* resalta el de “Madame B. de B” donde se encuentra lo que al tiempo será la exigencia y cualidad de la representación sustantiva:

Podríamos replicar que, habiéndose demostrado con razón que un noble no puede representar a un plebeyo, ni éste a un noble de la misma manera, un hombre no podría con más equidad representar a una mujer puesto que los representantes tienen que tener absolutamente los mismos intereses que los representados, las mujeres sólo podrían ser representadas por mujeres (Puleo, 1993:117).

En resumen, la Ilustración es el marco ineludible para explicar el fenómeno histórico del primer movimiento de mujeres -posteriormente llamado feminista- donde se plantearon adecuadamente las vindicaciones.

La tradición que da inicio a esta crítica, tiene una consecuencia no prevista, el desarrollo del pensamiento feminista moderno en el siglo XVIII (Warner, 2012:40).

El feminismo ilustrado o de la igualdad no se limitó a exigir iguales derechos desde una concepción abstracta del individuo, más bien fijó su atención en la realidad cotidiana de la dominación, denunciado sus infinitas manifestaciones de esa mitad otra mitad olvidada: que son las mujeres.²⁴²

Cuadernos de bailable reducidos a doce "Cuadernos de Gobiernos". Los doce cuadernos fueron compilados en tres "Cuadernos de quejas".

Los cuadernos de quejas sondearon la voluntad popular y un resumen de ellos fue leído ante la Asamblea constituyente el 27 de julio de 1789 por el conde de Toulouse. Sin embargo parte de las "quejas populares" anotadas en los cuadernos de parroquias no figuraron en los cuadernos de bailable. Los cuadernos de 1789 son densos, extensos e incluso contradictorios. Aun así los cuadernos jamás escatimaron lealtad ni al rey ni a la *propiedad*, particularmente. Pero la noción central de la Revolución es identificada claramente en los Cuadernos: la *Igualdad*. Básicamente la Igualdad ante los impuestos y ante la ley, estas son reivindicaciones burguesas y serán las triunfadoras de la Revolución francesa.

²⁴² En la introducción del texto *La Ilustración Olvidada*, Alicia H. Puleo describe que ese gran esfuerzo de recopilación y reunión de los conocimientos que es la *Enciclopedia*, pasando por las diversas manifestaciones literarias que ven en el tema de la relación entre los sexos un problema a resolver, hasta la concreción de este malestar social en los cuadernos de quejas de las mujeres, en los proyectos legislativos y en el periodismo femenino o militancia revolucionaria, la Ilustración demuestra ser el terreno propicio para la polémica sobre las reivindicaciones de esa mitad olvidada de la humanidad. El momento del fracaso de esas luchas feministas, patente en el cierre de los clubes de ciudadanas y la ejecución o persecución de sus líderes, presentó rasgos de una contrarrevolución (Puleo, 1993).

Así, el movimiento por los derechos de la mujer surgió contra la versión especialmente rígida de este esquema especializado y caracterizado por el género, la ideología de la esfera separada del siglo XIX. “Una comprensión de lo público y de lo privado estaba implícita no solo en sus teorías y plataformas políticas, sino en su misma existencia en cuanto movimientos (Warner 2012:31).

Después del periodo ilustrado los años que se avecinaban no serán propicios -al menos inicialmente- para la anhelada liberación. Incluso se vivirá un retroceso con la desaparición de las mujeres de la nobleza y la implantación del ideal burgués de la mujer dedicada a sus hijos. Sin embargo, la lucha feminista renacerá más fuerte aún medio siglo más tarde, en donde surgirá un movimiento antiesclavista y sufragista cuyos principios ya habían sido objeto de las preocupaciones ilustradas.

La similitud de las discriminaciones racista y sexista -en tanto basadas en una marca corporal- reavivarían los antiguos planteamientos de la libertad y la igualdad. “La dimensión crítica social del feminismo ilustrado ofrecerá páginas de una gran lucidez. Doscientos años no han logrado envejecerlas y los debates de esta Ilustración olvidada serán la poderosa raíz del pensamiento feminista” (Puelo,1993:29) y de la lucha por la representación.

3.3 El Sufragismo, movimiento articulado.

El feminismo ha denominado los diferentes cortes históricos de los movimientos de mujeres como *Olas*. Tanto la primera como la segunda ola se abordarán a mayor detalle ya que constituyen el momento de la lucha por la inclusión de las mujeres en la esfera pública. Aunque es complejo establecer los periodos exactos de estos cortes históricos, se puede hacer una descripción general desde los planteamientos de autoras como Celia Amorós (1997) y Amelia Valcácel (2001).

Tabla 9

Oleadas del Feminismo

1ª. Ola	Surge en el contexto del desarrollo de la filosofía política moderna y al posterior periodo Ilustrado. S. XVIII
2ª Ola	Nace con la lucha por el Sufragio norteamericano e inglés, principalmente. El feminismo liberal sufragista (Valcárcel, 2001) S. XIX.
3ª. Ola	Enmarcada en el moviendo por los derechos sexuales y reproductivos de los años 60. El feminismo de los 70 y 80 (Valcárcel, 2001) S.XX

¿Cuándo se gesta de manera específica el movimiento de mujeres? Diversos autores describen que es a partir de la lucha por el voto femenino que logra integrar claramente un objetivo común, liderazgos visibles, militancias y un programa, aunque presenta su primer antecedente en la Revolución Francesa y el periodo ilustrado, como ya se describió (Tilly, 2013).

Después de la Revolución Francesa, la demanda por el derecho al voto se convirtió a finales del siglo XIX en el objetivo un movimiento social extendido en diferentes regiones del mundo y que con el tiempo se denominaría y conocería como Movimiento Sufragista.

La historia muestra que el derecho al voto fue restringido en la mayoría de los modelos democráticos representativos -reinstaurando en las naciones a finales del siglo XVIII- por razón de sexo, por clase social y por la condición de propietarios de tierras (Tilly, 2013, pág. 51)²⁴³.

Tendrán que pasar casi dos siglos para que las mujeres y otros sectores adquirieran la condición de ciudadanas y ciudadanos haciendo del sufragio universal una realidad (Capel y Gutiérrez, 2003; Manin, 1997; Trimíño, 2013).

²⁴³ En las siguientes páginas se detalla el año en que las naciones otorgarán el derecho al sufragio a las mujeres.

Este esfuerzo dio vida a numerosas movilizaciones y complejas discusiones jurídicas. El primer país en que las mujeres obtuvieron dicho derecho fue Finlandia, posteriormente en el año 1918 se otorgó en Inglaterra este derecho a las mujeres mayores de 30 años. Las norteamericanas -quienes también libraron una fuerte batalla- pudieron votar a partir de 1920. Las mujeres de Arabia Saudita lo podrán hacer a partir del año 2015.

La ampliación de los derechos ciudadanos fue uno de los motores de las revoluciones liberales del siglo XIX y de los procesos posteriores de transformación democrática. Durante las últimas décadas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial la lucha por los derechos políticos y el derecho al voto se convirtió en la demanda central del movimiento de mujeres, quienes no tenían status legal al ser dependientes del padre o del marido. Las mujeres buscaban ser ciudadanas, entendiendo esto como la pertenencia completa a una comunidad bajo tres dimensiones: -política, civil y social- (Tilly, 2013).

De este periodo, los dos movimientos emblemáticos por el sufragio son los que se gestaron en Estados Unidos de Norteamérica y en Inglaterra a partir de la mitad del siglo XIX.

3.3.1 Séneca Falls y el sufragismo norteamericano²⁴⁴.

En julio 1848 se convocó a un Congreso de mujeres en Seneca Falls en el estado de Nueva York. En el contexto estaba la lucha por la abolición de la esclavitud y la reforma religiosa de la pureza moral, aspectos formadores para la concientización de las mujeres y una identidad feminista.

El objetivo del encuentro considerado el nacimiento formal del movimiento por los derechos de la mujer fue discutir la condición social, civil y religiosa de las mismas, constituyéndose

²⁴⁴ En los últimos años se ha presentado diversos libros, documentales y películas en torno a la lucha sufragista, entre ellas, destaca la estadounidense *Iron Jawed Angels* del 2004, dirigida por Katja von Garnier y protagonizada por Hilary Swank, Frances O'Connor, Julia Ormond, y Anjelica Huston. Se enfoca en el movimiento sufragista de las mujeres estadounidenses en 1910. La película se basa en hechos históricos y sigue a las activistas Alice Paul y Lucy Burns por lograr el derecho al voto. En el 2015 también se presentó la película *Suffragette* con el tema de las primeras participaciones del movimiento de mujeres británicas por el derecho al voto a finales del S.XIX, bajo la dirección de Sara Gavron y el guion de Abi Morgan.

como el primer foro público. Autodenominadas como “hijas de la libertad” y apropiándose de los discursos políticos vigentes, emitieron la *Declaración de Sentimientos*, basada en la *Declaración de Independencia de los Estados Unidos* de 1776. El documento denunciaba las restricciones de las mujeres -no poder votar, afiliarse a organizaciones políticas, dedicarse al comercio, tener negocios, tener propiedades o heredar-, buscaba extender los derechos legales, económicos y políticos que sólo ostentaban los hombres blancos, así como orientar las vindicaciones hacia la legislación secular²⁴⁵.

La convención fue convocada por Lucretia Mott (1793-1880) y Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) quienes redactaron la *Declaración* sobre la base del precepto político liberal de su derecho a perseguir la felicidad y el reconocimiento de la igualdad entre los sexos (Nash, 2012:85-86). Así, el primer precepto establecía “que todas aquellas leyes que fueran conflictivas de alguna manera con la verdadera y sustancial felicidad de la mujer, son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen validez, pues este precepto tiene primacía sobre cualquier otro” (Miyares, 1999).

De las vindicaciones planteadas son relevantes las que refieren a los derechos en general, y a los políticos, en particular: “Que la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad (..), que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho al voto”²⁴⁶.

En 1860 una ley del Estado de Nueva York daba derechos a las mujeres (cobrar sus rentas, heredar propiedades y entablar acciones judiciales); para 1866, el partido Republicano -al cual se habían aliado- les negaba explícitamente el derecho al voto a en la Decimocuarta Enmienda a la constitución. Ni republicanos ni antiesclavistas apoyaron los primeros esfuerzos de las sufragistas. Más tarde, en 1868, Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony comienzan una lucha más organizada y crean una asociación para lograr una mayor

²⁴⁵ Alicia Miyares (1999) refiere que la “creciente industrialización del s.XIX modificó la ocupación tradicional de las mujeres, el tejido a mano, las labores de punto, etc. de tal manera que la mayor parte de la industria doméstica se convirtió en un trabajo mal pagado que las mujeres podían realizar en un desván o en un patio trasero. La industrialización también significó una abierta separación del hogar y del lugar de trabajo e implicó un modelo de división sexual-económico en el que el varón le correspondía ganar el pan, mientras que el trabajo de las mujeres era considerado como suplementarios y ello reforzaba la convicción tradicional” (p.7).

²⁴⁶ La Declaración de Séneca Falls disponible en: <http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-senecafalls-1848>.

capacidad de interferencia: la “Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer” (*National Women Suffrage Association, NWSA*).

Así, realizan campañas novedosas con marchas, reuniones masivas, difusión de folletos y la presentación anual de la enmienda constitucional en el Congreso de 1878 a 1896, centrando su energía en un referéndum, estado por estado de la Unión Americana. Las sufragistas consideraban que con el voto podrían controlar las condiciones de las mujeres en todos los aspectos de la vida, tales como un mejor salario para las trabajadoras en comparación con el entregado a los hombres libres y emancipados. Sus planteamientos son anticlericales, individualistas, interclasistas y considerados excesivos por otras feministas. Esto provocó que una de las integrantes del grupo, Lucy Stone, se alejara y formara la AWSA (*American Woman Suffrage Association*) conocida después como el ala bostoniana más conservadora (Miyares, 1999: 16).

Ante las dificultades y resistencia, las dos facciones del movimiento se unieron en 1890 bajo la “Asociación Nacional Norteamericano Pro Sufragio de la Mujer”. Las activistas fueron radicalizando sus posiciones y estrategias hasta conseguir el derecho al voto después de la Primera Guerra Mundial, en 1920.

3.3.2 Sufragismo inglés

Al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, el movimiento sufragista siguió un largo recorrido y se asentó en la tradición del igualitarismo dentro del escenario político del liberalismo inglés.

Al igual que en otras naciones, la reivindicación del sufragio fue una demanda radical desde la perspectiva de la mentalidad y las pautas culturales de la época: la presencia pública de las mujeres cuestionaba su rol de domesticidad y el orden patriarcal al considerarse que la entrada de las mujeres a la esfera pública implicaba el abandono del hogar.

De manera similar a la lucha sufragista norteamericana, existieron posturas moderadas en un inicio que irán transitando a expresiones más radicales. El primer grupo fue conocido como *sufragismo constitucionalista* y fue dirigido por Lidia Becker, editora de la revista *Women's Suffrage Journal* hasta su fallecimiento en 1890. Las moderadas llegaron a

congregar a 100 mil afiliadas y 449 agrupaciones locales, destacando una marcha que realizaron con casi 15 mil mujeres en Londres en una reclamación pública por el voto, sin embargo, en casi 40 años de lucha no alcanzaron su objetivo, lo que dio paso un sufragismo radical militante²⁴⁷.

Emmeline Pankhurst (1858-1928)²⁴⁸ es la líder de esta expresión y es considerada una carismática dirigente que funda en 1903 la Unión Social y Política de las Mujeres. Con el tiempo fueron conocidas como las *suffragettes*, realizaron más de tres mil encuentros o mítines públicos, vendieron más de 80 mil publicaciones y se postularon como candidatas a ocho elecciones locales. Asimismo, Christabel Pankhurst y Annie Kenny (1879-1953), sufragista obrera y sindicalista respectivamente, tuvieron como estrategia el permitir ser encarceladas en lugar de pagar una multa después de interrumpir un mitin del partido liberal, convirtiéndose de esa manera en prisioneras políticas en 1906 (Nash, 2012: 127-129).

La oposición al sufragio incluyó todo el espectro político -conservadores, liberales y laboristas- con alguna excepción. Entre 1908 y 1915 emergieron organizaciones para combatir la idea, entre ellas la Liga Masculina Antisufragista y la Liga Nacional contra el Sufragio Femenino, las cuales realizaron campañas, algunas muy agresivas. Esto generó como respuesta el escarnio y la ridiculización en la prensa que combinaron el rechazo del sufragio femenino, la supuesta amenaza a la virilidad del gobierno imperial y la posible infelicidad de los hogares británicos.

²⁴⁷ “Inicialmente las tácticas militantes consistían en obstaculización de mítines públicos, el rechazo a pagar impuestos y desórdenes públicos. Más tarde, entre las dos guerras por instrucción de Lousie Weiss, las manifestantes se encadenan a las rejas del Senado y simbólicamente rompen ellas mismas sus ataduras. Las *suffragettes*, militantes sufragistas inglesas reputadas como guerreras van más lejos: tiran una bomba, hacen huelga de hambre. Emily Davison (1872-1913) se tira frente a un caballo del rey en derby de Epsom y se convierte en la heroína del sufragismo: una loca, dicen sus detractores. (Perrot, 2009: .203).

²⁴⁸ En el año 1903, Emmeline Pankhurst fundó en Londres la “Unión Social y Política de Mujeres”, cuyas militantes protagonizaron muchas acciones: protestas, manifestaciones y huelgas de hambre, siendo pioneras en unos métodos de lucha que, posteriormente, adoptarían otros colectivos. La represión fue muy dura con ellas; la propia Pankhurst fue detenida y condenada a tres años de cárcel y de trabajos forzados, acusada de “actividades contrarias a la seguridad y estabilidad del pueblo inglés”.

Además, se consideró que reconocer este derecho abriría las puertas a la representación de mujeres en el Parlamento y en el gobierno y que se podía poner el riesgo el Imperio Británico y provocar la pérdida de credibilidad por parte de las colonias. A ello, se sumaba el hecho de que las mujeres no asumiesen las armas como soldados como otra premisa para negar a las mujeres su condición de ciudadanas (Nash, 2012:121-123).

Durante el periodo de las luchas sufragistas de finales del siglo diecinueve, el filósofo liberal John Stuart Mill, de la tradición utilitarista e hijo del también pensador inglés James Mill²⁴⁹, se convierte en un aliado para las mujeres²⁵⁰ con la publicación de su célebre obra *El sometimiento de la mujer*, realizada en colaboración con su hijastra Helen Taylor, quien fuera militante sufragista y miembro de la Comisión Escolar de Londres donde trabajó en favor de la eliminación de la indigencia infantil y la idéntica subvención pública para escuelas de niñas y niños.

El alegato contra la sociedad patriarcal -entregado al editor en 1861, aunque publicada hasta 1869- apela al principio de igualdad desarrollado por los pensadores ingleses. El texto constituye, al igual que otras obras de las rebeldes ilustradas, una histórica defensa por los

²⁴⁹ El Utilitarismo es una dirección de pensamiento ético y político y económico inglés de los s.XVIII y XIX. John Stuart Mill afirmó haber sido el primero en utilizar la palabra *utilitarista*, pero él también fue utilizado por Bentham y por primera vez en 1781. Esta perspectiva tiene por fin transformar la ética en una ciencia positiva de la conducta humana; sustituye la consideración del fin, deducido de la naturaleza física del hombre, por la consideración de los móviles, donde el fin de toda actividad humana es la máxima felicidad compartida por el mayor número posible de personas, la cual supone la coincidencia de la utilidad privada, con la utilidad pública. Las obras de James Mill y su hijo, John Stuart Mill, se dirigieron a la justificación de tal coincidencia. Asimismo, el utilitarismo mantiene una estrecha asociación con la recién nacida ciencia económica, mientras que el espíritu reformador, en el campo político y social, propició hacer de su doctrina moral el fundamento de reformas que habrían de aumentar el bienestar y la felicidad. (Abbagnano, 1995: 1170-1171). Bajo este principio cada individuo tiene derecho a defender su felicidad, es decir, sus intereses, los cuales tienen que estar representados por el voto. De acuerdo con Ana de Miguel, el principio de Utilidad se convirtió en un poderoso instrumento para reivindicar el sufragio universal (De Miguel, 2005).

²⁵⁰ En *El sometimiento de la mujer*, Mill describe que “Desde que ha habido mujeres capaces de dar a conocer sus sentimientos en sus escritos (el único modo de hacerlos públicos que la sociedad les permite), un creciente número de ellas ha hecho constar su protesta contra su presente condición social; y recientemente, muchas miles de mujeres, encabezadas por las más eminentes que son conocidas por el público, han solicitado al Parlamento su admisión en el Sufragio Parlamentario. La demanda de que las mujeres sean educadas tan sólidamente y en las mismas ramas del saber que los hombres va creciendo cada vez con mayor intensidad y con grandes posibilidades de éxito y su demanda de ser admitidas en profesiones y ocupaciones que hasta ahora les son vedadas se hace cada año más urgente” (Mill, 2010: 52 – 53).

derechos educativos, civiles y políticos de la mujer²⁵¹ bajo una fina argumentación en contra “del hecho de que, desde los primeros albores de la sociedad humana, cada mujer se encontró en un estado de esclavitud con respecto a algún hombre” y en un esfuerzo por modificar la costumbre de obediencia de las mujeres frente a los hombres, quienes además, ponen en práctica todos los medios a su alcance para esclavizar sus mentes (Mill, 2010:14-55).

El filósofo hace un paralelismo con otras relaciones de desigualdad basadas en la clase social o el color en la piel, a la manera de los alegatos contra la esclavitud al tiempo de escribir a favor de mayor igualdad en el matrimonio, la educación, el ámbito laboral y los derechos políticos. (Trimiño, 2013: 181). Respecto a estos últimos, manifiesta lo siguiente:

Las mujeres deberían ser admitidas en cualesquiera otras ocupaciones en las que es de importancia que se les admita o no. Y en esto voy a empezar señalando una función que se distingue notablemente de todas las demás y a la cual el derecho que tienen las mujeres es independiente de toda cuestión que pueda surgir acerca de sus facultades. Me refiero al sufragio, tanto parlamentario como municipal (Mill, 2010:125).

De igual forma, en *Los principios del gobierno representativo* (1861) -en el capítulo “De la extensión del sufragio”- Mill establece que nadie pretende pensar que las mujeres harán mal uso del sufragio: “dadle el voto a la mujer y ella sentirá el punto de honor que va anexo a la política. Aprenderá a mirar la política como algo sobre lo que se le permite tener opinión y actuar en consecuencia; adquirirá un sentido de responsabilidad personal en el asunto” (p.203).

El teórico inglés afirma que “no hay ni la menor sombra de justificación para que las mujeres no sean admitidas al sufragio según las mismas condiciones y límites bajo los cuales se admite a los varones”. Como se puede observar, sus planteamientos sobre el derecho al

²⁵¹ Así presenta su texto John Stuart Mill: “El objeto de este ensayo es explicar tan claramente como pueda los fundamentos de una opinión que he mantenido desde la época en que por primera vez me formé opiniones acerca de asuntos sociales o políticos, y que en lugar de haberse debilitado o modificado, ha ido haciéndose cada vez más fuerte con el progreso de la reflexión y la experiencia de la vida, a saber: que el principio que regula las actuales relaciones sociales entre ambos sexos – la subordinación legal de un sexo al otro- es en sí mismo erróneo, y ahora, uno de los principales impedimentos para mejorar el género humano; y que debería ser sustituido por el principio de perfecta igualdad entre ambos, sin admitir poder o privilegio en uno, ni inferioridad en otro” (2010: 29).

sufragio constituyen además una defensa a la participación y representación política de las mujeres: “con respecto de la capacidad de las mujeres no sólo para participar en elecciones sino para también para desempeñar cargos ellas mismas o ejercer profesiones que impliquen importantes responsabilidades públicas” (Mill, 2010: 125-127).

Es inútil que yo diga que quienes mantienen la doctrina de lo que los hombres tienen derecho a mandar y que la mujeres están bajo la obligación de obedecer, o que los hombres son aptos y las mujeres son ineptas para desempeñar labores de gobierno, son en este caso los acusadores y están obligados a mostrar pruebas positivas para probar su asertos, o de no hacerlo así, a resignarse a que sean rechazados (Mill, 2010: 32).

Para Alicia Miyares (2014) la obra de J.S. Mill constituye un duro ataque contra la esclavitud legal, la educación embrutecedora y la opresión moral basada en la sujeción de la esposa. Va en contra de la ideología imperante de la sociedad victoriana que tomaba como arquetipo de la feminidad una mujer sentimental y mítica, argumento contra las posiciones naturalistas que hacían a la mujer simplemente dependiente.

El filósofo político inglés ocupó un escaño en el parlamento inglés de 1865 a 1868. En su programa de campaña incluyó el derecho al sufragio para las mujeres, ligado al programa liberal y presentó, por primera vez, la propuesta a favor del voto femenino en junio de 1866. La iniciativa fue apuntalada por un grupo de mujeres encabezadas por Barbara Bodichon, y en ella se solicitó el derecho al voto para las viudas o propietarias solteras, es decir, para quienes pagaban impuestos. El proyecto fue apoyado con 1499 firmas. La restricción de la petición era de orden pragmático: las mujeres querían poner contra la pared al Parlamento aprovechando una de las máximas de la tradición constitucional inglesa que señala que quien no tiene derechos políticos, no está obligado a pagar impuestos.

John Stuart Mill fue objeto de duras críticas y burlas por parte de sus colegas, pero él continuó con la idea de que el sufragio universal era central para la democracia y la reforma de la humanidad. Un año después, el filósofo parlamentario presentó el proyecto buscando que se sustituyera la palabra “man” (hombre) por “person” (persona), argumentando nuevamente que la exclusión de las mujeres transgredía el principio que más defendían los conservadores: el vínculo entre impuestos y representación. La enmienda fue derrotada por 73 votos a favor y 196 en contra. Mill lo consideró un éxito ya que logró poner el debate en

el camino para la emancipación de la mujer. Las mujeres británicas conquistarán el derecho al voto en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial (Álvarez, 2014)²⁵².

Bajo el análisis de la historiadora Mary Nash (2011), la reivindicación del derecho al voto en diversas naciones²⁵³, tanto por parte de los constitucionalistas como de los radicales, no se reducía a una lucha de las mujeres de clase media sino que logró cuestionar los roles de género vigentes y la separación que existía de la vida pública y privada convirtiéndose en movimiento social movilizador de amplios sectores.

Las sufragistas darían una tregua a su lucha al estallido de la Primera Guerra Mundial, pero para 1918 fue replanteada la posición de los políticos frente a las mujeres por su dedicación en el periodo de conflicto. En ese año se otorgó el derecho al voto a las mujeres mayores de 30 años con un nivel económico elevado. En 1928, una década después, se logra el reconocimiento universal del voto femenino. Sobre la lucha por el sufragio femenino Nash (2011) concluye, citando el texto *The Strange Death of Liberal England*, que el movimiento sufragista fue -junto con el obrerismo- uno de los movimientos sociales más influyentes en la quiebra de la sociedad liberal decimonónica.

Como se describe al inicio, el sinuoso camino por alcanzar este derecho lo fueron padeciendo las mujeres de diferentes regiones del mundo a lo largo del siglo XX, desde las persistentes y pioneras sufragistas inglesas y norteamericanas, hasta las pacientes pobladoras de Arabia Saudita, quienes podrán votar a partir del año 2015 según el anuncio del rey Abdalá. En

²⁵² En una observación comparada sobre la lucha sufragista, John Stuart Mill escribe que “aunque no hay en este país (Inglaterra) como lo hay en Estados Unidos, convenciones periódicas y un partido organizado para promover los Derechos de la Mujer, como hay una numerosa y activa asociación organizada y administrada por mujeres, con el objeto, más limitado de obtener el voto. Pero no es sólo en nuestro país ni en América donde las mujeres están empezando a protestar más o menos colectivamente contra las desventajas bajo las desventajas bajo las que tienen que moverse. Francia e Italia, Suiza y Rusia ofrecen ahora ejemplos de los mismos. Cuántas más mujeres habrá que aspiren en silencio aspiraciones similares.” (2010: 53)

²⁵³ Por ejemplo, las españolas obtendrán el derecho al sufragio en 1931, bajo el liderazgo de Clara Campoamor, abogada pionera del movimiento feminista de este país y quien fuera elegida como diputada en las Cortes Constituyentes de la Segunda República. La primera vez que pudieron ejercer el derecho al voto en todo el territorio español fue en las elecciones generales celebradas el 19 de noviembre de 1933. Ver, Campoamor, Clara, El voto femenino y yo, Editorial sol 90, 2010.

América Latina, las reformas legislativas iniciaron en 1947 en Argentina y culminaron en 1961 en Paraguay, último país de la región que consagró el derecho político de las mujeres (Bareiro y Soto, 2007).

Sin embargo, todo esto encuentra su inicio en los primeros años de la lucha sufragista -en Boston, en Londres y en París- cuando las mujeres desfilaron elegantemente vestidas y peinadas, agitaron estandartes y pancartas con eslóganes, desplegaron banderines y portaron bandas reivindicativas (Perrot, 2009).

En resumen, el importante movimiento sufragista rediseñará el paradigma de la lucha por los derechos de las mujeres en general, y por los derechos políticos, en particular; su relevancia radica en simbolizar la culminación de la primera lucha internacional de las mujeres con un objetivo vinculado, estratégico, y como una forma única de contienda política. Esta lucha constituye el primer movimiento social articulado y de carácter universal de lo que con el tiempo se denominará “feminismo”. Desde el punto de vista filosófico, fue algo que generó un marco conceptual cuyos debates se prolongaron.

Así, con sus acciones, las rebeldes ilustradas primero, y las sufragistas después, sentaron las bases para las vindicaciones en ámbito político. En la siguiente gráfica puede apreciarse el recorrido de las mujeres por alcanzar el derecho de les permitirá insertarse en el ámbito público, alcanzando el deseo de Olympe de Gouges, ser ciudadanas.

Tabla 10
Cronología de la obtención del derecho al sufragio.

1893	Nueva Zelanda.
1902	Australia
1906	Finlandia
1907	Noruega(to stand for election)*
1913	Noruega**
1915	Dinamarca, Islandia*
1917	Canadá (to vote)*, Países Bajos (to stand for election)
1918	Austria, Canadá (to vote)*, Estonia, Georgia, Alemania, Hungría, Irlanda*, Kirguistán, Letonia, Lituania, Polonia, Federación de Rusia, Reino Unido*
1919	Bielorrusia, Bélgica (to vote)*, Luxemburgo, Países Bajos (to vote), Nueva Zelanda (to stand for election), Suecia*, Ucrania.
1920	Albania, Canadá (to stand for election)*, República Checa, Islandia**, Eslovaquia, Estados Unidos de América (to vote)
1921	Armenia, Azerbaiyán, Bélgica (to stand for election)*, Georgia, Suecia**
1924	Kazajistán ¹ , Mongolia, Santa Lucía, Tayikistán.
1927	Turkmenistán
1928	Irlanda**, Reino Unido**
1929	Ecuador*, Rumania*
1930	Sudáfrica (mujeres blancas), Turquía (to vote)
1931	Chile*, Portugal*, España, Sri Lanka
1932	Brasil, Maldivas, Tailandia, Uruguay
1934	Cuba, Portugal*, Turquía (to stand for election)
1935	Myanmar (to vote)
1937	Filipinas
1938	Bolivia*, Uzbekistán
1939	El Salvador (to vote)
1941	Panamá*
1942	Dominican Republic
1944	Bulgaria, Francia, Jamaica
1945	Croacia, Guyana (to stand for election), Indonesia, Italia, Japón, Senegal, Eslovenia, Togo
1946	Camerún, República Democrática Popular de Corea, Djibouti (to vote), Guatemala, Liberia, Myanmar (to stand for election), Panamá**, Rumania**, Macedonia, Trinidad y Tobago, Venezuela, Viet Nam, Yugoslavia
1947	Argentina, Japón, Malta, México (to vote), Pakistán, Singapur
1948	Bélgica**, Israel, Niger, República de Corea, Seychelles, Surinam
1949	Bosnia y Herzegovina, Chile**, China, Costa Rica, Siria (to vote)*
1950	Barbados, Canadá (to vote)**, Haití, India

1951	Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, Nepal, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines
1952	Bolivia**, Costa de Marfil, Grecia, Líbano
1953	Bhután, Guyana (to vote), México (to stand for election), Siria**
1954	Belice, Colombia, Ghana
1955	Camboya, Eritrea, Etiopía, Honduras, Nicaragua, Perú
1956	Benin, Comoros, Egipto, Gabón, Mali, Mauricio, Somalia
1957	Malasia, Zimbabwe (to vote)**
1958	Burkina Faso, Chad, Guinea, Laos, Nigeria (South)
1959	Madagascar, San Marino (to vote), Túnez, Tanzania
1960	Canadá (to stand for election)**, Chipre, Gambia, Tonga
1961	Bahamas*, Burundi, El Salvador (to stand for election), Malawi, Mauritania, Paraguay, Ruanda, Sierra Leona
1962	Argelia, Australia**, Mónaco, Uganda, Zambia
1963	Afganistán, Congo, Guinea Ecuatorial, Fiji, Irán, Kenya, Marruecos, Papúa Nueva Guinea (to stand for election)
1964	Bahamas**, Libia, Papúa Nueva Guinea (to vote), Sudán
1965	Bostwana, Lesotho
1967	República Democrática del Congo (to vote), Ecuador**, Kiribati, Tuvalu, República Democrática Popular de Yemen
1968	Nauru, Suazilandia.
1970	Andorra (to vote), República Democrática del Congo (to stand for election), República Árabe de Yemen.
1971	Suiza.
1972	Bangladesh
1973	Andorra (to stand for election), Bahrain, San Marino (to stand for election)
1974	Jordania, Islas Salomón.
1975	Angola, Cabo Verde, Mozambique, Sao Tome and Principe, Vanuatu.
1976	Portugal**
1977	Guinea Bissau
1978	Nigeria (North), República de Moldavia, Zimbabwe (to stand for election)
1979	Islas Marshall, Micronesia (Fed. States), Palau
1980	Irak, Vanuatu ¹
1984	Liechtenstein, Sudáfrica (mujeres de color e indias)
1989	Namibia
1990	Samoa
1993	Kazajstan ¹ , República de Moldavia

Fuente: <http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm> Consultado el 17 de octubre del 2014. La traducción es propia.

Al analizar la evolución del derecho al sufragio, es evidente que las mujeres tuvieron que luchar y esperar poco más de un siglo para ejercer este derecho en todos los rincones del planeta. ¿Será necesario el mismo tiempo para alcanzar la paridad política? ¿Qué sucedió después del movimiento sufragista? ¿Cuáles fueron las siguientes aportaciones teóricas y políticas que posibilitan los escalones hacia la representación? A continuación se describe el otro gran momento y aporte para esta historia: el feminismo en tanto teoría y movimiento.

3.4 El Feminismo, teoría y movimiento.

Hasta finales del s. XIX no existió la posibilidad de asociar un movimiento de las mujeres con el término feminismo y no se podía agrupar el pensamiento crítico y la lucha de las mujeres bajo esta denominación.

El término fue acuñado en Francia a fines del s. XIX por Hubertine Auclert, destacada militante por los derechos y sufragista, quien utilizó la palabra en la revista *La Citoyenne* que dirigía desde 1880. A finales de siglo XIX los vocablos sustantivos y adjetivos se ponen de moda, aunque no reemplazan expresiones como “causas de las mujeres” o “movimiento de las mujeres” (Perrot, 2009:199).

Para Karen Offen (1991) la historia del feminismo es inseparable de los objetivos clásicos de la historiografía: la política y el poder. De ahí que esa historia plantee cuestiones esenciales para historia política e intelectual de Europa y el mundo occidental del mismo modo que la historia de las mujeres plantea cuestiones esenciales para la historia social y económica, tanto en el desarrollo de la teoría como en la práctica política. El concepto ha estado ligado al debate en torno a la evolución cada vez más compleja de la conformación de los estados naciones seculares, del capitalismo industrial y de la guerra y la paz de las naciones (p.122).

En el ensayo “Definir el feminismo, una análisis histórico comparativo”, Karen Offen (1991), propone una amplia definición que pretende coordinar testimonios existentes específicos de un tiempo y lugar. La autora sugiere que el feminismo está representado por dos modos de argumentación aparentemente diferenciados y en conflicto. Ambos discursos tienen raíces históricas en lo que se ha denominado conciencia femenina o derechos de

género; se trata de los horizontes relacional e individualista, posteriormente conocidos como feminismo de la igualdad y de la diferencia, respectivamente.

El feminismo relacional es una línea dominante de argumentación previa al siglo XX que inspiró gran parte de los movimientos de mujeres en Francia, Inglaterra, los países escandinavos, Alemania y otras naciones europeas. Presenta la posibilidad de extensión a otros grupos de personas además de maridos, hijos y parientes inmediatos, y enfatiza los derechos de las mujeres; asimismo, propone una visión de organización social fundada en el género, pero igualitaria y centrada en la pareja. Asumió, por otra parte, reivindicaciones del derecho a trabajar fuera del hogar, a participar en todas las profesiones y votar.

De igual forma conjugó la cuestión de la igualdad moral de la mujer y el hombre con el reconocimiento explícito de las diferencias de las funciones sexuales de los hombres y las mujeres; exigió programas gubernamentales que alentaran y subrayaran la puesta en práctica de las funciones procreativas de las mujeres al tiempo que planteaban la necesidad de facilitar otras vías por las que ellas pudieran ganarse la vida. En esta corriente las mujeres poseían una conciencia feminista, consideraban injusta la situación de las mujeres en la cultura, la cual atribuían a las instituciones políticas y sociales creadas por los hombres.

Las feministas estaban convencidas de que con la protesta y la acción política podía cambiar al estado de cosas y de que sus vindicaciones no encajaban en los modelos de igualdad de derechos²⁵⁴.

En tanto, el feminismo individualista tuvo fuerza en Estados Unidos e Inglaterra: “el árbol del tallo genealógico parecía ramificarse en dos tallos con múltiples retoños”. Nace cuando un número importante de mujeres cultas, solteras y en busca de autonomía se hacen visibles, así como las mujeres casadas en el mundo laboral industrial adquieren entidad política y, lo más importante, cuando la tasa de natalidad decae. Esta perspectiva hace hincapié en los

²⁵⁴ De acuerdo con Offen (1991), la nueva historia debe contar los esfuerzos de las feministas relacionares para influir en la promulgación del gobierno de una legislación por los derechos de las mujeres, como fue a las mujeres trabajadoras, los subsidios estatales a la maternidad, la formación de asociaciones de amas de casa, las compensaciones por el trabajo doméstico, en resumen, todos los esfuerzos políticos por transformar el estado de bienestar de modo que responda a las necesidades de madres y esposas, además de los esfuerzos por eliminar el control que ejerce el Estado sobre los cuerpos. Ver, Offen, Karen, *Definir el feminismo, un análisis histórico comparativo*, Historia Social, número 9, 1991.

conceptos más abstractos de los derechos humanos individuales y exaltan la búsqueda de la independencia personal en todos los aspectos de la vida, rechazan los roles definidos socialmente y minimizan la discusión de las cualidades relacionadas al sexo, incluso las de engendrar (Offen, 1991).

Al igual que muchas exigencias económicas liberales del siglo XIX, las reivindicaciones se formulaban en términos alternativos de liberación de las restricciones impuestas por el exterior y “liberación para llegar a ser”, lo que tenía un significado más filosófico y trascendental e implicaba un proyecto más profundo de realización personal. Daba prioridad política a la Enmienda de Igualdad de Derechos, al dismantelamiento de un sistema educativo estratificado según el género y la condición económica que colocaba a las mujeres en una situación de desventaja a través de la segregación ocupacional (Offen, 1991: 116-123).

En resumen, los grupos de feministas se dividieron en dos grandes corrientes, aunque con múltiples matices: 1) la primera aboga por la emancipación equiparada a los varones de corte liberal e individualista, aspirando a una remoción de las costumbres patriarcales: 2) La segunda corriente que se proponía lograr derechos civiles sin olvidar ciertas responsabilidades sociales. Con el tiempo, dichas corrientes serían conocidas como el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia.

Además, aunque el feminismo en general resaltaba el reconocimiento de la maternidad, en algunos segmentos de mujeres se prefería centralmente esta identidad tradicional junto con el sostenimiento de valores diferentes para los sexos. Otra cuestión nodal que producía la diferenciación era la que tocaba a la reforma social o a la ideología política: en algunos casos el feminismo se cruzaba con ideologías contestatarias como el anarquismo, mientras que en otras, las mujeres estaban más cerca de la socialdemocracia o el socialismo además de movilizarse por los derechos civiles y políticos y acercarse a las organizaciones populares (Gamba, 2007:151).

La historiadora Offen (1991) también describe que estos dos modos de argumentar no estaban presentes en el pensamiento angloamericano anterior al siglo XX, sin embargo, entre 1890 y 1929 los objetivos y metas de ambas perspectivas se mostraban cada vez más irreconciliables. Para la autora, una definición de feminismo debe localizar esos orígenes y

evolución en el ámbito de las diferentes tradiciones culturales en lugar de postular un modelo hegemónico, partiendo de una sola tradición o modelo sociolingüístico. En consecuencia funda su definición incluyendo la tradición relacional y crítica:

Como una importante ideología crítica o sistema de ideas en rápida evolución. Como ideología incorpora un amplio espectro de ideas y se da en un marco internacional, sus distintas fases de desarrollo han estado a un tiempo sometidas históricamente al discurso político e intelectual centrado en el varón con él, pero sus manifestaciones más recientes lo han trascendido. De ahí que no deba ser analizado intrínsecamente como otra ideología (Offen, 1991:130).

El feminismo se presenta, entonces, como un concepto que engloba una ideología y un movimiento de cambio sociopolítico fundado en el análisis crítico que privilegia al varón y la insubordinación de la mujer en cualquier sociedad; la piedra angular de su edificio ideológico es el género, y tiene por objetivo destruir la jerarquía masculina, no el dualismo sexual, y es necesariamente pro-mujer, lo que no implica ser antihombre. Asimismo, exige que el poder social, económico y político se reestructure (Offen, 1991:130-131)²⁵⁵.

Desde otra perspectiva, Celia Amorós (2014) en su ensayo *Teoría Feminista y movimiento feminista*, señala que “entendemos por feminismo una teoría crítica, en tanto que tal se inserta en la tradición de las teorías críticas de las sociedades”²⁵⁶. Citando a la estadounidense Seyla Benhabib, describe que las premisas de dicha teoría son: el sistema sexo-género como el modo esencial, que no contingente, en que la realidad se organiza simbólicamente y se vive experimentalmente; el sistema sexo-género es la red mediante la cual las sociedades y las culturas reproducen a los individuos incardinados.

El género es una realidad social y la teoría crítica feminista ha de develar este hecho, desarrollando una teoría que sea emancipadora y reflexiva, pudiendo contribuir a ello de dos

²⁵⁵ Tomando como base dicha definición, el Feminismo consideraría feminista cualquier persona, mujer y hombre que: 1) acepte la validez de las interpretaciones de las mujeres sobre sus propias experiencias y necesidades, y reconocer los valores que las mujeres defienden públicamente como propios, al enjuiciar su status en la sociedad con respecto a los hombres; 2) que se manifieste consciente, molesta e incluso airada frente a la injusticia institucionalizada que los hombres como grupo ejercen sobre las mujeres como grupo en una sociedad determinada; 3) que aboga por la eliminación de dicha injusticia y se opone al poder, a la fuerza o a la autoridad coercitiva que mantiene las prerrogativas del varón en esa cultura concreta. (Offen, 1991: 131).

²⁵⁶ Celia Amorós (2014) “De acuerdo al texto de *Conocimiento e interés* de Habermas, se vincula la existencia de un interés práctico de la razón con capacidad de la propia razón de trascenderse a sí misma en la autorreflexión, que cobraría por ello mismo un sentido emancipatorio. La razón va más allá de sí misma en su propia autocrítica, en la conciencia de sus límites y de su propia posición porque es razón práctica, *conatus*, de autonomía y voluntad de autonormarse, en suma libertad” (p. 25).

formas: a) desplegando un análisis explicativo-diagnóstico de la opresión de las mujeres a través de la cultura y la sociedad actual; b) mediante una crítica anticipatoria utópica de las formas y volares de nuestra sociedad y cultura actuales, además de proyectar nuevos modos de relacionarnos entre nosotros y la naturaleza (2014: 25). Así, Amorós reitera que el Feminismo es tanto un movimiento como una teoría crítica.

El Feminismo constituye entonces un paradigma en el sentido laxo, un marco interpretativo que determina la visibilidad y la constitución de hechos relevantes de fenómenos y acontecimientos que nos son significativos desde otras orientaciones. La filósofa describe que el feminismo es *militante*, es crítico respecto a orientaciones de la atención desde los horizontes en que no se perciben los hechos y mantiene pretensiones de *universalidad*, en el sentido de marcar un horizonte regulativo. La mirada feminista se configura desde un proyecto emancipador que se sitúa en los parámetros de la Ilustración y mantiene una peculiaridad: no sabe conceptualizar sin politizar (Amorós, 2014).

Aunque el feminismo no es homogéneo, comparte la idea de ser un movimiento político integral contra el sexismo en todos los terrenos, expresando la lucha, movimientos y organización de las mujeres por erradicar la discriminación (Amorós, 2014).

Esto significa, que las feministas atacan elementos estructurales y prácticas problemáticas que tienen dimensiones políticas que trascienden fronteras del mundo occidental aplicables a experiencias de mujeres en distintas sociedades (Offen, 1991:131). Es decir, la demanda del poder masculino impone la marginación femenina.

Al respecto, Amelia Valcárcel (1997) dice que “entendemos por feminismo, de acuerdo con una tradición de tres siglos, un tipo de pensamiento moral, antropológico y político que tiene como referente la idea racionalista e ilustrada de la igualdad entre los sexos”. Para ella, el feminismo es ante todo una ética, ya que replantea la visión, la forma y la manera de relacionarse en el mundo de hombres y mujeres²⁵⁷.

²⁵⁷ Valcárcel señala que el feminismo observa que la diferencia entre los géneros en las sociedades, conocidas hasta ahora, se construye en forma de una jerarquía de *status*, en la cual lo masculino es hegemónico y lo femenino es subordinado; por ello, tiene como teleología la disolución de los genéricos, como camino el proceso de modelización por la vía exclusivamente femenina, y su papel es constituirse como una fase intermedia hasta que un orden no sexista emerja (1997: 19 – 20).

Warner (2012) por su parte apunta que los movimientos sociales feministas desafiaron las normas prevalecientes de la división público-privado y el feminismo representó la cúspide de la política de la identidad: dado que lo masculino era a lo público como lo femenino a lo privado, el movimiento de la mujer surgió contra una versión especialmente rígida de este esquema especializado por el género y la ideología de la esfera separada (p.31).

Recapitulando, el feminismo se constituye como una teoría crítica y como un movimiento social que plantea un proyecto emancipatorio de las mujeres para el que se requiere poner en cuestión la diferencia genérica asignada como construcción política, cultural y simbólica.

En resumen, el Feminismo constituye un referente teórico y enmarca el movimiento que posibilitará, entre otras cosas, primero el derecho al voto y después la representación política de las mujeres cuya presencia en la esfera pública es parte del desmantelamiento del orden bajo el cual se han constituido la cultura, la sociedad y las relaciones de poder.

Esta nueva manera de mirar los hechos, denominada posteriormente “perspectiva de género”, hará posible denunciar teórica y políticamente la ausencia de mujeres en los espacios de toma de decisión como un efecto más de las relaciones de sexo-género que determinan la sociedad y cuya transformación dependen de la convergencia de diferentes hechos, entre ellos, un movimiento de mujeres.

3.4.1 Feminismo de la segunda ola.

Como se mencionaba, para algunas historiadoras y desde diversas corrientes teóricas se considera que el feminismo se mueve por impulsos: actúa como marea, por oleadas. Es un movimiento latente, sincopado, pero que aparece, disminuye y resurge constantemente. No se apoya en organizaciones estables, capaces de capitalizarlo, sino en diversos esfuerzos políticos y teóricos. Movimiento más que partido, se sustenta en personalidades, agrupaciones y asociaciones, en ocasiones efímeras y frágiles y otras veces, fuertes y generadoras de cambios profundos (Perrot, 2009; Amorós, 2014; Valcárcel 1997; Lamas 2008).

Como se describió, en el siglo XIX el movimiento lucha más por la igualdad de los sexos – una noción relativamente nueva para la época, enunciada por los cartesianos del siglo XVII

y luego afinada y reiterada- que por la diferencia, dado el riesgo de condenar a las mujeres a la inferioridad. Con variantes reales según el país y las culturas políticas, se establece que la Primera Ola ocurrió desde los debates de la Ilustración hasta la lucha por el sufragio.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres consiguieron el derecho al voto en casi todos los países europeos, pero paralelamente se produjo un reflujo de las luchas feministas. En una etapa de transición se tiene el denominado *Feminismo Social*, que tiene como precursoras a Flora Tristán (1803-1844) y Emma Goldman (1869-1940). Esta última publicó en 1910 su obra *El anarquismo y otros ensayos*, relacionando la lucha feminista con la obrera, además de hacer aportaciones sobre la sexualidad femenina (Amorós, 2014).

Después de la obtención del derecho al sufragio y con la llegada de la Primera Guerra Mundial, además de una nueva dinámica del mercado y la sociedad, los Estados y sus respectivos gobiernos adquirirían una relación diferente con las mujeres, presentándose replanteamientos jurídicos y políticos dirigidos a la construcción de sociedades más democráticas, con igualdad de oportunidades e incluyentes (Gamba, 2007).

A partir del movimiento feminista denominado la segunda ola, o bien tercera ola -sobre todo en Estados Unidos y Europa- las mujeres comenzaron a hacer planteamientos por un ejercicio libre de su sexualidad y de su cuerpo al tiempo de denunciar los diferentes espacios de discriminación por razón de sexo en los ámbitos público y privado así como el malestar entre las políticas de los estados nacionales que las colocaban como sujetos marginados del ejercicio de sus derechos (Molyneux, 2003: 221).

La tercera Ola - si se consideran las movilizaciones de la Revolución Francesa como la primera - se presenta a partir de la obra de la filósofa francesa Simone de Beauvoir con su emblemático libro *El segundo sexo*, el cual constituye el puente entre el feminismo ilustrado-sufrajista y el neofeminismo, aunque entre ambos momentos hubo diversas producciones tanto teóricas como de acción política con un tono menos reivindicativo, de baja intensidad y con menor resonancia pública (Amorós, 2013; Nash, 2012:155).

A continuación se presentan dos breves reseñas de las aportaciones teóricas del periodo previo al momento de la organización internacional que socializó las -aún controvertidas-

acciones afirmativas, por parte de las pensadoras Simone de Beauvoir (1908-1986) y Betty Friedan (1921-1969).

Posteriormente, se describen elementos teóricos para repensar la situación de las mujeres. Si bien no profundizan en aspectos de representación política, ambas aportarán argumentos para el debate que busca dismantlar el orden patriarcal que rige el mundo y las relaciones.

- El Segundo Sexo

La filósofa francesa Simone de Beauvoir escribió *El segundo sexo* en 1949, una obra paradigmática del feminismo que nutrió todo el pensamiento posterior y el horizonte desde el cual se comprenden aspectos de la situación de las mujeres. El texto relanza el debate feminista, pero no desde una plataforma política como lo habían hecho las rebeldes ilustradas, sino desde la filosofía. Enmarcado en una perspectiva existencialista²⁵⁸, analiza la condición femenina en las sociedades occidentales desde múltiples enfoques -científicas, históricas, psicológicas, sociológicas, ontológicas y culturales- a fin de sustentar y demostrar sus planteamientos. Algunas pensadoras consideran este libro como un ensayo "totalizador" por su amplitud y sus detallados planteamientos.

Para Teresa López, la investigación de De Beauvoir, dota de una fundamentación elaborada y deconstruye los mitos sobre la feminidad que contrastan con la experiencia real de las mujeres. También anticipa lo que serían los temas de la tercera ola del feminismo de los años 70, desde la problemática de la sexualidad al derecho de ser individuo (López Pardina, 2014).

Entre muchos argumentos, De Beauvoir (1995) señala que todo sujeto se afirma concretamente a través de los proyectos como una trascendencia y sólo hace culminar su libertad cuando la supera constantemente hacia otras libertades. No hay más razón de la existencia presente que su justificación hacia un futuro indefinidamente abierto. Sin embargo, la mujer difícilmente alcanza este ejercicio de libertad (2008:63) ya que un sistema

²⁵⁸ El existencialismo se suele aplicar a un conjunto de filosofías o de direcciones filosóficas que tienen en común el instrumento de que se valen, esto es, el análisis de la existencia, aunque no tengan en común los supuestos y conclusiones. Estas direcciones toman la palabra "existencia" como el modo de ser propio del hombre en cuanto un modo de ser en el mundo, es decir, siempre en una *situación determinada*, analizable en términos de posibilidad. Así, el análisis existencial es el análisis de las situaciones más comunes o fundamentales en que el ser humano llega a encontrarse. En dichas situaciones, el hombre no es nunca, la totalidad infinita del mundo, el ser o la naturaleza. El principal teórico de ese momento de la filosofía existencialista era el pensador francés Jean Paul Sartre, quien había retomado a pensadores como Kierkegaard y Heidegger) en *Abbagnano, N, Diccionario de Filosofía*, F.C.E., México, 1995. 490-494.

en su conjunto lo impide. Necesitará un esfuerzo moral mayor que el varón para elegir el camino de su independencia, un camino que desmonte todo lo que ha generado su situación de sujeción y cotidiana *inmanencia*²⁵⁹.

Para De Beauvoir (2008) el vínculo que une a las mujeres con sus opresores no puede compararse con ningún otro. Su reflexión radical pone de manifiesto de forma consciente que las bases mismas de la vindicación se encuentran en el solapamiento de lo masculino como genéricamente humano, es decir, lo masculino se había impuesto, sin más, como lo humano.

Aunque el texto toma como punto de partida la filosofía existencialista, en la segunda parte de su libro y en el capítulo denominado “Historia” la pensadora desarrolla algunas descripciones sobre la exclusión de las mujeres del poder y de la lucha sufragista en Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Recapitula algunos de los argumentos usados para negar ese derecho, entre ellos “la mujer perdería su encanto votando, está en un pedestal, que no se baje; tiene todo que perder y nada que ganar al convertirse en electora; ya gobierna a los hombres sin necesidad de papeletas” (De Beauvoir, 2008: 204).

Además, la peor maldición que pesa sobre la mujer es estar excluida de la guerra, ya que esto la ha relegado de la posibilidad de imponerse en el mundo²⁶⁰. El hombre no sólo ha

²⁵⁹ Por ejemplo De Beauvoir (2008), señala que “lo que define la situación de la mujer es que, siendo como todo ser humano, una libertad autónoma, se descubre y se elige en un mundo en el que los hombres le imponen que se asuma como Alteridad; se pretende petrificarla como objeto, condenarla a la inmanencia, ya que su trascendencia será permanentemente trascendida por otra conciencia esencial y soberana” (p. 63). En la medida que se considera a la mujer como Alteridad absoluta, es decir – sea cual fuere su magia- como inesencia, es precisamente imposible mirarla como otro sujeto. Esto es, las mujeres nunca fueron un grupo separado que se afirmara para sí frente al grupo masculino; nunca tuvieron una relación directa y autónoma con los hombres. Así, el vínculo de reciprocidad que fundamenta el matrimonio no se establece entre hombres y mujeres, sino entre hombres por medio de mujeres que son únicamente su principal ocasión. El drama de la mujer es este conflicto entre la reivindicación fundamental de todo sujeto que siempre se afirma como esencial y las exigencias de una situación que la convierten en inesencial (p.135). La pensadora francesa se interroga: ¿cómo puede realizarse un ser humano dentro de la condición femenina?, ¿qué caminos se le abre? ¿cómo recuperar la dependencia en el seno de la independencia? ¿Qué circunstancias limitan la libertad de la mujer? ¿Las puede superar? Ella responde que es evidente que este problema no tendría ningún sentido si supusiésemos que pesa sobre la mujer un destino fisiológico, psicológico o económico. Por otra parte, una mujer que trata de vivir estará más dividida que la que entierra su voluntad y sus deseos, pero no aceptará que ésta última se le ponga de ejemplo.

“Para hacer grandes cosas, lo que falta esencialmente a la mujer de nuestros días es el olvido de sí. Pero para olvidarse hay que tener primero una seguridad sólida de haberse encontrado. Recién llegada al mundo de los hombres, escasamente apoyada por ellos, la mujer está demasiado ocupada buscándose” (pp. 858-873). De Beauvoir, Simone, *El segundo sexo, Cátedra*, Universidad de Valencia, Ministerio de Igualdad, España, 2008.

²⁶⁰ Entre las críticas que recaen sobre *El segundo sexo* fue que se consideró que la opresión de las mujeres remitía en última instancia a relegación al ámbito de inmanencia, a la mera repetición de la vida, frente a la

logrado prevalecer como amo frente a otros, sino que, al mismo tiempo, se ha impuesto como amo frente a la mujer; el proyecto del hombre no es sólo repetirse en el tiempo, es reinar sobre el instante y forjar el futuro. La guerra le permite al hombre ganar territorios, conquistar, y también, crear valores, constituyendo la existencia como valor en sí, “ha vencido a las fuerzas confusas de la vida: ha sometido a la Naturaleza y a la Mujer” (De Beauvoir, 2008:130).

La también autora de *La mujer rota* explica que el verdadero control del mundo nunca estuvo en manos de las mujeres; ellas no actuaron sobre la política o la economía, no hicieron o deshicieron Estados, no descubrieron mundos. Existen excepciones, como la reina Isabel de Inglaterra o Catalina la Grande de Rusia, pero eso fue cuestión de linajes. En consecuencia,

Para cambiar la faz del mundo, primero hay que estar sólidamente anclado a él; las mujeres sólidamente arraigadas en la sociedad son las que están sometidas a ella; a menos que la designe para la acción del derecho divino – y en ese caso se muestran tan capaces como los hombres –, la ambiciosa, la heroína, son monstruos extraños. Solamente cuando las mujeres empiezan a sentirse en su casa sobre esta tierra vemos aparecer una Rosa Luxemburgo, una madame Curie. Demuestran con brillantez que no es la inferioridad de las mujeres lo que determina su insignificancia histórica: su insignificancia histórica las condena a la inferioridad (Beauvoir, 2008:214).

El drama para las mujeres, desde la perspectiva de Simone de Beauvoir, es entonces que como resultado de esta exclusión, la mujer se conoce y se elige no en la medida que exista para sí, sino tal y como la define el hombre. En consecuencia, uno de los factores esenciales de su condición concreta es convertirse en *un ser para los hombres, un ser para los otros*, no para sí misma.

Desde la mirada de De Beauvoir (2014), mientras la mujer tenga que luchar por convertirse en ser humano -solapado como lo masculino- no podrá ser una creadora, una transformadora, una hacedora de la historia y de la vida política. Por ende, las mujeres requieren repensar lo que fue la contundente y reiterada afirmación de la filósofa francesa: *no se nace mujer, se llega a serlo*.

trascendencia que las instituía de valor. La trascendencia se encarna en la prestigiosa tarea que es la guerra, dando así Beauvoir razón al vencedor y convalidar sus valores. En oposición consideraban importante asumir la excelencia de los valores propios de las mujeres. ¿Cómo? Desarticulando la ecuación trascendencia-valores; los guerreros como una impostación patriarcal (López Pardina, 2014).

Al mismo tiempo que realizó sus aportaciones teóricas, Simone de Beauvoir fue una activista por la despenalización del aborto en Francia, siendo una de las signantes del “Manifiesto de las 343” publicado en 1971 en el que 343 mujeres afirmaban haber interrumpido su embarazo exponiéndose a ser procesadas penalmente. En diversas entrevistas que dará a lo largo de su vida, reitera que no existen esencias masculinas ni femeninas, sino individuos distintos entre sí y usos culturales que los diferencian a partir del sexo.

- La mística de la Feminidad

El nuevo feminismo comienza principalmente a finales de los años 60 del siglo XX en los Estados Unidos y se inscribe dentro de los movimientos sociales surgidos durante esa década en los países más desarrollados. La igualdad política y jurídica reclamada por las mujeres desde el s. XIX no fue suficiente para modificar en forma sustancial el rol de la mujer. Los ejes temáticos que se abren ahora son la reformulación del patriarcado como el origen de la opresión, el rol de las mujeres en la familia que incluía la división sexual del trabajo, el ejercicio de la sexualidad, y la reformulación de la separación entre lo público y lo privado. En este periodo se visualiza que las causas de la opresión son más profundas y complejas, a partir del cual el nuevo feminismo ofrece rendimientos teóricos y prácticos, fomentando la innovación y la acción colectiva (Perona, 2010).

Para Mary Nash (2012) este feminismo emergió de forma paralela a las luchas por los derechos civiles, los derechos de los afroamericanos, los movimientos pacifistas, los movimientos estudiantiles, la nueva izquierda y los movimientos de descolonización. Asimismo, tiene raíces ilustradas y liberales. Algunos autores lo denominan Feminismo liberal contemporáneo (Trimiño, 2012: 299).

El texto más relevante del periodo, después de un cierto letargo intelectual es *La mística de la feminidad* (1963), de Betty Friedan quien fue una importante activista y cofundadora en 1966 de un grupo que alcanzará relevancia para las estadounidenses: *National Organization of Women* (Organización Nacional de Mujeres) la cual adquirió gran fuerza en la Unión Americana. Friedan también escribió *La segunda fase* (1981), que constituye una revisión *La mística...* Aunque la autora no es filósofa, se introdujo por primera vez en campos de investigación que serán abordados por la filosofía feminista posterior.

En el contexto de posguerra, las mujeres habían ingresado masivamente al mercado laboral, comenzando a existir un auge de campañas publicitarias dirigidas a ellas reforzando un rol muy femenino. Es el tiempo en que retornan hombres de la guerra, un momento propicio para encontrar amas de casa felices y un hogar idealizado²⁶¹. En el ensayo de Ángeles Perona (2010) titulado “El feminismo liberal estadounidense de posguerra: Bety Friedan y la refutación del feminismo liberal”, se sintetizan los problemas que Friedan aborda: la identidad femenina que surge de la preponderancia de un estereotipo de mujer que no satisfacen a las mismas mujeres. Se trata de un modelo mítico que se presenta como inevitable y que provoca que las mujeres sean víctimas de un constante sometimiento y dominio. Además, ellas se enfrentan a otra cuestión: si bien ya pueden acceder a un trabajo remunerado fuera del hogar, comienzan a padecer una doble jornada laboral bajo el deber de realizar los trabajos domésticos cotidianos.

Desde la perspectiva de La mística de la feminidad, las mujeres son víctimas de la denominada heterodesignación²⁶², aceptada por algunas mujeres sin mucha capacidad crítica, sobre todo por parte de quienes no estudiaban o trabajaban. Sin embargo, el papel que se les había otorgado -como ser excelentes amas de casa, madres y esposas- no colmaba sus energías ni les permitían desarrollar todo su potencial. Este hecho fue conocido como “el problema que no tiene nombre”. Las mujeres padecían la situación, la cual era reforzada por otras mujeres, pero no sabían cómo denominarla. Con base en un estudio estadístico, Friedan escudriña las teorías que directa o indirectamente jugaron un papel importante en la consolidación de esta mística, como la teoría psicoanalítica de Freud, poniendo de relieve lo que genera esta exigencia para las mujeres: depresión, alcoholismo, desmedido deseo sexual, neurosis, o incluso el suicidio (Perona, 2010: 17-34)²⁶³.

²⁶¹ Mary Nash describe que en el periodo de posguerra se presentó la sistemática reelaboración del ideario tradicional de feminidad que caracterizó el discurso de género en el mundo, marcando un patrón cultural de fuerte arraigo internacional. En el momento de la recuperación económica, se presentó la vuelta de los soldados a sus hogares con la nostalgia de los arquetipos femeninos tradicionales de la mujer: casada, amorosa y pendiente de los varones (2012: 167).

²⁶² “Heterodesignación” es un concepto utilizado por la filósofa Amelia Valcárcel. Se trata de una designación de la identidad de las mujeres que ellas no se dan así mismas, sino que es elaborado e impuesto por otros (Valcárcel, 1991).

²⁶³ Para su argumentación, la pensadora estadounidense utiliza y recoge conceptos del feminismo ilustrado. Entre sus reflexiones se encuentran los siguientes, reivindica la razón como una característica de diferenciación frente a los animales y la capacidad de todo ser humano que ayuda a construir prácticas y teorías en mutua conexión; arguye que la igualdad de las mujeres es necesaria, incluso para liberar a los varones. Insiste que el “ser” de la mujer no puede definirse a partir de sus rasgos biológicos, sino que la cultura constituye un factor decisivo en la formación de su yo; retoma, también, la lucha contra los prejuicios y los dogmas que actúan como legitimadores de la subordinación de las mujeres. Así, intenta dismantelar el discurso que provoca la

En síntesis, el pensamiento de Friedan deja como legado un conjunto de tesis y propuestas que se desarrollarán más adelante por otras corrientes feministas y que todavía hoy son tema de un amplio debate: las acciones afirmativas y las elaboraciones de diferentes tipos de concreción de la igualdad²⁶⁴.

A partir de este esbozo histórico se aprecia que el registro sobre los diversos movimientos de las mujeres es amplia y se extiende a casi todos los rincones del planeta. Después de la lucha por el sufragio se realizan cuatro grandes encuentros internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y se elaboran dos tratados internacionales fundamentales para el avance de sus derechos políticos -como se detallará más adelante (Medina, 2003).

Dichos instrumentos proveerán de una herramienta teórica y política fundamental para el avance de la representación política de las mujeres: las acciones afirmativas. Las mujeres se

mística de la feminidad, la cual se desarrolla mediante la “pasividad sexual en el sometimiento del varón y el consagrarse amorosamente a la crianza de los hijos” (Friedan, 1974: 70).

Betty Friedan también sostiene que este modelo se basa en el reforzamiento de un sistema capitalista y en la propia corresponsabilidad de las mujeres, quienes fueron adoptando el rol así impuesto. Las ideas plasmadas en su primer libro no están libres de cuestionamientos²⁶³. La autora norteamericana -formada en psicología social- constituye un ejemplo reconocido de feminismo liberal, el cual pone el énfasis en la idea de que la subordinación de las mujeres hunde sus raíces en una serie de restricciones legales y consuetudinarias que impiden la entrada o el éxito de las mujeres en el espacio público. Por ello defiende opciones orientadas a reformas jurídicas como son las medidas de discriminación positiva -después llamadas acciones afirmativas- generadas para contrarrestar el racismo institucional y la discriminación social mediante políticas públicas y reformas legales²⁶³.

Años después Friedan reelabora sus ideas y revisa sus primeros planteamientos en la obra *La segunda fase*. Ahí demanda una revolución de la vida doméstica donde el hombre sea partícipe para de esta forma lograr la igualdad en el ámbito privado. Además, insiste en la promoción y defensa de leyes que permitan el ejercicio de los derechos de la mujer: la igualdad de oportunidades en el ámbito público, especialmente el laboral; la intervención del estado a través de acciones específicas, así como esfuerzos concurrentes de hombres, mujeres, instituciones y asociaciones para armonizar la esfera pública y privada²⁶³.

²⁶⁴ Cabe resaltar que el paso de su primera a su segunda obra, es definido por ella misma como el análisis de la mística de la feminidad a la mística del feminismo. La primera obra fue de índole más programática, mientras que la segunda corresponde más al debate teórico. La crítica señala que su error fue haber dado una definición cerrada del feminismo y la mujer feminista, las cuales no eran susceptibles de cambio, provocando la interpretación que el feminismo fuera responsable de la crisis dentro de la familia y generando al mismo tiempo posiciones polarizadas en términos de todo o nada.

Por otra parte, en su segunda obra Friedan habla de un método de pensamiento y de relación social que debería ser adoptado por las feministas, denominado “método *beta*” frente al “método *alfa*”, culturalmente definido como masculino, sin ser esencialista; es agresivo, directo y racional, preponderante en occidente. En contraste, el *beta* lo ejercen tanto varones como mujeres y tiene rasgos asociados con lo femenino, como es la flexibilidad, el diálogo y la construcción de acuerdos. Para ella, el feminismo había adoptado el *alfa*, por lo que era necesario dar paso al *beta*; en su obra, suele apelar a la utilidad, más que a la verdad.

Por ejemplo, en el tema del aborto, de cuya defensa es militante, considera que se debía usar, y bastaba con ello para lograr cambios, un discurso del *derecho a elegir tener hijos* para lograr el bienestar de la familia; esto es considerado un tanto optimista debido a que es un tema de álgido debate. Lo que le sucede a la obra de Friedan es que al concentrarse en el activismo, el sustento intelectual se volvía débil y contenía errores de coherencia y verdad. Pero en consecuencia, al ser débiles algunos planteamientos teóricos, también los fueron los alcances prácticos (Perona, 2010: 31 – 33).

saben excluidas de la democracia representativa y necesitan atajos. Saben, también, que la democracia significa una potencialidad, la posibilidad de inclusión, una promesa de universalidad. Aunque antes, como señala la historiadora Michelle Perrot (2009), deben demostrar que son individuos responsables y que para resolver el problema de la exclusión “fue necesaria la modernización de las mentes, la evolución de las costumbres, la reivindicación de las mujeres, en concreto, el sufragismo inglés, francés, universal, europeo, occidental, y las conmociones como las guerras” (p.195).

Así, a final del siglo XX las mujeres saben bien que la democracia es una potencialidad, una promesa de representación.

3.5 Rebeldes mexicanas, el movimiento de las mujeres

Después del esbozo histórico sobre el movimiento de mujeres por sus derechos políticos, se expone ahora una sucinta descripción del movimiento de mujeres en México. Dividimos el apartado a partir de los cortes que el feminismo ha denominado “olas” y las fechas relevantes de la historia política contemporánea de México: El movimiento por el sufragio, Segunda Ola Feminista, y El Feminismo civil.

Como se mencionaba, al igual que sus antecesoras en diferentes regiones del mundo, las mujeres en México fueron excluidas del sistema democrático. En términos generales el estatus legal y civil de las mexicanas fue similar antes y después de la Independencia de México frente a la Colonia española en 1810, ya que no gozaron de ciudadanía ni tuvieron libertad para elegir estado civil, profesión u oficio ni de ingresar a las universidades o colegios de educación superior salvo contadas excepciones; fueron víctimas de violencia conyugal, no tuvieron capacidad de ahorro, capital o propiedades.

Así, el destino de la población femenina solía ser el matrimonio, el convento, la servidumbre o la esclavitud (Molina-Enríquez, 2009:91-95).

- El Sufragio en México

La historiadora Enriqueta Tuñón, en su investigación titulada *Por fin... ya podemos elegir y ser electas* (2002) y el documental *Las Sufragistas* de Ana Cruz²⁶⁵ ponen al descubierto el esfuerzo de las mexicanas por la obtención del sufragio que comenzó en 1916 y culminó en 1951, año en que se publicó el decreto respectivo.

Hermila Galindo, secretaria particular del presidente de la República Venustiano Carranza (de 1917 a 1921) solicitó a los constituyentes derechos políticos para las mujeres. El documento exponía:

“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres; la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado...La nación y el mundo, están pendientes de vuestras labores” (Tuñón, et.al, p.35).

Como se lee, los argumentos no eran tan diferentes al planteado tiempo atrás por Olympe de Gouges o Stuart Mill, sin embargo, dos siglos después, la Constitución de 1917 de México²⁶⁶ negó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. Tuñón describe que los razonamientos fueron que las mujeres no presentan interés en el asunto de ir a votar pues “no había un movimiento en este sentido”, no están preparadas y sus intereses estaban en el hogar y la familia. Dichas ideas fueron recurrentes por casi 35 años bajo la reiterada exposición de vulnerar la unidad familiar. En ese momento, apenas en una decena de países las mujeres podían votar²⁶⁷. En la Constitución quedó la siguiente redacción:

Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: I.- Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son; II.- Tener un modo honesto de vivir.

²⁶⁵ Documental dirigido y producido por Ana Cruz, México, duración 77 minutos, 2012

²⁶⁶ Venustiano Carranza proclamó la Constitución el 5 de febrero de 1917, con el intento de poner fin, simbólicamente, al violento e inestable periodo de la Revolución Mexicana que comenzó en 1910. A mediados de 1917 el país sufría las consecuencias de la prolongación de una guerra civil: destrucción del campo, las ciudades, vías férreas, etc. El nuevo texto jurídico establecía claros derechos para los trabajadores y campesinos. Sobre este periodo ver: Ulloa, Bertha, *La lucha armada*, en el Colegio de México, *Historia General de México*, 2004, p. 757-817.

²⁶⁷ Los países donde las mujeres ya tenían derecho a votar eran:

Al respecto, uno de los constituyentes señaló:

“El dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos, está el nombre genérico (...) yo deseo que se aclare en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro que se organicen para votar y ser votadas”²⁶⁸. Bajo esta redacción genérica, Hermila Galindo se postuló como candidata a diputada y, obteniendo la mayoría de votos, el Colegio Electoral no la reconoció. Ella sabía que esto sucedería, pero se trataba de retar a la autoridad y demostrar lo injusto de la norma. (Tuñón, 2006: 37).

En este mismo periodo, en 1916, se organizó el “Primer Congreso Feminista” en el estado de Yucatán con amplias perspectivas dado que en 1914 se había promulgado la Ley de Divorcio –en países como Chile se obtuvo hasta el 2004²⁶⁹. Aunque los resolutivos no demandaban el sufragio, sí incluían la idea de romper el yugo de las tradiciones, otorgar mayor educación y abrir las puertas de todos los campos de acción: “la mujer del porvenir podrá desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste para ser elemento dirigente de una sociedad”²⁷⁰. Por sus planteamientos, el Congreso fue un importante antecedente del movimiento feminista en México²⁷¹.

En las décadas de los años veinte y treinta surgen organizaciones de mujeres con objetivos diferentes que, sin embargo, comparten la lucha por alcanzar el reconocimiento de sus derechos políticos. Entre 1922 y 1922, el estado de Yucatán -bajo la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto- se otorgó el derecho a votar y ser votada en el ámbito municipal y estatal. En las entidades federativas de San Luis Potosí y Chiapas se dio el derecho en 1924 y 1925 respectivamente.

De acuerdo al recuento que realiza Enriqueta Tuñón (2002) los argumentos para seguir negando el derecho eran que la mujer era ignorante, que su actuación era peligrosa para el país o que perderían el “decoro” al enfrentarse al medio político. En Latinoamérica y en México no se emprendieron acciones radicales como los experimentados por las inglesas o las estadounidenses, pero sí se retomaron diversos de sus argumentos. En este periodo también

²⁶⁸ Citado por Enriqueta Tuñón del Diario de Debates del Congreso Constituyente

²⁶⁹ Disponible en: www.latinamericanstudies.org/chile/divorcio/htm. Consultado en 17 de octubre, 2014.

²⁷⁰ Cf. *Participación política de la mujer en México. Siglo XX*. Instituto de Capacitación Política, México, Serie Antologías, 1984, p.11 (No aparece autor)

²⁷¹ Cfr. Cano, Gisela, et. al.

nacen cuatro grupos en favor de los derechos que las mujeres, no necesariamente políticos: la Liga Nacional Femenina, el Club Internacional de Mujeres, el Ateneo Nacional de Mujeres y la Unión Nacional de Mujeres (p.39).

Más tarde, en 1935 se funda el Frente Único Pro Derechos de la Mujer que da vida al Consejo Nacional Femenino por el Sufragio. Llegaron a tener 50 mil afiliadas y su demanda principal fue alcanzar el voto. Las estrategias empleadas fueron diversas: organizaron mítines, manifestaciones y conferencias, también amenazaron con quemar el Palacio Nacional y realizaron una huelga de hambre frente a la casa de Lázaro Cárdenas del Río –Presidente de México de 1934 a 1940. En respuesta, Cárdenas prometió enviar al Congreso la iniciativa de reforma. En su propuesta expuso que no existía peligro de que las fuerzas conservadoras ejercieran una influencia peligrosa para las mujeres, como se temía en la época previa a la Segundo Guerra Mundial (Tuñón, et.al. 45).

La historiadora Enriqueta Tuñón describe que el texto presidencial agregaba que eran ciudadanos tanto hombres como mujeres. La iniciativa fue aprobada por los diputados y la enviaron a los senadores, quienes transitaron de una idea favorable a una negativa al conocer que la mayoría de mujeres votó por la derecha en España en 1933. Al mismo tiempo, el presidente Cárdenas recibía felicitaciones de grupos internacionales como la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) – que dependía de la Unión Panamericana– y de la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, entre otras. Así, las mujeres consideraban que serían ciudadanas y mostraron su disposición con el Estado invitándolas a sumarse a las organizaciones del partido oficial y del gobierno. Sin embargo no se publicó la reforma por temor de que el partido oficial perdiera las siguientes elecciones (p.46-48).

“Amalia Solórzano de Cárdenas opina que seguramente el general -como ella le llamaba- tuvo varios motivos para detener el trámite. Era una época en la que sucedieron muchísimas cosas en poco tiempo: la expropiación petrolera, se acercaba la Segunda Guerra Mundial, la creación del Partido Acción Nacional (PAN), entre otras; todas, en conjunto, influyeron para aplazar la decisión de otorgar el derecho al voto a las mujeres” (Tuñón, 2002: 49).

Algunas de las líderes del movimiento del Frente se fueron integrando al organismo femenino del partido oficial –llamado Partido Nacional Revolucionario (1928-1938) inicialmente; Partido de la Revolución Mexicana (PRM, 1938) después y finalmente el ahora Partido

Revolucionario Institucional (PRI), 1948)-, debilitando la lucha por el sufragio. “Su error había sido no mantener una lucha autónoma; cuando se incorporaron al PRM, el Estado privilegió sus intereses por sobre las demandas específicas de las mujeres, demostrando con esto que sólo de manera independiente, las mujeres debían llevar a cabo la organización y movilización por el voto” (Tuñón, et. Al p.51). En los siguientes años, algunas mujeres publicaron artículos exigiendo este derecho. Destaca el trabajo de Esther Chapa (1904-1970) -médica, escritora, sindicalista y feminista- quien por 22 años consecutivos hizo la solicitud al Congreso al inicio del periodo de sesiones.

En 1940 llegó a la presidencia Manuel Ávila Camacho por el partido oficial, PRI. En su campaña sólo incorporó una propuesta sobre la tenencia de la tierra para las mujeres y consideró inconveniente otorgar el derecho al voto. En esa época los únicos grupos que mantuvieron cierta beligerancia en la lucha por el sufragio fueron el Bloque de Mujeres Revolucionarias encabezado por Estela Jiménez, quien continuó con el programa del Frente y el Comité Coordinador por la defensa de patria, dirigida por María Rocha.

También apareció el Comité Interamericano Pro Democracia, presidido por Amalia de Castillo de Ledón (1898-1986), promotora cultural y destacada política mexicana. Ella fue representante de México en espacios internacionales y una estrategia por alcanzar los derechos de la mujer en general, y el derecho al sufragio en particular. Tuvo intervenciones relevantes en la Comisión Interamericana de Mujeres²⁷² y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Comisión del Status de la Mujer (CSM)²⁷³ en las que denunciaba la situación de las mexicanas y la importancia de obtener el voto. Su activismo e influencia en un contexto adverso es valorado hoy desde una perspectiva histórica feminista²⁷⁴.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la igualdad por los derechos políticos desapareció por algunos años del debate nacional, lo que constituyó un revés para el movimiento entró en un proceso de debilitamiento (Cano, 2009: 289).

²⁷² Este organismo se creó en 1923, después de la Conferencia Internacional Americana de Santiago de Chile

²⁷³ La Comisión del Status de la Mujer (CSM) era una entidad asesora del Consejo Económico y Social, pero dependiente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En su intervención en 1947 Amalia Castillo expuso las desigualdades que existían en México En, Tuñón, et.al.p.57

²⁷⁴ Cano, Gabriela, *Amalia Castillo de Ledón: mujer de letras, mujer de poder*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, México, 2011.

Sobre este periodo -los cuarenta del siglo pasado- Enrique Tuñón (2006) considera que las mujeres Latinoamericanas recurrieron más a las conferencias internacionales que a las movilizaciones en sus respectivos países; utilizaron los recursos a su alcance pero se daban cuenta que la presión internacional era un mejor instrumento, por lo que aprovecharon el llamado de la ONU para incluir en los procesos de paz y la democracia a hombres y mujeres (p.61).

Gabriela Cano (1991) narra que fue electo un nuevo presidente Miguel Alemán -1945- quien tampoco tuvo un compromiso con las mujeres para otorgarles el derecho al voto. Empero, en febrero de 1947, se reformó el artículo 115 constitucional para otorgar el voto a nivel municipal bajo la lógica “que la demanda de las mujeres por la participación electoral fue entendida como una extensión del mundo público del papel doméstico de la mujer en la esfera privada” (p.290).

El voto municipal abrió la posibilidad de ampliar el derecho al ámbito federal durante la campaña de Adolfo Ruiz Cortines, quien ganó las elecciones para ser presidente de 1952-1958. En cumplimiento a dicho compromiso, el 17 octubre de 1953 se publica en el Diario Oficial el decreto que reconoce a las mujeres como ciudadanas, permitiendo el goce y ejercicio de sus derechos políticos.

Cuando las sufragistas obtienen este derecho, México es una sociedad con apenas 25 millones de personas, de las cuales 13 eran mujeres. La lucha se liga al partido oficial y no logra ser un movimiento autónomo ni masivo. En las primeras décadas, el esfuerzo de las sufragistas estuvo limitado por las circunstancias históricas del momento, subyugado a debates sobre la Expropiación Petrolera o la Segunda Guerra Mundial y después por la falta de sensibilidad ante una demanda que se extendía por el mundo: el sufragio femenino.

Las protagonistas de ese casi medio siglo de lucha fueron muchas, entre otras, Elvia Carrillo Puerto, feminista, sufragista y primer legisladora por el estado de Yucatán en 1925; Esther Chapa, Soledad Orozco y Refugio García, primeras candidatas a diputadas por León y Uruapan respectivamente, así como la cantautora y creadora del Instituto de Folklor de Michoacán, Concha Michel -entre otras activistas, pioneras feministas, feministas en campaña, rebeldes mexicanas.

3.5.1 El feminismo y la autonomía del cuerpo.

Posteriormente, en 1975 y en lo que más tarde se denominará como la segunda ola del feminismo, se realizó en México la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer de la ONU para analizar las circunstancias que enfrentaban las mujeres en distintas partes del mundo. La organización y contenidos del evento generaron un amplio debate a favor y en contra sobre los temas de la agenda, los discursos y las personas convocantes²⁷⁵. Al concluir, la mayoría de los países que suscribieron la declaración de dicha conferencias, promulgaron leyes o reformas para garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como el establecimiento de mecanismos interdisciplinarios y multisectoriales dentro del gobierno.²⁷⁶

Al mismo tiempo, diversas organizaciones sociales que cuestionaron dicho foro institucional organizaron un espacio alternativo: la Tribuna de Organizaciones No Gubernamentales que albergó a casi seis mil personas, generando un debate diferente en torno a la situación de las mujeres. Aunque la Tribuna no presentó un resolutive, se sabe que fueron considerados temas como el aborto y la prostitución, lo cual expresaba la pluralidad de dicho espacio, donde además se sumaron las controversias de las mujeres de Primer Mundo y las del Tercer Mundo -como se autodenominaban por esos años. Para las primeras, las cuestiones de la sexualidad eran importantes, mientras que para las segundas, el reordenamiento de la economía mundial y el reparto justo de la riqueza eran nodales. El manejo mediático de dicho espacio fue negativo y despectivo²⁷⁷.

Sin embargo, desde la óptica de la antropóloga feminista Martha Lamas (2006) y la socióloga Florinda Riquer (2005), la relevancia del foro alternativo radicó en constituir el nacimiento

²⁷⁵ El contexto en el mundo es la guerra fría, la polaridad entre dos perspectivas políticas y las discusiones en torno a cómo llevar a los países del Tercer Mundo al desarrollo.

²⁷⁶ Cf. Lamas, Martha, *Feminismo. Transmisiones y retransmisiones*, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 57.

²⁷⁷ Para leer más sobre dicho foro no institucional ver el ensayo de Pamela Fuentes, *Entre reivindicaciones sexuales y reclamos de justicia económica: divisiones políticas e ideológicas durante la Conferencia Internacional en el Año Internacional de la Mujer. México, 1975*. Sobre el trato dado por la prensa se describe una nota: “A la aberrante pachanga del Año Internacional de la Gorda, vinieron damas tan distinguidas como la lideresa de lesbianas londinenses o la prostituta respetuosa que acaudilla al gremio de suripantes de Estados Unidos. Y no había por qué haber despilfarrado en tan nefandas importaciones. Aquí, más cerca, podía haber convidado a liberadas de catego como las Poquianchis”. p 186.

de la comunidad feminista mexicana. Fue un espacio que abrió brecha y cambió la presencia de las mujeres en el ámbito público.

“El feminismo que resurge hacia finales de los sesenta del siglo XX en México se configura, por una parte, a partir de pequeños grupos de mujeres, varias de las cuales venían de regreso de la militancia de ámbitos de izquierda, movimientos, partidos, sindicatos”. (Lamas, 2002:20) Por otra parte, compartían el desconocimiento del partido hegemónico -PRI- y del gobierno como interlocutores, así como una dura crítica a la integración al desarrollo que promovieron organismos “extranacionales” como el Banco Mundial. En esa perspectiva, la iniciativa de la contra-conferencia colocó al feminismo en un lugar distinto al de la sociedad civil, por los menos en sus orígenes y en sus primeros años²⁷⁸.

Sin embargo, desde la óptima de Martha Lamas (2002), quien describe 35 años de la lucha feminista, considera que, en general, el feminismo mexicano todo lo vincula al ámbito político en cuanto a la idea en que donde existe una relación de poder hay una posibilidad política que puede potenciarse o interrumpirse; empero, algunas activistas rechazaban acuerdos o negociaciones políticas resistiéndose a integrarse en la dinámica política nacional. Ello se explica porque las feministas han construido su práctica política a partir de su identidad como mujeres, un discurso cercano al esencialismo, lo cual dificulta una articulación con la política nacional (p.15).

En la llamada segunda ola feminista, las primeras activistas de los setenta -Coalición de Mujeres Feministas en 1976- eran por lo general mujeres de clase media, con estudios universitarios e identificadas con la izquierda quienes demandaron educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción del embarazo. El incipiente movimiento se organiza en torno a la autoconciencia y la crítica a la doble moral sexual, el rol del ama de casa y la crianza infantil, siendo el lema “lo personal es político” la expresión de dicho malestar.

Desde la perspectiva de Wagner (2012) ello significa no que la vida personal puede ser transformada por la acción política, sino que la política debe ser personalizada; es decir, la visión política de todos tiene que leerse como la expresión de sus intereses específicos,

²⁷⁸ Cf. Riquer, Fernández, Florinda, *Del movimiento feminista a la institución: ¿una historia que aún no puede contarse*, Universidad Veracruzana, México, 2005, p.20

subjetivos: los intereses de raza, clase, género y sexualidad se tiñen inevitablemente de la perspectiva de todos (p.33).

La clase social de esta generación es importante ya que tienen resueltos aspectos económicos y domésticos, viviendo el feminismo como un instrumento de análisis y no como una necesidad organizativa para enfrentar colectivamente la problemática.

El movimiento se dedica a denunciar las acciones del gobierno y de los partidos. La lógica organizativa de los grupos feministas, en cuanto a la representación, es distinto al asumido por los demás actores políticos, por lo que no logran traducir sus propuestas y hacerlas comprensibles para otros actores. Se aíslan de los espacios institucionales y su discurso de tiñe del “todo o nada”, con dificultades para reconocer los liderazgos y las diferencias, lo que provoca incapacidad de respuesta ante coyunturas. De manera excepcional, logran presencia política en el espacio público (Lamas, 2002:15-18).

El costo de canalizar los esfuerzos sólo para conseguir espacio y reconocimiento dentro de la izquierda es alto. Muchas activistas, sobre todo las que estaban en el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), lidiaban con la cerrazón machista de sus compañeros. También hay desencuentros e incomprensión, como cuando el PCM acusa a las feministas de ser agente del imperialismo yanqui para promover el aborto (Lamas, et.al.p.15).

Es importante describir que a finales de la década setenta en México, específicamente a partir de una reforma electoral en 1977, se dio una coyuntura en que diversos actores y movimientos sociales -que no formaban parte de los pactos corporativos- fueron más visibles para el Estado. Desde la conformación del Partido Revolucionario Institucional, el gobierno tuvo la habilidad de cooptar y mimetizar bajo sus intereses las demandas sociales, campesinas y laborales, debilitando la organización social y generando procesos de transición sólo en el ámbito electoral²⁷⁹.

²⁷⁹ Cf, Bizberg, Ilán y Zapata, Francisco, *Los grandes problemas de México. VI Movimientos Sociales, México, Colegio de México, 2010*, p.15

3.5.3 La ruptura de 1988 y el Feminismo civil

Se considera que una primera etapa del resurgimiento feminista se cierra en los ochenta para dar paso a un balance interno y al surgimiento de un movimiento más tolerante que tendrá interés en la igualdad de derechos en el ámbito jurídico y que trabajaron como grupos de presión con una militancia más comprometida o bajo la integración de Organizaciones no gubernamentales.

Algunos de los grupos trabajaron con las mujeres campesinas en temas de combate a la pobreza y problemas sociales y económicos, articulando un discurso en torno a la identidad de clase conociéndose como el “feminismo popular” y propiciando el aumento de las bases del movimiento de mujeres. Se consolidan redes de apoyo temáticas que permitieron el diálogo y sensibilización con otros actores como instituciones académicas, sectores gremiales y algunos funcionarios. Por ejemplo, en 1982 surge el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) en el Colegio de México y un año después el Programa de Estudios de Género (PUEG) en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El traslado y los avatares del movimiento de mujeres a un proceso de institucionalización y de demandas sobre la representación política, ocurrirá en el marco el proceso de transición a la democracia y de lo que se considera una ruptura en el sistema político mexicano, en el año de de 1988, aunque previamente se delibera que el terremoto ocurrido en la ciudad de México y su aún incierto número de víctimas- provocó la necesidad de una nueva relación de las mujeres con el Estado para poder atender demandas específicas. Un ejemplo claro fue el surgimiento del “Sindicato 19 de Septiembre”, conformado por costureras que se vieron afectadas por el desastre natural²⁸⁰. Para algunos autores, este hecho propició que por primera vez emergiera la sociedad civil organizada en México, sentando los pasos hacia una transformación nacional que cuestionaba el monopolio y la forma del ejercicio del poder del PRI²⁸¹.

A partir de 1988 se discurre que fracasó el intento por parte del régimen de renovar su relación corporativa con las organizaciones sociales. En consecuencia, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari – Presidente de México de 1988 a 1994- comenzaron a darse

²⁸⁰ Ibidem, p. 23.

²⁸¹ Monsiváis, Carlos, *No sin nosotros, los días del terremoto 1985-2005*, Era, México, 2005

movimientos sociales que escapaban a la cooptación del gobierno y se alejaban de la idea que siempre dominó a los movimientos sociales: ser un interlocutor privilegiado del poder. Algunos de los movimientos más significativos fueron El Barzón, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la Unión Nacional de Trabajadores. (Bizberg, 2012: 33).

En el marco previo de la movilización preelectoral se realizó el IV Encuentro Feminista Latinoamericano (1987) donde se confrontan diversos paradigmas políticos del feminismo al tiempo de generarse un mayor interés por participar en la política formal. Antes de los esfuerzos por la democratización del país, se discurre que el movimiento no tenía una propuesta por el proyecto de transición democrática ni se había ponderado la apertura de espacios en la política formal, estableciendo (desde una perspectiva marxista) que la lucha por la democracia resultaba una cuestión reformista, lo que se traducía en que las feministas no demandaron una agenda por los derechos de las mujeres y tampoco apoyaron a los candidatos²⁸².

En 1988 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano -quien rompe con las filias del PRI- se presenta como candidato presidencial de una coalición denominada Frente Democrático Nacional, conformada por diversos partidos políticos y organizaciones de izquierda²⁸³. El proceso electoral de ese año es ahora reconocido como el primero en donde se ha dado un proceso competitivo frente al poderoso PRI. En el proceso volvió a ganar el candidato del partido oficial Carlos Salinas de Gortari²⁸⁴.

En el movimiento liderado por Cárdenas Solórzano también convergen otras organizaciones sociales como los sindicatos u organizaciones campesinas, provocando que muchas feministas sienten la urgencia de participar para expresar su inconformidad social y

²⁸² Lamas, Martha, *Feminismo, Transmisiones y retransmisiones*, p.28

²⁸³ Aunque se detalla en el Anexo del Capítulo IV, es preciso describir los fuerzas que integran originan dicho instituto: el Partido Mexicano Socialista (PMS), quienes cedieron su registro legal. El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), El Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Popular Revolucionario (PPR), El Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Unión de la Izquierda Comunista (UIC); más adelante, se unieron una parte de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores (PST); así como la llamada “familia revolucionaria” representada por la izquierda dentro del PRI y organizaciones civiles pugnaron por elecciones democráticas (en apartado de partidos).

²⁸⁴ Ver, Ortega, Reynaldo Yunuen, *De la hegemonía al pluralismo: elecciones presidenciales y comportamiento electoral, 1976-2006*, en El Colegio de México, *Historia General de México. Versión 2000*, El Colegio de México, México, 2004, p. 405-449.

comienzan a reelaborar su relación con la política formal-institucional además de tejer alianzas y trabajar por influir en coyunturas electorales para generar una agenda común. Una relación que no fue fácil ni sencilla.

Cuando la izquierda reevalúa el papel de la democracia representativa surgen nuevas disposiciones en torno a la relación con el Estado y se suscita un cambio de actitud: un sector del movimiento (feminista) asume el pacto político como un mecanismo práctico responsable. Esto genera nuevos estilos organizativos - integración a comisiones gubernamentales de trabajo, formación de instancias de consultoría a partidos políticos, alianzas con funcionarias y políticas- y lentamente repunta una aspiración republicana (Lamas, 2006: 29).

Así, para 1991 se crea el “Grupo Plural”, conformado por feministas, diputadas, académicas y funcionarias para introducir una reforma a la ley de delitos sexuales coordinadas por Amalia García. En 1993 nace la organización “De la A a la Z” integrado por 7 mujeres de distintas fuerzas de centro izquierda, dos del PRD, dos del PRI y tres feministas independientes, quienes conmemoran el 40 aniversario del sufragio en México subrayando la necesidad de pactos entre las mujeres (Lamas, et.al). En el mismo año, a partir de una reforma electoral el Instituto Federal Electoral (IFE), se hace el primer llamado a los partidos políticos a integrar las cuotas electorales en sus estatutos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) es el primero en incluir la acción afirmativa en su normatividad con un mínimo de 30% de candidaturas para cada uno de los géneros (Espinosa, et.al.435). Al análisis de las acciones afirmativas se dedica el Capítulo IV.

Para 1994, el lema del VII Encuentro Nacional Feminista fue “Ganar espacios”. En éste se comienza la lucha por las acciones afirmativas, entre ellas, la cuota electoral, lo que llevará a impulsar acuerdos con las mujeres en las instituciones y los partidos. Se insiste en las demandas por la despenalización del aborto y la institucionalización de la perspectiva de género a través de la exigencia de organismos y programas que debe implementar el gobierno²⁸⁵. En este año también se instala la Asamblea de Organizaciones Populares²⁸⁶ y el Centro Mujeres, teniendo como sus primeros ejes de acción la consulta psicológica y médica y la incidencia en las políticas públicas. Estas organizaciones reciben apoyo de feministas

²⁸⁵ Alonso, Claudia, *El orden social de género a debate, posiciones en conflicto en tono a la formación de mecanismos institucionales de género*, “Caleidoscopio” Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades, México, julio-diciembre 2012.

²⁸⁶ Espinosa, Gisela, *Un fantasma recorre el siglo*, p.379.

como Graciela Hierra y Patricia Mercado²⁸⁷, quienes propusieron una de las primeras leyes contra la violencia hacia las mujeres²⁸⁸.

En el mismo año irrumpe un nuevo actor en la política nacional que reconfiguró la agenda pública y la imagen internacional generando nuevos debates entre los movimientos feministas: el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) bajo el liderazgo del *Subcomandante Marcos* -Rafael Sebastián Guillén Vicente. Algunas feministas participan activamente en los debates en torno a la mujer indígena y su papel en la vida pública²⁸⁹.

Asimismo, en el marco de las reuniones preparatorias de la IV Conferencia Mundial de la Mujer y la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo (1994) en el Cairo, se da un auge de las ONGs y las acciones de colaboración, se genera un clima favorable para el posicionamiento de la agenda feminista y su expansión más allá de sus fronteras nacionales, haciendo posible el nacimiento de un nuevo campo de acción política regional en torno a la discriminación por razón de sexo. Esto sitúa el discurso feminista como perspectiva de género que adquirirá resonancia en el discurso político en parte por su aceptación e inclusión internacional en organismos como el Banco Mundial y la ONU²⁹⁰. Por ejemplo, en 1996 se presenta el “Programa Nacional de la Mujer: Alianza para la Igualdad”, organismo para formular políticas y programas a favor de las mujeres y por primera vez un sector del movimiento feminista propone candidatas en sus instancias consultivas (Espinosa, 2011: 435).

La emergencia de mecanismos institucionales de género no ocurre en la nada, dado que son la expresión de un proceso de lenta legitimación de una nueva problemática en la sociedad y en el Estado que provocará la exigencia de las cuotas electorales en México y,

²⁸⁷ Graciela Hierra es una académica feminista que se involucró en el activismo y la organización por la defensa de los derechos de las mujeres. Sobre la semblanza de Patricia Mercado se profundiza en el apartado “Mujeres en Plural y el proyecto SUMA.

²⁸⁸ Íbidem, p. 388

²⁸⁹ El 1 de enero de 1994 se dio la noticia de la existencia de una insurrección indígena en el estado de Chiapas, justo el año en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio en Chiapas. El Ejército estaba encabezado por el líder Rafael Sebastián Guillén Vicente, conocido popularmente como Subcomandante Marcos. Como señala el politólogo Abelardo Hernández Millá “se trataba de una organización político-militar conformada mayoritariamente por indígenas mayas chiapanecos que se habían alzado en armas por democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos pobres”. El EZLN sacó a la luz varios libros donde deja claros sus planteamientos y posturas. Ver, Orígenes y antecedentes del EZLN, Espacios Públicos ISSN: 1665-8140, Universidad Autónoma del Estado de México, Vol. 10, núm. 19, agosto, 2007, pp. 264-283

²⁹⁰ Cf. Lamas, et.al. p.34

posteriormente, de la paridad política. La Plataforma de Acción de Beijing y las Convenciones previas, mencionadas con anterioridad, constituirán una base de apoyo para el feminismo mexicano. En los años noventa surgen otras organizaciones que consolidarán una estrategia por el avance de los derechos humanos de las mujeres, como la Coordinadora Nacional por un Milenio Feminista donde convergen diferentes organizaciones civiles, rurales y urbanas de varias entidades (Espinosa, et.al.389).

También aparece “DIVERSA, asociación política nacional”²⁹¹ cuyas integrantes buscarán la conformación de un partido político feminista. Ellas trabajan desde 1996 para lograr el registro legal como agrupación política nacional con base a los lineamientos que otorgaba el Instituto Federal Electoral para lo cual debían contar con un mínimo de siete mil personas afiliadas²⁹². En el mismo periodo nace la organización “La Convención de las Mujeres”. Las mujeres comienzan a integrarse a los partidos y a organizaciones como “Alianza Cívica”. Algunas defienden una postura separatista frente al gobierno; otras pretender influir en la política sin perder sus principios o autonomía.,(Lamas, 2006 :31-32).

A esta nueva etapa se le conoce como “feminismo civil”, constituido por cientos de organizaciones civiles, no gubernamentales (ONGs) -también denominadas organismos de la sociedad civil. Éstos son colectivos de mujeres que operan en todo el país y tratan de incidir en leyes, programas y presupuestos. Impulsan procesos de formación, capacitación y demandas por los derechos y reivindicaciones de género con mujeres de movimientos sociales y propios²⁹³. Estos movimientos se apropian de algunas iniciativas del feminismo

²⁹¹ El 1 de febrero de 1999, el periódico “La Jornada” narraba la aparición de la asociación: “Conformar una fuerza política de personas feministas (mujeres y hombres) es una oportunidad renovadora ante una derecha mojigata e irrespetuosa, que invierte sus energías en castigar nuestros actos sexuales y reproductivos mientras continúa su rapiña económica, destacó Marta Lamas, durante su participación en la inauguración de la Asamblea Nacional Constitutiva de Diversa, nueva agrupación política feminista creada por una de las corrientes del movimiento feminismo. Ante las y los delegados de esa agrupación y personalidades como Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, la integrante de esta organización subrayó que las mujeres “debemos asumirnos como sujetos políticos republicanos y democráticos, capaces de sostener el respeto a la diferencia como una reivindicación capaz de crear otro modo de convivencia”.

Al referirse a la actuación de los partidos políticos que actualmente representan a la sociedad ante el Congreso, dijo que éstos han dejado fuera de la atención política problemas derivados de la diferencia sexual y de género y que la hipocresía legislativa “prefiere que año con año mueran cerca de mil mujeres, a modernizar los códigos penales”. Denunció que en torno al tema de la sexualidad y la reproducción ningún partido quiere actuar. Manifestó que en Diversa se busca ponderar el tema de diferencia sexual y de género, fiel al pluralismo y los valores democráticos. Elena Tapia Fonllem, al hablar de los objetivos de Diversa expresó que estarán “alertas para no ser utilizadas como parte de la pirotecnia preelectoral y electoral” y que impulsarán el voto por quienes “incluyan en sus agendas la lucha a favor de los derechos reproductivos, incluida nuestra demanda de despenalizar el aborto”, disponible en: www.jornada.unam.mx/1999/02/01/diversa.

²⁹² Lamas, Martha, *Feminismo, transmisiones* ... p. 36.

²⁹³ Cf. Espinosa, Gisela, “Feminismo civil. Los claroscuros de la institucionalización” 363-402, en *Un*

popular como la educación popular -retomada de Paulo Freire- proponiéndose deconstruir los mecanismos de subordinación y discriminación permeados por sesgos de raza, clase, religión y preferencia sexual. Comienzan a recibir apoyos y financiamiento público, lo que conlleva una paulatina institucionalización.

El feminismo civil de los noventa busca incidir en las agendas públicas, las legislaciones y los acuerdos internacionales; no estuvo exento de un complejo proceso de articulación, álgidos debates y construcción discursiva. Las actoras de este momento participan de los eventos internacionales en el Cairo y Beijing (1995), aspecto cuestionado por el llamado “feminismo radical”, quienes se mantienen al margen de los apoyos gubernamentales o las conferencias internacionales²⁹⁴.

En este periodo, las organizaciones y los partidos políticos veían el movimiento y a las mujeres como grupos de apoyo y no como competidores políticos, pues no hacían proselitismo partidario para ellas. Otros actores también señalarían que la cercanía de algunas activistas con los partidos políticos debilitaban en trabajo de las ONGS (Espinosa, et.al 366 y 381).

“Un tema que causó tensión en el movimiento feminista fue la conquista de puestos en el gobierno y curules. Muchas reconocidas feministas pasaron a la vida pública de los partidos políticos, instituciones de gobierno y cámaras, entre ellas Patricia Mercado, Martha Lucía Micher, Consolación González, Patricia Jiménez, Circe González y Cecilia Loría no había consenso en todos los casos y algunas se sintieron solas” (Castañeda, 2011:391)

Un suceso interesante para los derechos políticos de la mujeres se da en 1997 con la convocatoria que hace DIVERSA a todos los partidos políticos para suscribir un compromiso por la equidad titulado “Avancemos un trecho”. En un acto solemne en el Instituto Federal Electoral (IFE) los seis partidos existentes en ese año (PAN, PRI, PRD, PPS, PT Y PVEM) signaron el acuerdo; el IFE, por su parte, convocó a los partidos a establecer la cuota de género. En ese año, la izquierda gana el gobierno del Distrito Federal

fantasma recorre el siglo, luchas feministas en México 1910-2010, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011

²⁹⁴ Op.cit, Bedregal, X., “*Feminismo autónomo radical, una propuesta civilizatoria*”, en Espinosa, G, *Movimientos sociales...* p. 437-477 y 355, y 372-373

(DF) incorporando a muchas feministas a cargos públicos, entre ellas a Rosario Robles, quien será nombrada jefa de gobierno en 1998²⁹⁵.

La llegada de Rosario Robles a la cabeza de dicho gobierno genera amplias expectativas. Robles es una mujer de izquierda y sindicalista universitaria quien realiza avances para a la agenda de las mujeres, destacando la reforma a la ley del aborto en el Distrito Federal que introduce dos causales para su despenalización: por grave daño a la salud de las mujeres y por malformaciones fetales. Su gobierno abrió brecha en uno de los temas que más dividen a la sociedad. Otro aporte es la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género²⁹⁶.

En el siguiente año (1998), se organiza e instala el primer Parlamento de Mujeres donde se reúnen de los diferentes partidos políticos, las feministas y organizaciones de la sociedad civil con fin de impulsar los intereses de las mujeres. Fue un espacio de reflexión plural que promovió la expansión de los institutos de las mujeres en las entidades federativas, la fiscalía especializada en delitos sexuales, programas de salud sexual y reproductiva, la denuncia de los feminicidios, los presupuestos etiquetados para la igualdad y la generalización del debate sobre la despenalización del aborto en el centro del país

“La incidencia fue posible gracias a la fuerza y versatilidad del feminismo civil, pero también a la amplia política de alianzas que se fue creando una masa crítica en asuntos de género en todo el país” (Espinosa, 2012:373). Un año antes, en 1997, en la primera legislatura conformada por una fracción de oposición parlamentaria dentro del régimen hegemónico, las mujeres de izquierda lograron crear a la Comisión de Equidad de Género en la Cámara de Diputados, presidida también por Amalia García.

En 1999 surge el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir como una institución ciudadana de formación para cuadros feministas donde participan funcionarias de los tres niveles de gobierno, regidoras, presidentas municipales, líderes indígenas y diputadas.²⁹⁷ Es un espacio

²⁹⁵ Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal en 1997. Fue le primer gobernante de izquierda bajo un nuevo régimen de organización política de la ciudad. Antes de ese año, la autoridad del Distrito Federal, era nombrada por el Presidente de la República.

²⁹⁶ Un texto muy interesante sobre la gestión de Rosario Robles, quien actualmente es Secretaria de Estado en el gobierno del PRI, es el texto de García, I, *Género y participación política*, Instituto Tecnológico de Monterrey, México, 2008.

²⁹⁷ Cf. Lamas, Martha, *Feminismo, transmisiones...* p.35-37

y un instrumento relevante para el proceso de formación política que se emprenderá una década posterior bajo el proyecto “Iniciativa SUMA. Transformación para la Democracia”.

Aunque el gobierno mexicano hizo pocos esfuerzos en la materia, en la siguiente década sí hubo acciones protagónicas por parte de las feministas mexicanas en sus diversas expresiones²⁹⁸. Uno de los aspectos relevantes del periodo en materia de gobierno es lograr la institucionalización de la perspectiva de género a través de la creación de Institutos o Secretarías de la Mujer -consideradas un resultado de la lucha feminista. Por ejemplo, en el Distrito Federal, las personas propuestas para presidir la institución son realizadas por organizaciones feministas²⁹⁹. Asimismo, en los Consejos Consultivos o Juntas de gobierno de los organismos, se integran académicas o feministas del ámbito local.

Específicamente en el año 2001 y de conformidad con los compromisos adquiridos por México en la Plataforma de Beijing, nació el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como un mecanismo nacional rector en políticas públicas en materia de igualdad de género. Posteriormente, en cada uno de los estados de la República se crearon instituciones similares para transversalizar las políticas públicas desde la perspectiva de género en el ámbito local. Uno de los ejes rectores del Inmujeres fue y continúa siendo el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD), que contempla entre sus objetivos primordiales, el combate a la violencia de género, del que se desprende un programa específico en la materia como el Programa Nacional por una Vida sin Violencia³⁰⁰.

- La década del 2000: encontrando un atajo.

En el año 2000, después de 78 años del PRI en el poder, el Partido Acción Nacional (PAN) de ideología de derecha, gana las elecciones con Vicente Fox Quesada a la cabeza. Un hecho que lamentaron diversos grupos feministas por su talante conservador. En la ceremonia de su toma de posesión anuncia que incluirá la perspectiva de género en su gobierno y besa un crucifijo. Fox nombró a tres mujeres en su gabinete, de las cuales sólo permanece una, Josefina Vázquez Mota, presentándose una inevitable apropiación del movimiento feminista

²⁹⁸ Entre las acciones gubernamentales se encuentran, la creación de la Oficina de la Mujer, dependiente del Consejo Nacional de Población, en 1980 el Programa Nacional de la Mujer al Desarrollo y cinco años después, la Comisión Nacional de la Mujer, en Riquer, F. et.al. p. 13.

²⁹⁹ Cfr. Reglamento interno del Instituto de las Mujeres del D.F.

³⁰⁰ Cfr. *El derecho humano de las mujeres a la participación política*, CEAG, México,

por parte de mujeres políticas conservadores y de la llamada primera dama, Martha Sahagún de Fox³⁰¹.

Por otra parte, después de las conferencias mundiales, el movimiento feminista se siguió articulando. El encuentro de Beijing favoreció andar conjuntamente a pesar de las diferencias ideológicas entre los grupos de izquierda, aunque existieron múltiples esfuerzos locales, se considera que las feministas del Distrito Federal lideraron la construcción, tanto del discurso como de la acción, logrando registrar y sistematizar experiencias, asumir e impulsar leyes y reformas legislativas, así como delinear plataformas al interior de los partidos e institutos de las mujeres; otras se consolidaron, por ejemplo, el Grupos de Información y Reproducción Elegida GIRE; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. En el ámbito político, el Consorcio para el Diálogo Interparlamentario y la Equidad, para construir una relación de corresponsabilidad entre los órganos legislativos, de gobierno, y ciudadanía³⁰².

La clara presencia del movimiento de mujeres en el ámbito político es el nacimiento el partido “México posible” con orientación feminista y presidido por Patricia Mercado, quien también será parte del proyecto SUMA, al que se unen ambientalistas, personas de preferencia sexual diferente a la heterosexual y defensores de los derechos humanos.

En el año 2003 y a iniciativa de Rosario Robles, Martha Sahagún y Elba Esther Gordillo (líder del magisterio sindical y detenida por corrupción en el 2013) así como integrantes del grupo de la A a la Z, se convoca a un gran encuentro por el 50 Aniversario del Voto Femenino a celebrarse en el Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz. Asisten mujeres de diversos ámbitos e intereses, siendo una relación “no de amor, sino de necesidad” (Lamas, et.al.p.41). Esta reunión tuvo gran resonancia mediática. Una revista de amplia difusión nacional -Proceso- tituló dicho encuentro como “El arguende”³⁰³, lo cual generó polémica dado que las reuniones de líderes hombres rara vez recibían este tipo de calificativos por parte de dicha publicación.

En 2004 Rosario Robles, después de terminar como jefa de gobierno del Distrito Federal se convierte en presidenta del PRD. En ese mismo año otra mujer de la izquierda histórica,

³⁰¹ Íbidem.

³⁰² Cf. Lamas, M. *Feminismo, transmisiones y retransmisiones*, p. 37 y Espinosa, G, *Un fantasma recorre el siglo*, et.al.p.389

³⁰³ Portada y artículo disponible en: www.proceso.com.mx/?page_id=190156

Amalia García es electa gobernadora por el Estado del Zacatecas, quien al poco tiempo de su toma de protesta convoca a una reunión denominada “Reforma del Estado con perspectiva de género”. Así, como establece la socióloga Marcela Espinosa (2011).

“En los últimos lustros el feminismo civil se desarrolla en su discurso y sus redes, diversifica sus temas, interlocutores y áreas de incidencia; crece en número y recursos materiales y simbólicos y se convierte en la vertiente feminista con más presencia pública. Justo cuando se destaca la importancia de la llamada sociedad civil y crece la izquierda parlamentaria, el feminismo civil se convierte en sujeto social indispensable: instituciones públicas, partidos, legisladores, gobernantes y organismos internacionales, reclaman a sus integrantes como interlocutoras, asesoras, posibles servidores públicos o candidatas a cargos públicos. Ganan terreno al tiempo que descubren sus alcances y límites de la política formal” (Espinosa: 2011).

Cabe precisar que el activismo de las mexicanas se inscribe en el marco de los avances y reuniones internacionales de lucha por el goce y ejercicio de sus derechos humanos. A continuación una breve síntesis.

Tabla 11
Síntesis del movimiento de mujeres en México

AÑO	CONTEXTO INTERANCIONAL	CONTEXTO NACIONAL	MOVIMIENTO DENOMINACION DEL MOVIMIENTO Y OBJETIVOS
1917-1951	Lucha por el sufragio en diferentes regiones del mundo	Constitución de 1917 Lucha por el derecho a votar.	1ª Ola de feminismo Las sufragistas
1970 – 1977	Debates en torno al feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. Conferencia Mundial del Año de la Mujer México.	-Emergen movimientos sociales no cooptados por el gobierno -Reforma electoral de 1977 que integra diputados de oposición al Congreso por primera vez - Tribuna de Organizaciones no Gubernamentales - El debate se concentra en torno al cuerpo: derechos sexuales y reproductivos. - Primeros debates sobre el derecho la interrupción del embarazo	2ª. Ola del feminismo
1988	Emergen diferentes procesos de transición democrática.	Surge el Partido de la Revolución Democrática	Feminismo popular Ligado a las demandas sociales de las mujeres campesinas y al combate a la pobreza
1991	Argentina es el primer país en integrar las cuotas electorales	Convención Nacional de las Mujeres por la Democracia	Integrada por las mujeres de los partidos políticos de izquierda. Lucha por ser electas. Se presentan 39 candidatas de mayoría, ninguna gana.
1991	Ganando espacios	-Se presenta con más fuerza la demanda por democratizar al país por parte de los movimientos sociales y los partidos opuestos al PRI -El PRD introduce las cuotas electorales voluntarias. -Reuniones preparatorias a cumbres internacionales -Surge De la A a la Z, 1993 -VII Encuentro Nacional Feminista fue “Ganar espacios	Feminismo civil Constituido por organizaciones civiles. Obtener espacios al interior de los partidos políticos Propósito, caminar juntas un trecho antes que las diferencias separen
1993	La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 reconoció la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos e instó a nombrar un Relator o Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer en la Declaración y Programa de Acción de Viena.	El IFE conmina a los partidos a integrar las cuotas electorales.	Feminismo popular
1994-1995	IV Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo en el Cairo V Conferencia Beijing,	Se crea el Programa Nacional de la Mujer y los Institutos de la Mujer	Las demandas feministas transitan a la llamada “perspectiva de género”
1997		Se crea la Comisión de Equidad de Género en la Cámara de Diputados. Inclusión por las cuotas electorales.	
1998	La ONU conmemorará en 1998 el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.	Primer Parlamento de Mujeres en México	Objetivo: Promover iniciativas

Fuente: Elaboración propia

Hay herencias y continuidades, pero también virajes y pérdidas, apunta Martha Lamas (2006). Si al comenzar los ochenta el feminismo civil legitimaba su existencia “desde abajo”, hoy se valora cada vez más el reconocimiento logrado desde arriba. Con ello se corre el riesgo de “perder el piso” y operar en una lógica ajena a los grupos sociales por los que se dice abogar³⁰⁴.

Al respecto, Marcela Lagarde (1999) reconoce que no todas las mujeres que alcanzan el poder la comparten una perspectiva feminista. Existe una amplia gama de definiciones ideológicas, políticas y de identidad. No todas las activistas se definen como feministas, pero la referencia simbólica de esta crítica a la modernidad y de la búsqueda de su ampliación, son feministas. Las acciones realizadas para que logren ocupar espacios ha caracterizado el interés en la validación política de la participación de las mujeres. Considera también que la lucha ha permitido ampliar los espacios de participación donde antes eran discriminadas personal y colectivamente, como los partidos y las asociaciones políticas³⁰⁵.

Así, un contexto propicio para las acciones afirmativas se genera con mayor fuerza. Los movimientos de mujeres en el mundo y en México han socializado un atajo en los encuentros internacionales, espacios de alianzas y de estrategias.

Después de un largo recorrido por obtener derechos políticos, las mexicanas impulsarán las cuotas electorales como un instrumento para alcanzar la representación.

³⁰⁴ Espinosa, Gisela, p.397.

³⁰⁵ Ídem.



Fotografía 5.
Legisladora Hilaria Supa de Ecuador, 2015

*Las acciones afirmativas constituyen una de
las políticas certeras contra
la opresión sexual y racial.*

Iris Marion Young.
Filósofa política

CAPÍTULO IV

EVOLUCION DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CUOTAS ELECTORALES Y REPRESENTACIÓN

4.1 El Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Las cuotas de género son una importante contribución al proceso de democratización, ya que posibilitan la inclusión de las mujeres en las asambleas parlamentarias y en el mejor de los casos, abren “el jardín secreto” de las nominaciones (Dalerup, 2014).

Para corroborar lo anterior, el presente capítulo tiene por objetivo exponer cuatro aspectos en torno a las cuotas electorales, las cuales representan un importante atajo trazado por el movimiento organizado de mujeres para sortear las barreras culturales, estructurales e institucionales, que impiden alcanzar el poder así como la dicotomía de la esfera privada para la mujeres y la esfera a pública para los hombres.

En primer lugar, se expone el desarrollo conceptual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) que dio vida a las acciones afirmativas para develar la lucha de las mujeres por hacer realidad el goce de todos los derechos humanos y su protección, lo cual ha tenido una interesante evolución (Medina, 2003). Segundo, se explica qué son las cuotas electorales -las cuales constituyen un instrumento de acción afirmativa, avalada y promovida por la teoría del DIDH-, para luego exponer los factores que provocan su eficacia: el tipo de cuotas, el sistema electoral y las medidas de apremio. Tercero, se expone el desarrollo jurídico de la integración de las cuotas electorales en México, a partir de las reformas emprendidas en 1993 -año en que tanto un partido político de izquierda como la ley electoral las integraron-, hasta llegar al marco legal del año 2007 en el que las mujeres lograron un marco jurídico más progresista en materia de equidad de género.

Así, este capítulo busca exponer aspectos del recorrido teórico y jurídico de las cuotas electorales, las cuales han permitido elevar la representación política de las mujeres en

México, constituir una masa crítica en el Congreso de la Unión y desmontar las sólidas barreras que impedían romper el *techo de cristal*.

De manera breve, se debe decir que la protección de los Derechos Humanos (DH) en el Sistema Internacional nace después de la Segunda Guerra Mundial, en cuyo desenlace se consensó la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas -firmada en 1945- y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

La historiadora Pilar Folguera (2006) resume algunos de los objetivos de dicha Carta para prevenir futuros conflictos: promover el progreso económico y social y proteger los derechos de las mujeres. También relata que la feminista Eleonor Roosevelt tuvo un rol fundamental en la elaboración del documento, apoyando fuertemente la inclusión de los artículos referentes a la igualdad de derechos. Por ejemplo, durante la redacción del articulado, remitió diversos informes sobre la incorporación de términos lingüísticos para evitar consignar la palabra “hombre” como conjunto de la humanidad (2006:101-103).

La Carta es el texto que dio vida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y con ello, a un sistema internacional de derechos humanos donde los Estados se comprometieron a proteger y garantizar los derechos fundamentales sin distinción alguna por cuestiones de raza, sexo o religión. Además, se obligaron a cooperar para solucionar los problemas económicos y sociales, así como a respetar los derechos fundamentales y las libertades de los seres humanos.

También establece un nuevo concepto de derechos humanos basado en la dignidad humana y la no discriminación, y en la tendencia a la efectividad e interdependencia de un orden jurídico público internacional, con principios, normas, límites y criterios de interpretación³⁰⁶.

Dichos Tratados y Convenciones se rigen por la Convención de Viena de 1969 –que entró en vigor hasta 1980-, cuyo cumplimiento es obligatorio para los Estados que los signan y ratifican. Respecto al valor jurídico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, destaca el hecho de que los Estados han venido aceptando su carácter obligatorio³⁰⁷. Los

³⁰⁶ Las fuentes son los principios generales del Derecho, las normas consuetudinarias, las normas convencionales, los actos de la Organización Internacional y el consenso de los Estados.

³⁰⁷ Cf. Villa ,Carmen Rosa, *Mecanismos de protección de los Derechos Humanos Sistema de Naciones Unidas*, disponible en

principales instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, estos últimos de 1966. Paralelamente se han creado varios tratados orientados a la atención y erradicación de conflictos específicos, como la tortura, el genocidio, la esclavitud o la discriminación por razones de raza, edad o sexo³⁰⁸.

Los marcos normativos específicos para América Latina, son la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José, adoptada en 1969 y en vigencia a partir 1978³⁰⁹, que instrumentó dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, constituida en 1960 -en adelante denominada bajo las siglas CIDH-, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) creada en 1979³¹⁰.

Si bien la Declaración reconoce a las mujeres y hombres por igual, la inclusión de la perspectiva de género en el marco internacional de los DH se fortaleció a través del movimiento organizado de mujeres. La historiadora Nash (2012) narra que aún con las dificultades para converger en el periodo de entreguerras se logró impulsar el Informe

<http://iidh->

webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/2_2010/XXVCurso_Inter_en_Derechos_Humanos_Discursos_ponencias/22.%20RVilla_doc.pdf, consultado el 4 de noviembre de 2014.

³⁰⁸ Por ejemplo: Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, 1948; la Convención sobre la Esclavitud y su protocolo 1953; Convención sobre el Estatuto del Refugiado, 1951; Convención Internacional contra todas las formas de Discriminación Racial, entre otros. Cf. Quintana, G., *Instrumentos básicos de derechos humanos*, Porrúa, México, 2003.

³⁰⁹ El Pacto de San José o la Convención American de los derechos humanos, es el resultado de un proceso iniciado en 1948 con su reconocimiento por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Convención contiene un catálogo de derechos civiles y políticos, así como disposiciones sobre los derechos derivados en materia económica, social y cultural. A la fecha, veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 9

³¹⁰ La Comisión fue creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su estatuto y eligió sus primeros miembros. Sin embargo, el Tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la Convención Americana. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que por su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D.C. Es decir, la Corte fue establecida como resultado de haber entrado en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos. Tanto la Comisión como la Corte tienen la función de consagrar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Convención. Cfr. *Historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, disponible en <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/historia-de-la-corteidh>, consultada el 4 de noviembre del 2014.

Mundial sobre la situación de la Mujer, realizado por la Liga de Naciones -antecedente de la ONU-. “Esta iniciativa cambió de forma irrevocable la idea acerca de que el status de las mujeres fuese de exclusiva competencia de los gobiernos nacionales para convertirlo en asunto asumido por los organismos internacionales. De este modo abrieron el paso hacia la posterior creación de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres de las Naciones Unidas (CEM) en 1946” (p167).

La jurista Cecilia Medina (2007) describe que la separación que se produjo entre los derechos de las mujeres y los del resto de la humanidad, llevó a la idea de que era necesario una vez que se había hecho conciencia de lo que pasaba, empezar la tarea de integrar esta protección en el curso principal de la promoción y derechos humanos de todos los seres humanos, así, en palabras de la autora, “comenzó entonces la necesidad de introducir la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de los derechos consagrados en los tratados generales, basándose para ello en una característica inherente a los derechos humanos: su universalidad” (p.7).

A lo largo del tiempo la Comisión sobre la Mujer organizó diversas conferencias mundiales. A la fecha se han celebrado cuatro para unificar a la comunidad internacional en objetivos estratégicos y planes de acción para el adelanto de las mujeres en los ámbitos de la vida pública y privada. Como se mencionaba en el apartado sobre el movimiento de mujeres, en México se convocó al primer encuentro internacional que produjo el Primer Plan de Acción Mundial en 1975. Ahí se hizo un llamado a los gobiernos para lograr la igualdad, integrar a la mujer al desarrollo y a la consolidación de la paz. Dentro de las Naciones Unidas este Plan también condujo al establecimiento del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para el Adelanto de la Mujer (INSTRAVW), y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) que en 2010 se transformaría en ONU Mujeres, organismo financiador del proyecto para el liderazgo político de las mujeres implementado hacia el 2012.

La Segunda Conferencia Mundial se realizó en Copenhague en 1980, congregó a 145 estados para dar seguimiento a lo acordado en México y buscar avanzar otro trecho. La Tercera Conferencia Mundial se organizó en Nairobi en 1985 donde se identificó la necesidad de lograr mayor participación política. La conferencia reconoció, entre otros, la urgencia de que la mujer se integrara en los debates de todos los ámbitos y no solo en lo relativo a la igualdad

de género³¹¹. Cabe recordar que hasta los años 90, el promedio mundial de representación parlamentaria se mantenía aproximadamente en un diez por ciento³¹².

La Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres se celebró en Beijing, China, en septiembre de 1995, cuyo resultado llevó a la adopción de una Declaración y una Plataforma de Acción -Plataforma de Acción de Beijing- con doce esferas de especial preocupación, entre ellas: pobreza, educación, salud, violencia, desigualdad en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones. En dicho espacio, las mujeres profundizaron en el logro de un proyecto más amplio sobre democracia y justicia social. “Como resultado de los acuerdos de Beijing, las mujeres reconocieron como una aspiración legítima la lucha por el poder político, porque es el lugar donde se adoptan las decisiones. A esta aspiración se le llamó empoderamiento político. Este objetivo trataba de abrirse espacios en todos los aspectos de la vida pública y privada”.

Beijing se instauró entonces como el mayor encuentro que las Naciones Unidas haya organizado; asistieron representantes de 189 gobiernos, 17 mil participantes que incluyeron 6 mil delegados gubernamentales, así como más de 4 mil asistentes de las ONG’S, 4 mil periodistas y todas las organizaciones de las Naciones Unidas³¹³.

Las conferencias provocaron que se redactaran marcos normativos e interpretaciones judiciales con perspectiva de género, como parte del sistema internacional de DH y de los órganos supervisores como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)³¹⁴. La ex jueza de la Corte Interamericana, Cecilia Medina (2009), describe que desde la Declaración y Programa de Acción de Viena, se estableció que los órganos de vigilancia

³¹¹ Ver *Reseña histórica sobre las conferencias mundiales de la mujer*, disponible en http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_es_s&id_article=2240, consultado el 4 de noviembre del 2014.

³¹² El dato que se tiene es a partir de 1997, de acuerdo con la base de datos presentada en la Unión Interparlamentaria. Disponible en www.ipu.org/wmn-e/arc/world251297.htm, consultado el 4 de noviembre del 2014.

³¹³ Los 189 Estados Miembro de la ONU adoptaron de forma unánime la Plataforma de Acción de Beijing (PADB) para garantizar mejoras para todas las mujeres sin excepción. La PADB esbozó las 12 esferas críticas, que constituirán obstáculos para el adelanto de la mujer, e identificó el alcance de las medidas que los gobiernos, las Naciones Unidas y los grupos de la sociedad civil deberán tomar para hacer de los derechos humanos de la mujer una realidad.

Disponible en ONU Mujeres www.beijing20.unwomen.org/es/about, consultado el 5 de noviembre del 2015. También se puede ver Plataforma de Acción Mundial de Beijing. Información disponible en <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf>, consultada el 5 de noviembre del 2014.

³¹⁴ Cf. Medina, Cecilia, “Derechos Humanos de las Mujeres”, título original: “Human Rights of Women: Where are we now in the Americas?” Publicado en *Essays in Honour of Alice Yotopoulos-Marangopoulos*, profr. A. Manganas (ed.), Volume B, Panteion University, Nomiki, Atenas, 2003.

creados a partir de los Tratados deberían incluir la situación de la condición de la mujer en sus deliberaciones, desglosar los datos por sexo y promover la inclusión de las mujeres en todas las actividades³¹⁵.

La jurista explica que el progreso del Derecho Internacional de los DH, a favor de grupos desfavorecidos, requirió de ciertas coyunturas y de la implementación de tres estrategias fundamentales, la elaboración de normas internacionales que dieran visibilidad a conflictos específicos, así como el reconocimiento expreso de derechos a todas las personas sin discriminación. En este orden de ideas el segundo sería la existencia de órganos facultados para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar estos derechos como fueron la creación de la Comisión (1960) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1979). Y por último, la relación y el comportamiento de los titulares de estos derechos, ya que el desarrollo de exigibilidad depende en gran medida de que ellos sean ejercitados³¹⁶.

Por ejemplo, Medina (2009) apunta que en el trabajo concreto para hacer efectiva una vida libre de discriminación de las mujeres, en menos de tres décadas se emprendieron tres estrategias: la creación de instrumentos jurídicos con perspectiva de género (CEDAW, Belém Do Pará y la Plataforma de Acción de Beijing), la implementación de órganos jurisdiccionales para hacerlos valer, fomentando la organización articulada de las mujeres con una agenda común para hacer exigibles sus derechos en los Estados parte. En segundo lugar, se encuentra el establecimiento de órganos de seguimiento para el cumplimiento de la Convenciones -como lo fue el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y tercero, la organización de las mujeres de diversos países.

Acerca del primer aspecto, conviene detallar cuáles fueron dichos instrumentos del Derecho Internacional de los DH de las Mujeres:

- a) La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953. Reconoce el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, a votar en todas las elecciones en igualdad con los hombres y a ocupar cargos públicos, así como a ejercer funciones públicas sin

³¹⁵ Su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y desarrollarlo progresivamente.

³¹⁶ Cfr..Medina, op. cit.,

discriminación. En este instrumento no se incluyó el mandato de las acciones afirmativas, - El Estado mexicano ratificó esta Convención hasta el año de 1981-.

b) La **Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)**³¹⁷ elaborado en 1979 y firmado por 187 países. El documento determina en qué consiste la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla los estados signatarios se comprometen a su aplicación y a la consumación de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones a los DH de las mujeres. Ese acuerdo representa la culminación de casi 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y de la lucha de las mujeres³¹⁸.

c) La **Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer** firmada en Belém Do Pará, Brasil, en el mes de junio de 1994, en la cual se afirma que la violencia constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de la mujer³¹⁹. Para Medina es producto y “beneficiaria de la experiencia nacida de la lucha del movimiento de mujeres, dando respuesta al severo problema de la violencia contra la mujer, haciendo de ella al mismo tiempo un vínculo entre la violencia y la discriminación y entre aquella y las prácticas sociales y culturales” (Medina, 2007:7).

d) La **Plataforma de Acción Mundial**, Beijing, China, 1995, es un instrumento para promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo. Ahí se reconocen sus aspiraciones y las diversas circunstancias de cada una de ellas³²⁰.

En consecuencia, con un bagaje teórico y jurídico acumulado, así como una experiencia de organización que venía desde el movimiento sufragista, las mujeres tuvieron elementos para

³¹⁷ La CEDAW es uno de los mecanismos jurídicos más importantes en la lucha contra la discriminación de género y fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de la ONU.

³¹⁸ Cf. Folguera Pilar, “La equidad de género en el marco internacional y Europeo”, en Maquiera, Virginia (ed.), *Mujeres, Globalización y Derechos Humanos*, col. Feminismos, Cátedra, España, 2010.

³¹⁹ Cf. Zuloaga, Patricia, *Las convenciones internacionales de Derechos Humanos y la perspectiva de género*, Universidad de Chile, Chile, 2007, col. Paideia, Morata, España, 2011.

³²⁰ Cf. Versión disponible en www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf, consultada el 5 de noviembre de 2014.

el debate interno y la construcción no sólo de un lenguaje común sino de acciones políticas concretas y propuestas de reformas normativas específicas³²¹.

4.2 Acciones Afirmativas en el Derecho Internacional de los DH

Como se mencionaba en el marco teórico, en el Siglo XX las mujeres lograron que diversos países signaran los Tratados o Convenciones Internacionales antes descritas, en las que se introdujo la herramienta jurídica denominada en un primer momento, Discriminación Positiva, y después, Acción Afirmativa.

El tema aún está sujeto a un amplio debate, ya que resurge cuando se trata de impulsar acciones afirmativas, en el ámbito laboral o el político, principalmente. Por ejemplo, ¿requieren algunas sociedades de tratos preferenciales para alcanzar la igualdad en sus diversas acepciones? ¿Deben integrarse medidas de carácter temporal en el ámbito político y educativo para favorecer a grupos, poblaciones como indígenas, jóvenes y personas discapacitadas? El profesor de derechos humanos, Rosenfeld, anota una respuesta: “Las cuotas en sí, como los objetivos o el trato preferencial, parecieran no ser ni buenas ni malas. Ni deseables ni no deseables. Si cualquier cuota se califica como justa o injusta, buena o mala, parecería depender de la naturaleza de la cuota o del contexto (conceptual e histórico) donde se busca su aplicación” (p.59).

Las acciones afirmativas son también definidas en el Derecho Internacional de los DH de las mujeres como medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer (CEDAW, art.4º). A causa de su relevancia

³²¹ Cecilia Medina (2003) narra, por ejemplo, que cuando se creó la Comisión Interamericana de DH, ésta no tenía facultades para atender casos de víctimas de violaciones de derechos humanos a título individual; empero, por la cantidad de demandas que recibió de hombres (casos de tortura o desaparición forzada) se produjo la creación de mecanismos de monitoreo sobre situaciones específicas que estaban padeciendo ciertas naciones y se logró que la Comisión tuviera facultades para revisar formalmente reclamos individuales. Así, nace un movimiento que aunado a otros aspectos, tuvo su mayor alcance en 1969 con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la OEA. Cfr. Medina, “*Derechos Humanos de las Mujeres*”, op. cit.

Parece que esta idea de recurrir a un órgano internacional en búsqueda de apoyo no cruzó la mente de las mujeres en dicha época. Es posible, también, que si uno o dos casos de violaciones de los derechos humanos de la mujer se hubiesen presentado ante la Comisión, hubieran sido rechazados, debido a que la misma Comisión estaba compuesta por hombres que pudieron no estar conscientes, en ese tiempo, de que los derechos humanos de la mujer podían ser violados en formas diferentes a aquellos de los hombres, y que una nueva lectura de los derechos era necesaria para hacer realidad la idea de que todas las personas son iguales ante la ley.

conceptual y jurídica, se cita ahora el articulado que fundamenta la no discriminación contra las mujeres y la legitimación de las acciones afirmativas, colocando el énfasis que “la discriminación por razón de género es la más antigua y persistente en el tiempo, la más extendida en el espacio y la que más formas ha revestido (...) la que afecta al mayor número de personas y la más primaria, porque siempre se añade a las demás discriminaciones” (Martínez, p.66).

Legitimidad de las acciones afirmativas conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos³²²

Convención Americana sobre los Derechos Humanos I.- Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, **sin discriminación alguna por motivos** de raza, color, **sexo**, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Observación General No. 18 de Comité de Derechos Civiles y Políticos, 1988. El principio de igualdad, exige algunas veces a los Estados Partes adoptar **disposiciones positivas** para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 1981. Art. 1 A los efectos de la presente Convención, la expresión "**discriminación contra la mujer**" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera.

Art. 3 Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y **en particular en las esferas política**, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, **incluso de carácter**

³²² Palacios, Patricia, *Las convenciones internacionales de Derechos Humanos y la perspectiva de género*, Universidad de Chile, Chile, 2007.

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Art. 4 La adopción por los Estados Partes de **medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer** no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

A propósito de este último artículo, destaca la Recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer en vista de las dificultades que la interpretación provocaba:

Recomendación General N°25 del Comité CEDAW

Convención Americana sobre los Derechos Humanos I.- Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, **sin discriminación alguna por motivos** de raza, color, **sexo**, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Observación General No. 18 de Comité de Derechos Civiles y Políticos, 1988. El principio de igualdad exige algunas veces a los Estados Partes adoptar **disposiciones positivas** para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 1981. Art. 1 A los efectos de la presente Convención, la expresión "**discriminación contra la mujer**" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera.

Art. 3 Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y **en particular en las esferas política, social, económica y cultural**, todas las medidas apropiadas, **incluso de carácter legislativo**, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Art. 4 La adopción por los Estados Partes de **medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer** no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

De lo anterior se deriva, que las acciones afirmativas son un instrumento implementado por los Estados a partir de la entrada en vigor de los Tratados, las recomendaciones del Comité de CEDAW y de la puesta en marcha de las estrategias del movimiento de mujeres por materializar estas ideas en sus respectivos países.

Desde algunas perspectivas, la expansión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres fue posible debido a diversas relaciones causales que operaron a su favor, es decir, de una secuencia amplia de eventos: el movimiento de mujeres pudo preceder e influir en la toma de decisiones de la elite política, mientras que las normas internacionales pudieron afectar la innovación democrática en los niveles locales y nacionales. De la misma manera, la toma de decisiones de la elite en una región logró modelar el desarrollo de las normas globales, las cuales influyeron en los movimientos de mujeres en otra región para exigir el ejercicio de sus derechos³²³.

Desde la perspectiva de Celia Amorós (2007), se puede decir que las acciones afirmativas son la herencia del feminismo ilustrado en el sentido que aspiran a una igualdad ante la ley, y del feminismo de la diferencia, en cuanto a una diferenciación que trastoca el principio de

³²³ Cfr. Huerta, Magdalena y Magar, Eric, *Mujeres Legisladoras en México*, Instituto Nacional de las Mujeres, México (INMUJERES), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Friedrich Ebert Stiftung, México, 2006. p.138. Citado a partir de la ponencia de Krook, Mona Lena, *Reforming Representation: the diffusion of candidate gender quotas worldwide*, ponencia presentada en el International Studies Association, Canadá, 2004.

igualdad liberal; y posteriormente del feminismo liberal que realizan planteamientos en el ámbito legal como proceso de transformación social (p. 80).

Los instrumentos por el reconocimiento pleno del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres fueron entonces y siguen siendo determinantes para consolidar una cultura de igualdad. Sin embargo, pasaría tiempo para que los acuerdos se tradujeran en normatividad interna de algunos países, mientras que en otros, aún continúan los debates para su reconocimiento jurídico y la posibilidad de la inclusión de las acciones afirmativas.

La realidad demostró desde el inicio de la adopción de las declaraciones, que no iba a ser fácil conseguir que esos derechos fueran reconocidos y protegidos para las mujeres, particularmente en el ámbito nacional. La discriminación de las mujeres era un problema con un alto componente cultural y parecía necesario atacar ese componente de manera más eficiente que con el mero establecimiento de derechos cuyos titulares eran *todos los seres humanos* (Medina, 2003:7).

4.3 Las cuotas electorales, un atajo del movimiento

Como se mencionaba, las cuotas electorales son un instrumento de acción afirmativa para lograr que las mujeres ocupen escaños en los parlamentos y posibilitar con ello, por lo menos, una minoría o masa crítica. El porcentaje para impulsar la presencia de mujeres puede variar de un 15 hasta un 40%. De menor a mayor porcentaje, las cuotas buscan alcanzar paulatinamente una representación del 50%, es decir, una democracia paritaria (Dahlerup. 2006:19; Phillips 1995:62).

El objetivo de las cuotas es sortear las barreras que enfrentan las mujeres para alcanzar la representación y lograr “romper estereotipos sociales que otorgan a las mujeres una menor capacidad de liderazgo político” (Vergé, 2013:115). Para lograr introducirlas y superar serias resistencias, como fue en el caso de los países escandinavos, se requiere que previamente las mujeres hayan adquirido algo de poder” (Dhlerup 2013:163). En lo sucesivo se utilizará el término cuota electoral o cuotas.

Existen diversos argumentos contra dicho instrumento, similares a los que se establecen en torno a las acciones afirmativas. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las cuotas

implementadas con base en criterios étnicos, lingüísticos, culturales y relativas a la extensión geográfica, las cuotas electorales para mujeres son más polémicas (Dahlerup, 2003).

Mona Lena (2008) resume algunos de los argumentos contra las cuotas: se considera que no son democráticas porque transgreden la elección libre de quien aspira a ser nominado a un cargo público; son injustas porque discriminan a los hombres no permitiendo una elección abierta por los escaños, es decir, evitando la competencia con base en las capacidades individuales³²⁴; además, son ofensivas para las mujeres, al considerar que no pueden alcanzar el cargo público por sus propios méritos. Todos los argumentos contra las cuotas tienen fuerza y se mantienen en diversas naciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica o en Japón, dicho instrumento no ha sido incorporado en los respectivos marcos normativos³²⁵. De manera similar a lo ocurrido con el derecho al sufragio, las cuotas electorales parecen constituir una provocación para los partidos y para el quehacer político, como lo advierte Krook (2008):

Además de la hostilidad normativa, la difusión de las cuotas es desconcertante porque contradice las expectativas acerca del rol de los intereses propios de la política. Más específicamente, las cuotas para las mujeres parecieran desafiar el estatus de los mismos políticos hombres y líderes de los partidos, que instauran estas políticas. (...) las cuotas reflejan el reconocimiento de que los procesos de selección de candidatos están influidos con un sesgo favorable a los hombres, lo cual necesita ser corregido (p. 34).

Aún bajo la controversia permanente, las cuotas electorales se han ido introduciendo de manera acelerada en diversos países del mundo -sobre todo a partir de la década de los 90 (Dahlerup, 2013). Actualmente, diversos estudios empíricos hacen evidente que las cuotas resultan positivas para incrementar la representación femenina y constituyen un mecanismo eficiente para compensar sesgos culturales e institucionales (Norris y Krook, 2011). Asimismo, brindan un apoyo para romper la barrera que constituyen los partidos políticos para empoderar a las mujeres, sobre todo, para enfrentar el complejo proceso de selección en las candidaturas (Hinojosa, 2013).

Lejos de intentar analizar la amplitud de los estudios sobre las cuotas, se presenta una síntesis

³²⁴ El debate es en torno a la interpretación de la justicia y el principio de no discriminación. A ello se contraponen las ideas de justicia distributiva e igualdad de resultados. Ver Huerta y Magar, *Mujeres legisladoras en México*, op. cit., p.140.

³²⁵ Cfr. Anisa A. Somani, "The Use of Gender Quotas in America: Are Voluntary Party Quotas the Way to Go?", 54 Wm. & Mary L. Rev. 1451, 2013, disponible en <http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol54/iss4/7/>, consultada el 15 de noviembre de 2014.

que permite comprender sus efectos en la representación parlamentaria de las mujeres³²⁶. Como ya se mencionaba, las cuotas son un mecanismo que tiene efectos positivos o de refuerzo para fortalecer la representación política de las mujeres. (p.4)³²⁷. Esta impresión se reafirma con base en la evidencia empírica numérica en la arena parlamentaria, como se describirá más adelante.

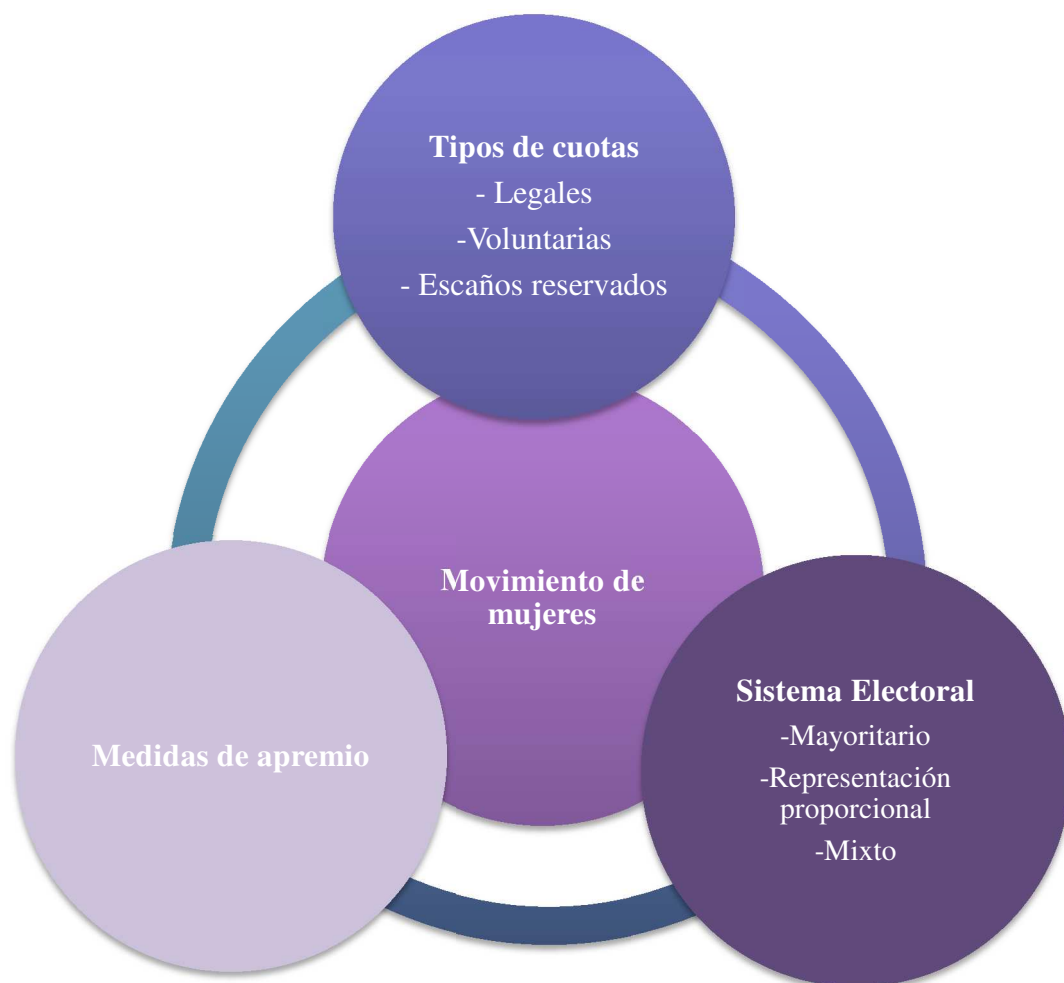
Para lograr el impacto de las cuotas, se requieren de otros factores fundamentales y paralelos (Krook, 2009; Dhalerup, 2014) que comprenden:) El tipo de cuotas: escaños reservados, cuotas legislativas y cuotas voluntarias en los partidos; b) El sistema electoral: existen doce modelos bajo los cuales pueden operar las cuotas; y, c) Las medidas coercitivas y el movimiento de mujeres para exigir su cumplimiento.

³²⁶ Diversos textos dan cuenta de la implementación del tipo de cuotas, de los debates para su posicionamiento, la resistencia de los partidos para introducirlas, así como su impacto en países, regiones o análisis comparados que abarcan un centenar de nacionales. Algunos autores son: Dalherup (2013, 2006, 2002; Franceschet, Krook and Piscopo (2012T), Krook, (2009, 2008); Zetterberg, 2009, Trip and Kang (2007) Ríos (2008), Araujo y García, (2006), Tremblay, (2007), Htun, (2002).

³²⁷ Cfr. presentación del proyecto *Quotaproject*, disponible en www.quotaproject.org/es/aboutQuotas.cfm, consultado el 14 de noviembre del 2014.

Tabla 12

Factores que inciden en la eficacia de las cuotas electorales



Fuente: Elaboración propia.

a) **Tipos de cuotas**

Primero, a propósito del tipo de cuotas electorales, una de las investigadoras más importantes es Mona Lena Krook (2008), quien expone que las cuotas varían de acuerdo con sus características básicas, los países en los cuales aparecen y el momento de su adopción (p.29). La politóloga clasifica tres tipos de cuotas: cuotas legales o legislativas, escaños reservados y cuotas voluntarias en los partidos políticos. Las cuotas pueden definirse de manera diferente pero todas comparten la idea de promover el incremento de la representación política de las mujeres a través de la selección de candidatas a cargos públicos.

En general, la redacción de dicho instrumento puede establecer un porcentaje para las

mujeres, o también hablar en términos tales que ninguno de los sexos deba exceder un determinado porcentaje. Por ejemplo, puede decirse que “las mujeres podrán ocupar el 30% de las candidaturas”, o bien “ninguno de los dos sexos podrá exceder el 70% de las candidaturas”.

1) **Las cuotas legales:** se establecen en los marcos normativos constitucionales o electorales de cada país a través de una disposición para que se reserve un número determinado de lugares en las listas electorales o en los registros de las candidaturas. Al incluirse en la Carta Magna de la nación respectiva, se exige su cumplimiento a todos los institutos políticos.

Por ejemplo, para las candidaturas que registran los partidos políticos ante el órgano electoral competente, se establece que un porcentaje mínimo debe ser para las mujeres (Dhalerup, 2014).

Krook (2008) apunta que este tipo de cuota, al igual que las cuotas en los partidos, se dirige al proceso de selección más que al número de mujeres realmente elegidas. En particular, buscan legitimar y reconocer la acción afirmativa y el género como una entidad política. Por lo general, se dispone que de un 20 a un 40% de los candidatos sean mujeres. Esta idea apareció en los años 90 y se ha hecho cada vez más común. En América Latina es la región donde más se ha incorporado este tipo de cuota (Hinojosa y Piscopo, 2013).

En México, las cuotas se instrumentan desde el año 2003, aunque no de forma obligatoria - como se detallará más adelante. Algunos otros ejemplos de las cuotas legales establecidas en los marcos jurídicos constitucionales o en las leyes electorales se encuentran en países como Nepal, Filipinas, Uganda, Argentina y Bélgica (UIP 2015).

2) **Las cuotas legales para escaños reservados:** se exige que un número de espacios sea cubierto por no más de un porcentaje determinado para cada uno de los sexos, es decir, que un número mínimo de curules debe ser cubierto por mujeres. Por ejemplo, se estipula que 10% del Parlamento debe ser ocupado por mujeres y se realizan las reservas respectivas. Los escaños reservados constituyen políticas que literalmente reservan los asientos para las mujeres en las asambleas políticas; sin embargo, se suele asignar un número muy bajo, llegando a establecer tan solo un 1 o 2%. Empero, describe a Krook (2008), hay algunas excepciones como el caso de Tanzania (30%). Esta medida apareció por primera vez en los

años 30 para otras minorías, pero se extendió algunas décadas después. Fue común en la India, donde se reservaban escaños para los diferentes grupos étnicos. Las cuotas legales se han incluido principalmente en las regiones de África, Asia y Medio Oriente (Krook, 2008:29).

3) **Las cuotas en los partidos políticos o voluntarias** se inscriben únicamente en los estatutos internos de los partidos, en contraste con la redacción que se plasma en las leyes generales o en la Constitución. Dado que nacen al interior de los partidos se instituye una disposición de cuota en las listas electorales o candidaturas que formulan los institutos políticos en los procesos electorales.

Las cuotas voluntarias establecen nuevos criterios para la selección de candidaturas con el fin de “estimular o forzar a las élites partidarias a reconocer los sesgos existentes y considerar esferas alternativas de reclutamiento político”. Es decir, se exige a las elites encontrar potenciales candidatas y en algunos casos, persuadir a mujeres a participar en los procesos electorales con dicho partido. Bajo este modelo, los institutos políticos reconocen que las mujeres tienen menos tiempo para dedicarse a las cuestiones públicas, a pesar de que sean competentes para aspirar a diferentes cargos: “Los partidos tuvieron que aflojar las expectativas tradicionales con respecto a la nominación de candidatos, lo cual había requerido anteriormente que los posibles candidatos pasasen años trabajando dentro del partido como aprendices” (Krook, et.al.31).

Las cuotas voluntarias –redactadas en los estatutos de los partidos políticos- se presentan en Alemania, Noruega o Suecia. En casos como el de Sudáfrica, un solo partido las incluyó; sin embargo, ellas tuvieron un fuerte impacto por tratarse del instituto de mayor presencia. Otro ejemplo se tiene en México, donde este tipo de cuota fue la primera en ser contemplada en los estatutos del partido de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, en 1993³²⁸.

³²⁸ Cfr. Dhalerup, D, , 2003. “*El uso de las cuotas para incrementar la representación política de la mujer*”, IDEA Internacional, *Mujeres en el Parlamento, más allá de los números*. P. 159-173: Alcocer, Jorge, et. al., *Cuotas de género. Una sentencia histórica*, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, México, 2012 y otra fuente de más peso.

Tabla 13
Tipos de cuotas electorales

¿A QUÉ NIVEL?			
Normado por	Aspirantes	Candidaturas	Elegidos
Cuotas Derecho Constitucional o electoral	Primarias	Las cuotas de candidatos	Asientos reservados
Cuotas voluntarias de partido	Las cuotas de aspirantes (Las listas cortas)	Las cuotas de candidatos	Los escaños reservados

Fuente: *Quotaproject*, Disponible www.quotaproject.org/aboutQuotas. Consultado el 20 de nov. 2015.

Los Países Bajos y Noruega fueron los primeros en introducir las cuotas electorales bajo diferentes modalidades. En América Latina, Argentina fue el primer país donde se redactó una norma jurídica en la materia, la llamada *Ley de Cupo Femenino* en el año 1991 - previamente a la Cumbre de Beijing en 1995³²⁹

Un ejemplo interesante sobre el complejo estudio de las cuotas lo aporta la experta sobre el tema, Krook, (2009) en *Cuotas para mujeres en política (Quotas for Women in Politics)* en el que compara los diferentes caminos en la adopción e implementación de las cuotas, revelando las causas por las cuales son más efectivas en determinados países. La autora considera variables tales como el movimiento de mujeres a favor de introducir las cuotas, el comportamiento de las elites políticas, las normas existentes sobre igualdad y la representación, y la influencia de la organización internacional. Las naciones que analiza son, primero, Pakistán e India, donde se ha implementado un modelo de asientos reservados; después, Suecia y el Reino Unido, con un modelo de cuotas al interior de los partidos políticos; por último, Argentina y Francia, donde se tienen cuotas legislativas³³⁰.

³²⁹ El primer país del mundo en incorporar a su marco jurídico una norma sobre cuotas electorales fue Argentina, mediante la ley 24012, denominada *Ley de Cupo Femenino* que fue aprobada en 1991 cuyo contenido estableció que las listas de los partidos políticos para cargos electivos nacionales debería tener como mínimo un 30% de candidaturas de mujeres. A partir de ahí varios países de América Latina y de otras regiones se fueron sumando a la inclusión de dicha acción afirmativa. Ver, Hinojosa, Magda, y Piscopo, Jennifer, “Promoción del derecho de las mujeres a ser elegidas: veinticinco años de cuotas en América Latina”, en *Cuotas de género, una visión comparada*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2013.

³³⁰ Para la investigación se desarrolla preguntas en dos grupos. Primero: ¿por qué se adoptan las cuotas? ¿Qué

El estudio de Krook (2009) detalla el proceso que contribuyó a la implementación exitosa de cuotas en algunos casos, y una comprensión de por qué, en otros países, tanto las campañas para introducirlas como su operatividad fracasaron. Pone en evidencia la importancia de analizar otros factores que inciden en su eficacia. Así considera que el éxito depende de una serie de constelaciones: actores que apoyan las reformas por múltiples y conflictivas razones, la dinámica de la selección de candidaturas, y finalmente, el grado en que las reformas de cuotas son reforzadas o no.

Sobre el estado actual de las cuotas existe una reciente y amplia investigación comparativa, el *Atlas de las cuotas electorales de Género (Atlas of Electoral Gender Quotas)* del año 2013³³¹,

Drude Dahlerup (2013), quien elabora la introducción del *Atlas*, expone que para el 2013 en casi 118 países se han integrado algún tipo de cuota electoral, lo que representa más de la mitad todas las naciones del mundo. Casi 60 países tienen *cuotas legislativas* -las cuales pueden ser utilizadas en combinación con asientos reservados o cuotas en los partidos. En 36 países funciona el modelo de *asientos reservados* en el parlamento, mientras que un promedio de 37 naciones cuenta con *cuotas en los partidos*, las cuales son incluidas en por lo menos un instituto político (p.37).

- Las cuotas en Europa

Mientras que en América Latina han experimentado una amplia difusión, en Europa han sido menos adoptadas. Por orden cronológico en los países de la Unión Europea se han integrado en el siguiente orden: Bélgica 1994 y reformadas en el 2002, Francia en el 2002 y modificadas en el 2007, Eslovenia en 2006, Portugal 2006, España 2007, Grecia 2008 y Polonia 2011. “En casi todos los países fue necesaria una reforma constitucional que avalar el uso de la discriminación positiva en la representación política”. (Verge 2013:114).

actores se involucran en las campañas de cuotas, y por qué apoyan o se oponen a las medidas de cuotas? En segundo lugar, ¿qué efectos tienen en los patrones existentes de representación política? ¿Son estas disposiciones suficientes para traer a más mujeres en la política? ¿O su impacto depende de otras características del contexto político más amplio? A lo largo de la investigación la autora analiza las respuestas y los hechos que hacen más eficientes las cuotas en cada una de las naciones.

³³¹. Para la elaboración del *Atlas* se convocó a investigadores de todas las regiones del mundo, para después integrar el mapa de la representación parlamentaria de las mujeres con base en la inclusión de las cuotas electorales (p.9). El *Atlas* es un instrumento adicional a la plataforma digital denominada *Quotaproject*, mencionada ya en el Capítulo II (sobre el estado de la cuestión).

b) Cuotas y sistema electoral.

Además del tipo de cuotas, el sistema electoral es una variable significativa para favorecer su eficacia, según coinciden varios autores (Dahlerup 2013; Huerta 2008; Krook 2008; Jones 2000, 2008; Matland 2002, Soto, 2009). El sistema electoral bajo el cual se introduzcan las cuotas las hacen más eficaces o bien minimiza sus efectos de manera relevante.³³²

Como se mencionaba en el apartado sobre los Factores Institucionales que inciden en la representación, diversos estudios demuestran que el sistema electoral tiene un impacto significativo en las oportunidades de las mujeres para lograr un escaño

Se ha demostrado que el modelo de cuotas electorales en los sistemas de RP conduce a una mayor proporción de mujeres representantes en las Cámaras (Matland, 2002, Dahlerup, 2014). El total del promedio del número de mujeres electas en el 2012 por el sistema de representación proporcional fue del 25%, a diferencia de lo que ocurre con los sistemas electorales mixtos y los sistemas electorales de mayoría, donde el porcentaje varió entre un 18 y 14% de mujeres elegidas -respectivamente (UIP 2012).

De los 37 países que tienen al menos el 30% de representación femenina en sus legislaturas, 24 (65%) cuenta con un sistema de lista de representación proporcional, mientras que seis países (16%) utilizan sistemas mixtos, y cinco naciones (13%) utilizan los sistemas de mayoría. En los 73 países con 15 por ciento o menos mujeres en el parlamento, 43 (58 %) utilizan sistemas mayoría, 16 (21 %) utilizan sistemas de RP y diez (13%) (Dahlerup, 2013:23). Esto significa que el sistema de mayoría puede ser menos favorable para las mujeres, mas no así el de representación proporcional³³³.

³³² Cf. Dahlerup, *Atlas of Electoral Gender Quota*, et.al. pp. 21-22 y en Huerta y Magar, *Mujeres legisladoras en México*, op. cit, p.150 Las mujeres obtuvieron mejores resultados cuando se operó bajo diseños de cuotas voluntarias o legales: “En 2012 se aplicaron cuotas en 22 países donde se realizaron elecciones. En los casos en que se aplicaron por ley, las mujeres lograron el 24% de los escaños y en el caso de las cuotas voluntarias, el 22%. Cuando no se aplicaron cuotas, las mujeres lograron el 12% de los escaños”. Cfr. Unión Interparlamentaria digital *Las mujeres en el Parlamento 2012. Perspectiva anual*, p. 7, disponible en <http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2012S.pdf>, consultada el 15 de noviembre de 2014.

³³³ Matland (2008), Dahlerup (2012), Huerta y Magar (2006) explican que existe un consenso casi generalizado respecto a que las cuotas son más eficaces en un sistema de representación proporcional; ese consenso se sostiene en la idea que en circunscripciones plurinominales hay más escaños en juego. En cambio, cuando se aplican en distritos de mayoría relativa basados en distritos uninominales en el que los partidos presentan a un solo candidato, las cuotas tienen menos éxito debido a las desventajas económicas, sociales y culturales que enfrenta una candidata frente a un candidato varón. Un estudio reflejó que 13 de 15 países con altos niveles de representación femenina se rigen por sistemas de representación proporcional. A ello se suma la idea que es más complejo saltar el mandato de la cuota al momento de integrarse las listas que al de designar candidatos que participarán en una contienda. Cfr. *Mujeres legisladoras en México*, op. cit., p. 151.

De los 118 países y territorios que cuentan con algún tipo de sistema de cuotas (incluidos los que tienen cuotas de partido voluntarias), 64 utilizan sistemas de representación proporcional, mientras que en 23 naciones operan sistemas mixtos, y en 24 el sistema de mayoría. (Dahlerup, 2013:23).

Empero, existe una tercera postura que considera que ninguno de los sistemas por sí mismo es favorable a las candidatas, pues el análisis muestra que la diferencia entre ambas categorías es menos importante que las variaciones dentro de las mismas³³⁴.

b) Diseño de la lista

Otro aspecto que consideran los análisis sobre los modelos que ofrecen mayores oportunidades u obstáculos para las mujeres, es el tipo de lista elaboradas dentro del sistema de representación proporcional.

El mandato de posición también es relevante, es decir, si se obliga o no que las mujeres ocupen determinado lugar de la lista. Algunas leyes no establecen un mandato preciso ni instituyen un orden para garantizar una representación equilibrada de ambos sexos en las listas de postulantes a cargos públicos, las leyes de cuotas no constituyen por sí solas una garantía de acceso a los espacios de representación. El objetivo de establecer no sólo porcentajes mínimos de género sino también posiciones mínimas a ser ocupadas en la lista, está orientado a garantizar el acceso de las mujeres a los cargos, evitando que los líderes partidarios las ubiquen en lugares simbólicos y con pocas expectativas de resultar electas.³³⁵

Huerta y Magar (2006) exponen que existe un consenso casi generalizado en torno a que un factor que obstaculiza el buen funcionamiento de las cuotas es la falta del requisito de mandato de posición o ubicación dentro de la lista, ya que las mujeres son colocadas en posiciones no elegibles. Además, el modelo de listas puede ser un obstáculo o trampa si la norma no es clara, dado que se registran a las potenciales legisladoras en los últimos niveles de la lista electoral. Por ejemplo, en una lista de diez personas bien podría colocarse a las mujeres en los últimos cinco lugares.

³³⁴ Cfr. ídem

³³⁵ Cfr. Comisión Interamericana de la Mujer, OEA, *Leyes de cuota*..., op. cit.

Para evitarlo, en algunos países se ha obligado a lo que se conoce como doble cuota: además de ser registradas en las listas electorales, los nombres de las mujeres deben encabezar la lista. Este sistema de doble cuota opera en países como Bélgica.³³⁶

Cuando se trata de los asientos reservados se regula el número de mujeres electas, en tanto que en las otras formas –cuotas legales o voluntarios de los partidos- se establece un mínimo de mujeres en las listas de candidaturas; empero, debe reiterarse que existen diversas variables posibles. Por ejemplo, en sistemas mixtos donde también se obliga a que un porcentaje de las candidaturas de mayoría -esto es, que se eligen en urnas- no puede rebasar un cierto límite para cada uno de los sexos (70 máximo).

En resumen, existe una amplia gama de estudios que evidencian la relevancia en el impacto de las cuotas electorales, siendo el sistema de representación proporcional más eficiente que los sistemas de mayoría, y también que el mandato de posición dentro de la RP debe ser específico.

En Latinoamérica, por ejemplo, se ha corroborado que el factor que ha incrementado la eficacia de las cuotas es el tipo de listas que se elaboran y presentan ya que cuando son cerradas favorecen la integración de las mujeres³³⁷. Por otro lado, cuanto mayor sea la magnitud del distrito, mayores serán las posibilidades de que un partido consiga un número mayor de escaños en una circunscripción y por ende, de que aquél incluya a mujeres en sus listas y ellas sean elegidas posteriormente (Htun, 2002:31).

c) Las medidas de apremio y mujeres organizadas

La otra característica importante para la consolidación de las cuotas es la posibilidad de hacerlas valer mediante medidas de apremio promovidas en cada país. A ello se suma la redacción de la normatividad, dado que entre más ambiguo sea el marco jurídico, más difícil

³³⁶ Huerta y Magar, describen también que los rasgos distintivos de las listas que registran los partidos determinarán el avance de la representación política de las mujeres. Sobre ello, predomina la idea de que los sistemas de listas cerradas favorecen el éxito de las cuotas bajo la premisa que un sistema abierto detona mayor competencia entre los candidatos; factores patriarcales sitúan a las mujeres en situación perjudicial, aunque se requiere que exista un importante número de mujeres postuladas y colocadas en un lugar con posibilidad de triunfo. Paralelamente, existe la idea de que las listas abiertas pueden conllevar un resultado positivo bajo la evidencia de una investigación realizada en 24 naciones, con y sin leyes de voto preferencial: cuando los votantes tienen la posibilidad de escoger dentro de los nominados por partidos específicos en distritos con diversas posiciones, se afianza la inclusión femenina. Cfr. *Mujeres legisladoras en México*, op. cit., p.153

³³⁷ Roza, Vivian, op.cit., p.12

será la implementación, interpretación y juzgamiento sobre la acción afirmativa por parte del órgano jurisdiccional (Dahlerup, 2008; Martínez, 2010; Villanueva, 2009)³³⁸. Por ejemplo, que los partidos o las instituciones electorales rechacen el registro de las listas de candidatos que no cumplan con el porcentaje mínimo o la ubicación.

Otro aspecto importante, vinculado al anterior, es la capacidad de las mujeres organizadas para lograr, en primer término que la redacción de la norma sea clara y precisa para su aplicación, y en segundo, defender en los tribunales la posible interpretación de la ley cuando los partidos políticos pretendan ejecutarla con un sesgo desfavorable para las ellas. Ejemplificando, cuando en sistemas electorales mixtos se considera que la cuota sólo se utiliza para las candidaturas bajo el principio de representación proporcional y no para el principio mayoría. Asimismo, en diversos casos –Bolivia o México– se llegó a considerar que se cumplía con la norma sobre la cuota electoral nombrando como suplentes a las mujeres de los candidatos varones (Alcocer, 2013).

En el ensayo denominado “La importancia de la justicia constitucional y electoral para la eficacia de las cuotas electorales. Las experiencias costarricense y argentina en la comparación con otros países de la región” de Rocío Villanueva (2009), se analiza el efecto de las resoluciones de los tribunales en los casos donde se promovieron recursos en torno a su interpretación: Costa Rica y Argentina; Colombia y Venezuela; Perú y Ecuador; y México y Brasil. En los primeros dos casos los tribunales resolvieron a favor de una interpretación benéfica para las mujeres, siendo un “factor clave en el cumplimiento de la ley de cuota, y de esta manera, en el acceso de las mujeres a los puestos de decisión. Evidentemente, no es suficiente que se expidan resoluciones que protejan el derecho de las mujeres a la participación política, sino que éstas tienen que ser acatadas y oportunas” (p.200)³³⁹.

En contraste, en el caso de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, la jurisprudencia y las

³³⁸ Cfr. *Igualdad para una Democracia Incluyente*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, 2009, p. 12. En este ensayo se estudia con detenimiento las resoluciones que se han emitido sobre cuotas electorales en los países de Costa Rica y Argentina. Asimismo, en la obra *La apuesta por la paridad: democratización del sistema político en América Latina*, IDEA Internacional, Lima, 2013, se ofrecen detalles sobre el papel del Tribunal en materia de cuotas.

³³⁹ “Si bien no sería correcto sostener que en Costa Rica y Argentina la aplicación de la mencionada acción afirmativa ha estado exenta de problemas, lo cierto es, que desde hace algunos años, es posible identificar una línea jurisprudencial (constitucional o electoral) pro derechos de la participación política de las mujeres. En cambio, las marchas y contramarchas de las cuotas son más comunes en los órganos electorales del segundo y tercer grupo”. op. cit., p. 201.

actuaciones de los tribunales fue contraria a las cuotas, mientras que en Brasil y en México –antes del 2012– se emitieron resoluciones en ambos sentidos. En general, los tribunales en América Latina, al igual que otras regiones, han actuado de manera poco uniforme; en algunos países las cuotas han sido interpretadas de manera restrictiva y en otros de manera positiva.³⁴⁰

Ballington y Méndez Montalvo (2002), también afirman que el movimiento de mujeres, los niveles de organización femenina y el nivel de involucramiento de las mujeres de la sociedad civil en las negociaciones serán factores fundamentales para incrementar la representación³⁴¹.

En otro estudio comparado de México y Argentina, Antonia Martínez (2010) también resalta la importancia de que las mujeres organizadas promuevan estrategias -el “recurso feminista”- ante los tribunales para que las cuotas logren incidir. La capacidad jurisdiccional para hacerlas valer es fundamental ya que, citando el ejemplo de México, aún bajo una normatividad clara y precisa sobre las cuotas -tanto en los estatutos políticos de los partidos como en la Carta Magna y en el Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales (COFIPE)- los partidos encontraron mecanismos para evadirla o interpretarla sesgadamente.

Villanueva (et.al, 2009) se suma a la idea que las resoluciones y sentencias demuestran el papel determinante que han desempeñado las mujeres, quienes se han enfrentado a sus propias agrupaciones políticas, demandando por el cumplimiento de las cuotas o una mejor ubicación en las listas, o bien, cuestionando la constitucionalidad de las resoluciones para restringir o limitar la acción afirmativa: “Es gracias a ellas que se ha expedido una parte importante de la jurisprudencia” (p. 201).

De estas resoluciones se deduce que la sensibilización y capacitación sobre la perspectiva

³⁴⁰ Algunos casos citados son los del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense y de la Cámara Nacional Electoral de Argentina. En Costa Rica “se han dictado importantes sentencias sobre acciones afirmativas para promover la presencia de mujeres en cargos públicos, una de ella a propósito de una demanda de inconstitucionalidad sobre las cuotas electorales” (Villanueva, 2009:199). Lo mismo sucedió en México por parte del Tribunal Federal Electoral como se analizará en el Capítulo V.

Otro caso emblemático es el fallo del Consejo Constitucional en Francia. En 1982 la Asamblea Nacional presentó una enmienda para que no más del 70% de los escaños del Consejo Municipal pudiera ser para no más de uno de los sexos. “Después de algunos debates en que a los diputados les preocupaba que la libertad de la opción de los votantes se estuviera limitando, que las mujeres se sintieran insultadas al tratarseles como una categoría (...) la ley abrumadoramente pasó las dos lecturas requeridas”. Empero, el Consejo Constitucional, en la cual no había mujeres, y el 8 de noviembre del 1982 anuló la referencia a las cuotas. Scott, *Parité! Equidad de género y la crisis del universalismo francés*, F.C.E, 2012, op.cit, p. 81.

³⁴¹ En ello coinciden varios autores como Mona Lena Krook (2008), Richard Mtlund (2002), Medina, (2010),

de género de las y los impartidores de justicia, además de las y los dirigentes partidistas, es una estrategia acertada para lograr un alto nivel de eficacia de las cuotas, o en su defecto, el retroceso de las mismas (Alanís, 2010).

Así, en varias investigaciones se destaca que las resoluciones muestran la dificultad de la aplicación de las cuotas, poniendo de manifiesto que son los partidos políticos, representados por hombres, los que tratan de incumplirlas, y que son los militantes varones quienes al ser desplazados a otros lugares de las listas para colocar a las mujeres en puestos elegibles, han cuestionado las cuotas electorales o el mandato de posición (Rocío Villanueva, 2009).

4.4 Las cuotas en América Latina

Después de los años 80, América Latina es una de las regiones donde se realizaron reformas estructurales e institucionales con miras a consolidar un régimen democrático y en donde los partidos han logrado cierto nivel de institucionalización, aunque de manera paradójica han debilitado sus lazos con la ciudadanía (Del Campo, 1997,2008). En el marco de varias reformas, se han integrado las cuotas electorales para lograr traspasar algunas barreras que al año 2015 han provocado que Latinoamérica tenga una de los mayores porcentajes de representación parlamentaria (22%), como se describía en el Capítulo relativo al Estado de la cuestión.

Entre los análisis sobre el impacto de las cuotas en Latinoamérica se encuentran: *Mujer y política. El impacto de las cuotas en América Latina* (2008) y *La aplicación de las cuotas: experiencias latinoamericanas* (2003). También se tiene una síntesis reciente elaborado por Hinojosa y Piscopo (2013), *Promoción del derecho de las mujeres a ser elegidas: veinticinco años de cuotas en América Latina*, quienes concluyen que “la adopción de cuotas en gran parte de América Latina ha estimulado significativamente la representación política de mujeres. Aunque en teoría las mujeres han tenido por mucho tiempo el derecho a ser elegidas, en la práctica, rara vez se le dio la oportunidad de hacerlo” (p.99).

Al mismo tiempo, las cuotas plantean una fuerte resistencia en naciones en las que los Tribunales han tenido que resolver sobre su carácter constitucional, como en los casos Colombia o México donde se promovieron juicios para interpretar su status legal o su posible

transgresión al principio de igualdad³⁴².

A fines del 2012, los parlamentos de las Américas contaban con un promedio de 24.1% de parlamentarias, lo que representa un aumento en comparación con el 2002 (16.5%): “Esta cifra sitúa a la región en el primer lugar de la clasificación de la Unión Interparlamentaria (UIP), con la excepción de la subregión de los países nórdicos”³⁴³.

Las investigadoras Hinojosa y Piscopo (2013) muestran el evidente impacto de las leyes de cuotas en la región: en los países que cuentan con una sola cámara pasó de un promedio del 8.8 en 1990 al 12.6 por ciento en el 2000, y después al 21.3 en 2010, con base en datos de la Unión Interparlamentaria.

La presencia de mujeres en el Poder Legislativo en países con cuotas es del 24.4 frente a un 15.1 por ciento de los países sin cuotas. Como se mencionaba ya, el primer país en introducirlas fue Argentina en 1991 y durante esa década y las siguientes casi todas las naciones las incluyeron, a excepción de Chile, Guatemala, Nicaragua y Venezuela -que no cuentan con este mecanismo a nivel nacional pero lo tienen para las elecciones locales.

La incorporación de las cuotas en América Latina se presentó en el contexto de la democratización y de crisis, al igual que en otras regiones, aunque el momento transicional varía de un país a otro. (Del Campo, 2005).

En todos los casos las mujeres movilizadas y con cierto poder político durante la transición fueron marginadas en las elecciones fundacionales de la democracia, ya que en los años 80 apenas representaban el 5% de las diputadas electas. Las activistas hicieron notar que las prácticas machistas en la política no se habían erradicado, pero dicho contexto adverso contribuyó a que las mujeres fueran encontrando argumentos para la defensa de las cuotas ya que las proclamas de democratización no podían ser sexistas o discriminatorias.

³⁴² Las cuotas fueron declaradas inconstitucionales en Colombia en el año 2001, mientras que en México la Corte se pronunció a favor de ellas, en el año 2002. Ver Capítulo IV, Cuotas Electorales y Representación, apartado 4.2 Las cuotas electorales, atajo del movimiento para la representación, c) Medidas de apremio. Por ejemplo, Hinojosa y Piscopo, denuncian que la experiencia no siempre ha sido exitosa, “en todas partes, las cuotas han enfrentado la resistencia de la élite y América Latina no ha sido la excepción: los líderes de los partidos políticos han buscado de manera repetida cumplir mínimamente con las cuotas – y cuando ha sido posible – han ignorado las leyes por completo” (2013:99).

³⁴³ Cfr. *Las mujeres en el Parlamento 2012. Perspectiva Anual*, Unión Interparlamentaria, p3, disponible en <http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2012S.pdf>, consultada el 15 de noviembre de 2014.

De acuerdo con Hinojosa y Piscopo (2013), dos factores fueron importantes para lograr introducir las cuotas: el discurso normativo de la cuota y los cambios institucionales de la transición, los cuales operaron con otras variables como ya lo apuntaba en sus investigaciones Krook (2009): la movilización de las mujeres, el contexto internacional y que cierta elite política percibe una oportunidad estratégica para adoptarlas (63). Así los líderes políticos “vieron en la adopción de las leyes de cuotas un mecanismo para hacer gala de sus credenciales de políticos modernos y democráticos para audiencias nacionales e internacionales” (p.3). Por ejemplo, citan las autoras, Carlos Menem consideró que el éxito de la medida ayudaría a ganar al partido peronista y si bien las mujeres hicieron presiones y se movilizaron, el voto de los senadores fue fundamental. Los líderes políticos de las nuevas democracias “podían sacar provecho de los beneficios de su retórica de igualdad de política de género, sin pagar costos importantes en términos de compartir el poder con las mujeres” (p.4).

Es decir, la política de cuotas ha sido fruto de la movilización global de las mujeres dentro de los distintos partidos latinoamericanos, del apoyo de las redes internacionales y de la presión de las organizaciones³⁴⁴. En un principio las leyes de cuotas nacieron un tanto débiles pero se fueron fortaleciendo a lo largo del tiempo. Las mujeres fueron aprendiendo de las “triquiñuelas de los partidos” como en el caso de Bolivia³⁴⁵, donde los nombres de los hombres fueron puesto en femenino -“Juan” por “Juana”-; también estuvo el caso de México, donde las mujeres eran registradas con suplentes hombres y una vez que tomaban el poder, eran obligadas a renunciar, como se describirá en el Capítulo V, apartado 5.2.1, denominada, El caso de las Juanitas.

Las cuotas han tenido un impacto en la representación política en los países que las han incorporado, lo cual se contrasta con frente a las naciones que no han incluido las cuotas electorales, como se muestra en la siguiente tabla.

³⁴⁴ Cf. Martínez, Antonia y Garrido Antonio, *De la política de la presencia a la política de la diferencia*, Fundación CIDOB, España, 2010, p.17

³⁴⁵ Cf. Choque Marlene, “Paridad y alternancia en Bolivia. Avances y desafíos de la participación de las mujeres en la política”, en *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*, en el caso de Costa Rica, páginas 121-175, Perú.

Tabla 14

Impacto de las leyes de cuotas en la representación parlamentaria en América Latina.

País sin cuota	1980- 1989	1990- 1999	2000- 2010
Chile	5.83%	9.17%	13.87%
Colombia	4.86%	8.73%	10.24%
El Salvador	3.28%	7.67%	13.98%
Guatemala	10.83%	11.9%	10.13%
Nicaragua	10.93%	13.44%	19.57%
Uruguay	3.54%	9.6%	11.56%
Venezuela	7.75%	9.51%	13.53%
Promedio regional por década	6.72%	10.00%	13.27%
País con cuota	1980- 1989	1990- 1999	2000- 2010
Argentina	4.72%	19.92%	35.98%
Bolivia	8.46%	10.77%	19.23%
Brasil	3.61%	5.69%	8.48%
Costa Rica	9.65%	15.79%	37.43%
Ecuador	7.08%	13.15%	24.42%
Honduras	4.89%	3.61%	15.6%
México	8.89%	12.5%	22.35%
Panamá	14.58%	14.08%	12.56%
Paraguay	5.41%	7.02%	10.63%
Perú	2.87%	2.5%	22.5%
República Dominicana	6.39%	7.33%	18.5%
Promedio regional por década	6.96%	10.21%	20.70%

Fuente: Género y partidos políticos en América Latina³⁴⁶.

³⁴⁶ Ver, *Género y Partidos Políticos en América Latina, 2010*. Disponible en: <http://www.iadb.org/research/geppal/index.cfm?language=Spanish&country=&parties=&dataGrap>, Consultado el 15 de marzo del 2015.

En resumen, se puede señalar que América ha sido uno de las regiones pioneras en incorporar este instrumento de acción afirmativa, que ha llevado a plantearse si se encuentra en la cresta de ola (Llanos y Sample, 2008) y que existe una lucha en las naciones donde se habían tenido resistencia para su integración, como el caso de Chile³⁴⁷.

4.5 Las cuotas electorales en México 1993-2011

En 1974 se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el decreto que reformó los artículos 3º, 4º, 5º, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la igualdad jurídica de la mujer. Dos años después, en el marco de la Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en México en 1975, antes descrita, se emprendió una revisión sobre el marco normativo y las conductas que generaban discriminación contra la mujer en las leyes nacionales.

Como ya se mencionaba, en 1981 se ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW), , en 1983 se presentó el Programa Nacional de Acción para la Integración de la Mujer en el Desarrollo, y en 1985 se estableció la Comisión Nacional de la Mujer.

Dicho antes, en el año de 1993, en el contexto de la democratización del país que se gestó a partir de 1988, el nuevo partido político de izquierda -Partido de la Revolución Democrática- incorporó en sus estatutos la cuota de género para las candidaturas de representación proporcional, señalando que ninguno de los dos sexos debería exceder el 70%. En ese momento la representación en el Congreso de la Unión era de apenas un 8.8%, y en el mundo alcanzaba un promedio de 11% (Unión Interparlamentaria). Así, por primera vez, un instituto integraba una medida de acción afirmativa para la representación política.

³⁴⁷ Hasta el año 2015 se aprobó en Chile el proceso de proyecto de ley que modifica el Sistema Electoral Binominal por uno Proporcional e inclusivo, el cual integró un sistema de cuota en el que ningún partido o pacto pueda conformar lista de candidaturas que tengan menos de un 40% y más de una 60% de representación de un mismo sexo. Sobre la reforma electoral en Chile y las mujeres se puede ver: Comunidad Mujer, “*Mujer y política, cuotas de género para una mayor representación y un Congreso inclusivo*”, Boletín, julio-agosto, Chile.

Sobre la oleada favorable de cuotas y la paridad en la región se puede ver: *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina*, IDEA Internacional. Los casos de Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Perú, 2013, y, Roza, Vivian; Llanos, Beatriz y Garzón de la Rosa, Gisela, *Partidos políticos y paridad, la ecuación pendiente*, BID-IDEA, Perú, 2010.

Una de las explicaciones para dicha apertura normativa estatutaria es la participación de las feministas al interior del instituto político, quienes conocían de las acciones afirmativas que ya se emprendía en otras regiones y quienes venían organizándose desde los años 80 (Scherer, 2014).

Como se narra en el ensayo *Breve historia de la participación política de las mujeres en México* (2008), en esta década se da un gran movimiento de mujeres: “hubo un despertar de la solidaridad, el despertar del movimiento sindical, protagonizado por las costureras y quienes constituirían el movimiento de damnificados (...)”. Además, hubo otro gran acontecimiento político previo: la elección de 1988, que “dejó en el ánimo un significativo número de personas el deseo de actuar de una manera más colectiva”. Entre esos esfuerzos estaba la formación de Mujeres en Lucha por la Democracia, así como la Coordinadora de Mujeres Benita Galeana como instancia política de confluencia de organizaciones que consideraron como un eje de su lucha alcanzar la democracia (p.52).

El trabajo pionero por la representación se dará en la década de los 90. Diversas organizaciones de mujeres provenientes de grupos feministas, organizaciones sindicales, del movimiento urbano popular y mujeres independientes realizaron un trabajo pionero al interior del partido de izquierda para lograr una mayor representación (p.54), siendo las cuotas al interior del instituto una respuesta a aquel trabajo. Esto coincide con lo descrito por Lovenduski (1997), respecto a que serían los partidos de izquierda los primeros en impulsar a las mujeres: “los partidos de izquierda han tenido tradicionalmente más voluntad que los partidos de centro y de derecha para llegar a acuerdos y proponer candidatas, y también parecen ser más capaces de cumplir esos compromisos” (p. 127).

Las investigadoras Girón, González, y Jiménez (2008) describen el movimiento de mujeres de los noventa, el cual se concentra por primera vez en lograr mayor participación y representación política -lucha cuyo antecedente se da en los 80³⁴⁸.-

³⁴⁸ En contraste, una militante destacada del PRI - partido oficial- y una de las seis gobernadoras de México, Silvia Hernández, narra que desde los años 80 conoció este instrumento: “Mi relación con la cuota de género es muy antigua, viene de mi trabajo legislativo. Siendo yo una senadora muy joven, en 1982, me tocó presidir el Comité contra el Desarme...En aquella época, las suecas libraban una lucha por su incorporación a las listas de candidatos de los partidos políticos con vistas a integrar el Parlamento. No estaban solas; otras mujeres de la misma región nórdica, en particular noruegas y danesas, habían conseguido ya el diez por ciento como mínimo obligatorio. Con el tiempo, las noruegas elegirían y reelegirían a una mujer primera ministra. Gro.

Aunque el PRD fue pionero en el tema, en 1993 el movimiento de mujeres logró que se modificara el COFIPE para conminar a los partidos políticos a promover una mayor participación femenina, aunque “ello no dejaba de ser una mera declaración democrática de buena voluntad, pero nada más. No obstante, por primera vez en un ordenamiento federal se buscaba, aunque sin la solidez necesaria, abrir el camino a la reivindicación electoral del voto pasivo de las mujeres” (Elizondo, p.2)³⁴⁹.

La exconsejera del IFE, María Elizondo apunta que este hecho tuvo un impacto positivo en aquella LVI Legislatura, pasando de un 8 a un 14% de mujeres en la Cámara de Diputados y de un cuatro, a un 13% en la de Senadores. Empero, el tema de las cuotas y su impulso fue perdiendo fuerza, dado que hasta 1996 se volvió a poner en el centro de la discusión³⁵⁰.

En 1996 las cuotas se incorporaron a la Constitución, la cual estableció en su artículo 41 lo siguiente: “es un derecho de los ciudadanos y una obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a los cargos de elección popular”. En la ley electoral se aprobó la fracción XXII transitoria del

Harlem Brundtland, por el Partido Laborista”. Hernández, S., “*El tren que detuvimos*”, en Alcocer, J., *Cuotas de género*, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, México, 2012, p.27.

³⁴⁹ En el ensayo de Jaqueline Peschard “*De la condición gubernamental...*” se explica el contexto, los debates y alcances de las reformas electorales de ese periodo, primero en 1993 y después en 1997. La primera reforma se gestaron después de la polémica y conflictiva elección de 1988, cuando compitieron Carlos Salinas de Gortari por parte del PRI y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el Frente Democrático Nacional, conformado por un partido y militantes de izquierda, así como emanados del PRI. Dicha elección fue altamente cuestionada por parte de la ciudadanía y a partir de la cual se considera comenzó el proceso de democratización (2012). En la reforma de 1997 se realizaron modificaciones importantes tales como la fijación del tope del 60% de curules para el partido mayoritario; un senador más por la primera minoría; reglas de financiamiento público más ceñidas; limitaciones de las aportaciones privadas y topes de los gastos de campaña; atribuciones de fiscalización para el ahora Tribunal Federal Electoral. La ley electoral estableció la credencial para votar con fotografía, la reglamentación de observadores electorales nacionales, además de la contratación exclusiva de los partidos en los medios de comunicación.

La reforma de 1997 “no fue definitiva”; sin embargo, introdujo los siguientes elementos: 1) Inyección de confianza de las autoridades electorales, dotando de autonomía constitucional a las autoridades del IFE; 2) condiciones de equidad en la competencia mediante las fórmulas equilibradas de financiamiento y a los medios de comunicación; 3) justicia electoral más eficaz; 4) un esquema de representación más plural, con una sobrerrepresentación más acotada a sólo 8 puntos porcentuales; 5) ampliación de los derechos políticos. Destacan los acuerdos sobre los puntos que habían sido fuente de inconformidad durante los diez años anteriores; su procesamiento tomó cerca de dos años que derivó en un cambio de fondo de las elecciones; fue “una reforma que saldó cuentas con la agenda del reclamo democrático”. La reforma tuvo una vigencia de 11 años, en buena medida, porque atendió la demanda histórica de los partidos de oposición para garantizar elecciones libres, justas y competidas, además de que abarcó los ámbitos administrativos y jurisdiccionales de las elecciones. (pags.377-387). Cfr. Loaeza, Soledad, y Prud’homme, Jean Francois, (coord.) *Instituciones y proceso políticos*, Colegio de México, México, 2012, pp. 355-403.

³⁵⁰ Ver, *La participación política de las mujeres*, Artículos, Del Archivo, Latinoamérica, Portada, Sin categoría. Consultado, 15 de marzo del 2015. <http://revistafal.com/la-participacion-politica-de-las-mujeres-mexicanas/>, publicado el 1 noviembre, 2013.

COFIPE, en la cual se señalaba que los partidos políticos “considerarían” en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedieran el 70% para un mismo género³⁵¹.

En México la introducción de las cuotas fue tan polémica como en otras regiones, sobre todo en las cúpulas del instituto político de derecha, el Partido Acción Nacional (PAN). Una batalla importante se dio cuando oponentes panistas, una vez que las cuotas habían sido aprobadas en el estado de Chihuahua en el 2001, llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia con el argumento de que eran inconstitucionales ya que se violentaba el principio de igualdad entre hombres y mujeres del artículo 4º Constitucional (Huerta y Magar, 2006).

Dado que las medidas de apremio para hacerlas valer por parte de los tribunales constitucionales en México se explicaban en el apartado “c” -sobre los factores de eficiencia de las cuotas- el tema de la constitucionalidad de las cuotas fue examinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la acción de inconstitucionalidad 2/2002, promovida por el PAN: “En su sentencia la SCJN considera que las cuotas no son inconstitucionales, si bien su argumentación no es del todo contundente al respecto”. La Corte interpretó que la democracia también consiste en “dar oportunidad de presencia a las minorías subrepresentadas”. Tiempo después, el PAN intentó retirar la demanda, sobre todo “por la publicidad negativa realizada de organizaciones de mujeres contra ese partido” (Huerta y Magar, 2006:141).

- Reforma del 2002 en materia de equidad de género

Luego de esa sentencia, fueron publicadas las reformas al COFIPE para introducir las cuotas electorales de género en el ámbito federal. De acuerdo con esa nueva regulación, "es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular", y se citaba el texto constitucional en su artículo 41 (Carbonell, 2011).

Posteriormente, en el año 2002, nuevamente se reformó el COFIPE³⁵² para estipular respecto a los partidos el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, además de sanciones a los institutos que incumplieran con la norma. La reforma se estableció en el artículo 175

³⁵¹ La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de noviembre de 1996. Disponible en: <http://dof.gob.mx/index.php?year=1996&month=11&day=22>. Consultado en marzo del 2015.

³⁵² La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio del 2002.

del apartado B: las listas de representación proporcional se integrarían por segmentos de tres candidaturas y en cada uno de los tres primeros segmentos de la lista habrá una candidatura de género distinto. Por primera vez, en el apartado C se sancionaba por el incumplimiento de este mandato³⁵³.

La cuota de género se estableció como una obligación en los artículos que se citan enseguida:

Artículo 175. A

De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.

Este artículo se impuso como una obligación respecto a las candidaturas propietarias ya que antes de la reforma, en los procesos electorales de 1997 y 2000, hubo una tendencia a que las mujeres se ubicaran en las suplencias.

Artículo 175-B

Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político.

El apartado tuvo como propósito evitar que el cumplimiento de la cuota de género se limitara a seguir ubicando a las mujeres en los últimos lugares de las listas de representación proporcional, aunque solía ocurrir que los dos primeros nombres de las listas fueran hombres y el tercero mujer, más no viceversa -es decir, que dos mujeres fueran en las primeras posiciones y después un hombre.

³⁵³ Ver *Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales*, 2003, disponible en http://normateca.ife.org.mx/normanet/files_otros/COFIPE/cofipe_comentado.pdf, consultado el 15 de noviembre de 2014.

Artículo 175-C

1. Si un partido político o coalición no cumple, el Consejo General le requerirá para que en 48 horas rectifique y en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública.
2. Si no realiza la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y en caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.
3. Quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa resultado de un proceso de elección mediante voto directo³⁵⁴.

En resumen, la normativa dejaba un vacío que era aprovechado por los partidos para construir sesgadamente “candidaturas simbólicas, por ejemplo, las de las diputadas suplentes, o colocar a candidatas en los últimos lugares de la listas de representación proporcional” (Elizondo, p.2). Aunque el articulado facultaba al IFE para retirar las candidaturas de los hombres y dejar las de mujeres cuando los institutos incumplieran, el apartado el artículo 175 C permitía que si las candidaturas provenían de una elección por voto directo de la militancia o de los ciudadanos, los partidos quedaban exentos del cumplimiento de la cuota de género -como sucede con las candidaturas de mayoría relativa³⁵⁵.

En el proceso electoral federal en que se inscribe la reforma del 2002, el Congreso de la Unión quedó integrado de la siguiente manera: 25 senadoras de 128, lo que representó un 19.5% de la Cámara; en el caso de la de diputados, 124 mujeres ocuparon un escaño entre 500 congresistas, es decir, el 24.8%. No obstante los avances, las mujeres aún estaban subrepresentadas. Las mismas reglas electorales operaron para el proceso de 2006 en el registro de candidatas y candidatos a diputados y senadores. Todos los partidos se ajustaron a la norma del 70/30 de porcentajes de género en candidaturas de propietarios³⁵⁶.

³⁵⁴ Ver. Instituto Federal Electoral, *Cuotas de género en materia electoral*. Disponible en http://genero.ife.org.mx/primer-reunion-consejeras_2011/m1.html, consultado en enero del 2015.

³⁵⁵ Cfr. Op. Cit.

³⁵⁶ Aunque los partidos registraban a las mujeres como propietarias, la ley no establecía que las personas suplentes deberían ser mujeres, por lo que era frecuente que pusieran como suplentes a hombres. Esta práctica tuvo su expresión más álgida en la LXI Legislatura, con el caso conocido como las “Juanitas”, el cual es tratado en el Capítulo V.

Reforma 2007-2008 y cuotas hacia el 2012

La exconsejera electoral Jaqueline Peschard (2012) describe que la siguiente reforma político- electoral, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del 2008. El andamiaje electoral que había funcionado para tres elecciones federales, “ya no sirvió para legitimar el triunfo del partido en el gobierno, con una ventaja de apenas el .5% como fue el caso de la victoria de Felipe Calderón. La autoridad del IFE que hizo el recuento de los votos y del TEPJF que lo calificó fue severamente cuestionado” (p.389)³⁵⁷.

La reforma electoral del año 2007-2008, se entiende como la concentración de los cambios ocurridos durante los 30 años anteriores, no solo en el sistema electoral, sino en el de partidos y en los aspectos políticos. Enmarcada en la democracia electoral vigente, donde la competencia política era cotidiana y la extensión del número de actores políticos. Por ello, la pieza central de las negociaciones ya no fue el Ejecutivo Federal, ni las directivas de los partidos, sino el Poder Legislativo, el cual ya no tenía partido dominante o con mayoría absoluta en el Congreso. El eje principal de la reforma de 2007-2008 fue la crisis de legitimidad del gobierno y de las instituciones electorales, provocadas por los resultados tan cerrados de la elección presidencial de 2006 que se había disputado fuerzas ideológicamente contrarias,(Peschard, 2012:400).

La nueva ley fue respaldada por todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, gracias a que los legisladores de las principales fracciones parlamentarias reconocieron su incapacidad para allegarse los votos necesarios para aprobar por sí solos la nueva ley. En materia de equidad de género.

³⁵⁷ Para Jaqueline Peschard (2012) este proceso dejó claro la urgencia de modificar la norma y la pérdida de confianza de la autoridad electoral por lo que se requerían mecanismos para reducir las desigualdades, los excesivos recursos invertidos en las campañas mediáticas y la participación de terceros en ellas. Aunque los temas no eran nuevos, sí lo eran las circunstancias políticas y algunos detalles que no se habían contemplado, lo que generó una polarización ideológica que dividió fuertemente a la sociedad mexicana.

“A lo largo de 30 años, el móvil que impulsó las reformas electorales fue cambiando también en razón de las fuerzas políticas lo que estaba en juego en las coyunturas. De tal manera, al principio la razón para promover una reforma electoral dependió estrictamente de los cálculos del poder, en cambio posteriormente fue demandada por situaciones críticas y contextos desafiantes a los que el gobierno se vio obligado a responder” (p.400), “De la condición gubernamental al control parlamentario: 30 años de reformas electorales”, en Loaeza, Soledad, y Prud’homme, Jean Francois, (coord.) *Instituciones y proceso políticos*, Colegio de México, México, 2012. p. 355-403.

Tabla 15
Las cuotas en el Código Electoral

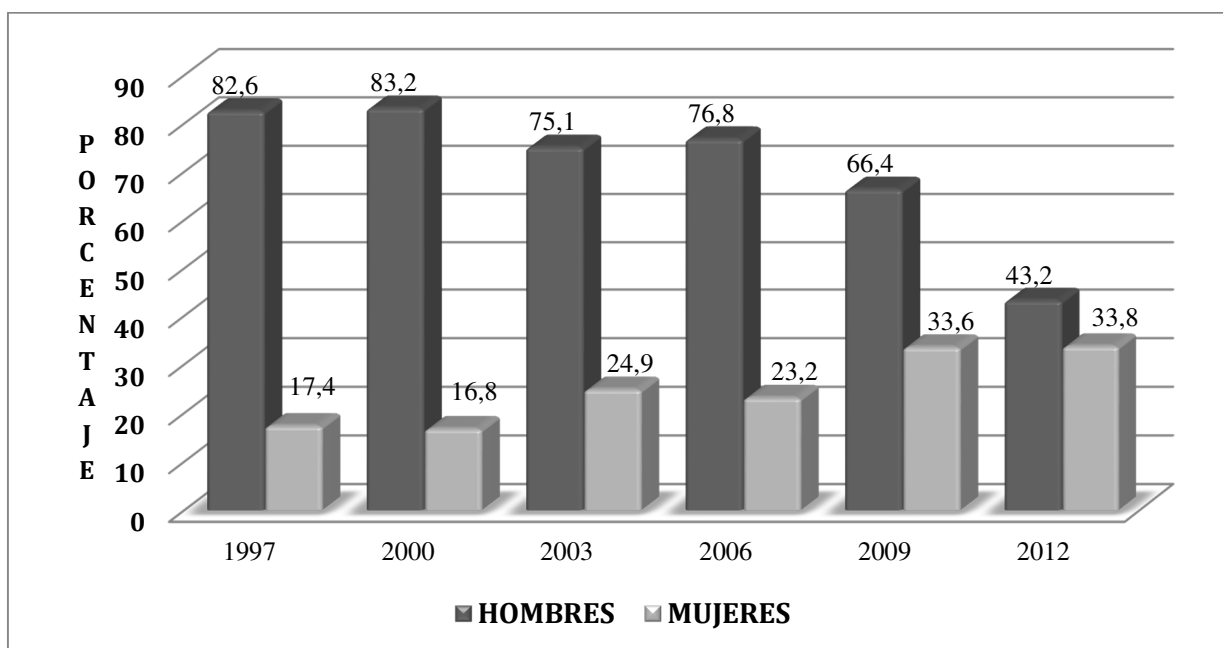
Año	Las cuotas en el Código Electoral. (Cofipe)
1993	Se modifica el artículo 173 del Cofipe, facción III, quedando establecido que: “Los partidos políticos, promoverán en los términos que determinan sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”.
1996	Se aprueba la adición a la fracción XXII, transitoria del artículo 5° del Cofipe que señala: “Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres
2002	<p style="text-align: right;">Artículo 175.</p> <p>Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en la vida pública del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.</p> <p>I.De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.”.</p> <p style="text-align: right;">Artículo 175-B</p> <p>Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político.</p> <p style="text-align: right;">El Artículo 175-C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si un partido político o coalición no cumple, el Consejo General le requerirá para que en 48 horas rectifique y en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública. 2. Si no realiza la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y en caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. 3. Quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa resultado de un proceso de elección mediante voto directo³⁵⁸.

Fuente: Elaboración propia

³⁵⁸ Ver. Instituto Federal Electoral, *Cuotas de género en materia electoral*. Disponible en http://genero.ife.org.mx/primera-reunion-consejeras_2011/m1.html. Consultado en enero del 2015.

La evolución del marco normativo, en materia de cuotas, fue la siguiente: Antes del proceso electoral federal del 2012, las cuotas ya habían impactado la representación parlamentaria en México. Las cuotas contribuyeron sensiblemente a obtener una mayor representación descriptiva en los órganos del Poder Legislativo Federal (Elizondo, 2011). Lo anterior se observa en la siguiente tabla.

Tabla 16
Evolución de la representación política por sexo del Congreso de la Unión



Fuente: Elaboración propia con base a los datos del Congreso de la Unión³⁵⁹.

Aunque existió un aumento gradual de presencia de mujeres, es pertinente mencionar un estudio cuantitativo de Javier Aparicio (2011) sobre la aplicación de las cuotas por ambos principios en el año 2009. En el ensayo sobre las candidaturas y los resultados electorales del 2009, concluye que las cuotas de género se acataron en el sistema de representación proporcional, pero el hecho de que estén excluidos a su cumplimiento cuando se trata de procesos democráticos, posibilita que no necesariamente se cumpla con el criterio del 60/40% en las de mayoría y que el sistema sea manipulable.

³⁵⁹ Cf. op. cit.

Es decir, se tuvo un alcance minimalista. En esa elección los partidos dejaron un porcentaje muy bajo de mujeres como propietarias en las planillas con lo que muchas candidaturas se convirtieron en hecho meramente simbólico. Solo hubo 703 candidatas propietarias frente a 1622 hombres. Del total de candidaturas del principio de mayoría relativa, el 31.3 fue para mujeres y el 48.6 para hombres (Palma, 2012).

Así, la reforma de la cuota de género del 2007, tuvo efectos relativamente acotados y mixtos, “por un lado, el incremento de la cuota de género del 30 a 40% de las candidaturas, produjo un aumento de casi 4 puntos porcentuales en las candidatas a diputadas federales, 35% en 2006 y 38.9% en 2009”. Lo principal se ubica en las candidaturas de RP. En contraste, las de mayoría, solo pasaron de un 30 a un 31.3%” (47). Aparicio explica que el efecto es modesto, ya que la Cámara de Diputados pasó de 137 a 141 diputadas³⁶⁰.

Las diferencias en cuanto a la postulación de candidatas fueron las siguientes: los partidos que postularon mayor número de mujeres fueron el PAN y el PRD, pero lo hicieron en distritos débiles, mientras que el PRI presentó menor número de candidatas pero participaron en distritos de mayor competitividad (Aparicio, 2011:47).

En resumen, se puede afirmar que las reformas al marco jurídico y su aplicación en materia de cuotas electorales, se introdujo de manera gradual en México, permitiendo llegar al proceso electoral federal con un marco normativo que abría las puertas a las mujeres de los partidos, empero, otros obstáculos de orden institucional, aún persistían, principalmente la forma en que la norma jurídica se interpretaba por parte de los tribunales, como se explicará en el último Capítulo.

Recapitulando, a lo largo del siglo XX, el movimiento organizado de mujeres convocó a cuatro históricos encuentros bajo el marco internacional de los derechos humanos. A partir de ellos, se redactaron tratados y protocolos para lograr el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en general, y, de los derechos políticos en particular. En ellos se incluyeron las acciones afirmativas -medidas de carácter temporal implementadas por los Estados para

³⁶⁰ Javier Aparicio (2011) señala que se puede distinguir si la brecha de género estimada en las elecciones de mayoría relativa se debe a preferencias expresas de los votantes o bien, a que las candidatas postuladas por las principales fuerzas políticas tengan características distintas a las de los candidatos, como son experiencia previa, conocimiento en el electorado, o incluso, tengan menos recursos para sus campañas.

acelerar la igualdad en las sociedades.

Las mujeres pensaron que para el avance de los derechos políticos era necesario instrumentar mecanismos de acción afirmativa. Así, ellas crean un atajo para alcanzar mayor representación y romper barreras del orden cultural, institucional y económico. El instrumento es denominado “cuota electoral” o “cuota de género” (Krook 2009; Ríos, 2008).



Fotografía 6

Toma de tribuna de las mujeres en la Cámara de Diputados, México, 2015

“A ver, miren si ustedes necesitan dinero para hacer política tomen sus cuadernos y salgan del salón. De verdad se los digo ¿Por qué? Porque no van a tenerlo. Olvídense. Estamos aquí para que tengan liderazgo. Si ustedes quieren hacer política como ellos la han hecho hasta ahora, van a fracasar. Se van a frustrar.

En cambio, lo puedes superar con liderazgo, con comunicación, con agenda, con congruencia”.

Patricia Mercado
Impulsora del proyecto
SUMA y activista feminista

CAPÍTULO V

EFFECTOS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES Y LAS CUOTAS EN MEXICO, CASO 2012.

5.1. Marco institucional y normativo hacia el 2012

El movimiento de mujeres en México y las cuotas electorales hacia el 2012 fueron factores fundamentales para incrementar la representación política de las mujeres en Parlamento. Si bien, ya había un importante precedente de organización, las mujeres emprendieron una estrategia múltiple de litigio político, jurídico y mediático que permitió una interpretación favorable sobre las cuotas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dicha resolución fue denominada posteriormente como “la sentencia histórica” o una “sentencia de amor”.

El objetivo del capítulo es mostrar cómo se logró incrementar la representación política de las mujeres en el 2012 a partir del movimiento de mujeres en México y las cuotas electorales, eje nodal de la presente investigación. Para ello se explica quiénes fueron las protagonistas y los actores en el camino hacia dicho proceso electoral, así como las acciones emprendidas y el impacto en la representación parlamentaria.

El capítulo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se describe un movimiento nacido entre el 2009 y 2010 y orientado a avanzar por los derechos políticos de las mujeres, denominado la Red de Mujeres en Plural, organización integrada por mujeres líderes de partidos políticos. En segundo término, se presenta el marco institucional³⁶¹ vigente entonces, conformado por las instituciones electorales y judiciales, además las leyes y su respectiva interpretación, donde se incluyen aspectos

³⁶¹ De acuerdo a la Enciclopedia de la Red de Conocimientos Electorales el Marco Institucional es el contexto institucional para las elecciones depositadas en el marco legal y se compone de una número de agencias y organizaciones diferenciadas que le dan estructura al sistema electoral, siendo los principales actores en una elección los siguientes: los responsables de la política y administración de un elección, las agencias de supervisión, los partidos políticos, los grupos que intentan influir en los resultados, la prensa escrita y la agencia responsable del cumplimiento de la ley. Ver, <https://aceproject.org/main/español/ei/eid>. Consultado, diciembre 2015.

como la reforma constitucional que llevó a rango constitucional los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos.

El tercer apartado explica la estrategia que emprendió la Red para lograr que las cuotas se aplicaran bajo un criterio amplio y favorable a las aspirantes a las candidaturas. Dicha estrategia se obtuvo a través de un litigio en el Tribunal Electoral (TEPJF) y bajo el marco interpretativo de la CEDAW. Por último, se expone el avance que provocó la resolución del Tribunal a partir del activismo de las mujeres, resultado de “la acumulación de hechos antidemocráticos, discriminatorios y de oídos sordos” en los partidos (Moreno, 2013:55).

A partir de estas descripciones, se busca extraer aprendizajes y lecciones de la lucha de las mujeres en México por alcanzar una masa crítica en los Parlamentos, aspirando a romper los diversos *techos de cristal* que aún enfrentan las mujeres por participar de ese mundo negado, el mundo del poder político, el mundo de la trascendencia desde el pensamiento de Simone de Beauvoir.

Cabe señalar que la Red de Mujeres en Plural logró avanzar con una estrategia jurídica y el juzgamiento con perspectiva de género por parte del Tribunal Electoral. Acerca de dicho acontecimiento vieron la luz tres libros. Primero se publicó *Cuota de género. Una sentencia histórica* (2013) con testimonios de mujeres que participaron en el proceso judicial, después, en mayo de 2014, apareció el texto *Sentencia de amor 12624. Mujeres y Elecciones en México*, el cual analiza las experiencias de las candidatas en las entidades federativas, y finalmente *Contigo aprendí: una lección de democracia gracias a la sentencia 12624* basado en bibliografía especializada y una serie de testimonios de las militantes de partidos, magistrados y académicas. Cabe señalar que el presente capítulo se nutre de dichas obras e incorpora entrevistas de mujeres que fueron protagonistas de este proceso.

Las mexicanas que desempeñaron un papel protagónico por el avance de los derechos políticos hacia el 2012, lo que sin duda las constituye como herederas de una lucha internacional y de un amplio legado teórico y político emprendido por las rebeldes ilustradas, las sufragistas, las teóricas feministas y las subversivas latinoamericanas,

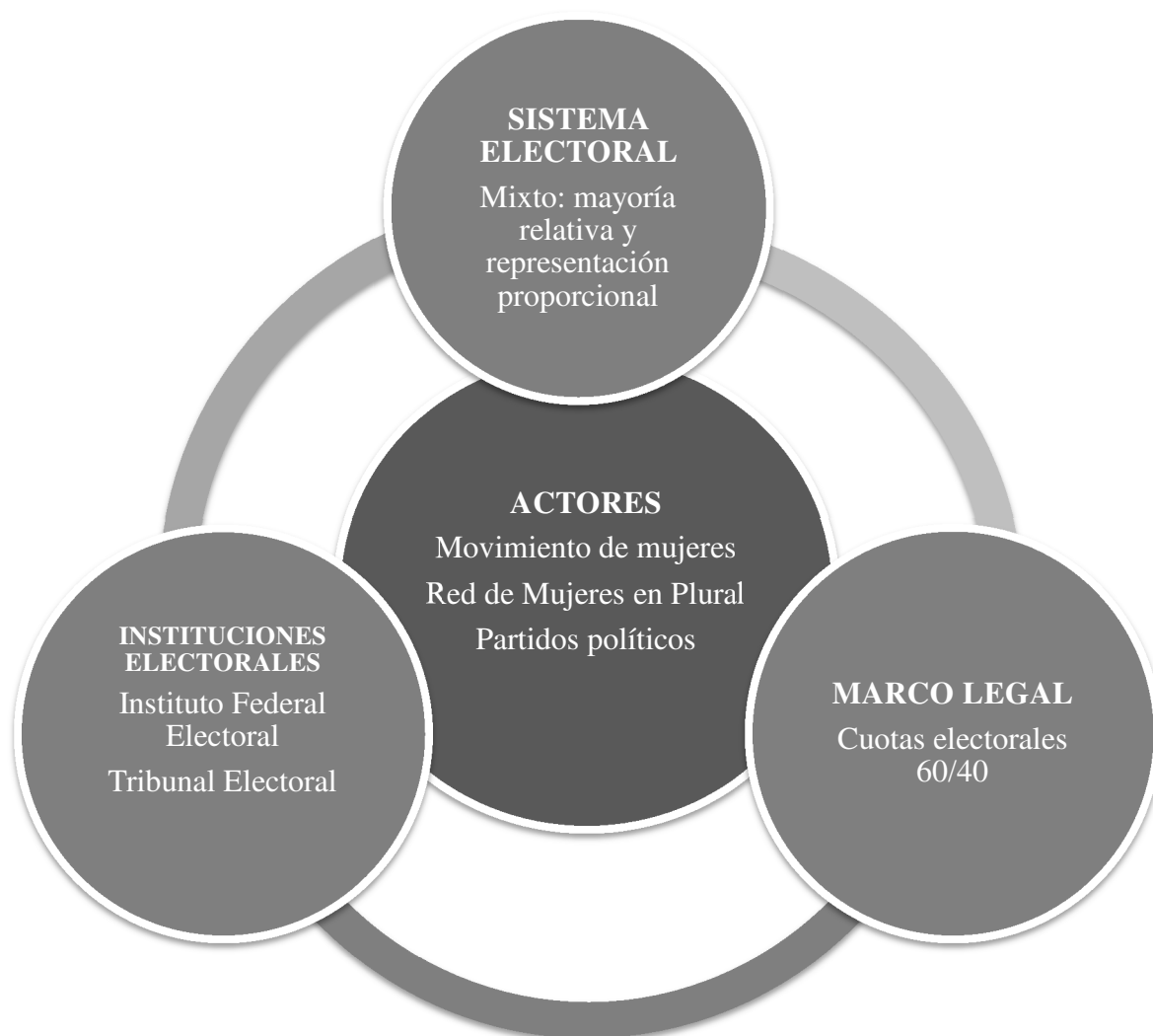
quienes articularon diferentes movimientos orientados a desmontar un orden patriarcal y la exclusión de la representación política.

Como se ha descrito en los apartados anteriores, son varios los factores y actores que intervienen para alcanzar la representación política de las mujeres. La presente investigación ha centrado su análisis en la descripción del movimiento de mujeres y las cuotas electorales, así como los aspectos que convergen y se entrecruzan con elementos, tales como el sistema electoral bajo el cual se conforma el Poder Legislativo, las resoluciones de las instituciones electorales y la actuación de los partidos políticos. De ahí que, en este apartado se describen los aspectos institucionales y normativos bajo los cuales las mexicanas llevaron a cabo la lucha por la representación hacia el 2012.

A continuación se presenta de manera gráfica la convergencia de los factores y actores que incidieron en el proceso federal electoral mexicano.

Tabla 17

Factores institucionales y actores para el análisis de la representación en México, 2012



Como primer punto se desarrollan los aspectos generales del marco institucional mexicano. La Constitución Política describe que México es una república representativa, democrática, laica y federal compuesta por treinta y un estados autónomos en su régimen de gobierno interno y un Distrito Federal. El poder supremo de la federación se divide en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el primero lo encabeza el Presidente de la República; el segundo radica en el Congreso de la Unión y el tercero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Circuito³⁶².

³⁶² Los Poderes Ejecutivos de la Unión, de los Estados y del Distrito Federal son nombrados por seis

En cada entidad federativa -denominadas provincias en otros países- los poderes legislativos se componen por una sola Cámara, mientras que el Congreso de la Unión se integra por dos Cámaras, una de senadores y otra de diputados. La primera es conocida como el Senado de la República y se conforma por 128 senadores, mientras que la Cámara de Diputados se conforma por 500 legisladores. La integración del Poder Legislativo federal en México se determina bajo un sistema electoral mixto, utilizando los principios de mayoría relativa (MR) y de representación proporcional (RP), descritos en el capítulo anterior.

Para la integración del Senado se eligen 64 personas por el principio de mayoría relativa -una fórmula de dos candidatos por cada entidad federativa-, 32 asignados a la Primera Minoría, (uno para el partido que obtuvo el segundo lugar en la elección de cada entidad) y 32 elegidos por el principio de representación proporcional. La Cámara de Senadores se renueva cada seis años.

La Cámara de Diputados se conforma por 300 integrantes que se eligen por el principio de mayoría provenientes de igual número de distritos electorales. Los otros 200 asientos se integran con base en el principio de representación proporcional según cinco circunscripciones; estos diputados o diputadas se eligen mediante listas cerradas de 40 candidatos cada una, los espacios plurinominales se asignan con base en el resultado de los distritos uninominales que conforman cada una de las cinco circunscripciones. Las y los congresistas son electos cada tres años³⁶³.

Respecto a las instituciones político-electorales en México, lo componen el Instituto Nacional Electoral (INE), antes del año 2014 denominado Instituto Federal Electoral (IFE), autoridad administrativa regulada en el artículo 41 de la Constitución; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en adelante el Tribunal Electoral, y es la autoridad jurisdiccional que se encuentra regulada por el artículo 99 constitucional, así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales,

años sin posibilidad de reelección y se depositan, respectivamente, en el Presidente de la República, los Gobernadores de cada Estado y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Ver *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Capítulo I. De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno. Artículos, 39 al 4. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm>- Consultada, el 16 de febrero del 2015.

³⁶³ Ver *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, Cámara de Diputados, México, 2014, p.101-110. Capítulo I. De la División de Poderes. Artículos del 50 al 70.

organismo especializado de la Procuraduría General de la República encargado de investigar los delitos electorales a nivel federal³⁶⁴.

El ahora INE es un nuevo organismo público e independiente en sus decisiones y funcionamiento, encargado principalmente de organizar las elecciones federales y locales, estas últimas, en coordinación con las autoridades electorales de las entidades federativas a partir del proceso electoral del 2015. Antes de la última reforma político-electoral aprobada en el 2014 la institución, se denominaba Instituto Federal Electoral (IFE) y cumplía funciones similares al actual INE. Dado que el Instituto Federal Electoral es el órgano que llevó a cabo el proceso electoral federal del 2012, es el organismo al cual se hará referencia en lo sucesivo bajo las siglas IFE³⁶⁵.

El Consejo General es el máximo órgano de dirección del IFE, en el 2012 estaba integrado por once miembros con derecho a voz y voto llamados Consejero Electorales; uno de ellos fungía como presidente del Consejo. Además, se sumaban los consejeros del Poder Legislativo, uno por cada grupo parlamentario. También integraban el Consejo un representante por cada partido político nacional y un Secretario Ejecutivo, todos ellos con voz pero sin voto. De los siete integrantes del Consejo solo dos eran mujeres³⁶⁶.

El Tribunal Electoral (TEPJF), es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, es decir, de impartir justicia en el ámbito

³⁶⁴ Ver, Instituto Nacional Electoral, Disponible en, http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Sistema_Politico_Electoral_Mexicano/. Consultado el 15 de febrero del 2015.

³⁶⁵ El IFE fue resultado también del proceso de democratización que vivió el país a partir de 1988. Surgió como parte de las reformas realizadas a la Constitución en 1990, cuando el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) con el objetivo de contar con un órgano independiente e imparcial que diera transparencia y legalidad a las elecciones federales. Cabe señalar que antes de la reforma el gobierno era responsable de calificar y organizar las elecciones, quien anteriormente organizaba y calificaba las elecciones.

⁵ El Consejo General del IFE para el proceso electoral estaba compuesto por: Leonardo Valdez, Benito Nacif Hernández, Ma. Lourdes del Refugio López Flor, Marco Antonio Baños Martínez; Sergio García Ramírez; María Marván; Lorenzo Córdova.

Después del complejo proceso electoral del 2006, donde la diferencia entre el primer y segundo lugar fue del .5%, se realizó una reforma político electoral, la cual persiguió nuevos retos para la institución electoral como fortalecer la confianza y credibilidad en las elecciones federales, regular el acceso a los medios de comunicación, promover mayor participación ciudadana, asegurar la equidad y civilidad en las campañas, crear la unidad de fiscalización como órgano de plena autonomía, entre otras. En los textos sobre esta reforma no se encuentra como parte de la agenda o retos institucionales incrementar la presencia de mujeres en el ámbito político.

electoral resolviendo las impugnaciones a las elecciones de Presidente de la República, Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputados Federales y Senadores electos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. También conoce de controversias de los actos o resoluciones de los órganos centrales del IFE, ahora INE. Su labor es diferente a la que realiza dicho Instituto, el cual planea y desarrolla las elecciones y cumple una función administrativa. Por mencionar un ejemplo se puede decir que si se niega el registro a un aspirante a candidato, éste puede acudir al Tribunal para solicitar su intervención y resuelva lo que en derecho proceda³⁶⁷.

El Tribunal se integra por siete magistrados electorales, actualmente sólo una de las magistraturas es ocupada por una mujer -María del Carmen Alanís-. Para sesionar válidamente basta con la presencia de cuatro magistrados y sus resoluciones se toman por unanimidad, por mayoría calificada -en los casos expresamente señalados en las leyes- o por la mayoría simple de sus integrantes. Su fundamento se encuentra en el artículo 99 de la Constitución y el 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las resoluciones del Tribunal son definitivas e inatacables³⁶⁸.

Además de las instituciones electorales en México la Constitución y las leyes secundarias también reconocen y establecen las funciones de los partidos políticos, según el marco legal éstos son definidos como asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas, con el fin de promover la participación democrática y servir como organizaciones de ciudadanos para ocupar cargos de elección popular, mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Es importante precisar que para que un partido político mantenga su registro, requiere obtener como mínimo un 2% de la votación para integrar la Cámara de Diputados.³⁶⁹

En el proceso electoral federal del 2012 participaron los siguiente partidos políticos, algunos de los cuales se presentaron en coalición: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de

³⁶⁷ Cf. TEPJF, “¿Quiénes somos y qué hacemos?”. Disponible en: <http://www.trife.gob.mx/acercate/quienes-somos-y-que-hacemos>. Consultado 16 de febrero del 2015.

³⁶⁸ Ver Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, México, 2014, p.149

³⁶⁹ Cf, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, Capítulo I, Artículo 41, 2013

México (PVEM), y el Partido Nueva Alianza (PANAL)³⁷⁰. En el Anexo se presentan mayores detalles de los partidos políticos en México.

Rumbo a la elección se conformaron dos coaliciones: Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista, teniendo como candidato a la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México. La otra coalición se denominó Movimiento Progresista, formada por los partidos denominados de izquierda que son el de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, el abanderado de esta fuerza fue Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el partido Acción Nacional no se presentó en coalición con ninguna otra fuerza política.

Gráfica 18

Logotipos bajos los cuales se registraron las coaliciones electorales



5.1.1 Marco normativo: cuotas y acuerdo del IFE.

¿Qué establecía el marco normativo bajo el cual participaron las mujeres en el 2012? En el año 2011, las mujeres representaban el 23.9% de los puestos legislativos, y aunque seguían sin alcanzar el mínimo del treinta por ciento para constituirse como una masa

³⁷⁰ Se anexa un apartado que amplía la información sobre los tres principales partidos políticos en México.

crítica, obtuvieron otra conquista en materia de acción afirmativa, logrando que el Dictamen de la reforma político electoral anterior, del 2007 estableciera que:

El COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) bajo estudio y dictamen propone ir más lejos en lo avanzado por anteriores reformas. Para tal efecto se propone que en las listas de candidatos plurinominales, el criterio de equidad de género se traduzca en al menos dos lugares escalonados dentro de cada tramo de cinco candidatos, lo que significa llevar la norma a un 60 por ciento máximo de candidatos de un mismo género, y 40 por ciento para el otro; lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que los partidos políticos tengan establecidos en sus respectivos estatutos³⁷¹.

El artículo 4o, párrafo primero, señaló como "Derecho de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular", mientras que en el artículo 38, inciso "s" -relativo a las obligaciones de los partidos políticos-, se estipuló "garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular".

En materia de selección de candidaturas se logró progresar, sin embargo, el avance era aún limitado sobre todo en materia de candidaturas bajo el principio de mayoría, en este sentido el Código Electoral estableció lo siguiente:

Artículo 218

1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular...

Los partidos políticos **promoverán y garantizarán** en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y **procurarán la paridad de género en la vida política del país**, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional...

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto

³⁷¹ Cf. *Gaceta Parlamentaria*, Dictamen de discusión y votación, 11 de diciembre de 2007.

Federal Electoral, deberán integrarse **con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género**, procurando llegar a la paridad.

2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

Artículo 220

1 .Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

Como se puede leer, creció el umbral de representación desde 70/30% a un 60/40%. No obstante, se mantuvo la excepción en lo tocante a "candidaturas de mayoría relativa resultado de un proceso de elección democrático conforme a los estatutos".

Además, en la ley se estableció que no se contemplaban sanciones “en los casos de candidaturas de mayoría relativa que hubiesen resultado de un proceso de elección de voto directo”, lo que dejaba un amplio espectro a los partidos para excluir a las mujeres, limitándose la obligación de los mismos en lo concerniente a cumplir la cuota en el ámbito de la representación proporcional (Huerta y Magar 2006).

Las mujeres de la Red de Mujeres en Plural -organización que se detallará en el siguiente apartado-, realizaron un cabildeo con los consejeros electorales para lograr una interpretación de la norma favorable a las mujeres en la convocatoria de registro de candidaturas. En respuesta a la solicitud de la Red, el IFE emitió un acuerdo para el registro de candidaturas el 7 de octubre del 2011. Empero, el pleno del Consejo General votó en contra de la modificación en que las mujeres habían propuesto, la votación fue de tres votos a favor de impulsar las cuotas por ambos principios y cuatro votos en contra, para que únicamente ocurriera en las candidaturas de representación proporcional³⁷².

³⁷² Ver, Instituto Federal Electoral, *Ruta crítica de la cuota de género a nivel federal. Evolución jurisdiccional*. Marzo, 2012.

Ver,http://genero.ife.org.mx/rutacritica/evolucion_juridiccional_7_de_marzo_2012.pdf. Consultado en

En ese momento, las activistas decidieron interponer juicios de protección de derechos ciudadanos, sin embargo, las estrategias de la Red de Mujeres en Plural tenían que esperar a que el acuerdo fuera publicado, lo que sucedió el 4 de noviembre del 2014. En dicho acuerdo del IFE, en resumen, se planteaba lo siguiente:

“Acuerdo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas de los distintos cargos de elección popular y, en su caso, las coaliciones ante los Consejeros del Instituto para el proceso 2011-2012”

PRIMERO. Dentro del plazo comprendido entre el día 1° y el 15 de febrero de dos mil doce, los partidos políticos nacionales deberán presentar, para su registro, la plataforma electoral que sostendrán sus candidatos, conforme a lo siguiente:

...DECIMOTERCERO. De la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas Diputados y Senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del sesenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género. Además, se verificará que los partidos políticos hayan observado los porcentajes de género establecidos en sus propios Estatutos.

Quedan exceptuadas de la regla de género señalada en el párrafo anterior, las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático.

Esto es, en caso de que el partido político, no elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático, el partido político o coalición deberá presentar como máximo 180 y 38 candidatos propietarios de un mismo género, a Diputados y Senadores, respectivamente o en forma proporcional dependiendo del número de candidatos electos por dicho proceso, procurando que la fórmula completa se integre por candidatos del mismo género.

Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, debe entenderse por procedimiento democrático aquel en el que la elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en que participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha militancia.

Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de

género distinto, de manera alternada procurando que la fórmula completa se integre por candidatos del mismo género. Tratándose de la lista de candidatos a Senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género”³⁷³.

³⁷³ En los siguientes apartados del acuerdo se establecían las consecuencias por no cumplir con lo establecido y se daban los lineamientos a seguir en las candidaturas de Representación Proporcional:

DECIMOCUARTO. En la sesión del Consejo General señalada en el punto decimosegundo del presente Acuerdo, en caso de que algún partido político o coalición no cumpla con lo previsto en los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General iniciará el procedimiento especial al que se refiere el artículo 221 de dicho ordenamiento, por lo que lo requerirá para que en un plazo de 48 horas, contadas a partir de ese momento, rectifique la solicitud de registro de candidaturas, además de apercibirlo de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. Vencidas las 48 horas arriba mencionadas, el Consejo General sesionará para otorgar el registro de candidaturas a los partidos o coaliciones que hayan cumplido con el requerimiento o, en su caso, para sancionar con una amonestación pública al partido político o coalición que haya sido requerido conforme a lo previsto en el artículo 221, párrafo 1, y que no haya realizado la sustitución correspondiente. En ese mismo acto le requerirá de nueva cuenta para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección que corresponda.

Vencido este último plazo de 24 horas, el Consejo General sesionará nuevamente, ya sea para otorgar el registro de las candidaturas a quienes hayan cumplido con el requerimiento o, en su caso, para **sancionar con la negativa del registro de las candidaturas** correspondientes, al partido o coalición que reincida, de conformidad con el artículo 221, párrafo 2 del Código de la materia.

DECIMOQUINTO. Para aplicar, en su caso, el artículo 221, párrafo 2, del Código Electoral Federal, en el caso de las candidaturas de mayoría relativa, se realizará un sorteo entre los candidatos registrados por el partido o coalición para determinar quiénes de ellos perderán su candidatura, hasta satisfacer el requisito establecido en el artículo 219 de dicho Código, excluyendo las candidaturas que fueron producto de un proceso democrático.

Para el caso de las **candidaturas de representación proporcional**, se estará a lo siguiente:

Si de la lista se desprende que cada uno de los segmentos contempla dos candidaturas de género distinto pero éstas no se encuentran alternadas, se procederá a invertir los lugares de los candidatos a fin de cumplir con el requisito establecido en la Ley. ...)

b) Si de la lista se desprende que todos o alguno de los segmentos no contemplan dos candidaturas de género distinto, entonces se procederá a ubicar en los lugares correspondientes en forma alternada a los primeros candidatos de género distinto al predominante que se encuentren en la lista, recorriendo los lugares hasta cumplir con el requisito en cada uno de los segmentos. Si aun así, no es posible ajustar el requisito o el porcentaje total de la lista sigue sin adecuarse a lo previsto por la ley, se suprimirán de las respectivas listas las fórmulas necesarias hasta ajustarse al límite legalmente permitido, es decir, hasta satisfacer el requisito de que las candidaturas de propietarios de un mismo género no superen el sesenta por ciento y que los segmentos se integren por dos candidaturas de género distinto, iniciando con los registros ubicados en los últimos lugares de cada una de las listas.

Tanto en el caso de mayoría relativa como de representación proporcional, la negativa del registro de candidaturas se realizará respecto de la fórmula completa, es decir, propietario y suplente.

Cualquier escenario no previsto en este Acuerdo, será resuelto por el Consejo General de este Instituto.

DECIMONOVENO. En caso de que algún partido o coalición solicite la sustitución o cancelación de registro de candidaturas, o que estas deriven de algún acatamiento de sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General verificará el cumplimiento de las reglas de género señaladas en los artículos 219 y 220, del Código en cita y, en su caso aplicará el procedimiento previsto en el artículo 221 del mencionado Código en relación con los puntos decimocuarto y decimoquinto del presente Acuerdo.

Las activistas concentraron la promoción de su demanda jurídica en el acto de molestia que propiciaba este apartado Decimotercero, como se explicará más adelante.

5.1.2 Juicio para la protección de los derechos político-electorales (JDC)

Ahora bien, para comprender el instrumento que empleó el movimiento de mujeres hacia el 2012 es necesario explicar de manera breve, primero, qué es el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos, y segundo, cuál era la reforma constitucional en la que se basó la argumentación en el recurso jurídico.

El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, conocido también como JDC o juicio ciudadano, tiene su fundamento jurídico en la reforma constitucional del 2007 y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) del 2008, bajo el control judicial de las leyes electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación³⁷⁴.

Actualmente, los derechos políticos en México son uno de los espacios de mayor protección jurisdiccional aunque durante casi un siglo dicha protección no existió, ya

³⁷⁴ Para el proceso electoral federal los derechos político electorales, protegido por el JDP, se establecían en los artículos 34, 35, 36 y 41 y 99 de la Constitución Política:

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, que reúnan, además, los siguientes requisitos:

I Haber cumplido 18 años, y II Tener un modo honesto de vivir

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país...

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: ...III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley; IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados...

Artículo 41...VI.- Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar y ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 esta Constitución. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto de impugnación. Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional y en la materia y órgano de especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará con una Sala permanente Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo adecuado para su funcionamiento.

que los derechos políticos no eran considerados como garantías individuales. La doctrina ha reconocido que la formación de la justicia electoral es el resultado del proceso de transición democrática de México (Nieto y Espíndola, 2012).

El JDC procede cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, hace valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votados en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos. El órgano competente para conocer y resolver en la materia son la Sala Superior y las Regionales, así como el Pleno de Tribunal, para el caso de algunos supuestos del proceso electoral federal³⁷⁵.

5.1.3 Reforma constitucional en derechos humanos

Desde el año 2008 un grupo de académicos, parlamentarios y ciudadanos pusieron en el debate lograr una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Después de intensas y largas discusiones de corte jurídico, el Congreso de la Unión aprobó la más importante reforma en materia de Derechos Humanos que modificaba una perspectiva tradicional de interpretación jurídica y jerarquía de los Tratados Internacionales y la Constitución Política³⁷⁶.

³⁷⁵ Sobre el Juicio de Derechos Político Electorales se puede ver: Nieto, Santiago, *El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano*, Porrúa, México, 2012.

³⁷⁶ Ver, Súmate a la reforma, *Propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos elaborado por las organizaciones de la sociedad civil y por académicos y académicas especialistas en derechos humanos*, México, 2008

Tabla 19
Comparativo del artículo 1º Constitucional

<p style="text-align: center;">Título primero Capítulo I De las Garantías Individuales</p>	<p style="text-align: center;">Título primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías</p>
<p>Artículo 1o.</p> <p>En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.</p> <p>Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.</p>	<p>Artículo 1o.</p> <p>En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.</p> <p>Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.</p> <p>Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los que establezca la ley³⁷⁷.</p>

Para el jurista mexicano Miguel Carbonell (2011), entre los aspectos relevantes de la reforma, en su Título primero, destacan los siguientes: 1) La expresión derechos

³⁷⁷ La Reforma Constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 dn.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011, consultada el 16 de febrero de 2015.

humanos es más moderna que la de garantías individuales y es utilizada en el ámbito del derecho internacional; 2) en vez de “otorgar” derechos, ahora se “reconocen”, por lo que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales -con lo cual México se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos; y 3) se recoge la figura de “interpretación conforme” al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos -del rango que sean- se deberán interpretar a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales. “Esto implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad (integrada no solamente por la Carta Magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano”³⁷⁸.

En la reforma también destaca como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas el principio *pro persona* en aquéllas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. En consecuencia, la ampliación de los derechos significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, además de la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, encaminado hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos³⁷⁹.

Así, la reforma constitucional obligó a considerar y profundizar el estudio de dichos tratados en los que se reconocen derechos humanos y de los que el Estado mexicano es parte, entre ellos, los tratados con perspectiva de género como lo son la CEDAW y el de Belém Do Pará.

Cabe recordar que, a partir de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer en 1975, el Estado mexicano adquirió la obligación de lograr la igualdad sustantiva y los derechos humanos de las mujeres signando los siguientes Tratados Internacionales: la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1981), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer -la CEDAW (1981), así como los Protocolos Facultativos de las Conferencias

³⁷⁸ Ver: Carbonell, Miguel, *La reforma constitucional en materia de derechos humanos: principales novedades*, 2012. Disponible en: www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml. Consultado el 15 de enero del 2015.

³⁷⁹ Íbidem.

Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995), además, la Convención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres -de Belém Do Para

5.2 El Movimiento: Red de Mujeres en Plural

La Red de Mujeres en Plural es una asociación política que agrupa a mujeres de diversas ideologías y cuyas acciones han sido determinantes en la vida política nacional, en general, y en el avance de la representación política, en particular. La académica feminista Martha Lamas (2012) escribió sobre ellas: “son priistas, panistas, perredistas, feministas, activistas de asociaciones civiles y mujeres independientes”, quienes han realizado “atinadas y prontas intervenciones” en la vida política del país³⁸⁰.

La mayoría de integrantes de la Red tienen trayectorias de activismo al interior de los partidos y han ocupado cargos de representación política o de dirigencia partidista. Entre ellas, María de los Ángeles Moreno, expresidenta del PRI y senadora; Silvia Hernández, tres veces senadora y quien encabezó la delegación oficial a Beijing en 1995; Amalia García, expresidente del PRD y exgobernadora de Zacatecas, además de Patricia Mercado, excandidata a la presidencia de la República y fundadora del partido México Posible, así como Blanca Guemes, diputada del PAN. Otras integrantes de la Red provienen de la academia, el periodismo y del movimiento de mujeres, entre ellas, Clara Scherer y Flor Zamora, quienes fueron estrategas en el litigio que se realizó rumbo al proceso electoral del 2012³⁸¹.

Las integrantes del grupo recuerdan de manera diferente su ingreso a la Red, sin embargo, coinciden en las acciones que emprendieron hacia el 2012: un taller planeación estratégica, la propuesta integración de mujeres consejeras del IFE y el inicio de un litigio en torno a los derechos ciudadanos ante el Tribunal Electoral (Ortiz y Scherer, 2014).

³⁸⁰ Ver, Lamas. Revista *Mujeres en Plural*, 30 de noviembre del 2012. Revista Proceso No.2024, Agosto, 2015. Disponible en: www.proceso.com.mx/?p=326576

³⁸¹ En el Anexo, se incluyen el listado de las mujeres que participan en la Red. La Red de Mujeres en Plural se fue conformando entre 2009 y 2010 según narran en los textos *Cuotas electorales. Una sentencia histórica*, Alcocer, 2013, x México, y *Contigo aprendí*: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2014.

Clara Scherer, articulista, feminista y pedagoga, describe en el libro *Cuota de género. Una sentencia histórica* (2013) que “una tarde del 2009” respondió a una convocatoria de Patricia Mercado, quien invitaba a una reunión en la sala del Instituto Simone de Beauvoir, en la ciudad de México. Ahí se encontraban mujeres como Martha Tagle, Adela Muñoz y Rosalinda Ávila, entre otras. Ese día Patricia “tomó la palabra y nos dijo que había que hacer algo porque a las mujeres nos estaban borrando del mundo de la política”, tenían el mal sabor de boca por el episodio de las *Juanitas*, cuando en el año 2009, nueve diputadas renunciaron a su cargo para ser sustituidas por los suplentes, todos hombres³⁸².

En el texto *Contigo aprendí. Una lección de democracia gracias a la sentencia 1264* (2014), se describen los comentarios de Patricia Mercado, quien coincide que en octubre del 2009 se reunieron para pensar qué hacer después de las *Juanitas*, dando los nombres de algunas otras asistentes: Ruth Zavaleta, expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Angélica de la Peña, diputada del PRD, y Elsa Conde, ex diputada del Partido Social Demócrata. Ahí, decidieron reunir a más mujeres y tomar la democracia en serio, es decir, ser muy tolerantes e invitar a mujeres interesadas en la participación política” (Scherer, 2013). A la Red se integraron mujeres con amplia experiencia política, que conocían bien de los conflictos vinculados al poder y las dinámicas formales e informales de los partidos políticos (p.105).

5.2.1 El caso de las “las Juanitas”

“Un hecho por demás vergonzoso, relativo a la simulación democrática que viven hoy los partidos políticos, tiene que ver con el caso de las *Juanitas*, denominadas así por el ingenio popular” (Cazarín, 2011: 35). Dicho evento se suscitó cuando en la segunda sesión de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados -3 de septiembre del 2009-, nueve mujeres solicitaron licencia indefinida a su cargo de representación popular para que los suplentes, todos ellos hombres, ocuparan la curul. Esto significaba que si bien los partidos habían acatado el porcentaje de cuota al cual estaban obligados, encontraron

³⁸² Este caso se detalla en el apartado 5.2, El movimiento de mujeres: La Red de Mujeres en Plural, 5.2.1 El caso de las Juanitas.

la manera de hacer una “triquiñuela”. Es decir, el popular dicho mexicano “acátense pero no se cumpla”, se hacía realidad en la LXI Legislatura³⁸³.

¿Por qué se llamó *Juanitas* a estas diputadas? El calificativo provino del siguiente hecho: el PRD realizó un proceso de elección directa entre dos precandidatas a jefas delegacionales, Clara Brugada y Silvia Olivia Fregosa, ganando la primera, por lo que Silvia Olivia, apeló al Tribunal quien le otorgó el triunfo a ella, lo que ocasiono que Clara Brugada quedará fuera de la contienda, presentándose polémicas e inconformidades entre las dos corrientes partidistas.

Lo anterior provocó que bajo la coordinación de la corriente partidista de Clara Brugada, se registrara como candidato a delegado por el Partido del Trabajo a Rafael Acosta Ángeles, conocido popularmente como “Juanito”, bajo el compromiso de que si ganaba, renunciaría para que Clara Brugada ocupara su lugar. “Juanito” ganó la elección y a los pocos meses se retiró del cargo arguyendo cuestiones de salud, lo que permitió a la Asamblea Legislativa – con una mayoría perredista-, nombrar a Brugada³⁸⁴.

Este hecho provocó un intenso debate en la opinión pública, acompañado de una ridiculización del candidato. La lista de Juanitas en el 2009 estaba integrada por mujeres de diversas fuerzas políticas:

1. Yulma Rocha Aguilar (PRI), quien dejaría su lugar a Guillermo Ruiz de Teresa, representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral
2. Ana Ma. Rojas Ruiz (PRI) abrió paso a Julián Nazar Morales, líder cafetalero en Chiapas
3. Olga Luz Espinosa Morales (PRD) fue sustituida por Carlos Esquinca Cancino
4. Mariana Ivette Ezeta (PVEM) Salcedo dejaría la curul a su hermano Carlos Alberto Ezeta Salcedo
5. Carolina García Cañó (PVEM) permitiría el ascenso de Alejandro del Mazo Maza, hijo de Alfredo del Mazo (conocido político mexicano)
6. Katia Garza Romo (PVEM) dejaría la curul a su esposo, Guillermo Cueva Sada –este caso obedeció a auténticas razones de salud.

³⁸³ “Entregan 10 diputados su curul a suplentes” Periódico *La Razón*, México, 3 de Septiembre, 2009, <http://www.httorazon.com.mx/spip.php?article6449>

³⁸⁴ Ver: “Juanito destituye a Brugada; la ALDF prepara su remoción”, disponible en <http://www.proceso.com.mx/?p=120736>, 30 de noviembre del 2009.

7. Laura Elena Ledezma Romo (PVEM) abrió paso a Maximino Fernández Ávila.
8. Anel Patricia Nava Pérez (PT) dejaría el cargo en manos de Primitivo Ríos Vázquez.
9. Karla Villarreal Benassini, del PANAL.

En el mismo periodo, solicitaron licencia dos hombres:

10. Rafael Pacchiano Alamán dejaría su lugar a Alejandra Lagunes.
11. Raymundo Vargas Sáenz quien cedió su lugar a Karitina Sáenz Vargas.

Este hecho provocó el pronunciamiento de organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, los cuales señalaron que esto representaba un fraude a la ley. También feministas y mujeres de los institutos políticos se pronunciaron contra esta acción publicando artículos de opinión o haciendo mención de este hecho en debates públicos³⁸⁵.

En respuesta a las inconformidades, el pleno de la Cámara de Diputados prolongó el permiso de las licencias. Así, algunas diputadas molestas por el retraso de su solicitud, recurrieron al Tribunal Electoral para que, mediante Juicio de Protección de Derechos Políticos, se obligara a la Cámara de Diputados a otorgar las licencias (Cazarín, 2011: 36). Al final, el 22 de diciembre, nada evitó que el pleno concediera los permisos para las respectivas licencias, con lo que se perdió para el segundo periodo de sesiones casi el 10% de representación femenina.

Sobre este caso, una de las seis exgobernadoras, Dulce María Sauri (2010), apuntó “Lo vivido, sí, es un retroceso que nos recuerda –a las mujeres y a todos- que la lucha por los derechos no se gana de una vez y para siempre; que el núcleo duro de la resistencia a los cambios está en la cultura de subordinación compartida por ambos sexos. Eso es lo que hay que cambiar, encuéntrase donde se encuentre, así sea en la Cámara de Diputados”³⁸⁶.

³⁸⁵ Entre diversos artículos que se presentaron sobre el tema se puede leer “Las 12 Juanitas de San Lázaro”, del 21 de enero del 2010, en el que varias activistas dan su opinión. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/111263/las-12-juanitas-de-san-lazaro>

³⁸⁶ Sauri, Dulce, “De las Adelitas a las Juanitas: las luchas de las invisibles”, México, 2010. Disponible en: <http://dulcesauri.blogspot.mx/2010/01/de-las-adelitas-las-juanitas-la-lucha.html>

En el mismo sentido, Santiago Nieto (2013) describe que un análisis minucioso permite, “observar que las legisladoras le dejaron la curul al esposo, al hermano, o la juricracia mexiquense por “presión política? ¿familiar?¿acuerdo previo?¿algún tipo de retribución de por medio? Nunca lo sabremos. Sólo queda el golpe que significó, para la lucha feminista de este país, el caso de las legisladoras que no quisieron serlo” (p.91)

Retomando los antecedentes y acciones de la Red de Mujeres en Plural, Claudia Scherer detalla que la Red permitió que el grupo fuera creciendo y se integraran representantes del interior del país. La primera actividad fue un taller de planeación estratégica con alrededor de 35 participantes a fin de realizar un diagnóstico general y contar con un ruta de trabajo. Las participantes circularon un reglamento de normas mínimas y acordaron que cuando la coyuntura impidiera lograr el consenso por la premura, quien estuviera al frente de la negociación tendría el voto de confianza de las demás integrantes (Scherer 2013:19-21). Este acuerdo sería relevante para las acciones posteriores.

En resumen, las activistas describen que en el 2010 surge formalmente la Red de Mujeres en Plural con el fin de impulsar que más mujeres tengan poder y como resultado de acontecimientos que tienen efectos negativos en el ejercicio de los derechos humanos de las mexicanas, entre otros, “la dificultad por hacer efectivas las cuotas y los presupuestos a fin de impulsar los liderazgos femeninos, derivados de la exclusión de las mujeres”. De acuerdo con Margarita Dalton, académica feminista y Silvia Hernández, ex legisladora en cinco ocasiones, es un movimiento que logró armonizar y conjuntar a mujeres con diferente ideología y con un objetivo común: incrementar la participación política de las mujeres (Ortiz y Scherer, 2014:106).

María de los Ángeles Moreno, exsenadora y expresidenta del PRI, se pregunta ¿qué generó la convergencia de mujeres con distintas filiaciones partidistas, modos de pensar, e intereses en el ámbito político? Ella apunta las motivaciones:

Creo que una clara y contundente situación de inequidad y discriminación por razón de sexo. La cerrazón, abierta o disfrazada, para permitir el acceso de mujeres a posiciones de poder político o económico. Los indicadores de evidente desigualdad, los informes de las organizaciones, nacionales e internacionales (...) La vida cotidiana y la laboral, que muestran indudablemente la persistencia dolorosa del maltrato o la violencia. Los todavía escasos lugares de alta responsabilidad y decisión pública,

curiosamente, más acentuados en las pocas presidencias municipales ocupadas por mujeres (Moreno, 2013:57).

Así la organización se presentó públicamente con un logotipo y paulatinamente organizó eventos con presencia de medios de comunicación y líderes de los partidos políticos e instituciones electorales, como se aprecia en las siguientes imágenes. El logotipo que presentaron fue el que se exhibe a continuación.



Imagen 7
Logotipo de la Red de Mujeres en Plural



Fotografía 8
Integrantes de la Red de Mujeres en Plural recibiendo el premio *Women's Link*. Ruth Zavaleta, (no cocalizabel el nombre), Silvia Hernández, María de los Ángeles Morelia, Angélica de la Peña, María del Carmen Alanís. Foto de julio del 2012.

Otra acción ocurrió cuando, antes de iniciar el proceso electoral, la Cámara de Diputados estaba obligada a nombrar a tres nuevos consejeros en el IFE -los cuales se eligen a partir de ternas³⁸⁷. En esta coyuntura, en marzo del 2011, la Red lanzó la iniciativa “Tres Mujeres, tres espacios”, en la que pedía que las tres vacantes fueran ocupadas por mujeres, demandando a los partidos políticos y el Congreso de la Unión el fortalecimiento de la democracia y la paridad. La petición se presentó a la Junta de Coordinación Política, se cabildeó entre las integrantes de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara y se difundió en los medios de comunicación. Sobre la propuesta, la congresista del PRI Estela Peralta dijo que se debía buscar la participación de las mujeres en este órgano de incidencia política y garantizar la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisión.³⁸⁸

En el texto *Cuotas electorales* (2013) Silvia Hernández narra que dialogó con Claudia Scherer para formar parte de un grupo sin formalidades ni jerarquías y que luchara por los derechos políticos de las mujeres: “Acepté y a los pocos días me comentó la idea de proponer que los consejeros faltantes del IFE, en aquel proceso de designación que había tardado tanto tiempo en concretarse – nada menos que once meses- fueran mujeres- Tres de tres” (p.34). Silvia Hernández no se sumó a la causa por lograr que más mujeres se integraran al Consejo: “creo que en política lo que no se puede no es prudente intentarlo. La política es la ciencia de lo posible” (34). Empero, se sumaría más adelante en la promoción de los juicios a favor de las mujeres.

Meses después, el 7 de abril del 2011, el IFE y la agrupación política Red de Mujeres en Plural organizaron el foro “Más mujeres decidiendo por México”. El objetivo principal de este encuentro fue refrendar los derechos políticos de las mujeres, principalmente de las que militan en los partidos políticos donde asistieron mujeres pertenecientes a los siete partidos nacionales, representantes estatales de coordinación, dirigencias de grupos, secretarías de la mujer o titulares de áreas dedicadas al trabajo de agendas de género. También hubo especialistas en la materia. “Fue para este foro que

³⁸⁷ Desde el mes de octubre del 2010 la Cámara de Diputados debía integrar una terna de aspirantes a Consejeros Electorales y presentarla ante el Pleno para la votación; sin embargo, la falta de acuerdo y consenso entre los partidos políticos retrasó esta obligación constitucional. La reforma que determinaba los nuevos nombramientos correspondía a las modificaciones del 2007.

³⁸⁸ García, Anayeli, *Reiteran Mujeres en Plural su propuesta Tres espacios, tres mujeres*. Disponible en www.cimac.noticias, 25 de marzo del 2011, Consultada el 15 de enero del 2015.

se decidió crear un nombre y un logotipo que les diera mayor institucionalidad” (Scherer, 2013:22).

El panel inaugural lo conformaron mujeres con sólidas trayectorias políticas o académicas: Patricia Mercado, Marcela Lagarde, María Elena Álvarez y Miriam Urzúa, quienes argumentaron a favor de la paridad y la representación de las mujeres, así como la urgencia de obtener avances en ambos aspectos³⁸⁹.

En el Foro se decidió reconocer la trayectoria de diez mujeres luchadoras en el ámbito político: Griselda Álvarez, primera gobernadora de México (PRI, 1979-1985), Amalia García, ex presidenta nacional del PRD (2004-2010) y exgobernadora; las legisladoras y exdiputadas Marcela Lagarde (externa del PRD) por idear e impulsar Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como Angélica de la Peña (PRD) por la promoción de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y Lucero Saldaña (PRI), quien gestionó la Ley General para la Igualdad entre hombre y mujeres.

Además, se reconoció a María Elena Chapa (PRI) y Hortencia Aragón (PRD) por las reformas en materia de cuotas electorales. Asimismo, a Rosario Ibarra, excandidata a la Presidencia de la República y activista por los derechos humanos; a Eufrosina Cruz (PAN), primera mujer indígena presidenta del Congreso de Oaxaca, así como a Lixbeth Loy Song Encalada, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo y Jacqueline Peschard, académica y ex Consejera del IFE.

El logotipo e imagen del Foro “Más mujeres decidiendo por México” y la ceremonia del mismo se presentan en las siguientes fotografías:

³⁸⁹ En el Foro se realizaron cuatro mesas de trabajo. En la primera intervino Armida Balbuena Cisneros, del Centro para el Desarrollo Democrático, Angélica de la Peña, legisladora del PRD, y Blanca Judith Diez, senadora del PAN, quienes expusieron los avances de la reforma política que impulsaba la paridad y el trabajo de las Comisión de Equidad de Género. En la Mesa 2 se presentaron Martha Tagle, Adriana Ortiz, Lucero Saldaña, Claudia Alonso, Alfredo Cristalin y Flor Zamora, con el tema sobre el 2% del presupuesto para el liderazgo político de las mujeres. En la última mesa se abordaron los avances de los juicios para los derechos políticos de las mujeres, bajo la exposición de Cecilia Tapia y los comentarios de Hilda Benítez. Tere Hevia y Elsa Conde, quienes recordaron la importancia del juzgamiento con perspectiva de género. Instituto Federal Electoral.
Disponible en: http://genero.ife.org.mx/ife_ciudadania_permanente.html, consultado 16 de enero del 2015.



Fotografía 9

Evento: Más mujeres decidiendo por México en la que aparece Leonardo Valdés, presidente del IFE y Patricia Mercado, fundadora de la Red de Mujeres en Plural.

Así, a poco años de celebrar el centenario del Primer Congreso Feminista en Yucatán (1917) y a casi 60 años de transcurrido en derecho al voto, un movimiento de mujeres, la Red de Mujeres en Plural, retomando experiencias previas y diseñaba estrategias institucionales para lograr mayores espacios de representación en México.

5.3 La estrategia del movimiento, el litigio judicial

Para la Red de Mujeres en Plural, de acuerdo al texto *Contigo aprendí...*(2013), los lineamientos de la convocatoria del IFE para el proceso electoral federal, fueron aprobados sin que hubiera ningún avance respecto a los registros de la cuota de género.

Como se puede leer, la convocatoria del IFE dejaba claro que “el método de selección democrático” no obligaba a los partidos a cumplir con la cuota electoral bajo el principio de mayoría. Al percibir agotado el diálogo con la autoridad electoral y los partidos, decidieron tomar la vía del Tribunal Electoral mediante el litigio judicial denominado Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, brevemente expuesto en el apartado 5.1.2. La promoción para la protección de los derechos políticos ya tenía precedentes por parte de Patricia Mercado, Martha Tagle y diversas militantes de los partidos políticos, sin embargo, era una idea original presentarlos en conjunto y bajo un mismo objetivo (Alcocer, 2014).

Las mujeres requerían argumentos sólidos para cuestionar la exclusión bajo el principio de mayoría, por ende, la estrategia se hizo con pretensiones de largo plazo, bajo una planificación cuidadosa, pensando en la continuidad, previsibilidad y tejida desde lo político, lo legal y lo mediático. Así, la aportación de las propuestas de Jorge Alcocer y Silvia Hernández, en diálogo con Clara Scherer, Ruth Zavaleta y Flor Zamora, fue diseñar un juicio basado en la defensa del respeto a las cuotas a partir de la explicación que ponía de manifiesto la exclusión de las mujeres, con base en argumentos legales de la recién aprobada reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011 (Alcocer, 2013; Ortiz y Scherer, 2014).

En el mes de julio del 2011, algunas integrantes de la Red -como Flor Zamora, Silvia Hernández, Clara Scherer y Ruth Zavaleta- se reunieron para analizar acciones rumbo a las elecciones del 2012: “Un día recibí una llamada de Silvia Hernández preguntándome qué planes teníamos en Mujeres en Plural para la elecciones. Le comenté que estábamos preocupadas por la situación y me respondió con la propuesta de reunirnos para pensar que sí podíamos hacer” (Scherer, 2013:22). Posteriormente dialogaron con Jorge Alcocer, coordinador general del Centro de Estudios para el Proyecto Nacional Alternativo y director de la revista “Voz y voto”³⁹⁰.

A partir de una propuesta de la Red se inició la búsqueda de una estrategia integral para la protección de los derechos políticos de las mujeres por parte de quienes tenían autoridad para modificar los lineamientos del registro de candidaturas. Para ello dialogaron con los representantes de partidos, coordinadores de bancada del Senado y en la Cámara de Diputados, hasta que llegó la fecha en que el IFE debía emitir la convocatoria para el registro de candidaturas (Ortiz y Scherer, 2014, 111). En el texto *Cuotas de género* (2013), Scherer recuerda lo siguiente:

Nos reunimos varias integrantes respetando la pluralidad a la que nos comprometimos desde un principio. Acordamos que una vía posible era la modificación de reglas del IFE para el registro de candidaturas, por lo que hicimos una propuesta que enviamos a todo el grupo y fue aceptada. Nos dimos a la tarea de visitar a cada uno de los consejeros, empezando con la

³⁹⁰ Jorge Alcocer Villanueva es egresado de Economía y tiene una amplia experiencia política. Militó en varios partidos de izquierda y fue diputado federal por el PRD, partido al que después renunció. Fue asesor para la reforma político electoral de 1994 y contribuyó a la de 1996. También ocupó el cargo de subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y está casado con la política del PRI, Silvia Hernández. Cf. Alcocer, J. *Cuota de género, una sentencia histórica*, et.al. p.220

Dra. Macaria Elizondo, quien en todo momento se ha mostrado como aliada de la causa, y se entusiasmó con la propuesta. Tuvimos la aceptación de cuatro de los siete consejeros que hasta ese momento integraban el Consejo General (p. 22).

Después de que el IFE emitiera el Acuerdo sobre los registros de candidaturas, Flor Zamora, abogada y con experiencia electoral, junto con Jorge Alcocer, revisaron la posibilidad de comenzar un litigio de protección de derechos político-electorales, mientras que Silvia Hernández diseñó la estrategia de acción ante el IFE y el TEPJF, y Clara Scherer articuló la convocatoria en la Red en torno al caso. Para ello, era necesario encontrar a quienes estuvieran dispuestas a firmar el JDC y acreditaran su calidad de militantes en los partidos (Ortiz y Scherer, 2014).

En la crónica de hechos, relatada en el texto *Contigo aprendí* (2014), se describe que fue complicado conseguir a las mujeres que quisieran firmar ya que no era sencillo que las personas con aspiraciones o carreras políticas confrontaran a las cúpulas de los partidos políticos, pero se consideró que a la vez era el momento justo para despertar la voluntad de las mujeres y movilizarse.

Otra dificultad que encontraron, de acuerdo con Flor Zamora, fue lograr la diversidad política ya que en un principio solo se tenían mujeres de dos partidos políticos -lo cual fue superado al lograr integrar a Rocío Reyes, del partido Nueva Alianza. Al final se conjuntaron cuatro mujeres del PRI, una del PANAL y cinco de Movimiento Ciudadano. El juicio se fundaba en la defensa del respeto a las cuotas, con base en argumentos legales de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de junio del 2011. Las signantes fueron: María de los Ángeles Moreno, María Elena Chapa, María Cruz García, María de las Nieves García, Refugio Esther Morales, Rocío Lourdes Reyes, María Fernanda Rodríguez, María Juana Soto, Martha Angélica Tagle y Laura Cerna Lara.

Los primeros juicios se presentaron en la Sala Superior el 7 de noviembre del 2011 y dos más el 8 de noviembre siguiente, una vez que el acuerdo del IFE fue publicado, lo cual ocurrió el día 6 de noviembre: “La batalla había comenzado” (Alcocer, 2013. p.67).

María de los Ángeles Moreno afirma en *Contigo aprendí...* que, a pesar de tener mucho trabajo en el Senado, reunió los documentos requeridos para las integrantes de la Red. Ella declara: “celebro mucho que por convicción y sin esquema previo -porque no sabíamos que el IFE iba a cometer semejante barbaridad- hubo una movilización rápida de la Red de Mujeres en Plural. El juicio procedía y era absolutamente necesario...Sumarnos fue un común acuerdo. Nadie nos obligó; fue actuar por convicción y eso nos dio fuerza a todas las que aceptamos” (p.117). De acuerdo con otras protagonistas, Moreno gozaba de la representación que le otorgaba su fuerte trayectoria política.

El “acto de molestia” se dirigía al Acuerdo sobre registros del IFE, específicamente a lo citado en el apartado Decimotercero y a la posibilidad de tener registros mixtos en las candidaturas, al establecerse que los partidos solo “procurarán” presentarlos del mismo género. En el juicio se solicitaba al Tribunal que se estableciera una interpretación de forma que garantizara la aplicación general de las cuotas electorales establecidas en el primer párrafo del artículo 219 y que las excepciones sólo ocurriesen para el caso de proceso de selección de candidatos que fueran elegidos por el voto directo de la militancia, o en elecciones abiertas a los simpatizantes de los partidos políticos.

Código Electoral (2008)	Interpretación del IFE sobre el párrafo 2º, emitido en el Acuerdo del 2011	Agravio de las Quejas del Juicio de Derechos Político-Electorales
<p>Artículo 219</p> <p>1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de Senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad</p> <p>2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.</p>	<p>Decimotercero</p> <p>Quedan exceptuadas de la regla de género señalada en el párrafo anterior, las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático.</p> <p>Esto es, en caso de que el partido político, <u>no elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático</u>, el partido político o coalición deberá presentar como máximo 180 y 38 candidatos propietarios de un mismo género, a Diputados y Senadores, respectivamente o en forma proporcional dependiendo del número de candidatos electos por dicho proceso, procurando que la fórmula completa se integre por candidatos del mismo género.</p> <p>Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, <u>debe entenderse por procedimiento democrático aquel en el que la elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en que participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha militancia.</u></p>	<p>El apartado Decimotercero se presenta como la fuente del agravio.-</p>

También se pidió al Tribunal que considerara inviable la recomendación que hacía el IFE en el Acuerdo, en el sentido de que los partidos “procuraran” que en las candidaturas de representación proporcional -tratándose de las que debían cumplir con la cuota de género- la fórmula completa fuera del mismo sexo. Es decir, si registraban a una mujer como titular de la candidatura, la persona suplente también debía ser mujer. Se pedía, en concreto, que esta idea no fuera solo una recomendación, sino una obligación dado el precedente de las Juanitas (Alcocer, et.al).

Los argumentos que se emitieron fueron varios. Se fundamentaban en el siguiente orden, primero, que el IFE se extralimitaba en sus funciones al establecer qué era el procedimiento democrático al interior de los partidos políticos, ya que por definición todos los partidos realizaban procedimientos democráticos en la selección de candidaturas; de lo contrario, no podrían haber sido registrados como institutos políticos: “Es evidente que el intento de introducir el acuerdo reglamentario sobre ‘procedimientos democráticos’ no previstos en el Código de la materia, rebasa los límites impuestos por el legislador”³⁹¹.

³⁹¹ En el escrito se establece: I.- Agravios en los que se argumenta que diversos acuerdos anteriores al ahora impugnado, constituyen el origen de una interpretación distorsionante en relación con los dispositivos que atienen a la cuota de género. “Los agravios en los que las actoras alegan que de acuerdo con el contenido de los artículos 2 y 7, inciso b), de la CEDAW, en los que se establece que los Estados partes se comprometen a garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales y que condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas; en la legislación mexicana la llamada ‘cuota de género’ se introdujo, tímidamente, en el texto original del abrogado Código federal electoral de 1990.

Que la cuota de género se reconoció por primera vez hasta la reforma del veinticuatro de junio del 2002, en el texto de los artículos 175 A, 175 B y 175 C del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de ese tiempo, que transcribe literalmente y de los que refiere que aprobaron el acuerdo CG225/2002, aprobado por el Consejo General del IFE en ese mismo año, para ser aplicado en las elecciones federales de dos mil tres y que transcribe en que entre otras cosas se estableció que serían considerados **procesos de elección democrática** aquellos métodos que se realicen mediante la elección del voto libre, directo y secreto.

Que es evidente que en su momento el Consejo General de IFE había tergiversado la disposición legal expresamente establecida por el legislador ordinario, al omitir la condicionante del “voto directo”, y que en los hechos había reformado sin derecho a hacerlo la propia ley al establecer lo que se entendería por “procesos de elección democrática” y que aunque tales hechos eran parte de la historia, se traían a colación por constituir el origen de la distorsión que hasta la fecha sigue haciendo la autoridad electoral al reglamentar el cumplimiento de la cuota de género...

Que el efecto negativo de la cuota de género está demostrado en el estudio “Evaluación de la perspectiva de género en la plataforma de los partidos políticos, candidaturas y cargos de elección. Informe final, Aparicio Javier; Langston Joy y Pérez Bernardo. División de Estudios de Posgrado del Centro de Investigación y Docencia Económica”. Ver, Alcocer, et.al, pags. 140-141.

En segundo término, entre las obligaciones adoptadas por el Estado mexicano en materia internacional, concretamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los Estados parte se comprometen a garantizar a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas y a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales (Art. 7º. Inciso b).

Además, los Estados parte que signaron la CEDAW condenan la discriminación contra la mujer en todos sus formas y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación. Con tal objeto, los Estados parte se comprometen a asegurar por ley y otros medios apropiados la realización del principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Alcocer (2013) describe que cada uno de los argumentos se redactó de manera breve y concreta. Los diez juicios fueron acumulados y turnados para la ponencia del presidente de la Sala Superior, el magistrado Alejandro Luna Ramos. Cabe recordar que, si bien las cuotas habían permitido un avance, la evidencia numérica arrojaba que existía una diferencia sustancial entre el número de mujeres que llegaban por la vía de representación proporcional y la de mayoría relativa (Marván y Márquez, 2013). Por ende, los inconformes se dirigían a lograr una interpretación favorable de la cuota por ambos principios, con énfasis en el de mayoría relativa.

- La Red durante el proceso.

Los asesores legales de la Red les explicaron que las mujeres podían solicitar audiencia con los magistrados del Tribunal para exponer parte de los alegatos, para lo cual la pidieron a María de los Ángeles Moreno solicitar las audiencias. Así, bajo la coordinación de Silvia Hernández, buscaron que un grupo plural de mujeres se reuniera con los impartidores de justicia, bajo el acuerdo de que siempre debería existir un grupo de diferentes extracciones partidistas y también de mujeres sin militancia, como era el caso de Claudia Scherer. El mensaje emitido sería genérico, es decir, se luchaba por todas las mujeres. El objetivo era propiciar un escenario en el que no se les pudiera descalificar como interlocutoras y combatir las prácticas excluyentes de los partidos. En consecuencia, el movimiento desplegó un intenso cabildeo y una amplia exposición de argumentos en las entrevistas con magistrados (Alcocer, 2013; Ortiz y Scherer, 2014).

Durante el proceso se revisaba continuamente el estado que guardaban los expedientes del caso para corroborar el momento en que el magistrado ponente establecería la presentación del proyecto a sus colegas. En el transcurso de esos días, las integrantes de la Red conocieron que la sentencia que había circulado el magistrado venía en contra, esto es, desechaba los juicios con el argumento de que no había ocurrido el “acto de molestia” que afectara a cada una de las quejas.

Al día siguiente de este rumor, un grupo nutrido de mujeres, con partido y sin partido, se presentó ante los magistrados para argumentar lo que Silvia Hernández (2013) había dicho como metáfora: “¿requerimos que un tren nos arrolle para solicitar justicia?” (p.69).

5.3.1 El resultado inicial: la sentencia 12624

El 30 de noviembre del 2011, el Pleno de la Sala Superior entró a conocer el proyecto de sentencia y así pasar al debate en el que intervinieron los siete magistrados. Sobre la resolución, destaca el hecho de que se utilizó como argumento la reforma constitucional en materia de derechos humanos, citando lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la CEDAW, por lo que los principios de no discriminación y de equidad de género resultaban aplicables en la selección de candidaturas por ambos principios, de mayoría y de representación proporcional³⁹².

Una cuestión central tomada en cuenta en la sentencia fue la reforma a los derechos humanos, publicada en junio de 2011. Esta reforma subrayó que los derechos humanos debían interpretarse en el territorio de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales sobre la materia, que en todo momento se procurará a las personas la protección más amplia. El párrafo cuarto del artículo 1º constitucional es claro cuando prohíbe toda discriminación motivada, entre otras causas, por razones de género, como cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y la libertades de las personas. Esta reforma fue referenciada para identificar el derecho que ostenta todo el ciudadano o ciudadana a ser votado para los cargos de elección popular, en términos del artículo 35 Constitucional (Ortiz y Scherer, 2014:30).

³⁹² La crónica jurisdiccional de los hechos también se puede revisar en *Ruta Crítica de la cuota de género a nivel federal. Evolución jurisdiccional*. Instituto Federal Electoral, México, 2012. Disponible en: www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS

En resumen, el Tribunal consideró: 1.- Fundado el agravio de las quejas en el sentido de que el Consejo General del IFE invalidó las facultades del Congreso de la Unión al interpretar el artículo 219 del COFIPE; 2.- Que los procesos de selección de candidaturas a cargos de elección popular en los estatutos de los partidos son, por definición, democráticos, pues de no serlo el IFE no los hubiera validado, por lo que no cabe establecer distinción alguna y por ende, se debe aplicar sin excepción lo dispuesto en el párrafo I del artículo 219 del COFIPE, el cual establece lo siguiente:

Artículo 219.- De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de Senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse **con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género**, procurando llegar a la paridad.

3- En todas las candidaturas a diputados y senadores que los partidos o las coaliciones registren ante el IFE para cumplir con la cuota de género, la fórmula de candidatos deber ser del mismo sexo.

En consecuencia, los efectos y determinaciones de la Sala del Tribunal fueron los siguientes:

a) Expulsar del acuerdo impugnado el párrafo cuarto del punto del acuerdo decimotercero, que decía:

Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, debe entenderse por procedimiento democrático aquel en el que la elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en la que participe un número importante de delegados exprofeso por dicha militancia.

b) Modificar los párrafos tercero y quinto del punto decimotercero del acuerdo impugnado para quedar como sigue:

Esto es, en caso de que el partidos político, elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de selección democrático observando y privilegiando lo previsto en sus estatutos respecto de la forma de elección, el partido político o coalición, en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género a Diputados y Senadores, respectivamente en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 219 de COFIPE.

Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá candidaturas de género distinto de manera alternada. En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género prevista en el artículo 220 párrafo primero del COFIOPE (mínimo 40% del total) la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo género. Tratándose de la lista de candidatos a Senadores, los dos últimos lugares deben ser ocupados por cada un candidato de cada género.

Al final los siete magistrados votaron a favor del proyecto, formulando voto particular el magistrado Flavio Galván Rivera, quien consideraba se violentaba la democracia interna de los partidos políticos en la resolución judicial³⁹³.

Jorge Alcocer (2013) consideró que pocas personas entendieron en su momento la relevancia de la sentencia de la Sala Superior; y entre esos pocos estuvieron los partidos políticos que de inmediato buscaron atajar sus efectos. “Fue intenso el cabildeo de sus representantes y dirigentes nacionales ante el IFE y el TEPJF” (Alcocer, 2013:70).

5.3.2 El resultado intermedio: resistencias partidistas

Después de recibir la sentencia, el 14 de diciembre de 2011 el Consejo General del IFE aprobó el Acuerdo CG413/2011 por el que en acatamiento a la sentencia, modificó el acuerdo número CG327/2011, para indicar que los criterios aplicables para el registro de candidaturas ante el Consejo debía realizarse bajo los criterios de la sentencia, es decir, aplicando las cuotas 40/60% por ambos principios³⁹⁴.

³⁹³ El magistrado Flavio Galván emitió un voto particular en el que se opuso a que se incluyeran más obligaciones a los partidos políticos que no estuvieran establecidas expresamente en el Código de Procedimientos e Instituciones Electorales (COFIOPE). El jurista consideró que la ley no obligaba a los partidos para que los dos integrantes de la fórmula fuera del mismo sexo, por lo que no se justificaba imponer tal requisito, además de que se contravenía el principio democrático que debía imperar en los procedimientos electorales federal: “Al respecto debo decir que no coincido con lo sustentado por la mayoría, dado que se está imponiendo un deber jurídico no previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la legislación electoral federal, en cuanto que la fórmula completa, para el registro de una candidatura, corresponda a miembros (propietario y suplente) del mismo género. Al caso cabe citar el texto de las disposiciones legales que a continuación se transcriben”, Ver, SUP-JDC-12624/2011

³⁹⁴ Ver. Acuerdo del IFE del 14 de diciembre del 2011, disponible en: www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS-CG/DSSesionesCG/CG-acuerdos/2011/diciembre/CGex201112-14/CGe141211ap12.pdf

Sin embargo, en los siguientes dos meses Edmundo Jacobo Molina, en su carácter de Secretario General del IFE promovió el “Incidente de Aclaración de Sentencia”, con los siguientes cuestionamientos: primero, ¿cuáles eran los alcances de la sentencia para el caso de que con motivo del procedimiento de elección democrática establecidos en los estatutos del PAN o de cualquier otro instituto político, no se cuente con la suficiente participación o triunfo de mujeres que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el artículo 219, párrafo I (60/40%)?

Molina también solicitaba saber ¿cuál sería el objeto de la sanción planteada por el artículo 219, párrafo II, al sostener la ejecutoria que el porcentaje de la cuota debe aplicarse con independencia del principio por el cual sean elegidos los candidatos?, y por último ¿cómo podrían dar cumplimiento a lo mandado por el Tribunal dado que a la fecha ya se habían registrado las convocatorias de los partidos, previamente sancionadas por la autoridad electoral federal, considerando una eventual retroactividad y transgresión de derechos adquiridos?³⁹⁵.

A la consulta del 22 de diciembre del 2011 la Sala Superior resolvió como improcedente la solicitud de aclaración de sentencia promovida por el Secretario del Consejo del IFE respecto a la resolución emitida por la Sala Superior el 30 de noviembre de 2011 en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/2011 y acumulados³⁹⁶.

Después de la aclaración por parte del Tribunal, la sentencia tuvo bastantes resistencias para su cumplimiento a lo largo de los siguientes tres meses, comenzando con la interposición de juicios para la protección de sus derechos político-electorales promovidos por algunos hombres. Prueba de ello es que el 23 de diciembre de 2011, Edgar Ortiz, Sergio Trejo Durán, Jorge Aguirre Marín y René Muñoz Vázquez presentaron ante el IFE una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar el Acuerdo del IFE, CG413/2011 que suplió al primigenio CG327/2011.

³⁹⁵ Ruta crítica de la cuota electora. Evolución jurisdiccional. et.al. p.7 El documento completo está disponible en www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS Sesiones CG/CG-acuerdos/2011/diciembre/, consultado el 10 de febrero de 2015.

³⁹⁶Ibidem

Los quejosos establecieron que el acuerdo afectaba su derecho a ser registrados como candidatos a diputados o senadores federales por el principio de mayoría, dado que se aplicaba retroactivamente en su perjuicio el acuerdo impugnado, bajo el argumento que el partido político en el que militaban ya había aprobado las convocatorias respectivas para seleccionar candidaturas. Además, se vulneraba la libertad de auto-organización y determinación de los partidos y la autoridad responsable en el acuerdo impugnado se limitó a traspasar literalmente el texto en ejecución de sentencia, sin que en uso de sus atribuciones y finalidades aclarara las hipótesis de excepción para el caso de que los partidos políticos hubieran emitido convocatorias para tal efecto³⁹⁷.

Aunado a ello debían observarse los alcances, impedimentos y limitaciones que conllevaba el cumplimiento ordenado por la Sala Superior, evitando ambigüedad, incertidumbre e ineficacia del mandato determinado. Por último, de no ser suficientes las solicitudes de registro de candidatos para cumplir con la composición mínima, los actores aducían incertidumbre respecto de su derecho de ser votados ya que no había garantías de que el partido pudiera cumplir la disposición que se les exigía³⁹⁸.

Días después, el día 6 de enero de 2012 Everardo Rojas Soriano, representante Suplente del PAN también realizó una consulta, solicitando al Consejo General la siguiente información: ¿Cuáles eran los alcances de la sentencia emitida por el Tribunal?, ¿cuál era el objeto de la excepción planteada por el artículo 219, párrafo segundo, al sostener en la ejecutoria que debe aplicarse el porcentaje de cuota de género a los candidatos con independencia del principio por el cual sean elegidos? ¿Cómo se podría dar cumplimiento al mandado del Tribunal, tratándose de candidatos que a la fecha ya habían sido registrado, con base a las convocatorias previamente sancionadas por la autoridad electoral, considerando una eventual retroactividad y transgresión a derechos ya adquiridos?

Para dar respuesta, a pocos meses de que terminaran los registros, el 16 de enero de 2012, el IFE desahogó la consulta formulada por el PAN, primero citó la sentencia y expuso los razonamientos del Tribunal³⁹⁹ señalando que: “...sin embargo, el legislador determinó, en el

³⁹⁷Ibid.

³⁹⁸ Ver, Instituto Federal Electoral, op.cit.

³⁹⁹ En el escrito que el IFE entregó al militante del PAN se puede leer: a) “Que es obligación de los partidos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular;

párrafo 2, del citado precepto legal, que están exentas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un procedimiento de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido...”

Lo anterior permitía concluir a la Sala Superior que en principio, era posible que el PAN realizara procedimientos democráticos en cada uno de los distritos electorales y entidades federativas, a fin de elegir a sus candidatos a diputados y senadores de mayoría relativa, puesto que en esos casos no es necesario cumplir el porcentaje previsto en el párrafo primero del aludido precepto normativo. Y que en efecto, el legislador había dispuesto que el principio de equidad de género tiene como excepción aquellos casos en los cuales se lleven a cabo procedimientos democráticos de elección de candidatos de mayoría relativa. En consecuencia, los partidos políticos tenían permiso para no cumplir el citado principio, siempre que, se reitera, se llevaran a cabo, dichos procedimientos no democráticos⁴⁰⁰.

Esto significaba que facultaba al Partido Acción Nacional a la aplicación de la cuota solo por el principio de representación proporcional, es decir, el IFE interpretaba nuevamente, la norma y la respectiva sentencia en perjuicio de las mujeres, aunque desde otra perspectiva, los planteamientos del PAN evidenciaban un dilema respecto al cumplimiento de la sentencia de colocar a 120 y 26 candidatas a la Cámara de Diputados y de Senadores, respectivamente, pues era necesario privilegiar designación de candidatos por encima de elecciones primarias,

b) Que es obligación de los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en las candidaturas a cargos de elección popular; c) Que los partidos políticos deben promover y garantizar la igualdad de oportunidades y procurar la paridad de género en la vida política del país a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso tanto de mayoría relativa como de representación proporcional; d) Que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

También, e) Que en caso de que un partido político o coalición no cumpla con lo establecido en los artículos 219 y 220 del mencionado Código, el Consejo General de este Instituto, debe realizar hasta dos requerimientos para que rectifique las solicitudes de registro de candidaturas y en caso de no hacerlo, sancionar con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. Resolución de la Sala Superior del Tribunal, relativa a los juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos SUP-JDC-14855/2011 y acumulados (11 de enero de 2012). Posteriormente, el 11 de enero de 2012, la Sala resolvió el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano que se interpuso el 23 de diciembre 2011, a fin de impugnar el Acuerdo CG413/2011 que sustituye al primigenio CG327/2011, por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-2012. En dicha sentencia, la Sala Superior y que modificaba el acuerdo número CG327/2011, por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos. Ver, IFE, Ruta Crítica, 2012.confirmando el acuerdo CG413/2011.

⁴⁰⁰ Ídem.

cuyos resultados son imprevisibles para los partidos ya que la militancia puede votar por hombres o por mujeres sin distinción (Marván y Márquez, 2013).

En inconformidad a esta respuesta que daba el IFE al PAN, el 22 de enero de 2012, María de los Ángeles Moreno promovió un incidente de inejecución de sentencia en contra del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos por los oficios emitidos con fecha de 16 de enero de 2012 y mediante los cuales se pretendió desahogar la consulta del PAN con fecha 6 de enero de 2012 (Alcocer 2013).

En respuesta el 16 de febrero del 2012 el Tribunal emitió la Resolución en la que establecía -nuevamente y sin lugar a ninguna duda- que el IFE debía informar a todos los partidos que la sentencia implicaba que debían garantizar el cumplimiento de la cuota, por lo que al menos el 40% de los propietarios de las candidaturas registradas por los partidos a los cargos de diputados y senadores por ambos principios corresponderían al mismo género, así como en las fórmulas para todas las personas suplentes de las mujeres. En consecuencia, ocho días después, el 22 de febrero del 2012, el IFE emitió -finalmente- el acuerdo que señalaba que era obligación de todos institutos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para acceder a cargos de elección popular, así como procurar la paridad en la vida política del país.

Por ende “obligaba a presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a Diputados y Senadores, respectivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En cada uno de los segmentos habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada y, en el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género (mínimo cuarenta por ciento del total, la formula debe integrarse por candidatos del mismo género)”.

Sin embargo, el 26 de febrero del 2012 el PAN solicitó vía recurso de apelación, la impugnación del “Acuerdo del Consejo General del por el que se acató la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral en el incidente de inejecución de sentencia

promovido dentro de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”⁴⁰¹.

Así que nuevamente el 14 de marzo del 2012, la Sala del Tribunal resolvió que se confirmaba el Acuerdo del Consejo General del IFE por el que se debía acatar la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal y ordenó que se vinculara al Consejo General del IFE para que dictara la medidas pertinentes a fin de que todos los órganos que integraran el instituto aplicaran el Acuerdo. Sin embargo, después de estas reiteradas solicitudes de interpretación de la sentencia y acuerdos, así como de las discusiones jurídicas, los partidos no realizaron los registros como establecía la sentencia. Los institutos políticos argumentaron razones como la falta de registros de precandidatas en sus partidos por lo que no podían alcanzar la meta obligada⁴⁰².

Por ejemplo, como se lee en la *Ruta crítica de la cuota de género (2012)*, el PRI señaló que una vez que había realizado sus procesos de selección, “al partido le fue imposible lograr dicha meta...las mujeres sólo participaron en el 31% de los 257 distritos en que la postulación tendría origen en el PRI” Y en el caso de los senadores, sólo logró alcanzar un cumplimiento del 86%, al tener a 28 mujeres registradas (p.25).

En el caso del PAN, después de exponer el número de registros que tenía con base a los métodos de selección democráticos, sobre todo mediante asambleas entre la militancia, detallaba que:

Es así que se advierte que este Instituto no está obligado a lo imposible, ni a postular candidatas en aquellos distritos o elecciones donde no exista interés manifiesto. Los derechos políticos son derechos y no obligaciones políticas. Las acciones afirmativas, deben estar concatenadas con el ejercicio de los derechos políticos, y en tanto no exista una manifestación clara de interés, este instituto está imposibilitado por el momento para registrar candidatas mujeres, por lo que en este orden de ideas, en donde hubo procesos democráticos y no hubo renuncias, se presentan los registros de aquellos que resultaron favorecidos, sean hombres o mujeres... (IFE, *Ruta crítica*, 2012:27)

En síntesis, luego de que el IFE revisara los registros, conoció que el PAN incumplía en lo tocante a las candidaturas al Senado, mientras que las coaliciones encabezadas por el PRI y el

⁴⁰¹ Cf, Marván, María y Marquéz, Libia. (2013). “*Democracia interna de los partidos vs cuota de género, ¿Dilema sin solución?*”, en Instituto Federal Electoral, *Retos a 60 años de la aprobación del voto de mujeres en México*, IFE, México, 2013.

⁴⁰² *Ibidem*

PRD no alcanzaban el porcentaje mínimo para diputadas por el principio de mayoría, mientras que el PAN, PT y Verde Ecologista no alternaron correctamente sus listas de representación proporcional a la Cámara de Diputados (Marván y Marquéz, 2013).

Ante el incumplimiento por parte los partidos, en sesión extraordinaria del 26 de marzo del 2012, el IFE emitió el Acuerdo por el que iniciaba el procedimiento especial para dar un tiempo perentorio a los partidos para acatar al cien por ciento lo que establecía la sentencia. Ahí se determinó que existían elementos suficientes para que la autoridad presumiera un posible incumplimiento al artículo 219 del COFIPE y advertía que, vencidas las 48 horas, el Consejo General sesionaría para otorgar el registro de candidaturas a los partidos o coaliciones que hubieran cumplido con el requerimiento o, en su caso, para sancionar con una amonestación.

Además se les requeriría para que en menos de 24 horas hicieran la corrección. Habiendo transcurrido este último plazo, el Consejo sesionaría nuevamente, ya fuera para otorgar el registro de las candidaturas a quienes hayan cumplido con el requerimiento o, en su caso, para sancionar con la negativa del registro de las candidaturas al partido o coalición que reincidiera (IFE, *Ruta crítica*, 2012, pags.33-35). Esto último parece no haber sido considerado por los partidos, ya que era más previsible someterse a una amonestación como había ocurrido en el pasado, que tomar el riesgo de no presentar registros de candidaturas.

Desde la perspectiva de la Red de Mujeres en Plural, la sentencia representó un gran avance y evitó que nuevamente, se hicieran trampas para cumplir con la ley. Ello les permitió un atajo que cuyos alcances desconocían cuando iniciaron el litigio judicial.

5.1 Efectos del movimiento y una Sentencia con perspectiva de género

A partir de los resolutivos de las instituciones electorales, por primera vez, el registro de candidaturas de mayoría y de representación proporcional para el Congreso de la Unión alcanzó la paridad en la Cámara de Diputados y se aproximó a la misma en la Cámara de Senadores. Para conocer el impacto de la sentencia en la Cámara Baja, pueden compararse las cifras del 2012 respecto al año 2009. También pueden tomarse en cuenta las cifras del 2006, última vez que la ciudadanía había elegido a los representantes del Senado.

En el proceso electoral del 2009 y en el del 2012 se contaba con el mismo marco jurídico respecto a las cuotas electorales -no más del 60% para cada uno de los sexos. En el 2009, las mujeres candidatas representaban 38.9% del total de candidaturas a legisladores, sumando la cantidad de 1397 mujeres registradas por ambos principios. En contraste, las candidatas a la Cámara de Diputados en el 2012 sumaron 1366 mujeres por los principios de representación proporcional y de mayoría relativa, sin embargo, del total de registros, mayoría y representación proporcional, sumaban un 53% (Aparicio, 2009:25; Marván y Marquéz, 2013).

Tabla 20

Distribución porcentual de candidaturas por tipo de postulación según el sexo

	Hombre	Mujeres	Total	Hombres%	Mujeres %	Total
Diputados/as de mayoría relativa						
Propietarios	515	654	1169	44.1	55.9	100
Suplentes	788	369	1157	68.1	31.9	100
Diputados/as de representación proporcional						
Propietarios	688	712	1400	49.1	50.9	100
Suplentes	575	885	1460	39.4	60.6	100

Fuente: elaboración propia con base a los datos del CEAG y el IFE⁴⁰³.

Respecto a las candidaturas por vía de RP no existe una diferencia significativa, ya que los partidos estaban obligados a presentar las listas alternadas de hombre y mujer en los primeros cinco lugares, con base la norma del 60/40. Como describe Javier Aparicio (2012) “en la práctica, las listas de RP en México son paritarias”⁴⁰⁴. Cabe señalar que Aparicio y Langston (2009) demostraron que el incremento de mujeres en el proceso del año 2009 se dio por la aplicación del principio de representación proporcional y no por las candidaturas de mayoría, donde no se aplicaban las cuotas.

⁴⁰³ En, http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/participacion_politica/sipp3_2/indice.html. Consultado, marzo 2015

⁴⁰⁴ Ver. Aparicio, *La aritmética de las cuotas de género*, 2012, Disponible en <http://javieraparcio.net/2012/03/28/aritmetica-cuotas-genero/>, consultada el 10 de febrero de 2015.

Otro efecto de la sentencia se encuentra en el análisis de las suplencias que obligaron a registrar a mujeres suplentes a fin de evitar un caso como el de las *Juanitas*. En la Cámara de Diputados, donde se había suscitado el lamentable episodio de las renunciadas, el 100% de las candidatas mujeres llevaron suplentes mujeres por ambos principios. En el caso de mayoría relativa, se registró un 31.9 %, lo que significa que la fuerza de la resolución del Tribunal Electoral se limitó al caso de la representación proporcional, donde alcanzó un 60.6% de suplentes. Ello significa que varios hombres fueron acompañados en sus fórmulas por mujeres.

Tabla 21
Comparativo de elecciones a diputados federales por mayoría relativa

2006				2009				2012			
Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres	
59	19.7%	241	80.3%	77	25.7%	223	74.3%	91	30.3%	209	69.7%

Fuente: Marván y Marquéz, (2013:78)

Respecto al Senado, el número total de candidatas fue de 234 por ambos principios, lo que representó el 45% del total.

Bajo el principio de representación proporcional se inscribieron 108 mujeres, es decir, el 48.9%, mientras que por el principio de mayoría fueron 126 mujeres, esto es, el 42.6%. En contraste, en la última elección de Senadores realizada en el 2006, con base en el Acuerdo publicado por el IFE en ese año, se presentaron por el principio de mayoría, 89 mujeres, constituyendo el 33.4% frente a un total de 266 candidatos, de los cuales 177 eran hombres.⁴⁰⁵

⁴⁰⁵ Cf. Instituto Federal Electoral, *Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se registran las candidaturas de las coaliciones “Alianza por México” y “Por el Bien de Todos”, y en ejercicio de la facultad supletoria, las candidaturas presentadas por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, a Senadores al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2005-2006*, Disponible en. http://pac.ife.org.mx/2006/notas/05/pac_nota_senadores_02abr2006.html. Consultado el 15 de febrero del 2015.

También se consultaron las bases de datos del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, disponible en. http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/participacion_politica/sipp3_2/indice.html. Consultado el 15 de febrero del 2015.

Con ello se observa que se incrementó en casi 10% la presencia de candidatas al Senado por el principio de mayoría respecto del periodo anterior.

Tabla 22

Distribución porcentual de candidatos al Senado por tipo de postulación según sexo 2012

	Hombre	Mujeres	Total	Hombres %	Mujeres %	Total
Senadores/as de mayoría relativa						
Propietarios	170	126	296	57.4		100
Suplentes	123	172	294	41.8		100
Senadores /as de representación proporcional						
Propietarios	113	108	221	51.1		100
Suplentes	96	125	221	43.4		100

Fuente: elaboración propia con base a los datos del CEMEAG y el IFE⁴⁰⁶.








Cabe recordar que si bien en la Legislatura 2009-2012, las mujeres alcanzaban el 33.6% de representación; después de la renuncia de las diputadas, ésta se redujo al 28.1%. En los hechos, aunque se alcanzó la masa crítica, ésta no se mantuvo durante el periodo legislativo por el caso de las *Juanitas*.

Así, después de la Sentencia 1264 y de llevarse a cabo el proceso electoral federal, la Cámara de Diputados quedó integrada como se describe en la siguiente tabla.

⁴⁰⁶ En, http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/participacion_politica/sipp3_2/indice.html. Consultado, marzo 2015

Tabla 23

Conformación de la Cámara de Diputado por sexo y principio de elección 2012








Grupo Parlamentario	Mayoría relativa			Representación proporcional		
	Mujeres (%)	Hombres (%)	Total	Mujeres (%)	Hombres (%)	Total
	7 (13%)	45 (87%)	52	29 (47%)	33 (53%)	62
	56 (34%)	108 (66%)	164	24 (49%)	25 (51%)	49
	18 (31%)	40 (69%)	58	19 (45%)	23 (55%)	42
	1 (20%)	4 (80%)	5	5 (50%)	5 (50%)	10
	5 (38%)	8 (62%)	13	7 (47%)	8 (53%)	15
	2 (25%)	6 (75%)	8	6 (50%)	6 (50%)	12
	0 (0%)	0 (0%)	0	5 (50%)	5 (50%)	10
TOTAL	89 (30%)	211 (70%)	300	95 (47.5%)	105 (52.5%)	200

Fuente: INE. Disponible en: http://genero.ife.org.mx/legislativo_dip.html#diputadosLXII-2013-actual

Como se muestra en la gráfica anterior, una diferencia de poco menos de diez diputadas llegó por la vía de representación proporcional. Ello puede tener como causa que algunas mujeres fueron enviadas a distritos de baja competitividad u otras razones, como lo detalla el estudio de fondo de Javier Aparicio (2011) quien explica que el “triunfo o derrota de una candidata depende de varios factores tales como el rival o partido que enfrentan, la fuerza del partido que la postura, así como la experiencia previa que tiene cada uno de los candidatos” (p.22).

En lo que respecta al Senado, se logró pasar de un 22.6% de representación en la Legislatura (2009-2012), a un 33%, lo que significó una diferencia de casi 10 puntos porcentuales.

Tabla 24
Conformación de la Cámara de Senadoras/es por sexo (2012)

Grupo Parlamentario	Total del Senado		
	Mujeres (%)	Hombres (%)	Total
	11 (29%)	27 (71%)	38
	19 (36%)	34 (64%)	53
	6 (27%)	16 (73%)	22
	2 (50%)	2 (50%)	4
	2 (25%)	6 (75%)	8
	1 (50%)	1 (50%)	2
	1 (100%)	0 (0%)	1
TOTAL	42 (33%)	86 (67%)	128

Fuente: INE, Disponible en: http://genero.ife.org.mx/legislativo_sen.html#senadoLXII-2012

Lo anterior, permite ver el incremento en ambas cámaras. Así, la representación de mujeres alcanzó la anhelada masa crítica en el Congreso de la Unión, lo que permitió a México, colocarse dentro de las primeras 18 naciones de un promedio de 144 países, con mayor representación de mujeres, como se aprecia en la siguiente gráfica:

María Marván (2009) reconoce el avance que propició la sentencia, sin embargo, advierte que éste no se debe sobredimensionar, ya que previamente había un incremento paulatino de mujeres en la representación del Congreso de la Unión -lo cual se comprueba con el estudio que ella realiza sobre los resultados comparativos en los últimos tres procesos electorales de las candidaturas de mayoría relativa. Al analizar los números se puede constatar que “a pesar de que todos los partidos cumplieron con presentar el 40% de mujeres candidatas en el 2012, accedieron a la Cámara 4.6% más mujeres que en 2009” (p.77). En tanto, entre el 2006 y el 2009, el porcentaje de mujeres se incrementó en un 6%, aunque disminuyó por el caso de las Juanitas.

5.4.2 Factores que posibilitaron la sentencia.

Se puede señalar que en el centro del debate y comprensión de cómo el Tribunal Electoral emitió la Sentencia 12624, dos aspectos nodales, primero, el juzgamiento y la interpretación jurídica con perspectiva de género y segundo, la resolución en torno antiguo debate de la democracia interna de los partidos políticos vs. las cuotas electorales.

Sobre el primer punto, cabe resaltar que ni el derecho y ni la interpretación jurídica por parte de los tribunales y las cortes han sido ajenas a las corrientes teóricas feministas. Una de las razones que explica que el Tribunal mexicano emitiera una sentencia con fundamento en la CEDAW y que aplicara un criterio favorable a las mujeres se debe, en parte, al juzgamiento con perspectiva de género.

Las juristas Alda Facio y Lorena Fries (1999) han expuesto cómo el derecho podía ser un medio para reproducir el patriarcado, los estereotipos de género y la discriminación en razón de sexo, por ello, el movimiento de mujeres ha luchado por dotar a la disciplina de una nueva comprensión interpretativa: “Se puede utilizar el pensamiento feminista para visibilizar la estructura del derecho, históricamente condicionada a la parcialidad por haber tomado como modelo del sujeto del derechos y obligaciones a lo masculino” (p.60). Por ello, se ha ido

desarrollado la metodología para la aplicación de la perspectiva de género y así lograr ponderar derechos y principios en casos concretos de discriminación⁴⁰⁷.

La impartición de la justicia con perspectiva de género no es un asunto de voluntad dado que ha requerido de un largo y riguroso programa de transformación institucional que implica la sensibilización de las personas, la transversalidad de presupuestos, la coordinación con otros órganos y la formación de nuevas habilidades teóricas (Facio, 2009).

Como narra la magistrada Carmen Alanís (2014), desde el año 2009 juzgadoras electorales de Iberoamérica se reunieron para acordar las acciones que permitirían transitar hacia el juzgamiento con perspectiva de género, entre ellas utilizar las acciones afirmativas; incorporar la perspectiva de derechos humanos de las mujeres en la aplicación e interpretación de las normas jurídicas; garantizar la incorporación de mujeres a la carrera judicial; así como condenar los actos de discriminación que se den en la justicia electoral y en los partidos políticos. Además, recomendar a los países la efectiva aplicación de mecanismos que garanticen la plena participación política de las mujeres e incluir en la clasificación de jurisprudencia un rubro de género.

Dichos compromisos impactaron gradualmente al Tribunal Electoral en México, cuyos magistrados desde 2007 se propusieron transformar la institución. El Poder Judicial participó de procesos de sensibilización y capacitación que paulatinamente produjo sentencias con este criterio. Así, el objetivo fue dotar a los participantes de los contenidos de tratados internacionales y leyes que obligan al juzgamiento con perspectiva de género y a la promoción de la igualdad, además de incidir en una revisión crítica en la que cada individuo revisaría su propia historia y posición frente a la vida, para determinar en forma autocrítica si ésta es o no libre de prejuicios y estereotipos de género (Alanís, 2014)”⁴⁰⁸.

⁴⁰⁷ Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad*, México, 2013.

⁴⁰⁸ En la ponencia presentada de Carmen Alanís (2014), la magistrada explica las acciones que emprendió el Tribunal en materia de Equidad de Género. Por ejemplo, se trazó un Plan Estratégico Institucional 2010-2016 con objetivos de largo aliento con para de lograr la igualdad de oportunidades y no discriminación. También se etiquetó presupuesto específico para el tema.

Además se realizaron tres estudios de diagnóstico: uno de Ambiente laboral en la institución, otro sobre Mujeres candidatas, y otro sobre Justiciables, en el cual se detectó que la mayoría promovía recursos en torno al as cuotas electorales y muy pocas en materia de discriminación. También se conformó un Comité de los tres órganos que conforman al poder Judicial de la Federación, con el objetivo de unificar los criterios para institucionalizar la perspectiva de género en el Poder Judicial de la Federación, así como dar seguimiento y evaluar las acciones y los proyectos que en materia de equidad de género realiza cada una de las tres instancias que lo conforman.

Al mismo tiempo que el Tribunal entraba en este nuevo horizonte institucional, existía ya un claro reclamo de las mujeres por justicia electoral. De acuerdo al estudio de Dulce Alejandra Camacho (2009), desde la creación del Tribunal en 1996 hasta el año 2008 se promovieron 20 mil 789 juicios ciudadanos; de ellos, 41.5% fueron presentados por mujeres. Camacho clasifica los asuntos en aquéllos relacionados con la interpretación del sistema de cuotas y los que tienen que ver con la discriminación, y concluye que la mayoría de los asuntos versaron sobre el sistema de cuotas, en parte por la ambigua redacción legal de las mismas en las entidades federativas. Apenas en tres casos se argumentaban cuestiones de discriminación.

Es de resaltar que en la mayoría de los casos interpuestos por mujeres -el 98.5%-, los agravios se consideraron fundados. En un 52.3% se dirigían contra los partidos políticos, mientras que en un 38.5% se promovían contra la autoridad electoral y los restantes, hacia otras autoridades como alcaldes o legislaturas locales. La investigación arroja que la mayoría de las promotoras de los juicios fueron militantes del PAN con un 70.4%; después, del PRD con 19.5%, mientras que las mujeres del PRI solo incidieron con un 3.2%. El resto -6.7%- vinieron de las otras fuerzas políticas (Camacho, 2009:137).

Para Santiago Nieto -actual titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y exmagistrado de una Sala Regional -el Tribunal fue desarrollando una actividad trascendente en materia de protección de derechos político-electorales para las mujeres, logrando que las y los magistrados fueran argumentando a favor de la igualdad formal y substancial: “En varios espacios, jueces y juezas, magistradas y magistrados, ministros y ministras, secretarios y secretarías, empiezan a asumir como propio el discurso de la igualdad substancial”. Por ende, “nadie puede negar que existe una fractura en la posición monolítica de los hombres” respecto a la impartición de justicia electoral, siendo necesario “juzgar con ojos de mujer” (p.157).

Así, previo al 2012, el Tribunal Electoral a través de la Sala Superior principalmente, pero también de las Salas Regionales, comenzó a librar importantes batallas a favor de los derechos políticos de las mujeres, en específico sobre las cuotas. Algunas de las sentencias relevantes que evidencian lo anterior, son las siguientes:

1) En el 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por la validez de las cuotas electorales, como ya se había señalado. Cabe recordar que en países como Francia o Colombia, las cuotas fueron declaradas inconstitucionales. En este caso, la Suprema

Corte argumentó que no toda desigualdad de trato ante la ley vulnera la garantía de equidad; que a iguales supuestos de hecho, se les deben aplicar iguales consecuencias jurídicas, por lo que una desigualdad de trato que se apoya en criterios razonables y objetivos no vulnera dicho principio. Además, que el trato diferenciado debe ser lícito, proporcional y adecuado, de tal manera que exista una relación entre la medida adoptada y el objetivo pretendido por el legislador (Alanís, 2013).

2) La Sala Superior revocó la Sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en el año 2008, al considerar que conforme al artículo 10, la regla de la cuota de género es de observancia permanente, y no constituye un mero requisito para obtener una candidatura, sino una norma que pretende generar condiciones de igualdad en el acceso a los cargos⁴⁰⁹.

3) El caso de alternancia en las listas de representación proporcional del año 2009. La militante del PRD Mary Telma Guajardo, impugnó la resolución de la Comisión de Garantías y Vigilancia de su partido, respecto a la lista de representación proporcional. La lista que presentó el partido en los primeros cinco lugares se integraba bajo el siguiente orden: una mujer, dos hombres y dos mujeres. Con fundamento en la CEDAW y la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres el Tribunal obligó al partido a modificar el orden de la lista dado que se había conformaba en beneficio de los hombres.⁴¹⁰

4) Otra sentencia es la descrita en el presente Capítulo, la Sentencia 12642. Sobre la misma, la magistrada Carmen Alanís (2014) detalla que ésta constituye una resolución con perspectiva de género por tres razones: el interés de las militantes por controvertir la decisión del Acuerdo sobre los registros; el haber puesto fin a la excepción del cumplimiento de la cuota de género en candidaturas de mayoría; además, respecto a la obligación de que las mujeres deberían tener una mujer suplente mujer, abriendo la posibilidad de que ellas si pudieran ser suplentes de los hombres (p.18).

⁴⁰⁹ El caso fue un juicio de revisión constitucional electoral, cuyo actor era el Partidos Verde Ecologista de México y la autoridad responsable el Tribunal Electoral del Distrito Federal. El expediente fue: SUP-JRC-96/2008. Disponible en: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JRC/SUP-JRC-00096-2008.ht>

⁴¹⁰ Este caso fue el SUP-JDC-461-2009 promovido por Mary Telma Guajardo, en contra de la Comisión de Garantías y Vigilancia del PRD. Se fundó en la violación al artículo 220 del COFIPE que señalaba que “Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada” (p. 84).

El Tribunal Electoral también emitió resoluciones en materia de integración de los órganos electorales para que mujeres fueran funcionarias electorales, consejeras o magistradas⁴¹¹, y en temas de financiamiento público de partidos políticos⁴¹².

Posterior al año 2009, se pueden localizar alrededor de treinta y cinco sentencias, tesis y jurisprudencias relevantes elaboradas bajo criterios para la equidad de género, dado que el mismo Tribunal comenzó a establecer como una prioridad lograr la consolidación democrática, efectiva y cercana de los grupos en desventaja social histórica⁴¹³.

⁴¹¹ En este sentido se han presentado impugnaciones, tanto de mujeres como por hombres, cuando se considera que los órganos electorales como los Tribunales o instituciones no se integran de forma equitativa como los marcos normativos nacionales e internacionales signados por México. Un caso reciente, del año 2014, se presentó ante la convocatoria que emitió el Instituto Federal Electoral para participantes al servicio civil de carrera en la institución, en la que solo podían inscribirse mujeres. El objetivo de IFE fue equilibrar el personal por razón de sexo, ya que la mayoría de los servidores públicos eran hombres.

Algunos hombres impugnaron la convocatoria del IFE, ya que consideraron que esa situación era discriminatoria. Después de un test de proporcionalidad, el Tribunal confirmó el concurso, ya que se trataba de una medida eficaz, especial y temporal que contribuiría a reducir la asimetría que existe en el servicio profesional, en el cual las mujeres apenas están representadas en un 21.8%. Cf. Nieto, Santiago, *Los derechos en tiempo de género*, Instituto Electoral de Querétaro, México, 2013, y Alanís, María del Carmen, “Contribuciones de la Justicia Electoral al fortalecimiento...”, ponencia presentada en el Congreso “Mujeres, política y democracia. Rompiendo los techos de cristal en América Latina”, Salamanca, España, del 23 al 28 de marzo, 2014.

⁴¹² Desde el año 2008, como parte de las acciones afirmativas, se estableció en el Cofipe que el 2% del financiamiento público de los partidos políticos debía destinarse a promover el liderazgo político de las mujeres. A la letra se estipuló lo siguiente: “Artículo 78 1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes: (...) V) Para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente el dos por ciento del financiamiento público.

Sin embargo, a través de la Unidad de Fiscalización del IFE, instancia responsable de aplicar la norma en materia de financiamiento, se observó que no se acataba la norma en este rubro. Por ejemplo, en el año 2010 el PRD reportó en su informe anual de gastos por este rubro aspectos como pago de nómina, papelería, gasolina, entre otros. El IFE resolvió que estos gastos no se relacionaban con la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres, como marcaba la ley por lo que emitió una sanción al partido. Ante dicha resolución, el partido político llevó a cabo una apelación en el Tribunal Electoral, el cual resolvió que efectivamente, los gastos que reportaba el PRD no se relacionaban directamente con lo que establecía la norma relativo al 2% de financiamiento para el empoderamiento político de las mujeres. Ver: Instituto Federal Electoral, *El compromiso de ejercer el gasto para el liderazgo político de las mujeres. La acción afirmativa para la democracia*, y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, *Recurso de apelación SUP-RAP-175/2010*, disponible <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00175-2010.htm>

⁴¹³ A partir de años 2009 y sobre todo, de la sentencia histórica 12624 del 2011, se puede localizar una mayor cantidad de sentencias, tesis y jurisprudencia por parte del Tribunal Electora con una perspectiva de género. Por ejemplo, se emitieron varias resoluciones en el ámbito federal, estatal y municipal, así como de aplicación en el distrito federal, a fin de respetar los principios de alternancia en las listas representación popular, en la conformación de planillas en los Ayuntamientos, en el respeto a las cuotas, o en la integración de los órganos partidistas. Además, en materia de conformación de los órganos electorales y designaciones de conejeros. Un estudio que resume la producción de Tribunal, es el realizado en el 2014 por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, *Democracia igualitaria. Criterios jurisprudenciales para la equidad de género e inclusión de comunidades indígenas*, México, 2014.

De manera similar a México, en países de América Latina los tribunales y cortes se fueron sumando a esta ola para juzgar con lentes de género -como las descritas en el Capítulo IV, apartado 4.2 sobre medidas de apremio para la eficacia de las cuotas electorales. Sin embargo, no se puede negar que el sistema de impartición de justicia aún no ha logrado incorporar en todos sus espacios de forma transversal la perspectiva de género; el lenguaje jurídico aún es sexista, lo que da como resultado la inequidad en el acceso a la justicia de las mujeres (Nieto, 2013).

Sobre el segundo aspecto que posibilitó la Sentencia favorable a las mujeres, es la apuesta que hicieron los magistrados por dar prioridad a las cuotas sobre el proceso interno de selección de candidaturas, lo cual, como se apuntaba en el apartado sobre el reclutamiento o selección de candidaturas (4.4.1), es fundamental para que las mujeres alcancen el poder.

En el proceso de análisis para emitir la sentencia, el debate nodal, era ponderar sobre dos principios que se encontraban en conflicto, los procesos internos de los partidos políticos o regla de las mayorías y las cuotas electorales. y a que antes de la Sentencia, el marco normativo había resuelto la tensión obligando a cumplir con las cuotas electorales sólo por el principio de representación proporcional, empero, el gran universo de candidaturas de mayoría, aún dependía de la voluntad de los partidos para integrar a más mujeres candidatas. Como describe María Marván (2013) y posteriormente Gustavo Madero (2013), presidente del PAN, dos principios estaban en confrontación en la resolución el Tribunal: la acción afirmativa sobre cuotas electorales y la democracia interna de los partidos políticos.

Ello representa una paradoja, ya que desde algunas perspectivas, los métodos de selección abiertos y entre la militancia favorecen la democracia de los partidos, en contraste con las designaciones por parte de las cúpulas (Freidenberg, 2007).

En este sentido, Magda Hinojosa (2012), en un estudio ya citado sobre la selección de candidatas a alcaldesas en América Latina, demuestra que la selección interna de los partidos disminuye el potencial de las mujeres para alcanzar el cargo, mientras que la designación centralizada potencializa su triunfo, por lo que se presenta una paradoja, lo que hace bien a la democracia de los partidos perjudica a las mujeres, lo cual es demostrado, sobre todo en el ámbito municipal.

En un ejercicio de ponderación los magistrados optaron por el primer criterio, la aplicación de las cuotas. En el ensayo jurídico sobre el control constitucional de una medida de acción afirmativa, Jesús Ibarra (2013) sostiene que una argumentación que se apoyó en los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres y que privilegió alcanzar la equidad de género en el ámbito político, contribuye a derrotar el *statu quo* y la dominación masculina⁴¹⁴. El jurista argumenta que las cuotas son democráticas ya que entender como mecanismos opuestos de integración de la representación política a las cuotas de género y a los procedimientos democráticos de elección, únicamente tiene sentido bajo una concepción formal o minimalista de la democracia, según la cual, la democracia consistiría en la omnipotencia de la regla de la mayoría

Por el contrario, apunta Ibarra (2013) si prevalece la equidad de género, se vulnera la libertad de la mayoría, empero, dicha tensión que es similar a un “juego de suma cero” se supera atendiendo a una versión menos simplificada de la democracia en la que el principio rector no sea solo la soberanía de la mayoría, sino que, retomando versiones de la democracia de corte sustantivo, como la del jurista Luigi Ferrajoli⁴¹⁵, se considere la democracia como la

⁴¹⁴ En sus análisis, Jesús Ibarra resume que fueron cuatro los temas polémicos que debatieron los magistrados en torno a lo que él denomina “discriminación inversa”: a) la eficacia para lograr la equidad en la conformación del Congreso; b) la exclusión de la cuota en las candidaturas de mayoría; c) el carácter democrático de esta clase de mecanismos; d) el carácter violatorio al principio de igualdad. Para el autor es importante considerar el antecedente de las *Juanitas* en dicha resolución para contextualizar la sentencia.

Si bien, respecto a la aplicación de la cuota por las candidaturas de mayoría, los magistrados consideraron que el criterio de equidad de género debía aplicarse por lo que obligó a que se cumpliera con la obligación 60/40, éste no fue argumentado suficientemente, no existen argumentos suficientes que resuelvan la contradicción. Hasta la reserva del magistrado Flavio Galván Rivera se razona sobre las excepción indicada: ahí se señala que debe prevalecer la excepción de aplicar la cuota en las candidaturas de mayoría para no “contravenir el principio democrático que debe imperar en los procedimientos electorales federales” previstos en varios artículos de la Constitución.

⁴¹⁵ Luigi Ferrajoli (1940) ha sido juez en la República de Italia y ha ejercido como profesor de Filosofía del Derecho y de Teoría General del Derecho en la Università di Camerino y en la Università degli Studi Roma Tre. Es una de las figuras más importantes del actual debate internacional en torno al tema de los derechos humanos, las garantías constitucionales y el derecho constitucional. Varias de sus obras han sido traducidas al castellano, destacando entre ellas la reciente *Derechos y garantías* (2009).

En esta última obra, Ferrajoli defiende –de nueva cuenta– la idea de que es preciso pugnar por la sujeción de toda forma de poder –especialmente en el plano internacional– al derecho. Para ello, recurre a la tesis que los derechos fundamentales conforman la dimensión sustancial de la democracia –siendo los procedimientos políticos la dimensión formal de la misma. Esto convierte a tales derechos en “vínculos sustanciales normativamente impuestos” que se supraordenan respecto a los poderes públicos y sirven como parámetro para la validez de tales poderes (Ferrajoli, 2009: 51). Para este autor, es preciso que esta idea se extienda más allá del plano de las constituciones nacionales hacia el derecho internacional –y de esta manera, ofrecer una base firme a los derechos humanos.

En lo que toca a temas relacionados con la equidad de género, el pensador italiano sostiene que algunas críticas feministas de corte diferencialista han malentendido la relación entre “igualdad” y “diferencia”. La igualdad es una norma jurídica, mientras que las diferencias son rasgos específicos que individualizan a las personas y por tanto son materia de los derechos fundamentales. De modo que “igualdad” es, en estos términos, una noción que no se opone a “diferencia” sino a “desigualdad”, es decir, la situación de disparidad suscitada por la

representación política de todos los sujetos sociales. Es decir, “procedimientos democráticos” no es algo que se circunscribe a una votación que demuestre mayoría. De esta manera, la democracia constitucional, al centrar su legitimación en los derechos fundamentales y en el principio de igualdad, no solo está en sintonía con las medidas de discriminación inversa, sino que da cuenta con mayor solidez del movimiento feminista y su logro en la ampliación de derechos (p.157).

María Marván (2013), consejera del IFE desde el año 2011, describe que la eficacia de la sentencia es irreplicable por sí misma y que el siguiente paso necesario para avanzar es una reforma jurídica del código electoral y de los estatutos de los partidos para que exista coherencia con la Constitución (p.93).

La Sala de la Sentencia Superior, consciente o inconscientemente, estableció que las cuotas de género eran más importantes que la democracia interna de los partidos políticos. De cara al futuro inmediato es indispensable dilucidar si es en verdad necesario escoger entre una y otra o es posible proponer reformas que puedan dar buenos terrenos en la vida político-electoral mexicana, es decir, fomentar la democracia interna y al mismo tiempo lograr que ninguno de los géneros esté sobrerrepresentado (Marván, 2013:75).

5.4.3 Perspectivas y opiniones de la Sentencia

El debate que sostuvieron los magistrados electores fue trascendente, ya que debían entender los razonamientos de las participantes, el nuevo orden constitucional, así como la dinámica de los partidos y su marco legal.

Algunas de sus opiniones se recogen en el texto *Contigo aprendí...*(2013). El magistrado Constancio Carrasco expuso que las partes en el litigio representaban una diversidad de ámbitos en la vida nacional: intelectuales, políticas y lideresas de opinión que exigían, de manera fundada, equilibrio en la participación política de la mujer en las Cámaras. Antes de la resolución, escucharon a las partes: “Tuvimos interacción con las dirigencias de todos los partidos políticos involucrados. Era un tema esencial para el debate la autodeterminación y el

diversidad de “derechos patrimoniales” y de “posiciones de poder y sujeción” (Ferrajolis, 2009: 82). Cf. Ferrajolis, Luigi (2009). *Derechos y garantías. La ley del más débil*, Madrid: Trotta.

respeto al derecho de los partidos a que se sigan sus procesos internos para la elección” (p.121). Además, la finalidad de los alegatos, sobre todo tratándose de asuntos que involucran grandes temas constitucionales, era dimensionar con las partes los imperativos de justicia a resguardar.

El tema de los procesos democráticos de los partidos alcanza una magnitud especial en esta clase de asuntos, ponderando los valores en juego. Por una parte, la participación política partidaria a partir de los procesos internos y, por otra, una designación paritaria entre hombres y mujeres para alcanzar la igualdad material (,,) este fue el equilibrio que se buscó (Ortiz y Scherer, 2014: p.122).

En *Contigo aprendí...*, la única magistrada del Tribunal, María del Carmen Alanís, relata que el primer contacto que tuvo con este caso fue una entrevista con algunas integrantes de la Red, entre ellas, Clara Scherer, Silvia Hernández, Patricia Mercado y María de los Ángeles Moreno. En el diálogo, Alanís se comprometió a revisar el caso con perspectiva de género, lo cual requería una reconstrucción histórica, el acercamiento directo a las razones, la dimensión legal de la institución electoral y una apertura a las ideas de quienes presentaban el juicio:

“Mi primer contacto con los argumentos del juicio fue impactante, al ver lo que había detrás de esas demandas. Una lucha de mujeres por años, conquistar el derecho al voto; después, por lograr la igualdad formal ante la ley; luego, las cuotas, y ahora estábamos frente a un acuerdo del IFE que era, evidentemente, contrario a todos estos avances: tiraba a la basura esas conquistas” (Ortiz y Scherer, 2013:123)⁴¹⁶.

En las entrevistas presentadas en el texto de Jorge Alcocer (2013), los líderes de los partidos presentan otra perspectiva sobre la sentencia. Gustavo Madero, presidente del PAN mencionó que a pesar de que coincidían con el fondo de la misma, era necesario que en el futuro los tribunales armonizaran los efectos de sus resoluciones con los procesos de selección que realizan los partidos ya que cada uno tiene distintos criterios para la aplicación de las acciones

⁴¹⁶ La magistrada María del Carmen Alanís reflexionó que “desafortunada y afortunadamente a mí no me toca ese juicio. Afortunadamente, pues por el hecho de ser la única mujer en el Pleno, se lleva el estigma y el estereotipo de “Ay, como ella es mujer, seguramente en todo las va a apoyar”. Por eso, qué bueno que le toca resolver al presidente del TEPJF. Desde que las escuché, sabía cómo iba a votar; no por ser mujeres, sino porque jurídicamente les asistía la razón. Hice esa rápida valoración, sin olvidar el equilibrio como juzgadora, la neutralidad y la independencia con la que he de resolver cualquier asunto. O sea que si hubiera sido un supuesto en el que no alcanzara la ley para una interpretación progresiva, o que no tuvieran el derecho, no tuvieran la razón jurídica, la verdad jurídica, pues, por más mujer que sea, yo, como juzgadora, no podría apoyar una decisión irracional” (Ortiz y Scherer, 2014: 124).

afirmativas. En el caso de este instituto político, acatar la resolución “fue complejo, debido que transita una simbiosis entre la sentencia y las normas internas” (p.125).

Por su parte, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, ante la pregunta sobre las dificultades que tuvo su partido para procesar la sentencia, menciona que se debía considerar que en la sociedad existe un problema inercial producto del atavismo cultural, a lo cual no es ajeno el PRI. Por ende, “este tipo de avances no resulta fácil de procesar, sin embargo, hay una larga tradición de cumplimiento de la ley, y en la equidad de género queremos contribuir a la construcción de una nueva realidad social y política” (p.120).

Jesús Zambrano, presidente del PRD, opinó que la sentencia debía valorarse como un impulso a la equidad de género en la postulación de candidaturas y una aportación al proceso de incorporación de las mujeres a los cargos de dirección del Estado: “el PRD asume la posición que es preciso tomar todas las medidas políticas, administrativas, legislativas, presupuestales, judiciales, sociales y culturales que garanticen el acceso a todas las mujeres al pleno goce de todos sus derechos” (Alcocer, 134).

Sobre el efecto de la sentencia en algunos casos concretos, permitió que en entidades federativas donde los partidos no habían incorporado a las mujeres fueron obligados a incluirlas. Por ejemplo, en Querétaro donde sólo había hombres para todos los cargos o el caso del estado de Puebla, donde se identifica una dinámica represiva contra las mujeres. Varias militantes de los partidos coinciden en señalar que sin la resolución judicial, difícilmente hubieran sido integradas a las candidaturas. Además, resaltan que aun cuando los partidos llevan a cabo designaciones, pocas veces favorecen a las mujeres. Y además, “durante la elección del 2012 se enfrentaron diversas resistencias a la postulación de mujeres, aduciendo argumentos de distinto sentido. El más referido fue el argumento referido *al favor* que se hacía a las mujeres *concediendo* la nominación” (Pacheco y Valera, 2014:335).

En este sentido, Angélica de la Peña en *Contigo aprendí* (2014) advierte que no se debe olvidar que los partidos no actuaron *motu proprio* sino obligados por una sentencia que le dijo “cumples o cumples, y si no, te hacemos cumplir. Así los partidos tuvieron que bajar hombres lo cual les ocasiona un gran problema del que hay que hablar, porque además de que unos inventaron candidaturas de mujeres, sacaron algunas de imprevisto, otros reubicaron a las que

habían mandado a la banca y recuperaron a otras más que habían maltratado ” (p.138)⁴¹⁷.

- Mujeres de la Red

Las opiniones de las integrantes de la Red, como era de suponerse, fueron positivas respecto a la Sentencia 12624. Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas, consideró que la resolución se convertía en un referente mundial “Lo anterior, subrayó, por la dimensión que le dan a esta decisión no sólo garantizando los derechos de las mujeres a participar en espacios de representación popular, sino además es un compromiso con la acción afirmativa”⁴¹⁸.

Entre las opiniones de la sentencia expuestas en las entrevistas del texto *Contigo aprendí* (2014) se encuentran las siguientes: “Los partidos políticos se equivocaron porque creyeron que podían darle la vuelta a la sentencia”, apuntó Silvia Hernández, (p.38). Se trató de “una resolución histórica, emblemática, que genera una interpretación diferente del estado de las cosas y exige a los partidos políticos que la paridad se vea reflejada en los cargos de elección popular” consideró la actual consejera electoral del INE, Margarita Elizondo (p.142). “Debemos preocuparnos por el corazón de la sentencia, por la necesidad de hacerla compatible con la vida interna de los partidos” ya que consideran las candidaturas como su patrimonio, por ello ponen “a la esposa, la hija, la mamá, o la pareja”, apuntó María Marván (p.131)⁴¹⁹.

¿Qué ocurrió después de la sentencia con la Red de Mujeres en Plural? La organización mantuvo su labor por el avance en los derechos políticos⁴²⁰ y si bien, continúan realizando acciones de coyuntura y constituye un frente contra el *statu quo* de la vida política.

⁴¹⁷ Por ejemplo, en un análisis de lo ocurrido en Jalisco para el proceso electoral del 2012, apunta que una vez que se hicieron los cambios o se incluyeron mujeres, ni las candidatas ni los partidos se visualizaban como ganadoras, o simplemente, las pusieron para mantener el registro, como fue el caso del partido Nueva Alianza, el cual postuló a una candidata al gobierno, sin recursos, sin formación política y sin aspiraciones para ganar. Ver, Ochoa, Candelaria y García, Elena, “¿Hacia dónde vamos? *La cuota de género en las elecciones Jalisco, 2012*”, en Pacheco, Lourdes y Valera, Rosario, *Sentencia de amor 12624. Mujeres y elecciones en México, 2012. México*, Laurel, México, 2014, p.280-310.

⁴¹⁸ Nota periodística en *Sin embargo*, “Red Mujeres en Plural celebra resolución del TEPJF”, Disponible en <http://www.sinembargo.mx/11-01-2012/118241>, consultado el 15 de febrero de 2015.

⁴¹⁹ Por ejemplo, en Sinaloa se postuló a diputado Esteban Valenzuela, quien tuvo que ser desplazado de la candidatura después de la sentencia. En su lugar, se postuló a su esposa, María Victoria Vega, por parte del PRI. González, Carmen, “Sinaloa, la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2012” en Pacheco, Lourdes y Valera, Rosario, *Sentencia de amor 12624...*, p. 380-418

⁴²⁰ En abril del 2015, la Red de Mujeres en Plural, emitió una misiva dirigida INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales, el Congreso de la Unión, los partidos y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en al que pidió que se establecieran mecanismos de denuncia y de atención oportuna para las mujeres que participan en estos comicios y que son víctimas de violencia política. La Red se refirió a hechos recientes como el asesinato el pasado 10 de marzo de Aidé Nava, precandidata perredista a la presidencia municipal de Ahuacautzingo, en Guerrero; y el atentado contra la panista Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, quien fue atacada a balazos por un grupo armado el pasado 8 de marzo.

El año 2012, el trabajo de la Red fue acreedor al reconocimiento “Género y Justicia” que otorga *Women’s Link Worldwide*, organización internacional fundada en 2001 que trabaja por los derechos humanos de las mujeres y por la justicia con perspectiva de género. La organización lanza una convocatoria para reconocer decisiones que hayan impactado la equidad de género⁴²¹.

Entre las evaluaciones sobre la Red y el trabajo de la misma, se encuentran diversas menciones en el trabajo de Adriana Ortiz y Clara Scherer (2014). Por ejemplo, Cristina Alcayaga, filósofa feminista, apuntó: “La Red ha acelerado la historia y sabemos que no es más un hecho aislado, sino un caminar con gran esfuerzo que debe continuar” (p.140); Rocío Reyes, firmante del juicio, mencionó: “para mí es muy importante que se haya reunido a mujeres de todos los colores, eso nos empoderó porque nos dimos cuenta de que podemos hacer alianzas, justo lo que hacen los hombres en sus partidos” (p. 147).

En el mismo sentido, Martha Chapa afirmó: “el tema de los derechos políticos de las mujeres ha sido la causa de mi vida (...) Las integrantes de la Red vimos una ventana de oportunidad y la abrimos” (45). Angélica de la Peña, tres veces legisladora, expresó: “La movilización de las mujeres fue una manera contundente de decir, aquí estamos, y estamos vigilando” (p.138).

También recordaron lo mencionado por el gobernador de Baja California, Francisco Vega, quien en un acto público afirmó que las mujeres estaban bien en la casa cuidando a sus hijos, expresión que calificaron de discriminatoria.

Otros casos que no están en el pronunciamiento de la Red es el asesinato de Cecilia Izaguirre, presidenta del Comité Municipal del PRI en Lagunillas, San Luis Potosí, ultimada a balazos mientras viajaba en su camioneta el 2 de febrero del 2015. <http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69179>. Consultada en abril del 2015.

⁴²¹ Los Premios destacan los pronunciamientos o decisiones hechos en el contexto de un proceso por jueces y juezas, miembros de comités de protección de derechos humanos, de juntas u oficinas de asilo o por fiscales y defensores del pueblo, que hayan tenido un efecto positivo o negativo sobre la equidad de género, incluyendo aquellos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y discriminación por género. La información sobre la organización está disponible en: <http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php>

Tabla 25

Ruta crítica conforme a los actores/as y las acciones hacia el proceso electoral 2012

RED DE MUJERES EN PLURAL 2009-2011

- ✓ Conforman del grupo con mujeres de diferentes partidos y grupos feministas.
- ✓ Inician litigio sobre la interpretación de las cuotas con base al D.I. de los Derechos Humanos, impugnado el Acuerdo de registro de candidaturas del IFE.
- ✓ Promueven el acatamiento de la Sentencia del Tribunal Electoral.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, 2011-2012

- ✓ Emiten Acuerdo sobre registro de candidaturas obligando a la cuota solo por el principio de RP.
- ✓ Modifican la interpretación de las cuotas con base a sentencia del Tribunal Electoral
- ✓ Obligan a los partidos a registros de un 40/60% por ambos principios: mayoría y representación proporcional

TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL, 2011-2012

- ✓ Emite Sentencia bajo el nuevo marco interpretativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia
- ✓ de acción afirmativa en la que la cuota electoral debe cumplirse por ambos principios, mayoría y RP.
- ✓ Se publica la Sentencia 12624 favorable a las mujeres

PARTIDOS POLITICOS, 2011-2012

- ✓ Los partidos conocen del Acuerdo para el registro de candidaturas
- ✓ Los dirigentes de los tres principales partidos políticos acuden al Tribunal para inconformarse por la Sentencia en materia de cuotas.
- ✓ Se inconforman ante IFE por la resolución del Tribunal.
- ✓ Argumentan que no pueden cumplir con la Sentencia
- ✓ Modifican el registro de los partidos ante determinación de anular los registros por parte del IFE

SUMA, TRANSFORMACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 2010-2012

- ✓ Trabajan en el empoderamiento político de las mujeres en diez entidades federativas. Inversión: un millón de dólares.
- ✓ Capacitan a un promedio de 1,200 mujeres en 10 entidades federativas.

5.4.3 La Iniciativa SUMA.

Al mismo tiempo que la Red de Mujeres en Plural emprendía su estrategia de litigio jurídico, surgió otro movimiento de mujeres denominado *SUMA, Democracia es Igualdad*, conformado por cinco organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer el liderazgo político de las mexicanas en el ámbito nacional y local⁴²².

En el año 2009, El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, organismo de la Organización de Naciones Unidas que se transformó en ONU Mujeres en 2010 y cuya primer titular del organismo fue la chilena Michelle Bachelet, lanzó una convocatoria a nivel mundial para apoyar proyectos de empoderamiento político y económico de las mujeres durante un periodo de tres años⁴²³.

Cinco organizaciones de la sociedad civil denominadas Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Mujeres Trabajadoras Unidas; Inclusión Ciudadana; y, Liderazgo, Gestión y Nueva Política, participaron en la convocatoria bajo el llamado de Patricia Mercado, también fundadora de la Red de Mujeres en Plural. Así, postularon un proyecto bajo las siglas de SUMA, Transformación para la Igualdad, el cual resultó ganador, junto con otras 14 naciones que recibieron el financiamiento. SUMA fue uno de los tres proyectos seleccionados en América Latina y ONU Mujeres dio a conocer los resultados en junio del 2010.

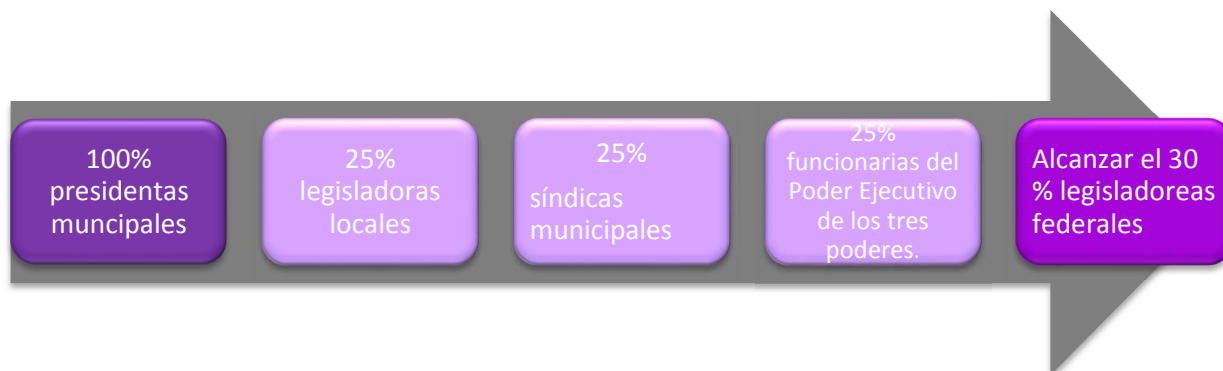
Los objetivos del proyecto fueron impulsar a mil 500 mujeres en un periodo de tres años, que estuvieran dispuestas a participar por un cargo de representación popular, estatal, local o nacional, de las entidades federativas de Michoacán, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí, Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Puebla. Las metas del proyecto SUMA eran incrementar 100% ciento el número de presidentas municipales; en 25% el número de legisladoras locales; coadyuvar en el cumplimiento de una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, alcanzando el 30% en el Congreso de la Unión. Además, lograr un 25% más en el número de síndicas; elevar en un 25% el número de

⁴²² Ver, Instituto Nacional de las Mujeres, SUMA. Democracia es Igualdad, y ONU Mujeres, *Iniciativa SUMA democracia es igualdad*. Modelo para la participación política y el empoderamiento económico de las mujeres, México, 2014. Iniciativa SUMA, *Democracia es Igualdad*. Disponible en www.suma-mujeres.com

⁴²³ ONU mujeres ha lanzado la convocatoria 2015-2018 en la que se pueden ver...Iniciativa SUMA, *Democracia es Igualdad*. Disponible en www.suma-mujeres.com

funcionarias del poder ejecutivo, municipal y estatal; e incorporar los compromisos de campaña el impulso a la agenda para la equidad⁴²⁴.

Metas del proyecto SUMA



Fotografía 10

Representantes de las organizaciones: Equidad de Género; Ciudadanía, Trabajo y Familia; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Mujeres Trabajadoras Unidas; Inclusión Ciudadana y Liderazgo, Gestión y Nueva Política; INMUJERES y ONU Mujeres. Martha Lamas, Martha Tagle, Roció Gaytán, y Patricia Mercado.

⁴²⁴ Ibidem.

Para alcanzar la meta se buscó identificar a mujeres jóvenes y adultas de movimientos políticos y sociales a fin de fortalecer su liderazgo y coadyuvar a la formación de una masa crítica de mujeres que ampliara su participación e incidencia⁴²⁵. La estrategia que se plantearon fueron entre otras: formación y fortalecimiento de liderazgos femeninos, talleres de comunicación para incidir en las percepciones sociales sobre la participación política de las mujeres, y mentoría para apoyar a las líderes durante su formación y sus procesos personales frente a su participación política⁴²⁶.

Para el proyecto se establecieron alianzas con las instituciones del gobierno federal y los gobiernos estatales. De manera esencial, se incorporó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), organismo público del Gobierno Federal que también fue cofinanciador. También se dialogó con los partidos políticos sobre la relevancia de la participación política de las mujeres y se recibieron las recomendaciones del IFE y el Tribunal Electoral. Una vez que iniciara el periodo electoral 2012, SUMA dejó de realizar actividades, dado que era un proyecto plural que no apoyaba a ningún partido político en particular⁴²⁷.

En la ruta de acción, primero se realizaron foros de sensibilización y de capacitación sobre las oportunidades y retos de las mujeres en la toma de decisiones. Después, se identificaron entre 40 a 60 mujeres por estado, quienes se integraron a programas capacitación, el cual consistía en módulos presenciales con una duración de 96 horas. Los temas abordados fueron: elementos para la toma de decisión; ubicar y manejar los recursos de poder, agenda y comunicación efectiva, herramientas técnico-conceptuales; y cómo mejorar presencia en medios. Además, incorporación de una plataforma virtual educativa; utilización de dinámicas de integración y atención plena durante las sesiones, para después dar paso al acompañamiento de mentoría.

⁴²⁵ *Ibíd.*

⁴²⁶ *Ídem*

⁴²⁷ Iniciativa SUMA, *Democracia es Igualdad*. Disponible en www.suma-mujeres.com



Fotografía 11
Integrantes de la iniciativa SUMA en el estado de Hidalgo



Fotografía 12
Integrantes de la iniciativa SUMA en el estado de Puebla.

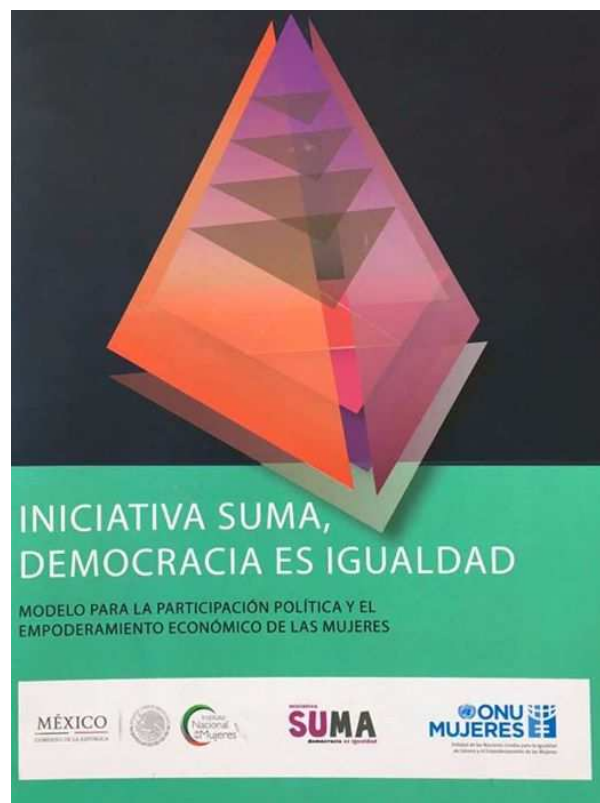


Imagen 13

Cuadernillo de Modelo para la participación política y el empoderamiento económico de las mujeres



Imagen 14

Portal de la página web de la iniciativa SUMA

Actores e instituciones participantes del proyecto SUMA, igualdad para la democracia.



El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es el organismo del gobierno federal encargado de la política pública en materia de igualdad entre hombres y mujeres. La institución también es el resultado de una larga lucha de las mujeres por impulsar un espacio de dirección pública en la materia, como se describió en el apartado sobre el Feminismo Civil, 3.5.3 del Capítulo III.

Acorde al *Informe Política Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres, 2007-2012*, el Inmujeres fue participante del proyecto y estableció la coordinación con los diez institutos estatales de las mujeres de dichas entidades federativas donde se realizó. En el informe se describe de manera detallada el trabajo coordinado con el proyecto SUMA. En el 2011 se realizaron nueve foros “Por una mayor participación política de las mujeres”⁴²⁸, en los cuales, se contó con la participación de alrededor de 2 mil 200 mujeres líderes, aproximadamente.

⁴²⁸ Las sedes de los nueve foros, fueron en las siguientes ciudades: Morelia, Michoacán, Morelia, Michoacán, en Guadalajara, Jalisco, en Hermosillo, Sonora, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, en Monterrey, Nuevo León, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Oaxaca, Oaxaca y en Xalapa, Veracruz. Cf. Ver, Instituto Nacional de las Mujeres, SUMA. Democracia es Igualdad, y ONU Mujeres, *Iniciativa SUMA democracia es igualdad. Modelo para la participación política y el empoderamiento económico de las mujeres*, México, 2014. Iniciativa SUMA, *Democracia es Igualdad*. Disponible en www.suma-mujeres.com

Como parte del proyecto se impartieron 19 módulos de capacitación con la asistencia de poco más de 500 mujeres seleccionadas durante los foros realizados. Además, se realizaron dos Foros bajo el nombre “Por y para México, por una mayor igualdad entre mujeres y hombres en la representación parlamentaria” y en el marco del XII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, la iniciativa SUMA, convocó el Foro regional “Generando Estrategias para el Empoderamiento Político y Económico de las Mujeres: Presentación de los avances y retos de siete iniciativas en la región”, los días 21 y 22 de noviembre de 2011, en la Ciudad de Bogotá, Colombia para intercambiar información entre los diversos proyectos de la región aprobados por el Fondo para la Igualdad de Género⁴²⁹.

Posteriormente, en el 2012, como parte de las actividades del proyecto se realizaron reuniones de trabajo con la participación de INMUJERES, ONU Mujeres y los institutos estatales de mujeres, incluyendo el Distrito Federal, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, así como las organizaciones que integran la iniciativa SUMA para realizar cuatro Foros denominados “Por una mayor participación política de las mujeres”. Los encuentros se realizaron en cuatro entidades diferentes, participando un promedio de 1,200 mujeres líderes. Como parte del proyecto se impartieron 5 módulos de capacitación en otras cuatro entidades federativas, dirigidos a más de 280 mujeres que aspiraron a contender por un cargo político en las elecciones de julio⁴³⁰.

Durante el mismo periodo también se realizaron ocho Foros denominados “Por y para México, por una mayor igualdad entre mujeres y hombres en la representación parlamentaria” en ocho entidades federativas, asistiendo alrededor de 800 mujeres. En seguimiento a los foros realizados se efectuaron reuniones de trabajo con candidatas a diputadas federales de once estados de la República. El objetivo de las reuniones fue facilitar y promover una Agenda Económica mediante reformas del marco legislativo. En esta última etapa participaron alrededor de 200 mujeres⁴³¹.

De acuerdo a la presentación de la directora de Inmujeres, el trabajo se resume de la siguiente manera:

⁴²⁹ De acuerdo al *Informe Política Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres, 2007-2012* participaron alrededor de 60 mujeres de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, República Dominicana y Uruguay, p.119.

⁴³⁰ Ver, *Informe Política Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres, 2007-2012*.

⁴³¹ *Ibídem*.

Foros

Acciones del 2013 del Proyecto SUMA. Igualdad para la Democracia



Reuniones de evaluación y de estrategia

Tú, yo, nosotras...¿Dónde estamos?
Tú, yo, nosotras...¿Hacia dónde vamos?



Reuniones con presidentas municipales electas y legisladoras



Asesoría de presupuestos públicos con perspectiva de género a diputadas locales.

La cobertura geográfica del proyecto SUMA fueron las siguientes entidades: 2011: Michoacán, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí y Nuevo León; 2012: Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chihuahua; y en 2013: Guerrero, Baja California Sur, Hidalgo y Estado de México.



Imagen 15
Mapa de las entidades federativas donde se ejecutó el Proyecto SUMA

Como resultados del proyecto en el periodo 2011-2012 se logró localizar el alcance en las siguientes metas en cuanto a resultados locales en las entidades de: Michoacán, Chiapas, Sonora y San Luis Potosí.

	Michoacán		Chiapas		Sonora		San Luis Potosí	
	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
Presidentas municipales	8	9	6	4	5	9	5	6
Diputadas locales.	7	9	12	16	7	7	6	5

A finales de noviembre las instituciones convocaron a un concurso para realizar la evaluación del proyecto y así medir los alcances desde un enfoque sistémico que midiera resultados y el contexto en que se desarrolló⁴³². Con posterioridad ONU Mujeres publicó el

⁴³² Convocatoria de la evaluación final de la iniciativa SUMA. Disponible en, <http://www.suma-mujeres.com/comunicacion/noticias/convocatoria-evaluacion-final-de-iniciativa-suma-0>

documento Iniciativa SUMA. Democracia es Igualdad. Una ruta mexicana de aprendizaje compartido 2010-2014, en el que se resume el modelo de trabajo, los resultados y las recomendaciones.

El modelo tuvo los siguientes componentes, una alianza entre sociedad civil, instituciones gubernamentales y el organismo internacional (ONU Mujeres), así como un trabajo con enfoque universal y alineado a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, en el cual el contexto fue clave, ya que la coyuntura del marco legal, institucional y políticos generó la posibilidad de éxito del proyecto, resaltado que cuando el modelo estaba en proceso, se dio la sentencia del Tribunal. Además, aseguró una relación entre los tres poderes y los tres niveles de gobierno para posicionar a la democracia y a la paridad como prioridades del Estado en su conjunto.

Finalmente, como recomendaciones estratégicas se presentaron las siguientes: mantener una alianza tripartita, diseñar la intervención desde una convergencia entre el marco normativo y su aplicación, garantizar la integralidad del modelo y diseñar una estrategia de comunicación orientada a la acción colectiva. Además, convertir la incidencia política en un eje central, ampliar el discurso y enfoque de la participación política de las mujeres, adaptar y pilotear el modelo en sectores específicos, así como generar y transmitir conocimientos sistematizados, apalancar fondos sustantivos y fortalecer la rendición de cuentas (ONU Mujeres, 2014:19)

Como se logra apreciar a lo largo del presente Capítulo, en México se cuenta con instituciones que han posibilitado el cumplimiento de la normatividad en materia de cuotas, pese a diversas resistencias partidistas y al debate entre las instituciones en torno a la interpretación de la norma.

Además, el sistema electoral mixto posibilita que las mujeres hayan ido incrementado su presencia en la última década, sobre todo por el principio de representación proporcional, como señalan diversas teorías que apuntan que este sistema facilita que más mujeres ocupen una curul.

Por otra parte, la evolución y vigencia del juicio de protección de los derechos políticos y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como abusos previos por parte de

los institutos políticos -el caso de las Juanitas-, sentaron las bases para que un grupo de mujeres organizadas consolidara su alegato en defensa de la acción afirmativa en materia electoral.

El movimiento de mujeres organizadas bajo el nombre “Mujeres en Plural” impulsó así una estrategia jurídica, política y mediática que obligó a un debate que ya tenía precedentes: si los partidos estaban o no obligados a cumplir con las cuotas cuando habían realizado procesos internos para la selección de sus candidaturas. El desarrollo del juicio en torno a dicho juicio puso a la luz las resistencias de los partidos para incluir a las mujeres como candidatas, sin embargo, el Tribunal ponderó la necesidad de impulsar el principio de la equidad de género frente a la democracia interna de los partidos.

Los argumentos que dieron Mujeres en Plural y la sentencia que emitió el Tribunal Electoral encuentran su fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente la CEDAW y en una clara la perspectiva de género, mostrando así la influencia internacional y el legado de las diversas teorías feministas que han desmontado los discursos que constriñen a las mujeres a la esfera privada.

Por último, se registra de manera breve otra experiencia nacional que deja aprendizajes para elevar la representación y sin la cual, no se podría explicar el salto que han dado las legislaturas locales, la Iniciativa SUMA, democracia es igualdad.

Sin duda todos los esfuerzos y avances logrados en el Poder Legislativo, son necesario pero no suficientes, ya que el Parlamento es el único espacio donde las mexicanas han alcanzado una masa crítica, sin embargo, un sin número de espacios de la esfera pública siguen esperando la presencia de quienes son la mitad del género humano y de quienes sus derechos han sido olvidados por todos los legisladores, denunció desde 1792 un hombre aliado, el Marqués de Condorcet: las mujeres.

CONCLUSIONES

Primero. El estado de la cuestión evidenció los diversos factores que impactan en la representación, forma bajo la cual se expresan dichos factores en tres regiones del mundo y en México, lo cual permite concluir que el caso mexicano es un ejemplo de la interacción de los factores y actores que inciden de manera favorable u obstaculizan el incremento de la representación parlamentaria.

El Estado de la Cuestión permitió observar los porcentajes de representación parlamentaria en el mundo y los diversos horizontes de análisis del fenómeno, concentrados en los factores estructurales, culturales e institucionales, así como la forma en que dichos factores se expresan en tres diferentes regiones, Europa, Medio Oriente y Norte de África, y América Latina. Con ello, se observó que no existe un solo factor que explique los niveles de representación parlamentaria en el mundo, tan solo el marco normativo -las cuotas-, institucional –el sistema electoral-, guardan un mayor consenso.

En el caso de los actores/as que intervienen en el proceso de representación, los partidos políticos y el movimiento de mujeres, se observó que sus acciones impactan en los niveles de representación política, mientras los institutos partidistas obstaculizan su presencia y el movimiento de mujeres impulsa su representación.

Segundo. El movimiento de mujeres en el mundo por el avance de los derechos políticos, y su reflejo en México, permitió el incremento de la representación parlamentaria de mujeres en el Congreso de la Unión.

El estudio realizado muestra la exclusión de las mujeres del sistema democrático representativo a causa de una histórica marginación que tenían de la esfera pública, fundada tanto en la propia evolución del modelo democrático, como en una serie de ideas sobre la naturaleza de la mujer y en los discursos filosóficos que cobraron fuerza, en el periodo Ilustrado y en el Moderno, sobre la división sexual del trabajo.

El movimiento de mujeres que surge en el s.XVIII, en el marco de la Revolución Francesa y posteriormente el movimiento sufragista, ambos acompañados de nuevas teorías y

cuestionamientos a los roles asignados a cada uno de los sexos, permitieron que las mujeres emergieran como actoras de la esfera pública.

La descripción de la lucha de las mujeres por obtener el derecho al sufragio y la posibilidad de ser electas, evidenció que sin este esfuerzo, no se puede considerar que hoy pudieran estar presentes en los parlamentos.

Tercero. El movimiento de mujeres organizó encuentros internacionales que llevaron a la creación de marcos jurídicos para el goce y ejercicio de sus derechos humanos que incluyeron los derechos políticos. Dichos instrumentos materializados en las acciones afirmativas y en las cuotas electorales, tuvieron como efecto acelerar la representación parlamentaria.

En respuesta a la histórica exclusión de las mujeres de la esfera pública, del ejercicio de relaciones de poder asimétricas y de las prácticas que generan la desigualdad y discriminación, las mujeres se conformaron como un movimiento social que tomó fuerza a partir de encuentros internacionales convocados en las últimas cuatro décadas del siglo XX.

El movimiento de mujeres diseñó estrategias de carácter global como la redacción y solicitud de adhesión a varios tratados internacionales con perspectiva de género, -CEDAW, 1979 y Belén do Pará (1994)-. Al año 2015, un promedio de 187 naciones habían firmado y ratificado las normas internacionales para la protección de los derechos humanos de las mujeres, lo que dio impulso a un nuevo lenguaje en materia de protección de derechos humanos y a una clara agenda política y jurídica que incluía estrategias específicas para avanzar hacia la igualdad en diferentes regiones del mundo.

En consecuencia, los instrumentos jurídicos internacionales pusieron de relieve aspectos específicos de la desigualdad entre hombres y mujeres y crearon categorías para acelerar la igualdad y lograr protección de sus derechos humanos, entre ellos, los derechos políticos.

Prueba de lo anterior fue la introducción de las llamadas acciones afirmativas -medida de carácter temporal encaminada a acelerar la igualdad entre hombres y mujeres-, instrumentada mediante la creación de las cuotas electorales.

Los datos y la evolución de los porcentajes presentados de representación parlamentaria en el caso de América Latina y México a partir de la introducción de las cuotas electorales, corroboró que fue un factor de influencia para el incremento de la representación. Si bien los porcentajes de parlamentarias de los países con cuotas y sin cuotas en América Latina no mantienen una gran diferencia, se observó (Tabla 14, Impacto de las leyes de cuotas en la representación parlamentaria en América Latina) que son más las parlamentarias en los países que integraron el instrumento de acción afirmativa.

En el caso de México, se ilustró que a partir de la integración de las cuotas, la presencia de mujeres tuvo un avance moderado en cada elección, excepto en la integración de la Legislatura LVIII 2000-2003, como se muestra en la tabla 8 (Evolución de la distribución de Diputadas y Diputados Federales por Legislatura, 1952 – 2012).

Cuarto. Las cuotas electorales por sí mismas, pueden no tener efectos en la representación si no van acompañadas por una interpretación favorable por parte de los partidos y las instituciones electorales. La integración de las cuotas y su defensa ha sido impulsada por el movimiento de mujeres.

La incorporación, aplicación e interpretación de las cuotas electorales no ha sido tarea sencilla y ha estado permeada por innumerables debates constitucionales en varios países. En algunos casos, como fueron en los tribunales constitucionales de Francia o Colombia, las tesis de los juristas no favorecieron a las mujeres, retardando con ello la posibilidad de tener mayor representación en el Parlamento.

A partir del proceso democratizador de México en el año de 1988, las mujeres emergieron como un movimiento social articulado y se constituyeron en actrices sociales de la esfera pública. Paulatinamente, las mexicanas impulsaron los tratados internacionales con sus respectivos instrumentos como las acciones afirmativas.

En 1993, por primera vez se integraron las cuotas electorales en los estatutos de un partido político de izquierda. Lo anterior permitió que las cuotas electorales no solo quedaron plasmadas en la normatividad de los partidos, sino también en la Carta Magna.

Sin embargo, los titulares de los partidos políticos y de las instituciones electorales encargadas de aplicar la ley, fueron flexibles en cuanto la redacción y la obligación de acatar la norma jurídica en materia de acción afirmativa, ya que en las primeras reformas constitucionales, los legisladores integraban los verbos “podrán”, “procurarán” o “propiciarán”, en lugar del mandato “deberán”, para incluir un porcentaje mínimo de candidaturas en cada uno de los sexos, o bien, los líderes de los partidos políticos inscribían a hombres como suplentes de mujeres, para que una vez que tomaran protesta fueran obligadas a renunciar a su curul, tal como se expuso en el Capítulo V.

Por ende, fue necesario realizar un juicio que permitiera una interpretación que obligara a los partidos a cumplir con las cuotas electorales por el principio de representación proporcional.

Quinto. La integración de un movimiento de mujeres en México, denominado Mujeres en Plural, fue un factor determinante para lograr el avance de la representación parlamentaria en México.

El movimiento de mujeres organizadas bajo el nombre: “Mujeres en Plural” (2011-2012), se constituyó como un grupo con experiencia política y con la agenda común de lograr el avance de la representación, quienes promovieron una estrategia jurídica, política y mediática que obligó a la autoridad electoral a ponderar entre dos principios en conflicto: la democracia interna de los partidos y la igualdad política.

Los argumentos que dieron Mujeres en Plural se fundamentaron en el DIDH de las mujeres, específicamente la CEDAW y en una clara la perspectiva de género, mostrando así la influencia internacional y el legado de las diversas teorías feministas. Sin el litigio, los partidos no hubieran impulsado un 40% de candidaturas de mujeres por el principio de representación proporcional, tal y como se muestra en la cantidad de impugnaciones que promovieron para no cumplir con el Acuerdo emitido por el IFE (2011).

Sexto. La reforma constitucional en materia de derechos humanos y la paulatina integración de la perspectiva de género en la aplicación de la justicia, produjeron que la Sentencia 12624 beneficiara a las mujeres.

Desde el 2008 un grupo de académicos promovieron una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Después de discusiones de corte jurídico, el Congreso de la Unión aprobó la más importante reforma en materia de Derechos Humanos que modificaba una perspectiva tradicional de interpretación jurídica y jerarquía de los Tratados Internacionales y de la Constitución Política.

Ello propició la creación de una especie de bloque de constitucionalidad, integrada no solamente por la Carta Magna sino también por los tratados internacionales, a la luz del cual se debe interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano.

Así, en la promoción de los juicios para la protección de los derechos políticos impulsado por Mujeres en Plural, se tuvieron nuevos argumentos con base al DIDH de las mujeres, lo que derivó en una sentencia favorable por parte del Tribunal Electoral, ya que a partir de la CEDAW y una clara perspectiva de género, se ponderó que la realización de los procesos internos de selección de candidaturas en los partidos políticos, no justificaba el incumplimiento de las cuotas electorales por el principio de representación proporcional.

Séptimo. La experiencia, SUMA. Democracia es Igualdad, muestra que en México existe un movimiento de mujeres por el avance de la representación.

Al mismo tiempo que Mujeres en Plural realizaban acciones, otro movimiento encabezado por Patricia Mercado se conformaba con el fin de participar en la convocatoria lanzada por ONU Mujeres para incrementar la representación política de las mujeres en el ámbito local.

El proyecto logró incorporar a varios actores e instituciones de la vida pública con un objetivo común, y la puesta en práctica de una metodología de trabajo. El proyecto SUMA, que integró a cinco organizaciones de la sociedad civil, muestra que Mujeres en Plural no fue un movimiento aislado, sino que existe un movimiento de mujeres que trabaja por el avance de la representación política.

Octavo. La interacción del movimiento de mujeres, las cuotas electorales y su interpretación favorable, explican el incremento de la representación de mujeres en el Congreso de la Unión en el 2012.

BIBLIOGRAFIA

ALCÁNTARA, MANUEL, Y FREIDENBERG, FLAVIA. (coord.) (2003). *Partidos políticos en América Latina. Centroamérica, México y República Dominicana*, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Federal Electoral, págs. 377-447.

ALANIS, MARÍA DEL CARMEN. (2013). “*Justicia Electoral con enfoque de género*” en Alcocer, Jorge, *Cuota de género. Una sentencia histórica*. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Mujeres en Plural, y Nuevo horizonte, México.

ALANIS, MARÍA DEL CARMEN. (2014). “*Contribuciones de la Justicia Electoral al fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres*”. Ponencia presentada en el Congreso “Mujeres, política y democracia. Rompiendo los techos de cristal en América Latina”, Salamanca, España, del 23 al 28 de marzo.

ALCOCER, JORGE. (2013). *Cuota de género. Una sentencia histórica*. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Mujeres en Plural, y Nuevo horizonte, México.

ANDUIZA, EVA, CRESPO ISMAEL Y MENDEZ, MONICA. (2009). *Metodología de la Ciencia Política*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, España.

AMORÓS, CELIA. (1997). *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y modernidad*, Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España.

AMORÓS, CELIA (2007) *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las mujeres*, (2007). Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España.

AMORÓS, CELIA Y ALVAREZ, ANA DE MIGUEL. (Eds) (2005). *Teoría feminista, De la Ilustración a la Globalización*, Vol.1, Minerva, Madrid.

AMOROS, CELIA Y COBO, ROSA, (2005) “*Feminismo e Ilustración*”, en *Teoría feminista, De la Ilustración a la Globalización*, Vol.1, Minerva, Madrid.

ANDERSON, KRISTI. (1975). “*Working Women and Political Participation, 1952-1972*”. *American Journal of Political Science* 19. págs. 439-453.

APARICIO, JAVIER. (2011). *Cuotas de género en México. Candidaturas y resultados electorales para diputadas federales 2009*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México.

APARICIO, JAVIER. (2012). *La aritmética de las cuotas de género*. Disponible en <http://javieraparicio.net/2012/03/28/aritmetica-cuotas-genero/>

APARICIO JAVIER, LANGSTON LOY Y PÉREZ BERNARDO. (2009). *Evaluación de la perspectiva de género en plataformas de partidos políticos, candidaturas y cargos de elección 2009*, Instituto Nacional de las Mujeres. Cuadernos de Trabajo, No.8 y CIDE, México.

ARAUJÚ, CLARA (2008). *¿Por qué las cuotas de género no funcionan en Brasil?*, en Ríos Tobar Marcela, *Mujer y política. El impacto de las cuotas en América Latina*, Flacso Chile, IDEA Internacional, Chile, p.129-157.

ARAUJÚ, CLARA, AND GARCIA, ANA ISABEL (2006), “*The experience and the impact of quotas in Latin America*” en Dahlerup, D (edit), *Women, Quotas and Politics*, Routledge, New York USA, p.83-111.

ARISTÓTELES. (2000). *Ética Nicomaquea*, Planeta, México.

ARFAOUI, KHADIJA, “*Mujeres en el movimiento por la igualdad de género en el Magreb*”, en Di Marcco, Graciela, *Feminismo, democracia y democracia radical*, 91-125

ASTELERRA, JUDITH. (Compiladora) (1990). *Participación política de las mujeres*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, España.

BADRAN, MARGOT, *Feminismo en el Islam*, Cátedra, Universidad de Valencia, Madrid, España, 2001.

BÁEZ SILVA, C. (2003). “*Partido Revolucionario Institucional*”. En Alcántara, M., y Freidenberg, F. (Coords.), *Partidos políticos de América Latina. Centroamérica, México y República Dominicana* (pp. 382 - 419). México: Fondo de Cultura Económica – Instituto Federal Electoral.

BALDEZ, LISA. (2008). “*Cuotas versus primarias: la nominación de candidatas mujeres en México*”, en Ríos Tobar Marcela, *Mujer y política. El impacto de las cuotas en América Latina*, Flacso Chile, IDEA Internacional, Chile, p.157-176.

BALLINGTON, JULIE. (2003). *Igualdad en Política: un estudio sobre hombres y mujeres en los parlamentos*, Unión, Interparlamentaria, Suiza, (traducción: Congreso de México).

- BALLINGTON, JULIE, Y MÉNDEZ, MONTALVO MIRIAM.** (2002). *Mujeres en el Parlamento. Más allá de los Números*, IDEA Internacional, Estocolmo, Suecia.
- BARQUET, MERCEDES.** (2012). *De la inutilidad de las cuota de género*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México.
- BERMAN, MARSHALL.** (2004). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, México: Siglo XXI.
- BIZBERG, ILÁN.** (2010). *Los grandes problemas de México, Movimientos sociales*, Colegio de México.
- CABRERA, ENRIQUETA.** (2008). *Las Gobernadoras*, Planeta, México.
- CANO, GABRIELA.** (1991) *Feministas en campaña*”, Revista Debate Feminista, Año 2, Vol. 4, México, 1991, p.288
- CANO, GABRIELA.** (2009). *Género, política y poder en el México postrevolucionario*, Fondo de Cultura Económica, México.
- CAMACHO, ALEJANDRA.** (2009). “*Mujeres en defensa de sus derechos político electorales. Un atisbo del derecho en acción*”, en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Universidad Nacional Autónoma de México, *Género y Derechos Políticos. La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de las mujeres en México*, México, p. 123-169.
- CAMPOAMOR, CLARA** (2010). *El voto femenino y yo*, Editorialsol90, Madrid, España.
- CARBONELL, MIGUEL.** (2004). *Los derechos fundamentales en México*, Porrúa, México.
- CARBONELL, MIGUEL.** (2011). *La reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de cuotas electorales de género*, Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, México.
- Disponible en: www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/8/cl/cl8.ht
- CARBONELL, MIGUEL.** (2012). “*La reforma constitucional en materia de derechos humanos: principales novedades*”. Disponible en: www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml. Consultado, 15 de enero del 2015.
- CÁRDENAS, CAPEL, MARÍA Y GUTIÉRREZ FRANCISCO.** (Coordinadores) (2003). *El voto de las mujeres, 1877-1978*, Universidad Complutense, Madrid, España.

CEPAL, FAO, ONU MUJERES, PNUD, OIT. (2013). *Trabajo decente e Igualdad de Género, Santiago de Chile, Chile.*

CEPAL, *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*, Naciones Unidas, Santiago de Chile, Chile, 2014

CAZARÍN, ANGÉLICA. (2011). *Democracia, Género y Justicia Electoral en México*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México.

COBO, ROSA, “Género” (1995) en 10 Palabras Claves sobre Mujer, Editorial Verbo Divino. Navarra,.1995.

COLEGIO DE MÉXICO. (2004). *Historia General de México. Versión 2000*, El Colegio de México, México.

COLEGIO DE MEXICO, ONU MUJERES, INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y CAMARA DE DIPUTADOS (2011), *Feminicidio en México, aproximación tendencias y cambios 1985-2009*, México.

COMISIÓN EUROPEA, *Una Europa para las Mujeres*, Luxemburgo: Oficina de publicaciones de la Unión Europea, 2010, p.3. Disponible en, <http://bookshop.europa.eu/es/una-europa-para-las-mujeres-pbNA3009224/;pgid>, Consultado, junio 2015.

COMISIÓN EUROPEA, *¿Qué es la Unión Europea?*, Disponible en, http://europa.eu/about-eu/basic-information/about/index_es.htm. Consultado en junio del 2015.

CHRISTENSEN, RAY. (2000). “*The impact of Electoral Rules in Japan*”, Lee, Rose, J. and Clar Clark, *Democracy and the Status of Women in Asia*, Lynne Rienner Publishers, USA. P.25-47.

NIETO, SANTIAGO Y ESPÍNDOLA, LUIS. (2012). *El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano*, Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México.

CÁRDENAS, GRACIA. (1996). *Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos*, Fondo de Cultura Económica, México.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO (CEMEAG) (2010). *La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad*, México.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO (CEMEAG) (2010). *Diagnóstico del trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres*, legislatura LXI, México.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO (CEMEAG) (2012) *Gasto etiquetado y políticas públicas para la igualdad entre hombres y mujeres 2011*, México.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO (CEMEAG) (2015) *Diagnóstico del trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres en la LXII Legislatura. Retos y pendientes*, México.

CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, Naciones Unidas, Santiago de Chile, Chile, 2014

CEPAL, *La fecundidad en América Latina: Un descenso acelerado y heterogéneo con profundas transformaciones demográficas y sociales*. América Latina y el Caribe. Observatorio demográfico N° 5

CEJAS, MÓNICA Y JAIVEN LAU. (2011). *La encrucijada de género y ciudadanía*, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

CHOQUE MARLENE. (2013) “Paridad y alternancia en Bolivia. Avances y desafíos de la participación de las mujeres”, en IDEA Internacional, OEA, *La apuesta por la paridad, democratizando el sistema político en América Latina*, Perú, pp 121-176.

DAHL, ROBERT. (1992). *La democracia y sus críticos*, Paidós, España.

DAHL, ROBERT. (1999). *La democracia, una guía para sus ciudadanos*, Taurus, Madrid, España.

DAHL, ROBERT. (2008). *La igualdad política*, Fondo de Cultura Económica, México.

DAGNINO, EVELINA. (2010). *La disputa por la construcción democrática en América Latina*, Fondo de Cultura Económica, México.

DAHLERUP, DRUDE, HILAL ZEINA, KALANDADZE, NANA, KANDAWASVIKA-NHUNDU. RUMBIDZAI. (2013). *Atlas of Electoral Gender Quotas*, IDEA Internacional, Unión Interparlamentaria, Universidad de Estocolmo, Suecia.

Disponible en, <http://www.quotaproject.org/es/faq.cfm>

DAHLERUP, DRUDE. (Edit) (2006). *Women, Quotas and Politics*, Routledge, New York USA.

DAHLERUP, DRUDE, AND FREIDENVALL, LENITA. (2006). “*Quotas as a Fast Track to equal representation for women: why Scandinavia is no longer the model*. *Women, Quotas and Politics*, Routledge, Unites States of America.

DAHLERUP, DRUDE. (2003). *La aplicación de las cuotas: experiencias latinoamericanas*, IDEA Internacional, Estocolmo, Suecia.

DAHLERUP, DRUDE. (2005). “*De una pequeña a una gran minoría: una teoría de la masa crítica aplicada a mujeres en la política escandinava*”, en Zárate, Monica, y Gall, Olivia (Coord) *Mujeres al timón en la función pública.*, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, p. 131-166.

DAHLERUP, DRUDE. (2003). “*El uso de las cuotas para incrementar la represestnación política de la mujer*, IDEA Internacional, *Mujeres en el Parlamento, más allá de los número*. P. 159-173.

DE BEAUVOIR, SIMONE. (2008). *El segundo sexo*, Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio de Igualdad, España.

DE PIZAN, CHRISTINE. (2006). *La ciudad de las damas*, España, Siruela.

DEL CAMPO, ESTHER. (2005). *Women and Poltics in Latin America, Perspectives and Limits of the Institucional Aspects of Women´s Political Representation*, Social Forces, 83(4):1697-1726.

DEL CAMPO, ESTHER. “*Del por qué al cómo: el sentido último de las reformas en América Latina*”. Quorum 20, p.138-165.

DEL CAMPO, ESTHER, Y RAMOS, MARIA LUISA. (1997). “*La paradoja partidista: institucionalización y representación en los partidos latinoamericanos*”, América Latina, Hoy, No.16. p.29-39

DI, MARCO, GRACIELA, CONSTANZA TABBUSH. (comp.)(2011). *Feminismos, democratización y democracia radial*, Universidad Nacional de San Martín, 2011.

DUVANGER, MAURICE. (1996). *Los partidos políticos*, Fondo de Cultura Económica, México.

ESPINOSA, GISELA. (2011). *Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010*, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

ELIZONDO, MARÍA, “*La participación política de las mexicanas*”, en <http://revistafal.com/la-participacion-politica-de-las-mujeres-mexicanas/>. Publicada el 1 noviembre, 2013 • Artículos, Del Archivo, Latinoamérica, Portada, categoría. Consultado el 15 de marzo del 2015.

FACIO, ALDA, Y FRIES, LORENA. (1999). *Género y Derecho*, Lom. Concha y Toro, Chile.

FACIO, ALDA, Y FRIES, LORENA. (1999). “*Feminismo, género y patriarcado*”, en Facio, Alda, y Fries, Lorena, *Género y Derecho*, Lom. Concha y Toro, Chile, p.21-60.

FERRAJOLI, LUIGI. (2009). *Derechos y garantías. La ley del más débil*, Troota, Madrid, España.

FLESCHENBERG, ANDREA, & DERICHS, C. (2011). *Women and Politics in Asia, A Springboard for Democracy?*, Institute of Shotheast Asian Studies, Singapore.

FISHMAN, ROBERT. (2008). *Voces de la Democracia*, Centro de Investigaciones Sociológicas, España.

FOLGUERA PILAR. (2010). “*La equidad de género en el marco internacional y Europeo*”, en Maquiera, Virginia (ed.), *Mujeres, Globalización y Derechos Humanos, Feminismos*, Cátedra, España.

FREIDENBERG, FLAVIA, Y ALCÁNTARA, MANUEL. (2009). *Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático*, Tribunal Electoral del Distrito Federal, Universidad Nacional Autónoma de México, e Instituto de Iberoamérica, México.

FREIDENBERG, FLAVIA, (2007) *Democracia interna de los partidos políticos*. Disponible en http://works.bepress.com/flavia_feidenberg/27. Consultado, marzo del 2015.

FREIDENBERG, FLAVIA, Y CAMINOTTI, FLAVIA (2014), Federalismo electoral, fortaleza de las cuotas de género y representación de las mujeres en Argentina y México. Disponible en https://works.bepress.com/flavia_freidenberg/80/ Consultado en marzo del 2015.

SUSAN FRANCESCHET, SUSAN, MONA LENA KROOK, JENNIFER M.

PISCOPO. (2012). *The Impact of Gender Quotas*, Oxford, University, Press, New York, USA.

GAMBA, SUSANA. (Coordinadora) (2007). *Diccionario de Estudios de género y feminismo*, Biblos, Argentina.

GARCÍA, MARÍA ILENA. (2008). *Género y participación política. El caso de Rosario Robles Berlanga*, Instituto Tecnológico de Monterrey, México.

GARCÍA, MARÍA ILENA. (2012). *Mujeres en los puestos de toma de decisiones políticas. Limitantes subjetivas y sociales para su ejercicio*, en Serret, Estela, (coord.) *Democracia y ciudadanía: perspectivas críticas feministas*, No.10, Colección “Género, Derecho y Justicia”, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fontamara, México.

GARGALLO, FRANCESCA, *Feminismos desde Abya Yala.(Ideas y Proposiciones de las Mujeres de 607 Pueblos en Nuestra América*, Universidad de la Ciudad de México, México, 2014.

GIRÓN, ALICIA; GONZÁLEZ MARÍN, MARÍA LUISA Y JIMÉNEZ, ANA VICTORIA (2008): *Breve historia de la participación política de las mujeres en México*. In: Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD. Las Ciencias Sociales Estudios de Género. Miguel Ángel Porrúa, Distrito Federal, México, pp. 33-61.

GONZÁLEZ, DEL MIÑO PALOMA. (2008). *Las mujer en el Magreb ante el reto de la democratización*, Bellaterra, España.

GONZÁLEZ, DEL MIÑO PALOMA. (2014). *Tres años de revoluciones árabes*, Catarata, Madrid, España.

GONZÁLEZ, MARÍA LUISA, Y RODRÍGUEZ, PATRICIA. (2008). *Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI Y PRD*, Porrúa, México.

GOYANDA, SOLES “De las cuotas a la paridad, el caso del Ecuador” en *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*, en el ensayo de, páginas 49-120.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ CALLADO, BAPTISTA LUCIO. (2010). *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill, México.

HERNÁNDEZ, SILVIA. (2012). “El tren que detuvimos”, en Alcocer, Jorge, *Cuotas de género. Una sentencia histórica*, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Mujeres en Plural, y Nuevo horizonte México, p.27-51.

HUERTA, MAGDALENA Y MAGAR ERIC. (2006). *Mujeres Legisladoras en México*, Instituto Nacional de las Mujeres, México (INMUJERES), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Friedrich Ebert Stiftung, México.

HINOJOSA, MAGDA. (2012). *Selecting Women, Electing Women, Political Representation and Candidate Selection in Latin America*, Temple University Press, USA.

HINOJOSA, MAGDA, Y PISCOPO, JENNIFER. (2013). “Promoción del derecho de las mujeres a ser elegidas: veinticinco años de cuotas en América Latina”, en *Cuotas de género, una visión comparada*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, p.55-101.

HTUN, MALA. (2002). “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, en *Mujeres en el Parlamento. Más allá de los números*, Méndez-Montalvo, Myriam, y Ballington, Julie, IDEA Internacional, Suecia.

HTUN, MALA. (2005). “Marcha hacia el poder: expansión de las oportunidades de liderazgo de la mujer en América Latina y el Caribe”, en Zárate, Monica, y Gall, Olivia (Coord) *Mujeres al timón en la función pública.*, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, p225-261.

HOBBS, THOMAS (1994). *El contrato social*, Fondo de Cultura Económica, México.

HUMAN RELIGIONS, Disponible en <http://www.humanreligions.info/numbers.html>, Consultado en 2015

IBARRA, JESÚS (2013) “Cuotas de género vs regla de la mayoría: el debate constitucional”, en *Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, núm.28, enero-junio. México.

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y GÉNERO (2015), Disponible en hrd.und.org/es/content/el-índice-de-desarrollo-género. Consultado en abril del 2015.

IDEA INTERNACIONAL, INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. (2005). *Diseño de sistemas electorales. El nuevo manual de IDEA Internacional*, México.

IDEA INTERNACIONAL, La ciudadanía de las mujeres en las democracias de América Latina, Agosto, 2013, Edición y revisión, Revisión y edición, Isabel Torres y Paz Castillo, Comisión Interamericana de Mujeres OEA, IDEA Internacional 2013

IDEA INTERNACIONAL, *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina*, IDEA Internacional. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica, Perú, 2013.

INCIDE, Social. (2014). *Igualdad, inclusión y no discriminación en los partidos políticos en México*, INCIDE Social, PNUD, México.

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. Disponible en: <http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh> Consultado el 20 de julio, 2015

INGLEHART, RONALD, AND NORRIS, PIPPA, (2005). *Rising Tide. Gender Equality and Cultural Change around the World*, Crambridge University Press, USA.

INGLEHART AND WELZEL. (2006). *Modernización, cambio cultural y democracia*, Centro de Investigaciones Sociológicas, España.

INGLEHART, RONALD. (2005). *Modernización y cambio cultural a persistencia de los valores tradicionales*, Cuadernos del Mediterráneo, No 5. Disponible en: <http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/5/eInglehart.pdf>

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. (2012)., *Ruta crítica de la cuota de género a nivel federal Evolución jurisdiccional*, México.

Disponible en http://genero.ife.org.mx/rutacritica/evolucion_juridiccional_18_abril_2012.pdf

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL *Historia del Instituto Federal Electoral, Integración de los Órganos Centrales 1990-2014.*

Disponible en http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UTSID/UTSID-EstadisticasTransparencia/docs/IAMateriaTransp_2014/IFE_Integracion_organos_centrales_1990-2014.pdf. Consultado el 12 de abril del 2016

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, SITESA, (2013). *El compromiso de ejercer el gasto para el liderazgo político de las mujeres. La acción afirmativa para la democracia*, México.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. (2013). *Reto a 60 años de la aprobación del voto de mujeres en México*, IFE, México.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (2013), *Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación en México 2013-2018.*

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, SUMA. DEMOCRACIA ES IGUALDAD, y ONU MUJERES, (2014). *Iniciativa SUMA democracia es igualdad*, México.

JENSON, JANE, Y FERNANDEZ, CECILIA VALIENTE (2001), “*El movimiento a favor de la democracia paritaria en Francia y España*”, *Revista Española de Ciencia Política*, Número 5, Octubre, p.p. 79-110.

JÉREZ, JUAN MIGUEL, Y DELGADO, IRENE (2011) “*Mujeres y parlamentos entre dos siglos. El caso de España*” (2011), *Psicología Política*, ISSN 1138-0853, No, 42, España.

JIMÉNEZ BADILLO, M. (2003). “*Partido Acción Nacional*”. En Alcántara, M., y Freidenberg, F. (Coords.), *Partidos políticos de América Latina. Centroamérica, México y República Dominicana* (pp. 419 – 447). México: Fondo de Cultura Económica.- Instituto Federal Electoral.

JOSEPH, SUA, (2001). *Women and Power in Middle East*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, U.S.A, 2001.

JONES, MARK (2000), *El Sistema de cuotas y la elección de mujeres en América Latina: el papel fundamental del Sistema Electoral*” Fecha de publicación disponible en: www.celem.org/prog_europeos/demo_paritaria2000/pdfs/capitulo01.pdf, Consultado 4 de noviembre del 2014.

JONES, MARK. (2008). “*Leyes de cuotas y listas de partidos, evaluación del impacto de las listas cerradas vs abiertas*”, en Marcela, Ríos, *Mujer y política, El impacto de las cuotas en América Latina*, Flacso Chile, IDEA Internacional, Chile, p. 203- 41.

JONES, MARK, ALLES SANTIAJO, Y TCHINTIAN, CAROLINA (2012), “*Cuotas de género, leyes electorales y elección de legisladoras en América Latina*” *Revista de Ciencia Política*, (Santiago) Vol. 31, No.2 Santiago, 331-377

KENWORTHY, LANE AND MELISSA MALAMI. (1999). *Gender Inequality in Political Representation: A Worldwide Comparative Analysis. Social Forces* 78: 235-268.

KROOK, MONA LENA. (2012). *Women, gender and politics*, Oxford University Press, USA.

KROOK, MONA LENA. (2009). *Quotas for women in politics*, Oxford University Press, USA.

- KROOK, MONA LENA.** (2008). *“La adopción y el impacto de las leyes de cuotas de género, una perspectiva global”*, Ríos, Marcela, *Mujer y política, El impacto de las cuotas en América Latina*, Flacso Chile, IDEA Internacional, Chile, p. 27-61.
- LAGARDE, MARCELA.** (1996). *Género y Feminismo*, Cuadernos inacabados, Madrid, España.
- LAGARDE, MARCELA.** (2003). *Los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas*, México, UNAM.
- LAGARDE, MARCELA** (1994) *Democracia genérica*, México, REPEM-México, Mujeres para el diálogo, p.48
- LAMAS, MARTHA**, Revista *Mujeres en Plural*, 30 de noviembre del 2012. Revista Proceso No.2024, Agosto, 2015. Disponible en: www.proceso.com.mx/?p=326576
- LAMAS, MARTHA.** (2002). *Cuerpo: Diferencia Sexual y Género, ensayo “La antropología feminista y la categoría de género”*, Taurus, México.
- LAMAS, MARTHA.** (2006). *Feminismo, transmisiones y retransmisiones*, Taurus, México.
- LAMAS, MARTHA.** (2005). *“El porqué de la acción afirmativa. De la “A” a la “Z”*, en 2005, en Zárata, Monica, y Gall, Olivia (Coord) *Mujeres al timón en la función pública.*, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, p. 195-212.
- LECHTE, JOHN.** (1994). *Cincuenta pensadores contemporáneos esenciales*, Cátedra, España.
- LEE, ROSE, J. AND CLAR CLARK** (edit) (2000). *Democracy and the Status of Women in Asia*, Lynne Rienner Publishers, USA.
- LOAEZA, SOLEDAD, Y PRUD’HOMME, JEAN FRANCOIS,** (coord.) (2012). *Instituciones y proceso políticos*, Colegio de México, México.
- LOIS, MARTHA, Y ALBA, ALONSO.** (2014). *Ciencia política con perspectiva de género*, Akal, España.
- LÓPEZ, MARU.** (2012). *Una mirada de mujer frente al 2012*, Grupo Editorial Norma, México.
- LLANOS, BEATRIZ.** (2008). *30 años de democracia ¿en la cresta de la ola? Participación política de la mujer en América Latina*, IDEA Internacional, Miraflores, Perú.

LLANOS, BEATRIZ. (2003). *Igualdad: ¿para cuándo? Género y elecciones peruanas 2010-2011*, IDEA Internacional, 2012 cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas, México, UNAM.

LINE, BAREIRO; SOTO CKYDE Y SOTO LILIAN. (2007). *La inclusión de las mujeres en los procesos de Reforma Política de América Latina*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C.

LOAEZA, SOLEDAD, Y PRUD'HOMME, J.F. (2010) *El sistema de partidos*. En Los grandes problemas de México XIV. Instituciones y procesos políticos (pp. 121 – 158). México: El Colegio de México.

LOVENDUSKI, JONI. (Edited) (2005). *State feminism and political representation*, University Press Cambridge, United Kingdom.

LOVENDUSKI, JONI, (1997). “Representación política: dinámica de género y partidos”, en Uriarte, Edurne, y Elizondo, Arantxa, *Mujeres en política*, Ariel, España. P. 114-148.

LOVENDUSKI, JONI. (2005). *Feminizing Politics*, Cambridge, United Kingdom.

MAC KINNON, CATHERINE, (1995). *Hacia una teoría feminista del Estado*, Ediciones Cátedra, Madrid, España, Madrid.

MANIN, BERNARD. (1997). *Los principios del gobierno representativo*, Alianza, España.

MARTÍNEZ, ALARCÓN, MARÍA LUZ. (2007). *Cuota electoral de mujeres y derecho constitucional*, Congreso de los Diputados, Senado, España.

MARTÍNEZ, ANTONIA, *La representación política y la calidad de la democracia*, en *Revista Mexicana de Sociología*, Año 66, núm. 4, Octubre-Diciembre, 2004.

MARTÍNEZ, ANTONIA Y GARRIDO ANTONIO. (2010). *De la política de la presencia a la política de la diferencia*, Fundación CIDOB, España.

MARTÍNEZ, FERNANDO. (2011). “Marco conceptual de las acciones y discriminaciones positivas”, en *Acciones Afirmativas*, Consejo Nacional para prevenir y sancionar la discriminación, México, p. 65-127.

MARVÁN, MARÍA Y MARQUÉZ, LIBIA. (2013). “Democracia interna de los partidos vs cuota de género, ¿Dilema sin solución?”, en Instituto Federal Electoral, *Retos a 60 años de la aprobación del voto de mujeres en México*, IFE, México.

MASSOLO, ALEJANDRA. (2007). *Participación política de las mujeres en el ámbito local*, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación, de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), República Dominicana.

MATLAND, RICHARD, AND MONTGOMERY, KATHLEEN A. (2003). *Women's Access to political power in post-communist Europe*, Oxford University Press, USA.

MATLAND, RICHARD. (2002). “Estrategias para ampliar la participación femenina en el Parlamento. El proceso de selección de candidatos legislativos y los sistemas electorales”, en *Mujeres en el Parlamento. Más allá de los Números*, IDEA Internacional, Estocolmo, Suecia, p. 111-122.

MATLAND, RICHARD E. (1998). “Women's Representation in National Legislatures: Developed and Developing Countries”. *Legislative Studies Quarterly*. Vol. 23. No 1. págs. 109-125.

MATLAND, RICHARD E. Y DONLEY T. STUDLAR. (1996). “The Contagion of Women Candidates in Single Member and Multi-Member Districts”. *Journal of Politics* 58 (3). págs. 707-733.

MATLAND, RICHARD E. Y DONLEY T. STUDLAR. (1998). “The Electoral Opportunity Structure for Women in the Canadian Provinces: A Comparison to U.S. State Legislatures”. *Political Research*.

MEDINA, ADRIANA. (2010). *La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad*. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres, Congreso de la Unión., México.

MEDINA, CECILA. (2009). *La Convención Americana de Derechos Humanos, teoría y jurisprudencia*, Notas para el Curso de Derechos Humanos y Mujeres, Universidad de Chile.

MEDINA, CECILA. (2003). *Derechos Humanos de las Mujeres*, Título original: “Human Rights of Women: Where are we now in the Americas?” Publicado en *Essays in Honour of Alice Yotopoulos-Marangopoulos*. Prof. A. Manganas (ed.), Volume B, Panteion University, Nomiki, Atenas.

MEDINA, CECILA, (2011). Introducción del texto, *Las convenciones internacionales de Derechos Humanos y la perspectiva de género*, Universidad de Chile, Chile, 2007, Paideia, Morata, España.

MAQUIERA, VIRGINIA. (ed.) (2010). *Mujeres, Globalización y Derechos Humanos*, Feminismos, Cátedra, España.

MILL, JOHN STUART. (2001). *Los principios del gobierno representativo*, Alianza, México.

MILL, JOHN STUART. (2009). *El sometimiento de la mujer*, Alianza, México, 2014

MIYARES, ALICIA. (2003). *La democracia Feminista*, Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España.

MIYARES, ALICIA. (1999). *1848: El manifiesto de Séneca Fallas*, *Leviatán*, No, 75, Madrid.

MIYARES, ALICIA. (2005). *El sufragismo*, en Teoría feminista, De la Ilustración a la Globalización, Vol.1, Minerva, Madrid.

MOGHADAN, VALENTINA, M. (2007). *From Patriarchy to Empowerment. Womens, Participation, Movements, and Rights in the Middle East, North Africa, and South Asia*, Syracuse Univesity Press, United States of America. FICHADO

MOGHADAM, VALENTINA. (2011). *La democracia y los derechos de las mujeres: reflexiones sobre el Medio Oriente y el Norte de Africa*, en Di Marcco, Graciela, *Feminismo, democracia y democracia radical*, Universidad Nacional de San Martín, Argentina. p.34-55.

MOGHADAM, VALENTINA M. (2007). *From patriarchy to empowerment : women's participation, movements, and rights in the Middle East, North Africa, and South Asia*, Syracuse, University Press, USA.

MOGHADAM, VALENTINA. (2007). *Gender and Social Change in the Middle East*, Boulder, London, England, 2003.

MOGHADAM, VALENTINA. (2005). *Globalizing Women, Transnational Feminist Networks*, the Johns Hopkins University Press, Maryland, USA.

MOLYNEUX, MAXINE. (2003). *Movimientos de mujeres en América Latina*, Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España.

MOLINA-ENRIQUEZ, GRACIA Y LUGO, CARMEN, (2009). *Mujeres en la historia & Historia de las Mujeres*, Salsipuedes Ediciones, México. p. 91-93.

- MORENO, MARÍA DE LOS ÁNGELES** (2013), *Igualdad de género en la política*, Alcocer, J, *Cuota de género. Una sentencia histórica*. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Mujeres en Plural, y Nuevo horizonte, México. P.51-61.
- MONSIVÁIS, CARLOS.** (2005). *No sin nosotros, los días del terremoto 1985-2005*, Era, México.
- MORLINO, LEONARDO.** (2009). *Democracia y Democratizaciones*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, España.
- NIETO, SANTIAGO.** (2013). *Los derechos en tiempo de género*, Instituto Electoral de Querétaro, México.
- NIETO, SANTIAGO.** (2012). *El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano*, Porrúa, México.
- NADALES, ANTONIO.** (Editor) (1996). *El debate sobre la crisis de la representación política*, Tecnos, España.
- NASH, MARY.** (2011). *Mujeres en el mundo, historia, retos y movimientos*, Alianza, Madrid.
- NOHEL, DIETER.** (1986). *Sistemas Electorales y Políticos*, Fundación Friedrich Ebert, Madrid, España.
- NORRIS, PIPPA.** (1997). “Proceso de reclutamiento legislativo, una perspectiva comparada” en Uriarte, Edurne, y Elizondo, Arantxa, *Mujeres en política*, Ariel, España, p.149-181.
- NORRIS, PIPPA.** (1997). “Representación política: dinámica de género y partidos”, en *Mujeres en política*, Ariel, España, 1997. 95.
- NORRIS, PIPPA, AND KROOK, MONA LENA.** (2011). *Gender Equality in Elected Office: a Six –Step Action*, Harvard University,
- NORRIS, PIPPA.** (2004). *Electoral engineering. Voting Rules and Political Behavior*, Cambridge University Pres, USA.
- NORRIS, PIPPA,** (2003). *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World*, Cambridge University Pres, USA.
- NORRIS, PIPPA, AND LOVENSUKI, JONI** (1995) *Political recruitment, gender, race and class*, Cambridge: Cambridge University Press

NORRIS, PIPPA AND KROOK, MONA LENA. (2011). *Gender Equality in Electoral Office, a Six-Step Action Plan*, Harvard University and Washington University in St Louis, USA.

NORRIS, PIPPA. (1985). *Women's Political Participation in Western Europe* in *West European Politics* 8:90-101.

OCHOA, CANDELARIA Y GARCÍA, ELENA. (Coord.) (2014). “¿Hacia dónde vamos? *La cuota de género en las elecciones Jalisco, 2012*”, en Pacheco, Lourdes y Valera, Rosario, *Sentencia de amor 12624. Mujeres y elecciones en México, 2012*. México, Laurel, México.

OFFEN, KAREN, (1991). *Definir el feminismo, un análisis histórico comparativo*, Historia Social, número 9.

ONU Y OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS (2008). *Súmate a la reforma. Propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos elaborado por las organizaciones de la sociedad civil y por académicos y académicas especialistas en derechos humanos*, México.

ONU MUJERES, TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, PNUD, (2011), *Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos*, México.

ONU MUJERES, PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, IDEA INTERNACIONAL (2013), *Mujeres y participación política en México. A 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino*, México.

ONU MUJERES, INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, INICIATIVA SUMA, MEXICO GOBIERNO DE LA REPÚBLICA (2014). *Iniciativa SUMA, Democracia es Igualdad. Una ruta de aprendizaje compartido 2010-2014*, México, 2014.

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2013), *Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina*, Nueva York, Estados Unidos.

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MÉXICO. (2012) *Diagnóstico de la participación política y liderazgo de las mujeres en América Latina*, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú.

ORTEGA, REYNALDO YUNUEN. (2004). *De la hegemonía al pluralismo: elecciones presidenciales y comportamiento electoral, 1976-2006*, en El Colegio de México, *Historia General de México. Versión 2000*. El Colegio de México, México, p. 405-449.

ORTIZ, ADRIANA, Y SCHERER, CLAUDIA. (2014). *Contigo aprendí. Una lección de democracia gracias a la sentencia 12624*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México.

PACHECO, LOURDES Y VALERA, ROSARIO. (2014). *Sentencia de amor 12624, Mujeres y elecciones en México, 2012*, México, Laurel, México.

PANADÉS, ALBERTO Y SANCHEZ, SILVIA (2014) *Ventaja de género en los distritos uninominales: las elecciones en México 2012*, Revista de Ciencias Sociales, América Latina Hoy, Mujeres y política, Universidad de Salamanca, Vol.66, abril.

PATIÑO, CAMARENA. (1995). *Derecho Electoral Mexicano*, Constitucionalistas, México.

PAXTON, PAMELA, Y KUNOVICH, SHERI. (2003) “*Women's Political Representation: The Importance of ideology*.” *Social Forces* 82(1), 87-113. Oxford University Press.
Disponible, https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/social_forces/v082/82.1paxton.html: Revisado el June 24, 2015, de Project MUSE database

PAXTON, PAMELA, Y HUGHES, MELANI. (2007). *Women, Politics, and Power: A Global Perspective*, Sociology for a New Century Series, Pine Forge Press, USA.

PAXTON, PAMELA. (1997). “*Women in National Legislatures: a Cross-National Analysis*”, *Social Science Research*, 26, No.4, 441-464.

PÉREZ, PILAR. (Editora) (2009). *De la democracia ateniense a la democracia paritaria*, Icaria, España.

PERROT, MICHELLE. (2009). *Mi historia de las mujeres*, Fondo de Cultura Económica, México.

PESCHARD, JAQUELINE, (2012). “De la condición gubernamental al control parlamentario: 30 años de reformas electorales”, en Loaeza, Soledad, y Prud’homme, Jean Francois, (coord.) *Instituciones y proceso políticos*, Colegio de México, México, p. 355-403.

- PHILIPS, ANNE.** (1995). *The politics of presence*, Oxford University Press, New York, USA.
- PHILIPS, ANNE.** (1996). *Género y teoría democrática*, Instituto de Investigaciones Sociales, PUEG-UNAM, México.
- PHILIPS, ANNE.** (1996). *¿Deben las feministas abandonar la democracia liberal?* en Castelles, Carmen (comp), *Perspectivas Feministas en teoría política*, Paidós, España, 1996
- PHILIPS, ANNE.** (1993). *Democracy and difference*, Cambridge, England, Polity Press.
- PHILIPS, ANNE.** (1991). *Engendering Democracy*, the Pennsylvania University Press, USA.
- PIATTI-CROCKER, ADRIANA.** (2011). *Diffusion of Gender Quotas in Latin America and Beyond*, Peter Lang Publishin, United States of America.
- PITKIN, HANNA.** (1985). *El concepto de representación*, Centro de Estudios Constitucionales, España.
- PISCOPO, JENNIFER M.** (2014) *Beyond Hearth and Home, Female Legislators, Feminist Policy Change and Substantiva Representation in México*” Revista Uruguay de Ciencia Política 23 (2), 87-110.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESRROLLO (PNUD).** (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano, Panamá.
- PORRAS, ANTONIO.** (1994). *Representación y Democracia Avanzada*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España.
- PRUD`HOMME, JEAN FRANCOIS.** (2012). “*El sistema de partidos*”, en Loaeza, Soledad, y Prud`homme, Jean Francois, (coord.) *Instituciones y proceso políticos*, Colegio de México, México. p. 122-156.
- URIARTE, EDUARDO.** (Coordinador) (1997). *Mujeres en política*, Ariel, España.
- URIBE, AINHOA** (2013) “*Las cuotas de género y su aplicación en España: los efectos de la ley de igualdad (LO 3/2007) en las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos*”, Revista de Estudios Políticos, No. 160, Madrid, p.p.159-197.
- QUINTANA, FRACISCO.** (2003). *Instrumentos Básicos de Derechos Humanos*, México, Porrúa.

- RAWLS, JOHN.** (1986). “Justicia distributiva”, en *Estudios públicos*. No. 24, (pp. 53 – 90).
- REYNOLDS, ANDREW** (1999) “*Women in the legislatures and executives of world: Knocking at the highest glass ceiling*”, *World Politics*, 51: 547-572.
- RÍOS TOBAR MARCELA.** (2008). *Mujer y política, El impacto de las cuotas en América Latina*, Flacso Chile, IDEA Internacional, Chile.
- ROSENFELD, MICHEL.** (2011). *Conceptos clave y delimitación del ámbito de análisis de las acciones afirmativas*, en *Acciones Afirmativas*, Consejo Nacional para prevenir y sancionar la discriminación, México, p. 65-127.
- ROZA, VIVIAN; LLANOS, BEATRIZ Y GARZÓN DE LA ROSA, GISELA.** (2010). *Partidos políticos y paridad, la ecuación pendiente*, BID-IDEA, Perú.
- SCHERER CLARA.** (2013). “*La Red de Mujeres en Plural y su incidencia en la política*”, en **Alcocer, J**, *Cuota de género. Una sentencia histórica*. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Mujeres en Plural, y Nuevo horizonte, México. P.19-27.
- SALTZMAN, JANET.** (1992). *Equidad y Género, una teoría integrada de estabilidad y cambio*, Ediciones Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer, Madrid, España.
- SARTORI, GIOVANNI.** (1997). *¿Qué es la democracia?*, Nueva Imagen, México.
- SARTORI, GIOVANNI.** (1992). *Elementos de teoría política*, Alianza, España.
- SAURI, DULCE.** (2010). “*De las Adelitas a las Juanitas: las luchas de las invisibles*”, México. Disponible en: <http://dulcesauri.blogspot.mx/2010/01/de-las-adelitas-las-juanitas-la-lucha.html>
- SARTORI, GIOVANNI.** (2005). *Partidos y sistema de partidos*, Alianza, España.
- SCOTT, JOAN.** (2012). *Género e Historia*, Fondo de Cultura Económica, México.
- SCOTT, JOAN.** (2012). *Parité!, Equidad de Género y Crisis del Universalismo Francés*, Fondo de Cultura Económica, México.
- SERRET, ESTELA.** (2012). *Las bases andocráticas de las democracia moderna*, en *Democracia y ciudadanía: perspectivas críticas feministas*, No.10, Colección “Género, Derecho y Justicia”, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fontamara, México.
- SERRET, ESTELA.** (2008) *¿Qué es y para qué es las perspectiva de género?*, Instituto de la Mujer Oaxaqueña, México.

SERRET ESTELA (1992) “*Género, familia e identidad cultural. Orden simbólico e identidad femenina*” en J.Valenzuela (coord) *Decadencia y auge de las identidades. Cultura nacional, identidad cultural y modernización*. COLEF, FCE, México.

SHVEDOVA, NADEZHDA. (2002). *Obstáculos para la participación de la mujer en el Parlamento*, en BALLINGTON, JULIE, Y MÉNDEZ, MONTALVO MIRIAM, *Mujeres en el Parlamento. Más allá de los Números*, IDEA Internacional, Estocolmo, Suecia. P.63-84.

SIERRA, ANGELA, Y DEL PINO, MARÍA. (2007). *Democracia Paritaria*, Laertes, México.

SOTO, LINE, Y TORRES, ISABEL. (2009). *Igualdad para una democracia incluyente*, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, USAID, Costa Rica.

SOTO, LINE. (2009). “*Cuotas y sistema electoral en América Latina*”, en Igualdad para una Democracia, en Soto, Line, y Torres, Isabel, *Igualdad para una democracia incluyente*, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, USAID, Costa Rica,. p. 159-195

SUAREZ, NAVAZ, LILIANA; Y HERNÁNDEZ, ROSALVA. (2011). *Descolonizando el feminismo*, Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio de Igualdad, Madrid, España.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (2013), *Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad*, México.

TERESA VALDEZ. (2005). *Índice de Compromiso Cumplido*, Flacso, Chile.

TEPICHIN, ANA MARÍA, TINAT, KARINET Y GUTIÉRREZ, LUZELENA. (2012). *Los grandes problemas de México, relaciones de género*, Colegio de México, México.

TILLY, CHARLES; WOOD, J. LESLEY. (2013). *Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde los orígenes a Facebook. Crítica*, Barcelona, España.

TOGEBY, LISE. (1994). “*Political Implications of Increasing Numbers of Women in the Labor Force*”. *Comparative Political Studies* 27. págs. 211-240.

TORRES, ISABEL. (2013) “*Paridad para el fortalecimiento de la democracia incluyente*”, en *La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica*, en el caso de Costa Rica, páginas 181-23.

TREMBLAY, MANON. (2007). *Electoral system, political parties, and sex quotas*, Palgrave Macmillan, Unites States of America.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN y UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. (2009). *Género y Derechos Políticos. La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de las mujeres en México*, México.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. (2014). *Democracia igualitaria. Criterios jurisprudenciales para la equidad de género e inclusión de comunidades indígenas*, México.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, *Recurso de apelación SUP-RAP-175/2010*, disponible en:

<http://portal.te.gob.mx/coleccion/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00175-2010.htm>,

Citado en Cap. IV. P. 55-56 en nota a pie de página.

TRIMIÑO, VELASQUEZ, CELINA. (2013). *Aportaciones del feminismo liberal al desarrollo de los derechos políticos de las mujeres*, Congreso de los Diputados, España.

TRIPP, AILI MARI AND KANG, ALICE, *"The Global Impact of Quotas: On the Fast Track to Increased Female Legislative Representation"* (2008). *Faculty Publications: Political Science*. Paper 41; 338-361. Disponible en:

<http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/41>

TUÑÓN, EMRIQUETA. (2002). *¡Por fin...ya podemos elegir y ser electas !*, Plaza y Valdéz, México.

VALCÁRCEL, AMELIA. (1997). *La política de las mujeres*, Ediciones Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer, Madrid, España.

VALCÁRCEL, AMELIA. (1994). - *El concepto de igualdad*, Pablo Iglesias, España.

VALCÁRCEL, AMELIA. (2001). *La memoria colectiva y los retos del feminismo*, CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo, Santiago de Chile, Chile.

VALLESPÍN, FERNADO. (2000). *El futuro de la política*, Taurus, España.

VERGE, TÁNIA, (2013). *"Cuotas de género y partidos políticos"*, en *Cuotas de género, una visión comparada*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México. P.111-155.

VILLANUEVA, ROCÍO, (2009). *“La importancia de la justicia constitucional y electoral para la eficacia de las cuotas electorales. La experiencia costarricense y argentina en la comparación con otros países de la región”* en la *Igualdad para una democracia incluyente*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Agencia Sueca de Cooperación Internacional,

VITERNA, JOCELY, FALLON, KATHLEEN M, AND BECKFIELD, JASON. (2008). *“How Development Matters: A Research Note on the Relationship between Development, Democracy and Women's Political Representation”*, International Journal of Comparative Sociology December, 49: 455-477. CAP.II

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHO HUMANOS (2009), disponible en: http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos.Interno/BD_395509089/Igualdad%20democracia%20incluyente.pdf Consultado el 5 de noviembre del 2014.

VIANELLO MINO Y CARRANZA, ELENA. (2002). *Género, espacio y poder*, Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, España.

PALMA, ESPERANZA. (2012). *Candidaturas femeninas y reclutamiento legislativo en México: el impacto de las cuotas de género en la composición de la LXI Legislatura*, en Serret, Estela, *Democracia y ciudadanía: perspectivas críticas feministas*, No.10, Colección “Género, Derecho y Justicia”, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fontamara, México.

PUJADAS, JUAN JOSÉ, (2002). *El método biográfico, el uso de la historia de vida en ciencias sociales*, Centros de Investigaciones Metodológicas, España.

PETER, ANNE, *Women, Quotas, and Constitutions: comparative study of affirmative action for women under American, German, EC, and international law.*

PAXTON, PAMELA, and HUGUES

REYNOLDS, ANDREW. (1999). *“Women in the legislatures and executives of world: Knocking at the highest glass ceiling”*, World Politics, 51: 547-572, Julio.

RIQUER, FLORINDA. (2005). *Del movimiento feminista a la institución: ¿una historia que aún no puede contarse*, Universidad Veracruzana, México.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. (2013). *Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad*, México.

ULLOA, BERTHA. (2004). *La lucha armada*, en el Colegio de México, *Historia General de México*. P. 757-817.

VALLESPÍN, FERNANDO, *El futuro de la política*, Taurus, España, 2000

VIVERO ÁVILA, I. (2003). *Partido de la Revolución Democrática*. En Alcántara, M., y Freidenberg, F. (Coords.), *Partidos políticos de América Latina*. Centroamérica, México y República Dominicana (pp. 447 – 473). México: Fondo de Cultura Económica – Instituto Federal Electoral.

WARNER, MICHEL. (2012). *Público, públicos, contrapúblicos*, Fondo de Cultura Económica, México.

WORLD BANK, THE. (2012) *Gender Equality and Development*, Washington D.C, USA, 2012.

WOLLSTONECRAFT, MARY. (2000). *Vindicación de los derechos de la mujer*, Cátedra, Madrid, España.

YOUNG, IRIS. (2000). *La justicia y la política de la diferencia*, Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España.

ZÁRATE, MONICA, Y GALL, OLIVIA. (Coord.) (2005). *Mujeres al timón en la función pública*. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, p. 131-166

ZAPATA-BARRERO, RICARD, ELENA SANCHÉZ-MONTIJANO. (2011). *Manual de investigación Cualitativa de la Ciencia Política*, Tecnos, Madrid.

ZULOAGA, PATRICIA. (2011). *Las convenciones internacionales de Derechos Humanos y la perspectiva de género*, Universidad de Chile, Chile, 2007, Paideia, Morata, España.

LEYES Y DOCUMENTOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (2012).
Porrúa, México.

**CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTITUCIONES
ELECTORALES.** (2012). Porrúa, México.

GACETA PARLAMENTARIA, 11 de diciembre de 2007. Discusión y votación, 11 de
diciembre de 2007

LEY GENERAL DE MEDIOS DE IMPUGNACION (2014),

Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149.pdf

LEY DE IGUALDAD SOCIAL DE LA MUJER.

Disponible en: <http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/873/Ley%20No.7142.pdf>

ENCUESTAS E INFORMES

ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO (Enadis (2011),
México. Disponible en,
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436
Consultada el 19 de julio del 2015.

**ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS
HOGARES (ENDIREH)** (2011), México., Disponible en:
<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/especiales/endireh/endireh2011/default.aspx> Consultada el 20 de julio del 2015.

ENCUESTA SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO, Parametría, México, 2010,
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4630 Consultado el 19 de julio
del 2015.

ENCUESTA: EVALUACIÓN DE 13 TRIMESTRES DEL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO.

Disponible en, NIETO <http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno/item/713-gran-encuesta->

FREEDOM IN THE WORLD COUNTRY RATINGS. Disponible en <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2008>, consultada en agosto de 2014.

INFORME POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, 2007-2012

Disponible en, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101207.pdf

LATINOBAROMETRO, Informe 2013, I. La democracia en América Latina. Disponible en,

http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LB_2013.pdf

LATINOBAROMETRO, *Las religiones en tiempos del Papa Francisco* (2014), Sida, IDB, Santiago de Chile, 2014. Disponible en www.latinobarometro.org. (copia)

PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES. PROIGUALDAD 2013-2018.

Disponible en, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013

INSTITUCIONES POLÍTICAS

CAMARA DE DIPUTADOS www.diputados.gob.mx

CAMARA DE SENADORES www.senadores.gob.mx

INTITUTO FEDERAL ELECTORAL www.ife.org

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES www.inmujeres.org.mx

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
www.trife.gob.mx

FUENTES ELECTRONICAS DE PARTIDOS POLITICOS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL www.pan.org.mx

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL www.pri.org.mx

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA www.prd.prg.mx

PARTIDO DEL TRABAJO www.partidodeltrabajo.org.mx

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO www.partidoverde.org.m

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, www.ife.org.mx

ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL IFE Y **DEL TRIBUNAL ELECTORAL**

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CG327/2011 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE INDICAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012.

www.equidad.scjn.gob.mx/biblioteca_virtual/.../05.pdf

CG327/2011 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE, CG413/2011, MEDIANTE EL CUAL SE LE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SUP-JDC-12624/2011 Y ACUMULADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011, Y QUE SUSTITUYE AL ACUERDO (14 DE DICIEMBRE).

<http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2011/diciembre/CGex201112-14/CGe141211ap12.pdf>

INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA QUE PRESENTA EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (16 DE DICIEMBRE DE 2011).

http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/001_dialogos_sup-jdc-12624-2011_inc2.pdf

RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA PRESENTADA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (22 DE DICIEMBRE DE 2011).

http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/001_dialogos_sup-jdc-12624-2011_inc2.pdf

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE CG94/2012 MEDIANTE EL CUAL SE ACATA LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TEPJF DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2012. (22 DE FEBRERO DE 2012)

<http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-GacetasElectorales/2012/gaceta-145/pdf7.pdf>

ACUERDO CG171/2012 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

<http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-GacetasElectorales/2012/gaceta-141/pdf27.pdf>

IMPUGNACION CIUDADANA

IMPUGNACIÓN AL ACUERDO CG327/2011, QUE PRESENTARON MARÍA ELENA CHAPA HERNÁNDEZ Y OTROS, ANTE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2011).

Disponible en, <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JRC/SUP-JRC-00096-2008.htm>

PARTIDO ACCION NACIONAL

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO: 14855/2011 Y ACUMULADOS (23 DE DICIEMBRE DE 2011)

http://portales.te.gob.mx/sites/portales.te.gob.mx.seminario/files/sentencias/SUP-JDC-14855-11_Caso%20Mereles%20y%20otros.pdf

RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-81/2012 14 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE EN CONTRA DEL ACUERDO CG326/2011 (26 DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE).

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0081-2012.pdf

TRIBUNAL ELECTORAL

SENTENCIA DE SALA SUPERIOR DEL TEPJF, SUP-JDC-12624/2011, MEDIANTE EL CUAL SE IMPUGNÓ EL ACUERDO CG327/2011(30 DE NOVIEMBRE DE 2011).

Disponible en <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-12624-2011>.

RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVA A LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-14855/2011 Y ACUMULADOS. (11 DE ENERO DE 2012)

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-12624-2011.pdf

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO POR EL PRD EN MATERIA FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES (2010). Disponible en, <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00175-2010.htm>.

OTRAS FUENTES SOBRE GÉNERO, MUJERES Y POLÍTICA

BASE DE DATOS GLOBAL DE LAS CUOTAS PARA LAS MUJERES,

www.quotaproject.org

DECLARACIÓN DE ATENAS, en www.oocities.org/athenas

ENCICLOPEDIA DE LA RED DE CONOCIMIENTOS ELECTORALES,

www.acproject.org.

GÉNERO Y PARTIDOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA (GEPPAL)

www.iadb.org/research/geppal/. Consultada en noviembre, 2014.

ONU MUJERES, www.unwoman.org.es

PLATAFORMA DE ACCIÓN MUNDIAL DE BEIJING. Disponible en:

www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf, Consultada en noviembre del 2014.

RED INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MUJERES Y POLÍTICA

<http://iknowpolitics.org/es>

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA, en: www.iup.org/wmn-e/world

SUMA, DEMOCRACIA ES IGUALDAD. Disponible en www.suma-mujeres.com

PAGINAS DE NOTICIAS Y NOTAS PERIODISTICAS

CIMAC NOTICIAS. PERIODISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Disponible en, www.cimac.com.mx

SIN EMBARGO. PERIODISMO DIGITAL.

Disponible en, www.sinembargo.mx

NOTAS CITADAS

Juanito destituye a Brugada; la ALDF prepara su remoción. Revista Proceso, de fecha 30 de noviembre del 2009.

Disponible en <http://www.proceso.com.mx/?p=120736>, consultado el 16 de junio del 2015.

Las 12 Juanitas de San Lázaro, de fecha 21 de enero del 2010, Revista Proceso.

Disponible en <http://www.proceso.com.mx/111263/las-12-juanitas-de-san-lazaro>. Consultado el 16 de junio del 2015.

Red Mujeres en Plural celebra resolución del TEPJF". Sin embargo, periodismo digital

Disponible en <http://www.sinembargo.mx/11-01-2012/118241>, consultado el 15 de febrero de 2015.

Mujeres en Plural, Martha Lamas. Revista Proceso 2024, 30 de noviembre del 2012. Revista. Disponible en: www.proceso.com.mx/?p=326576. Consultado en agosto 2014.

Entregan 10 diputadas su curul a suplentes. Periódico La Razón, México, 3 de Septiembre, 2009, httorazon.com.mx/spip.php?article6449. Consultado en junio 2015.

Reiteran Mujeres en Plural su propuesta Tres espacios, tres mujeres. García, Anayeli, Disponible en www.cimac.noticias, 25 de marzo del 2011, Consultada el 15 de enero del 2015.

Ultimada a balazos mientras viajaba en su camioneta el en febrero del 2015.

<http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69179>. Consultada en abril del 2015.

ANEXO

I.- Partidos políticos en México

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Nacido como Partido Nacional Revolucionario en 1929, fue rebautizado como Partido de la Revolución Mexicana en 1938, adquiriendo su actual nombre hasta 1946. El PRI se asume como el heredero de los postulados de la Revolución de 1910, aunque ha mostrado una cierta flexibilidad ideológica que puede interpretarse como una capacidad de adaptación a las circunstancias históricas cambiantes. Actualmente es el partido al cual pertenece el Presidente de la República, y también el que ostenta una mayoría relativa en ambas cámaras del poder legislativo.

El Partido Nacional Revolucionario fue fundado a iniciativa del presidente Plutarco Elías Calles tras el asesinato de Álvaro Obregón. La intención de Calles era agrupar a las diferentes facciones revolucionarias para que la disputa por el poder se regulara por la negociación y el acuerdo al interior del Partido –y no ya por la vía violenta. Sin embargo, Calles se convirtió en la figura dominante del organismo hasta que fue expulsado del país por el presidente Lázaro Cárdenas (1936). Cárdenas reformó profundamente al PNR, transformándolo en un “partido de sectores” o corporativista, constituido por grandes organizaciones de masas: la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Con su nuevo nombre, el Partido de la Revolución Mexicana se convirtió en un instrumento orientado a controlar la vida política nacional. En 1946, el partido se transformó en el actual PRI, conservando la estructura corporativista pero al mismo tiempo distanciándose de las tendencias izquierdistas de Cárdenas.

A lo largo de la mayor parte de su historia, el PRI ha sido la fuerza política hegemónica del país. En sus diferentes etapas, postuló como candidatos a todos los presidentes desde 1930 hasta el 2000, y ha recuperado el cargo en las elecciones del 2012. También ha contado, con pocas excepciones, con las mayorías absolutas –y muchas veces también con las calificadas– en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hasta los años ochenta del siglo pasado, era

también el partido al que pertenecía la totalidad de los gobernadores de los estados y la inmensa mayoría de los presidentes municipales.

Como se ha dicho antes, su orientación ideológica ha sido bastante variable –o, si se quiere, “adaptable” a las circunstancias. A pesar de ello, durante varios años se asumió como defensor de un “nacionalismo revolucionario”, cuyo contenido a su vez parecía depender de la orientación que el presidente de la República en turno necesitara imprimirle. A partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982 – 1988) los gobiernos federales priístas han asumido políticas favorables a la apertura hacia los mercados exteriores y a la desregulación de la economía.

La organización del PRI se caracteriza por una estructura doble, territorial por un lado y sectorial por el otro –esta última mantiene el carácter corporativo que históricamente ha caracterizado a esta fuerza. La organización territorial contempla una estructura nacional, que incluye a una Asamblea General de Delegados como órgano supremo, un Consejo Político Nacional como órgano de dirección colegiada, y un Comité Ejecutivo Nacional –cuyo presidente es el dirigente visible del partido. Hay también Comités Directivos para cada estado de la Federación, Asambleas Municipales y Distritales, Comités Municipales y Asambleas y Comités de Sección. Numéricamente, se trata del partido político con mayor número de afiliados (Báez Silva, 2003; Prud’homme, 2012).

Partido Acción Nacional (PAN)

Fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, un intelectual, académico y funcionario que mantenía importantes desacuerdos con la orientación política del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934 – 1940). El PAN surgió como un organismo que aglutinaba a ciudadanos de la clase media que compartían las ideas de Gómez Morín respecto al cardenismo, y que además estaban influidos –en su mayor parte- por las ideas de la democracia cristiana y el catolicismo social europeos. Sin embargo, y a pesar de la influencia de la doctrina social católica en sus estatutos, el PAN nunca se ha asumido como un partido abiertamente confesional.

El PAN es concebido desde su inicio como un “partido de ciudadanos”, ajeno al corporativismo propio de su rival histórico, el PRI. En los primeros años, eso significó que

la afiliación dependía prácticamente de las invitaciones personales –muchas veces a cargo del propio Gómez Morín. Los contactos y relaciones del líder determinaron que el PAN encontrara sus primeros bastiones en ciudades del norte de México (Chihuahua, Monterrey) o en ciertos lugares del sur (Yucatán, Oaxaca). Poco a poco el partido fue adquiriendo presencia en el centro y occidente del país (Guanajuato, Jalisco, Michoacán), pero manteniendo un crecimiento relativamente sostenido en el norte.

El instituto participó de manera indirecta en las elecciones presidenciales de 1940 y 1946, apoyando a candidatos de otras fuerzas políticas. En 1952 tuvo a su primer candidato presidencial propio en la persona de Efraín González Luna. A partir de entonces, ha presentado candidatos propios a la mayor parte de las elecciones presidenciales. La excepción fue la contienda de 1976, momento en el cual las divisiones internas del partido impidieron un acuerdo en torno al tema. En 2000, y en coalición con el entonces Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el panista Vicente Fox se convirtió en el primer candidato opositor en derrotar al PRI en toda su historia. El PAN, ahora en solitario, ganó la presidencia de nuevo en el 2006, con Felipe Calderón como abanderado. Sin embargo, el partido perdió el cargo en las elecciones de 2012 frente al priísta Enrique Peña Nieto.

Durante la primera parte de su historia, el PAN ofrecía una suerte de oposición testimonial a la hegemonía del PRI, con base en los principios doctrinarios heredados de Gómez Morín –es decir, los de una suerte de socialcatolicismo un tanto inclinado a la derecha. A pesar de ello, el partido consiguió sus primeros –aunque escasos- triunfos en las elecciones legislativas de 1946, manteniendo una presencia constante en la Cámara de Diputados. Por otro lado, en la década de los cincuenta del siglo pasado el PAN consiguió hacerse de unas pocas alcaldías. Es a partir de los años ochenta que los llamados “neopanistas”, en buena medida empresarios descontentos con el gobierno del PRI, imprimieron al partido una dirección más pragmática y orientada a la consecución de triunfos efectivos. Así, en 1988 – con Manuel J. Clouthier como candidato- el PAN alcanzó su más alta votación hasta entonces en una elección presidencial. Un año después -1989- le era reconocido el triunfo en la elección a la gubernatura de Baja California. A partir de ese momento, el PAN alcanzó una serie de triunfos municipales y estatales que allanaron el camino para la presidencia de la República. Después de doce años en el poder, la crisis de seguridad del gobierno de Felipe Calderón influyó en la derrota ante el PRI de 2012.

La organización del PAN es de tipo territorial. El órgano supremo de gobierno es la Asamblea Nacional, que ha de convocarse cada tres años según los estatutos. Paralelamente, la Convención Nacional es la instancia que decide la acción política del partido –y también debe reunirse al menos una vez cada tres años. Como órganos permanentes existe un Consejo Nacional, el cual a su vez designa a un Comité Ejecutivo Nacional, cuyo presidente es el máximo líder del partido. El PAN cuenta, además, con Comités Estatales en todas las entidades de la República y con un número bastante elevado de Comités Municipales. El partido tiene una importante presencia nacional, pero su electorado tiende a concentrarse en ciertos bastiones del norte y el occidente de México. (Jiménez Badillo, 2003; Prud’homme, 2012).

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

El PRD se origina en las controvertidas elecciones presidenciales de 1988, aunque en cierto modo recupera la tradición de la izquierda electoral mexicana. En aquel año, Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del presidente Lázaro Cárdenas) contendió como candidato por un conjunto de partidos y organizaciones agrupados en el Frente Democrático Nacional (FDN). Cárdenas, junto con otras personalidades de tendencia nacionalista, había abandonado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al encontrarse en desacuerdo con la manera en que dicho partido había virado hacia políticas de corte neoliberal, y también con las prácticas habituales en la vida interna de aquel instituto. Tras la derrota ante Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas convocó a sus seguidores a la fundación de un nuevo partido a principios del año 1989.

Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo y otros importantes priístas, había conformado la Corriente Democrática del PRI. Separados ya del partido gobernante, y bajo los auspicios del Partido Mexicano Socialista (PMS), constituyeron al PRD en un ambiente particularmente adverso. El partido enfrentó sus primeras elecciones municipales ese mismo año, consiguiendo importantes triunfos en Michoacán. En el año de 1991, el PRD participó con importantes posibilidades de triunfo en una coalición opositora en San Luis Potosí; en 1992, ocurrió otro tanto en Michoacán y en Tabasco. En cada uno de esos tres casos se alegó fraude electoral ante el triunfo de los candidatos del PRI, dando lugar a abruptos procesos postelectorales, a incidentes violentos y a la renuncia de más de un gobernador.

El PRD ha participado en las elecciones presidenciales de 1994 y 2000 (con el mismo Cárdenas como candidato), así como en las de 2006 y 2012 (en sendas coaliciones encabezadas por Andrés Manuel López Obrador). En 1997 alcanzó uno de sus triunfos más significativos, al disputarse por primera vez la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y resultar triunfador el ingeniero Cárdenas. A partir de entonces, la capital de la República ha sido gobernada ininterrumpidamente por el PRD –haciendo de la Ciudad de México su principal bastión político. También ha conseguido el triunfo en diversas elecciones estatales y municipales, y ha conseguido erigirse en la tercera fuerza en el Congreso de la Unión.

La ideología del partido puede considerarse como de centro izquierda, recuperando en parte la tradición de las organizaciones políticas de corte socialista que lo precedieron – incluyendo al Partido Socialista Unificado de México (PSUM), heredero a su vez del histórico Partido Comunista de México (PCM). Pero, por otra parte, los fundadores que en su momento abandonaron el PRI representaban en buena medida el ala “nacionalista – revolucionaria” de este último organismo, más comprometida con la rectoría del Estado en la economía y en especial en lo que toca a los recursos nacionales –especialmente en el caso del petróleo.

Estas últimas convicciones se mantienen en cierta forma hasta la fecha, si bien con importantes matices introducidos por una dirección más proclive a la negociación con sus rivales, el PRI y el PAN. En algunos aspectos, el PRD ha abanderado causas relacionadas con los derechos civiles, tales como la participación política de las mujeres, el derecho a la interrupción del embarazo y al matrimonio de personas del mismo sexo.

El partido fue concebido por sus fundadores como una organización de masas. Sin embargo, en los hechos su organización formal descansa sobre el equilibrio de las llamadas “corrientes”, las cuales terminan por convertirse en el factor fundamental de los equilibrios y desequilibrios internos al PRD. La organización territorial del instituto incluye como instancia suprema al Congreso Nacional, del cual dependen el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, cuyo presidente es al mismo tiempo el principal líder del partido. Este esquema básico se repite en los niveles estatal y municipal, con los respectivos Congresos, Consejos y Comités Ejecutivos.

En los últimos tiempos, el PRD ha enfrentado importantes tensiones que se han traducido en la renuncia al instituto de algunas de sus principales figuras. El antiguo presidente del Comité Ejecutivo Nacional, jefe de gobierno del Distrito Federal y dos veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, ha terminado por formar su propio partido: el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Otro tanto ha ocurrido recientemente con el propio Cuauhtémoc Cárdenas. (Vivero Ávila, 2003; Prud'homme, 2012).

Igualdad y no discriminación en los partidos políticos en México.

Al año 2015, los tres partidos políticos han ido incorporando los mecanismos normativos de igualdad y no discriminación en sus estatutos, agendas y actividades partidistas, en diferente grado.

Por ejemplo, un estudio realizado por INCIDE social - institución conformada por organizaciones de la sociedad civil, publicado en el 2014, se evaluaron las medidas emprendidas en materia de igualdad y no discriminación, por parte de los institutos políticos en tres niveles: a) institucionales, (reglas), b) gobernanza (redes) y c) capital presupuestario y organizacional (recursos).

La hipótesis a partir de la cual se realiza la investigación, es que en su operación interna, los partidos privilegian los intereses de sus dirigentes más que de sus militantes, y poco, los intereses de actores externos, ya que “en realidad mujeres, jóvenes, indígenas, personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad, entre otros, participan en la política como invitados y no como protagonistas” (INCIDE social, 2014:15).

a) Institucionales (reglas). Respecto a contar con instancias específicas de mujeres, los tres principales partidos políticos crearon sus secciones femeniles - estructuras internas de los partidos políticos que se proponen unir a las mujeres miembros del partido e impulsar su participación política. Dos de ellas, antes de que las mujeres obtuvieran el derecho al sufragio: el PRI en 1934, y el PAN en 1939, mientras que el PRD, fundado con posterioridad, lo hizo en 1990.

Actualmente, el PRI cuenta el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), el cual forma parte de las organizaciones nacionales (artículo 31), las cuales establecen en sus

documentos básicos su vinculación con el partido. El organismo cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y presupuesto. El ONMPRI se encarga del ejercicio e implementación del Plan de Acción de Capacitación, Promoción y Desarrollo Político de las Mujeres. Entre sus fines se encuentran: la adopción de medidas temporales para fomentar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y garantizar en todos los espacios el derecho de las mujeres a ser elegibles. Además, impulsar las políticas públicas que atienden demandas de las mujeres e incentivar la formación y capacitación política para el liderazgo, entre otros.

En el caso del PAN, existe la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, cuya existencia se fundamente en el artículo 21 de los estatutos, empero no se detallan sus funciones en el mismo, ni tiene personalidad jurídica propia. Se establece que la titular de la Secretaría forma parte del Consejo Nacional y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional. En el artículo segundo del estatuto se establece como objeto del partido, la garantía en todos los órdenes de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El partido de la Revolución Democrática tiene una Secretaria de Equidad de Género como parte del Comité Ejecutivo Nacional. En sus estatutos no se referencia alguna a su personalidad jurídica. Sin embargo, en el Capítulo I, de la Formación Política, la Capacitación, la Investigación y la Divulgación, Artículo 209, apartado c), establece la obligación de: “Fortalecer la participación política de las mujeres y de las personas jóvenes y el desarrollo de las propuestas programáticas y la acción del Partido con una perspectiva de género y de las juventudes”. También en el Capítulo IX, denominado, de la Organización Nacional de Mujeres, Artículo 331, se describe: “La Organización Nacional de Mujeres se constituye para promover y fortalecer el liderazgo político de las militantes, el trabajo por transformar democráticamente la Nación, ampliar y garantizar los derechos humanos y su empoderamiento para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres”⁴³³.

Respecto al marco jurídico (reglas) de los tres partidos en materia de **acción afirmativa** de género, desde el año de 1993 la Carta Magna recomendaba a los partidos promover una mayor participación de las mujeres, pero sólo el PRD incluyó la cuota como obligatoria en las candidaturas de representación proporcional a partir de 1997. Hasta el año 2002 se tornó

⁴³³ Estatutos del PRD. http://www.prd.org.mx/portal/documentos/estatuto_2014.pdf

obligatoria para todas las fuerzas políticas con un máximo del 70% para cada uno de los géneros. Actualmente, los tres principales partidos políticos cuentan con acciones afirmativas para la selección de sus candidaturas, aunque el marco constitucional ya los obliga.

En general, a pesar de contar con reglas para la igualdad de género en los partidos, el nivel de institucionalización de sus secciones femeniles, a excepción del PRI, es casi nulo y se mantiene un bajo compromiso de los líderes de los partidos con las mismas, también se les otorgan escasos recursos financieros y poco reconocimiento estatutario.

Lo ideal es que las secciones femeniles cuenten con una estructura y marco legal, además de que las secciones femeniles se incorporen en los estatutos de manera clara. (28)

b) Gobernanza ¿Las instancias cuentan con voz y voto en los espacios de toma de decisión? De acuerdo al estudio de INCIDE Social, este nivel de incidencia está determinado por el grado de institucionalización -consolidación de la organización con normas, infraestructura, recursos humanos y financieros) lo que implica que tengan un nivel estatutario y reglamento, y un nivel de reconocimiento en sus órganos de toma de decisión en los niveles nacional, estatal y municipal.

“La toma de decisiones para esta instancia es de vital importancia, pues va ligada con la participación política que estas agrupaciones pueden tener en la vida interna de su partido, sin embargo, la participación de estos grupos (mujeres, jóvenes, indígenas) ha sido relacionada en su mayoría con las acciones llevadas a cabo durante el proceso electoral” (2014:30)

En este sentido, solo el PRI tiene fundamento jurídico en su trabajo con las mujeres. En tanto que el PAN y el PRD requieren de darle carácter legal a su sección femenil.

En otro tema vinculado a la gobernanza y las redes, es si las secciones femeniles impulsan o no una agenda de género, es decir, la representación sustantiva. En general el trato recibido por las mujeres en los partidos es desalentador y su nivel de incidencia es bajo.

c) Presupuesto. En cuanto al tercer elemento que se evalúa, el presupuesto, desde año 2008 el Código Electoral obligó a los partidos políticos a destinar el 2% del financiamiento público para la capacitación, la promoción y el fortalecimiento de liderazgo político de las mujeres.

En los primeros años de ejercicio presupuestal, los partidos lo utilizaron para diversas actividades del gasto corriente y llegaron a reportar hasta artículos de limpieza como inversión en el rubro. A partir de la impugnación promovida por la Red de Mujeres en Plural, se reglamentaron los rubros que podían ser contabilizado por este concepto, como son: talleres de capacitación, elaboración de manuales, investigaciones,

Mujeres y partidos políticos.

En el ensayo de Alicia Girón (2008) *Obstáculos y limitaciones en el empoderamiento de las mujeres: la experiencia del PRI*, para el cual se realizaron una serie de entrevistas, se denuncia que la discriminación y la falta de oportunidades de las mujeres en el PRI son una constante para llegar a puesto de elección popular o ser nominadas como candidatas

Si bien el PRI enarboló los principios de la clase revolucionaria y mantuvo distancia del poder clerical no tuvo la capacidad de incluir a las mujeres participantes de los movimientos sociales como líderes representativas en las cámaras. “El PRI conformó un poder androcéntrico correspondiente a un proyecto nacionalista donde las mujeres no fueron parte de la bandera política, sino hasta que la vida democrática del país hizo necesaria la inclusión de las mujeres y el reconocimiento a ellas como líderes políticas”. Las mujeres del PRI consideran interesante el sistema de cuotas, aún bajo diversas dificultades, “Durante la última década, con gran dificultad, el PRI ha hecho suyas las reformas al artículo 175 del COFIPE” (Girón, 2008:152-153).

Las razones por las cuales se afilian o participan son: inquietud personal, simpatía por el partido, posibilidad de hacer gestión social por medio del partido y el ofrecimiento de un cargo.

Es importante destacar que el PRI ha tenido a tres mujeres como presidentas del Comité Ejecutivo Nacional. Primero, Dulce María Sauri, 1999-2002, quien también fue Gobernadora de Yucatán de 1991 a 1994. Posteriormente, llegó María de los Ángeles Moreno, 1994-1995, y por último, Beatriz Elena Paredes Rangel, ocupó la titularidad de

dicho instituto del 2007 al 2011, además de haber sido gobernadora por el Estado de Tlaxcala en el periodo de 1987 a 1993. Cabe señalar que en México al año 2015, sólo seis mujeres han sido titulares de los Poderes Ejecutivos del Estado.

El partido Acción Nacional establece en su doctrina preocupación por el bien común y la justicia social. Empero, es hasta la reforma estatutaria del año 2002 en que aparecen los temas de equidad de género y se postula como inaceptable la discriminación contra las mujeres. Parte de sus principios se fundamentan en la doctrina católica, lo que conlleva la defensa de valores familiares y el impedimento de asumir demandas feministas. “Un ejemplo de ello fueron las cuotas de género, cuando muchas mujeres panistas se opusieron a ellas y solamente las aceptaron cuando éstas fueron obligatorias para todos los partidos”. (Arroyo y Correa, 2008:139).

A diferencia de los otros dos partidos, donde las mujeres se llegan a iniciar en movimientos sociales o ciudadanos, las mujeres del PAN inician su actividad política directamente en el partido, destacadamente, en las campañas electorales. Además, suelen integrarse porque otros familiares participan en el mismo.

Pese a no ser un instituto cercano a la agenda feminista, el partido Acción Nacional es el único partido que ha postulado a una mujer a la Presidencia de la República, con un alto nivel de competitividad electoral, Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Desarrollo Social.

Tras su creación, el PRD se tiene “una historia de encuentros de y desencuentros con las organizaciones de izquierda”. Los aspectos que unificaban era la defensa de la nación, el Estado democrático que pugnara por el desarrollo y la igualdad, y la crítica al modelo neoliberal. Las mujeres del PRD van a actuar políticamente, la mayoría por coincidencia con sus programas y otras por el deseo de participar en la transformación de la situación que se padecía en el país. “El compromiso del PRD con las mujeres es claro y se reitera en todos los documentos. Sin embargo, llevarlos a práctica resulta ser un ejercicio difícil”. P. 179.

Este instituto se caracteriza por integrar a líderes feministas y sociales, como Rosario Ibarra de Piedra, pionera en la lucha porque el Estado mexicano esclareciera las desapariciones forzadas de los años 70, Ifigenia Martínez, economista feminista, Marcela Lagarde, intelectual mexicana con gran influencia en Latinoamérica, por citar algunas.

Al igual que en el PRI, este instituto también ha sido presidido por mujeres. Amalia Dolores García Medina fue presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, en el periodo 1999-2002, posteriormente, fue gobernadora de Zacatecas de 2004 al 2010. La segunda presidente mujer fue Rosario Robles 2002-2003, posterior a haber sido Jefa de gobierno del Distrito Federal en 1999, en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas.

Entre los motivos de participación de las perredistas se encuentran buscar soluciones a los problemas nacionales, la necesidad de mejorar el sistema político y el ímpetu personal por participar.

De acuerdo al estudio denominado GEPPAL si bien las mujeres constituyen una base importante de afiliadas, esto no se ve reflejado en igual proporción en cuanto a los espacios de dirección partidista -como son la Presidencia o la Secretaría General. En el año 2009, en promedio, sólo el 16% de mujeres ocupaban alguno de estos dos espacios. Son pocas las mujeres que se colocan en la punta de la pirámide, ubicándose bastantes en la base militante pero de manera mínima en la cima; así, a medida que aumenta el poder partidista, la presencia de las mujeres disminuye. En consecuencia, la capacidad de impulsar y consolidar las prioridades de las mujeres se encuentra limitada por el hecho de que tienen poca influencia y poder al interior de los institutos ya que, a su vez, ocupan un segundo lugar en los espacios de mayor toma de decisiones de las estructuras partidistas (Roza, Llanos, y Garzón de la Rosa, 2010)⁴³⁴.

En el caso de México, el ensayo *Empoderamiento en los partidos políticos. La evidencia estadística 1997-2006*, describe que la participación política en los partidos aumentó a lo largo del tiempo, pasando de 75 mujeres en los Comités Ejecutivos Nacionales y en el Poder Legislativo en 1977, a 364 mujeres, en el año 2006, lo que significó alcanzar casi un 20% del total de integrantes, frente a un rezagado 9% de los años 70. Además, tanto en el Partido Revolucionario Institucional como en el Partido de la Revolución Democrática, han sido

⁴³⁴ En contraste con esta realidad, las feministas noruegas fueron pioneras en defender la integración de las mujeres en las estructuras de partidos existentes, como una estrategia para conseguir el poder. Lovenduski (1997) recuerda que han pasado más de cuarenta años desde que el llamado “golpe de las mujeres”, transformara las experiencias consensuadas de partido para las elecciones locales, consiguiendo así una mayoría de mujeres en los ayuntamientos: “Las implicaciones de esta primera muestra de sororidad entre mujeres fueron comprendidas rápidamente por los partidos y los progresos que las mujeres noruegas han protagonizado son extraordinarios” (p.115).

presididos por mujeres, ello en dos ocasiones⁴³⁵. Esto no ha ocurrido en el partido Acción Nacional.

⁴³⁵ María de los Ángeles Moreno; Beatriz Paredes; Amalia García; Rosario Robles.